

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO



TESIS DOCTORAL

**Principios y valores filosóficos, jurídicos y políticos de las Constitución
de Cádiz de 1812**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Francisco de Borja Sarasola Jáudenes

Director

José Iturmendi Morales

Madrid, 2017



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE DERECHO

PRINCIPIOS Y VALORES FILOSÓFICOS, JURÍDICOS Y
POLÍTICOS DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ DE 1812

TESIS DOCTORAL

FRANCISCO DE BORJA SARASOLA JÁUDENES

Director: JOSÉ ITURMENDI MORALES

Curso: 2015 - 2016

PRINCIPIOS Y VALORES FILOSÓFICOS, JURÍDICOS Y POLÍTICOS DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ DE 1812

INDICE

RESUMEN	9
ABSTRACT	13
INTRODUCCIÓN	17

CAPÍTULO 1

LOS FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS, JURÍDICOS Y POLÍTICOS DE LA TRASFORMACIÓN DEL ANTIGUO RÉGIMEN Y SU LEGADO AL ORDEN CONSTITUCIONAL.....63

1.1 Principios y valores del pensamiento político moderno 69

1.2 Fundamentos filosóficos del liberalismo moderno 86

1.2.1 Thomas Hobbes entre el Absolutismo y el Liberalismo 87

1.2.2 John Locke y el Liberalismo..... 93

1.2.3 El empirismo de David Hume..... 101

1.2.4. Jeremy Bentham y el Utilitarismo. 102

1.2.5 Edmund Burke y el liberalismo "conservador" 110

1.2.6 La literatura político inglesa del siglo XVIII 113

1.3 Fundamentos filosóficos y jurídicos de la Revolución Americana ..116

1.3.1. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos. 126

1.3.2 El pensamiento de los federalistas americanos..... 132

1.3.3 La dialéctica, igualdad y el concepto de Democracia en América: Alexis de Tocqueville 137

1.4 Fundamentos filosóficos y jurídicos de la Revolución Francesa.149

1.4.1 El pensamiento filosófico y político de los enciclopedistas franceses: Voltaire y Diderot. Las sociedades de pensamiento. ..	150
1.4.2 Jean Jacques Rousseau y el Contrato Social	158
1.4.3 Montesquieu y la Separación de Poderes	169
1.4.4 El ideario filosófico y político de la Revolución Francesa.	180
1.4.5 El concepto de Democracia en la Revolución Francesa: Sieyès	187
1.5. La fundamentación histórica y jurídica de los Derechos Humanos	192

CAPÍTULO 2

EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO Y POLÍTICO DE LOS CONSTITUYENTES DE CÁDIZ	207
2.1 Los acontecimientos históricos: la Guerra de la Independencia	209
2.1.1 Los sucesos que marcan la Guerra de la Independencia	210
2.2 La Constitución de Bayona	220
2.2. 1 Los orígenes de la Constitución de Bayona	220
2.2.2 El modelo constitucional napoleónico.....	227
2.2.2.1 La Constitución de la República Bátava de 1801 y las leyes constitucionales del Reino de Holanda de 1806.....	228
2.2.2.2 El Acta Constitucional de la República Italiana de 1802	229
2.2.2.3. La Constitución del Ducado de Varsovia de 1807	231
2.2.2.4 La Constitución del Reino de Westfalia de 1807	232
2.2.3 La primera redacción de la Constitución de Bayona de 1808	233
2.2.4 La Junta Española, como Asamblea “constituyente”	237
2.2.5 El segundo proyecto o la voluntad de incorporar la realidad española a la Carta constitucional de Bayona.....	244

2.2.6	<i>La Constitución de Bayona y el orden constitucional bonapartista.....</i>	<i>252</i>
2.3	<i>La realización de las Cortes de Cádiz.....</i>	<i>262</i>
2.3.1	<i>Las primeras ideas para realizar las Cortes de Cádiz.....</i>	<i>262</i>
2.3.2	<i>El Decreto de 24 de septiembre de 1810.....</i>	<i>269</i>
2.3.3	<i>La apertura de las Cortes y la realización del Proyecto Constitucional.....</i>	<i>272</i>
2.4	<i>Los Constituyentes de Cádiz.....</i>	<i>275</i>
2.5	<i>El legado filosófico, jurídico y político de los Constituyentes de Cádiz.....</i>	<i>278</i>
2.5.1	<i>El pensamiento político clásico en los constituyentes de Cádiz</i>	<i>281</i>
2.5.2	<i>El pensamiento filosófico y político de la Ilustración Española y su influencia en los Constituyentes de Cádiz.....</i>	<i>286</i>
2.5.3.	<i>El pensamiento de Francisco Martínez Marina.....</i>	<i>291</i>
2.5.4	<i>Jovellanos y la Memoria en defensa de la Junta Central (1810)</i>	<i>298</i>
2.5.5	<i>Personalidades que influyen en los Constituyentes de Cádiz</i>	<i>312</i>
2.5.5.1	<i>Álvaro Flórez Estrada y el proyecto de Constitución para la nación española</i>	<i>312</i>
2.5.5.2	<i>Manuel José Quintana y el Semanario patriótico.....</i>	<i>318</i>
2.5.5.3	<i>Antonio Ranz Romanillos</i>	<i>326</i>
2.5.5.4	<i>José María Blanco White y la defensa del sistema Británico de gobierno.....</i>	<i>328</i>
2.6	<i>Constituyentes de Cádiz y modelos constitucionales.....</i>	<i>333</i>
2.7	<i>Los diputados de Cádiz y su ideologías.....</i>	<i>341</i>
2.7.1	<i>Los liberales de Cádiz</i>	<i>342</i>

2.7.2. Los Absolutista, Realistas y Reaccionarios.....	345
2.7.3. Los Metropolitanos.....	347
2.8 Destacados constituyentes de Cádiz:.....	349
2.8.1 Agustín de Arguelles y su Discurso preliminar a la Constitución de 1812.....	350
2.8.2 Diego Muñoz-Torrero destacado artífice de la Constitución de 1812	359
2.8.3 Isidoro de Antillón y Marzo.....	364
2.8.4 Jose María Queipo de Llamo, Conde de Toreno	366
2.8.5 Juan Nicasio Gallego y Hernández del Creso	368
2.8.6 Antonio Capmany	369
2.8.7 José Miguel Guridi y Alcocer.....	370
2.8.8 Pedro Inganzo y Rivero	373
2.8.9 Lázaro de Dou y Bassols	374
2.9 Otras aportaciones referidas a la Constitución de Cádiz de 1812 ..	376
2.9.1 Presidentes y Secretarios de las Cortes	376
2.9.2 Diputados que se negaron a jurar la Constitución	378
2.9.3 Relación de Diputados que firmaron la Constitución de 1812	380

CAPÍTULO 3

LOS GRANDES PRINCIPIOS FILOSÓFICOS Y JURÍDICOS DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ

3.1. El Principio de Libertad.	389
3.1.2 La abolición de la esclavitud.....	399
3.2. La Libertad de Opinión, de Expresión y de Prensa.....	416

3.2.1.El marco filosófico y jurídico de las libertades de opinión expresión y prensa en el Antiguo Régimen.....	416
3.2.2. Las propuestas de libertad de imprenta en España: El Decreto de 1810	429
3.2.3 La Libertad de Imprenta en la Constitución de Cádiz	442
3.3. El Principio de Igualdad.....	444
3.3.1 Igualdad frente a exclusiones.....	453
3.3.2 Igualdad civil e igualdad política.....	459
3.3. 3 Igualdad y derechos de la mujer	467
3.3.4 Igualdad jurisdiccional y derechos señoriales.....	468
3.3. Los Derechos Humanos.....	471
3.3.1 Antecedentes e influencia de la positivación de los Derechos Humanos.....	471
3.3.2 Los derechos reconocidos en la Constitución de Bayona ...	479
3.3.3. Los Derechos reconocidos en la Constitución de Cádiz. ...	480
3.3.4 Derechos reconocidos y dispersión de derechos.....	483
3.4. El Principio de Confesionalidad y Unidad Religiosa	490
3.4.1. Las relaciones Iglesia-Estado a fines del siglo XVIII.	490
3.4.2. Los diputados eclesiásticos en las Cortes de Cádiz.....	498
3.4.3 La religión católica en las Cortes de Cádiz.....	499
3.4.4. La supresión de la Inquisición	503
3.5. La Soberanía Nacional, la Separación de Poderes, el Derecho de Petición y el Derecho de Sufragio	506
3.5.1 La Soberanía y la Representación Nacional en la Constitución de Cádiz.....	507
3.6. La Soberanía y la Representación Popular: La Soberanía Nacional	517
3.7. El principio de Separación de Poderes en la Constitución de 1812 .	519

<i>3.8. La Reforma de la Justicia.....</i>	<i>520</i>
CONCLUSIONES	523
APENDICE.....	547
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA	585

RESUMEN

La revolución política de Cádiz se encuentra en medio de toda una cultura política ilustrada que hereda el discurso característico del Siglo de las luces y que se asienta en el pacto social, la soberanía popular, el laicismo y las libertades modernas.

La España de las Cortes de Cádiz no había perdido de vista la vinculación reformista de su propia cultura en orden a la creación, reforma, destrucción y apropiación de viejos y nuevos mitos. Los mas significados constituyentes de Cádiz conocían la labor intelectual de la Escuela de Salamanca: Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Luis de Alcalá, Martin Azpilicueta, Tomas de Mercado, Luis de Molina, Juan de Mariana o Francisco Suarez, todos ellos naturalistas y moralistas que trataron de reconciliar la doctrina de Santo Tomás con el nuevo orden social y económico.

La Escuela de Salamanca había reformulado el concepto de Derecho natural, concluyendo que todos los hombres comparten la misma naturaleza y consecuentemente también comparten los mismos derechos como el de igualdad o el de libertad y también habían reformulado su concepción sobre la soberanía. Para la Escuela de la Salamanca el pueblo es el receptor de la soberanía, el cual la transmite al príncipe gobernante. Los hombres nacen libres por su propia naturaleza y no son siervos de otro hombre pudiendo obedecer e incluso imponerse hacia un gobernante. Para Suarez, el poder político de la sociedad es contractual en su origen porque la comunidad se forma por el consenso de voluntades libres.

Desde otra cultura aparece ya en el siglo XVII la fundamentación del liberalismo como corriente filosófica y política atribuyéndose a John Locke la condición de ser el fundador del liberalismo moderno articulando una ideología sobre la base del concepto de los derechos naturales y el contrato social para sostener que el imperio de la ley debe sustituir al absolutismo del Gobierno y considerar que los ciudadanos tienen el derecho fundamental a la vida, a la libertad y a la propiedad.

El Conde de Cabarrús en sus cartas a Jovellanos se hará eco de la doctrina del pacto social expuesta por Locke y recogida y ampliada por Rousseau. El propio Jovellanos adoptara lo constructivo de esta teoría que fundamenta también la separación de poderes. Otras aportaciones filosóficas destacables serian las de David Hume precursor de la ideología liberal y Jeremy Bentham considerado el padre del utilitarismo que fundamenta asimismo el liberalismo.

Estas ideas en gran medida serian las fuentes ideológicas de la Revolución norteamericana. Adams se convertiría en un firme defensor de las libertades que el considera como un derecho natural de los colonos. Los constituyentes americanos beben directamente de las corrientes intelectuales de aquella época y conocen la doctrina de la división de poderes de Montesquieu quien en 1748 en su obra *El espíritu de las leyes* había abordado de manera inmediata la democracia, la libertad política y la separación de poderes fundamentada mas en una distribución de los poderes del Estado entre los diferentes grupos sociales que una división de los propios poderes estatales.

La Revolución Francesa intentaría someter la política a la razón y elevaría la libertad como principio de la voluntad libre en el sentido rousseauiano, a la condición del principio del Derecho considerando la Revolución como el presupuesto necesario de cuales quiera ordenes estatales. La Revolución Francesa vendría a significar de una parte la ruptura y de otra el comienzo de un nuevo tiempo de la historia.

La concepción decisiva de los derechos del hombre que había nacido en la disputa de las 13 colonias británicas de Norteamérica con la metrópoli seria trasplantada a suelo francés generando un terremoto social e ideológico con la irrupción popular en la estructura de la sociedad aristocrática. En cierto modo algunos de los fundamentos filosóficos y políticos tan estimados por los liberales como el gobierno limitado, el sometimiento del poder al derecho, el aseguramiento de la libertad y de los derechos naturales ya habían sido prefigurados siglos antes en la tradición cultural occidental.

Al movimiento intelectual iniciado en la Inglaterra del siglo XVII seguiría en alguna medida en la propia Ilustración que tomaría cuerpo en la Francia del siglo XVIII y en los países con lengua y

cultura alemana impulsado por la filosofía racionalista de Christian Wolff y finalmente por el propio Kant, pero fueron las revoluciones las que provocaron el cambio político que concluye con los privilegios y que abre un camino a la conquista de la libertad. Es en ese marco en el que se produce un nuevo orden constitucional que tiene su antecedente en la llamada Constitución de Bayona impulsada por el propio Napoleón, alternativa constitucional en todo caso que pretende acabar con el Antiguo Régimen, un régimen verdaderamente injusto y en el que se consagra la soberanía nacional y la división de poderes.

Este precedente de alguna manera pesaría en el nuevo proyecto constituyente que acabaría en las Cortes de Cádiz en donde aparecen Diputados de muy diferentes ideologías conservadora, absolutista y antiliberal pero también moderada, realista, liberal y extremadamente liberal. La figura de Jovellanos es excepcional pero no lo será menos las de personajes conocedores a fondo de las corrientes filosóficas y políticas que confluyen en la defensa del liberalismo y de la libertad política.

Sera Agustín de Arguelles el mas renombrado parlamentario al servicio del ideario político liberal y con el Diego Muñoz Torrero uno de los mayores defensores de la soberanía nacional y de las libertades fundamentalmente de la libertad de imprenta como también lo fuera José María Queipo de Llano, Conde de Toreno que participa de modo decisivo en las Cortes interviniendo a favor de la libertad de imprenta, la soberanía nacional y la desamortización de bienes.

El argumentario del trabajo realizado no tiene otro propósito que la identificación en este periodo excepcional de ideales operantes y valores rectores del pensamiento, de creencias, principios y fundamentos históricos, filosófico-jurídicos y políticos generados y desarrollados en gran medida en las azarosas vicisitudes de los siglos XVII y XVIII.

En todo caso las Cortes de Cádiz lo que plantarían era el desmantelamiento del Antiguo Régimen consagrando todo un legado recogido de los grandes pensadores y filósofos de la época moderna a favor de la libertad de imprenta y de las libertades políticas, de la igualdad jurídica, de las garantías judiciales procesales así como de los grandes principios que fundamenta la soberanía popular

constituida por ciudadanos libres e iguales y que consagra la división de poderes.

Entre aquellos hechos excepcionales que pusieron los fundamentos en la época contemporánea figuran como legado la obra de los liberales de Cádiz herederos de aquel movimiento filosófico que propugnaba por el uso de la razón para mejorar la sociedad y hacer una vida mas prospera y feliz a los seres humanos.

ABSTRACT

The political revolution of Cadiz is in the midst of a whole political illustrated culture that inherits the characteristic speech from the Age of Enlightenment and is based on the social contract, popular sovereignty, secularism and modern freedoms.

The Spain of the Cortes of Cadiz had not lost sight of the reformist links of its own culture with regards to the creation, alteration, destruction and appropriation of old and new myths. Most constituents meanings of Cadiz knew the intellectual work of the School of Salamanca: Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Luis de Alcalá, Martin Azpilicueta, Tomas de Mercado, Luis de Molina, Juan de Mariana and Francisco Suarez, all naturalists and moralists who sought to reconcile the doctrine of St. Thomas with the new social and economic order.

The School of Salamanca had re-formulated the concept of natural law, concluding that all men share the same nature and consequently also share the same rights as equality or freedom and had re-formulated their conception of sovereignty. To the School of Salamanca the people is the recipient of sovereignty, which transmits the ruling prince. Men are born free by nature and are not servants of another man they can obey and even to impose a ruler. For Suarez, the political power of society is contractual in origin because the community is formed by the consensus of free wills.

From another culture, the foundation of liberalism, as a philosophical and political power, is already attributed, in the seventeenth century, to John Locke's status as the founder of modern liberalism articulating an ideology based on the concept of natural rights and social contract to maintain that the rule of law must replace the absolutism of Government and consider that citizens have the fundamental right to life, liberty and property.

Count of Cabarrus, in his letters to Jovellanos, will echo the doctrine of the social contract expressed by Locke and collected and expanded by Rousseau. Jovellanos himself will adopt the constructive aspect of this theory that also underlies the separation of powers. Other notable

philosophical contributions of David Hume would be the precursor of the liberal ideology and Jeremy Bentham considered the father of utilitarianism that has also acted as a base for liberalism.

These ideas would be greatly ideological sources of the American Revolution. Adams became a strong advocate for the freedoms considered a natural right of the colonists. American constituents drink directly from the intellectual currents of the time and know the doctrine of the separation of powers of Montesquieu who, in 1748, in his book 'The Spirit of the Laws', had addressed, immediately, democracy, political freedom and the separation of powers based more on the distribution of state powers among different social groups than a division of the state powers themselves.

The French Revolution would try to bring the policy to elevate reason and freedom as a principle of free will in Rousseau's sense, the condition of the principle of law considering the revolution as the necessary budget which wants state orders. The French Revolution would mean a part of another rupture and the beginning of a new time in history.

The decisive conception of the rights of man were born in the dispute over the 13 British colonies in North America with serious metropolis transplanted to French soil generating a social and ideological earthquake with popular appearance in the structure of aristocratic society. In a way, some of the philosophical and political fundamentals cherished by liberals and limited government, the subjection of power to the right, the assurance of freedom and natural rights had already been foreshadowed centuries before in the Western cultural tradition.

The intellectual movement that began in England in the seventeenth century would, to some extent, would take body in the eighteenth-century France, in the Enlightenment itself, and in countries with German language and culture driven by the rationalist philosophy of Christian Wolff and finally Kant himself but were revolutions that brought political change which concluded with the privileges and opening a way for the conquest of freedom. It is in this framework that a new constitutional order that has its antecedent in the so-called Constitution of Bayonne driven by Napoleon himself, constitutional alternative in any case intended to end the Old Regime, a truly unjust

regime and is produced in which national sovereignty and the division of powers is enshrined.

This precedent, somehow, would weigh in in the new constituent project that would end in the Cadiz Parliament, where deputies would appear with very different ideologies: conservative, absolutist, and anti-liberal but moderate, realistic, and extremely liberal. The figure of Jovellanos is exceptional but not less savvy the depth of philosophical and political currents from other characters that converge in the defence of liberalism and political freedom.

It would be Agustin Arguelles, the most renowned parliamentary member at the service of the liberal, political ideology, along with Diego Muñoz Torrero, one of the greatest defenders of national sovereignty and freedoms, mainly freedom of the press, as well as José María Queipo de Llano, Conde Toreno, who decisively got involved in Parliament intervening in favor of freedom of the press, national sovereignty and the confiscation of goods.

All of the arguments put together through the work done had no other purpose than to identify, in this exceptional period of operating ideals and guiding values of thought and belief, principles and legal, philosophical and political generated historical foundations, and developed largely in the random vicissitudes of the XVII and XVIII centuries.

In any case the Cadiz Parliament would plant the dismantling of the Old Regime consecrating a legacy picked up from the great thinkers and philosophers of modern times in favor of freedom of the press and political freedoms, legal equality, due process and the main principles underlying popular sovereignty made up of free and equal citizens and that enshrines, and guarantees, the separation of judicial powers.

Among those exceptional events that laid the foundations set in contemporary times, as a legacy of those liberal heirs from the work of Cadiz, was the philosophical movement that advocated the use of reason to improve society and make life more prosperous and happy to every human being.

INTRODUCCIÓN

El inicio del Ochocientos se habría visto precedido por los convulsos últimos treinta años del siglo XVIII que fueron en todo Occidente, al menos en la lectura que de este periodo ofrece Jacques Godechot¹, unos años convulsos que se iniciaron con una serie de conflictos en las colonias inglesas de América del Norte hacia 1770, con las primeras asambleas revolucionarias que tuvieron lugar en Boston, con la “masacre” de 5 de mayo de 1770, la multiplicación de las asociaciones de resistencia que reclamaron par así el apelativo de “hijos de la libertad”, el ataque a tres navíos de la Compañía de Indias, la “batalla de Lexington”...

Aquellos hechos fueron seguidos del Congreso Continental la guerra general como consecuencia de la alianza de los independentistas primero con Francia y más tarde con España y las Urovincias unidas, y la conclusión del conflicto con la victoria de estos aliados y el reconocimiento de la independencia.

Esta discontinuidad, que en algunos casos alcanzó la condición de auténtica ruptura, frente al orden pasado no debiera inducirnos a olvidar que, detrás de la revolución política de Cádiz, se encuentra de manera más o menos velada, toda una cultura ilustrada, al tiempo que católica hispánica, bien diversa a la de los filósofos (en todos los países del continente europeo se decían *philosophes*, y reclamaban y se atribuían como propia esta identidad)² políticos e ilustrados

¹ Jacques Godechot, introducción, págs. 5-6; Capítulo I: *Paz pública y disturbios sociales en el siglo XVIII*, págs.. 7-46 y Capítulo V: *La evolución del espíritu revolucionario en Francia de 1789 a 1789*, págs. 115-165, en el volumen del propio Godechot, *Los orígenes de la revolución francesa, la toma de la bastilla (14 de julio de 1789)*, traducción al castellano a cargo de María L. y Rosa L. Flui, del original en francés *La prise de la Bastille, 14 juillet 1789*, éditions Gallimard, París, 1966, colección *Historia, ciencia, sociedad*, Ediciones Península-edicions 62, Barcelona, 1974.

² Patrice Higonnet, *Estados Unidos de América*, en el volumen colectivo editado por Vincenzo Ferrone y Daniel Roche, *Diccionario histórico de la Ilustración*, versión española de José Luís Gil Aristu del original en lengua italiana publicado

franceses que se presentaron así mismos como herederos del discurso característico de las Luces, dándole a esa condición un significado emotivo favorable, pero que fueron a su vez presentados desde posiciones radicalmente opuestas por sus detractores como los continuadores naturales de la revuelta protestante contra Roma iniciada en el siglo XVI, lo que sin duda tenía un propósito descalificador, y estaba cargado de un significado emotivo desfavorable³.

En contraste con lo que movilizaba a algunos de los revolucionarios españoles, los ilustrados franceses asientan su propia organización societaria a través del pacto social, de la soberanía popular estatal, del laicismo y de las libertades modernas que expresan el principio inmanencia sobre el que se construye la política y el derecho positivo⁴. Tal y como sostuviera F.Jstahl: “*Revolución es el intento de fundamentar el mundo político, no en la providencia y en el orden divinos, sino en la voluntad humana*”⁵.

1812 tuvo mucho de ruptura con el Antiguo Régimen, si bien su historiografía parece tener una predisposición, casi genética, al sesgo y a la contaminación política e ideológica. La nueva Francia de la Revolución –que no *seditio o rebellio*⁶– propiciada por las doctrinas

por el sello editorial Gius, Laterza & Figli de Roma-Bari 1997, Alianza Editorial, Madrid, 1998, págs. 402-411, la cita en pág. 402.

³ Javier Fernández Sebastián, *Guerra de palabras. Lengua y política en la revolución de España*, en el volumen colectivo ya citado, que dirigieran Pedro Rújula y Jordi Canal, *Guerra de ideas. Política y cultura en la España de la guerra de independencia*, págs. 237-280, la cita en página 240; Roger Chartier, *Espacio publico, critica y desacralización en el siglo XVIII. Los orígenes culturales de la revolución francesa*, traducción al castellano, Ed. Gedisa, Barcelona, 1995.

⁴ Cornelio Fabro (n.1911), voz, *Sentido clásico y moderno de inmanencia*, en *Gran Enciclopedia Rialp*, Editorial Rialp, Madrid, volumen XII, págs. 743-748.

⁵ F.J.Stahl, *17 Parlamentarische Reden und vorträge*, Hergn.V.Hertz, Berlín, 1862, pág. 234.

⁶ C.Brinkmann, en *Handwörterbuch der Sozialwissenschaften*, volumen IX, Stuttgart-Tübingen-Göttingen, 1956, págs. 10 y siguientes; K.Griewank, *Derneuezeitliche Revolutionsbegriff*, Weimar, 1916, págs. 1 y siguientes;

de autores tan cualificados como Diderot, Roussau, Montesquieu o Voltaire, empezaba a ejecutar, sobre las ruinas del viejo sistema jurídico y social, las exigencias radicales impuestas por la revolución y una lectura de la Ilustración.

Al entrar en el escenario la Revolución francesa se produjo una situación singular en orden a la identificación del concepto de ilustración. Se detiene de manera brusca la búsqueda que estaba en curso, y ya había producido más de un análisis interpretativo, de una identidad adecuada para definir al movimiento ilustrado –la lucha de la luz de la razón contra las tinieblas- en términos cosmopolitas y universalistas.

La paralización es tal que se ha llegado a hablar de un proceso radical de distorsión historiográfica, tan radical que algunos terminarían preguntándose con una carga provocadora si la Ilustración habría llegado a existir o si no fue un invento, un juego de espejos construido por la propia Revolución⁷. En este sentido, y todavía en 1915, Benedetto Croce cuando trataba de reivindicar la autonomía de la Ilustración, no se le ocurre otro argumento para hacerlo, sino sostener que “el triunfo y la catástrofe de la Ilustración fue la Revolución francesa, que constituyó simultáneamente la catástrofe y la catarsis de su historiografía⁸.

B.Seidel, *Das Zeitalter der revolutionen en Aspekte sozialer Wirklichkeit* en la serie Sozialwissenschaftliche Abhandlungen, volumen 7, Berlín, 1958, págs. 131 y siguientes.

⁷ Roger Chartier, *Le origini culturali della Rivoluzione francese*, traducción italiana del original en francés (1990), editada por Gius. Laterza & Figli, Roma-Bari, 1991, pág. 5; hay edición en lengua alemana, *Die Kulturellen Ursprünge der Französische Revolution*, Suhrkamp Verlag, Verfrt and Main, 1995.

⁸ Benedetto Croce, *Teoria e storia dlla estoriografia*, publicada en italiano en el año 1917 como cuarto volumen de su Filosofía dello spirito esta monografía había sido editada ya con anterioridad en lengua alemana con el título *Zur theorie und geschichte der Historiographie*, Tübingen, 1915) citamos por la edición de Milano, 1969, pág. 290.

La Revolución, sobre el supuesto de que no hay un orden dado dentro del cual se muevan los hombres, sino que son los hombres quienes se construyen por si mismos el orden de sus relaciones recíprocas⁹, apadrinaba un ambicioso proyecto de reforma jurídica y política, que llegaría a ser declararlo oficialmente asunto de interés nacional.

Si ya desde los años sesenta del siglo XVII se había abierto en Francia un proceso de discusión pública acerca de la reforma del derecho, dirigido a la creación de un derecho uniforme, pretensión que se contiene en los *Cahiers* de 1789, con la viva, e incluso febril, actividad desarrollada a partir de la Revolución por parte de los distintos cuerpos legislativos en todos los ámbitos del derecho, terminaría materializándose la reforma proyectada¹⁰.

Lo cierto es que en España se mantuvo y no se perdió de vista la vinculación reformista a la cultura propia del universo católico. Sabido es que ni la omnipotencia divina pueda hacer que lo que fue no haya sido¹¹ elementos ideales que encontraron una importante difusión

⁹ Felipe Eduardo González Vicen, *La filosofía del derecho como concepto histórico*, en el *Libro-homenaje al profesor doctor don Felipe Eduardo González Vicen*, con motivo de su Jubilación como Catedrático de filosofía del derecho de la Universidad de la Laguna, publicado bajo el título general de *Estudios sobre filosofía del derecho*, Facultad de Derecho, Universidad de la Laguna, 1979, págs. 2007-258. El texto recoge en su literalidad el artículo de González Vicen publicado con igual título en el *Anuario de Filosofía del derecho* (Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Madrid), volumen 14, 1969. La cita en págs. 209-211 de los ya citados estudios de filosofía del derecho.

¹⁰ Erich Molitor y Hans Schlosser, *Perfiles de la nueva historia del Derecho privado*, traducción a nuestra lengua a cargo de Ángel Martínez Sarrión, del original en lengua alemana, *Grundzüge der Neueren Privatgeschichte. Ein Studienbuch*, (C.F. Müller Juristischer Verlag, Karlsruhe, enero de 1975), Bosch. Casa Editorial, Barcelona, 1980, pág. 73 (*La legislación de la Revolución (Droit intermédiaire)*).

¹¹ José Gaos, *Confesiones profesionales* (invierno de 1953), Capítulo de Id, *Confesiones profesionales. Aforística*, Prólogo de José Luís Abellán, Asociación Cultural literaria, colección *Trea Letras*, ediciones Trea, Gijón (Asturias), 2004, pág.43; Id, *Dos exclusivas del hombre: la mano y el tiempo*, Universidad de Nuevo León (Estado de Nuevo León, Monterey), México, 1945; Id, *De la filosofía* (curso de 1960), Fondo de Cultura Económica, México, 1962.

y provocaron unos efectos en ocasiones explosivos¹², generando nuestra cultura política moderna, una cultura política novedosa, en la que se desarrolló una disputa incesante en orden a la creación, reforma, destrucción y apropiación de viejos y nuevos mitos y símbolos, en lo mucho que estos tienen de elementos constitutivos, constructivos y configuradores de la realidad, así como de constructores de entidades colectivas y estructuras culturales y de unas formas de vida y patrones de comportamiento¹³, con sus caracteres propios y singularizadores que facilitaron toda una redefinición de las relaciones sociales, en el curso de lo que constituyera todo un autentico proceso de recomposición social, al tiempo que suscitaron modelos políticos y lecturas, con efectos ora constructivos, ora destructivos, y concluyeron consolidándose y arraigándose¹⁴ hasta

¹² Horace Orlando Patterson (n.1946), *La libertad. La libertad en la construcción de la cultura occidental*, traducción castellana de Oscar Luís Molina del original en inglés, *Freedom. Freedom in the Making of Western Culture*, (Basic Books, New York, 1991), Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, diciembre de 1993, *Prefacio*, págs. 11-23, la cita en pág. 11.

¹³ Ismael Saz Campos, *Presentación*, a la traducción al castellano a cargo de Pilar Placer Perogordo del volumen de Orlando Figes y Boris Kolonitskii, *Interpretar la Revolución rusa, El lenguaje y los símbolos de 1917 (Interpreting the Russian Revolution. The Language and Symbols of 1917*, Yale University Press, New Haven-London, 2001), coeditada por la Universidad de Valencia y la Editorial Biblioteca Nueva, Valencia-Madrid, 2001, págs. 13-14, la cita en pág. 13); François Furet y Mona Ozouf (n.1931), (editores), *The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture*, tres volúmenes, Oxford, 1989; Id, *Dictionnaire Critique de la Révolution française*, Ed. Flammarion, París, 1988 (traducción al castellano, *Diccionario de la Revolución francesa*, Alianza Editorial, Madrid, 1989); Id, *Dictionnaire critique de la Révolution française. Institutions et création*, Ed. Flammarion, París, 1999; Id, *Dictionnaire Critique de la Révolution française. Événements*, Ed. Flammarion, París, 1993; Id, *Dictionnaire Critique de la Révolution française. Acteurs*, Ed. Flammarion, París, 1993; Id, *Le siècle de l'avenement republicain*, Ed. Gallimard, París, 1993; Id, *Un itinéraire intellectuel*, Ed. Calmann-Lévy, París, 1999.

¹⁴ Klaus Stern, *Género y evolución del constitucionalismo americano y europeo. Algunos contrastes sobre aspectos fundamentales*, texto de la conferencia que fuera pronunciada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sudáfrica, en el ámbito del instituto de Derecho Comparado y Extranjero el 26 de febrero de 1985, publicada inicialmente en inglés en la revista *The comparison and International Law. Journal of Southern Africa*, julio de 1985, pág. 185 y siguientes; el artículo fue traducido a nuestra lengua por el profesor de Derecho

constituirse en el substrato común del Estado y del Derecho¹⁵, en la medida en que ambos constituyen, al decir de Helmut Willke, instituciones centrales de integración del sistema social, al que, por ello mismo, dotan de sus correspondientes fundamentos de legitimidad.

Aunque no han faltado analistas e historiadores de la filosofía que proponen descartar de la consideración de obras del máximo representante del idealismo filosófico editadas tras su muerte a partir de borradores, apuntes de sus alumnos y notas del propio filósofo, pese a admitir su importancia, en el entendimiento de que con la publicación en vida del autor de sus *Grundlinien der Philosophie des Recht* (1821) se cierran las que, en puridad, constituyen las obras propias del profesor de Berlín¹⁶ ya lo dejó escrito, desde su inconmensurable talento, Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831, quién había nacido en una época en la que el interés por la política de hecho terminó eclipsando cualquier otro interés¹⁷) en los borradores y

constitucional de la Universidad de las Islas Baleares Alberto Oehling de los Reyes en el volumen antológico de textos del propio K.Stern *Jurisdicción constitucional y legalidad*, traducido al castellano y precedido de un *Estudio Preliminar* por el citado doctor Oehling, editorial Dykinson, Madrid, pág. 137-155, la cita en página 137.

¹⁵ Helmut Willke, *Diriger la société par le droit?*, artículo publicado en el volumen monográfico *Le système juridique* de los *Archives de Philosophie du droit* (Editions Sirey, París) correspondiente al año 1986, págs. 185 y siguientes, este artículo del citado profesor de la universidad alemana de Bielefeld se tradujo al francés por Florence Barberousse; Id, *Entzauberung des States. Überlungen zueinersci Steuerungstheorie*, Athenäum, Königstein, 1983.

¹⁶ Pablo López Álvarez (n.1968), voz *Hegel, Georg Wilhelm Friedrich*, en la obra colectiva dirigida por el profesor Jacobo Muñoz Veiga, *Diccionario Espasa de Filosofía*, editorial Espasa-Calpe, Madrid, 2003, págs. 392-399, la cita en página 393.

¹⁷ Bernard Bourgeois (n.1929), voz, *Hegel, Georg Wilhelm Friederich, 1770-1831*, en la obra colectiva editada bajo la dirección de Philippe Raynaud y Stéphane Rials, *Diccionario Akal de Filosofía política*, traducción de Mariano Peñalver y Marie-Paule Sarazin, del original en francés, *Dictionnaire de Philosophie Politique* (Presses Universitaires de France, París, 1996), Ediciones Akal, (Tres Cantos, Madrid), 2001, págs. 349-357, la cita en página 349; Id, *Hegel à Francfort ou Judaïsme, christianisme, hegelianisme*, París, 1970; Id, *La pensée politique de Hegel*, Presses Universitaires de France, París, 1969; Id, *Le*

apuntes preparatorios de sus lecciones de filosofía de la historia mundial impartidas en la Universidad de Berlín en los cursos 1823-1824, 1824-1825, 1826-1827 y 1830-1831(*Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte*, publicados el año 1837, a partir de dichos borradores y de las notas de clase dejadas por el autor, junto con los apuntes y las anotaciones tomadas por sus estudiantes)¹⁸: “La Revolución francesa tiene en el pensamiento su comienzo y su origen”.

Nadie como el propio Hegel formuló el nexo que une a la Revolución francesa con la filosofía. Nos lo recuerda el profesor Philippe Raynaud: “*La Revolución, que intentó someter la política a la razón, nació de la filosofía, y así se produjo un magnífico comienzo, que dio lugar al espectáculo más poderoso desde que existe la humanidad*”¹⁹.

La Revolución francesa, a la que prestó excepcional atención, y por cuyo acontecimientos se apasionó, fervoroso simpatizante, eleva la libertad, como principio de la voluntad libre en sentido

prince hégélien, en el volumen *Etudes hégéliennes: raison et décision. Berlín 1818-1831*, Presses Universitaires de France, París, 1992; Id, *Hegel Les actes de l'Esprit*, París, 2001; Jacques d'Hondt, *Hegel en son temps*, Editions Sociales, París, 1968; Franz Rosenzweig (1866-1929), *Hegel und der staat*; dos volúmenes, Berlín, 1920 (hay edición en francés *Hegel et l'Etat*, Vrin, París, 1950 (hay tercera edición del año 1960).

¹⁸ Georg Wilhelm Friedrich Hegel, *Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte (1822-1823)*, edición a cargo de K.H. Ilting, Meiner Verlag, Hamburg, 1996, págs. 1-521; Id, *Lecciones sobre la filosofía de la historia*, traducción al castellano de José Gaos (1900-1969), en dos volúmenes, con Prólogo de José Ortega y Gasset, Editorial Revista de Occidente, Madrid, 1928 (reeditada en 1955, 1974, 1989 –quinta edición–), Alianza Editorial, Madrid; Id, *Lecciones de filosofía da História*, traducción al portugués editado por la Universidad de Brasilia, Brasilia, 1995, *La razón de la historia*, traducción de A. Gómez, Seminarios y Ediciones, Madrid, 1972; Jean Hyppolite, *Introducción a la filosofía de la historia de Hegel*, traducción castellana del original en francés, *Introduction à la philosophie de l'histoire de Hegel* (Marcel Rivière et Cie, París, 1968), Editorial Calden, Buenos Aires, 1970.

¹⁹ Georg Wilhelm Friedrich Hegel, *Fundamentos de la filosofía del derecho*, parágrafo 258.

rousseauiano, a la condición de principio del Derecho²⁰, y considera a la revolución como el presupuesto necesario de cualesquiera futuros órdenes estatales. Probablemente no haya habido ningún filósofo de la política que haya sido, y tan radicalmente como él lo fue, el filósofo de la revolución²¹.

En este sentido se expresa Werner Naef en su celebrada monografía *Staat und Staatsgedenke*, la Revolución francesa trajo consigo no solo una mutación formal del estado de cosas existente, sino algo más importante, toda una nueva fundamentación ideológica del estado.

Con ello la Revolución francesa de nuevo, -entendiendo este concepto *sensu latissimum*, es decir, de tal manera que abarque tanto la prehistoria como las varias consecuencias de aquél fenómeno histórico- provoca la más profunda modificación de la idea del estado y de su realidad en el curso de los siglos modernos, al inscribirse la Revolución dentro del proceso constitutivo del Estado moderno: La Revolución francesa vino a significar dos cosas, de una parte ruptura, corte, interrupción, nuevo comienzo, y de otra y a la vez, un escalón en la serie gravativa algo así como un eslabón en el proceso evolutivo

²⁰ Norberto Bobbio, *Sur la notion de constitution chez Hegel*, en *Annales de philosophie politique*, número 12, 1980, págs. 133-144; Francisco Elías de Tejada y Spínola, *Lo spirito oggettivo nella teologia hegeliana della storia*, en *Actes du III Congrès pour l'étude de la philosophie de Hegel*, Lille, 1969; G. W. F. Hegel, *Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte*, en Id, *Sämtliche Werke*, Fr. Frommanns, Verlag, Stuttgart, volumen XI, 1949.

²¹ Joachim Ritter (1903-1974), *Hegel et la Révolution Française*, suivi de *Personne et propriété selon Hegel*, traducción francesa Beauchesne, París, 1970, pág. 19, del original en lengua alemana, *Hegel und die Französische Revolution*, en el volumen colectivo editado por Ulrich Herrman y Jürgen Oelkers, con el título *Freanzö Sische Revolution und pädegoik der Moderne*, Weinheim/Basel, Beltz, 1989, págs. 347-359; Vid, al respecto Friedrich Heer, *Europa, madre de revoluciones*, Tomo I, Capítulo 3: *La sociedad alemana en la época de la Revolución francesa I* (págs. 85-248, en especial páginas 226-248), traducción del original en alemán, *Europa, mutter der Revolutionen*, Kohlhammer, Verlag, Stuttgart, 1964, a cargo de Manuel Troyano de los Ríos, Alianza Editorial, Madrid, 1980.

que aparece unido, sin solución de continuidad con el pasado y el futuro.

Se puede decir que con la Revolución Francesa lo que ya en los siglos inmediatos se había vivido en el ámbito de las doctrinas y las ideologías, se convierte en potencia política. Aquí, y en este sentido bien pueden distinguirse dos corrientes ideológicas: la primera, la más remota en el tiempo, y cuyas consecuencias y efectos directos se materializan en el siglo XVIII, aún cuando sin perder por ello significación ulterior, y la segunda, más reciente, que nos conduce directamente a la Revolución francesa. Ambas se encuentran corporeizadas respectivamente en la doctrina de la resistencia y en la doctrina de los derechos del hombre²².

Mientras que la doctrina de la resistencia asienta sus raíces en la visión del mundo propio del estado dualista –esto es, en la constelación jurídica del orden estamental- en el Estado munista y absolutista la doctrina del derecho de resistencia pierde la significación y el sentido que tuvo en su formulación originaria. Por el contrario, la doctrina de los derechos del hombre alcanza su más pleno sentido a partir del descubrimiento y consiguiente reconocimiento de la personalidad individual como elemento integrante de la comunidad nacional constitutiva del Estado.

La concepción decisiva de los derechos del hombre se manifiesta en el curso de la disputa con la metrópoli de las trece colonias británicas de Norteamérica, y de ahí será trasplantada al suelo francés: “A los derechos del individuo frente al Estado se añaden

²² Werner Naef, *La idea del Estado en la Edad Moderna*, versión del alemán a nuestra lengua a cargo de Felipe Eduardo González Wicén del original en lengua alemana *Staat und Staatsgedanke*, Colección “La obra del espíritu”, ediciones Nueva Época, Madrid, 1947, Capítulo I: *La estructura histórica del Estado Moderno*, págs. 5-21, la cita en página 17.

pronto sus derechos políticos activos en el Estado”²³. Todo ello en medio de una gran transformación –que en importante medida había sido sugerida, fue alentada y encontró su fundamento en esas creencias y principios- de envergadura política e incluso en un ámbito a todas luces trufado de energía revolucionaria y de una ideología voluntarista que generó un giro radical en el imaginario político del Antiguo Régimen, produjo un terremoto social e ideológico con la irrupción popular en la estructura de la sociedad aristocrática²⁴, a la vez que conmovió y alteró de forma no menos radical los modos de vida occidentales, suscitando inevitablemente una intensa reacción contrarrevolucionaria.

La fuerza de los efectos transformadores de las Revoluciones americana y francesa provocaron e inmediato una intensa reacción de la que da cuenta el profesor Díez del Corral “frente a los planteamientos racionalistas e innovadores del siglo XVIII se proclama el ideal de una vida arraigada, vinculada por los trazos tradicionales del individuo y de la sociedad”²⁵.

²³ Werner Naef, *La estructura histórica del Estado Moderno*, Capítulo I, Id, *La idea del Estado en la Edad Moderna*, obra citada, edición citada, traducción citada, págs. 17-21.

²⁴ Álvaro Fernández Suárez, *La difícil incorporación a la Modernidad*, epígrafe 6 del capítulo VI (*Los orígenes del pesimismo español, del volumen del pensamiento español*, colección Espejo de España, Editorial Planeta, Barcelona, 1983, págs. 143-156, la cita en página 150.

²⁵ Luís Díez del Corral y Pedruzo (1911-1998), *Introducción al doctrinarismo*, Capítulo I de Vid, *El Liberalismo doctrinario*, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, segunda edición, 1956, págs. 1-22, la cita en pág. 3. Se trata básicamente del texto de su tesis doctoral defendida en la Universidad de Madrid en 1944 y cuya primera edición se publicó por el propio Instituto de Estudios Políticos en el año 1945. Vid, Carmen Iglesias Cano, *Semblanza intelectual*, ensayo introductorio a Luís Díez del Corral *Obras Completas*, edición cuidada por la citada profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y María Luisa Sánchez Mejía, en cuatro volúmenes, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998. Id, voz *Luís Díez del Corral*, en *Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos (1840-1980)*, Editorial Akal, Madrid, 2002, págs. 218-219; Raúl Morodo Leoncio, *Atando cabos. Memorias de un conspirador moderado*, Editorial Taurus, Madrid, 2001, volumen I, págs. 218-219.

Principios y fundamentos no anclados en el pasado –aún cuando mantuvieran relaciones y vínculos inequívocos con éste- sino abiertos de modo decidido hacia el futuro. Principios y fundamentos que contribuyeron, como no podía ser de otro modo, a configurar los rasgos de un nuevo tiempo histórico –se habla de que constituyen el núcleo político de la modernidad española- así como hicieron posible una inédita forma de instalarse en el tiempo, la llamada época contemporánea²⁶, cuyo *terminus a quo* se estableció inicialmente en la caída del antiguo régimen, momento que para muchos inauguraría la contemporaneidad.

Esquema de priorización de la historia de occidente en un principio de carácter normativo en la medida en que ofrecía una auténtica clave de lectura, si bien con el transcurso del tiempo terminó siendo un principio meramente pedagógico en cuanto a instrumento didáctico o hermenéutico, y cuya historia nace en Francia a partir de la reforma de la enseñanza secundaria que inspiró y llevó a cabo en 1867 el político Víctor Duruy, momento que ocupa el estudio del periodo transcurrido desde 1789 hasta el final del Segundo Imperio. Si bien, como es sabido, en la llamada posición idealista, y por ende crítica del conocimiento histórico positivista²⁷, entender algo históricamente equivale a revivirlo; por considerar que de no ser así no podría hablarse de entendimiento sino tan solo de descripción.

En este sentido cabría invocar la concepción al respecto del escritor, filósofo, historiador y político italiano Benedetto Croce (1866-1952) quién con su provocadora y paradójica frase “la historia es siempre contemporánea”, anuncia una revisión completa del punto

²⁶ Octavio Paz (1919-1998), *Olimpiada y Tlateloco*, capítulo I de “Posdata”, Siglo XXI editores, México, decimosegunda edición, 1979, págs. 19-42, la cita en página 21.

²⁷ Jerzy Topolski, *Metodología de la historia*, traducción al castellano a cargo de María Luisa Rodríguez Tapia del original en polaco *Metodologia Historii (panstwone Wydeawnictwo Neaukowe, Warscawa, 1963)* ediciones Cátedra, Madrid, 1982, pág. 101)

de vista común acerca de las relaciones entre la historia y el presente, en la convicción de que si bien es cierto que la historia tenga como centro al hombre, no es menos cierto que privilegia al hombre actual. Los hechos pasados y presentes solo se pueden comprender como hechos espirituales, de tal manera que, en el nivel espiritual, el pasado se mezcla, solapa y hasta confunde con el presente. “Los hechos reales registrados en las fuentes se hacen verdaderos tan solo cuando se convierten en elementos del presente variable, como resultado de su animación espiritual²⁸”.

Otro de los críticos del punto de vista positivista acerca del conocimiento histórico, el filósofo y arqueólogo británico Robin George Collingwood (1889-1943) no tuvo empacho en afirmar que la historia no es sino la reactualización del pasado²⁹.

Energía revolucionaria que, al decir del polémico filósofo, teórico social y sociólogo francés Jean Baudrillard (1929-2007³⁰) se habría agotado para siempre en el año axial 1968³¹ tras alcanzar su clímax en las protestas, tumultos y motines de espontánea universalidad surgidos más o menos simultáneamente en París, Praga,

²⁸ Jerzy Topolski, *La filosofía antipositivista de la historia*, epígrafe 3º del Capítulo VII –*Reflexión estructural*– págs. 109-120, la cita en página 112 del volumen de Id, *Metodología de la historia*, obra citada, edición citada, traducción castellana citada.

²⁹ Robin George Collingwood, *The Idea of history* (obra de edición póstuma, The Clarendon Press, Oxford, 1946, traducida a nuestra lengua por Edmundo o’gorman y Jorge Hernández Campos, Fondo de Cultura Económica, México, tercera reimpresión de la primera edición, 1972); Id, *Essays in the philosophy of history*(obra editada póstumamente, en 1966 por W.Tebbins, traducción al castellano, ensayos sobre filosofía de la historia, 1970.

³⁰ Deouglas Kellner, *Jean Baudrillard*, Stanford University Press, Stanford (California), 1980 pág. 179.

³¹ Octavio Paz, *Olimpiada y Tlateleco*, ob. cit. pág. 25.; J.Arana, *La larga marcha hacia la libertad. La evolución ideológica de Octavio Paz*, en *Isegoria*, número 22, 2000, págs. 83-102; Pere Gimferrer (Editor) *Octavio Paz*, Editorial Taurus, Madrid, 1982; J.González, *El cuerpo y la letra. La cronología poética de Octavio Paz*, fondo de cultura económica, Madrid, 1990; A. Roggiano(Editor) *Octavio Paz*, Editorial Fundamentos, Madrid, 1979.

Tokio, Belgrado, Roma, Chicago, Berkely, México, Santiago de Chile...: aún cuando en 1968 a estas protestas universales y espontáneas les siguió una no menos universal y espontánea reacción por parte de los gobiernos. “Año axial, 1968, mostró la universalidad de las protestas y su final y realidad inevitable”: ataraxia y estallido, explosión que se disipa, violencia que es una nueva enajenación.

Si las explosiones son parte del sistema, también lo son las representaciones y el letargo voluntario o forzado que las sucede. La enfermedad que roe a nuestras sociedades es constitucional y congénita...La filosofía del progreso muestra al fin su verdadero rostro –un rostro en blanco sin facciones-. Ahora sabemos que el reino del progreso no es de este mundo, el paraíso que nos promete está en el futuro, un futuro intocable, inalcanzable, perpetuo. El progreso ha poblado la historia de las maravillas y los monstruos de la técnica, pero ha deshabitado la vida de los hombre. Nos ha dado más cosas, no más ser”³².

Sustrato otra vez esencial que permite dar cuenta de los efectos transformadores de las revoluciones burguesas del último tercio del siglo XVIII. En la postmodernidad, y como contraposición a la búsqueda modernista de la autoridad, el progreso, la universalización, la racionalización, la sistematización³³, buena parte del discurso y del argumentario de la filosofía política ha consistido en un combate a muerte, sin concesiones ni treguas, contra las quimeras en que terminaron convirtiéndose, con el transcurso de los años, no pocos de estos principios y fundamentos³⁴. No en vano un verso de la poetisa

³² Octavio Paz, Capítulo 1, *Olimpiada y Tlateloco*, págs. 19-42, la cita en págs. 25-26 dentro del volumen citado “Posdata”, en la edición citada.

³³ Andreas Huyssen, *After the Great Division Modernis, Mass Culture, Postmodernis*, Indiana University Press, Bloomington-Indianapolis (Indiana), 1986.

³⁴ Daniel Innerarity Grau, *Un mundo de todos y de nadie*, Editorial Paidós, Barcelona, 2013.

rusa Anna Andreyevna Ajmátova Górenko (1889-1966) lo consigna: “en el futuro se pudre el pasado”.

Además en este caso se produce un fenómeno clásico que suele comparecer en la historia de las doctrinas y que con sentido de la oportunidad consignara Juan Roger, en un texto hoy olvidado en el que intenta la difícil tarea de dibujar la silueta del pensamiento francés contemporáneo, en su condición de pensamiento impregnado de las ideas de la Revolución de 1789: “Aquellas ideas viven y actúan en él, y en las recientes discusiones sobre la Constitución de la Cuarta República en 1945 y 1946 si hicieron constantes llamamiento a los principios permanentes de la Revolución... esos principios se han impuesto tanto cuanto más se ha ignorado su valor doctrinal e histórico.

Ha habido un dogma de la revolución que desde hace 50 años se ha venido sellando en Francia por nuevos sacerdotes mucho más intransigentes que los Jansenitas de Port Royal, de los que por lo demás fueron hijos espirituales. De un plumazo se han tachado mil años de realeza francesa, desechando el tesoro cultural que contenía. Para muchos franceses, en efecto, Francia nació en la noche del 4 de julio de 1789... pese a las lecciones de la realidad, los ideales revolucionarios han penetrado en el cuerpo espiritual de Francia mediante la enseñanza obligatoria impartida en las escuelas desde hace 60 años: se han convertido en principios, ideas, matrices, en dogmas indiscutibles en una especie de monadas que pueblan el universo democrático”³⁵.

³⁵ Juan Roger, *Esquema del pensamiento francés en la posguerra*, Departamento internacional de culturas modernas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1950, capítulo I, “los valores rectores del pensamiento francés, págs. 9-53, la cita en págs. 10-13, *La ideología de la revolución de 1789*; Tourneaux, *Les sources bibliographiques d’l histoire de la révolution française*, París, 1938.

Todo ello en el marco de una concepción de los textos en la que se interpreta cada uno de ellos como la emanación de una intención particular vertida en una precisa singular y consignada ocasión con vistas a la solución de un problema específico, de conformidad con la original teoría de Quentin Skinner en su artículo *Meaning and Understandy*³⁶.

No en vano tal y como sostuviera Fernand Braudel en *A modo de conclusión* (1997) la historia es una reconstrucción, “y en el momento de reconstruir una casa es preciso tener un plano del conjunto, ciertos conceptos y ciertas hipótesis”³⁷. A través de un tan largo como complejo proceso político, social y jurídico, el Estado absoluto surgido de las guerras de religión que suceden al cisma de la reforma en Europa será sustituido por el estado constitucional “un estado cuyas estructuras, funciones y límites se relacionan con una mentalidad determinada por un sistema y un orden basado en principios fundamentales específicos”³⁸.

En todo caso es obligado introducir dos importantes matices, en primer lugar, si bien es de justicia reconocer que bastantes de los modos de fundamentar los sistema políticos de la modernidad y muchas de las instituciones políticas tan caras a los liberales (gobierno

³⁶ Publicado en *History and Theory*, 1969, número 8, pág. 3-53. Artículo revisado y actualizado en la recopilación *Visions of Politics*, Cambridge university press, 2002, pág. 88.

³⁷ Carlos Antonio Aguirre Rojas, *Dimensiones y alcances de la obra de Fernand Braudel*, en el volumen colectivo *Primeras Jornadas Braudelianas*, Instituto de investigaciones Doctor José María Luís Mora, México D.F. 1993, pág. 10-34; Fernand Braudel, *A manera de conclusión*, en *Cuadernos Políticos*, número 48, 1986; Id. *La historia y las ciencias sociales* traducción castellana, Alianza Editorial, Madrid 1968; Immanuel Wallrstein, *Braudel, los Annales y la historiografía contemporánea*, en la revista *Historia* número 3 1983; *Pierre Bordieu, Aspirant philosophe*, en el volumen colectivo, *Les enjeux philosophiques des années 50*, París, 1989; Francis Hartog, *Evidence de l'histoire. Ce que vivent les hisorins*, EHESS. París, 2003; William H. Mac Neill, *My thistory and other essays*. University of Chicago Press, Chicago 1986.

³⁸ Klaus Stern *Génesis y evolución del constitucionalismo...* artículo citado Locke..

limitado, sometimiento del poder al derecho, aseguramiento de la libertad y de los derechos naturales...) ya habían sido prefiguradas en la tradición cultural occidental siglos atrás, e incluso en bastantes ocasiones estuvieron mejor protegidas en el orden anterior al surgido con las revoluciones burguesas del último tercio del siglo XVIII³⁹.

Por ello no puede sorprendernos la tan frecuente presencia en el siglo XVIII de textos de la doctrina de los derechos naturales de Hugo Grocio, Samuel Puffendorf, Jean-Jacques Burlamaqui o de los parlamentarios ingleses como Edward Litleton, Richard Gesheld, Sir John Eliot, Thomas Wentworth, Sir Thomas Hedley, Sir Douglas Digges, Henry Sherfyeld... en sus disputas con la monarquía británica acerca de los empréstitos forzosos, y en sus críticas de la corona y sus derechos de prerrogativa en relación con los súbditos libres en el curso del siglo XVII⁴⁰, o de los tratadistas ingleses del mismo siglo como John Milton⁴¹, Henry Parker⁴², James Harrington, Algernon, Lord Boling Broke, identificados en ocasiones como los “new roman theorists”.

³⁹ Pablo López, Prólogo a la edición en nuestra lengua del original en inglés de Samuel Gregg, *On ordered Liberty*, traducido al castellano por María de los Ángeles Barrios, *La libertad en la encrucijada, el derecho moral de las sociedades libres*, editado por Ciudadela libros, Madrid, 2007, pág. 11-16, la cita en página 13. El texto de la monografía del Director de investigaciones del Aston Institute formula una original idea de libertad y de sociedad libre comprometida con las exigencias de la razón práctica; entendiéndolo por tal, de conformidad con John Finnis y la nueva escuela de derecho natural –*Natural Law and Right*, the Clarendon Press. Oxford 1980, pág. 12-. La razón práctica no consiste en lo que es efectivo funcional o útil, sino en aquello que nos conduce a pensar qué debemos hacer en general cuando decidimos y actuamos.

⁴⁰ S. R. Gardiner, *The constitutional documents of the Puritan Revolution, 1625-1680*. Oxford, 3ª edición 1906.

⁴¹ M. Dzelzains (editor), *John Milton: Political Writings*. Cambridge, 1991, pág. 1-48; M. Y. Hughes (editor), *Milton complete prose works*, volumen 3º, 1648-1649, New Haven (Conn) pág. 337-601.

⁴² M. Mendle, *Henry Parker and the English Civil War: The Political thought of the Public's Privado*, Cambridge, 1962; J.L. Malcolm (editor), *The Struggle for Sovereignty: Seventeenth Century English Political Tracts*, Indianápolis 2 volúmenes.

De todos ellos aparecen numerosas citas e invocaciones en los escritos de los *Founding Fathers* (Franklyn, Hamilton, Madison, Adams, Jay, Jefferson...). En segundo lugar tal y como diagnosticara el constitucionalista y politólogo alemán Ernst Wolfgang Böckenforde el Estado liberal que resultó del proceso de liberalización se sostiene sus presupuestos que él mismo con el tiempo no fue capaz de garantizar, de tal manera que para su mantenimiento fue preciso recurrir a refuerzos y a nuevos elementos vitales como un cierto *ethos* público o una resuelta conciencia de crisis⁴³.

En la realización de esta memoria de tesis doctoral que se propone analizar uno de los momentos más estelares de la senda evolutiva de nuestro derecho y de su orden de valores⁴⁴, su entorno y las circunstancias de su génesis, hago mía, en sus propios términos, la pretensión a la que, al parecer, respondía a la vez que informaba, el conjunto de la obra de Soren Aabye Kierkegaard (1813-1855), tal y como reconoce en su aportación crucial más completa y filosóficamente más sólida, la conocida con el título de “Postscriptum”, cuando confiesa que si bien pretende ser útil a sus contemporáneos, aspira, por encima de ello a atenerse a las exigencias de la verdad que le resulta mucho más querida y está dotada de una entidad no menor que la propia de los milagros⁴⁵ ya que, tal y como dijera Miguel de

⁴³ E. W. Böckenforde *Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation*, en el volumen antológico de distintos ensayos de Böckenforde, *Recht, Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und Verfassungsgeschichte*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1991, pág. 92-114, la cita en página 112.

⁴⁴ Ogorek, *Warum noch Rechtsgeschichte*, en el volumen colectivo editado por el profesor Simon con el título *Rechtswissenschaft in der Bonner republic*.

⁴⁵ Soren Aabye Kierkegaard, *Postscriptum no científico y definitivo a Migajas Filosóficas*, traducción castellana de Javier Teira y Nekane Legarreta, editorial Sígueme, Salamanca. 2010. El original del pensador danés, data de 1846, en concreto se cierra el 27 de febrero de aquél año, e incorpora en su primera versión el subtítulo “Compilación mimético-patético-dialéctica. Una contribución existencial”. No estará de más consultar al respecto el volumen de W. Thulstrup, *Commentary on Kierkegaard's. Concluding Unscientific postscript*, with a New Introduction. Princeton (New Jersey), University Press. 1964.

Unamuno, el propósito del verdadero pensador no es tanto reclutar ponsenitos sino hacernos pensar.

En definitiva pretendo ofrecer un texto que ambiciona esclarecer, en la medida de lo posible y de las limitaciones inevitables las cuestiones abordadas. En ocasiones me veré obligado a practicar el añejo arte de repensar las cosas comunes con la finalidad de estimular desarrollos de nuevas lecturas y argumentaciones que permitan denunciar y con ellos tratar de anular no pocas imposturas ideológicas.

Esta argumentación trataremos de proyectarla en la interpretación que entendemos más adecuada ofrecer de la obra legislativa de los Constituyentes españoles de Cádiz, autores de la revolucionaria Constitución de 1812, que marca el eje temporal e intelectual de la fase fundacional de nuestro derecho constitucional. Obra que cuenta como hito el citado texto constitucional que permea, asume a la vez que fundamenta y asienta una serie de ideas transformadoras que habían venido siendo generadas a lo largo de un periodo histórico en el que todo parece recomenzar en una nueva ática en el diferente horizonte de la crisis de conciencia que se inaugura en los años 1680-1700⁴⁶.

Periodo histórico bien determinado en el que se produjo el desarrollo de toda una tradición filosófico-cultural que ha sido conocido con el término Ilustración, -así como sus equivalentes en las distintas lenguas europeas- término con el que se denota un movimiento intelectual iniciado en la Inglaterra del siglo XVII con las aportaciones de John Locke y los deístas, y su creencia en una divinidad establecida por la razón y la evidencia, que se sirve básicamente de la argumentación y que rechaza la doctrina revelada.

⁴⁶ Pierre Chaunu, *Preface* a la monografía de la profesora Simone Goyard-Fabre, *La philosophie des lumières en France*, Librairie C.Klincksicot, París, 1972, pág. 11-18. La cita en página 12.

Este movimiento toma cuerpo en la Francia del XVIII a través del erudito y polemista Pierre Bayle (1647-1706)⁴⁷, del editor de la *Encyclopedie* Denis Diderot (1713-1784)⁴⁸, Francois Marie Aroet (conocido comúnmente como Voltaire, 1694-1784), y otros enciclopedistas de la talla de Jean le Rond D'Alambert (1717-1783)⁴⁹ y que se desarrolló posteriormente con éxitos en los países con lengua y cultura alemana a largo del siglo XVIII impulsado por encima de todo por la filosofía racionalista de Christian Wolff (1670-1752) quién dotó a la filosofía alemana del formato característico del escolasticismo protestante⁵⁰ y cuyo desarrollo terminó corriendo a cargo del filósofo judío ilustrado Mosers Mendelssohn (1729-1786, cuya visión de la vocación de la humanidad por un progreso sin fin influyó muy profundamente en Immanuel Kant, con quién mantuvo una relación de afecto nunca rota.)⁵¹, así como con el filósofo y dramaturgo germano Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781)⁵².

Periodo en el que cristalizaron y se generaron una serie de principios ideológicos en cuyo ámbito, sin que falte una cierta ambigüedad⁵³ se reflejan unos mínimos de acuerdo y generalización teórica a partir de los cuales las distintas lecturas de la corriente adquieren su propia fisionomía⁵⁴. Ideas a las que no resultan ajenas las

⁴⁷ Elisabeth Labrousse, *Bayle*, Oxford University Press, Oxford 1983.

⁴⁸ G. Bremmer, *Order and Change. The Pattern of Diderot's thought*, Cambridge University Press, Cambridge (United Kingdom) 1983.

⁴⁹ Jean D'alambert, *Discurso preliminar de la Enciclopedia*, (1751), traducción castellana de A. Rodríguez Huesca, editorial Aguilar, Madrid 1965.

⁵⁰ L. W. Beck, *Early German Philosophy*, Harvard University Press, Cambridge (M.A.S) 1969, capítulo XI; Id. *From Leibniz to Kant*, en el volumen, *Reading History of Philosophy*, London 1993, volumen VI, capítulo I.

⁵¹ Alexander Altmann, *Moses Mendelssohn*, Philadelphia, 1973.

⁵² A. Ugrinsky (editor), *Lessing and the Enlightenment*, London, 1986.

⁵³ Simone Goyard-Fabre, *Introduction. L'esprit d'un temps*, pág.10-37 del volumen citado de la profesora de Caen, *La philosophie des lumieres en France, la cita en página 20*.

⁵⁴ Juan Maldonado Gago, voz: *Revoluciones liberales y nacionalismo* en el volumen colectivo dirigido por el Catedrático de Ciencia Política de la UNED,

lecturas y relecturas de quienes intervinieron en sus debates y decidieron acerca de los textos normativos aprobados por las Cortes gaditanas⁵⁵. Ideas cuyo marco político no es otro sino la de constituirse en réplica al despotismo ilustrado, al sistema de dominación que en gran medida finalizaría como consecuencia de las revoluciones sociales y políticas que se desarrollan a partir de 1789⁵⁶.

Constituye un lugar común la afirmación en cuya virtud las grandes mutaciones de la historia universal han solido iniciarse con conmociones revolucionarias.

En este bien puede concluirse que la Revolución Francesa no solo dio término al Antiguo Régimen, sino que desaparecieron del horizonte y de las prácticas, usos y costumbres que habían configurado al estado-nación durante siglos⁵⁷.

Andrés de Blas Guerrero *Enciclopedia del Nacionalismo*, Editorial Tecnos, Madrid 1997, pág 463-466.

⁵⁵ No en vano, tal y como gustaba observar a Francois Mauriac, premio Nobel de literatura 1952: “dime lo que lees y te diré quien eres; eso es cierto, pero te reconoceré mejor si me dices lo que lees”. Vid al respecto dos textos de significativos títulos: el de Pierre Bayard, *Cómo hablar de los libros que no se han leído*, traducción castellana de Albert Galvany, editorial Anagrama, 1998; y el de Henry, Hitchings. *Saber de los libros sin leer. Es fácil hablar de libros que no has leído*, traducción castellana de Eva Robladillo, editorial Plena, Barcelona 2011, pag. 12.

⁵⁶ D. Mornet, *Les origines intellectuelles de la Revolution Francais*, Armand Colin, París, 1993, obra reeditada en 1957; Leo Brunschvieg, *Le progrès de la conscience dans la philosophie occidentale*, Presses Universitaires de France, 1953, pág. 248; R.Pomeea, *L'Europe des lumieres, cosmopolitisme et unité europeenne au XVIII siecle*, Stick, París, 1966.

⁵⁷ Armando Cerolo Durán *Estudio Preliminar al volumen. El conservador 1818-1820 de Fracoís-René Chataubriand*, editado y traducido a nuestra lengua por le propio profesor de filosofía y del derecho Armando Cerelo. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2013, Pág. 15- LX. La cita en página XVII. Se trata de un volumen en el que se recogen todos los artículos firmados por Chatubreán, Director editorial de dicho periódico, con las recomendaciones y recordatorios que este pensador sugiere al partido realista, en orden a la adopción de una monarquía constitucional que supiera respetar simultáneamente los logros de la Revolución y el patrimonio contitucional francés que según su criterio encarnaban los borbones y la religión católica.

La Revolución Americana pero sobre todo la Revolución Francesa fue el proceso que provocó el cambio político más importante que se produjo en el continente europeo a finales del siglo XVIII, el siglo de la crítica al extremo de servir de modelo para otros países, en donde se desataron conflictos sociales similares, como réplica a un régimen anacrónico y opresor, como era la monarquía absoluta.

Esta Revolución, en todo caso significaría la emergencia de la burguesía, que adquiere un nuevo papel y que concluye con los privilegios de la nobleza feudal y del estado absolutista, al tiempo que supone la proyección de un nuevo mundo espiritual que en parte conquista la humanidad europea y que toma cuerpo en el espíritu del siglo XIX que desenvuelve y genera profundas oposiciones que desarrollan contrastes y aportaciones siempre renovadas⁵⁸.

Entre las ideas que fundamentaron aquel proceso merecen recordarse las siguientes: el pacto político o contrato social entendido como el umbral de toda sociedad política, la fe en el progreso humano, la mejora de la humanidad a través de la educación, la libertad religiosa, la libertad de palabra, la igualdad –todos los seres humanos son esencialmente iguales–, la idea de que todos los seres humanos son esencialmente iguales y la idea de que el ejercicio del poder político requiere el consentimiento de los ciudadanos. Toda sociedad es y ha sido siempre en parte un estado emocional, y su identidad se articula contextualmente en una moderación específica de sus emociones, a pesar de que las democracias contemporáneas testimonian un desprecio profundo hacia la expresión de las pasiones

⁵⁸ Valter, Goetz, *La estructura espiritual de la época*. Tomo VIII “Historia Universal” Obra colectiva dirigida por este Catedrático de la Universidad de Lipigas con el título “Liberalismo y Nacionalismo” (1848-1890), y codirigida con Alfred Stern Friederich Luckwaldt y Herkenr Heinrich, traducción castellana de Javier María Morente, Editorial Espasa-Alpe. Madrid 1978. Pag. 1-10. Cita en pág 10.

políticas⁵⁹ con todo lo que de equivoco e inestable semánticamente acompaña la idea de pasión⁶⁰.

Tales ideas serían propugnadas por pensadores tan diversos como Rousseau, Diderot, D'Alambert y Voltaire, y tendrían un instrumento privilegiado de difusión a través de la Enciclopedia, hasta el punto que muchos han visto en esa recopilación las bases doctrinales de la Revolución Francesa, no tanto de la violencia que terminó generando pero si de bastantes de las ideas que la incentivaron y asentaron.

Partiendo de estas consideraciones bien puede decirse que la Ilustración no tiene la una doctrina cerrada y tampoco presenta los rasgos de una escuela o una corriente filosófica homogénea, sino que más bien se constituye en una etapa en el desarrollo del pensamiento dominante en Europa, durante los siglos XVII y XVIII. Es más, se podría expresar la idea según la cual la ilustración en sus múltiples variantes suministra el argumentario de lo que terminará siendo el pensamiento hegemónico en Europa durante el periodo que las dos Revoluciones, la inglesa de 1688 y la francesa de 1792.

El sueño de la Ilustración continental en orden a crear un mundo en el que el sufrimiento fuera aminorado y hasta abolido a través de la aplicación creciente de la razón científica a todas las dimensiones de la vida⁶¹ se nutrirá filosóficamente de varios movimientos o corrientes del pensamiento.

⁵⁹ Pedro A. Cruz Sánchez, *Pasión y Objeto político, una teoría de la pasividad*, colección serie general universitaria, ediciones Bellaterra Barcelona 2013. Pág. 11.

⁶⁰ Ivonne Bordeloist *Etimología de las pasiones* traducción castellana, libros del Zarzal, Buenos Aires, 2006, página 83; Philippe Fontaine, *Les Passions* Ed. Ellipse París, 2004. Pág. 11.

⁶¹ Frederick Copleston, *A history of Philosophy*, Image Books, New York 1985. Vol. 6º Pág 35-36.

Destacaremos entre ellas la aportación del pensamiento moderno del siglo XVII que toma cuerpo en una serie de tesis entre las que cabe destacar el Antropocentrismo, el Racionalismo (René Descartes, Blaise Pascal, Nicolas Malebranche, Baruch Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz), el Empirismo (Francis Bacon, John Locke y David Hume), el Materialismo (La Mettrie, D'Holbach), el Hipercriticismo, el Pragmatismo, el Idealismo (George Berkeley e Immanuel Kant), el Cosmopolitismo Universal y el Utilitarismo, este último básicamente con su idea de que en una consideración concluyente acerca de cualquier virtud habría que sostener que toda virtud proviene de la utilidad, de tal manera que el único origen de la justicia es la utilidad pública.

Entendiendo por utilidad el grado en que una decisión conduzca a la mayor felicidad del mayor número posible de personas; no en vano “la naturaleza ha puesto a la humanidad bajo el gobierno de unos soberanos: el dolor y el placer...soberanos que gobiernan todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todo lo que pensamos”⁶². En todo caso no estará de más que la filosofía liberal se asienta sobre la idea de la “prioridad de lo justo sobre el bien”, según la celebrada fórmula John Rawls inspirada sin duda I.Kant⁶³.

La idea fundamental que se destaca de este periodo es entender como la misión por antonomasia de los pensadores es iluminar a una sociedad sumergida en las tinieblas de la ignorancia, la superstición, y la tiranía política; de aquí que en muchos ámbitos al periodo de la Ilustración se le conoce como el Siglo de las Luces.

⁶² David Hume, *And Enquiry concerning the principles of moral* Clarendon Press Oxford, 1945, 1948; Jeremy Bentham. A Fragment of government Blackwell Oxford 1998. C.I Sec 1.

⁶³ John Rawls *A theory of justice* Harvard University Press, Cambridge (Mass-London) 1971; Introducción Générale al Volumen colectivo que bajo el título *Libéraux e communitariens*. Presses Universitaires de France. París, 1997, Pág 25 a 50.

La Ilustración depositará una confianza plena en la razón como instrumento para conocerlo todo. Una razón crítica contra prejuicios, supersticiones y autoridad externa; una razón analítica puesto que puede analizar todas las cosas; una razón empírica, unida a la experiencia; una razón autónoma, libre de toda autoridad; una razón autocrítica capaz de establecer sus limitaciones y una razón secularizado que separa fe y razón.

De aquí la condición indispensable que se atribuye al logro por parte de los seres humanos de su autonomía, hasta el extremo de que queden libres de cualquier tutela. Como principio fundamental de la Ilustración se encuentra la libertad. Es condición indispensable que el hombre logre su autonomía quedando libre de toda tutela. De aquí además libertad para informar, pensar y expresar públicamente sus ideas. La Ilustración supone la liberación del hombre de su incapacidad o de su culpable minoría de edad.

Pese a que el contexto de dignidad humana tenga raíces muy remotas en el tiempo, la filosofía ilustrada atribuye a esta un sentido diferente y una importancia renovada al asumir la célebre idea de I.Kant según la cual el respeto a la dignidad humana requiere que los individuos sean tratados como fines y no como medios e instrumentos para alcanzar un determinado fin. En confluencia con la revisión del concepto de autonomía personal y el derecho al respeto de la vida privada tan reclamado por Kant. Autonomía personal que para muchos intérpretes del liberalismo constituye la clave última de este pensamiento⁶⁴.

⁶⁴ G. Dworkin *The theory and practice of autonomy* Cambridge University Press (Cambridge U.K). 1988; C.McCruden, *Human dignity and judicial interpretation of human right*, en I E.J.I número 19, 2008, Vol. 4º. Pag. 675-674; Ph. Jerrar *L'Esprit des Droits. La philosophie de Loins de Lomms*. Publication des facultes universitaires de Saint Louis, Burssseles, 2007; J. Fierenes, La dignité Humaine comme concept juridique, en "Journal des Tribunaurs" 2002. Pag. 577 y siguientes.

La Ilustración está iluminada a su vez por el racionalismo, entendido como aquella corriente filosófica desarrollada por todo el continente europeo a partir de la obra de Descartes, Espinoza y Leibniz. El racionalismo supone adaptar una actitud de confianza total en el conocimiento racional. El único conocimiento válido sería aquel se obtiene mediante la razón, razón además universal. De este modo se afirma la necesidad de una ciencia universal y necesaria, y se defiende la racionalidad del conocimiento metafísico, de cuyo sueño Immanuel Kant le despertó la obra de David Hume.

El pensamiento ilustrado tendrá como elementos básicos el ideal de la emancipación, la concepción utópica de la realidad y el uso metódico de la crítica. La emancipación no es en si mismo un concepto filosófico sino jurídico, derivado del derecho romano que supone la adquisición legal de la plenitud del derecho para realizar por sí mismo cualesquier actos jurídicos y sociales permitidos por la ley. Es la liberación que implica el rechazo de todo prejuicio y el ejercicio efectivo del propio juicio.

Aunque la idea de la emancipación no es nueva la Ilustración generaliza dicha idea y la convierte en un ideal o modelo que ha de ser aplicado en todas las áreas del saber teórico y práctico. El ideal de la emancipación trata de buscar la máxima felicidad posible en esta vida. Los ilustrados plantearán la emancipación de la política con respecto a la moral. Así surge la idea de que el bien común o más bien, la meta de la vida política es la libertad y la igualdad y la única religión aceptable es la religión civil. En el desarrollo de estas ideas, se llega a la necesidad de que sea el pueblo el que legisle y a la preferencia por la Democracia.

Éstos planteamientos se refuerzan y extreman con Rousseau mediante la hipótesis del contrato social, constituido como una teoría política que explica el origen y propósito del Estado y de los derechos humanos, siendo la esencia de esta teoría que para vivir en sociedad,

los seres humanos acuerdan un contrato social implícito, que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondrían en estado de naturaleza.

Acerca de la naturaleza del nexo existente al que debe responder la vinculación entre gobernantes y gobernados es preciso destacar la temprana y tajante respuesta al respecto que ofreció Jhon Locke, respuesta que estaba llamada a encontrar un eco profundo a partir de su conocimiento: “el gobierno es una delegación moral que depende de la libre aprobación de los gobernados”. Téngase presente en todo caso que el contractualismo moderno, mucho más radical y constructiva que el contractualismo del constitucionalismo liberal⁶⁵, ofrece una solución formalista del origen del poder político gestada por el escotismo y el okhamismo de la baja escolástica, con la pretensión de explicarlo desde el punto de vista de la soberanía⁶⁶.

De este modo, los derechos y deberes de los individuos constituyen las cláusulas del contrato social, en tanto que el Estado se constituye como la entidad creada para hacer cumplir con el contrato. Del mismo modo, los hombres pueden cambiar los términos del contrato si así lo desean; los derechos y deberes no son inmutables o naturales.

El postulado de Rousseau, que da nombre a esta teoría, emplea el lenguaje jurídico propio de las relaciones privadas entre los hombres. A partir de su observación de la sociedad, constituida por entonces por una masa sometida al Rey, discurre acerca del vínculo que existe entre el soberano y los súbditos. Los hombres voluntariamente renuncian a un estado de natural inocencia para

⁶⁵ Dalmació Negro Pavón. *Gobierno y Estado*. Colección Prudencia Iuris. Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y sociales Madrid-Barcelona. 2002. Pág. 20.

⁶⁶ M. Fioravanti. *Constitución de la antigüedad a nuestros días*. Traducción castellana editorial Trotta. Madrid 2001; A. de Muralt *La estructura de la filosofía política moderna*, Traducción castellana, Editorial Ismo. Madrid 2002.

someterse a las reglas de la sociedad, a cambio de beneficios mayores inherentes al intercambio social. Este consentimiento voluntario se materializa a través de un contrato, "el contrato social" en este caso.

Para Rousseau la democracia se convierte en el ideal político, la forma perfecta del gobierno. La única forma de gobierno que cuadra con un estado constituido por la voluntad general. Sólo en el momento de la emancipación política de los pueblos se hace real el ideal democrático. Rousseau conjuga realidad y utopía, emancipación activa de los pueblos y conservación del cuerpo político. Realidad y utopía no sólo son compatibles sino que son complementarias. La fusión de utopía y realidad supone el progreso.

Esta breve reflexión posibilita afirmar que la Ilustración es el periodo de la filosofía moderna en que el ideal de autonomía, propugnado por racionalistas y empiristas, sobre todo en el campo del saber, es propuesto y aplicado de modo generalizado en todos los órdenes de la vida humana.

Este marco filosófico político y jurídico antecede a los dos grandes sucesos históricos que se produjeron a finales del siglo XVIII: la revolución americana y la revolución francesa.

La revolución americana asumiría como logros la declaración de derechos de Virginia de 1776, el reconocimiento de la soberanía nacional, la garantía de la libertad individual y la separación de poderes entendida como un complejo equilibrio institucional.

Los derechos civiles y políticos quedarían reconocidos tal como se concebían por los revolucionarios, influenciados por el contractualismo de Rousseau, como derechos naturales e inalienables, proclamados desde la Declaración de Derechos de Virginia y resumidos en la de Independencia en una lapidaria expresión de Jefferson: "vida, libertad y búsqueda de la felicidad" -Life, liberty and the pursuit of happiness-.

Pierre Rosanvallón, en su contribución al volumen que la revista anual “La pensa politique” dedicara en mayo de 1993 al tratamiento monográfico del tema “situations de la democratie: “L’ancien et le en leuf”, no puede por lo menos que constatar la percepción negativa y el carácter emotivo desfavorable que durante mucho tiempo se dio al término democracia, identificando el uso de este término en la Francia de finales del siglo XVIII como un término obsoleto, hasta el punto que se asociaba a sistema político de la antigua clásica, lo que atribuía al mismo una carga vinculada a etapas superadas o arcaicas o bien a sociedades o culturas exóticas⁶⁷.

Los nuevos conceptos de democracia y republicanismo produjeron una agitación de la jerarquía social tradicional y crearon una nueva ética pública que conformó la esencia de los valores socio-políticos estadounidenses, compartidos con un altísimo nivel de consenso y permanencia más allá de su cumplimiento en la realidad, que describiría Alexis de Tocqueville en su gran obra de 1835 “La democracia en América”.

Entre los principios fundamentales destacaría el igualitarismo ante los orígenes sociales o igualdad de oportunidades, expresada en el “all men are created equal” -"todos los hombres son creados iguales"- de la Declaración de Independencia, el respeto a la libre competencia, la propiedad y la iniciativa privada, la responsabilidad individual y la ética del trabajo, la sujeción de los cargos públicos a un mandato temporal e institucionalmente limitado y a elección popular, la libertad de creencias y separación entre iglesias y Estado y la prensa libre conformándose un ideal para la ciudadanía y planteándose ya la cuestión del esclavismo al que de momento se le daría continuidad en el sur hasta la victoria de la Unión en la Guerra Civil Americana.

⁶⁷ Pierre, Rosavallon, *L’Histoire deu mot democratie a epoque moderne*, en el volumen colectivo d’*mocratie ancie en le neuf*. Hautes etudes, seuil-gallimard. París, mayo de 1993, páginas 11 y 29. La cita en páginas 11 y 12.

No pasarían muchos años cuando en la propia Europa se sufriría una conmoción política sin precedentes, la Revolución Francesa que asumiría en un clima de violencia algunos de los grandes principios que determinarían un modelo de sociedad. Este modelo se resume en los tres principios de la revolución “Libertad, Igualdad, Fraternidad”.

El planteamiento filosófico heredado se resolvía en la famosa “Declaración de los derechos de hombre y del ciudadano”. Aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789, y constituida como uno de los documentos fundamentales de la Revolución francesa (1789-1799).

Esta Declaración define los derechos personales y colectivos como universales. Influenciada por la doctrina de los derechos naturales, los derechos del Hombre se entienden como universales, válidos en todo momento y ocasión al pertenecer a la naturaleza humana. La esclavitud será abolida por la Convención Nacional el 4 de febrero de 1794.

La Declaración sería el prefacio a la Constitución de 1791 y pronto se difundiría en el mundo. La primera traducción americana completa de sus 17 artículos al castellano es obra de Antonio Nariño, publicada en Bogotá en 1793.

Los dos principios más debatidos fueron los primeros, “Libertad e Igualdad” (Artículo primero.- Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos.). (Artículo 4.- La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro). Estos principios tenían como fundamento teórico la filosofía liberal del siglo XVIII y práctico en la primera Constitución liberal de los nuevos Estados Unidos de Norteamérica.

El principio de “Libertad” representa la economía y el libre mercado, es decir, el liberalismo posteriormente también el materialismo; donde el “bien supremo” es la propia libertad y el

mercado. El principio de “Igualdad” representa la política y el Estado de Derecho, pero también el idealismo, y por tanto el “bien supremo” es la igualdad y el Estado de Derecho y la “Fraternidad” representa la religión y sus dioses, o lo que es lo mismo, el espiritualismo, de manera que el “bien supremo” es la fraternidad y Dios.

Finalicemos esta breve exposición introductoria para situarnos en el escenario español en el momento de la invasión francesa, que provoca la llamada Guerra de la Independencia, escenario en el que se producirá la recepción de todos aquellos principios y valores filosóficos políticos y jurídicos en España a través de la Constitución de Cádiz.

Cabe en primer lugar referirse a la Paz de Westfalia. Suele afirmarse que la Paz de Westfalia dio lugar al primer congreso diplomático moderno e inició un nuevo orden en Europa central basado en el concepto de soberanía nacional. Los historiadores asignan una importancia capital a este momento pues en Westfalia se estableció el principio de que la integridad territorial es el fundamento de la existencia de los Estados, frente a la concepción feudal de que territorios y pueblos constituían un patrimonio hereditario. Por esta razón, Westfalia marcó el nacimiento del Estado nación.

Pero la Paz de Westfalia paralelamente supone el final de una España agotada por el esfuerzo de la construcción de un imperio. Todas las energías de España se agotaban, en el ensimismamiento de un proyecto histórico, ante un mundo que empezaba a moverse bajo las ideas de la Ilustración.

El despotismo ilustrado se había consolidado como un concepto político enmarcado dentro de las monarquías absolutas que aun perteneciendo a los sistemas de gobierno del Antiguo Régimen incluían las ideas filosóficas de la Ilustración. Este era el sistema político del despotismo ilustrado que se generaliza en la segunda parte del siglo XVIII en países como Rusia, Austria y España.

Es la época de Federico II el Grande quien negó que la monarquía fuese dada por derecho divino y fue un gran protector de la ciencia y de la cultura, a las que impregnó de influencias francesas, refundando la Academia de Ciencias prusiana, apoyando a escritores y artistas y sancionando la obligatoriedad de la enseñanza primaria y sin embargo, no abolió la servidumbre para no debilitar a la nobleza, que constituía la casta dominante que hacía funcionar eficazmente la administración y el ejército.

Es asimismo la época de José II de Austria, considerado como uno de los representantes del despotismo ilustrado, quien gobernó mostrando interés por las ideas enciclopedistas, intentando modernizar, impulsar y racionalizar el funcionamiento de la administración con un programa de reformas con el objetivo de construir un Estado unitario centralizado con el alemán como lengua administrativa e iniciando una política de liberalización comercial.

Este monarca abolió la servidumbre y las corporaciones al dar garantías a los campesinos sobre la propiedad permitiendo su emancipación y puso fin a las prestaciones de trabajo entre campesinos, sentando las bases de la tolerancia religiosa al poner fin a las persecuciones de ortodoxos y protestantes. Asimismo mejoró y secularizó la educación y se crearon nuevas universidades.

Es finalmente la época de Catalina II de Rusia que convirtió a su país en capaz de competir con sus vecinos europeos en las esferas militar, política y diplomática. La élite de Rusia acabó por convertirse en una de las más cultas, si bien no se produciría la movilidad social hasta la emancipación de los siervos en 1861 y la época de José I de Portugal el gran reformador, representante del despotismo ilustrado en Portugal en el siglo XVIII, que reinó en un período de la historia marcado por la Ilustración, y desempeñó un papel fundamental en el acercamiento de Portugal a la realidad económica y social de los

países del Norte de Europa, más dinámicos que Portugal, iniciando grandes reformas administrativas, económicas y sociales.

Estos monarcas ilustrados llevaron a cabo en sus países diversas reformas: centralizaron la administración, unificaron la legislación y las instituciones de todo el territorio; modernizaron la economía, fomentando la agricultura, la industria y el comercio; mejoraron las condiciones de vida del tercer estado; intervinieron en los asuntos de la iglesia, permitiendo la venta de algunos de sus bienes o expulsaron a las ordenes religiosas que se oponían a sus principios, como los que jesuitas; y fomentar una instrucción pública, las ciencias y las artes.

El prototipo del monarca ilustrado en España sería Carlos III, entronizado como rey de España en 1759, en el que pueden considerarse tres etapas: la primera llevada a cabo por personajes como el Marqués de Esquilache, poco conocedor de la realidad hispana, quien plantea reformas, algunas de las cuales resultan molestas para los privilegiados.

Carlos III llevo al Marqués de Esquilache consigo nombrándole primero al frente de la Hacienda Real, de donde pasó pronto a ocupar la Secretaría de Guerra en 1763. Esquilache tuvo la absoluta confianza de Carlos III para llevar a cabo las reformas ilustradas, convirtiéndose en la mano derecha del rey y, junto al Marqués de la Ensenada inició cambios encaminados a la modernización del país. Sin embargo, contó con la manifiesta hostilidad de la mayoría de la nobleza presente en la Corte, que le vio como un extranjero empeñado en aplicar sin medida el despotismo ilustrado.

La población española no aceptó sus medidas de control, que concernían hasta la vestimenta, para evitar que se ocultasen armas de fuego bajo capas o faldones, detonante formal del conocido como Motín de Esquilache. También tendría en frente a la Iglesia, a causa de su política anticlerical, oponiéndose esta a las medidas que la

obligaban a la no confiscación libre de bienes sin antes recurrir al Estado y a la obligación de pagar tributo por los bienes que tuviera en desuso.

El resultado sería los motines de 1766 cuya consecuencia fue el alejamiento de Esquilache y el nombramiento de Aranda para la presidencia de Castilla. Fue entonces cuando se constituyó como figura clave Pedro Rodríguez de Campomanes. Tras los acontecimientos políticos derivados del motín de Esquilache, el Conde de Aranda, encargó a Campomanes la elaboración de un informe para depurar responsabilidades, que recayeron en los jesuitas, que fueron expulsados del país en abril de 1767.

En 1786 Campomanes fue oficialmente nombrado Presidente del Real Consejo de Castilla, y en 1789 abrió las Cortes españolas. Tras la subida al trono de Carlos IV, Campomanes perdería influencia en los asuntos de Estado, sobre todo debido al favoritismo del nuevo soberano por el conde de Floridablanca quien destituyó a Campomanes de todos sus cargos en 1791, si bien conservó su puesto en el Consejo de Estado. Campomanes sería siempre señalado como afrancesado lo que le impidió recuperarse políticamente.

La España de Carlos III era la España de la monarquía absoluta o de lo que los historiadores conocen como déspotas ilustrados. En el rey se concentran todos los poderes del Estado. El monarca era legislador, abogado y juez.

Ciertamente que Carlos III actúa como un rey ilustrado y posibilita una recuperación exterior e interior de un país en crisis al que la invasión francesa cercenará colocándole en una situación calificada por muchos historiadores como revolucionaria.

Este conflicto se desarrollaría en plena crisis del Antiguo Régimen y sobre un complejo trasfondo de profundos cambios sociales y políticos impulsados por el surgimiento de la identidad nacional española y la influencia en el campo de los «patriotas» de

algunos de los ideales nacidos de la Ilustración y la Revolución francesa, paradójicamente difundidos por la élite de los afrancesados.

Planteado este trasfondo que nos permite la identificación de la comprensión histórica de las doctrinas del pasado, no puedo aplazar más el reconocimiento de lo que constituye el eje del discurso sobre el que pivota el conjunto de este estudio, la idea-fuerza conductora de la presente investigación.

Se ha repetido hasta el *ritorneello* que en la reflexión constitucional y en la comprensión de las constituciones de los distintos estados, ha sido una constante partir de sus orígenes y atender a su respectiva evolución, constante que ha mantenido su vigencia incluso cuando se ha ido afirmando el carácter normativo de las constituciones –su condición de derecho positivo, de parte del orden jurídico con la nota de la fundamentabilidad y la supremacía, y con su proyección sobre el orden jurídico en su conjunto con una intensidad desconocida en el pasado toda vez que estructuran al mismo al contener normas sobre el sistema de fuentes y al determinar el contenido o el sentido del ordenamiento jurídico (constitucionalización, tanto en sentido formal como en sentido material).

No han faltado voces que concluyeran que se ha debilitado hoy el papel central que tenía el análisis y la investigación del origen y de la evolución de la historia constitucional. Con todo, entiendo que no ha perdido utilidad, y hasta se debe considerar imperativo para una correcta interpretación de la constitución el conocimiento de la evolución y sus cambios en el tiempo. Así lo sostiene quien fuera presidente del tribunal constitucional español y catedrático de derecho constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, Pedro Cruz Villalón, al recordar que la regla de interpretación histórica o genética del texto constitucional continua demostrando su utilidad o incluso su carácter imprescindible para los interpretes de la constitución;

circunstancia a la que ha de sumarse el hecho de que la evolución de la constitución, su contraste con el tiempo, “nos permite complementar nuestro conocimiento de esa constitución como el orden fundamental *realmente existente* en una comunidad política⁶⁸”.

Una investigación que versa sobre el crítico vacío de poder que se cernió sobre España, la emergencia del universo conceptual de liberalismo⁶⁹ y la mutación institucional que pudieron contemplar conmovidos los españoles de comienzos del Ochocientos –cuyas circunstancias les colocaron en una situación, además de novedosa excepcional, que en lo mucho que tuvo de experiencia política se encontraba cargada de interés⁷⁰. Una investigación que no puede obviar el tratamiento relativo al decurso de las ideas políticas en nuestra patria⁷¹ con la apertura de un auténtico espacio político

⁶⁸ Pedro Cruz Villalón, *Rasgos básicos del Derecho Constitucional de los estados en perspectiva comparada*, en el volumen de los profesores Armin von Bogdandy, Pedro Cruz Villalón y Peter M. Huber, *El derecho constitucional en el espacio jurídico europeo*, Colección *Ius publicum europaeum*, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, págs. 15-68, la cita en página 17.

⁶⁹ Carmen García Monerris, *El debate preconstitucional: Historia y política en el primer liberalismo español (Algunas consideraciones)*, en el volumen colectivo editado por Emilio La Parra López (n.1949) y Germán Ramírez Aledon (n.1949), Biblioteca Valenciana, Valencia, 2003, págs. 39-67; Javier Fernández Sebastián, *La Aurora de la libertad. Los primeros liberalismos en el mundo Iberoamericano*, Ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2012.

⁷⁰ José Antonio Maravall Casesnoves (1911-1986), *Carlos V y el pensamiento político del Renacimiento*, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1960, Parte primera, Capítulo primero: *Medievalismo y Renacimiento*, págs.7-36, la cita en página 9. Hay reedición de esta monografía, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1999; Id, *La ilustración en España*, en la revista *Arbor* (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid), número 114, 1955, págs. 345-349; Francisco Javier Caspístegui, *José Antonio Maravall entre el medievalismo cultural y el historiográfico*, en *Revista de Historia Jerónimo Zurita*, número 82, 2007, págs. 93-128.

⁷¹ Eduardo Aunós Pérez (1894-1967), *Itinerario histórico de la España contemporánea (1808-1936)*, Editorial Bosch, Barcelona, 1940; Javier Fernández Sebastián, *Cádiz y el primer liberalismo español. Simposio historiográfico y reflexiones sobre el bicentenario*, en J. Álvarez Junto y J. Moreno Luzón (editores), *La Constitución de Cádiz: historiografía y conmemoración. Homenaje a Francisco Tomás y Valiente*, Madrid, 2006; *Liberales y liberalismo en España 1810-1850. La forja de un concepto y la creación de una identidad política*, en

autónomo⁷², en la etapa que se abre con el fin del periodo reformista de los Borbones ilustrados o novatores (Fernando VII y Carlos III), y que se extiende entre los años 1808 y 1814 (“La guerra del Francés”⁷³), la guerra de la Independencia con su carácter de guerra total⁷⁴ –antesala de las múltiples querellas hispano-españolas suscitadas a lo largo del siglo XIX⁷⁵– y la revolución política que simultáneamente se desarrolló en Cádiz y la Isla de León⁷⁶ a partir del

Revista de Estudios Políticos, Nueva Época (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid), núm. 134, 2001, págs. 125-176; Id, con J.Chassin, *L'avènement de l'opinion publique. Europe et Amérique XVIIIème-XIXsiècles*, Ed. Lharmattam, Paris, 2006.

⁷² Jean Philippe Luis, *Cuestiones sobre el origen de la modernidad política en España*, en *Revista de Historia Jerónimo Zurita* (Zaragoza), número 84, 2009, págs. 247-278; Id, (coordinador), *La guerre d'indépendance espagnole et le libéralisme au XIXe siècle*, collection de la casa de Velázquez (Madrid), núm. 118-2010.

⁷³ Fernando Duran López y Diego Caro Cancela (editores), *Experiencia y memoria de la revolución española (1808-1814)*, Universidad de Cádiz, Cádiz, 2011; Antoni Moliner Prada, *La Catalunya resistent a la dominació francesa, 1808-1812*, Edicions 62, Barcelona, 1989; Id, *Catalunya contra Napoleó. La guerra del Francés, 1808-1814*, Pagès Editors, Lleida, 2007; Id, (editor), *La guerra de la Independencia en España*, Ed Nabla, Barcelona, 2007 .

⁷⁴ Claude Morange, *Sur la révolution de 1808-1814. Pour une vision dynamique et didactique de processus*, en el volumen *Actores de la guerra de Independencia*, volumen coordinado por Emilio La Parra López, *Dossier des Mélanges de la Casa de Velázquez*, Madrid, número 38,1, 2008, págs. 155-172.

⁷⁵ Luís Sánchez Agesta (1914-1997), *Sentido sociológico y político del siglo XIX*, en *Revista de Estudios Políticos* (Instituto de Estudios Políticos, Madrid), número 75, mayo-junio 1954, págs. 23-43; Id, *Entorno al concepto de España*, colección *O crece o muere*, volumen 5, Ed. Ateneo, Madrid, 1952, Id, *Historia del constitucionalismo español 1808-1936*, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1955; Vicente Cacho Viu (1929-1997), *Los supuestos del contemporaneísmo en la historiografía de postguerra*, en *Cuadernos de historia contemporánea*, número 9, 1958; voz, Sánchez Agesta, Luís, en *Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos (1840-19980)*, Editorial Akal, Madrid, 2002, págs. 563-564.

⁷⁶ Jordi Canal, *Guerra civil y contrarrevolución en la Europa del Sur en el siglo XIX. Reflexiones a partir del caso español*, en la revista *Ayer*, número 55, 2004, págs. 37,60, la cita en página 50; Jean Clément Martin (editor), *La contre-révolution en Europe XVIII-XIX, siècles. Realités politiques et sociales resonances culturelles et idéologiques*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2001; Carlos Garriga y Marta Lorente, *Cádiz, 1812. La constitución jurisdiccional*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007.

veinticuatro de septiembre de 1810 con la reunión de las Cortes Generales y Extraordinarias⁷⁷.

Persuadidos como estamos de que en 1808 hubiera sido muy difícil, acaso hasta imposible, que el movimiento liberal y sus bases teóricas hubieran encontrado la acogida y el eco que de hecho tuvieron en su empeño por constituir un nuevo régimen y promover la transformación de la sociedad⁷⁸, de no haberse producido la Guerra⁷⁹. La guerra fue una, y no de las menores, circunstancias ocasionales cuyo conjunto favoreció la creación de una coyuntura favorable para que un amplio sector de la opinión nacional se identificara y comprometiera en la lucha por el poder con el objeto de llevar a cabo una radical transformación de los supuestos que servían de base a la España del Antiguo Régimen⁸⁰. Siempre en el entendimiento de que el término revolución cobró por aquél entonces entre nosotros y para la generación de 1808, un sentido matizadamente diverso del que tuviera en la Francia de 1789, ya que tal vez predominó un significado de

⁷⁷ Conde de Toreno, *Historia del levantamiento, guerra y revolución de España*, publicada entre 1835 y 1837, remitimos a la edición de Leopoldo Augusto de Cueto, dentro de la Biblioteca de autores españoles, volumen LXIV, Editorial Atlas, Madrid, 1953.

⁷⁸ Miguel Artola Gallego (n.1923), *La burguesía revolucionaria (1808-1874)*, primera edición de 1973, Ediciones Alfaguara, Alianza Editorial, Madrid 1981, Capítulo I, *Guerra y Revolución*, la cita en pág. 29; Id, *La España de Fernando VII: la guerra de la independencia y los orígenes del régimen constitucional*, España-Calpe, Madrid, 1999; Id, *Los afrancesados*, Madrid, 1989; Id, *El modelo constitucional español del siglo XIX*, Fundación Juan March, Madrid, 1979; Id, *Los orígenes de la España contemporánea*, dos tomos, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1975; Id, *Partidos y programas políticos (1808-1936)*, tomo I, Aguilar S.A. de ediciones, Madrid, 1977; Id, *Las cortes de Cádiz*, Marcial Pons Ediciones de Historia, Madrid, 2003; Id, *Constitucionalismo en la historia*, Ed. Crítica, Barcelona, 2005; Id, *La guerra de la independencia*, Espasa Calpe, Madrid, 2008.

⁷⁹ Celso Jesus Almuiña Fernández, *Formas de resistencia frente a los franceses. El concepto de guerra total*, colaboración al volumen colectivo *Repercusiones de la Revolución francesa en España*, Universidad Complutense, Madrid, 1990, págs. 453-471.

⁸⁰ Miguel Artola Gallego, *La burguesía revolucionaria...*, obra citada, edición citada, Capítulo I: *Guerra y revolución*, págs.. 7-57, la cita en pág. 7.

revolución que la entendía como regeneración de la nación frente al despotismo y la ocupación extranjera, en aras a la consecución a la libertad política y civil.

Puesto que el descubrimiento de nuevos hechos pasados puede obligarnos a retrotraer el origen de una institución o de un fenómeno, se impone una especial cautela en la tarea de fijar las fechas que pautan el origen de un fenómeno histórico, de una teoría filosófica o de una corriente de ideas⁸¹, en este caso creo que podemos arriesgarnos a levantar acta del momento de despegue de este periodo tan excepcional como decisivo, momento en que se inicia la Gran contienda que terminó por identificarse como la Guerra de la Independencia, en la que España sería el primer país de Europa en dar una contundente respuesta popular armada a la invasión napoleónica, y cuyos pródromos inmediatos comparecen en dos momentos: en primer lugar, con la guerra de 1793-1795 contra la República francesa⁸², y en segundo lugar con ocasión del abierto choque que se había producido con anterioridad a la propia guerra de la Independencia entre dos bandos radicalmente enfrentados ya en el reinado de Carlos V a causa de la deriva despótica y patrimonial de la monarquía⁸³: el de los partidarios del favorito Manuel Godoy (1767-

⁸¹ Juan José García Norro, *Cuando la naturaleza se vuelve historia, el lobo se convierte en relato*, en el volumen colectivo editado por Juan Arana, *Falsos saberes. La suplantación del conocimiento en la cultura contemporánea*, Colección Fronteras, Editorial Biblioteca Nueva, Grupo Editorial siglo veintiuno, Madrid, 2013, págs. 53-64, la cita en página 53.

⁸² Jean Pierre Aymes, *La guerra de la independencia (1808-1814): calas y enseñanzas*, Madrid, 2009; *La guerra de España contra la revolución francesa (1793-1795)*, Instituto de Cultura Juan Gil Albert, Alicante, 1991, en particular págs. 373 y siguientes; Ronald Fraser (1930-2012), *La maldita guerra de España: historia social de la guerra de la independencia*, Ed. Crítica, Barcelona, 2006.

⁸³ Emilio La Parra López (n.1949), *Manuel Godoy: la aventura del poder*, Tusquets Ed, Barcelona, 2002; Id, *La alianza de Godoy con los Revolucionarios, España y Francia a finales del siglo XVIII*, Colección Monografías, Consejo superior de investigaciones científicas, Madrid, 1992; Emilio la Parra y M.A.

1851), príncipe de la Paz, y el de quienes en la Ilustración tardía se identificaban con quién era entonces príncipe de Asturias, el popular – bien pronto dejaría de serlo- hijo primogénito de Carlos IV y María Luisa de Parma, el futuro Fernando VII- (1784-1833), bando que orquestaría toda una amplia campaña publicitaria contra Godoy con el objeto de desacreditarlo y provocar su caída, y que tras varias intentonas (conspiración del Escorial y Motín de Aranjuez) lograrían apartarle definitivamente del poder-.

Situación en la que la esfera de la libertad personal adquiere una enorme dilatación que resultaría imposible ya de limitar⁸⁴. Algunos intérpretes han querido ver en este momento el inicio de todo un empeño dirigido a identificar España con la libertad del conjunto de sus ciudadanos y a concienciar en la necesidad de garantizar el ejercicio de los derechos individuales (libertad, igualdad, propiedad) aun a pesar de que la ciudadanía fue todavía entonces un concepto eminentemente polémico, condición que mantendría a lo largo de todo el siglo XIX⁸⁵, pese a que terminaría universalizándose la distinción entre español y ciudadano de la Constitución de Cádiz, y aun cuando con la sacralización de la nación y la relegación de hecho del individuo se favoreció un engañoso intento de construir, o en su caso identificar una nueva unanimidad del cuerpo social. En medio, eso si,

Jiménez (coordinadores), *Manuel Godoy y la Ilustración*, Jornadas de estudio, Cáceres, 2001.

⁸⁴ Walter Goetz, *Las bases espirituales de la época*, en el volumen, *La revolución francesa, Napoleón y la Restauración (1789-1848)*, de Alfred Stern, Franzschnabel, Oskar Walzel, Heinrich Herkner y Friedrich Lukwaldt, versión española de Manuel García Morente, Tomo VII, de la *Historia universal* dirigida por Walter Goetz, Espasa Calpe, Madrid, 1975, págs. XV-XXIII.

⁸⁵ Manuel Pérez Ledesma (coordinador), *Las cortes de Cádiz y la sociedad española*, en *Ayer*, núm. 1, 1991, págs. 167-206; Id, *De súbditos a ciudadanos: una historia de la ciudadanía en España*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007; Miguel Artola y Manuel Pérez Ledesma, *Contemporánea: la historia desde 1776*, Alianza Editorial, Madrid, 2005.

de una situación en la que los acontecimientos se aceleraron, y casi siempre fueron por delante de las previsiones más aventuradas⁸⁶.

Reconozco que todo el argumentario que sigue a estas líneas no tiene otro propósito sino sostener que resulta posible identificar en ese periodo excepcional en donde se produjeron cambios muy radicales, toda una serie más o menos precisa de ideas, de ideales operantes y de valores rectores del pensamiento, así como todo un conjunto de relatos de origen, de modelos teóricos y esquemas conceptuales fundamentales –entendidos como instrumentos para la comprensión del mundo⁸⁷ - de creencias, principios y fundamentos históricos, filosófico-jurídicos y políticos generados y desarrollados en gran medida con azarasas vicisitudes, en el curso de los siglos XVII y XVIII.

Principios dotados de extrema potencia y plasticidad y que, por ello mismo desmentían la jocosa afirmación que sobre los principios expresara el mismísimo Napoleón cuando dijera: “Principens est bien, cela n’engage point⁸⁸” estaban llamados a transformar⁸⁹ la faz del

⁸⁶ Francisco Pérez Gutiérrez, *Renán en España. Religión, ética y política*, Colección Perfiles, Editorial Taurus, Altea-Taurus-Alfaguara, Madrid, 1998.

⁸⁷ Norberto Bobbio, *Il modello giusnaturalistico*, en *Rivista Internazionale di Filosofia del diritto*, volumen L, número 4 (Dott. Antonio Giuffrè Editore, Milano), 1973, págs. 603-622, recogida en el volumen colectivo, *La formazione storica del diritto moderno in Europa. Atti del Terzo Congresso internazionale della società italiana di storia del diritto*, Leo S. Olschki Editore, Firenze, 1977, volumen I, págs. 73-93, (traducción al castellano, *El modelo iusnaturalista*, en el volumen antológico de los profesores Norberto Bobbio y Michelangelo Bovero, *Origen y fundamentos del poder político*, Editorial Grijalbo, México, 1984).

⁸⁸ Roberto Calasso, *La rovina di kasch gliadelphi*, Biblioteca Adelphi Milano, 1983, edición posterior 1984, págs. 29-30.

⁸⁹ Dankwart Alexander Rustow (1924-1994), *El estudio del liderismo*, en el volumen colectivo editado por este profesor de Ciencia Política y Sociología de las Universidades de Columbia y Princeton, *Filósofos y estadistas. Estudios sobre el liderismo*, traducción al castellano a cargo de Ernestina de Champurcin, del original en inglés, *Philosophers and Kings. Studies in Leadership (The American Academy of Arts and Sciences*, George Braziller, New York, 1970), Biblioteca de Psicología y Psicoanálisis, Fondo de cultura económica, México-Madrid-Buenos Aires, 1972, págs. 9-48, la cita en página 11.

mundo, a prefigurar la sociedad del futuro y a convertirse en fuerza conformadora de la vida social⁹⁰, y a generar todo un auténtico conglomerado de imágenes y representaciones que, de hecho, configuran en gran medida nuestra contemporánea cultura histórica y que remiten al *bloc des idées incontestables* de que nos hablara desde la teoría de la institución el decano Maurice Hauriou (1851-1929)⁹¹.

Es conveniente tener presente que la naturaleza del estado al decir de A.D.Lindsay depende de los ideales operantes que tiene la sociedad y que son producto de una cultura específica. Así el estado democrático moderno es en gran parte el resultado del estado absolutista que terminó acogiendo en parte los principios democráticos expresados en la Inglaterra del siglo XVII, que entraron en juego en las colonias británicas de Norteamérica en el XVIII y que suministraron el argumentario de una parte importante de la revolución francesa. Se trataría de un tipo de estado nacido en el siglo XIX y arraigado a la Europa Occidental, América del Norte y los dominios británicos, en gran parte por obra de los cambios revolucionarios que concluyeron con la monarquía absolutista de los siglos XVI, XVII y primera mitad del XVIII⁹².

A tal extremo se puede sostener estas tesis que, cuando en la segunda mitad del siglo XX se despertó el interés de los historiadores

⁹⁰ Hans Welzel (1904-1977), *Introducción a la Filosofía del derecho. Derecho natural y Justicia material*, traducción al castellano a cargo de quien fuera catedrático de la Universidad de la Laguna Felipe Eduardo González Vicen del original en alemán *Naturrecht und materiale Gerechtigkeit* (primera edición 1951), cuarta edición, Vandenhoeck und Ruprecht, Gottingen, 1962(hay reimpresión de 1980), Biblioteca jurídica Aguilar, Aguilar S.A de Ediciones, Madrid, 1957, se cita por la tercer tercera reimpresión de 1979, pág. 170, la primera, de 1957 se publicó con el título *Derecho natural y justicia material*.

⁹¹ Klaus Füssmann, Theo Grütter y Jörn Rusen(n.1938)(editores), *Historische Faszination Geschichtskultur heute*, Böhlau, Keuler-Weimar-Wenen, 1994; Jörn Rusen, *Geschichte im Kulturprozess Böhlau*, Köln, 2002.

⁹² A.D. Lindsay, *El estado democrático moderno*, versión española de Vicente Herrero de la edición original en inglés (1943), Sección de Obras de ciencia Política, Fondo de Cultura Económica, México, 1945, págs. 7-25.

por el estudio del conflicto que iniciara la centuria española del XIX - emprendiendo así el camino a lo que casi se consideraba como *terra ignota* del mundo contemporáneo-, esta circunstancia ofreció una vía expedita para lo que se ha dado en llamar la refundación/normalización historiográfica de la historia contemporánea académica en nuestra patria⁹³, en el escenario de la cultura histórica propia del franquismo –refundación/renovación en la que le correspondería un papel pionero a José María Jover Zamora quien con su *Conciencia burguesa y conciencia obrera en la España contemporánea* (Ateneo, Madrid, 1952) y *La guerra de la independencia española en el ámbito de las guerras europeas de Liberación 1808-1814*(1958)⁹⁴ facilitó el proceso de renovación historiográfica⁹⁵, de metamorfosis o de conversión en el seno de la

⁹³ Jesús Pabón y Suárez de Urbina, *Días de ayer. Historias e historiadores contemporáneos*, Editorial Alpha, Barcelona, 1963; Id, *Las ideas y el sistema napoleónicos*, Institutos de Estudios Políticos, Madrid, 1954 (hay edición posterior al cuidado de Carlos Seco Serrano, Urgoiti Editores, Pamplona 2003: Miguel Ángel Marín Gelabert, *La fatiga de una generación. Jaume Vicens Vives y su Historia crítica de la vida y reinado de Fernando II de Aragón*, estudio que constituye el Prólogo a la edición del volumen de Jaume Vicens Vives, *Historia crítica de la vida y reinado de Fernando II de Aragón*, coeditado por las Cortes de Aragón y la Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2006, págs. XLIX-LXII; Id, *Los historiadores españoles en el franquismo, 1948-1975. La historia local al servicio de la patria*, coeditado por Prensas Universitarias de Zaragoza y la Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2004, págs. 41 y siguientes; Id, *Ausente no quiere decir inexistente: la responsabilidad en el pasado y en el presente de la historiografía española*, en Alcores, *Revista de historia Contemporánea*, Volumen I, 2006, págs.. 13-15; Id, *Esdevenir Vicens*, presentación de la redición de la tesis doctoral de Jaume Vicens Vives, *Ferran II y la ciutat de Barcelona*, Editorial Vicens Vives, Barcelona 2010; Id, *A través de la muralla. Jaume Vicens Vives y la modernización del discurso histórico*, en la redición de la obra de Jaime Vicens Vives, *Aproximación a la historia de España*, Editorial Vicens Vives, Barlona, 2010; Ignacio Peiró Martí, *La Guerra de la Independencia y sus conmemoraciones (1908,1958,2008). Un estudio sobre las políticas del pasado*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2008.

⁹⁴ En el volumen colectivo, *La guerra de la independencia española y los sitios de Zaragoza*, Universidad de Zaragoza, 1948, págs. 41-165.

⁹⁵ Marc Baldó, *Laudatio academica del doctor José María Jover Zamora*, pronunciada en el acto de investidura de este último como doctor Honoris Causa de la Universidad de Valencia, recogida en el volumen ya citado de José María Jover Zamora, *Historia y Civilización. Escritos seleccionados*, págs. 15-20, la

comunidad de historiadores españoles: “la temática de la Guerra de la Independencia empezó a ser estudiada por un grupo de investigadores universitarios que proyectaban su metamorfosis contemporaneista”⁹⁶ Se confirmaría así en que importante medida la política del conocimiento si bien comporta la intervención del estado, al tratarse de un tema que desborda la relación entre investigación y gobierno, afecta al microcosmo académico⁹⁷.

España fue, al inicio del Ochocientos, con la súbita ausencia del monarca y la desaparición del poder constituido –tras el motín de Aranjuez desde la noche del diecisiete a la tarde el diecinueve de marzo de 1808 y tras las abdicaciones de Bayona, con la capitulación de los monarcas y de los infantes -, al igual que lo fueron entonces Italia, Portugal y otros muchos países europeos, si bien en circunstancias peculiares, y con contornos móviles cada uno de ellos, un excepcional laboratorio-observatorio de la modernidad tardía y de sus mutaciones políticas, al ponerse en circulación, en el ámbito de su espacio público, toda una serie de nuevas categorías desconocidas y de inéditas contraposiciones ⁹⁸, de *mentalités* –sistemas de

cita en pág. 19: “en 1961 comenzó a publicar trabajos sobre historiografía reciente; en 1963 forjó un proyecto que tenía como objeto –por decirlo con sus propias palabras- dar razón de la historia del pueblo español y de sus avatares durante el largo trecho de los siglos XIX y XX. Este proyecto es la culminación del proceso de renovación historiográfica de Jover que desarrolló durante más de 25 años”.

⁹⁶ Ignacio Peiró Martín, *Días de ayer de la historiografía española. La Guerra de la Independencia y la conversión liberal de los historiadores en el franquismo*, en el volumen colectivo editado por Pedro Rújula (n.1965) y Jordi Canal (n.1964), *Guerra de ideas. Política y Cultura en la Guerra de Independencia*, volumen coeditado por la institución Fernando el Católico y Marcial Pons, ediciones de historia, Zaragoza-Madrid, 2012, págs. 445-479, la cita en pág. 446.

⁹⁷ C.A. Bayly, *Empire and information. Intelligence Gathering and social communication*, en Francis M. Cornford (1879-1943), *Microcosmographia Academica: Being a guide for the Young academic politician*, Cambridge, 1908.

⁹⁸ Friedrich Meinecke (1862-1954), *La idea de razón de Estado en la Edad Moderna*, traducción al castellano a cargo del profesor Felipe Eduardo González Vicen, del original en lengua alemana *Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte*, R.Oldenbourg Verlag -München- Berlín, 1924, (hay edición en Id,

representaciones y de comprensión de la realidad y del mundo social portadoras de normas y valores⁹⁹ - así como todo un conjunto de prácticas que carecían de precedentes.

Cobra aquí una especial relevancia la historia comparada, que en puridad no es una variedad particular de historia, ni un método de abordaje de la misma, sino una historia cada vez más viva y prometedora, tal y como muestra la monografía de R.Palmer, *La edad de la revolución democrática en Europa y en América 1760-1800*, a la que se le atribuye la condición de clásico de la historia comparada y en la que se hace uso del razonamiento histórico por analogía, que suministra explicaciones del sentido o de las causas de los acontecimientos del mundo histórico¹⁰⁰.

En suma, lo que las Cortes de Cádiz van a plantear es ante todo el desmantelamiento del Antiguo Régimen, o lo que es lo mismo el desmantelamiento de las estructuras económicas sociales. Ante todo la constitución de 1812 va a recoger todo un legado recogido por los grandes pensadores y filósofos de la época moderna, va a reconocer por primera vez la libertad de imprenta y las libertades políticas, va a proclamar la igualdad jurídica de todos los españoles, la inviolabilidad del domicilio, las garantías penales y procesales, va a establecer el principio de que la soberanía reside en la nación, constituida por

Werke, volumen I con introducción de W.Hofer et Alii, R.Oldenbourg Verlag, Mülchen, 1957; tercera edición, 1963; cuarta 1976; con *Estudio Preliminar* de Luís Díez del Corral, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1944, la cita en pág. 330 (hay tercera edición en Centro de Estudios políticos y constitucionales, Madrid, 1999).

⁹⁹ Serge Bernstein, *Les cultures politiques en France*, Ed. Seuil, París, 1999, pág.9; Pascal Ory y Jean François Sirinelli, *Los intelectuales en Francia. Del caso Dreyfus a nuestros días*, Universitat de València, València 2003, pág. 21.

¹⁰⁰ Th.Schieder, *Geschichte als Wissenschaft*, Oldenbourg Verlag, München, 1988, págs. 205-219, Erich Rothacker, *Die vergleichende Methode in der Geisteswissenschaften*, en *Zeitschrift für Vergleichend Rechtswissenschaft*, núm. 60, 1957, págs. 13-33; Paul Veyne, *Como se escribe la historia*, obra citada, edición citada, traducción citada, Capítulo VII, *Teorías, tipos, conjeturas*, págs.153-181.

ciudadanos libres e iguales construyendo un mundo radicalmente nuevo, y va a consagrarse la división de poderes y limitar la autoridad real.

Asimismo la Constitución de Cádiz va a promulgar el derecho a la educación y la igualdad de los ciudadanos ante las cargas impositivas y en alguna medida también va a racionalizar las relaciones entre la Iglesia y el Estado privando a la iglesia de algunos privilegios como la censura previa de las publicaciones, aboliendo la Inquisición y estableciendo los primeros decretos desamortizadores.

El tratamiento histórico y jurídico de estos hechos excepcionales que transformaron la España contemporánea no puede realizarse sin poner de manifiesto que aquellas decisiones no fueron sino la recepción de las ideas y de los principios acuñados por la filosofía de su tiempo, no fueron sino una consecuencia de un gran movimiento intelectual representado por filósofos que analizaban y criticaban los principales problemas en su lucha por el logro de transformaciones y cambios radicales, criticando la monarquía absoluta y la desigualdad social, la intolerancia religiosa y la censura para las manifestaciones intelectuales.

Los constituyentes de Cádiz y fundamentalmente los liberales de Cádiz, no fueron sino los herederos de este movimiento filosófico, político y social de la Europa del siglo XVIII que pugnaba por el uso de la razón, la ciencia y la cultura para mejorar la sociedad y hacer una vida más próspera y feliz para todos los seres humanos.

Aquellos hombres singulares en el marco de una verdadera conmoción constituida por la invasión francesa y la Guerra de la Independencia hicieron suyos los principios de la Ilustración, como el de igualdad, libertad y fraternidad y se convirtieron en fuertemente creyentes en el principio de Igualdad, que proclamaba que todos los seres humanos eran iguales ante la ley y que no había diferencias por títulos de nobleza o la religión que se profesara, seguros de que podía

realizarse un cambio legislativo que superase aquella idea anterior de que la desigualdad provenía de un “orden natural” que no podía ser cambiado.

En pocas materias se ha realizado tal profusión de escritos como en este tema que acaba de cumplir su bicentenario, las Cortes de Cádiz de 1812.

Este trabajo me ha permitido por tanto acercarme a un hecho histórico en tiempo cercano a su conmemoración, si bien nuestra aportación pretende transcender a su interés historiográfico, político y jurídico. Por todo ello tratamos de resaltar un esfuerzo de aproximación que creo que sigue siendo de gran interés y que permite hermanar una vez más el pensamiento filosófico con su traslación al mundo real de una época histórica, traslación que generaría una enorme transformación jurídica y política que ha llegado hasta nuestros días.

CAPITULO I

LOS FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS, JURÍDICOS Y POLÍTICOS DE LA TRASFORMACIÓN DEL ANTIGUO RÉGIMEN Y SU LEGADO AL ORDEN CONSTITUCIONAL.

CAPITULO I: LOS FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS, JURÍDICOS Y POLÍTICOS DE LA TRASFORMACIÓN DEL ANTIGUO RÉGIMEN Y SU LEGADO AL ORDEN CONSTITUCIONAL.

La Constitución de Cádiz de 1812 había de convertirse en el hito democrático de la primera mitad el siglo XIX que trasladaría su influencia a las Constituciones Europeas y Americanas de la Época Contemporánea, impactando en los orígenes constitucionales y parlamentarios de una gran parte de los Estados.

No puede dejarse de considerar que los sucesos que enmarcan el proceso revolucionario español en el que se genera la Constitución de Cádiz de 1812, aparecen enormemente vinculados a las ideas que transformaron el Antiguo Régimen y sobre todo a las dos grandes revoluciones del mundo contemporáneo. Es por ello por lo que nos parece de excepcional importancia realizar en un primer capítulo un breve pasaje por el pensamiento político moderno y fundamentalmente por el pensamiento humanista y renacentista que supone la renovación de las ideas en el pensamiento político de la época moderna y asimismo por el pensamiento de la Ilustración que trasciende a la filosofía política contemporánea

Con respecto a los orígenes de las ideas que ilustrarán los albores del constitucionalismo contemporáneo habremos de considerar que el humanismo cristiano, y la propia secularización son presentados como un movimiento en contra de la ignorancia y el misticismo, a los que había que acabar por medio de la difusión de las ciencias y el empleo de la razón. Este movimiento que tuvo muchos exponentes cristianos en sus inicios como Blaise Pascal, Gottfried Leibniz, Galileo Galilei pero también críticos de la religión proponiendo tratados que establecían los límites entre lo que la religiosidad impone y la vida civil, identificando esta última con la

mayoría de edad o madurez del ser humano. En tal sentido no podemos olvidar las repercusiones de la Reforma en las controversia política.

No menos importante será desde una perspectiva política el triunfo del absolutismo denominación de un régimen político, de un periodo histórico, de una ideología y de una forma de gobierno o de Estado, el Estado absoluto, propios del Antiguo Régimen; caracterizados por la pretensión teórica, con distintos grados de realización en la realidad, de que el poder político del gobernante no estuviera sujeto a ninguna limitación institucional, fuera de la ley divina. Este escenario será el que coincide con el desarrollo del pensamiento político inglés del siglo XVII y sobretodo del pensamiento político de John Locke y el pensamiento del liberalismo moderno y contemporáneo que considera a su figura como el teórico de la revolución inglesa y del ascenso de la burguesía.

La libertad se convierte por entonces en el objetivo principal de la reflexión filosófica e implica la búsqueda de que todo individuo esté regido por leyes y no sea dominado material o mentalmente por otros seres humanos. Lo opuesto a la libertad provendrá entonces de las tendencias que promueven la dependencia del individuo respecto a la voluntad de un dirigente político o religioso. Según John Locke, la libertad consiste en que cada hombre depende de la ley de la naturaleza y no de la voluntad de otro hombre.

El marco histórico que ocupa este primer escenario temporal es bien conocido, a lo largo del siglo XVI y siglo XVII, Europa se encontraba envuelta en guerras de religión y aún existía un ambiente de agitación que tendía a centrar las nociones de fe y misticismo en las revelaciones "divinas", captadas de forma individual como la fuente principal de conocimiento y sabiduría. Frente a este ambiente surgiría el Iluminismo, movimiento muy heterogéneo del cual podemos señalar como sus principales características la creencia en la razón y

en la racionalidad humana; la creencia que tanto sociedades como individuos progresan en un sentido de mayor perfectibilidad; la utilización del principio de causalidad; la idea de que los principios y las leyes gobiernan la naturaleza, el hombre y la sociedad: el desafío a la autoridad y rechazan la tradición

Fue entonces cuando surge la primera Revolución, que es la Revolución Industrial iniciada precisamente en Inglaterra que permitiría la consolidación del capitalismo y los comienzos de la formación de mercado de extensión mundial, ocasionando grandes transformaciones aceleradas en la economía, la sociedad y la tecnología.

Paralelamente a la sucesión de este proceso que destruía la sociedad preindustrial, se construirá una sociedad de clases presidida por una burguesía que contemplaría el declive de sus antagonistas tradicionales, los privilegiados, y el nacimiento y desarrollo de uno nuevo, el simple ciudadano, protagonista futuro del tercer Estado.

Este cambio político se produce entre la monarquía absoluta propia del Antiguo Régimen y el Absolutismo Ilustrado y adoptaría muy diversas formas: una República, con modelos como la Commonwealth inglesa de 1649, la Federación de las Trece Colonias norteamericanas en 1776, o la Republica Francesa de 1793; o una monarquía, que a su vez tuvo diferentes modelos como la Monarquía parlamentaria de la Revolución Gloriosa inglesa de 1688, la monarquía constitucional diseñada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa de 1789, un Imperio como el napoleónico de 1804 y finalmente la Monarquía Española diseñada en las Cortes de Cádiz de 1812.

En todo caso, constatamos que el componente más significativo es de carácter ideológico, una ideología que pasaría a denominarse como liberalismo y que se convertiría en la doctrina justificativa de la

revolución liberal, entendida como la primera Revolución Liberal que antecede al siglo XIX.

El liberalismo se constituiría como un sistema filosófico, económico y político, que ante todo promueve las libertades civiles y se opone a cualquier forma de despotismo, apelando a los principios republicanos, fundamentándose en el estado de derecho, la democracia representativa y la división de poderes. El liberalismo aboga principalmente por el desarrollo de las libertades individuales y, a partir de éstas, por el progreso de la sociedad y supone el establecimiento de un Estado de Derecho, donde todas las personas sean iguales ante la ley, sin privilegios ni distinciones, en acatamiento de un mismo marco mínimo de leyes que resguarden las libertades de las personas.

Puede decirse por tanto que el liberalismo se convierte en la gran fuerza que sostiene el proceso revolucionario que da origen a la transformación del Antiguo Régimen y el mundo contemporáneo, un proceso que surge de la lucha contra el absolutismo, inspirando en parte la organización del Estado de Derecho con poderes limitados y sometido a una Constitución, que permitió el surgimiento de la democracia liberal durante el siglo XVIII.

El liberalismo y consecuentemente las revoluciones liberales se suman al proceso de la Revolución Industrial porque al promover la libertad económica, el liberalismo despojó de las regulaciones económicas del absolutismo a las sociedades donde pudo aplicarse, permitiendo el desarrollo natural de la economía de mercado y el ascenso progresivo del capitalismo.

Estas Revoluciones históricas ofrecen en su génesis y desarrollo características muy diferentes pero todas ellas presentan una marcada influencia por fundamentarse en principios y valores filosóficos y jurídicos aceptados en la generalidad de ellas y es por ello que el término de revolución liberal puede aplicarse por

extensión. Así lo constatamos en la Revolución Americana, término que se aplica tanto a la independencia de Estados Unidos, que es un claro ejemplo de revolución liberal, pero también a los procesos independentistas en la América Española, absolutamente vinculados a los sucesos en los que se genera la Constitución de Cádiz y a la misma revolución francesa que en mayor medida es aún una revolución liberal e igualmente a los ciclos revolucionarios europeos que se desarrollan en el siglo XIX.

Por todo ello nos parece necesario fundamentar las ideas y principios filosóficos, jurídicos y políticos que enmarcan aquellos hechos, lo que nos lleva inicialmente a realizar una referencia histórica abordando el tiempo en que se produjeron y consecuentemente la génesis de los principios y valores que informaran nuestro mundo contemporáneo.

1.1 Principios y valores del pensamiento político moderno

Suele considerarse pensamiento político moderno o pre-moderno el que se genera entre el llamado Humanismo del siglo XVI y la Ilustración del siglo XVIII en los que se desarrollan toda una serie de doctrinas políticas, en ocasiones con fundamentos clásicos, pero sobretodo se verifica un fenómeno político de una gran transformación que supone la superación de un Estado absolutista y la génesis de un Estado democrático, o al menos, un Estado influido por el liberalismo filosófico y político que se convierte en el argumento principal de la conservación de las ideas del mundo moderno y que va a cimentar la articulación jurídica y política del mundo contemporáneo¹⁰¹.

¹⁰¹ Una visión genérica de este proceso en: Touchard, J. *Historia de las Ideas Políticas* (6ª ed.) Tecnos, 2006. Reale, G., Antiseri, D. *Historia del Pensamiento Filosófico y Científico*. Barcelona: Herder. (2001) Abellán, J. L. *Historia del pensamiento español*, Espasa-Calpe, Madrid, 1996 así como, las propias obras de los autores principalmente referidos.

De este modo podría decirse que el pensamiento filosófico y jurídico va a trascender del absolutismo monárquico para pasar al llamado pensamiento clásico ilustrado, al liberalismo clásico que enlaza con el pensamiento revolucionario.

Los elementos principales del pensamiento político que llamamos moderno, en cuanto que corresponden cronológicamente con la Edad Moderna, parten del siglo XVI, periodo en que el humanismo y el renacimiento se constituyen como movimientos renovadores respecto del mundo medieval. En este periodo comienzan las bases de lo que se llamaría la teoría política moderna en la que ocupan un lugar principal las reflexiones sobre el absolutismo.

Los humanistas son generalmente pacifistas y cosmopolitas, incluso cuando están al servicio de un príncipe, como Guillaume Bude quien en sus obras y en su epistolario pone de manifiesto sus imperativos morales ante consideraciones políticas. Un claro ejemplo es el de Erasmo de Rotterdam¹⁰² quién en su obra “La Institución del príncipe cristiano” escrita en 1516, elogia la noción del bien común en un Estado donde tiene su paralelo el deber de las personas con el del Príncipe. La literatura política sobre el príncipe cristiano se desarrollaría fundamentalmente a fines de la Edad Media en donde aparecen los tratados “De regimine principum”, de Egidio Romano¹⁰³, alumno de Tomás de Aquino, escritor, filósofo y teólogo agustino, considerado como el fundador de la primitiva escuela agustiniana, en el que se inspira sin duda en los primeros libros políticos españoles

¹⁰² Istvan Pieter, Bejczy. *Erasmus and the Middle Ages: The Historical Consciousness of a Christian Humanist*. Brill Academic Publishers, Collection Brill's Studies in Intellectual History, Londres (2001)

¹⁰³ Goicoechea Zabala, Javier López de. “La Glosa Castellana al de Regimini Principum 1280 de Egidio Romano”. La Reducción Aristotélica. Madrid. 2003

como el “Vergel de príncipes” de Rodrigo Sánchez de Arévalo¹⁰⁴ y el “Speculum principum” de Pedro Belluga¹⁰⁵.

Erasmus, que fue uno de los grandes mentores de Carlos V y que ofrece también ideas de reforma política en su “Elogio de la locura” escrito en 1511 y asimismo en algunos escritos hace expresa referencia a España y a su gobierno, en una carta que dirige a Francisco de Vergara, fechada en Basilea el 13 de octubre de 1527, Erasmo llega a confesar su deber de felicitar en público “a esa vuestra España, que con tan buen suceso reivindica de su rincón oscuro la prístina gloria de la erudición. ¿Qué más podía desear España, floreciente en todo tiempo por la amenidad y fertilidad de su suelo, por la copiosa cosecha de ingenios eminentes y por sus lauros marciales, sino arrearse con las galas de la ciencia y de la religión?”¹⁰⁶.

Erasmus tiene algunos escritos sobre Filosofía política que influyeron en el pensamiento de Carlos V dada la singular relación que existía entre ambos. En su obra titulada Educación del Príncipe cristiano, dedicada “al Ilustrísimo Príncipe Don Carlos”, Erasmo cita a Aristóteles: “Siendo así que de suyo es cosa eximia la sabiduría, oh Carlos, el más aventajado de los Príncipes, opina Aristóteles no haber más excelente linaje de sabiduría que la que enseña a formar al Príncipe, útil y eficaz para el bien común”. Después hace referencia a Platón: “Por esto, Platón en ninguna otra cosa muestra diligencia mayor que en formar gobernantes para su República, tales que (...) por su sola sabiduría se aventajen a los demás. Y aun afirma que jamás hubo Repúblicas prósperas si no fueron filósofos los que pusieron mano al timón, o si aquellos a quienes la fortuna entregó el gobierno, abrazaron y profesaron la Filosofía”.

¹⁰⁴ *Vergel de príncipes*. Edic. de F. R. Uhagón y Guardamino. Madrid, 1900.

¹⁰⁵ García Pérez, Rafael D. *Antes leyes que reyes: cultura jurídica y constitución política en la edad moderna*, Navarra, 1512-1808. Giuffrè Editore, 2008.

¹⁰⁶ Marcel Bataillon. *Erasmus en España*. Fondo de Cultura Económica. México, 1956. 2ª ed. Traduc. de Antonio Alatorre.

Para Erasmo la Filosofía política no trata de los primeros principios, sino que enseña a gobernar bien: “Filosofía, digo, no aquella que disputa acerca de los principios, de la primera materia, del movimiento o del infinito, sino aquella otra que liberando el espíritu de las falsas opiniones del vulgo o de las pasiones desordenadas, enseña el estilo del buen gobierno, a ejemplo de la Divinidad”. Erasmo desea que Don Carlos aventaje al célebre Alejandro en Filosofía política: “Empero, dado que tú, ínclito Príncipe Carlos, superas en venturas a Alejandro, esperamos que serás tal, que también le harás ventaja en sabiduría política”¹⁰⁷.

Erasmo influye a su vez en Luís Vives¹⁰⁸, su amigo, quien desarrolla en diversos escritos su ideal pacifista pero sobretudo su preocupación por los nuevos desequilibrios sociales concretamente por la pobreza tal y como refleja en su obra escrita en 1526, “De subvencione paupérrimo” o Del socorro de los pobres. Es amplia la serie de los escritores hispánicos que seguirán esta huella en sus obras entre ellas “El espejo del príncipe cristiano” de Francisco de Monzón¹⁰⁹, “De regni Regisque institutione” de Sebastián Fox Morcillo¹¹⁰ y en la “Institución de un rey cristiano” de Felipe de la Torre¹¹¹.

Desde otra perspectiva no podemos dejar de considerar otra de las obras más grandes del Renacimiento que es la “Utopía” de Tomás

¹⁰⁷ Enrique González Fernández, “Algunos textos de Erasmo sobre la Familia Real Española”.

¹⁰⁸ Juan Luis Vives; (1999). *Obras políticas y pacifistas* Por Francisco Calero. Madrid: Ediciones Atlas - Biblioteca de Autores Españoles.

¹⁰⁹ Carlota Fernández Travieso *La Erudición de Francisco de Monzón en Libro Segundo del Espejo del Perfecto Príncipe Cristiano*. en *The Bulletin of Hispanic Studies* Volume 87, Number 7, 2010 pp. 743-753

¹¹⁰ Sebastián Fox Morcillo. *De regni, regisque institutione libri III*. Antverpiae : Gerardum Spelmannum, 1556.

¹¹¹ Felipe de la Torre. *Institución de un Rey Cristiano. En The protestant connexions of a Spanish Royal Chaplain*. Bibliothèque d’humanisme et Renaissance. 1984

Moro, escrita en 1515-1516 que representa un importante contenido político pues proyecta una utopía global de paz mundial, y un modelo de sociedad utópica, en la que se articula una organización política fundada racionalmente, entre cuyos planteamientos destaca la abolición de la propiedad privada, considerada la causa de todos los males e injusticias sociales.

Las utopías surgen generalmente a partir de una aguda crítica social y política de la realidad que cada uno de los que las describen viven y en tal sentido, estas obras constituyen análisis filosóficos e históricos permeados por una voluntad de cambio.

Los humanistas se plantean mundos mejores, lugares perfectos donde la convivencia entre los seres humanos estará marcada por el sello de la armonía, lugares imaginarios que se construyen como base para reformar la sociedad de la época y, sobre todo, para afianzar la certeza de que cualquier sociedad siempre puede y debe ser más justa.

Esta es la idea que recoge primeramente Tomás Moro quien crea la palabra utopía y, junto con ella, la noción de que las comunidades humanas deben tender hacia la perfección, lo que en este caso quiere decir justicia e igualdad. Utopía significa literalmente “lugar que no existe”, la geografía es imaginaria e intangible, pero la ideología y filosofía que imaginan sociedades más libres y habitables ciertamente existen. Efectivamente el lugar no existe pero la ficción le permite lanzar despiadadas críticas al sistema político y a las instituciones de su tiempo.

La pregunta de sobre cómo la sociedad debe organizarse para vivir mejor daría paso a nuevas reflexiones también utópicas como las realizadas por Tomaso Campanella en su obra *La ciudad del Sol* (1602) y de Francis Bacon en la *Nueva Atlántida*.

Al otro extremo de la filosofía política moderna se encuentran aquellos escritos en los que no se plantean objetivos éticos sino objetivos puramente políticos si bien dirigidos instrumentalmente para

alcanzar la gloria o el honor. El principal exponente es la conocida obra de Nicolás Maquiavelo quién escribe “El Príncipe” cuya versión impresa publica en 1532, será considerada una de las obras más importantes de la filosofía política moderna.

Maquiavelo entiende que la reforma de un orden existente es una de las cosas más peligrosas y difíciles que un hombre puede hacer ya que las personas son naturalmente resistentes al cambio y la reforma. El Príncipe debe efectuar astutas maniobras políticas para mantenerse en el poder pero debe cuidadosamente calcular todas las malas acciones siendo su principal preocupación la guerra o la preparación para la guerra.

En un capítulo entero de *El príncipe* Maquiavelo se plantea el dilema autoritarismo o liberalismo y entiende que es mejor ser autoritario, ya que cuando se es clemente o liberal se le da libertad tanto a las personas como a los hechos. Hechos tales como lo son las masacres y matanzas afectan a toda la población. En cambio cuando uno es autoritario evita los hechos que afectan a toda la población, y en vez sólo ejecuta a unas personas, para mantener el orden y el autoritarismo. Además, estas ejecuciones sólo afectan a unos pocos individuos.

El Príncipe debe ser virtuoso idealmente pero debe estar dispuesto y ser capaz de abandonar esas virtudes si se hace necesario. Debe ser percibido como misericordioso, fiel, humano, sincero y religioso pero lo más importantes es que parezca que tiene esas cualidades no las que realmente posee¹¹². El Príncipe de Maquiavelo y la reacción antimaquiavelista, será una de las cuestiones más debatidas de la teoría del Estado de la Contrarreforma. En la imagen del Príncipe maquiavélico se introdujo el arte político como forma de gobernar el Estado, pero los escritores españoles defendieron que el

¹¹² Gómez Miguel, Raúl. *Política. El poder de las palabras, las ideas y el ingenio*, Trillas, México, 2008.

Príncipe debería poseer virtud y hacer virtuosos a sus súbditos. .No aceptan que el Príncipe tenga que ser malo para adaptarse a la maldad del ambiente, pero tampoco predicán la bondad del género humano;

Francisco de Quevedo en su “Política de Dios, gobierno de Cristo” plantea una argumentación teológica frente a la secularización de la política de la obra de Maquiavelo, sacralizando no solo los fines sino también los medios situando el discurso teológico en el ámbito terrenal en una retórica que también utilizan calvinistas y protestantes¹¹³, pero será sobretudo Diego Saavedra Fajardo (1584-1648), quién en su obra “*Idea de un príncipe político cristiano, representada en cien empresas*” (1640), presentará una guía para la adecuada formación política de un príncipe cristiano.

Saavedra Fajardo había estudiado leyes y cánones en Salamanca y se ganó la confianza de Felipe IV encargándose de gestionar una parte muy importante de sus relaciones políticas y diplomáticas durante treinta y cinco años en Italia, Alemania y Suiza. El conocimiento directo y en primera persona de las complejidades de la negociación política, unido a una reflexión moral cercana a los valores de la Contrarreforma, le permite realizar una obra dirigida a orientar e instruir al buen gobernante.

Las virtudes morales del Príncipe cristiano fueron tema fundamental en todos los tratadistas políticos españoles del siglo XVII, prestando atención a la justicia, distinguiendo la conmutativa (relaciones de los ciudadanos o partes del reino) y la distributiva (relacione entre el todo y las partes) y primando en ambas la igualdad

¹¹³ Aranguren, José L., «*Lectura política de Quevedo*», Revista de Estudios Políticos, XXIX, 1950,157-167. Tierno Galván, E., «*Introducción*», en *Antología de escritores políticos del Siglo de Oro*, Madrid, 1966. Francisco de Quevedo. *Política de Dios y gobierno de Cristo*. Buenos Aires ; México, Espasa-Calpe Argentina, 1947.

ante la ley. El Príncipe debería ser también liberal y buen administrador a imagen de Dios.

Además del propósito de espejo de príncipes, el discurso tendrá como centro de gravedad la razón de estado.

A partir de la contestación a Maquiavelo escrita por el jesuita Giovanni Botero (*Della ragion di Estado libri dieci...*, 1589 —con traducción española de Antonio de Herrera, 1593—) se inicia en España una reflexión acerca de los límites y las líneas de corte entre la política entendida como técnica de mantenimiento y ampliación del poder, y la moral tradicional cristiana ligada, generalmente, a una idea providencialista del estado.

En este debate hay aportaciones notables, como las obras de Pedro de Rivadeneyra (*Tratado de la Religión y virtudes que debe tener el príncipe cristiano*, 1595), Juan de Mariana (*De rege et de regis institutione*, 1599) o Juan Eusebio Nieremberg (*Maquiavelismo degollado*, 1637), así como la mencionada *Política de Dios* (1626 y 1655) de Quevedo o la diseminación de estas ideas en algunos textos de Gracián (*El Héroe*, *El Político*, *el Oráculo manual*).

Estas obras que, como la de Saavedra, unen las recomendaciones sobre las virtudes que han de adornar al gobernante con la reflexión política teórica llena de ejemplos de ejemplos que permiten poner en conjunción los hechos históricos y la ética civil. Esta es la filosofía de la obra de Justus Lipsius en su *Politicorum sive civilis doctrina libri sex* (1589), que tendría una rápida traducción española de Bernardino de Mendoza, (1604).

Saavedra intenta distinguir, como hizo Pedro de Rivadeneyra, entre la buena y la mala razón de Estado¹¹⁴. El Príncipe debe estar

¹¹⁴ Manuel Fraga Iribarne *Don Diego Saavedra Fajardo y la diplomacia de su época*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998. Sabino Alonso Fueyo, *Saavedra Fajardo: el hombre y su filosofía*, Valencia, Ediciones Guerri, 1949. P. 17.

advertido de las muchas trampas y vilezas que pueden cometer otros gobernantes con él para poderlas evitar; a su vez, él debe ejercer una política basada en las virtudes cristianas. El problema a resolver es que las virtudes cristianas no armonizan fácilmente con exigencias políticas como la mentira, la hipocresía, el disimulo y las acciones que entran ya en los calificativos de la maldad.

Esta obra asimismo sigue la recomendación de Erasmo en su *Educación del príncipe cristiano* de que, para enseñar al príncipe, las máximas hay que “traérselas a la memoria con ahínco, ora con una sentencia, ora con una anécdota, ora con un símil, ora con un ejemplo, ora con un apotegma, ora con un proverbio”. Para ello Saavedra y Fajardo desarrolla una notable erudición con la que apoya sus argumentos manifestando una excelente erudición.

Debe asimismo destacarse la repercusión que la reforma tendrá en la controversia política desde la propia doctrina de Lutero quién proclama el carácter divino de la obediencia a la autoridad. Desde el Luteranismo y el Calvinismo surgieron diversas disidencias religiosas con connotaciones sociales que plantearon la confrontación con el orden político y las autoridades defendiendo en ocasiones un igualitarismo radical.

Otros autores relevantes de este tiempo de la historia plantean discursos teóricos de gran alcance tal como la filosofía política de Jean Bodin, para quién el origen de la autoridad está en el pacto que se da entre las diversas familias que componen las élites de una sociedad, que deberían ponerse de acuerdo en una persona o institución para que ejerza la autoridad y gobierne. Por ello, el poder político debiera ser el resultado de un pacto, pero una vez concretado ese pacto, la persona que ostente la autoridad deberá tener todo el poder y ha de ser obedecida por todos.

Puede decirse que la controversia sobre el absolutismo monárquico comenzaría con las guerras de religión en Francia (1562-

1598) y se extendería hasta la publicación del Leviathan de Hobbes en 1651. En esta generación de escritores de lo que podríamos llamar el protoliberalismo moderno, pues su discurso se concibe como una crítica y una respuesta a los desafíos teóricos e institucionales del absolutismo, destaca la figura de Althusius, que pertenece a la reconocida escuela Herborn, movimiento intelectual alemán que se gesta al amparo de la recién creada universidad de su nombre y cuya Facultad de Derecho sería uno de los núcleos más importantes del humanismo barroco europeo¹¹⁵.

Destacamos en primer lugar la utilización por Althusius del concepto de ciencia política, cuyo fundamento corresponde a una propuesta hasta entonces desconocida para la referida ciencia política, especialmente si consideramos los escritos de Maquiavelo que están referidos a la teoría del poder y los escritos de Jean Bodino que se refieren a la doctrina de la soberanía y de los derechos de la monarquía.

Es precisamente en su obra “La Política” publicada en 1603 en la que crea un lenguaje especializado, propio de la ciencia política y del derecho público moderno, planteando la cuestión del origen, ejercicio y legitimidad del poder político, y desarrollando el concepto de comunidad, señalando que el origen de la sociedad está en la mancomunidad de intereses de los distintos grupos -consociaciones- que buscan libremente, a través de distintos pactos, desarrollar una sociedad.

Althusius realiza asimismo una propuesta de carácter ético para lograr la conservación de la armonía en una sociedad, o lo que es lo mismo la estabilidad o la gobernabilidad. De otra parte hemos de considerar que la política Althusius recoge como principio

¹¹⁵ P. Carvajal, *Teoría política y discurso político barroco. Sobre los orígenes de liberalismo clásico: J. Althusius, J. Locke, B. Spinoza. Una interpretación*, en Revista de Estudios Histórico-Jurídico 21 Valparaíso, 1999. pg. 249-254.

fundamental la propuesta de San Pablo contenida en la Epístola de los romanos en cuanto al origen, ejercicio legitimidad del poder político y se constituye en un pensador cristiano-calvinista que utiliza las fuentes del pensamiento cristiano para estructurar su discurso político-jurídico. Para él, como decimos, el origen de la sociedad está en la mancomunidad de intereses de los distintos grupos que buscan libremente, a través de diversos pactos, desarrollar una sociedad. Consecuentemente ha de buscarse la conservación de la armonía en una sociedad, la estabilidad, la gobernabilidad siendo este el objetivo de la ciencia jurídica.

Otro de sus planteamientos es el referido al derecho de resistencia que con la reforma protestante adquiere una connotación plenamente moderna, ya que pasa a constituir uno de los derechos fundamentales de la comunidad. En este sentido el derecho de resistencia se constituye como una de las bases de la libertad moderna y uno de los cuatro derechos fundamentales con los que se formula la teoría de la legislación liberal. De este modo quedaría abierto el paso al absolutismo estatal. Sin embargo la filosofía realista, aristotélico-tomista resurgiría a partir del primer cuarto de siglo XVI, gracias al magisterio de la llamada Escuela de Salamanca o más bien a los doctores españoles, dominicos, franciscanos, agustinos y jesuitas que enseñaron principalmente en Salamanca, Alcalá de Henares y Lisboa.

Recordemos que en la doctrina de Santo Tomás se conjuga armónicamente lo natural y lo sobrenatural, el orden social, el bien común y el bien privado. Santo Tomás construye su argumentación sobre la capacidad de la razón humana para conocer la ley natural como norma de conducta del Estado.

Frente a esta filosofía tomista que articula el orden medieval europeo en la que el Estado se obligaba a los dictados de la ley natural, se desarrollaría en la Edad Media el absolutismo político facilitado por el pensamiento precursor de Marsilio de Padua y de su

coetáneo Guillermo de Ockham quienes sostienen que los mandamientos de Dios son puramente arbitrarios y misteriosos, incomprensibles en términos racionales y éticos, afirmando que el Estado es supremo y debe ser obedecido en todo lo que mande.

Aquellas cuestiones se plantean en la doctrina pública de la llamada Escuela de Salamanca que significó el fin de los conceptos medievales del derecho, con la primera gran reivindicación de la libertad. Los derechos naturales del hombre pasaron a ser, de una u otra forma, el centro de atención, tanto en lo relativo al derecho a la vida y a la propiedad como el derecho a la libertad de pensamiento, a la dignidad. La Escuela de Salamanca surgida a raíz de la labor intelectual y pedagógica de Francisco de Vitoria en la Universidad de Salamanca reformula el concepto de Derecho natural, concluyendo que todos los hombres comparten la misma naturaleza y consecuentemente también comparten los mismos derechos como el de igualdad o de libertad. Puesto que el hombre no vive aislado sino en sociedad, la ley natural no se limita al individuo.

La Escuela de Salamanca aporta una nueva visión a todas estas cuestiones a través de la obra de una serie de filósofos, teólogos y juristas de entre los que consideramos de especialmente al referido Francisco de Vitoria (1483-1546), Domingo de Soto, (1494-1570) Luís de Alcalá (1490-1549), Martín Azpilicueta (1493-1586), Tomás de Mercado (1500-1575), Luís de Molina (1535-1601), Juan de Mariana (1536-1624) o Francisco Suárez (1548-1617), todos ellos iusnaturalista y moralistas, que tratan de reconciliar la doctrina de Santo Tomás con el nuevo orden social y económico.

Esta doctrina constituye el núcleo que se conoce como la segunda escolástica o escolástica tardía cuya preocupación principal es la ética y la moral. Precisamente una de las ideas más relevantes es una nueva concepción de la moral. La moral no depende de la divinidad, se puede hacer el mal aunque se conozca Dios y se puede

hacer el bien aunque se desconozca. Francisco de Vitoria explica esta paradoja apelando a libre albedrío humano. Puesto que la libertad es concedida por Dios a cada hombre, no es necesario que el hombre actúe eligiendo siempre el bien. La consecuencia es que el hombre pueda hacer el mal.

La Escuela de Salamanca reformula el concepto de derecho natural que surge de la misma naturaleza, puesto que todos hombres compartirán esta naturaleza también comparten los mismos derechos como el de igualdad o de libertad.

Tanto o más relevante es su concepción sobre la soberanía al distinguir el ámbito natural o civil y el ámbito sobrenatural. Una consecuencia directa de la separación de potestades es que el Rey o Emperador no tiene jurisdicción sobre las almas, ni el Papa poder temporal. Incluso propusieron que el poder del gobernante tiene sus limitaciones. Para Luis de Molina una nación es análoga a una sociedad mercantil en la que los gobernantes serían los administradores, pero donde el poder reside en el conjunto de los administrados considerados individualmente, cuando la idea anterior era que el poder de la sociedad sobre el individuo es mayor que el de éste sobre sí mismo, ya que el poder del gobernante era una emanación del poder divino, cosa que los salmantinos rechazan.

Para la Escuela de Salamanca el pueblo es el receptor de la soberanía, el cual la transmite al príncipe gobernante según diversas condiciones siendo la mejor defensa de la época de la soberanía del pueblo la planteada por Francisco Suárez, en cuya obra *Defensio Fidei Catholicae adversus Anglicanae sectae errores* (1613) mantiene que los hombres nacen libres por su propia naturaleza y no siervos de otro hombre, y pueden desobedecer e incluso deponer a un gobernante injusto, afirmando como Luís de Molina, que el poder político no pertenece a ninguna persona en concreto, pero se diferencia de él por

el matiz de que considera que el receptor es el pueblo como un todo, no como un conjunto de soberanos individuales.

Para Suárez el poder político de la sociedad es contractual en su origen porque la comunidad se forma por el consenso de voluntades libres. La consecuencia de esta teoría contractualista es que la forma de gobierno natural es la democracia, mientras que la oligarquía o la monarquía surgen como instituciones secundarias, que son justas si las ha elegido el pueblo.

A fines del siglo XVI y principios del XVII se construye la fundación teórica del iusnaturalismo, la teoría del derecho natural y la distinción entre derecho natural y derecho positivo siendo el libro de Grocio “*De iure belli ac pacis*” (1625) el primer tratado sistemático sobre el derecho internacional, cuyas bases ya habían sido sentadas por Francisco de Vitoria, al que cita abundantemente transmitiendo y difundiendo por Europa las ideas de la Escuela de Salamanca.¹¹⁶

En “*De iure belli ac pacis*” se analizan, conceptos como la guerra justa y las instituciones de derecho privado tales como contratos, ventas o relaciones familiares estableciendo un sistema que permitiera a los gobiernos negociar entre sí dentro de un marco jurídico afirmando que el derecho internacional proviene del derecho natural y del derecho de gentes y es independiente de la teología o de la existencia de Dios, lo que implica que en las relaciones internacionales no se puede diferenciar entre naciones cristianas e infieles.

Debemos también aludir a la idea de libertad que se desarrolla en la gran transformación ideológica y política y que se va a plantear a lo largo del siglo XVII. La idea de la libertad, o más bien el sentimiento de libertad, aparece desarrollado en la obra de Baruch

¹¹⁶ Cornelis van Vollenhoven *On the genesis of De iure belli ac pacis* Grotius, 1625. Amsterdam : Akad., 1924.

Spinoza (1632-1677) en concreto en su obra magna, “Ética demostrada según el orden geométrico”, obra en la que también colaboró Leibniz que toma en parte su propio texto. Spinoza predica una filosofía de tolerancia y benevolencia y mantiene que los seres humanos presumen de tener libre albedrío pero no entienden las razones por las que quieren actuar y como lo hacen¹¹⁷.

Para él, el comportamiento humano está determinado completamente. La libertad no es la posibilidad de decir "no" a lo que nos pasa, sino la posibilidad de decir "sí" y por tanto los seres humanos no tienen libre albedrío aunque creen, sin embargo, que su voluntad es libre. “Los hombres se imaginan ser libres, puesto que son conscientes de sus voliciones y de su apetito y ni soñando piensan en las causas que les disponen a apetecer y querer, porque las ignoran.”

En la definición séptima de la primera parte de su obra, Spinoza nos da su definición de libertad. Dice allí: “Se llamará libre aquella cosa que existe por la sola necesidad de su naturaleza y se determina por sí sola a obrar. Necesaria, en cambio, o más bien coaccionada, aquella que es determinada por otra a existir y a obrar según una razón cierta y determinada”

Para Spinoza el bien y el mal son conceptos relativos, no hay nada intrínsecamente bueno o malo excepto en relación con una particularidad. Nada sucede por casualidad y nada es contingente. Spinoza propone que cuando el hombre logra ser determinado adecuadamente por la razón y el entendimiento, “se esfuerza en guiar a los demás por la razón, no obra por impulso, sino humana y benignamente”. De este modo, el hombre determinado por la razón se esfuerza también por que todos sus semejantes tienda, hacia un mismo objeto como bien supremo, pero, en esta ocasión, dicho bien supremo

¹¹⁷ Baruch Spinoza. *Principios de la filosofía de Descartes. Pensamientos metafísicos* (1663; versión en holandés, 1664). *Tratado teológico-político* (1670).

representa un bien común acorde con el cual los hombres son afines entre sí y desean unirse unos a otros con lazos de amistad.

En la parte final de la "Ética", Espinoza se preocupa por el significado de "felicidad verdadera", y explica que las emociones se deben deshacer de causas externas y así poder dominarlas. Realmente puede decirse que dentro del racionalismo, es Baruch Spinoza quien elaboró de modo más amplio y sistemático una propuesta ética.

En el ámbito del empirismo, David Hume se plantearía en diversos momentos la comprensión de los motivos profundos de las acciones humanas. Pero como bien se conoce la gran revolución ética moderna se realiza a través de Immanuel Kant, quien rechaza una fundamentación de la ética en otra cosa que no sea imperativo moral mismo -deontologismo formal-, pues si la moral se orienta a buscar la felicidad no podría dar ninguna norma categórica ni universal.

Esta moral del imperativo categórico sería desarrollada por los filósofos idealistas quienes de este modo hacen frente al utilitarismo, al afirmar que el principio de utilidad no es el único criterio de corrección de las acciones.

Queda por ultimo entender o plantearse en que medida son las leyes antiguas, que regirían el gobierno consideradas como el legado histórico o la Constitución histórica las que podrían fundamentar el cambio que se articula en la España de comienzos del siglo XIX o lo que es lo mismo en la España de las Cortes de Cadiz. Ese es el debate que se plantea ante los liberales exaltados y los liberales moderados que reconocen la importancia de la figura de Jovellanos.

Nada más clarificador que el texto de Jovellanos introduce en la "Consulta sobre la Convocatoria de las Cortes por Estamentos que incluye en la Memoria en defensa de la Junta Central: *"Y aquí notare que oigo hablar mucho de hacer en las mismas Cortes una nueva Constitución. ¿Por ventura no tiene España su Constitución? Tienela, sin duda; porque ¿Qué otra cosa es una Constitución que el conjunto*

*de leyes fundamentales, que fijan los derechos del Soberano y de los súbditos, y los medios saludables de preservar unos y otros? ¿Y quien duda que España tiene estas leyes y las conoce? ¿Hay alguna que el despotismo haya atacado y destruido? Restablézcase. ¿Falta alguna medida saludable para asegurar la observancia de todas? Establézcase. Nuestra Constitucion entonces se hallara hecho, y merecerá ser envidiada por todos los pueblos de la tierra que amen la justicia, el orden, el sosiego publico y la verdadera libertad, que no puede existir sin ellos”.*¹¹⁸

La misma posición es la de Martinez Marína y ambas se recordaran posteriormente por Agustin Arguelles en el “Examen histórico de la reforma constitucional” y mucho antes en el “Discurso preliminar” cuando se dice que *“nada ofrece la Comisión en su proyecto que no se haya consignado de modo mas autentico y solemne en los diferentes cuerpos de la legislación española... la ignorancia, el erro y la malicia alzarán el grito contra este Proyecto. Le calificarán de innoavador, de peligroso, de contrario a los intereses de la nación y del Rey. Mas sus esfuerzos serán inútiles y sus impostores argumentos se desvanecerán como el humo al ver demostrado hasta la evidencia que las bases de este proyecto han sido para nuestros mayores verdaderas practicas, axiomas reconocidos y santificados por las costumbres de muchos siglos”.*¹¹⁹

Sobre esta cuestión volveremos mas adelante al identificar las posiciones políticas y dejar claro el papel que los que acabarían llamándose liberales moderados otorgaban a Martinez Marina y a las tesis que vinculaban el fundamento de la reforma constitucional al patrimonio “constitucional” histórico.

¹¹⁸ Gaspar Melchor de Jovellanos. Memoria en defensa de la Junta Central, edición y “Estudio preliminar” de Jose Miguel Caso Gonzalez, vol. II, Colección Clasicos Asturianos del Pensamiento Politico, num. 1, Oviedo, Junta General del Principado de Asturias, 1992, p. 122.

¹¹⁹ El texto del “Discurso preliminar” se encuentra en la propia Constitución.

1.2 Fundamentos filosóficos del liberalismo moderno

El liberalismo como corriente filosófica y política realmente encuentra su fundamentación escrita en el siglo XVII aunque algunas ideas filosóficas liberales tuvieron precursores en la antigüedad clásica. Así se reconocen una serie de principios cercanos al pensamiento liberal contemporáneo en las obras de varios sofistas y en la Oración Fúnebre de Pericles y se considera que el Emperador romano, Marco Aurelio, alabó la idea de un sistema de gobierno administrado con respecto a la igualdad de derechos y la libertad de expresión igual y la conformación de un gobierno real que respete sobre todo la libertad de los gobernados.

Suele atribuirse al pensador inglés, John Locke, la condición de padre del liberalismo moderno, en el sentido de que en sus obras articula una ideología nueva frente a la tradición filosófica anterior sobre la base del concepto de los derechos naturales y el contrato social para sostener que el imperio de la ley debe sustituir al absolutismo del gobierno y considera que los ciudadanos tienen el derecho fundamental a la vida, a la libertad y a la propiedad.

Sin duda John Locke es el hombre clave en la articulación de la libertad que proponen los liberales de Cádiz. Por tanto estos conceptos que habían sido recepcionados por los protagonistas de la Revolución Americana y de la Revolución Francesa quienes utilizan la filosofía liberal para justificar el derrocamiento de los gobiernos tiránicos que no reconocían los grandes valores de los derechos y libertades individuales sobre los que se fundamenta el liberalismo, serán de nuevo las piezas centrales de la argumentación constitucional gaditana.

Desde la perspectiva histórica recordaremos que el primero de los hechos históricos de gran significación lo constituye en Inglaterra la guerra civil que llevó a la ejecución del Rey Carlos I en 1649 y a la

Revolución Gloriosa de 1688 en la que el Parlamento finalmente lograría el establecimiento de una Monarquía limitada y constitucional.

1.2.1 Thomas Hobbes entre el Absolutismo y el Liberalismo

Viene siendo generalizada una interpretación según la cual Thomas Hobbes se constituye como el fundador del liberalismo, destacándose que en su obra define la libertad de forma negativa y justifica la coacción legítima del Estado en la protección de la libertad dándole una preeminencia ética y ontológica a la sociedad civil frente al Estado.¹²⁰ En este sentido se destaca de Hobbes su defensa implícita e indirecta del derecho individual y del individualismo metodológico aunque por otra parte parezca legitimar un Estado autoritario en el que la búsqueda de la seguridad y el orden es más importante que las libertades individuales.

Hobbes, nacido en 1588, según él recuerda cuando su madre se enteró de la inminente invasión de Inglaterra por la Armada Española (La Armada Invencible), ordenada por Felipe II que vivirá una situación de caos y de casi anarquía que marcan su visión del gobierno y de las instituciones que en aquél momento coexistían en Inglaterra. Cuando en 1651 publica el “Leviatán”¹²¹, su obra mas conocida titulada en ingles “*Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and Civil*” ya era reconocido como un importante filósofo poseedor de una formación clásica.

Hobbes desarrolla en la obra previa “De Cive” su idea sobre el organismo social y político. Escrita en 1642 esta obra aparecería finalmente publicada bajo el título “Rudimentos filosóficos sobre el

¹²⁰ Straus, Leo *La filosofía política de Hobbes. Su fundamento y su génesis*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica 2006

¹²¹ Hobbes, Thomas *Leviatan –o la materia, forma y poder de una república, eclesiástica y civil*. Fondo de Cultura Económica, México 1994

gobierno y la sociedad”¹²², quedaría articulada en tres partes: Libertas –libertad-, Imperium –dominio- y Religio –religión-. En la primera parte, se describe la condición natural del hombre, que trata de las leyes de la naturaleza, en la segunda, la necesidad de establecer un gobierno estable y en la tercera parte, escribe sobre la religión. Años después de realizar esta obra sería contratado como instructor de matemáticas del Príncipe de Gales y se habría exilado a Holanda donde comenzaría a escribir un libro concluido en París para exponer su guía del gobierno civil en relación con la crisis política generada por la guerra.

El Estado para Hobbes podría ser considerado como un gran hombre artificial o un monstruo (Leviatán), integrado por hombres, con una vida que podría ser rastreada desde su generación bajo la presión de las necesidades humanas. A partir de una concepción mecanicista del ser humano y las pasiones, Hobbes postula lo que sería la vida sin gobierno, una condición que él llama “el estado de naturaleza”.

En ese Estado cada persona tiene el derecho o licencia a todo en el mundo. Esto, conduciría a una "guerra de todos contra todos" (bellum omnium contra omnes). Dado que no hay lugar para las distinciones morales no se puede juzgar dichas pasiones como buenas o malas.

Podría parecer que Hobbes, al hacer depender de las pasiones la acción de los seres humanos en el estado de naturaleza sugiere que el ser humano es malo por naturaleza pero el mismo rechaza esa interpretación en “Leviatán XIII”, al afirmar que “pero ninguno de nosotros acusa por ello a la naturaleza del hombre, los deseos, y otras pasiones del hombre, no son en si mismos pecado. No lo son tampoco las acciones que proceden de estas pasiones, hasta que conocen una

¹²² Hobbes, Thomas. De Cive: *Tratado sobre el ciudadano*.

ley que las prohíbe. Lo que no pueden saber hasta que haya leyes, y no puede hacerse ley alguna hasta que hayan acordado la persona que la hará”.

Aquél estado de naturaleza resulta inútil para el hombre pues según Hobbes, en tal condición, no hay lugar para la industria, porque su fruto es incierto, y por consiguiente no hay cultivo de la tierra, ni navegación, ni uso de los productos que pueden ser importados por mar, ni ningún edificio cómodo, ni existen instrumentos para moverse ni las cosas que requieren mucha fuerza, sin conocimiento de la faz de la tierra, ni se tiene en cuenta el tiempo, ni las artes, ni las letras, ni la sociedad, y lo que es peor de todo, domina el miedo continuo y el peligro de una muerte violenta, y la vida del hombre se resuelve solitaria, pobre, brutal desagradable, y corta.

En tal estado, la gente teme la muerte, y carece por tanto de las cosas necesarias para una vida cómoda, y la esperanza de ser capaz de esfuerzo para obtenerla. Para evitarlo es necesario que la gente acceda a un contrato social y establezca una sociedad civil. Según Hobbes, la sociedad es una población bajo una autoridad soberana, a la que todos los individuos de la sociedad ceden algunos derechos en aras de protección. Los abusos de poder por parte de esta autoridad se deben aceptar como precio de la paz.

Según Hobbes, no hay doctrina de separación de poderes, el soberano debe controlar los poderes civiles, militares, judiciales y eclesiásticos. El derecho a la libertad es definido como un derecho originario que obtienen los hombres a partir del contrato político. Este derecho originario debe ser garantizado por el Estado a través de las leyes civiles, es decir, del derecho. La función de las leyes civiles es definir y establecer las condiciones bajo las cuales los individuos pueden interactuar en tanto seres libres.

Para ello, Hobbes establece que mediante las leyes civiles se articulan las fronteras que limitan a cada individuo como sujeto libre,

capaz de emprender acciones y de responder ante los otros por los efectos que pueda producir con ellas. El establecimiento de estas fronteras es circunscrito al ámbito individual del sujeto de derechos, ámbito de cuya protección debe ocuparse el Estado.

Hobbes piensa que la naturaleza de los derechos y las libertades es tal que su conservación justifica el uso de la coacción argumentando que los derechos pueden hacerse cumplir coactivamente. Los derechos son una extensión necesaria de la libertad, de modo que cualquier persona que trate de interferir con los derechos interfiere con la libertad. Lo establecido por medio del derecho debe ser respetado y el Estado está facultado para coaccionar al que transgreda los límites impuestos por el derecho.

En la tercera ley de naturaleza Hobbes plantea el cumplimiento de los pactos y la aceptación de las consecuencias que de ello se siguen “de aquella ley de naturaleza por la que estamos obligados a transferir a otro aquellos derechos que si son reprimidos obstaculizan la paz de la realidad se sigue una tercera que es esta: que los hombres cumplan los pactos que han celebrado, sin lo cual, los pactos son en vano, y nada sino palabras sueltas”... “por tanto, antes de que los nombres de lo justo o lo injusto puedan aceptarse, deberá haber algún poder coercitivo que obligue igualitariamente a los hombres al cumplimiento de sus pactos, por el terror a algún castigo mayor que el beneficio que esperan de la ruptura de su pacto y que haga buena aquella propiedad que los hombres adquieren por contrato mutuo, en compensación del derecho universal que abandonan, y no existe tal poder antes de que se elija una República¹²³”.

El Estado, que ejerce la coacción, en virtud de que se le ha transferido esa autoridad coercitiva para asegurar la libertad, obtiene su legitimidad en la medida en que garantiza que todos los individuos

¹²³ Thomas, Hobbes. Leviatán XV.

pueden ejercer sus derechos individuales. Ahora bien, asegurar y proteger el espacio de la libertad se concreta en la posibilidad del desarrollo de las relaciones económicas y sociales que, asociadas a la vida política, encuentran en las leyes del Estado el marco bajo cuya tutela pueden desarrollarse con entera naturalidad, y que son a su vez el exponente más alto de la autonomía privada.

Hobbes expone claramente su pensamiento, mediante la teoría de la representación política que convierte al soberano en el detentador de todo el poder político. El soberano sustituye por entero, en cuanto representante, a sus representados, luego, el soberano no puede ser controlado por los representados. Desde esta perspectiva Hobbes personifica una de las más acabadas imágenes y del absolutismo.

La llamada teoría de la representación se convierte en el eje de toda su filosofía política y transforma los criterios de la legitimación política. Mediante esta teoría es posible comprender que la legitimación del ejercicio del poder y el moderno significado de la autoridad se basan en la actuación representativa. Al partir de la igualdad de los hombres que mediante la representación fundamentan la obligación de obedecer al soberano, ya no puede imaginarse una autoridad que tenga un fundamento propio o superior frente a aquellos sometidos a ella: ni la voluntad divina, ni las características personales de un gobernante virtuoso pueden constituir tal fundamento. El fundamento del pacto político son los individuos que convienen y pactan, cada uno con cada uno, instituir a la persona civil del Estado como autoridad representativa.

Se plantea entonces que coexisten en Hobbes el absolutismo político y un cierto tipo de liberalismo, que el primero para obligar a los hombres por medio del temor y la amenaza de castigos a respetar los pactos, las leyes civiles y naturales; el segundo porque una vez

limitadas las pasiones naturales que siempre buscan el beneficio propio, es justo hacer posible el despliegue de la libertad.

El absolutismo establece que el soberano actúa políticamente para garantizar la seguridad y la libertad de los asociados mediante las leyes civiles y éstos en correspondencia deben obedecer. El liberalismo asegura un espacio de acción contra las intervenciones del Estado mediante la protección de las libertades negativas de los ciudadanos, es decir, de la esfera de los intereses privados.

Este despliegue de la libertad es concebido por Hobbes en términos del aseguramiento de unas libertades negativas que permiten salvaguardar la propiedad y el tráfico económico de las personas privadas contra las intervenciones de un poder político ejercido por el soberano. De este modo, puede considerarse que el Estado en Hobbes no surge del consentimiento de las personas a él sujetas, sino de una transferencia de poder. Al ceder el individuo en el estado de guerra su poder a un soberano por temor a la muerte, acepta perder sus derechos políticos para así asegurar la esfera de los intereses privados.

Con respecto a la libertad de los súbditos, para Hobbes se trata de compaginar la libertad natural y el determinismo. Los seres humanos son libres en estado natural y, por el contrato, renuncian a sus derechos, pero con ciertas limitaciones, que fijan los límites de su libertad en la sociedad civil.

En Leviatán XIV, la libertad es entendida por Hobbes como la ausencia de estorbos: "Por libertad se entiende, de acuerdo con la significación apropiada de la palabra, la ausencia de impedimentos externos, impedimentos que a menudo pueden arrebatar a un hombre parte de su poder para hacer lo que le plazca, pero no pueden impedirle usar del poder que le queda, de acuerdo con lo que le dicte su juicio y razón."

Una vez abandonado el estado de naturaleza la primacía de la ley representa la libertad de la comunidad, por lo que la "libertad"

individual se limitaría a lo no regulado (la elección del domicilio, del medio de vida, la compra-venta de bienes, etc.), y también el derecho a resistirse al soberano: en caso de muerte o prisión y cuando el soberano renuncia a su soberanía.

Con respecto a los tipos de Estado, Hobbes admite tres tipos: la monarquía, la aristocracia y la democracia. No puede haber más formas de gobierno que esas tres, pues ninguna, o todas, pueden tener todo el poder soberano, si bien, ha habido otras formas de gobierno en el pasado, como fueron la tiranía y la oligarquía, Hobbes no las consideraba nombres de otras distintas formas de gobierno sino las mismas con otro nombre.

Lo más práctico para Hobbes, es la monarquía; ya que la diferencia entre estos tipos de gobierno no consiste en la diferencia del poder, sino en la conveniencia o aptitud de asegurar la paz y la seguridad del pueblo. En la monarquía el interés público y el privado es el mismo. Las riquezas, el poder, y el honor del monarca surgen de las riquezas, fuerza y reputación de sus súbditos. Es imposible que el rey sea rico, glorioso o poderoso si su pueblo es pobre, sin aspiraciones, o débil debido a la pobreza o la ignorancia, como para mantener una guerra contra sus enemigos. A diferencia de esto la democracia o la aristocracia, la propiedad pública no da tanta fortuna individual, dando lugar a la corrupción, el mal uso de la ambición, a la traición o a la guerra civil.

1.2.2 John Locke y el Liberalismo.

Considerado padre del empirismo y del liberalismo moderno John Locke (1632-1704) desarrolla una teoría contractualista de la sociedad y del Estado, que anticipa los principios del liberalismo: la idea de una libertad y una igualdad natural de los hombres, el derecho del individuo a la vida, a la libertad, a la propiedad, la tolerancia religiosa, la supremacía de la sociedad sobre la política, la supremacía del derecho, la división de poderes entre legislativo y ejecutivo, y el

derecho de resistencia de los ciudadanos contra un gobierno injusto, así como el gobierno por consentimiento dentro de unos fines y unos medios delimitados para ejercer el poder público¹²⁴.

En la vida de Locke se consideran dos periodos marcados por los sucesos políticos de su tiempo que inciden fundamentalmente en su obra. El primer periodo corresponde a su formación filosófica escolástica que le lleva a ser profesor de filosofía en el Christ Church College de Oxford donde disiente parcialmente de los filósofos contemporáneos, especialmente de René Descartes, fundador del racionalismo para quién en el contexto de la investigación, había que rehusarse a asentir a todo aquello de lo que pudiera dudarse racionalmente.

En el periodo de 1660 a 1662 publica su obra “Dos ensayos sobre el gobierno”, (First and Second Tract on Government) de tendencia autoritaria y conservadora, que buscaba la preservación del orden a través de la autoridad y en los que aparece como un decidido defensor de la paz y el orden social, paralelamente al pensamiento de Hobbes, con una tendencia antirrevolucionaria y legitimista, justificando ideológicamente la Restauración y el retorno de Carlos II al trono de los Estuardo.

Por entonces sale también a la luz su obra “Ensayos sobre la ley natural”, (Questions Concerning the Law of Nature) publicado por primera vez en 1654, donde insistía en que no puede existir conocimiento innato y que todo lo que conocemos, incluyendo el bien y el mal, es una inferencia derivada de nuestra experiencia.

¹²⁴ John Locke, *Dos Ensayos sobre el gobierno civil*. Edición de J. Abellán. Madrid, Espasa-Calpe, 1991; *John Locke, Carta sobre la tolerancia*. Edición de Pedro Bravo. Madrid, Tecnos, 1985.

En el periodo 1686-1687 Locke publica la obra *De la ética en General* (Of Ethick in General) en la que se da un paso más adelante a la teoría de Hobbes quién propone la idea del contrato social como base de la moralidad. En un "estado de naturaleza" en el que se matan y roban unos a otros, debe firmarse un contrato social que permita a un gobierno mantener el orden. El gobierno podría abusar de su poder, pero al menos puede defender a los ciudadanos de los demás.

El contrato se realiza para garantizar la seguridad de los individuos en su vida, libertad y bienes frente a la inseguridad existente en el estado de naturaleza. La legitimación y autoridad del estado surgen precisamente por la superación de la inseguridad que plantea Hobbes y la aportación de los bienes que propone Locke.

Locke ampliará esta idea para incluir el concepto de "derechos naturales" y plantea que se cede la autoridad a un gobierno con tal que este proteja nuestros derechos naturales. Estas ideas que pasarán textualmente a la Declaración Americana de Independencia de los Estados Unidos. Para Locke los derechos naturales son el derecho a la vida, a la propiedad, a la seguridad y a la felicidad.

Las ideas de Locke cambiarían radicalmente dos décadas más tarde como consecuencia de los sucesos que acontecen con la llamada Revolución Gloriosa de 1688-1689 en la que el Rey Jacobo II, católico declarado, quién pretendía al poder absoluto y que desafió a la monarquía y sería expulsado de Inglaterra.

El Parlamento entonces adopta la Declaración de Derechos (Bill of Rights) que limitaba el poder de los monarcas y garantizaba el derecho del Parlamento a elecciones libres y a legislar; el Rey no puede crear o eliminar leyes o impuestos sin la aprobación del Parlamento; el Rey no puede cobrar dinero para su uso personal, sin la aprobación del Parlamento; es ilegal reclutar y mantener un ejército en tiempos de paz, sin aprobación del Parlamento; las elecciones de los miembros del Parlamento deben ser libres; las palabras del Parlamento

no pueden obstaculizarse o negarse en ningún otro lugar; el Parlamento debe reunirse con frecuencia.

Poco después se aprobaría el Acta de Tolerancia, una ley el 24 de mayo de 1689, cuyo nombre completo era "Ley para exceptuar a los súbditos protestantes de Su Majestad que disientan de la Iglesia de Inglaterra de las penalidades de ciertas leyes", concediendo la libertad de culto a los inconformistas que habían tomados los juramentos de lealtad y supremacía y que rechazaban formalmente la transubstanciación, esto es, los protestantes que disentían de la Iglesia de Inglaterra, tales como los baptistas y congregacionalistas, pero no a los católicos o los cuáqueros, permitiéndose a los inconformistas que tuvieran sus propios lugares de culto y sus propios maestros y predicadores, sujetos a la aceptación de ciertos juramentos de fidelidad.

Esta ley no se aplicó deliberadamente a los católicos y no-trinitarios, manteniéndose las trabas sociales y políticos existentes, incluyendo su exclusión de cargos políticos y de las universidades, obligándose a los disidentes a que registraran sus locales de reunión y se les prohibió reunirse en casas privadas.

Interesa resaltar que la Revolución Gloriosa señalaría el triunfo de una nueva estructura basada en los derechos individuales, la libre acción económica y el interés privado, beneficiando los intereses de la burguesía y creando las premisas políticas para el interior desarrollo del capitalismo en Inglaterra. Precisamente en 1689 Locke publicó sus dos obras más importantes: Dos tratados sobre el gobierno civil, considerados como una justificación teórica de la Revolución Gloriosa y un clásico del liberalismo, y también publicó su obra "Ensayo sobre el entendimiento humano".

En el primer Tratado se critican los argumentos de la obra de Sir Robert Filmer "Patriarca, o el poder natural de los reyes" publicada en 1680 y en la que se defiende el absolutismo real y la

justificación del poder absoluto. Adam recibe de Dios el poder monárquico absoluto y lo trasmite a sus hijos mayores descendientes. Locke niega que la autoridad real le haya sido concedida a Adam por Dios y que sea transmitida a sus herederos. En el segundo Tratado, dedicado como su título expresa al origen extensión y fin del gobierno civil, se cuestionan las posturas absolutistas de Hobbes y los monárquicos

La preocupación principal de Locke en sus Tratados es la cuestión del orden político justo de la comunidad, ante la que la cuestión de la democracia pierde importancia. Su objetivo central es la crítica radical a la monarquía absoluta y el establecimiento de las coordenadas de un sistema de gobierno legítimo, es decir, de un gobierno que no transgreda los límites que el pacto social ha marcado para la comunidad política. Estos límites arrancan ya de su concepción de la naturaleza humana. En pocas frases se puede decir que Locke basa su teoría política en una concepción del hombre como ser creado por Dios, por lo que tiene la obligación de seguir la ley natural, respetando su vida, que no le pertenece y de la que no puede disponer a su antojo.

Este orden natural se convierte en el punto de partida, a la vez que límite, de la comunidad política y del poder legítimo en ella. La comunidad política es entendida como surgida de un pacto entre los hombres con la finalidad de evitar las insuficiencias del mero orden natural para la conservación de la vida. Toda la construcción del sistema político en Locke va encaminada a la protección del derecho natural a la vida, a la libertad y las propiedades, por lo que los poderes del estado deben ser limitados así como los medios que utilicen.

Al poder legislativo, que es el máximo poder estatal, le somete a unos límites muy claros: no puede ser un poder arbitrario y absoluto sobre las vidas y las fortunas del pueblo, pues el bien común de la

sociedad es un límite que no puede transgredir¹²⁵; está obligado a actuar de acuerdo con leyes públicas, promulgadas y vigentes¹²⁶; no puede arrebatar a nadie parte alguna de su propiedad sin su propio consentimiento; el poder fijar y cobrar los impuestos requiere el consentimiento¹²⁷ el legislativo; no puede transferir a otras manos el poder de hacer las leyes, dado que el ese poder lo tiene por delegación del pueblo¹²⁸.

Esta idea básica de un Estado con un poder limitado como consecuencia de los fines para los que ha sido establecido está asimismo en la base de su idea de la tolerancia religiosa, por cuanto la autoridad estatal se limita exclusivamente a los intereses de la comunidad política, no pudiendo ni debiendo extenderse hasta la salvación de las almas.

Frente a la cuestión principal de la limitación del poder de la comunidad política es una cuestión secundaria para Locke la forma concreta por la que la mayoría de la comunidad política opte para el ejercicio del poder. Una vez formada la comunidad política es la mayoría de los asociados la que tiene todo el poder de la comunidad. Y este es un punto importante en Locke, que se mantendrá en la tradición liberal y democrática. La mayoría puede hacer las leyes y manda ejecutarlas al gobierno, con lo que estaríamos ante una democracia; o la mayoría deposita el poder de hacer las leyes en unos pocos (aristocracia); o la mayoría deposita el poder en uno solo. Caben también combinaciones de las posibilidades anteriores¹²⁹.

El principio de la mayoría como decisivo en la comunidad política lo fundamenta Locke con los siguientes argumentos: para que

¹²⁵ Dos Ensayos: II, 301-303

¹²⁶ Dos Ensayos: II, 303-305

¹²⁷ Dos Ensayos: II, 305-308

¹²⁸ Dos Ensayos: II, 308

¹²⁹ Dos Ensayos: II, 298.

la comunidad pueda actuar tiene que moverse en la dirección de la fuerza mayor, que no es sino la fuerza que surge de la mayoría. Si no fuera así, la comunidad no podría actuar. El acto de la mayoría es realmente el acto del conjunto, de la totalidad, por consiguiente, las resoluciones de la mayoría son definitivas, pues se entiende –según la razón- que la mayoría cuenta con el poder de dicha totalidad;

Para que la comunidad como tal pueda actuar es preciso, en definitiva, que se actúe según la mayoría, pues resulta imposible que se de una situación en la que todos y cada uno de los miembros de la comunidad puedan dar su consentimiento, pues los problemas de salud, del trabajo hacen imposible esa situación, pero también lo hace el hecho de la disparidad de opiniones entre los individuos que impide llegar a una actuación colectiva de la comunidad si no se someten a la mayoría.

Si el pacto por el que se funda la comunidad no se sometiera a la mayoría no tendría ningún sentido, es más, no sería realmente un pacto fundacional. Si sólo contase con los lazos entre los individuos del estado natural, es decir, que serían lazos muy flojos, no sería realmente un pacto. La sumisión a la mayoría va de la mano con el pacto pues de lo contrario el individuo estaría tan libre como antes del pacto si sólo quisiera someterse a lo que considerara conveniente.

La entrega en el pacto es a la mayoría. La entrega que hacen los individuos de parte de sus derechos naturales en el pacto es la entrega a la mayoría de todo ese poder necesario para formar la comunidad. Es decir, cualquiera que abandone el estado de naturaleza para unirse a una comunidad ha de entender que la entrega que hace del poder necesario para cumplir los fines de la sociedad la hace a la mayoría de esa comunidad, a menos que expresamente acordaran que se precisa un número mayor que la mayoría.

Con lo cual “aquello que inicia y constituye en realidad a una sociedad política no es más que el consenso de un grupo de hombres

libres que pueden formar una mayoría para unirse e incorporarse a tal sociedad”¹³⁰. En otro pasaje del libro vuelve a repetir Locke que “una vez que los hombres se reúnen por vez primera en sociedad, la mayoría es la que tiene todo el poder de la comunidad”¹³¹.

En el segundo tratado queda claramente expuesto el derecho de resistencia que muchos autores han interpretado como un trabajo en defensa de la revolución “siempre que los legisladores destruyen o se adueñan de la propiedad del pueblo, o los esclavizan bajo un poder arbitrario se ponen a sí mismos en un estado de guerra respecto a su pueblo, el cual queda, por ello, libre de seguir obedeciendo”¹³². Si un gobierno o un particular hacen uso de la fuerza sin tener derecho a ello, “y tal es el caso de cualquiera que actúe violentamente contra la ley, se coloca en un estado de guerra respecto a aquellos contra los que ha empleado esa fuerza”.

La principal causa de las revoluciones no es entonces la “insensatez gratuita” de los pueblos o su deseo de acabar con los gobernantes, sino los intentos de estos últimos “de obtener y ejercer un poder arbitrario sobre sus pueblos” y, sea uno gobernante o súbdito, “el que atropella por la fuerza los derechos del príncipe o del pueblo y se propone acabar con la constitución y con el aparato de cualquier gobierno justo es, a mi juicio, culpable de haber cometido el mayor crimen de que un hombre es capaz”¹³³. El peor de los males no se halla en la anarquía, como para Hobbes, sino en el despotismo, la opresión y la mala conducta del soberano¹³⁴.

Finalmente precisemos que Locke, distingue entre República y democracia. República, quiere decir una comunidad independiente, lo

¹³⁰ Dos Ensayos: II, 96-99

¹³¹ Dos Ensayos: II, 298

¹³² Dos Ensayos II, 222

¹³³ ” (II, 230).

¹³⁴ Várgagy, Tomás. *El pensamiento político de John Locke y el surgimiento del liberalismo*. Capítulo II

que los latinos llamaban civitas. Democracia, sin embargo, es una forma concreta de ejercer el gobierno de la comunidad política¹³⁵.

1.2.3 El empirismo de David Hume

Filósofo, economista e historiador David Hume (1711-1776) es asimismo considerado como un precursor de la ideología liberal. Estudiante de jurisprudencia se traslada a Francia y decide abandonar la abogacía por la filosofía y la literatura, constituyéndose como un renovador del género del ensayo y su pensamiento.

El “Tratado de la naturaleza humana” (1739-1740) que sería seguido en sus ideas y propuestas por el ensayo titulado “Investigación sobre los principios de la moral” (1751), se considera como la cumbre de la filosofía de Hume. “La naturaleza humana, dice, es la única ciencia del hombre”. En realidad, todas las ciencias se vinculan con la naturaleza humana, aun aquellas que parecen más independientes, como las matemáticas, la física y la religión natural; porque también éstas forman parte de los conocimientos del hombre y caen bajo el juicio de las potencias y las facultades humanas.

La primera parte de esta obra trata del conocimiento humano, la segunda parte habla de las pasiones, y en la tercera de la moral. Hume defiende que la mayoría de las conductas que aprobamos tienen en común incrementar la utilidad y el bienestar público y niega la existencia de una “razón práctica” y la posibilidad de una fundamentación racional de la ética.

Hume expresa su desconfianza en los intentos de reformar la sociedad y aconseja a los pueblos que no se rebelen contra sus gobernantes excepto en casos de tiranía flagrante. Apoya la libertad de prensa, se muestra optimista respecto al progreso social y mantiene que gracias al desarrollo económico que resulta de la expansión del comercio las sociedades progresan en el marco de la civilización. Las

¹³⁵ Dos Ensayos: II, 299

sociedades civilizadas son abiertas, pacíficas y sociables y sus ciudadanos muchos más felices.

Su obra Ensayos de moral y política (1741-42) le supuso por un lado cierto reconocimiento académico pero también fue acusado de herejía, algo que le privó, pese a ser absuelto, acceder a la Cátedra de Filosofía en la Universidad de Edimburgo. En esta obra trata de conciliar la libertad humana con la creencia mecanicista que los seres humanos somos parte de un universo determinista. Para él la libertad requiere necesidad: las acciones son por su propia naturaleza temporales y perecederas; la razón es para Hume una calculadora de razones y experiencias.

Hume critica el argumento clásico de que todo el orden es un indicio de su origen divino. Para Hume la religión tiene su origen en el sentimiento de miedo de la gente y en la ignorancia de las causas de los eventos terribles de la naturaleza, por lo que se le considera un precursor de la corriente laica del pensamiento.

1.2.4. Jeremy Bentham y el Utilitarismo.

Jeremy Bentham (1748-1832), es considerado como el padre del utilitarismo que fundamenta asimismo el liberalismo. Abogado desde los 18 años, es autor de una importante serie de escritos entre los que destac¹³⁶ su “Introduction to the Principles of Morals and Legislation”, (1780), obra en la que propone como objetivo de la actividad política la consecución de “la mayor felicidad para el mayor número de personas”.

¹³⁶ A *Fragment on Government*, (1776); *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (1780); *Of Laws in General*, (1782) y *Defense of Usury*, (1787). Con posterioridad a la Constitución de Cádiz corresponden sus obras las siguientes *Chrestomathia*, (1817); *On the Liberty of the Press and Public Discussion*, (1820); *The Rationale of Reward*, (1825); *Rationale of Judicial Evidence*, (1827); *Constitutional Code*, (1830); *The Rationale of Punishment*, (1830); y *Pannomial Fragments*, (1831).

Bentham manifiesta que todo aquello que cause repugnancia, odio o disgusto, solamente provocaría el desacato de los gobernados; de tal forma que es responsabilidad del legislador hallar los medios necesarios para proporcionar la mayor cantidad de felicidad a sus gobernados, si es que quiere lograr de ellos la unidad y el acatamiento a la norma: “El gobierno es como la medicina: lo único que debe ocuparle es la elección entre los males. Toda la ley es un mal, porque toda ley es una infracción de la libertad; pero, lo repito, el gobierno no puede hacer más que escoger entre males...”

La consideración del legislador no le implica “ser esclavo de los caprichos de sus súbditos... entre la oposición imprudente y una condescendencia servil, hay un medio honorífico y seguro que es el de combatir estos caprichos con las únicas armas que pueden vencerlos, el ejemplo y la instrucción: debe instruir a su pueblo, debe dirigirse a la razón pública y debe tomarse tiempo para quitar la máscara del error”. Para ello establecerá cuatro poderes o sanciones, que debe respetar el legislador para dar las mejores leyes posibles: la sanción natural, la sanción religiosa, la sanción política y la sanción moral.

Para Bentham la sociedad debe regirse por la voluntad del mayor número de sus individuos, y el modelo representativo es una forma de gobernar esa mayoría. Igualmente tanto las leyes como el gobierno deben apuntar a favorecer el bienestar social mediante la obtención y disfrute de bienes que reduzcan la desigualdad material, es decir que por su misma utilidad satisfagan las necesidades de los individuos para que se eleve el nivel de vida de los gobernados, cause felicidad y tranquilidad, y lleve en consecuencia a mejorar el rendimiento y a incrementar los esfuerzos contribuyendo además a disminuir el cometimiento de delitos.

Según su idea “lo conforme a la utilidad o al interés de un individuo es lo que es propio para aumentar la suma total de su bienestar; lo conforme a la utilidad o al interés de una comunidad, es

lo que es propio para aumentar la suma total del bienestar de los individuos que la compone”¹³⁷

El influjo de Bentham en Francia y Alemania sería menor a pesar de que los franceses concederían a Bentham la ciudadanía honoraria pero sí sería importante en España donde Antonio Puigblanch, antiguo profesor de Derecho Civil en Alcalá que había sido miembro de las Cortes tradujo su obra y en la América española donde su pensamiento constituyó uno de los pilares de las corrientes liberales de la primera mitad del siglo XIX.

Merece para nosotros una especial consideración su escrito “Consejos que dirige a las Cortes y al pueblo español”¹³⁸ a propósito de los acontecimientos que suponen la instauración del liberalismo gaditano y del trienio liberal. Bentham contradice el sistema legal y judicial inglés lo que le lleva a la formulación de la doctrina utilitarista, plasmada en su obra principal: “Introducción a los principios de moral y legislación”, en la que preconizaba que todo acto humano, norma o institución, deben ser juzgados según la utilidad que tienen, esto es, según el placer o el sufrimiento que producen en las personas.

A partir de esa simplificación propone formalizar el análisis de las cuestiones políticas, sociales y económicas, sobre la base de medir la utilidad de cada acción o decisión. Así se fundamentaría una nueva ética, basada en el goce de la vida y no en el sacrificio ni el sufrimiento. El objetivo último de lograr “la mayor felicidad para el mayor número” le acercó a corrientes políticas progresistas y democráticas: la Francia republicana surgida de la Revolución le honró con el título de “ciudadano honorario” (1792), si bien Bentham

¹³⁷ Bentham, Jeremy, *Tratado de Legislación Civil y Penal*. Madrid: Editorial Nacional, 1981, p. 28-29.

¹³⁸ Bentham, Jeremías. *Consejos que dirige a las Cortes y al pueblo español*. Ed. de José Joaquín de Mora: Madrid, 1820.

discrepaba profundamente de Rousseau y consideraba absurdo el planteamiento iusnaturalista subyacente a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

Lo bueno es lo útil, y lo que aumenta el placer y disminuye el dolor. “La naturaleza ha colocado a la humanidad bajo el gobierno de dos amos soberanos: el dolor y el placer. Ellos solos han de señalar lo que debemos hacer”. La ética se convierte, para Bentham, en una cuestión de cálculo de consecuencias o consecuencialismo¹³⁹.

Suele considerarse que el empirismo de Bentham se fundamenta en la obra de Locke “Essay concerning Human Understanding”, que Bentham leyó en sus años de formación. De esta obra asume tres importantes reflexiones: Todas las ideas pueden ser divididas en sus componentes más elementales, o sea, que las ideas son simples que no pueden ser descompuestas o son complejas, como resultado de una asociación de ideas simples; Todas las ideas simples son sensibles, pero existen aquellas que representan cualidades que pertenecen a los objetos (las cualidades “primarias”) y otras que no, expresando sólo cualidades de la mente que percibe (las cualidades “secundarias”); Nuestras ideas sobre el bien y el mal, nuestras ideas morales, son ideas complejas. Dado que todas las ideas simples son sensibles, nuestra primera idea del bien sólo puede haber sido una sensación agradable (“placer”), y la del mal una sensación desagradable (“dolor”). Está claro que el dolor y el placer no son

¹³⁹ Habla de un cálculo felicítico, intenta dar un criterio para ayudar a los demás en la búsqueda de lo útil, y hace una clasificación de placeres y dolores. Los placeres son medibles, aunque hay que considerar siete criterios: Intensidad; Duración; Certeza; Proximidad; Fecundidad (situación agradable que genere más placer) y Pureza (ausencia de dolor). Extensión, hay que entenderla como que hay motivos que impulsan a considerar intereses ajenos porque eso puede caer en propio beneficio (que te llamen simpático, benevolente, generoso...). En la extensión cuando se trata del Estado, sí que se habla de lo útil para la sociedad, el legislador debe preocuparse de que con sus leyes den “la mayor felicidad al mayor número de ciudadanos”. Debe buscar intereses generales.

cualidades de los objetos que las provocan, sino tan sólo modificaciones de la mente¹⁴⁰.

Es sobre esta base sobre la que Bentham se plantea la definición de la comunidad política y consecuentemente el interés de la comunidad que debe de fundamentar todas las deliberaciones políticas, especialmente aquellas que tiene como resultado crear la legislación. Para Bentham la felicidad de la comunidad debe ser una simple suma de las felicidades individuales. De este modo formula un algoritmo “Felicific calculus” o cálculo de la felicidad, con la finalidad de calcular el grado de felicidad que causa una acción específica, y por lo tanto de rectitud moral¹⁴¹.

El Felicific calculus es uno de los objetivos primordiales de la teoría de la elección social. Su pregunta central es ¿cómo construir una función de utilidad social respetuosa de las preferencias individuales?. La teoría de la elección social, entonces, recupera el sentido sensorial del principio de utilidad.

El valor de un placer o dolor para una persona será mayor o menor según: su intensidad (cuán intensa es); su duración (por cuánto tiempo); su certeza (cuán seguro es su logro) y su proximidad (cuán pronto). Para estimar el acto que origina ese placer o dolor habrá que

¹⁴⁰ Más adelante, en la Introducción, Bentham enumerará algunas variables que definen cómo puede hacerse una suma de placeres y de dolores: la suma es mayor o menor si los placeres comprendidos son más o menos intensos, más o menos duraderos en el tiempo, más o menos fértiles (esto es, si su fruición ahora da o no nacimiento a nuevas fruiciones en el futuro), más o menos extensos (comprendiendo mayor o menor número de individuos). Así, un placer más intenso ahora puede no ser el más duradero o el más fértil. De modo que un placer sentido más prolongadamente en el tiempo puede substituir con ventaja, en el cálculo de la felicidad, a un placer más intenso en el presente y por eso más corto. También, un placer que se extiende a más individuos puede substituir con ventaja a un placer más intenso que abarque un número menor de personas. *La filosofía política moderna*. De Hobbes a Marx. 2000, Capítulo X Cícero Araujo. “*Bentham: el utilitarismo y la filosofía moderna*”, Págs. 269-288.

¹⁴¹ También se lo conoce por Cálculo utilitario o Cálculo hedonista.

considerar otras dos circunstancias: su fecundidad (si conducirá a otros placeres); su pureza (cuánto dolor le acompaña). Para calcular el valor de un placer o dolor para un conjunto de personas se tendrá en cuenta una séptima circunstancia: su extensión (qué número de individuos se ve involucrado).

Cada acción que nos proponemos realizar debe medirse en función de la cantidad de unidades de placer que obtenemos o esperamos obtener en cada categoría. La acción más correcta (la más ética) será la que dé un total más alto de puntos. Consecuentemente los beneficios de un Estado estaban en sí mismo en función de la felicidad que contenían, por lo que, el felicific calculus puede al menos en principio, establecer el estatus moral de cualquier acto.

La teoría de la elección social recupera el sentido sensorial del principio de utilidad. El valor de un placer o dolor para una persona será mayor o menor según: su intensidad; su duración; su certeza; su proximidad; su fecundidad; su pureza y su extensión. Cada acción debe medirse en función de la cantidad de unidades de placer que obtenemos o esperamos obtener en cada categoría. La acción más correcta y por tanto la más ética será la que dé un total más alto de puntos. En consecuencia cuanto mayor sea el número de los beneficiados por una determinada decisión política o por una legislación, mayor será la felicidad de la comunidad.

La novedad del benthamismo es verdaderamente práctica lo que le permite plantear un programa muy práctico y moderno de reformas políticas. Para Bentham un Estado racionalmente organizado es una de las precondiciones para conseguir en el plano político la mayor felicidad de los súbditos. Las leyes deberán ser coherentes, unificadas y ágiles, pero no deben de estar fundadas en una tradición, si no simplemente en el principio de utilidad.

En este sentido Bentham se aparta del contractualismo de Locke. El Principio de utilidad exige la adaptación a cada momento y

por tanto puede ir en contra de la permanencia de las leyes construidas en un pasado remoto. Bentham es un crítico del tiempo político vigente al entender que los gobernantes ignoran las reformas que exige la felicidad general de los ciudadanos planteando la distinción entre gobernantes y gobernados. Esta distinción y sobretodo la actuación de los gobernantes en beneficio del interés general le lleva a articular un dispositivo institucional por el que se aumente la probabilidad que converjan los interés de gobernantes y gobernados y ello será la forma que llama “Democracia representativa pura”.

Así Bentham defiende la soberanía popular como la supremacía de los interés de las “clases numerosas”, es decir, de la mayoría siendo la única forma de garantizar la soberanía popular extender el sufragio a las “clases numerosas” y garantizar la igualdad del voto “cada cabeza un voto”.

Podemos concluir estas consideraciones sobre el pensamiento de Jeremy Bentham con la figura de Stuart Mill, aunque su obra sea notablemente posterior al tiempo que nos ocupa si puede considerarse como legítimo heredero del pensamiento liberal, del pensamiento expuesto sobre el liberalismo y el utilitarismo. La personalidad de John Stuart Mill (1806-1873) filósofo británico, economista político y funcionario público le permite ser considerado como el más influyente filósofo de habla inglesa del siglo XIX y cuya concepción de la libertad justifica la libertad del individuo en oposición al control estatal ilimitado.

Mill es ante todo un defensor del liberalismo de Locke y del utilitarismo de Jeremy Bentham. A la edad de catorce años, Mill se quedaría un año en Francia con la familia de Sir Samuel Bentham, hermano de Jeremy Bentham.

En los primeros capítulos de la obra de Mill, *Considerations on Representative Government* (1861), se elabora una forma de gobierno ideal, aunque en una obra anterior -*A System of Logic*, en su libro VI -

había escrito que no se podía discutir en abstracto sobre las formas de gobierno¹⁴². En *Considerations*, sin embargo, pretende construir la mejor forma de gobierno como un modelo con el que se pueda juzgar y valorar las distintas formas de gobierno concretas.

Esta mejor forma de gobierno es para él el “gobierno representativo”, porque es el que cumple mas adecuadamente las dos funciones básicas que ha de ejercer un buen gobierno. La primera de estas funciones es el fomento o promoción de las buenas cualidades de los individuos, en las que se incluyen cualidades morales e intelectuales, pues si fallan los individuos, de qué sirven las instituciones, se pregunta.

Un buen gobierno será, por tanto, el que fomente el carácter de los individuos, entendiendo por carácter el vigor y la independencia de opinión, que había reclamado en su conocido ensayo *Sobre la libertad* (1859). La segunda de las funciones cuyo cumplimiento caracteriza al buen gobierno hace referencia a la dirección de los asuntos colectivos, en la que lo decisivo es cómo los dirige el gobierno y cómo los individuos intervienen en esta función.

Tomando en cuenta estas dos funciones o criterios, Mill define el “gobierno representativo” como “la forma de gobierno que inviste de la soberanía a la masa reunida de la comunidad, teniendo cada ciudadano no sólo voz en el ejercicio del poder, sino, de vez en cuando, intervención real por el desempeño de alguna función local o general” (*Consideraciones*: 34-35). Poco más adelante escribe que el gobierno representativo significa “que la nación, o al menos una porción numerosa de ella, ejerza, por medio de diputados que nombra periódicamente, el poder supremo de la inspección e intervención; poder que en toda Constitución debe residir en alguna parte. La nación debe poseer este poder en el sentido más absoluto de la palabra. Debe

¹⁴² J.St. Mill. *Del gobierno representativo*. Traducción de Marta C.C. de Iturbe. Presentación de Dalmacio Negro. Madrid, Tecnos, 1985.

ser dueña, cuando lo desee, de todas las operaciones del Gobierno" (*Consideraciones*: 54).

El "gobierno representativo" se opone, por consiguiente, al despotismo, que consiste en una forma de gobernar que no fomenta las cualidades morales e intelectuales de los individuos (*Consideraciones*: 69) y bajo la que la "nación como colectividad y los individuos que la componen no tienen ninguna influencia sobre su propio destino" (*Consideraciones*: 31). En resumen, el "gobierno representativo", al que también denomina "gobierno popular", es la mejor forma de gobierno por cuanto son las propias personas afectadas quienes dirigen sus propios intereses y por cuanto aumenta la prosperidad general al ser más variadas e intensas las facultades consagradas a su desarrollo.

En el gobierno representativo o popular se realiza la máxima que él siempre considera válida de que "cada uno es el único custodio seguro de sus derechos e intereses", mientras que en la máxima contraria –anteponer los intereses de los otros a los propios- se verá la expresión del comunismo (*Consideraciones*: 35).

1.2.5 Edmund Burke y el liberalismo "conservador"

Edmund Burke, será uno de los mas significados conocedores y analistas de la Revolución Francesa sobre la que publicó en 1790 sus *Reflexiones sobre la Revolución Francesa* que representa la ideología de los liberales que censuraron los excesos de la revolución criticando lo que le pareció una ruptura innecesaria.

En 1756 había ya escrito su obra "*Vindicación de la sociedad natural una visión de las miserias y males que surgen a la humanidad*" (*A Vindication of Natural Society: A View of the Miseries and Evils Arising to Mankind*), en la que diferencia la sociedad natural de la sociedad política y tras observar la propia tragedia de la historia en la que la crueldad y los tumultos y horrores

se han sucedido, considera las tres formas de gobierno apreciando una combinación entre monarquía aristocracia y democracia moderada.

Para Burke el hombre nace inmerso en una sociedad que es anterior a él y lo individualiza. La sociedad es el resultado de la providencia. El hombre vive en la confrontación entre la virtud y el deseo predominando su consciencia que lo convierte en un ser moral venciendo al egoísmo y por ello debe prevalecer el hombre virtuoso que se impone el deber de respetar a los demás sobre el deseo de dominarlos y el político virtuoso-moral cuya misión es la de legislar para asegurar el derecho a una consciencia moral y proteger los derechos de los hombres entendidos como la necesidad moral de poder ser libres.

Burke entiende la libertad en sentido negativo “el hombre tiene derecho a hacer todo lo que pueda hacer por si solo sin atropellar a otros”. El grado de libertad que pueda concederse a una sociedad dependerá en gran medida de las virtudes molares imperantes entre sus miembros. Para Burke “la idoneidad de los humanos para la libertad civil esta en relación directa con la disposición a atar con cadenas morales sus apetitos”. “La libertad debe ser limitada para ser poseída”.

Estas ideas las resume Burke con claridad en su carta a los sheriffs de Bristol. “La libertad civil, señores, no es algo que yace en las profundidades de la ciencia abstracta, como se les ha tratado de persuadir. Es una bendición y un beneficio, no una especulación abstracta, y todo razonamiento respecto a ella es tan sencillo que se adapta perfectamente a las capacidades de aquellos que deben disfrutarla, y de aquellos que deben defenderla. No tiene nada en común con aquellas fórmulas geométricas y metafísicas que no admiten términos medios y que deben ser verdaderas o falsas en toda su latitud.

La libertad social y cívica, como otros aspectos de la vida diaria, sufre mezclas y modificaciones, es disfrutada en diferentes grados y adquiere una infinita diversidad de formas, de acuerdo al temperamento y a las circunstancias de cada comunidad. La libertad "extrema" (que es su perfección abstracta, y su verdadera ausencia) no lleva a nada, ya que sabemos que los extremos, en todo lo que tenga relación con nuestros deberes o satisfacciones en la vida, son destructivos tanto para la virtud como para el disfrute de ellos.

Asimismo, la libertad debe ser limitada, para ser poseída. Es imposible fijar con precisión el grado de restricción que requiere, pero los hombres públicos deberían esforzarse por descubrir cuál será el mínimo de restricciones apropiado para la comunidad, empleando para ello experimentos prudentes y racionales. Porque la libertad es un bien que hay que mejorar y no un mal que hay que disminuir. No es tan sólo una bendición de primer orden, sino el resorte vital y la energía misma del Estado, cuya vida y vigor dependen del grado de libertad de que goza”¹⁴³.

Dedicado a la política inglesa del Parlamento se ocupará sobre las cuestiones coloniales norteamericanas apoyando la reconciliación con Estados Unidos, pero se manifiesta contrario a los sucesos de la Revolución Francesa publicando en 1790 su obra “Reflexiones sobre la Revolución Francesa” (*Reflections on the Revolution in France*) entendiendo que no fue sino la puesta en práctica forzada de las ideas racionalistas y abstractas de los ilustrados pero que en política no vale las abstracciones sino las cosas concretas. La aplicación de

¹⁴³ Castro, D. Burke, *La revolución y los intelectuales*. Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials, 1993.

abstracciones supone siempre forzar la realidad, idealizar la realidad. Para Burke la filosofía no es el instrumento de la política¹⁴⁴.

Para Burke lo censurable de la Revolución Francesa fue la pretensión de acabar con un orden de signos para instalar uno nuevo, pretensión que entienden quimérica porque ni la libertad ni la igualdad se consiguen por decreto. La historia es la creadora de la realidad y es obra de la providencia.

1.2.6 La literatura político inglesa del siglo XVIII

En los orígenes del sistema constitucional contemporáneo resultan asimismo influyentes sobre las ideas filosóficas y políticas de su tiempo diversas obras de pensadores y políticos sobre el sistema parlamentario y constitucional inglés. En tal sentido debemos considerar la obra de Sir William Blackstone (1723-1780), jurista inglés, juez y político conservador conocido sobretudo por su obra “*Comentarios sobre las Leyes de Inglaterra*”¹⁴⁵. Blackstone renuncia a su práctica como abogado convirtiéndose en profesor de Derecho Inglés.

En febrero de 1766, Blackstone publicaría el primer volumen de los Comentarios sobre las Leyes de Inglaterra, considerada su obra maestra, con la idea de presentar una visión completa del Derecho Inglés, que sería realizada en 4 volúmenes. Esta obra habría de tener gran influencia en los padres de la Independencia de los Estados Unidos concretamente en John Marshall, James Wilson, John Jay, John Adams, James Kent y Abraham Lincoln.

Otro de los más significativos teóricos es Jean Luis de Lolme, teórico político suizo nacido en Ginebra y convertido después en súbdito británico cuya principal obra sería “La Constitución de

¹⁴⁴ Burke, Edmund. *Reflexiones sobre la revolución en Francia*. Alianza Editorial. 2003

¹⁴⁵ Commentaries on the Laws of England. 1766.

Inglaterra” (1771) en la que aboga por una forma de gobierno constitucional equilibrando las ideas de la monarquía, la aristocracia y la democracia¹⁴⁶.

Lolme elogia a los elementos de la democracia representativa y se opone a la teoría más radical de la monarquía radical directa defendida por Rousseau. Ensalza el gobierno británico, ya que en su opinión la constitución no escrita de este gobierno encarnaba el ideal de gobierno equilibrado mejor que cualquier otro gobierno de la época. Su obra influyó también en los redactores de la Constitución de los Estados Unidos fundamentalmente en John Adams que consideró el libro de Jean Luis de Lolme uno de los más importantes sobre el constitucionalismo.

Esta obra sería traducida del inglés al español por Juan de la Dehesa, Catedrático de Derecho Español en la Universidad de Alcalá de Henares y publicada en Oviedo en 1812¹⁴⁷.

Cabe por último hacer tan solo una referencia puesto que en otro apartado lo hablaremos con más detalle sobre la exposición que del sistema político británico realizaría Montesquieu en su famosa obra “*De l’Esprit des Lois*” (1748) interpretando la Constitución Británica de acuerdo con la doctrina de la monarquía mixta y equilibrada tomada directamente de Locke. Esta obra tuvo una enorme resonancia en la España de finales del siglo XVIII y consecuentemente en los constituyentes liberales de Cádiz.

Importa destacar como consideración previa es la preferencia que finalmente tendrán los constitucionalistas españoles y concretamente los liberales, de las soluciones que ofrece la experiencia constitucional

¹⁴⁶ De Lolme, Jean-Louis (David Lieberman, ed. and introduction), *The Constitution of England*. Indianapolis, IN: Liberty Fund, 2007.

¹⁴⁷ Juan de la Dehesa, Jurista liberal asturiano fue Fiscal de la Audiencia y ministro de Gracia y Justicia durante la regencia de María Cristina de Borbón-Dos Sicilias entre febrero y junio de 1835. Senador vitalicio en 1837.

inglesa preferida por algunos liberales ya desde las Cortes de Cadiz a la experiencia constitucional generada por la Revolucion Francesa.

Sin duda aquí habría que aludir a la importante labor que desarrollo Lord Holland y que como señalaremos influyo muy directamente en Jovellanos, desde un primer momento a este efecto recordemos una de los cartas de Jovellanos enormemente expresiva pues en ella se detecta la influencia de Lord Holland en la propia realización de las Cortes.

*“Sus cartas del 14 y 14 me han llegado hoy aquí. No se le puede decir cuánto gusto me han dado. La confianza tan cariñosa que usted tiene en mí, ¿cómo la puedo pagar? Créame usted que me llena de reconocimiento, y aunque no estuviese tan lisonjeado de esta prueba de su amistad. Muchísimo gusto hubiera tenido en viendo sus dictámenes sobre las Cortes. Es cierto que la convocación de ellas (acomodadas a las luces del siglo y a los muchos mudamientos que se han hecho desde el siglo dieciséis, y muy aumentadas en el número de sus vocales) parece el medio más cómodo para sacar a ustedes y al país de las muchas dificultades con que (además de enemigos) están rodeados; y aún no estoy enteramente persuadido que la cercanía de estotros disminuya algo del peligro o de la necesidad del remedio.”*¹⁴⁸

Pero lo importante en este punto, como veremos es el posterior predominio del modelo inglés que supera la influencia constitucional francesa revolucionaria y napoleónica pero que será superada ya en la misma Francia por la doctrina constitucional francesa postnapoleónica caracterizada por su indisimulada anglofilia.

Esta es la realidad que se constata en aquellas figuras exiliadas en Inglaterra tras la vuelta de Fernando VII en 1814 cuando asumen el utilitarismo de Bentham y sobre todo el conocimiento real de un

¹⁴⁸ Cartas a lord Holland sobre la forma de reunión de las Cortes de Cádiz Gaspar Melchor de Jovellanos ArribaAbajo De lord Holland a Jovellanos. Jerez de la Frontera, 17 de abril de 1809.

sistema constitucional que no acude a la soberanía nacional si no que se fundamenta en la soberanía del Parlamento.

1.3 Fundamentos filosóficos y jurídicos de la Revolución Americana

Suele considerarse que las fuentes ideológicas de la Revolución norteamericana fueron primordialmente dos: el liberalismo democrático inglés, especialmente de Locke y Hume, y las aportaciones de la Ilustración francesa pero puede también afirmarse que el pensamiento político de los revolucionarios norteamericanos se caracterizó fundamentalmente por su practicismo. Por ello si en el campo teórico, usaron los fundamentos y principios filosóficos y jurídicos que ya habían sido elaborados en Inglaterra y Francia, al redactar su Constitución y estructurar los poderes del nuevo Estado, crearon un nuevo tipo de gobierno, que a su vez ejercería una gran influencia en todos los países del Viejo Continente, sin olvidar que la Constitución norteamericana es la primera Constitución democrática escrita.

La exposición de los principios y valores que fundamentan la revolución americana requiere una contextualización histórica y política. La Guerra de los Siete Años de 1763 no fue sino una serie de conflictos internacionales desarrollados entre 1756 y 1763, por la supremacía colonial en América del Norte e India y en la que tomaron parte, por un lado, Prusia, Hanóver y Gran Bretaña junto a sus colonias americanas y más tarde Portugal como aliado y por otra parte Sajonia, Austria, Francia, Rusia, Suecia y España, esta última a partir de 1761¹⁴⁹.

¹⁴⁹ Brumwell, Stephen. *Redcoats: The British Soldier and War in the Americas. 1755-1763*. Cambridge University Press. 2006

Esta guerra había sumido al gobierno británico profundamente en deuda, por lo que el Parlamento promulgó una serie de medidas para aumentar los ingresos fiscales de las colonias. El Parlamento Inglés creyó que estos actos eran un medio legítimo de contar con las colonias de pagar su parte justa de los costos para mantener las colonias en el Imperio Británico.

Muchos colonos, sin embargo, habían desarrollado una concepción diferente de la del imperio británico, al tiempo que pudieron invadir territorios hacia el oeste haciendo fortuna especulando en tierra indígenas. Aquella presión sobre las naciones indígenas había culminado en la Guerra de Pontiac que finalizó en un conflicto cruel que reflejaba una creciente división racial entre los colonos y los indios americanos. El gobierno inglés quería evitar la violencia racial, para lo que redactó un Decreto Real en 1763, mediante el cual se delimitaban las fronteras entre las tierras de los colonos y las de los indios y paralelamente entendió que las colonias debían pagar una proporción mayor de los costes asociados al mantenimiento de ellas en el Imperio.

Pero la existencia de una serie de impuestos directos seguido de otras leyes, destinadas a demostrar la autoridad británica, resultó impopular en las colonias, y debido a que las colonias no estaban representadas directamente en el Parlamento, los colonos argumentaron que el Parlamento Británico no tenía derecho a cobrar impuestos sobre ellos. Esta disputa sobre los impuestos era parte de una divergencia mayor entre las interpretaciones británicas y estadounidenses de la Constitución británica y el alcance de la autoridad del Parlamento en las colonias.

El punto de vista británico ortodoxo, que data de la Revolución Gloriosa de 1688, fue que el Parlamento era la suprema autoridad en todo el imperio, pero en las colonias, sin embargo, se había desarrollado la idea de que la Constitución Británica reconoce ciertos

derechos fundamentales, que ningún gobierno, ni siquiera el Parlamento, puede violar. Los colonos comenzaron a crear comités que llevarían a sus congresos provinciales sustituyendo al aparato gobernante británico en las antiguas colonias y culminando con la creación del primer Congreso Continental en 1774, mientras que el tema de la autoridad del Parlamento Británico en las colonias americanas se convirtió en una crisis después que el Parlamento aprobase las Leyes coercitivas en 1774 para castigar a la provincia de Massachusetts. Muchos colonos vieron los actos coercitivos como una violación de la Constitución británica y por lo tanto una amenaza para las libertades de todos los ciudadanos de la América británica.

Fue entonces en septiembre de 1774, cuando se reunió en Filadelfia el referido Primer Congreso Continental para coordinar una respuesta organizándose un boicot a los productos británicos y pidieron al rey por la revocación de los actos. Estas medidas no tuvieron éxito porque la corona y el Gobierno Británico estaban decididos a no dar marcha atrás en la cuestión de la supremacía parlamentaria. La mayoría de los colonos todavía confiaban en la reconciliación con Gran Bretaña. En el Segundo Congreso Continental reunido en Pennsylvania en Filadelfia en mayo de 1775, algunos delegados expresaron la esperanza de una solución porque aunque muchos de los colonos ya no creían que el Parlamento tuviera la soberanía sobre ellos, todavía profesaban lealtad al Rey Jorge, de quien esperaba que intercediera en su favor. Sin embargo a finales de 1775, el Rey emitió una proclamación de la rebelión, y anunció ante el Parlamento su voluntad de suprimir dicha rebelión con ayuda extranjera.

Para entonces fue dominante en las colonias asumir la ideología política del republicanismo surgiendo toda una serie de personalidades firmes defensoras de los valores americanos entre los que se significaron Samuel Adams, Patrick Henry, John Adams, Benjamin

Franklin, Thomas Jefferson, Thomas Paine, George Washington, James Madison y Alexander Hamilton, personajes que entendían que tenían un deber cívico para estar preparados y dispuestos a luchar por los derechos y las libertades de sus compatriotas.

Conocida la falta de voluntad del Rey para actuar como conciliador, se plantea ya claramente por Thomas Paine, convertido en un panfletista revolucionario comprometido a favor de la independencia de las 13 colonias.¹⁵⁰ Pocos meses antes Paine que vivía en Inglaterra había sido convencido por Benjamin Franklin para ir a las 13 colonias en septiembre de 1774 pasando a América donde rápidamente se pone al lado de los insurgentes americanos. Paine publica entonces su famoso folleto *Common Sense* (Sentido Común), dirigido “a los habitantes de América”, en el que se pronuncia en favor de la independencia colonial, la defensa del republicanismo como una alternativa a la monarquía y el gobierno hereditario. “*Common Sense*” sería publicado por primera vez de forma anónima el 10 de enero de 1776, al comienzo de la Revolución Americana logrando un éxito inmediato y teniendo, en términos relativos, la mayor venta y circulación de todos los libros de la historia estadounidense¹⁵¹.

Se ha dicho que este documento es “el panfleto más incendiario y popular de todo el período revolucionario”. En los primeros tres meses se vendieron 120 mil copias, en el primer año 500 mil ejemplares y en el primer año 25 ediciones. Los derechos de autor los cedió al ejército de George Washington que había sido designado por el Congreso Continental Comandante en Jefe del Ejército

¹⁵⁰ Nacido en 1737 en Norfolk, Inglaterra, hijo de un cuáquero trabajó como comerciante y ejerciendo como maestro de escuela en Londres. Convencido por Benjamin Franklin para ir a las 13 colonias en septiembre de 1774 pasa a América donde publica

¹⁵¹ Owen Aldridge, A. *Tom Paine's American Ideology*. 1984. Ayer, A.J. *Thomas Paine*. 1989.

Continental en 1775. “Common Sense” se presenta a los colonos americanos como un argumento a favor de la libertad de la dominación británica en un momento en el que la cuestión de la independencia era todavía indecisa. Paine renuncia a la filosofía y las referencias latinas usadas por los escritores de la época de la Ilustración, que estructuran el sentido común como un sermón, y se basa en referencias bíblicas.

La primera sección de este panfleto lleva el título “Del origen y Diseño de Gobierno” y en ella Paine hace una distinción entre la sociedad y el gobierno pasando luego a considerar la relación entre el gobierno y la sociedad en un estado de "libertad natural" explicando que las personas encuentran más fácil vivir juntos en lugar de separados y por ello se crea la sociedad. A medida que la sociedad crece, surgen los problemas, y las personas se reúnen para dictar reglamentos con el fin de mitigar los problemas. Según la sociedad sigue creciendo, un gobierno se convierte en necesario para hacer cumplir este reglamento, que con el tiempo, se convierten en leyes. Muy pronto, hay tanta gente dentro de la sociedad que no todos pueden reunirse en un solo lugar para hacer las leyes, por lo que empiezan la celebración de elecciones. Sostiene Paine que esto es el mejor equilibrio entre el gobierno y la sociedad.

A continuación Paine pasa a considerar la Constitución del Reino Unido, señalando que hay dos tiranías en la Constitución Inglesa la tiranía monárquica y aristocrática, del rey que gobierna por la herencia y no contribuye en nada a la gente. En la segunda sección Paine considera la primera monarquía desde una perspectiva bíblica e histórica, comenzando con el argumento de que todos los hombres son iguales en la creación y por lo tanto, la distinción entre reyes y súbditos es falsa apoyándose en varios versículos de la Biblia y examinando algunos de los problemas que los reyes y monarquías han causado en el pasado concluyendo que: en Inglaterra, un Rey tiene

poco más que hacer que hacer la guerra y regalar lugares, lo que en términos llanos, es empobrecer a la nación manifestando que tiene más valor un hombre honesto a la sociedad y ante los ojos de Dios, que todos los rufianes coronados que han existido.

Paine, también ataca el "estado mixto" la monarquía constitucional promovida por John Locke en la que los poderes del gobierno están separados entre un Parlamento o Congreso, que hace las leyes y un monarca que los ejecuta. La monarquía constitucional, según Locke, que limitaría los poderes del rey lo suficiente como para asegurarse de que el reino seguirá siendo legal y no se convierte fácilmente en tiránico. Según Paine, tales límites son insuficientes. En el estado mixto, el poder tenderá a concentrarse en manos del monarca lo que le permitirá finalmente a trascender las limitaciones impuestas sobre él.

En la tercera sección Paine plantea unas "Reflexiones sobre el actual estado de cosas de América" examinando las hostilidades entre Inglaterra y las colonias americanas y argumentando que la mejor solución es la independencia, proponiendo a tal fin realizar una Carta Continental (o Carta de las Colonias Unidas), que sería una Carta Magna estadounidense, que "debe provenir de un cuerpo intermedio entre el Congreso y el pueblo" y esbozando una Conferencia Continental que podría redactar una Carta Continental .

Esta Conferencia se reuniría y redactaría una Carta Continental que garantizase "la libertad y la propiedad a todos los hombres, y... el libre ejercicio de la religión" y también esbozar un nuevo gobierno nacional, que tendría la forma de un Congreso. El Congreso se reunirá anualmente, y elegirá un Presidente.

La cuarta sección del folleto trata "Sobre la capacidad actual de los Estados Unidos, con algunas reflexiones diversas" e incluye una visión optimista de Paine del potencial militar de Estados Unidos en el momento de la Revolución, planteando una serie de argumentos en

contra de la dominación británica: Es absurdo que una isla pueda gobernar un continente. Estados Unidos no era una "nación británica", sino que esta influida por diversos pueblos de toda Europa. Aunque Gran Bretaña es la "madre patria" de América ninguna madre haría daño a sus hijos tan brutalmente. Ser parte de Gran Bretaña arrastra a Estados Unidos a innecesarias guerras europeas, y evita que el comercio internacional en el que destaca poderosamente los Estados Unidos.

En otra serie de argumentos se plantea que la distancia entre las dos naciones hace difícil de manejar las colonias por Inglaterra. Si algo malo se convirtiera en una petición al Parlamento, se tomaría un año antes de las colonias recibieran una respuesta. Otra razón histórica que plantea es la de que los puritanos creyeron que Dios quería darles en América un refugio seguro contra la persecución de la dominación británica. Por último en Gran Bretaña, manifiesta Paine, gobierna las colonias en su propio beneficio, y no consideró los mejores intereses de los colonos en el gobierno de ellos.

Common Sense se convertiría, de este modo, en una llamada inequívoca por la independencia, y muchos estadounidenses indecisos entre la reconciliación y la independencia de Gran Bretaña fueron ganados por este panfleto de Paine contra la monarquía, en general, y los británicos, en particular. Por último el panfleto fue decisivo en la convocatoria general de la independencia y el pensamiento de los Padres Fundadores y su construcción de la Declaración de la Independencia, y sobre todo en la mentalidad de la gente común, de los ciudadanos, muchos de los cuales pronto se unirían al general Washington para luchar contra el ejército británico¹⁵².

¹⁵² Los escritos de Paine también tuvieron una gran influencia en la Revolución Francesa. Paine, proclamado ciudadano francés el 26 de agosto de 1792 fue elegido miembro de la Asamblea Nacional en 1792 pero considerado como un aliado de los girondinos, fue dejado de lado poco a poco, entre Robespierre y encarcelado en diciembre 1793. Después de que el Terror, fue puesto en libertad

Asimismo no podemos dejar de señalar otra de las obras de Paine titulada "Rights of man" "Derechos del Hombre" (Londres, 1791-92) en la que se contienen entre otras una referencia al principio de la soberanía nacional;¹⁵³ una crítica a la monarquía y la aristocracia terrateniente consideradas improcedentes a la luz de la razón y opuestas a la felicidad común como productoras de guerras y desigualdades¹⁵⁴ y una crítica a la propia aristocracia y concretamente contra la vieja corrupción y el parasitismo de los aristócratas que

y tuvo un cierto éxito con su libro "*The Age of Reason*" (La Edad de la Razón, 1793-1794), que analiza el cristianismo y los defensores de deísmo y Justicia Agraria (1795), en la que analiza los orígenes de los derechos de propiedad e introdujo un concepto cercano al salario mínimo. Thomas Paine permaneció en Francia hasta 1802, criticando la subida de Napoleón Bonaparte, Primer Cónsul llamándole el "charlatán más perfecto que jamás haya existido". Por invitación del Presidente Thomas Jefferson, regresó a Estados Unidos, donde murió en la pobreza a los 72 años. Hay un gusto de Thomas Paine en la Universidad de New York y una estatua en el Parc Monstouris.

¹⁵³ "¿Qué es el gobierno sino la conducción de los asuntos de una Nación. No es, y no puedo serlo por su naturaleza, la propiedad de cualquier hombre o familia particulares, sino la propiedad del conjunto de la comunidad, a cuyas expensas es sostenido; y aunque mediante la fuerza o el ingenio ha sido convertido en patrimonio privado, esta usurpación no puede alterar la naturaleza de las cosas. La soberanía, como un asunto de derecho, pertenece solamente a la Nación y no a un individuo cualquiera; y una Nación tiene en todo momento un derecho inherente e irrenunciable a abolir cualquier forma de gobierno que encuentre inconveniente y a establecer la que esté de acuerdo con su interés, disposición y felicidad. La romántica y bárbara distinción de los hombres en reyes y súbditos puede convenir a los cortesanos pero no a los ciudadanos; y resulta desmentida por el principio en el que los Gobiernos ahora se fundan. Cada ciudadano es un miembro de la Soberanía y, como tal, no reconoce sujeción personal y sólo obedece a las leyes"

¹⁵⁴ "Si pueden introducirse sistemas de gobierno menos caros y productores en mayor medida de felicidad general que los que han existido, todo intento de oponerse a su progreso resultará inútil. La razón, como el tiempo, seguirá su camino y el interés derrotará a los prejuicios. Si la paz universal, la civilización y el comercio proporcionan la felicidad de la mayoría de los hombres, se producirá una revolución en el sistema de los gobiernos para conseguirlas. Todos los gobiernos monárquicos son militares. La guerra es su comercio, el botín y las rentas sus objetivos. Mientras tales gobiernos continúan, no hay completa seguridad de un día de paz. ¿Qué es la historia de todos los gobiernos monárquicos, sino una repugnante imagen de la miseria humana con el accesorio respiro de unos pocos años de reposo? Aburridos de la guerra y cansados de la carnicería humana, se sentaron a descansar y llamaron a esto paz"

dominan el Parlamento británico no reformado y cargan de impuestos a la población.

Para Paine los derechos humanos se originan en la naturaleza y por lo tanto los derechos no se pueden conceder a través de un cargo político pertenecen intrínsecamente a todos los habitantes. El gobierno debe tener como propósito único la protección de la familia y sus derechos inherentes y inalienables. Esta obra sería condenada en Inglaterra como libelo sedicioso contra la corona.

Figura asimismo esencial de la Revolución Americana es la de John Adams¹⁵⁵ quién asimismo se opuso a las imposiciones del Parlamento Británico por entender que negaban a los colonos americanos los Derechos Fundamentales garantizados a todos los ingleses y que merecían todos los hombres libres entre otros los derechos a ser gravados sólo con el consentimiento y ser juzgados por un jurado de los compañeros. Adams redactará unas instrucciones que fueron enviadas por los habitantes de Braintree a sus representantes en Massachusetts y que servirían de modelo para otras ciudades para elaborar las instrucciones a sus representantes. Las "Instrucciones de Braintree" redactadas en 1765 se constituyeron como una sucinta y directa defensa de los derechos y las libertades coloniales.

A los 30 años en 1765, Adams escribió un ensayo titulado "Una disertación sobre el Canon y la Ley feudal"¹⁵⁶, una afirmación de las libertades que él consideraba un derecho natural de los colonos, y que fueron publicadas sin título y de forma anónima en la Gaceta de Boston, y más tarde en Gran Bretaña con el título de "los verdaderos sentimientos de los Estados Unidos."

¹⁵⁵John Adams (30 de octubre de 1735 – 4 de julio de 1826) llegaría a ser el segundo Presidente de los Estados Unidos. Es considerado como uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América.

¹⁵⁶Carey, George W., ed. *The Political Writings of John Adams*. (2001).

Años más tarde en 1772 Adams argumentó en un escrito dirigido al gobernador de Massachusetts, Thomas Hutchinson, que los colonos nunca habían estado bajo la soberanía del Parlamento Británico, que su carta original era con la persona del rey y su lealtad sólo con él. Si una línea viable no puede establecerse entre la soberanía parlamentaria y la total independencia de las colonias, continuó, las colonias no tendrían más remedio que optar por la independencia. Adams trataría de argumentar que las colonias eran plenamente soberanas sobre sus propios asuntos internos.

Convertido en un abogado reputado de Boston, en junio de 1774 Adams fue elegido para ir a Filadelfia como delegado de Massachusetts en el Primer Congreso Continental ayudando a su amigo, Thomas Jefferson, para redactar la Declaración de Independencia. En concreto en el Primer Congreso Continental en 1774 fue el autor de la Declaración de Derechos y Quejas, la declaración principal de los puntos de vista de los delegados acerca de las medidas arbitrarias del rey y el Parlamento se había impuesto a las colonias.

Después de que el Primer Congreso Continental, Adams publicó una serie de ensayos en la Gaceta de Boston bajo el nombre de "Novanglus" *"Novanglus; o una historia de la disputa con Estados Unidos Desde su origen, en 1754, hasta la actualidad dirigida a los habitantes de la colonia de la bahía de Massachusetts"* participando en las provocaciones que condujeron finalmente a la ruptura de la dominación británica.

Tiene asimismo singular interés el tratado que a petición de los delegados al Congreso de otras colonias, escribió en 1776 sobre la teoría constitucional, "Reflexiones sobre el Gobierno," en el que se manifiesta partidario de un gobierno republicano y de las legislaturas bicamerales. Muchos de los Estados utilizaron este texto para la redacción de sus Constituciones.

Este texto también defendió el bicameralismo, ya que "un solo conjunto es responsable de todos los vicios, locuras y debilidades de un individuo", sugiriendo asimismo que debe haber una separación de poderes entre el ejecutivo, el judicial y el poderes legislativo, y recomendó además que si un gobierno continental se formara entonces "sagradamamente debe limitarse" a ciertos poderes enumerados.

En suma el escrito de Adams "Reflexiones sobre el Gobierno" sería enormemente influyente y fue referido como fuente de autoridad en todas las instancias en las que se realizó la Constitución de los Estados Unidos.

1.3.1. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos

El 4 de julio de 1776 se realizaría la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, una Declaración aprobada por el Congreso Continental que anunció que las trece colonias americanas, entonces en guerra con Gran Bretaña, se consideraban como estados independientes, y que ya no formaban parte del Imperio Británico.

John Adams, había presentado una resolución a principios de año y convenció al comité para seleccionar a Thomas Jefferson para redactar el borrador original del documento. Jefferson había desempeñado al principio de la revolución americana la representación de Virginia en el Congreso Continental y desde mediados de 1784 sirvió como diplomático destinado en París. Jefferson consideraba que la independencia de los pueblos americanos de la madre patria americana era como romper por el tronco principal y que la guerra de la independencia fue el resultado natural de estar separados por el océano atlántico.

La Declaración fue en última instancia, una explicación formal de lo qué el Congreso había votado el 2 de julio para declarar su independencia de Gran Bretaña. La Declaración justifica la independencia de los Estados Unidos haciendo una lista de agravios

coloniales contra el rey Jorge III, y hace valer ciertos derechos naturales y legales, incluyendo el derecho de la revolución. Desde entonces, ha llegado a ser considerada como una importante declaración sobre los derechos humanos.

Cabe considerar la influencia de la obra de Locke, *Dos Tratados sobre el Gobierno civil* obra de filosofía política publicada anónimamente en 1689 por John Locke quién en el primer tratado realiza un ataque al patriarcalismo y en el segundo introduce una teoría de la sociedad política o civil basada en los derechos naturales y en el contrato social, fueron fuentes ampliamente gratas para los padres fundadores de los Estados Unidos. De hecho, el signatario de la Declaración de Independencia Richard Henry Lee declaró que la misma Declaración de Independencia fue “copiada de la obra de Locke, Tratado sobre el gobierno”¹⁵⁷.

La Declaración de Independencia fue la primera en su género anunciando la creación de nuevos Estados e influyó en los países europeos concretamente en algunos líderes de la Revolución Francesa y en el manifiesto de la provincia de Flandes en 1790 así como de las declaraciones de muchos de los países que se constituyeron en la América Hispana. Abraham Lincoln considera que la Declaración viene a ser el fundamento de su filosofía política, y sostiene que la Declaración de Independencia es una declaración de principios a través de la cual debe ser interpretada la Constitución de Estados Unidos.

La Declaración de Independencia tuvo una influencia importante en el debate sobre la esclavitud al plantear la contradicción evidente entre la afirmación de que “todos los hombres son creados iguales” y la existencia de la esclavitud en los Estados Unidos, hecho

¹⁵⁷ Jefferson, Thomas: *Los Escritos de Thomas Jefferson* (Washington, D.D: The Thomas Jefferson Memorial Association, 1904), Vol. XV, p.462, en una carta a James Madison fechada el 30 de Agosto, 1823.

puesto de manifiesto sobretudo por los abolicionistas que consideraron asimismo como el propio Thomas Jefferson tuvo la propiedad de cientos de esclavos, habiendo sido el principal autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776 y uno de los Padres Fundadores más influyentes, conocido por su promoción de los ideales del republicanismo, anticipando la visión de Estados Unidos de América como el respaldo de un gran «imperio de la libertad».

Es por ello por lo que el abolicionista inglés Thomas Day escribió en una carta de 1776, "Si hay un objeto verdaderamente ridículo en la naturaleza, es un patriota americano, que firma las resoluciones de la independencia con una mano y con la otra blandía un látigo sobre sus esclavos aterrorizados". Los abolicionistas considerarían la declaración como un documento esencial, sobretudo Abraham Lincoln, quién pensaba que la Declaración de Independencia expresaba los más altos principios de la Revolución Americana, y que los Padres de la Patria había tolerado la esclavitud con la esperanza de que finalmente se eliminara.

Años mas tarde, el 1 de enero de 1863, el Presidente Abraham Lincoln presentaría al pueblo estadounidense la proclamación de la emancipación que libertaba a los esclavos dentro de los estados confederados. Ello permitiría a la Unión reclutar soldados negros y permitió que Lincoln manifestase que la política de emancipación y el uso de tropas de color constituían el golpe más fuerte para la rebelión elevando la guerra al nivel de cruzada¹⁵⁸.

Asimismo se considera que la Declaración de Independencia al mantener la igualdad de todos los hombres permitió su utilización en

¹⁵⁸ En febrero de 1865, dos meses antes de que acabara la guerra, Lincoln le dijo al pintor de retratos Francis B. Carpenter que la Proclamación de la Emancipación era "el acto central de su administración y el evento más grande del siglo XIX".

la cuestión de la igualdad entre el hombre y la mujer. Esta igualdad se plantea en un proceso histórico o movimiento social de la edad contemporánea, que desde finales del siglo XVIII (Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana alternativa a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la revolución francesa) habría de proponer la reivindicación de los derechos de la mujer o la igualdad de derechos entre los sexos, lo que significaría la emancipación o liberación de la condición de la mujer.

Concretamente la Declaración de la Independencia fue el modelo seguido por la "Declaración de Sentimientos" presentada en julio de 1848, en la primera Convención de Derechos de la mujer celebrada en Seneca Falls, Nueva York, organizada por Elizabeth Cady Stanton, Lucretia Mott, Mary Ann McClintock, Martha White, y Hunt Jane. Los miembros de aquella Convención exigirían la igualdad social y política de las mujeres bajo el lema "todos los hombres y mujeres son creados iguales" y exigiendo el sufragio para las mujeres¹⁵⁹.

Los representantes de cada uno de los 13 estados independientes de América del Norte votaron unánimemente en 1776 la Declaración de la Independencia, constituyendo los Estados Unidos, que originalmente serían gobernados por una Confederación formada por un gobierno representativo seleccionado por asambleas legislativas del Estado.

La Declaración consta de dieciséis artículos en los que se reafirma la naturaleza inherente de los derechos a la vida, la libertad, propiedad, al debido proceso, la libertad de prensa y de religión y otros así como buscar y obtener la felicidad y la seguridad

¹⁵⁹ Es muy notoria la obra pictórica de John Trumbull sobre la Declaración de Independencia que se encuentra en el capitolio que realizó con la ayuda de Jefferson, Thomas.

considerándose al Gobierno como el servidor del pueblo, y enumerándose la separación de poderes.

La Declaración de Virginia fue elaborada inicialmente por George Mason, quién realizó los primeros borradores el 20 de mayo 1776 ayudado por James Madison en la sección sobre libertad religiosa siendo modificada posteriormente por Thomas Lee Ludwell y la Convención para añadir una sección sobre el derecho a un gobierno uniforme.

Mason fundamentó su proyecto inicial de los derechos de los ciudadanos que se describen en las obras anteriores, como el Proyecto Inglés de Ley de los Derechos de 1689, y la Declaración de derechos(1689) (Bill of Rights) según la cual el Rey no puede suspender la ejecución de las leyes, ni dispensar de las mismas; no puede fijar impuestos ni mantener un ejército sin el acuerdo del Parlamento; los súbditos pueden presentar recursos al rey quedando amparados contra los abusos de la justicia y siendo obligatorio convocar al Parlamento con frecuencia.

Puede considerarse la Declaración de Virginia como el primer texto moderno de protección constitucional de los derechos individuales de los ciudadanos de América del Norte, en el que se rechaza la noción de clases privilegiadas cargos políticos o hereditarias, tales como los miembros del Parlamento y la Cámara de los Lores.

1.3.2 La Constitución de los Estados Unidos de 1787 y la Carta de Derechos “Bill of Rights”

Los principios recogidos en la Declaración de Independencia serían incluidos en la Constitución de los Estados Unidos de 1787 que consagraría los derechos fundamentales idealizados por los revolucionarios republicanos y los garantizaría bajo un gobierno federado relativamente fuerte, al igual que el sufragio para realizar las elecciones nacionales. También se establece la soberanía popular, la

prohibición de privilegios de nacimiento es decir la igualdad ante la ley, la división de poderes, el juicio por jurados. Ciertamente es que faltaban todavía importantes avances, pues, la Declaración de Virginia conviviría todavía con la esclavitud y con la falta de derechos para las mujeres.

La contienda de Gran Bretaña y los Estados Unidos duró una serie de años en los que finalmente llegaron Francia y España a entrar formalmente en Guerra que finalizaría con la firma del Tratado de París el 13 de septiembre de 1783. Los Estados resultaban insuficientes para las exigencias de la soberanía en una Confederación, ante lo cual se decidió finalmente articular una convención constitucional que pusiera en marcha un plan de gobierno revisando los artículos de la Confederación. La Convención Constituyente llamada Convención de Filadelfia inició sus deliberaciones el 25 de mayo de 1787 y duraría hasta el 17 de septiembre siendo su intención la de crear un nuevo gobierno. George Washington fue elegido por unanimidad presidente de la Convención.

Los constituyentes americanos utilizaron las corrientes intelectuales entre ellas el liberalismo de John Locke, la teoría del contrato de gobierno de Thomas Hobbes la doctrina de la división de poderes de Montesquieu propuesta en su obra “El Espíritu de las Leyes” en la que afirma que la separación de poderes del estado debe estar al servicio de la libertad del pueblo, las libertades civiles de Edward Coke y William Blackstone, la soberanía de la legislatura recibida del pensamiento de Edmund Burke. Todos estuvieron de acuerdo con la forma republicana de gobierno basada en la representación de las personas de los Estados Unidos.

El 17 de septiembre de 1787 se adoptaba la Constitución de los Estados Unidos como ley suprema cuyas primeras diez enmiendas son conocidas como la Declaración de Derechos comenzando su preámbulo con las conocidas palabras “NOSOTROS, el pueblo de los

Estados Unidos, a fin de formar una Unión más perfecta, establecer Justicia, asegurar la tranquilidad interior, proveer para la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros y para nuestra posteridad los beneficios de la Libertad, establecemos y sancionamos esta Constitución para los Estados Unidos de América”

Este preámbulo supone afirmar que el poder y autoridad del gobierno federal de los Estados Unidos de América no depende de los varios estados o del pueblo de los diversos estados, sino de una entidad que está identificado como el Pueblo de los Estados Unidos de América, siendo la Constitución una formula contractual entre el Pueblo de los Estados Unidos de América, los diversos estados, y la nueva entidad: el gobierno federal de los Estados Unidos de América¹⁶⁰.

1.3.2 El pensamiento de los federalistas americanos.

La Constitución de los Estados Unidos constituida como la ley suprema de los Estados Unidos de América fue adoptada en su forma original el 17 de septiembre de 1787 por la Convención Constitucional de Filadelfia, Pensilvania y luego ratificada por el pueblo en convenciones en cada Estado.

Un gran número de las ideas de la Constitución se derivaron de la literatura del Republicanismo en los Estados Unidos, de la experiencia de los trece estados, y de la experiencia del Reino Unido con su forma de gobierno mixta. Sobre las ideas recibidas de la Europa Continental destacaremos la influencia de Montesquieu, quien enfatizaba en tener fuerzas equilibradas que se opusieran mutuamente para prevenir la tiranía y la influencia de John Locke así como la influencia que la tradición de gobierno democrático e igualitario de la

¹⁶⁰ Larson, Edward J.; Winship, Michael P. *The Constitutional Convention: A Narrative History from the Notes of James Madison*. New York: The Modern Library. 2005

Confederación Iroquesa tuvo en Benjamin Franklin a la hora de redactar la Constitución.

La Constitución entraría en vigor en cuanto la hubiesen ratificado nueve de los trece Estados. Para apoyar la ratificación aparecieron en los periódicos de Nueva York, entre finales de octubre de 1787 y comienzos de abril de 1788, una serie de artículos bajo el pseudónimo de Publius, que son conocidos como *The Federalist Papers*¹⁶¹.

Los Papeles federalistas constituyen una colección de 85 ensayos escritos entre 1787 y 1788 en defensa de la Constitución de los Estados Unidos y en apoyo de su ratificación. Son sus autores los Padres Fundadores Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, quienes publicaron la gran mayoría de los ensayos en dos periódicos. Finalmente editaron todos los artículos añadiéndole ocho ensayos adicionales publicándolos en un libro dividido en dos volúmenes y que fue titulado *El federalista o la nueva Constitución*.

En los Papeles federalistas se abordan las cuestiones políticas básicas que en que se fundamenta la nueva constitución de los Estados Unidos¹⁶². Su gran importancia radica en que han sido utilizados repetidamente por los jueces federales a la hora de interpretar ciertos

¹⁶¹ Publius Valerius Publicola había expulsado al último Emperador romano. Luego fue fundador de la república romana. Los federalistas querían fundar también una república.

¹⁶² Hamilton, Alexander (1755-1804) escribió 51 artículos, referidos sobre todo a cuestiones prácticas, especialmente cuestiones de política fiscal. Fue Secretary of the Treasury con el presidente George Washington entre 1789 y 1797. James Madison (1751-1836) escribió 29 de los artículos, referidos sobre todo a cuestiones teóricas sobre la constitución. Fue presidente de los Estados Unidos entre 1808 y 1817. John Jay (1745-1829) escribió 5 de los artículos, referidos básicamente a la política exterior. Fue el primer Juez supremo de los Estados Unidos entre 1789 y 1795. Los *Federalist Papers* están divididos en cuatro partes. Los 14 primeros exponen la importancia de la Unión de los Estados americanos. Los ocho siguientes abordan las insuficiencias de la Confederación existente hasta entonces. Los artículos 15-36 esbozan los fundamentos de la nueva constitución. El resto de los artículos –hasta el 85– discuten las objeciones que presentaban los detractores de la Constitución de 1787.

aspectos de la Constitución. El concepto de democracia con el que operan estos federalistas, especialmente James Madison, sigue la estela de John Adams, quien en los años anteriores había establecido una diferencia esencial entre una república y una democracia¹⁶³.

Las Constituciones de los nuevos Estados tras la independencia en 1776 habían sido consideradas usualmente como *Repúblicas* precisamente porque garantizaban que el poder político se ejerciera según las leyes. John Adams había escrito que la auténtica definición de “república” es el imperio de las leyes y no el de los hombres¹⁶⁴. En este mismo sentido, el propio Adams escribía algunos años después que la constitución de Inglaterra era en verdad una república, porque tenía una monarquía limitada constitucionalmente por dos ramas independientes, el poder aristocrático y el poder democrático¹⁶⁵, aunque otras voces de la misma época, como la de Thomas Payne, denunciaban la constitución británica precisamente por considerar que el rey era una tirano o una figura decorativa innecesaria¹⁶⁶.

John Adams tenía un concepto específico de república, no sólo diferente sino incluso opuesto al de democracia con lo cual ponía en entredicho el lema de los primeros años de lucha por la independencia de que "el pueblo no puede obrar mal". Con esta diferenciación entre república y democracia, Adams expresaba sus temores por el posible abuso del poder por parte del pueblo, pues en cualquier página de la historia, se podían encontrar pruebas irrefutables de que el pueblo, cuando no ha tenido contrapesos, ha sido tan injusto y tiránico, como cualquier rey o senado poseedor de un poder incontrolado.

¹⁶³ John Adams, *Thoughts on Government: Applicable to the Present State of American Colonies* (1776), en: Works, Boston 1855, vol. 4; *A Defence of the Constitutions of Government of the United States of America* (1787), en: Works, Boston 1855, vol. 4

¹⁶⁴ *Thoughts on Government*: pg. 194.

¹⁶⁵ *A Defence of the Constitutions*: 296, 358 y s.

¹⁶⁶ *Common Sense*, 1776.

Su credo político quedaría definido en una carta a Jefferson, en 1815 en los siguientes términos: "el principio fundamental de mi credo político es que el despotismo o poder absoluto es el mismo en una mayoría de una asamblea popular, un consejo aristocrático, una junta oligárquica o un emperador".

Madison parte de este concepto de república como el imperio de las leyes y no de los hombres y establece una clara diferencia y contraposición entre república y democracia. Por democracia entiende él "una sociedad formada por un reducido número de ciudadanos, que se reúnen y administran personalmente el gobierno"¹⁶⁷. Rechaza la "democracia" como forma de gobierno porque considera que la democracia es incapaz de canalizar un hecho fundamental derivado de la debilidad de la naturaleza humana: el egoísmo faccionalista, es decir, la actuación movida por pasiones o intereses adversos a los derechos de los demás o de la comunidad en su conjunto.

Para Madison la democracia no puede evitar los peligros derivados del espíritu de facción porque es una forma de gobierno en la que se generan mayorías unidas por pasiones o intereses comunes, no pudiendo atajar las circunstancias que incitan a sacrificar a la parte más débil o algún individuo odiado. Al ser los mismos ciudadanos quienes a su vez ejercen personalmente el gobierno, nada hay que pueda atajar sus ambiciones e intrigas, pudiendo brotar la tiranía en la primera ocasión favorable que se presente.

Según Madison los teóricos de la democracia han supuesto erróneamente que con la igualación de los derechos políticos de los ciudadanos se podrían igualar al mismo tiempo sus pasiones o afectos, sus opiniones y sus posesiones por eso las democracias han dado siempre el espectáculo de turbulencias y pugnas, y por eso han sido

¹⁶⁷ *El Federalista*: X, 36.

siempre incompatibles con la seguridad personal y los derechos de propiedad¹⁶⁸.

Considera que con la república, por el contrario es posible aceptar los intereses distintos derivados de la distribución real de la propiedad y canalizarlos de manera compatible con el bien común. Por República entiende un sistema de representación política que puede abarcar consiguientemente a un número grande de ciudadanos y un territorio extenso.

Precisamente estas son las dos características que hacen superior a la república sobre la democracia. La primera ventaja es la delegación del gobierno en unos cuantos hombres por parte del resto de los ciudadanos. La representación actúa como un filtro que refina los intereses de los particulares, pasándolos a través de un cuerpo de ciudadanos elegidos, cuya sabiduría puede discernir mejor los verdaderos intereses de su país y cuyo patriotismo y amor a la justicia hará menos probable que los sacrifiquen a consideraciones particulares o transitorias¹⁶⁹.

Para Madison que el poder de gobierno esté en manos de los representantes del pueblo es la garantía esencial, y la única eficaz, de los derechos del pueblo. Como la república puede abarcar un territorio extenso y diverso tiene una posibilidad mayor de encontrar representantes juiciosos. En un Estado más extenso habrá un número mayor de intereses distintos y, consiguientemente, menor será la probabilidad de que puedan asociarse en el sentido de una facción en contra los derechos de otros ciudadanos: "en la vasta república de los Estados Unidos y entre la gran diversidad de intereses, partidos y sectas que abarca, rara vez podría formarse una coalición mayoritaria

¹⁶⁸ *El Federalista*: X, 39.

¹⁶⁹ (*El Federalista*: X, 39-40).

sobre la base de principios que no fuesen los de la justicia y el bien general"¹⁷⁰.

Para que los derechos individuales no corran peligro se precisa de un sistema de representantes, que la democracia no tiene y para que los representantes no se conviertan en distorsionadores hace falta un territorio extenso con mucha población y con intereses variados con lo que difícilmente se podría formar una mayoría que se apartara de los principios de la justicia y del bien común.

Es difícil, según Madison, que un gobierno representativo hubiera podido tener éxito dentro de los estrechos límites en que se desarrollaban las democracias griegas. Acepta que, los antiguos no habían desconocido por completo la representación, pues había cargos públicos elegidos que, en cierto modo, representaban al pueblo en su capacidad ejecutora. La representación en la república norteamericana debe desempeñar un papel esencial. La virtud del ciudadano en la república no es la participación en el gobierno sino el interés que es el que demanda un sistema representativo.

1.3.3 La dialéctica, igualdad y el concepto de Democracia en América: Alexis de Tocqueville

Aunque no es tanto fundamento de aquellas primeras manifestaciones constitucionales sino precisamente una reflexión a posteriori hemos de considerar la obra de Alexis de Tocqueville (1805-1859) *De la démocratie en Amérique* (1835, 1840) sin duda, uno de los que más ha influido en la discusión académica sobre la democracia, al contener interesantes observaciones empíricas y reflexiones teóricas a la vez que busca una explicación de los fenómenos que describe y analiza¹⁷¹.

¹⁷⁰ (*El Federalista*: LI, 223).

¹⁷¹ Tocqueville, Alexis de: *La democracia en América*. Edición crítica preparada por Eduardo Nolla. Madrid, Aguilar, 1990, vols. I y II. El libro es el resultado de un viaje a los Estados Unidos, que Tocqueville emprende con su amigo Gustave

En su análisis de la estructura político-social de los Estados Unidos y de los caminos que ha seguido su desarrollo democrático Tocqueville se mueve con varios conceptos de democracia. En un sentido amplio, la democracia es para Tocqueville sinónimo de civilización moderna, pero, en un sentido más reducido, quiere decir una forma de gobierno del pueblo por sí mismo con determinadas características institucionales y procedimentales.

En el primer sentido, democracia equivale a una sociedad en la que se da una igualdad de condiciones para sus miembros, es decir, una sociedad organizada de una manera no estamental, pues la sociedad democrática moderna no está organizada sobre la base de grupos poseedores de privilegios propios. Este avance en la igualdad de condiciones de vida lo observa Tocqueville tanto en los nacientes Estados Unidos como en Europa. En el segundo sentido, más restringido, democracia se refiere a un sistema institucional caracterizado básicamente por la representación política.

A diferencia de la democracia antigua –una democracia asamblearia de comunidades políticas pequeñas-, Tocqueville entiende la democracia como un sistema de instituciones para ejercer el poder: “en América, el pueblo nombra a los que hacen la ley y a los que la ejecutan. Él mismo forma el jurado que castiga las infracciones a la ley. Las instituciones son democráticas no sólo en sus principios, sino también en todos sus desarrollos. Así, el pueblo nombra *directamente* sus representantes y los escoge generalmente *cada año*, a fin de tenerlos más completamente bajo su dependencia.

Es, por tanto, realmente el pueblo quien dirige y aunque la forma de gobierno sea representativa, resulta evidente que las opiniones, los prejuicios, los intereses e incluso las pasiones del

de Beaumont en abril de 1831. A su regreso a Francia, en febrero de 1832, escribe el primer volumen de *La democracia en América*, que se publica en 1835. El segundo volumen se publica en 1840.

pueblo no pueden encontrar obstáculos duraderos que les impidan obrar en la dirección cotidiana de la sociedad. En los Estados Unidos, como en todos los países donde reina el pueblo, es la mayoría quien gobierna en nombre del pueblo. Esa mayoría se compone principalmente de pacíficos ciudadanos que, sea por gusto, sea por interés, desean sinceramente el bien del país. A su alrededor se agitan incensantemente los partidos, que intentan atraérselos a su interior y apoyarse en ellos”¹⁷².

La relación entre igualdad y libertad es planteada por Tocqueville para afrontar la relación entre democracia y liberalismo. Para Tocqueville la libertad humana es fuente de toda grandeza moral y ocupa un lugar preferente en su espíritu¹⁷³. Pero el desarrollo de la libertad no puede producirse a costa de la igualdad, puede ser que la igualdad corrompa la libertad y de lugar al despotismo.

Para Tocqueville libertad e igualdad forman en todo caso parte inseparable del ideal democrático y se propone encontrar una forma justa de articularlos aun sabiendo que es una tarea difícil, entendiendo que hay que compatibilizar libertad e igualdad, es decir, liberalismo y democracia sin caer ni en la demagogia ni en la revolución. No hay que confundir igualdad con pasión igualitaria ni libertad con la independencia privada para actuar como uno quiera, su objetivo es el de unir el espíritu de libertad al espíritu de igualdad y separar el espíritu de igualdad del espíritu revolucionario.

Tocqueville trasciende a los aspectos políticos y se preocupa por los aspectos sociales y la dimensión ética del gobierno. La democracia no es solamente quién gobierna, el pueblo directamente o a través de sus representantes, si no también como lo hace, si lo hace de un modo liberal o de un modo despótico y para que lo hace, si hace

¹⁷² (*Democracia*: I, 169)

¹⁷³ Tocqueville, A. De: *El antiguo Régimen y la Revolución* II, p.100.s

mejores a los hombres y les protege o no facilita la mejora de los hombres. En suma, la democracia es liberal o no es una auténtica y legítima democracia.

Es importante en Tocqueville su reflexión sobre la igualdad. Considera que en América se vive un proceso de igualdad creciente y analiza si este compatible con la libertad. Distingue entre igualdad y uniformidad, la igualdad puede ser una condición de libertad o convertirse en uno de sus peores enemigos cuando la igualdad se plantea de un modo depravado.

Entiende que la igualdad debe avanzar en una sociedad que ha evolucionado desde un sistema en sus orígenes feudal, pero rechaza una igualdad de tipo jacobino-revolucionario, y plantea una versión de la igualdad más paternalista, ofreciendo la imagen de que el gobierno es el pastor y los hombres son un rebaño ordenado dulce y pacífico¹⁷⁴.

Para Tocqueville, ante todo la igualdad, es la igualdad de condiciones entendiendo que este es un principio de organización social que viene desde muy atrás y cuyo avance es gradual. Ello supone la desaparición de una sociedad aristocrática como consecuencia de una lógica histórica vista por la igualación por encima de las condiciones. El privilegio hereditario, la jerarquía del poder estamental y la sustancia social han quedado deslegitimados para regular la vida política. Avanzando sobre este planteamiento mantiene que la democratización social no trae consigo automáticamente la democracia política. La tensión dialéctica entre igualdad puede producir la democracia liberal o también puede producir una supervisión de la libertad a causa de un desarrollo perverso de la igualdad.

En este sentido Tocqueville mantiene que la democracia americana ofrece un ejemplo de cómo es posible armonizar la

¹⁷⁴ Tocqueville, A. De: *La democracia en América II*, p.372

democracia social con la democracia política, las costumbres igualitarias y las instituciones libres. Por otra parte Tocqueville entiende que la igualdad entre los seres humanos solamente se produce entre los salvajes y entre los hombres altamente civilizados. Los salvajes son iguales entre ellos porque son todos igualmente débiles e ignorantes. Los hombres muy civilizados pueden convertirse en seres iguales, porque todos tienen a su disposición medios análogos de alcanzar el poder económico y la felicidad¹⁷⁵.

Para precisar estos conceptos realiza un análisis histórico y recuerda que en el mundo medieval la civilización se encontraba en condiciones de desigualdad, la riqueza, la cultura y poder estaban en manos de los pocos y la pobreza, la ignorancia y la debilidad en manos de todos los demás. Esta situación cambiaría radicalmente durante la época moderna con la expansión del comercio y el desarrollo industrial. Pero esta época también genera nuevas desigualdades entre los propietarios de las fábricas y quienes solo perciben un salario.

La dialéctica entre igualdad y diferencia social prosigue así en el curso de la historia. Tocqueville entiende que en todo caso la igualdad tiene una significación moral, la igualdad entendida como una tendencia que impulsa a los hombres a semejantes entre sí en la medida que se vuelven más civilizados y la igualdad entendida como una condición del avance de la civilización en favor de una justicia social nunca realizada del todo debido a la aparición de nuevas diferencias y gustos.

Para Tocqueville vivir en una sociedad democrática es vivir en una sociedad regida por la igualdad de condiciones en la que no se imponen los criterios de estratificación social pertenencia a un estamento privilegios el dietarios diferencias por estirpe y llegaré

¹⁷⁵ Tocqueville, A. De: *Memoire sur le paperisme I, dans Oeuvres Completes*, París, Gallimard. 1991, t. XVI. P.159

todos los miembros de la misma son socialmente iguales o se consideran como tales. Es la igualdad de condiciones la que engendra el Estado social democrático proyectando una influencia normativa sobre todos aquellos aspectos que conforman tanto la sociedad civil como la sociedad política.

En un estado de democracia social las condiciones sociales entre los miembros de una colectividad son iguales y ello trasciende a la democracia política que supone que todos los miembros de la colectividad tienen un derecho igual a participar en el gobierno.

Por último, Tocqueville se refiere también al sentido materialista de la igualdad de oportunidades entendiendo que la igualdad no supone la eliminación de toda diferencia económica entre los individuos. Entiende que el desarrollo de la democracia no puede traer consigo la nivelización total de la capacidad económica de las gentes. Lo esencial no son las diferencias de riqueza entre los miembros de la colectividad democrática sino en cómo se llega a haberlas, si se llega legítimamente a la fortuna o si se logra ilícitamente por otros medios. En todo caso la igualdad democrática favorece el desarrollo del comercio y de Industria y con ello la posibilidad de la prosperidad económica para los individuos de la colectividad.

La idea de la sociedad trasciende a la consideración de la servidumbre tal y como se da en las sociedad aristocrática y democrática. Tocqueville rechaza la servidumbre de la época aristocrática. En las sociedades aristocráticas el servidor tiene un rasgo inferior. El amo considera a sus servidores como una parte inferior y secundaria de sí mismo. La igualdad de condiciones cambia esa estructura y establece nuevas relaciones entre el servidor y el amo.

La relación no puede concebirse en términos aristocráticos, los servidores no constituyen propiamente un universo social aparte al de los amos los servidores comparten la cultura, las ideas, los

sentimientos, las virtudes y los vicios de sus contemporáneos. La igualdad de condiciones supone que los hombres se sientan iguales y que puedan serlo. Amos y servidores no son hombres de distinta naturaleza. La igualdad de condiciones se convierte en un poder social y constituye el sentimiento dominante en el estado social democrático. A medida que las condiciones hacen cada vez más iguales los hombres adquieren una mayor independencia individual.

La igualdad es la pasión predominante y definitoria de la sociedad democrática moderna, no es la libertad. El ejercicio de la libertad exige un considerable esfuerzo y no menor vigilancia. Se conquista con dificultad. Ello no significa que los pueblos no luchen por la libertad, pero ante todo quieren la igualdad ante la libertad.

Tocqueville plantea que la pasión igualitaria puede entender que dirige a los individuos hacia la libertad cuando en realidad encamina al despotismo. Preocupa a Tocqueville que el Estado central todopoderoso ejerza un poder opresivo sobre los ciudadanos apoyándose en el distrito igualitario. Esta tendencia conduciría a los pueblos democráticos hacia un gobierno despótico. La igualdad es el primer principio y el símbolo para la constitución de las instituciones democráticas, la libertad es el gran bien de las sociedades democráticas. Pero la libertad como independencia individual resulta injusta si ella no trae consigo la afirmación de un derecho igual para toda la independencia, que esté sancionado y protegido legalmente.

Tocqueville es un liberal que entiende que no hay libertad que pueda establecerse legítimamente en el mundo moderno sobre la desigualdad y el privilegio. Su idea es manifiesta en uno de sus textos realizados para concluir la democracia en América: “creo que si los hombres que viven en los siglos democráticos estuvieran privados de libertad ella caerá también pronto por debajo del nivel ordinario de la humanidad. La libertad es, pues, máspreciada que todos los demás. Pienso igualmente que la libertad no se fundará jamás en estos

pueblos más que respetando la igualdad. Todos los que en los siglos en los que nos encontramos intenten establecer y fundar la libertad sobre la aristocracia fracasarán”.

Estas ideas aparecen claramente manifiestas en un texto de Tocqueville que reproducimos: “la libertad puede ofrecerse al espíritu humano bajo dos formas distintas. Se puede ver en ella el uso de un derecho común o el goce de un privilegio. Querer ser libre en los actos o en algunos de los actos -no porque todos los hombres tenga un derecho general a la independencia, sino por poseer uno mismo un derecho particular a permanecer independiente-, era la manera de entender la libertad en la Edad Media, y casi siempre ha sido interpretada así en las sociedades aristocráticas, donde las condiciones son muy desiguales”.

Tocqueville asume que la libertad sea un privilegio reservado a una minoría y que dicha libertad se establezca al precio de condenar a los demás a la sumisión. La idea aristocrática de la libertad se me paso a una concepción democrática de la libertad. “Esta noción aristocrática de la libertad... concedida por los individuos, con frecuencia ha impulsado a los hombres a las más extraordinarias acciones; adoptada por la nación entera, ha creado los pueblos más grandes que han existido. Los romanos pensaban que sólo ellos, entre todo el género humano, debían gozar de independencia; y este derecho a ser libres, mucho más que a la naturaleza, creían debérselo a Roma”.

“Según la noción moderna, la noción democrática, y me atrevo a decir que la noción de la libertad, dando por supuesto que todos han recibido de la naturaleza las luces necesarias para guiarse así mismo, cada hombre trae al nacer un derecho igual e imprescriptible, a vivir independiente de sus semejantes en todo aquello que sólo está relacionado consigo mismo, y a disponer como le parezca de su propio destino... al tener cada individuo un derecho absoluto sobre sí mismo, la voluntad soberana sólo puede ganar de la unión de las

voluntades de todos. Asimismo, desde ese momento, la obediencia pierde su moralidad, y ya no hay término medio entre las viriles y orgullosas virtudes del ciudadano y las bajas complacencias del esclavo. A medida que en un pueblo se nivelan las clases, esta noción de la libertad tiende naturalmente a imponerse¹⁷⁶.

En este texto se resume la visión que tiene Tocqueville de la libertad. Una libertad que existió en el pasado, una libertad aristocrática fundada en el privilegio constituida como una libertad sin igualdad. Una libertad democrática que se basa por el contrario el derecho igual que tienen todos los individuos a conducirse independientemente, lo que se trata de una libertad con igualdad. Pero la libertad democrática, que confunde la libertad con la igualdad genera una interpretación perversa, una igualdad que atenta contra la misma libertad. En las revoluciones, y es evidentemente que se refiere a la revolución francesa, los hombres habían querido ser libres para hacerse iguales y a medida que la igualdad se establecía, se les hacía más difícil la libertad.

Con respecto a los regímenes políticos Tocqueville destaca numerosas cualidades positivas de la democracia. Entre ellas señala que evita el centralismo de Francia y hace posible un desarrollo político tranquilo. Señala asimismo la capacidad del sistema democrático para corregir los fallos que se produzcan. Él sabe que los dirigentes elegidos son propensos a cometer fallos, a hacer malas leyes¹⁷⁷. Pero estos fallos se pueden corregir, pues una mala ley se puede corregir fácilmente cuando la duración de los cargos políticos es corta, por lo que la elección de los cargos políticos para períodos cortos es una buena nota práctica. La democracia presenta, en otro sentido, una cualidad importante: ayuda al bienestar de la mayoría, no

¹⁷⁶ Tocqueville, A. De : *Estado social y político de Francia antes y después de 1789*, p. 38 s.

¹⁷⁷ Tocqueville, A. De: *Democracia*: I,226-240.

al bien de todos, pero sí al de la mayoría, porque aunque no siempre sean los pobres los que hagan las leyes, sin embargo no siempre gobiernan los ricos.

Con la democracia es más probable el desarrollo económico, como ve en el ejemplo de Estados Unidos, un Estado de grandes dimensiones. A diferencia de Aristóteles o de Rousseau, Tocqueville estima que la democracia crece en Estados grandes y prósperos. Ella fomenta el bienestar y también la participación de los ciudadanos, con lo que se educa a los ciudadanos y se fortalece el espíritu ciudadano.

La democracia facilita el reconocimiento del derecho y el respeto de la ley, y el sometimiento a la misma, porque el ciudadano sabe que las leyes se pueden cambiar. Entre las deficiencias de la democracia hace alguna observación crítica respecto al sufragio universal, pues no genera realmente todas las bondades que se le atribuyen. Observa, por ejemplo, que en Estados Unidos la selección de los líderes funciona mal. Los buenos líderes rara vez se sienten llamados a entrar en la política profesional y sólo unos pocos entre ellos aspiran a desempeñar cargos públicos, pues consideran más rentable la dedicación a la actividad económica o social.

También observa que la elección no adecuada de líderes es debida a la escasa cualificación de los electores. Considera que la democracia alimenta la envidia entre las personas, pues el ansiado bien de la igualdad nunca llega a alcanzarse plenamente. Respecto a las numerosas elecciones que se practican en la democracia, observa que si bien ofrecen sin duda muchas oportunidades, ponen al mismo tiempo a la sociedad en una situación de excitación, que es contraproducente para el buen gobernar.

Respecto a la elección de muchos cargos públicos señala Tocqueville algunos problemas que tienen que ver con la cualificación –deficiente– de los elegidos, con los sueldos que tienen que hacen poco atractivos los puestos directivos superiores, y con la corta

duración del cargos y la posibilidad de la destitución, que hacen que los elegidos puedan hacer un poco lo que quieran y este frecuente cambio de personal produce inestabilidad. Señala asimismo que los sistemas democráticos no están exentos de vicios y corrupción, pues son más sobornables que las aristocracias.

Sus críticas alcanzan también al modo como se realizan las actividades del Estado y a sus gastos. Observa que el crecimiento estos últimos se debe a la necesidad de ganarse al pueblo soberano con dinero y otras subvenciones y que el ansia de mejora y de innovación refuerza los deseos del gobierno de ampliar sus competencias apoyando a los grupos sociales para su propia causa.

Por otro lado, los frecuentes cambios de gobierno inciden en la ineficacia de los gastos, es decir, que el gobierno resulta caro, especialmente además cuando no está extendida la propiedad que se pudiera resistir a las exigencias de las cargas tributarias. Sus observaciones críticas hacen referencia asimismo a la baja calidad de las leyes, debido a la precipitación con que se elaboran. Afirma con carácter general que la democracia tiene una dificultad en dominar las pasiones y en reprimir las necesidades del momento para poder pensar en el futuro. Esta fijación con el corto plazo le impide también según señala Tocqueville, estar preparada para los grandes retos que requieran grandes esfuerzos, como las exigencias militares, una guerra larga, por ejemplo. En épocas de paz, sin embargo, la sociedad democrática puede ser más eficaz que cualquier otro tipo de sistema.

Pero todos estos defectos son de menor índole que el conflicto fundamental entre la igualdad y la libertad, entre democracia de la mayoría y la libertad en el caso concreto. Tocqueville destaca de manera especial que el avance de la igualdad amenaza a la libertad y que la democracia alberga el peligro de convertirse en despotismo, es decir, en una democracia tiránica. Cada pueblo tiene básicamente la alternativa entre la libertad democrática o la *tirannie démocratique*.

De manera similar a como lo habían visto Platón y Aristóteles, Tocqueville ve en la tiranía uno de los grandes peligros que pueden derivarse del gobierno del pueblo por sí mismo. Esta es la idea fundamental que desarrolla en su capítulo sobre la tiranía de la mayoría, en conexión con los federalistas Hamilton, Madison y Jay.

En ese sentido dice Tocqueville que el problema estructural de la democracia es que gobierne la mayoría en nombre del pueblo, por lo que todo lo que se hace se hace para contentar a la mayoría con peligro para las minorías. Es el poder de la mayoría como tal el que por su carácter absoluto resulta peligroso, aunque la mayoría esté compuesta por ciudadanos pacíficos que desean el bienestar común, sea por motivos egoístas o por afecto.

El poder de la mayoría alcanza el estatus del Rey en la monarquía, y se la considera igualmente honrada e infalible. La mayoría es además una fuerza irresistible, es un poder que actúa sobre el pensamiento y su peligro se encierra no tanto en que, en el caso extremo, el despotismo de la mayoría pueda llegar hasta la represión o la liquidación física de las minorías, sino en el peligro constante de abuso del poder. Esto quiere decir que ni las instituciones políticas ni las costumbres están seguras frente a la omnipotencia de las mayorías. De manera similar a como el despotismo monárquico había eliminado cualquier defensa contra él, el nuevo principio de la igualación ha hecho caer ahora, en la democracia, las barreras defensivas contra el despotismo¹⁷⁸.

Tocqueville crítica a la omnipotencia de la mayoría y entiende que la mayoría pueda abusar de la minoría y tratar de imponer intereses contradictorios de aquí que a Tocqueville le interese al máximo la cuestión de cómo frenar el poder de la mayoría¹⁷⁹. Sus

¹⁷⁸ Tocqueville, A. De: *Democracia*: I, 241-255.

¹⁷⁹ Tocqueville, A. De: *Democracia*: I, 256-269.

consideraciones referidas a los Estados Unidos manifiestan que en su organización se encuentran frenos a este poder en su descentralización administrativa, con la que se puede frenar o eliminar el desbordamiento de la voluntad popular. También actúan como contrapesos frente al poder de la mayoría la libertad de prensa y la libertad de asociación que, actuando como instituciones educativas, suavizan las tendencias hacia la tiranía de la mayoría. Esta misma función cumple la estructura federal de los Estados Unidos y la vigencia del espíritu jurídico un elemento aristocrático tras los colores democráticos.

1.4 Fundamentos filosóficos y jurídicos de la Revolución Francesa.

La segunda gran Revolución histórica de aquel tiempo sería la Revolución Francesa que supuso, ante todo, una ruptura de las bases políticas y jurídicas del llamado Antiguo Régimen. A esta ruptura contribuyeron sobre todo filósofos, politólogos, científicos y economistas agrupados en gran medida en la Ilustración y el Enciclopedismo.

La Ilustración se había constituido como un movimiento cultural e intelectual europeo desarrollado desde último tercio del siglo XVII cuyos pensadores sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía, y construir un mundo mejor. La Ilustración tendría una gran influencia en los grandes aspectos económicos, políticos y sociales de la época. Sus principios se basaban ante todo en la razón, la igualdad y la libertad.

La Ilustración que ya había servido de impulso a las Trece Colonias norteamericanas para la independencia de los Estados Unidos frente a su metrópolis europea se constituiría como el fundamento ideológico para el inicio de la Revolución en Francia siendo fundamentales desde el punto de vista político fueron fundamentales las ideas expuestas por Voltaire, Rousseau o

Montesquieu y sobre todas ellas las referidas a los conceptos de libertad política, de fraternidad y de igualdad, o de rechazo a una sociedad dividida, o las nuevas teorías políticas sobre la separación de poderes del Estado.

Todo ello iría rompiendo lo que aún quedaba del prestigio de las instituciones del Antiguo Régimen. Las tensiones provocadas al final del Antiguo Régimen, tanto sociales como políticas, mucho tiempo contenidas, se desataron en una gran crisis económica a consecuencia de los dos hechos puntuales: la colaboración interesada de Francia con la causa de la independencia estadounidense, que no fue gratuita para Francia porque ocasionó un gigantesco déficit fiscal y el aumento de los precios agrícolas. En todo caso el ejemplo del proceso revolucionario estadounidense abrió los horizontes del cambio político.

1.4.1 El pensamiento filosófico y político de los enciclopedistas franceses: Voltaire y Diderot. Las sociedades de pensamiento.

Consideramos a los enciclopedistas como aquellas destacadas personalidades que fundamentalmente desarrollaron el Diccionario de las ciencias, las artes y la artesanía, realizado entre junio de 1761 y diciembre de 1765 bajo la dirección de Diderot y D'Alambert¹⁸⁰. La mayoría de los enciclopedistas tenían una esmerada educación, muchos de ellos estudios universitarios y diversas ocupaciones. Para nuestro interés sirve sobretodo destacar la ideas filosóficas y políticas de algunos de los más singulares como los propios Diderot y D'Alambert e incluyendo en este epígrafe otras figuras destacadas como Voltaire, quien junto con aquellos escritores referidos, incluyendo a Rousseau o Montesquieu, contribuyeron a su realización.

¹⁸⁰ Mornet, Daniel *El pensamiento francés en el siglo XVIII: el trasfondo intelectual de la Revolución francesa*, Madrid, Alianza, 1988,

Los enciclopedistas pertenecen al espíritu filosófico que se ha creado con la Ilustración cuya filosofía está basada en el derecho natural, el derecho que tienen todos los hombres a la vida, a la libertad y a la propiedad y cuyo pensamiento ilustrado se opone al absolutismo, movimiento de singular influencia que aparece claramente vinculado a los sucesos que se produjeron y que concluyeron con la Revolución Francesa.

Voltaire -François Marie Arouet- nacido en París en 1694 aparece como un pensador polifacético, apenas sistemático convertido en un símbolo del enciclopedismo y de las ideas ilustradas que defienden la libertad de pensamiento, la tolerancia y la justicia, frente a la ignorancia el despotismo y la superstición¹⁸¹. Escritor de éxito se exila a Inglaterra en 1728 publicando en 1734 las “*Cartas filosóficas o Cartas inglesas*” -Lettres philosophiques- constituidas por una serie de ensayos escritas en base a su experiencias de vida en las que aunque respeta las instituciones se muestra satírico y ataca el rigor moral de los prebiterianos.

En sus primeras cartas aborda el tema de la religión refiriéndose a los cuáqueros, anglicanos, presbiterianos y socinianos, sus sistemas de creencias. En las cartas VIII y IX analiza el sistema político inglés concretamente el Parlamento, alaba la decisión de Gran Bretaña de servir a la libertad en lugar de a la tiranía y ofrece una breve historia de la Carta Magna y de la igualdad de la administración de Justicia y de administración financiera¹⁸². En la Carta X elogia el

¹⁸¹ Pujol, Carlos (1999). *Voltaire* (1ª edición). Madrid: Ediciones Palabra. Roger Peyrefitte, *Voltaire, sa jeunesse et son temps*, Michel, Albin 1985 Pomeau, René. *La Religion de Voltaire*, Paris, Colin, 1956 (2º éd. 1969). *Politique de Voltaire*, Paris, Colin, 1963 (3º éd. 1994). *Voltaire en son temps*, Voltaire Foundation, Oxford, 1988

¹⁸² “No hace mucho tiempo que Mr. Shipping, en la Cámara de los Comunes, inició un discurso, con las siguientes palabras: «La majestad del pueblo inglés se sentiría herida, etc.» La singularidad de la expresión provocó una gran carcajada, pero él, sin inmutarse, la repitió con tono decidido, y las risas se apagaron. Confieso que no encuentro semejanza entre la majestad del pueblo inglés y la del

sistema de comercio inglés y en la carta XIII se ocupa de John Locke y sus teorías sobre la inmortalidad del alma. Finalmente en la carta XXV critica a Blaise Pascal contraponiendo a su visión miserable del hombre la visión optimista de la Ilustración.

En 1747, Voltaire publica *Zadig* o el libro del destino -*Zadig ou la Destinée*-, el primero de sus cuentos filosóficos donde presenta la vida humana como una existencia que se encuentra en las manos de un destino más allá del control humano, una historia de la ortodoxia religiosa y metafísica. De 1751 es su obra “El siglo de Luís XIV” -*Le Siècle de Louis XIV*- en la que ofrece simplemente las acciones del gran monarca, siendo su gran obra, la que realmente le hace pasar a la posteridad “Cándido” -*Candide ou l'Optimisme*-.

Candide fue editado en 1759 y reeditado 20 veces en el curso de la vida del autor y es una de las obras de mayor éxito de la literatura francesa. Escrita desde un espíritu satírico e irónico, plantea el debate sobre el fatalismo y la existencia del mal frente al optimismo de Leibniz, demostrando a través de la vida de su héroe Cándido, que el mundo que se vive no es el mejor de los mundos posibles. Cándido, expulsado del castillo en el que vive descubre un mundo de decepciones y manifiesta la maldad de los humanos planteando la necesidad de una acción reflexiva y recordando los beneficios del trabajo que permite al hombre dar un sentido a su vida tomar el

pueblo romano; menos parecido existe entre sus gobiernos. En Londres existe un Senado cuyos miembros son a veces acusados, seguramente con injusticia, de vender sus votos, como sucedía en Roma: hasta ahí la semejanza. Por otra parte, creo que las dos naciones son completamente distintas, tanto en lo bueno como en lo mal... La nación inglesa es la única en el mundo que, ofreciendo resistencia sus reyes, consiguió reglamentar el poder de los mismos y que mediante esfuerzo tras esfuerzo pudo establecer ese sabio gobierno en que el príncipe es todopoderoso para realizar el bien, pero tiene atadas las manos para hacer el mal; ese gobierno en que los señores son grandes sin insolencias y sin tener vasallos, y en el que el pueblo participa en el gobierno sin confusión. La Cámara de los Pares y la de los Comunes son los árbitros de la nación; el rey el súper árbitro”. *Voltaire Cartas Filosóficas VIII sobre el parlamento*.

control de su destino, y construir su propia felicidad, adaptándose a la realidad desde la vida.

Cándido defiende la libertad ideológica, de culto y la tolerancia religiosa. En su obra “Tratado sobre la tolerancia” publicada en 1763 refiere la rehabilitación de Jean Calas, un protestante falsamente acusado y ejecutado por asesinar a su hijo para que no se convierte al catolicismo. En este Tratado, Voltaire fomenta la tolerancia entre las religiones y las metas del fanático religioso y realiza una acusación en contra de las supersticiones religiosas pidiendo al final el abandono del paraíso terrenal, “la utopía no esta hecha para el hombre: debemos cultivar nuestro jardín”.

Voltaire realiza significativas aportaciones al terreno de la política entendiendo que era necesaria una reforma profunda de la sociedad que asegurase la libertad y el bienestar del pueblo mostrando su admiración por la sociedad inglesa basada en un sistema parlamentario muy distinto a la monarquía absolutista de la Francia de su tiempo. Entre las propuestas de Voltaire se encuentran la creación de un sistema parlamentario que evitase los poderes del rey, el establecimiento de un sistema de impuesto racional, que no arruinara al pueblo y la libertad económica y reconocimiento del valor del trabajo.

Otra figura asimismo decisiva de la Ilustración como escritor, filósofo y enciclopedista es la de Denis Diderot (1713-1784) reconocido por su espíritu crítico y polémico. Diderot publica en 1746 su primera obra original “Pensamientos filosóficos” -Pensées philosophiques- colección de aforismos en los que manifiesta una preferencia por la experimentación y el estudio de las probabilidades, destacando el peso de la herencia frente al progreso automático, social y humano. Un año después en 1747 recibe el encargo de dirigir junto a

Jean Le Rond d'Alembert la elaboración editorial de la *Encyclopedie*, trabajo que concluirá en los años 70 de este siglo XVIII¹⁸³.

En su juventud, Diderot fue originalmente un seguidor de Voltaire y de su deísmo, pero poco a poco se alejó de esta línea de pensamiento hacia el materialismo y el ateísmo. Asimismo fue un gran amigo de Jean Jacques Rousseau del que años más tarde se separa al diverger del pensamiento de Rousseau en su idea sobre el valor del hombre en la sociedad. Preocupado por la moralidad no busca un sistema filosófico coherente y tampoco se involucra directamente en los debates políticos de su tiempo. Para Diderot la naturaleza no es el flujo constante, ni el organismo con sus desarrollos y enfermedades. La naturaleza es un estado primario, puro, y el alejamiento de la misma es interpretado en términos de artificialidad y corrupción. La civilización aparece como un estado desdichado: “la historia del hombre civilizado no es más que la historia de su miseria. Todas las páginas están tintas de sangre”.

A lo mismo se refiere cuando uno de sus personajes exclama: “...convéncete que no es en vuestro favor sino en el suyo que esos sabios legisladores os han amansado y conformado tal como sois. Apelo a todas las instituciones políticas civiles y religiosas; examínalas atentamente y mucho me equivoco si no ves en ella a la especie humana, a lo largo de los siglos, sometida al yugo que un puñado de pícaros se propuso imponerle”.

Frente a esto plantea que la naturaleza es el lugar de la felicidad: “¡qué lejos estamos de la naturaleza y la felicidad!”. El binomio entre “naturaleza” y “felicidad” es la otra cara de la conjunción entre “civilización” y “veneno”. Ante la pregunta de uno de los personajes acerca de la conveniencia de civilizar a los hombres, el otro responde: “Si quieres ser tirano civilízalo,

¹⁸³ Hazard, Paul *El pensamiento europeo en el siglo XVIII*, Alianza, 1991. Jacques Proust, *Diderot et l'Encyclopédie*, A. Michel, 1995.

envenénalo, tanto como puedas...”. Ante lo cual el interlocutor dice: “veo que teniéndolo todo en cuenta usted se inclina a creer a los hombres tanto más malvados y desgraciados cuanto más civilizados”. La historia, entonces, lejos de relatar los sucesivos progresos de las ciencias, las artes, el gusto y las costumbres, es en este caso la historia de una caída, la historia de la degeneración de un estado puro.

A partir de un análisis de la idea de naturaleza, que no tiene un sentido unívoco en la obra de Diderot, se ha demostrado que el primitivismo se superpone a una interpretación nihilista y a otra biologicista de la historia, concepción que se opone a una idea cándida del progreso. La historia puede ser la historia de una caída, un proceso absurdo o la alternancia de épocas de vigor y épocas de decrepitud, pero nunca la de un progreso sin límites. Aun en sus páginas menos pesimistas Diderot exclama: “la felicidad de un individuo o de una nación tiene sus límites. Todas las cosas llevan en sí mismas el germen de la destrucción”.

Debemos reflejar asimismo el papel de indiscutible valor que en el desarrollo y preparación de las ideas filosófico-políticas tuvieron los clubes o las llamadas sociedades de pensamiento a través de las cuales se insertó y operó el espíritu de la Ilustración en toda Francia y en la Europa del siglo XVIII¹⁸⁴.

Estas sociedades comenzaron establecerse alrededor de 1750 y fueron en principio pequeños grupos de ciudadanos ilustres, generalmente de la media y alta burguesía de profesión liberal, además de lo que si ustedes como el duque de Orleans que se reunían en pequeños grupos para discutir asuntos generalmente políticos, sin descartar los temas mundanos. Las sociedades de pensamientos sirvieron para difundir el pensamiento de Voltaire, de Rousseau, de

¹⁸⁴ Cochin, Augustin: *L' esprit du Jacobinisme* (Paris, Ed. Plon), 1929.

Condorcet, de Raynal, de Buffon, de Condillac, de Montesquieu, de Rameau y en general de todos los enciclopedistas.

En general, la composición social variaba con el ritmo de los hechos revolucionarios. Por otra parte es difícil poder identificar los distintos grupos sociales representados en las Sociedades, ya que en los nombres de las Sociedades encontramos una gran imprecisión de lenguaje para denominarlas, así por ejemplo existían sociedades de labradores, o campesinos, o agricultores, pero no se indicaba en los registros si se trataba de pequeños, medianos o grandes propietarios.

También se establecieron en pleno período revolucionario muchas Sociedades de Pensamiento que agrupaban sólo por profesión, pero tampoco era precisa la denominación, ya que por ejemplo encontramos sociedades que se autodenominan "Sociedades de hombres de leyes" sin especificar quienes eran sus miembros, y por hombres de leyes podía entenderse desde el pobre y casi miserable escribano hasta el abogado de éxito de la capital o de provincia¹⁸⁵.

También las mujeres jugaron un papel de primera importancia en la composición y en el desarrollo de las Sociedades de Pensamiento, ellas fueron las más entusiastas promotoras de este tipo de reuniones; fueron las que organizaban las tertulias y debates político-literarios, por ejemplo son famosas las reuniones que organizaba Madame du Deffand, Madame Geoffrin, Madame d'Epinay, Madame de Chatelet, Madame de Rochefoucauld, Madame de Pompadour, Madame Roland, y la ya citada Madame de Staél.

¹⁸⁵ Rhenan Segura, Jorge. *Las Sociedades de pensamiento y la Revolución Francesa*. Contribución al estudio de las ideas filosóficas entre 1750-1800. rev. filosofía univ. costa rica, xxvii (66), 457-464, 1989.

Las sociedades de pensamiento tuvieron sus propias publicaciones generalmente hojas impresas que circulaban de manera restringida. En 1753, la Sociedad de pensamiento de Dijon convocó a un concurso literario--político y el premiado fue J.J. Rousseau con un ensayo que sin duda provocó mucho que decir; se trataba de: "Quelle est l' origine de l' inégalité parmi les hommes et si elle est autorisée par la loi naturelle".

Con esta denominación se conoce al más importante de los clubes de la Revolución Francesa, Era el Club Bretón que se instaló primero en Versalles y luego en París el 6 de octubre de 1789 en la Biblioteca del Convento de los Dominicos en la calle de Saint-Honoré. El nombre de "jacobino" pasó a la historia por el nombre de dicha calle, aunque el Club se llamaría siempre: Club de los amigos de la Revolución. El principal objetivo político del Club al momento del traslado a París fue que sus miembros, la mayoría de ellos recién electos diputados, pudieran discutir, estudiar y hacer proposiciones en el Parlamento. Entre los primeros líderes del Club encontramos a Mirabeau, Robespierre, La Fayette, Pétion, Duport, Barnave, Brissot, Alexandre de Lameth, etc.

Este Club se dividió entre monárquicos y republicanos, entre moderados y extremistas. La lucha entre ellos fue muy violenta y salió a la luz pública, lo que hizo que algunos miembros se separen y pasen a formar algunas otras agrupaciones, entre ellas el Club de los Feuillants cuyos principales líderes fueron La Fayette, Barnave, Bailly, y Lameth, que proclamaba una monarquía constitucional, y el Club de los Cordeliers con líderes como Danton, Marat, Fobre d'Eglantine, y Santerre; de ahí salió el movimiento de los "sansculottes".

Después de los movimientos escritos, se produjo una gran depuración en el Club de los Jacobinos, que permitió a sus miembros hacerse con el control de las diferentes sociedades filiales que cubrían

y abarcaban todo el país, para reafirmar así su ideología hasta el golpe de estado del 18 de Fructidor del año IV (4 de septiembre de 1797).

El control de las diferentes sociedades filiales convirtió a los jacobinos en un verdadero partido político y en instrumento de poder que tuvo acceso a todos los rincones de la geografía francesa.

1.4.2 Jean Jacques Rousseau y el Contrato Social

Será Jean Jacques Rousseau quien va a proponer la idea más determinante, la idea del contrato social en una obra sobre filosofía política que esencialmente plantea la libertad y la igualdad de los hombres que instituyen un estado político para preservar la mayor libertad posible para cada individuo siendo la mayoría la que decida los asuntos públicos a través de la llamada voluntad general. Todo ciudadano es poseedor de unos derechos básicos y la voluntad de la mayoría deberá ser respetada.

El contractualismo había surgido como una corriente filosófica y política que entiende que el origen de la sociedad y del Estado se fundamenta en un contrato original entre los hombres, por el cual se acepta una limitación de su libertad a cambio de las leyes que garantizan la perpetuación del cuerpo social.

La teoría del contrato social que rompe con el naturalismo político planteado por los filósofos clásicos, Platón y Aristóteles, conduce a la aparición del concepto de la igualdad política, formal y material, y esta ya esbozada en la filosofía de Thomas Hobbes para quién el estado de naturaleza no es deseable ante lo cual los hombres ya deben someterse a un pacto de sujeción, a un pacto social por el que los individuos traspasan su libertad y sus derechos a un régimen político que intentará el control contra la violencia, a un soberano cuya misión fundamental es la de proteger la vida de sus súbditos. De forma menos pesimista John Locke entiende que el hombre es racional y atiende a sus propios intereses pero que en ese estado de naturaleza existe una especie de armonía preestablecida, una sociedad

natural en la que los hombres gozan de una relativa paz, de una serie de derechos naturales entre los que se encuentra la libertad y la propiedad privada.

Es en esa filosofía en la que plantea el contrato social como un pacto de unión en el que el soberano se compromete a proteger la vida, la libertad y la propiedad. La finalidad es crear una autoridad que salvaguarda unas autoridades y cuyo fundamento es un contrato basado en un consenso o un acuerdo, que le permite gozar de mayor libertad y seguridad aceptando someterse a la voluntad de la mayoría.

Jean Jacques Rousseau había nacido en Ginebra donde se había exiliado su familia por motivos religiosos y será tutelado por una dama ilustrada -Madame de Warens- volviendo a París en 1745 donde contacta con Diderot a quién ya había conocido en Lyon, y con Voltaire D'Alembert y Rameau contribuyendo al espíritu de la Ilustración por su rechazo a los regímenes autocráticos¹⁸⁶.

En 1754 realiza su Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres -Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes-, también conocido como el "Segundo discurso", en respuesta a un concurso de la Academia de Dijon contestando al mensaje: ¿Cuál es el origen de la desigualdad entre los hombres, y es autorizado por la ley natural? Rousseau analiza dos tipos de desigualdades, naturales o físicas y éticas o políticas. Desigualdad natural implica diferencias entre la fuerza física de un hombre y la de otro y esta desigualdad es un producto de la naturaleza. Rousseau no se ocupa de este tipo de desigualdad y desea investigar la desigualdad moral argumentando que la desigualdad moral es endémica de una sociedad civil y se relaciona con las

¹⁸⁶ Ernst Cassirer, *Rousseau, Kant, Goethe: filosofía y cultura en la Europa del siglo de las luces*, Madrid, FCE, 2007.

diferencias de poder y riqueza. Este tipo de desigualdad se establece por convención¹⁸⁷.

En su visión de la sociedad civil, el hombre se ha alejado de su "estado natural" del aislamiento y la consiguiente libertad para satisfacer sus necesidades y deseos individuales. Para Rousseau, la sociedad civil es una manipulación realizada por los poderosos contra los débiles con el fin de mantener su poder o riqueza. "El primer hombre que, habiendo cercado un terreno, dijo: "Esto es mío", y encontró gente tan ingenua como para creerle, aquél hombre fue el verdadero fundador de la sociedad civil. De cuántos crímenes, guerras y asesinatos, de cuántos horrores y desgracias no podría haber salvado a cualquiera humanidad, tirando hacia arriba de las estacas o rellenando la zanja, y gritando a sus compañeros: Cuidado de escuchar a este impostor; ustedes se deshacen si una vez olvidáis que los frutos de la tierra pertenecen a todos nosotros, y la misma tierra de nadie."¹⁸⁸

Para Rousseau los dos principios fundamentales del hombre son la piedad y el amor propio que actuando juntos contribuyen a la preservación de la especie humana a través del tiempo. A diferencia del hombre natural de Hobbes el hombre natural de Rousseau es más o menos como cualquier otro animal, con instinto de conservación casi como única preocupación y los únicos bienes que reconoce en el universo son los de alimentos, una mujer, y el sueño. Este hombre

¹⁸⁷ Bachofen, Blaise : *La Condition de la liberté. Rousseau, critique des raisons politiques*, Paris, Payot, 2002.

¹⁸⁸ El primer sentimiento del hombre fue el de su existencia; su primer cuidado, el de su conservación. Los productos de la tierra le proveían de todo, lo necesario; el instinto le llevó a usarlos. El hambre, otros deseos hacíanle experimentar sucesivamente diferentes modos de existir, y hubo uno que le invitó a perpetuar su especie; esta ciega inclinación, desprovista de todo sentimiento del corazón, sólo engendra un acto puramente animal; satisfecho el deseo, los dos sexos ya no se reconocían, y el hijo mismo nada era para la madre en cuanto podía prescindir de ella J.J. Rousseau "*Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres*" Segunda Parte. Traducción del Francés Ángel Pumarga Madrid 1923

natural, a diferencia de Hobbes, no se encuentra en constante estado de miedo y ansiedad sino que posee algunas cualidades que le permiten distinguirse de los animales durante un largo período de tiempo.

Lo más importante de esta argumentación es la capacidad del hombre para elegir, lo que Rousseau llama "el libre albedrío", pero la voluntad del hombre libre se ve socavada por su creencia de que el hombre es un ser que actúa siempre de acuerdo con ciertos principios invariables en donde interviene la compasión y asimismo la cualidad de "perfectibilidad", lo que le permite mejorar su propia condición física, la situación del medio ambiente y desarrollar su propia supervivencia,

La creciente regularidad y la convención de contacto del hombre con los demás hombres transfigura su capacidad básica de la razón y la reflexión, su natural o ingenuo amor propio en una dependencia corruptora sobre las percepciones y el favor de los demás. Este amor propio crea un estado que se ve impulsado por el orgullo y los celos en vez del meramente elemental instinto de conservación. Esta adhesión al amor propio tiene cuatro consecuencias: la competencia, la auto-comparación con los demás, el odio y la instancia por el poder. Todos ellos llevan a la construcción de una cínica sociedad civil.

Para Rousseau el hombre es solitario y autosuficiente que trata de autoprotegerse y es entonces cuando el hombre natural establece como propiedad suya alguna cosa, cuando se produce el "principio del mal". Sin embargo Rousseau reconoce la necesidad de la institución de la propiedad y entiende que el gobierno debe ser creado para protegerla. Este Discurso está dedicado al Estado de Ginebra, lugar de nacimiento de Rousseau, y en la dedicación elogia de manera idealizada a Ginebra como buena república, si no perfecta, escogiendo como cualidades para su alabanza: la estabilidad de sus leyes e

instituciones, el espíritu comunitario de sus habitantes, y sus buenas relaciones con los Estados vecinos, así como las mujeres bien educadas de Ginebra.

Otra obra importante es la que Jean-Jacques Rousseau publica en 1762 la obra “Emilio, o la educación” -*Émile ou De l'éducation*- donde describe la educación ideal abordando los problemas educativos refiriéndose finalmente a la edad adulta y a la educación de la mujer. Esta obra fue censurada y le hizo impopular siendo desterrado de Francia y acogido en Inglaterra por David Hume.

Fue en ese mismo año de 1762 cuando publica su obra más notable, “El Contrato Social o Principios de Derecho Político” -*Du contrat social ou Principes du droit politique*- que trata sobre la libertad y la igualdad de los hombres bajo un estado asumido por medio de un contrato social. Rousseau establece en el Contrato social una organización social "imparcial" sobre la base de un pacto garantizando la igualdad y la libertad de todos los ciudadanos. Este acuerdo se celebra entre todos los participantes, es decir con el conjunto de los ciudadanos. En el pacto social, cada uno renuncia a su libertad natural para tener una libertad civil.

La soberanía popular es el principio fundamental del contrato social. La indivisibilidad de la soberanía es otro principio fundamental por el cual debemos entender que el poder del soberano no se puede dividir y no se pueden separar por especial interés porque particular interés es contraria al interés general de la investigación, uno de los objetivos del contrato social. Bajo la teoría de contrato social se fundamenta una parte de la filosofía liberal, en especial el liberalismo clásico por su visión filosófica del individuo como fundamental que luego decide vivir en sociedad por lo que necesita del Estado de derecho que asegure las libertades para poder convivir.

Este contrato social, es como una continuación del estado de naturaleza en el que existe la ley del más fuerte. Para Rousseau, la ley

del más fuerte no puede ser un principio rector de la sociedad, ya que es incompatible con el interés público, y por lo tanto con el Contrato Social: "El más fuerte no es nunca suficientemente fuerte para ser siempre el amo, si no transforma la fuerza en derecho y la obediencia en deber". La disolución del contrato social, es el retorno al estado de naturaleza, primitiva, pre-social, "vana y tiránica".

El contrato social comienza con estas palabras: "Quiero saber si, en el orden civil, puede haber alguna regla de administración legítima y segura, tomando a los hombres tal como son y como las leyes que se encuentren. Yo trato siempre de combinar, en esta investigación, que la ley permite con lo que el interés prescribe, a fin de que la justicia y la utilidad no se encuentren divididos. "¹⁸⁹

Rousseau parte de la tesis que supone que todos los hombres nacen libres e iguales por naturaleza. Comienza hablando del estado originario del hombre y afirma que las familias son el primer modelo de sociedad política. Los sucesivos capítulos del primer libro enuncian su pensamiento: "de las primeras sociedades, del derecho del más fuerte, de la esclavitud, para concluir en el capítulo V que es forzoso volver a una primera convención y realizar un contrato social, un pacto social "poniendo cada uno de los otros en común su persona bajo la suprema dirección de la voluntad general" y finaliza dedicando sucesivos capítulos al soberano, al estado civil y a la libertad civil y al dominio real, la propiedad.

En un segundo libro se ocupa sobretudo del concepto de "voluntad general" a cuyo ejercicio lo llama soberanía de la que señala que es inalienable, indivisible, preguntándose si puede errar la voluntad general y planteando los límites del poder soberano que no

¹⁸⁹ El Contrato Social. Libro I, Preámbulo

puede traspasar la libertad que por naturaleza tiene el hombre común, continuando con su exposición sobre el derecho, la ley, el legislador, el pueblo, los sistemas de legislación y las clases de leyes. Piensa que la libertad subsiste gracias a la igualdad: “es precisamente porque la fuerza de las cosas tiene siempre a destruir la igualdad, por lo que la fuerza de la legislación debe siempre tender a mantenerla”.

El libro III, el más extenso se ocupa fundamentalmente del gobierno en sus formas. Se refiere al aparato del Estado, al gobierno y sus diversas formas, a la democracia como sistema político, aristocracia y monarquía, gobiernos mixtos, abuso de gobierno, representantes y asambleas. El gobierno muestra el ejercicio legítimo del poder ejecutivo. El poder legislativo, por su parte, siempre pertenece al pueblo y sólo puede pertenecer a él. Rousseau aun considera que la forma de gobierno más adecuada para un país depende del número de habitantes y de su extensión. De este modo, el gobierno democrático conviene a los pequeños estados, el aristocrático a los medianos y la monarquía a los grandes. Entiende que las instituciones deben adaptarse a los tiempos afirmando que "si queremos una institución duradera, no pensemos en hacerla eterna”.

En el libro cuarto comienza hablando de la bondad y rectitud de los hombres sencillos. Éstos no necesita más que pocas leyes. Finaliza el libro con una referencia al pueblo, su fuerza de organización y su poder de decisión, la voluntad general e indestructible, el sufragio, las elecciones, la censura, la religión civil y concluyendo con el diseño de otro contrato de índole exterior que tenga que ver con el derecho de gentes y el derecho público. Su concepto de la soberanía política presenta un carácter radical que lo diferencia claramente de todo el pensamiento anterior. Aunque Rousseau es crítico con los teóricos del contrato social de su propia época y de épocas anteriores, construye su teoría del Estado, sin embargo, sobre la base del contrato social y de la doctrina de la soberanía.

En el Contrato social establece la conocida tesis de que el Estado nace de un pacto o contrato entre los hombres. El hombre vivía un principio en un estado de naturaleza, sin restricción de su libertad natural. Las relaciones entre los seres humanos, exentas de toda compulsión, se entablan espontáneamente, sin contiendas ni luchas, ya que todos ellos estaban colocados en una situación de igualdad que generaba la armonía, obedeciendo al orden natural de las cosas. Los hombres han hecho un contrato para garantizar su existencia, su libertad y para conseguir el bien común configurando un sistema de cooperación y de protección mutua mediante una legislación elaborada por el propio pueblo y mediante la ejecución de la misma por parte de un gobierno obligado a rendir cuentas al pueblo.

Esta idea del Estado es realmente revolucionaria, pues ni descansa en la gracia divina ni en un poder autoritario que convierta a los miembros del pueblo en un montón de individuos carentes de libertad: el poder del Estado está basado en un acuerdo libre de los ciudadanos y en que éstos se gobiernan a sí mismos. Sólo un poder de estas características es legítimo para Rousseau.

La radicalidad de esta idea de la soberanía reside en su carácter intransferible. Para Rousseau la soberanía procede del pueblo y ahí tiene que seguir residiendo siempre. No se la puede transferir a nadie distinto del propio pueblo y no se la puede trocear. Este carácter intransferible implica la negación de cualquier forma de delegación de la soberanía popular a representantes que actuaran por ella y en vez de ella: un pueblo que delega su poder en representantes deja de ser libre.¹⁹⁰

El núcleo de la soberanía es la legislación, que según él está reservada exclusivamente al pueblo sin necesidad de diputados, parlamentos u otras instancias intermedias. Junto al pueblo soberano

¹⁹⁰ *Contrato social*: III, 15.

hay un gobierno para la ejecución de las leyes, el cual es simplemente un órgano ejecutor del legislador, obligado a rendir cuentas al pueblo soberano y susceptible de ser revocado en todo momento. A este pueblo soberano que se gobierna a si mismo con leyes lo denomina Rousseau *República*. Es decir, Rousseau llama “república” a todo estado o cuerpo político gobernado por leyes, cualquiera que sea su forma de administración, porque entonces sólo gobierna el interés público. Sólo el gobierno republicano es legítimo¹⁹¹.

Para Rousseau lo que ha de prevalecer es la voluntad general que es diferente a la voluntad de los individuos y a la suma de esas voluntades. Es superior, se identifica con el deseo colectivo y racional, que lleva el bien común, que es la finalidad del contrato social. La ley que derive de esto es la expresión de esa voluntad general, su forma de expresarse. La voluntad genérica es la que más se identifica con el hecho de ser hombre, la que tiene valor, se identifica con la voluntad general. Los hombres no se entregan algo extraño, sino realizar su voluntad genérica. Esto es el paso del liberalismo a la democracia. La voluntad general especificar el poder político, la voluntad particulares el propio bien de cada individuo y la voluntad genéricas preocuparse por los demás. A través de la voluntad general se persiguen los objetivos de la voluntad genérica.

La libertad, para Rousseau, es hacer que la voluntad genérica domine sobre la voluntad particular para ser auténticamente libre. Así, con el contrato social se consigue la libertad de un beneficio añadido: ser libre en moralidad en virtud.

La legitimidad consiste, en definitiva, en estar vinculado a la voluntad de los ciudadanos, que se manifiesta en las leyes, las cuales son asunto de la voluntad general, que es precisamente donde los ciudadanos como tales se funden en una persona pública. Este

¹⁹¹ *Contrato social*: II, 6

gobierno de leyes -legítimo o republicano – puede conocer distintas formas de gobierno o de ejercer el poder ejecutivo, y lo que destaca Rousseau es que este gobierno que ejerce el poder ejecutivo tiene que ser distinto del cuerpo político o soberano, pues señala que “no es bueno que quien hace las leyes las ejecute él mismo”. Ahora bien, el gobierno ejecutor de las leyes está subordinado al poder legislativo. De no ser así no habría una constitución, sino una situación de anarquía.

Al entender la república como gobierno de las leyes y al ser posibles varias “formas de administración”, Rousseau está estableciendo claramente una distinción entre república y democracia. La democracia es, junto con la aristocracia, la monarquía y el gobierno mixto, una forma concreta de gobierno -es decir, de ejecución de las leyes-, a la que Rousseau no le concede realmente muchas oportunidades. Democracia es para él una forma concreta de la ejecución de las leyes, en la que la mayoría de los ciudadanos están gobernando, si bien la legislación sigue estando en manos del pueblo. Dicho de otra manera, democracia es la forma de República o de Estado, en la que el pueblo soberano le encarga el gobierno –o ejecución de las leyes- a todo el pueblo o la parte mayor del pueblo¹⁹².

El propio Rousseau ve este tipo de gobierno muy difícil. En el capítulo dedicado a la democracia en el *Contrato social* dice Rousseau que, por un lado, el que hace la ley sabe mejor que nadie cómo debe ser ejecutada e interpretada. Pareciera entonces que la mejor constitución sería aquella en la que el poder ejecutivo estuviera unido al legislativo. Pero añade en seguida que no es bueno que el que hace las leyes las ejecute, ni que el cuerpo del pueblo desvíe su atención de los asuntos generales –las leyes- para ponerla en las cosas particulares –la ejecución-, pues es muy peligroso que los intereses privados

¹⁹² *Contrato social*: III, 3

interfieran en los asuntos públicos, y esto sería la mayor corrupción, incluso peor que si el gobierno abusara de las leyes¹⁹³.

Concluye esta reflexión con la afirmación de que nunca ha existido verdadera democracia ni existirá jamás, pues va contra el orden natural que gobierne el número grande y que el pequeño número sea gobernado. Piensa él que no cabe imaginarse que el pueblo permanezca siempre reunido en asamblea para tratar los asuntos públicos y cuando las funciones de gobierno tienen que estar en manos de varios órganos, cuanto menos sean es mejor porque tienen más facilidad para despachar los asuntos.

Rousseau señala además que la democracia requiere muchas condiciones: en primer lugar, un Estado muy pequeño en el que el pueblo sea fácil de reunir y en el que cada ciudadano pueda fácilmente conocer a todos los demás; en segundo lugar, una gran sencillez en las costumbres que evite la multiplicidad de asuntos y las discusiones espinosas; mucha igualdad en los rangos y en las fortunas, pues de lo contrario no podría subsistir la igualdad; poco o ningún lujo, pues el lujo es efecto de las riquezas o las hace necesarias. Es decir, se necesitaría mucha virtud para que pudieran subsistir todas estas condiciones.

Rousseau añade que no hay gobierno tan expuesto a las guerras civiles y a las agitaciones intestinas como el democrático o popular, porque no hay ningún otro que exija mayor vigilancia para mantenerse y ningún otro que tienda tan continuamente a cambiar de forma. Rousseau se refiere aquí a un dicho del padre del rey de Polonia, duque de Lorena: “prefiero la libertad peligrosa a un sosiego servil”, cerrando el capítulo sobre la democracia con la siguiente afirmación:

¹⁹³ Contrato Social libro III, 4

“Si hubiera un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente. Un gobierno tan perfecto no conviene a los hombres”¹⁹⁴.

Rousseau, por tanto, no da preferencia a que las leyes sean ejecutadas por el conjunto o la mayoría del pueblo. Y cuando en otros escritos hace recomendaciones políticas prácticas, éstas son mucho más moderadas que lo que cabría esperar de su teoría de la soberanía popular: para Francia recomienda, por ejemplo, una forma plebiscitaria de Estado con un gobierno monárquico, y para Polonia propone una federación de 33 condados con un gobierno aristocrático electivo.

1.4.3 Montesquieu y la Separación de Poderes

Uno de los filósofos y ensayistas más relevantes de la Ilustración es Montesquieu-Charles Louis de Secondat, Señor de la Bréde y Barón de Montesquieu¹⁹⁵. Nacido en el Castillo de la Bréde en 1689 su vida transcurre en un escenario de grandes cambios religiosos, políticos y culturales. Inicia en 1705 sus estudios de leyes en la facultad de Derecho de la Universidad de Burdeos y se dedica en sus primeros años, preferentemente, al estudio de las ciencias naturales, publicando en 1721 una obra que logrará un importante éxito, “Las Cartas Persas” –Lettres persanes- en la que simula la correspondencia de dos persas que viajan por Europa y relatan las instituciones, el modo de vida, las costumbres, la religión y las leyes de los europeos¹⁹⁶.

En las *Cartas persas* aparecen ya las ideas que más tarde Montesquieu plasmará en su obra cumbre, *El espíritu de las leyes* (1748), haciendo especial hincapié en su sentido relativista de la

¹⁹⁴ *Contrato social*: III, 4, pág. 71).

¹⁹⁵ Pangle, Thomas, *Montesquieu's Philosophy of Liberalism* (Chicago: 1989 rpt.; 1973). Althusser, Louis. *Montesquieu: la politique et L'histoire* (Presses Universitaires de France, Paris, 1959).

¹⁹⁶ Ehrard, Jean: « La Signification politique des *Lettres persanes* », *Archives des Lettres Modernes*, 116, 1970, p. 33-50

diversidad política. Para Montesquieu un gobierno es tanto más adecuado para un pueblo cuanto más se identifica con sus costumbres y tradiciones. También encontramos su escepticismo característico en cuanto a los legisladores en oposición a su idealización de las leyes.

Otro de los temas sobre los que Montesquieu fijará continuamente su atención, es el relativo a la felicidad del hombre y su relación con la vida política, que queda reflejado en uno de los pasajes más conocidos de las *Cartas persas*, la «fábula de los trogloditas», cuya moraleja es que las costumbres son más eficaces que la ley y que la virtud pesa a los hombres y ni el mejor de los regímenes políticos perdura más que un tiempo limitado. La argumentación de Montesquieu demuestra cómo los individuos movidos por un egoísmo radical destruyen las bases de su propia supervivencia.

En 1722, instalado en París, Montesquieu empieza a frecuentar el Club de l'Entresol, que gira en torno al abbé Alary, miembro de la Academia Francesa, y al cual pertenecen personalidades eminentes como el abbé Saint-Pierre, Bolingbroke y Ramsay, asistiendo a reuniones en las que se leen propuestas disidentes de la monarquía absolutista. En 1725 vuelve a Burdeos iniciando los trabajos preparatorios de la obra que posteriormente será conocida como *De l'esprit des lois*.

Entre 1728 y 1731, Montesquieu se dedica a viajar. En los dos primeros años visita Alemania e Italia y, en los dos últimos, Inglaterra. Guiado por su amigo Lord Chesterfield, entabla relaciones con figuras del mundo político e intelectual de este país, entre las que destacan Walpole y Martin Folkes, amigo de Newton, quien lo introduce a la Royal Society, principal centro científico de la época. A partir de 1733 reside en París finalizando una obra *Consideraciones sobre la grandeza y decadencia de los romanos*, que será publicada en Holanda a causa de la suerte sufrida por las *Lettres philosophiques*, de

Voltaire, que fueron condenadas por el Parlamento de París a ser incineradas en la plaza del Palacio de Justicia.

En 1741 finaliza su gran obra, *El espíritu de las Leyes*, tratado de teoría política publicada por Montesquieu en Ginebra en 1748. Esta importante obra, que le llevó catorce años de trabajo, sería publicado por primera vez sin el nombre del autor debido a la censura. En este libro, Montesquieu sigue un método revolucionario para la época: se niega a juzgar qué es lo que debería ser, y elige para hacer frente a los acontecimientos políticos fueran del marco abstracto.

Aunque el tema principal de sus escritos, y en concreto de su gran obra *El espíritu de las leyes* (1748), no es la democracia sino la tendencia del poder del Estado a convertirse en un poder absoluto y cómo evitarlo, Montesquieu aborda en sus reflexiones de manera mediata la democracia. El centro de su análisis es, sin duda, un sistema de control y de equilibrio entre los poderes del Estado con el objeto de lograr un poder moderado. Pero al abordar la forma de un Estado moderado –una monarquía constitucional - se introduce también en la cuestión de la democracia.¹⁹⁷

La democracia es para Montesquieu una de las formas de Estado en la que el poder está en manos del pueblo en su conjunto. Al clasificar las formas de Estado, Montesquieu establece una nueva tipología diferente de las formuladas con anterioridad. Su tipología tripartita habla de monarquía, despotismo y república. Llama monarquía a la forma de Estado en la que el gobierno está en manos de una sola persona, pero el poder se ejerce según leyes establecidas y promulgadas.

Montesquieu distingue en el Libro II tres gobiernos distintos: “hay tres clases de gobierno: el republicano, el monárquico del

¹⁹⁷ Montesquieu, Charles: *Del espíritu de las leyes*. Traducción de Mercedes Blázquez y Pedro de Vega. Madrid, Tecnos, 1972.

despótico. Para descubrir su naturaleza nos basta con la idea que tiene estos tres gobiernos los hombres menos instruidos. Doy por supuestas tres definiciones o, mejor, hechos: el gobierno republicano es aquél en que el pueblo entero, o parte del pueblo, tiene el poder soberano; el monárquico es aquel en que gobierna uno solo, con arreglo a leyes fijas establecidas; y por el contrario, en el gobierno despótico una sola persona gobierna sin ley y sin norma, lleva todo según su voluntad y su capricho”.

Cuando el poder está en manos de una sola persona y se ejerce de manera arbitraria, sin leyes fijas y publicadas, estamos ante el despotismo. La república, finalmente, a diferencia de la monarquía y el despotismo, es aquella forma de Estado en la que el gobierno reside en el pueblo en su conjunto o simplemente en una parte del mismo. Por eso, bajo el concepto genérico de república Montesquieu puede subsumir la democracia y la aristocracia. Cuando es todo el pueblo como un “cuerpo” el que posee el poder tenemos una democracia y cuando es sólo una parte del pueblo la que tiene el poder estamos ante una aristocracia¹⁹⁸.

En cada una de estas formas de tener y ejercer el poder encuentra Montesquieu un principio característico, que las diferencia entre sí. En el caso de la república democrática, Montesquieu considera que el principio que la anima es la virtud: el amor a la patria, el deseo de gloria auténtica, la renuncia a sí mismo, a los que se añaden el amor a igualdad y a la moderación. Según él, el amor a la igualdad hace reducir la ambición individual al mero deseo de prestar a la patria más y más grandes servicios que los demás ciudadanos.

Montesquieu es consciente de que no todos los ciudadanos pueden prestarle a la patria iguales servicios, pero todos por igual deben prestárselos. Al nacer, todos los ciudadanos contraen con la

¹⁹⁸ *Del espíritu de las leyes*: 55-63.

patria una deuda inmensa que no se puede llegar a saldar nunca. De esta manera, las distinciones concretas entre los individuos nacen del principio de igualdad, aun cuando ésta parezca que ha sido borrada por servicios excepcionales o por talentos superiores. Para que este patriotismo democrático pueda darse es preciso que se den ciertos presupuestos económicos: cualquier ciudadano pobre tiene que encontrar unos ingresos suficientes de modo que pueda trabajar como los demás; y los ciudadanos ricos tienen que seguir siendo medianamente ricos de modo que tengan necesidad de trabajar para mantener sus posesiones. Todos, en definitiva, tienen que trabajar. En este punto es clara la diferencia entre Montesquieu y antigüedad: mientras en Grecia se hablaba del ocio para poder ser ciudadano, para Montesquieu el trabajo proporciona la condición para la ciudadanía¹⁹⁹.

La libertad política

Su concepción de la democracia, y de las otras formas de Estado, está inserta dentro del análisis de su preocupación central: garantizar la libertad y evitar el despotismo. Para Montesquieu la libertad política sólo puede consistir en poder hacer lo que se debe querer y en no estar obligado a hacer lo que no se debe querer; la libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten, de modo que si un ciudadano pudiera hacer lo que las leyes prohíben, ya no habría libertad, pues los demás tendrían igualmente esta facultad²⁰⁰.

Dedica Montesquieu el libro XI a considerar las leyes que dan origen a Libertad política en su relación con la Constitución, definiendo la palabra libertad: “no hay una palabra que haya recibido significaciones más diferentes y que haya impresionado los ánimos de maneras tan dispares como la palabra libertad. Unos la han considerado como la facultad de deponer a quién habían dado un

¹⁹⁹ *Del espíritu de las leyes*: 77-80.

²⁰⁰ *Del espíritu de las leyes*: 150

poder tiránico; otros, como la facultad de elegir a quien deben obedecer; otros, como el derecho de ir armados y poder ejercer la violencia, y otros, por fin, como el privilegio de no ser gobernados más que por un hombre de su nación o por sus propias leyes...”.

En resumen, cada cual ha llamado libertad al gobierno que se ajustaba sus costumbres o sus inclinaciones. Ahora bien, como una república no se tienen siempre a la vista y de manera tan palpable los instrumentos de los males que se parece y las leyes aparentan jugar un papel más importante en sus ejecutores, si hace residir normalmente la libertad en las repúblicas, excluyéndola de las monarquías. Por último, como las democracias parece que el pueblo hace poco más o menos lo que quiere, se ha situado la libertad en este tipo de gobierno, confundiendo el poder del pueblo con su libertad.

Este texto se concluye bajo la pregunta ¿qué es la libertad?. Montesquieu afirma lo siguiente: “es cierto que en las democracias el parece que el pueblo hace lo que quiere; pero la libertad política no consiste en hacer lo que uno quiera. En un estado, es decir, en una sociedad en la que leyes, la libertad sólo puede consistir el poder hacer lo que se debe querer y no estar obligado a hacer lo que no se debe querer. Hay que tomar conciencia de lo que es la independencia y de lo que es la libertad. La libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten, de modo que si un ciudadano pudiera hacer lo que las leyes prohíben, ya no había libertad, pues los demás tendrían igualmente esta facultad.”

Considera que la libertad sólo se puede mantener si el poder de hacer las leyes, el poder de ejecutarlas en la realidad y el poder de juzgar los delitos no coinciden en un mismo grupo social ni en un mismo órgano estatal. Sólo hay garantía para la libertad cuando los mencionados tres poderes estatales se encuentran distribuidos de

modo que la relación entre ellos sea de equilibrio a la vez que de control mutuo y recíproco.²⁰¹

Benjamín Constant popularizó la distinción entre las dos llamadas libertades, política y civil, o bien antigua y moderna, conforme en las denominó. La finalidad de los antiguos era “la partición del poder social entre todos los ciudadanos”, sostiene Constant, a lo cual llamaban libertad; la finalidad de los modernos “es la seguridad en los goces privados” y llaman libertad “a las garantías acordadas por las instituciones a estos goces²⁰²”.

La separación de poderes

Para los teóricos de la monarquía como Bodino, el poder soberano es indivisible, porque les atribuido al príncipe como "poder absoluto" para disponer de la res publica por tiempo ilimitado²⁰³. Cualquier delegación de poder solamente puede mandar del príncipe, en conformidad o mandato concebido por el buen tiempo limitado.

²⁰¹ En cada Estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gentes, y el ejecutivo de las que pertenecen al civil.

Por el primero, el príncipe o el magistrado hace las leyes para cierto tiempo o para siempre, y corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones; y por el tercero, castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares. Este último se llamará poder judicial; y el otro, simplemente, poder ejecutivo del Estado (...). Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor. En el Estado en que un hombre solo, o una sola corporación de próceres, o de nobles, o del pueblo administrase los tres poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particulares, todo se perdería enteramente.”

²⁰² Aguilar, Enrique: *Benjamin Constant y el debate sobre las dos libertades*, Revista Libertades 28 (mayo 1998).

²⁰³ Jean Bodin, *Les six livres de la république*, I, cap. VIII.

Para Hobbes también el poder soberano es indivisible y entiende que una vez instituido el Estado los poderes atribuidos al soberano que constituyen la esencia de la soberanía son incommunicables e inseparables²⁰⁴. John Locke considera las distintas facultades o poderes del estado y acepta su división y erradicación en personas y órganos distintos. El poder de legislar corresponde al Parlamento y las decisiones fundamentales de una sociedad política emanan de la ley, aprobada por el poder legislativo y nombrado por el pueblo²⁰⁵, sin embargo, para Montesquieu, la clave está en la libertad que supone que la acción de los poderes impida el ejercicio del poder absoluto. Entiende entonces disponer las cosas de tal modo que el poder contenga al poder²⁰⁶.

Esta “separación de poderes” ha sido usualmente interpretada como una “división” de los poderes estatales, cuando de lo que realmente se trata es de una “distribución” de los poderes del Estado entre distintos grupos sociales, a la vez que entre los distintos órganos del Estado, de modo que ningún órgano estatal pero tampoco ningún grupo social tengan en exclusiva alguno de los poderes estatales.

En la argumentación de Montesquieu la separación de poderes no es total o absoluta, sino relativa. No se atribuye en exclusiva cada poder del estado a una autoridad individual o colegiada. No se entrega integralmente cada función a una autoridad, sin que las otras tenga alguna relación con ella. El poder legislativo está atribuido al Parlamento, pero el Rey tiene un derecho de veto absoluto contra los proyectos de ley adoptados por él. De este modo la ley solamente puede constituirse con el acuerdo del monarca.

²⁰⁴ Hobbes, Thomas : *Leviathan*, II, cap. XVIII.

²⁰⁵ Locke, John: *The Second Treatise of government*, cap. XI

²⁰⁶ Montesquieu op. cit., II, libro XI, cap. 6

El poder ejecutivo se hace presente en el poder legislativo solamente a través de la función de impedir. Del poder ejecutivo se puede decir lo mismo porque aunque es atribuido al gobierno, en el caso de Montesquieu al Rey no es ejercido soberanamente, dado que el Parlamento tiene funciones de control sobre el gobierno. En un estado libre el poder legislativo tienen el derecho y la facultad de examinar cómo se ejecutan las leyes que ella ha aprobado. La facultad jurisdiccional monopoliza todas funciones judiciales, pero también el Parlamento conoce causas criminales y aplica procedimientos judiciales para juzgarlos.

No hay separación funcional, las autoridades que ejercen los distintos poderes además de actuar las unas sobre las otras también intervienen en aquellos poderes que no les han sido atribuidos.

El gobierno tiene facultades para convocar al Parlamento y además prorrogar el periodo de sesiones y el Parlamento tiene facultades para llamar ante sí a los Ministros para que den cuenta de su gestión. La relación entre los poderes responde a varias reglas: -No puede haber libertad si dos o tres poderes estatales están en manos de una sola fuerza social o de un único órgano del Estado; -No hay libertad si un poder del Estado se le encomienda a una única fuerza social o a un único órgano estatal; -No hay libertad si las fuerzas sociales mencionadas no participan de manera adecuada en cada uno de los tres poderes y sometándose a ellos.

Para que haya libertad la distribución de tres poderes del Estado se plantea del siguiente modo: el poder legislativo está distribuido entre tres fuerzas sociales –pueblo, nobleza, rey- y entre tres órganos estatales que participan en el proceso legislativo –la cámara popular, la cámara de nobles –senado- y el monarca. La posición más fuerte la tiene la cámara popular, mientras que la nobleza tiene una posición intermedia.

Esto quiere decir que ningún acto de legislación puede prosperar sin la aprobación de las tres fuerzas sociales y de los tres órganos estatales con competencias legislativas. El poder ejecutivo también está distribuido entre tres órganos estatales que tienen que ver directamente con las tres fuerzas sociales: la cámara popular, la cámara de nobles y el monarca -apoyado por sus ministros-.

El papel más importante lo tiene el monarca, pero las cámaras parlamentarias tienen la posibilidad de ejercer un control preventivo - vinculando leyes y finanzas del monarca- y un control sancionador (control de la ejecución de ley, control y sanción de los ministros).

El poder judicial está distribuido entre dos fuerzas sociales y cuatro órganos: tribunal popular, tribunal de nobles, cámara popular, cámara de nobles. Sólo el monarca no tiene ninguna participación en el poder judicial²⁰⁷

Si la distribución se contempla desde los órganos estatales quiere esto decir que al parlamento se le adjudica la función principal de la legislación, aunque no la controla enteramente ni en exclusiva. Por otra parte, el parlamento desempeña otras funciones ejecutivas y judiciales, además de la legislativa. El monarca, por su parte, tiene su función principal en la ejecución de las leyes y del derecho internacional, pero no es el único órgano que dispone de poder ejecutivo. Por otra parte, el monarca interviene también en la función legisladora.

El tribunal popular ejerce una parte del poder judicial, y sólo tiene una función judicial, pero, sin embargo, los miembros del tribunal de nobles, que ejerce una función judicial, desempeñan además de una actividad judicial su actividad como parlamentarios. Si

²⁰⁷ Sobre el modelo de distribución del poder puede verse: Alois Riklin, “*Montesquieu's freiheitliches Staatsmodell*”, en: *Politische Vierteljahresschrift* 30 (1989), 420-442. 10

miramos el modelo de distribución desde las *facultés* se puede señalar que algunas de estas competencias se confían con carácter exclusivo a un órgano, y algunas otras a dos órganos del Estado. Sólo la facultad de impedir la aprobación de las leyes está distribuida entre tres órganos -cámara popular, cámara de nobles y monarca-.

Este modelo de distribución de los poderes del Estado con el objetivo de garantizar la libertad política y evitar el despotismo desemboca realmente en una constitución mixta, en la que Montesquieu opera con todos los elementos mencionados. En su propuesta ni se afirma la soberanía popular ni se manifiesta ninguna preferencia por el “tercer estado” ni se afirma tampoco una monarquía absoluta. Todo este sistema de pesos y contrapesos da forma a una distribución social y estatal de los tres poderes, que recoge en definitiva la estructura estamental de la sociedad.

La distribución de los poderes estatales entre las tres fuerzas sociales de la monarquía, la nobleza y el pueblo logra un equilibrio estable, que refuerza el status quo de la sociedad estamental. Se puede decir que Montesquieu ofrece en realidad una modernización del principio aristocrático en el sentido de que la aristocracia requiere la monarquía y la monarquía –para no ser despótica- necesita la existencia de la nobleza. Lo innovador en Montesquieu es que esta alianza monarquía-nobleza se abre al tercer estado, además de que al estar el poder del estado –los poderes- distribuidos de manera equilibrada entre las tres fuerza sociales se dificulta la existencia de un poder autocrático y se garantiza de esta manera la libertad política.

La gran ventaja de los representantes es que tienen capacidad para discutir los asuntos, mientras que el pueblo no esta preparado para esto, lo que constituye uno de los grandes inconvenientes de la democracia²⁰⁸. Una democracia al estilo antiguo es considerada por

²⁰⁸ *Del espíritu de las leyes*: 153.

Montesquieu como un régimen lleno de desventajas, pero no se separa totalmente de la idea antigua de que la democracia sólo es adecuada para comunidades pequeñas²⁰⁹. La república, una de cuyas formas es la democracia, requiere un territorio pequeño, mientras que la monarquía es adecuada para los Estados medianos y el despotismo para los grandes, escribe en el libro VIII de su libro²¹⁰.

1.4.4 El ideario filosófico y político de la Revolución Francesa

La Revolución francesa se convertirá en el conflicto social y político que convulsionó Francia y tuvo por extensión sus implicaciones en otras naciones de Europa. La Revolución marcó el final del absolutismo y dio a luz a un nuevo régimen donde la burguesía, y en algunas ocasiones las masas populares, se convirtieron en la fuerza política dominante en el país.

La Revolución Francesa socavó las bases del sistema monárquico como tal, más allá de sus estertores, en la medida en que lo derrocó con un discurso capaz de volverlo ilegítimo. Los acontecimientos históricos se iniciaron en gran medida porque la situación de la Hacienda francesa, ya muy erosionada bajo el gobierno de Luis XIV, había llegado a ser insostenible durante el largo gobierno de Luis XV (1715-1774). Para poner remedio al mal, en 1789 Luis XVI se decidió a convocar los Estados Generales, que no se habían reunido desde 1614.

Para entonces ya se había firmado en 1783 en Versalles el tratado de paz entre Inglaterra y la nueva Unión norteamericana y todas las potencias europeas habían reconocido los Estados Unidos de América, constituido sobre principios radicalmente democráticos.

Siguiendo, pues, el ejemplo de Norteamérica, los Estados Generales franceses se declararon en asamblea nacional constituyente.

²⁰⁹ *Espíritu de las leyes*: 156, 157.

²¹⁰ *Del espíritu de las leyes*: 131, 132.

En el mismo año de 1789 en el que Madison presentaba su primer texto sobre la Declaración de Derechos que se integraría en la Constitución Americana tuvo lugar la convocatoria de Estados Generales de Francia reunidos en Versalles el 5 de mayo de 1789 formados según su propia articulación histórica por los representantes de los tres estamentos: la nobleza (Primer Estado), el clero (Segundo Estado) y la burguesía (Tercer Estado).

Esta convocatoria nacía con la preocupación de que la monarquía deseara manipular la asamblea y ya estaba en juego la idea de soberanía nacional, es decir, la de admitir que el conjunto de los diputados de los Estados Generales representaba la voluntad de la nación. El 17 de junio, los miembros del Tercer Estado se declararon como únicos integrantes de la Asamblea Nacional: cuya primera medida sería la de votar la «Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano». Para entonces, si bien habían invitado a los miembros del Primer y Segundo Estado a participar en esta asamblea, el tercer estado dejó en claro sus intenciones de proceder incluso sin esta participación.

La nobleza había perdido fuerza frente a una élite de la burguesía que tenía una serie de reivindicaciones e intereses que chocaban frontalmente con los privilegios nobiliarios. La burguesía mercantil o financiera, era ya beneficiaria de un enriquecimiento que le hacía poderosa frente aristocracia y la permitía aspirar a desempeñar un papel político relevante. Los miembros del Tercer Estamento se autoproclamaron Asamblea Nacional, y se comprometieron a escribir una Constitución. El Rey y una parte de la nobleza no aceptaron la situación entendiendo que se continuaba bajo unos fundamentos políticos según los cuales básicamente el poder reside en la Monarquía absoluta de Derecho divino. El Rey gobierna de modo indiscutible junto a una nobleza domesticada.

Pero aquella situación ya está afectada por los argumentos de la filosofía de la Ilustración. El pensamiento en el siglo XVIII había avanzado mucho respecto de lo sustentado en el siglo anterior. Ahora se planteaba más claramente la denuncia contra los abusos de la aristocracia y las complacencias de un Rey, que, como Luis XV, no parecía ocuparse del bienestar del pueblo²¹¹. No solo se plantea los límites del derecho de gobernar sino también una cuestión más determinante como es la referida a las desigualdades entre los hombres desarrollándose paralelamente las ideas contractualistas, a propósito de la formación de la sociedad y los derechos que al constituirse ésta fueron puestos bajo la potestad del soberano.

La primera medida de la Asamblea Nacional fue la de votar la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”. Luego se produciría la abolición del feudalismo, es decir, de las servidumbres personales, y la instauración de la igualdad ante los impuestos y al acceso a los cargos públicos. La Revolución se enfrentaría duramente con la Iglesia Católica, en razón de sus privilegios y esta pasó a depender del Estado, eliminándose en 1790 la autoridad de la Iglesia y confiscándose sus bienes.

El 27 de agosto de 1789 la Asamblea publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, inspirándose en parte en la Declaración de Derechos del Hombre de los Estados Unidos y estableciendo como principio el lema de libertad, igualdad y fraternidad. El 3 de septiembre de 1791, fue aprobada la primera Constitución de la historia de Francia. El lema “Liberté, égalité, fraternité”(Libertad, igualdad, fraternidad), que procede del lema no oficial de la Revolución de 1789 “Liberté, égalité ou la mort”

²¹¹ Cassirer, Ernst (1984), *La filosofía de la Ilustración*, México, Fondo de Cultura Económica. Gay, Peter (1977), *The Enlightenment: an Interpretation. The Science of Freedom*, Nueva York, Norton.

Libertad, igualdad o la muerte-, sería adoptado oficialmente después de la Revolución de 1848 por la Segunda República Francesa.

La Constitución de 1791 tendría como elementos fundamentales los siguientes: - el principio de la soberanía nacional que supone la quiebra del principio monárquico, esto es, la eliminación de la tradicional atribución de la titularidad de la soberanía al monarca. Éste último, en cuanto monarca constitucional, no poseería ya la fuente de la potestad originaria, sino un poder específico delegado, derivado de la nación; - la nación considerada como sujeto jurídico-público de imputación de la titularidad de la soberanía. La soberanía hace recaer en la nación entendida no como pueblo sino como 20 extracto de razón. Es conocida la expresión de Carré de Malberg: «L'Etat n'est que la Nation même juridiquement organisée»²¹²; - el poder constituyente como voz suprema de la nación cuya voluntad se expresa de forma racional-normativa en la Constitución. La Constitución será considerada como derecho muy positivo, dictado por los principios de la razón.

Tras establecerse la Constitución, la Asamblea Nacional se disolvió y dio paso a la Asamblea Legislativa. El Rey intentó huir su familia pero fue capturado en Varennes. En el interior de la Asamblea Legislativa se distinguieron dos grupos de revolucionarios los Girondinos, representantes de los sectores conservadores de la burguesía y los Jacobinos partidarios de profundizar la revolución. Las monarquías europeas vieron con temor el triunfo de los revolucionarios franceses.

²¹² (Paris, 1920, p. 69 y Ss.). quien añade: «El principio fundamental extraído a estos efectos por la Revolución francesa es el de que la Nación sola es soberana, y por nación los fundadores del principio de la soberanía nacional han entendido la colectividad indivisible de los ciudadanos, es decir, una entidad extraindividual, un ente abstracto, aquel que encuentra en el Estado su personificación». *Ob.cit.* p. 87.

La Asamblea Legislativa daría paso a la Convención o la república democrática (1792-1795). La revolución francesa adoptó la vía más violenta. Los jacobinos encabezados por Robespierre radicalizaron el proceso inaugurando la llamada época del terror. Se creó un tribunal revolucionario y se realizaron importantes decisiones entre otras la separación de la Iglesia y el Estado, la supresión de la esclavitud de las colonias, la creación de una nueva constitución más radical que se dejaría suspendida hasta que se acabara la guerra. Se proclamó la República y el Rey fue ejecutado en 1793.

Para triunfar en el exterior sobre las potencias aliadas se adoptaron medidas como la movilización general, la reforma del ejército y se organizaron nuevos planes de abastecimiento. La situación interna se atenuó y no siendo necesario un poder fuerte y autoritario como el que representaba Robespierre este sería apresado y condenado a morir en la guillotina.

A este periodo sucedió el Directorio o la república burguesa (1795 - 1799) en el que se aprobó la llamada Constitución del Año VIII, una Constitución aprobada el 24 de diciembre de 1799 que estableció una forma de gobierno conocida como Consulado. El golpe de estado del 18 de Brumario (9 de noviembre de 1799) acabó eficazmente con la Revolución francesa. La constitución hizo a medida el papel de Primer Cónsul para otorgarle a Napoleón Bonaparte poderes similares a un dictador.

La Constitución de 1799 tenía 95 artículos, en los que se regulaba el derecho de sufragio universal, pero era sólo en teoría, porque se le permitía votar exclusivamente a las personas que estuvieran en unas "listas de confianza". La Constitución establece formalmente un gobierno con capacidad e iniciativa legislativa y varias cámaras que ejercen algunas competencias menores en materia legislativa y de control de constitucionalidad:

El órgano director del gobierno sería el Consulado, formado por un Primer Cónsul, Napoleón Bonaparte, un segundo cónsul, Emmanuel-Joseph Sieyès, y un tercer cónsul, Roger Ducos. Pero los poderes del Primer Cónsul (Bonaparte) son mucho mayores que los de los demás y no se limitan al poder estrictamente ejecutivo, configurando una dictadura bonapartista: la Constitución reconoce a Bonaparte la capacidad de promulgar leyes, nombrar y separar miembros del Gobierno, el ejército y las administraciones locales, así como nombrar a los jueces criminales y civiles.

Los poderes ejecutivo y legislativo recayeron en la práctica en manos de Napoleón. Los jueces eran designados por sufragio universal, aunque posteriormente Bonaparte se hizo también con el control total de los tribunales. Fue la primera constitución desde la Revolución sin una declaración de derechos.

La Constitución de 1799 fue sucedida por el senadoconsulto orgánico del 16 de termidor del año X conocido como la Constitución del Año X constituido como una ley fundamental francesa donde las modificaciones introducidas incrementaban el poder de Napoleón Bonaparte que sería declarado Primer Cónsul de por vida. El Consulado pasó a ser vitalicio, de forma que Napoleón, primer cónsul, ejercía efectivamente todos los poderes. El Senado, fuertemente controlado también por el cónsul, vio aumentados sus poderes frente a la Asamblea Legislativa.

Finalmente desde 1804 Napoleón se convertiría en Emperador de los franceses acentuando el carácter absolutista de su gobierno valiéndose cada vez más de la policía y la censura, siendo coronado el 2 de diciembre y proclamado Rey de Italia el 18 de marzo de 1805. Ambos títulos los ostentaría hasta el 11 de abril de 1814 y, nuevamente, desde el 20 de marzo hasta el 22 de junio de 1815, en que se produce su derrota final.

Durante un periodo de poco más de una década, Napoleón adquirió el control de casi toda Europa Occidental y Central mediante una serie de conquistas y alianzas, y sólo tras su derrota en la Batalla de las Naciones, cerca de Leipzig, en octubre de 1813, se vio obligado a abdicar. Sus agresivas guerras de conquista se convirtieron en las mayores operaciones militares conocidas hasta ese momento en Europa, involucrando a un número de soldados jamás visto en los ejércitos de la época. Además de estas proezas bélicas, a Napoleón también se le conocerá, y esto es importante significarlo, por el establecimiento del Código Napoleónico.

La idea del Código Civil francés de Napoleón se basaba en lograr las mismas leyes civiles para todos los ciudadanos y todas las provincias francesas, ya que las del norte de París, seguían las costumbres germánicas, y en las del sur predominaba el Derecho Romano. El Código desterraba para siempre los privilegios feudales, e imponía las libertades individuales, las de conciencia y las de trabajo, en un estado laico.

La exposición realizada nos permite afrontar la evolución de los principios filosóficos, jurídicos y políticos que protagonizaron la revolución francesa que hemos señalado pasó por diversas fases desde una primera etapa, moderada burguesa hacia una segunda, radical y democrático-popular.

El desplazamiento del inicial horizonte reformista se constata claramente en la figura de Condorcet, Marie-Jean-Antoine Nicolas de Caritat, marqués de Condorcet, llamado por Voltaire “filósofo universal”. Alineado con los Girondinos en 1789, al estallar en Francia la Revolución, Condorcet tuvo un papel protagonista, como defensor de numerosas causas liberales, y esperaba una reconstrucción racionalista de la sociedad. Tras la Toma de la Bastilla sería elegido para el Consejo Municipal de París y en 1791, fue elegido representante de París en la Asamblea legislativa, tras haber solicitado

la implantación de la República. Incluso llegó a ser secretario de la Asamblea.

Condorcet votó contra la ejecución de Luis XVI, como no partidario de la pena de muerte. Los Girondinos perdieron el control de la Asamblea en favor de los Jacobinos, en 1793 y Condorcet fue condenado por traición redactándose una orden de arresto contra él, detenido y encarcelado fue hallado muerto poco después en su celda.

El pensamiento político de la revolución francesa se decantaría progresivamente en el discurso jacobino. Para el jacobinismo, centrado en la acción moral de un Estado autoritario que impone desde el exterior el nuevo orden a los individuos «egoístas», la democracia se traduciría radicalmente en la reforma moral de la ciudadanía, en la búsqueda de un contenido sustantivo, material, más allá de las meras formas jurídicas.

1.4.5 El concepto de Democracia en la Revolución Francesa: Sieyès

Una de las aportaciones más importantes producidas en el marco de la revolución es la de Emmanuel Joseph Sieyès sobre la soberanía popular y el gobierno representativo, por un lado, y de la del jacobino Maximilien Robespierre sobre la democracia radical, por otro.

El pequeño opúsculo del Emmanuel Joseph Sieyès - Conde de Sieyès, publicado en 1788 con el título de *Qué es el Tercer Estado?*, contiene algunas de las ideas fundamentales de la teoría política y constitucional, como son la teoría del poder constituyente y la teoría del gobierno representativo. Es en el capítulo 5 del mencionado opúsculo donde Sieyès expone estos fundamentos teóricos del Estado, que tienen evidente relevancia para nuestra consideración. Apoyándose en la metodología iusnaturalista para explicar el “mecanismo social”, Sieyès habla de tres épocas o fases en el establecimiento de un Estado legítimo, en la última de las cuales sitúa

el gobierno por representación²¹³. La primera fase es el estado natural: un número más o menos considerable de individuos aislados que quieren asociarse. Sólo por ese hecho forman ya una nación y tienen todos los derechos de ésta y no se trata ya más que de ejercerlos. Esta primera época está caracterizada por el juego de las voluntades individuales y su obra es la asociación. Para Sieyès esas voluntades individuales son el origen de todo poder.

La segunda fase está caracterizada por la acción de la voluntad común; es la fase en la que los asociados quieren dar consistencia en el tiempo a su unión, y, aunque los individuos siguen siendo el origen del todo, éstos desembocan en la voluntad común, ya que las voluntades individuales consideradas aisladamente no tendrían ningún poder. Sin una voluntad unida no se llegaría a formar un todo capaz de querer y de actuar. Como los asociados son demasiado numerosos y están dispersos en un territorio demasiado extenso para ejercitar fácilmente ellos mismos su voluntad, separan todo lo que es necesario para velar y proveer a las atenciones públicas, y confían el ejercicio de esta porción de voluntad nacional, y por consiguiente de poder, a algunos de entre ellos. Este es el origen de un gobierno ejercido por procuración. Esta es la tercera fase.

Pero Sieyès insiste en que ni la comunidad se despoja de su voluntad, porque es su propiedad inalienable, ni el cuerpo de delegados representantes puede tener la plenitud de este ejercicio de poder, por lo que no puede alterar los límites del poder que le ha sido confiado. En esta tercera fase, la que actúa es la voluntad común representada, pero ésta voluntad sólo es una porción de la gran voluntad común nacional y los representantes no la ejercen como un derecho propio, pues el derecho es del pueblo. El soberano auténtico es el pueblo, el pueblo es la voluntad general que se identifica con la

²¹³ Joseph Sieyès, Emmanuel: *¿Qué es el Tercer Estado?*. Trad. cast. de Francisco Ayala. Madrid, 1973

voluntad de la nación. Sólo el pueblo está legitimado para encargar a los representantes extraordinarios que hagan una constitución, en cuyas instituciones tendrán que moverse los representantes, los cuales tendrán un poder limitado a los asuntos del gobierno. Ni los parlamentarios ni el gobierno tienen competencia para mover los límites.

La base democrática del sistema representativo la pone Sieyès en las Asambleas primarias -integradas en cada barrio por los ciudadanos políticamente activos en un número no superior a los 600 o 700-, que tendrían el cometido de confeccionar las listas de elegibilidad con las que se realizarían las propuestas de candidaturas, aunque no tendrían sólo esa función electoral. Para que los representantes no se independizaran de los representados proponía Sieyès una serie de medidas como la reducción del mandato parlamentario a tres años, la posibilidad de revocación de los diputados en caso de quiebra de confianza por parte de los electores o la reorganización igualitaria del territorio para evitar la influencia política de privilegios territoriales tradicionales.²¹⁴

Este es el núcleo de su idea de representación: el poder público delegado no puede jamás llegar a ser nocivo para sus comitentes, para lo que son necesarias múltiples precauciones políticas que se han mezclado a la constitución para que el ejercicio del gobierno no sea ilegal.

Anterior, e independiente, a cualquier Constitución está la nación y ésta no puede decidir que ella no va a ser ya la nación, o que

²¹⁴ Véase la minuciosa exposición del sistema representativo de Sieyès que realiza Ramón Máiz en: *Nación y revolución: la teoría política de Emmanuel Sieyès*, Madrid, Tecnos, 2007, págs. 157-208, en donde el autor destaca las diferencias de Sieyès respecto al sistema representativo de la Constitución francesa de 1791, desmontando interpretaciones inexactas aunque extendidas.

su voluntad común va a cesar de ser su voluntad común o que los derechos de la voluntad común pasen a la minoría.

La voluntad común es la opinión de la mayoría y no de la minoría. Mirando la situación real de la Francia de entonces, afirma que no se puede decretar que una minoría –doscientos o trescientos mil nobles y eclesiásticos sobre veintitrés millones de ciudadanos- constituyan las dos terceras partes de la voluntad común: “las voluntades individuales son los solos elementos de la voluntad común. No se puede privar al mayor número del derecho de concurrir a ella, ni decretar que diez voluntades no valdrán sino por una, contra otras diez que valdrán por treinta, pues eso es una contradicción en los términos.

El modelo de representación política de Sieyès se separa claramente del de Montesquieu porque establecía la soberanía popular y un sistema representativo en el que los representantes no podían gozar de una independencia absoluta respecto a sus representados. Montesquieu, por el contrario, no había concebido la idea de una soberanía popular y su separación de poderes para evitar el despotismo consistía en una distribución social de los mismos, lo que significaba que determinados grupos o fuerzas sociales participaban como tales en el desempeño de los poderes del Estado.

Otro concepto de democracia alejado no sólo de Montesquieu sino también de Sieyès, es decir, alejado tanto del planteamiento estamental de Montesquieu como de la democracia representativa de Sieyès sería desarrollado en el transcurso de la Revolución Francesa, Maximilien Robespierre (1758-1794).²¹⁵ En un discurso pronunciado el 13 de julio de 1791, después de la huida de Luis XVI, sostiene que la palabra república no significa una forma particular de gobierno, sino que es la denominación general de todo tipo de gobierno de

²¹⁵ Robespierre, Maximilien: *Oeuvres Complètes*. Ed. Marc Bouloiseau, Georges Lefebvre, Albert Soboul, Paris 1950; *Textes choisis*. Tome Troisième (1793-1794). Introduction et notes explicatives par Jean Poperen. Paris 1974

hombres libres que tienen una patria. Y por eso afirmaba que la constitución francesa de esa época era una república con monarca: los hombres, en realidad, podían ser libres tanto con un monarca como con un senado.

Algunos meses después, en mayo de 1792, vuelve a afirmar en sus *Expositions de mes principes* que él prefiere antes una asamblea representativa popular y de ciudadanos libres con un Rey que un pueblo esclavo bajo un senado aristocrático o un dictador. Sin embargo, desde que se abolió la monarquía por acuerdo de la Convención nacional, el 21 de septiembre de 1792, y se proclamó la República Francesa, el jacobino Robespierre identificaría república con democracia, pues consideraba que la esencia de ambas era la igualdad, separándose así del concepto rousseauiano de república que entendía a ésta como un Estado gobernado por leyes.

En un famoso discurso de 5 de febrero de 1794 dirá: “¿Qué tipo de gobierno puede realizar estos prodigios? Sólo el gobierno democrático o republicano: estas dos palabras son sinónimas, a pesar del abuso del lenguaje vulgar, porque la aristocracia no es república como tampoco lo es la monarquía. La democracia no es un estado donde el pueblo, permanentemente reunido, regule por él mismo todos los asuntos públicos y menos aun un estado en el que cien mil fracciones del pueblo, mediante medidas aisladas y contradictorias, decidieran la suerte de la sociedad entera: un gobierno así no ha existido nunca y no podría existir más que para llevar al pueblo al despotismo. La democracia es un estado en donde el pueblo soberano, guiado por leyes que son obra suya, hace él mismo todo aquello que puede hacer y a través de delegados todo aquello que él mismo no puede hacer”.

Para Robespierre, ciudadano es equivalente a republicano, el amor a la igualdad es un componente esencial del amor a la patria.

En su discurso desarrolla toda una ética social-política, en la que deberían sustituirse las costumbres por los principios, la tiranía de la moda por el imperio de la razón, la vanidad por la grandeza de alma, en definitiva, “todos los vicios y ridiculeces de la monarquía por todas las virtudes y maravillas de la República”.

1.5. La fundamentación histórica y jurídica de los Derechos Humanos

Queda por último como gran aportación filosófica y política de la época moderna la fundamentación de los derechos humanos, es decir, su consagración en normas jurídicas y la posibilidad imperativa lograda gracias a las ideas renovadoras de la modernidad.

Puede decirse que los orígenes de los derechos humanos se hunden en las raíces de la historia constatándose desde muy antiguo la aparición de muchos principios de convivencia, de justicia y la propia idea de la dignidad de la persona humana si bien muchos filósofos e historiadores del derecho consideran que no puede hablarse de derechos humanos hasta la modernidad. En la historia jurídica occidental suele señalarse a la Carta Magna que tiene su origen en Inglaterra, donde era conocida como *Magna charta libertatum* (Carta magna de las libertades) aceptada por el rey Juan I de Inglaterra en 1212 como uno de los antecedentes de los regímenes políticos modernos en los cuales el poder del monarca o presidente se ve acotado o limitado por un consejo, senado, congreso, parlamento o asamblea, si bien se afirma que no puede considerarse una declaración de derechos humanos, ya que en esta época existen derechos pero solo entre iguales y no con carácter universal. No se predica la igualdad formal de todos los seres humanos.

Estas consideraciones son extrapolables a documentos como la Bula de Oro de Andrés II en Hungría en 1222; la *Confirmatio fororum et libertatum* de 1283 y el Privilegio de la Unión de 1287, de Aragón

ambos; las Bayerische Freiheitsbriefe und Landesfreiheitserklärungen desde 1311 o la Joyeuse Entrée de Brabante de 1356. En todos estos casos, los derechos y libertades reconocidos pertenecen al ámbito de los pactos entre el monarca y los estamentos del reino. No se trata, en suma, de derechos humanos; sino de derechos corporativos o privilegios.

Otras importantes aportaciones que proceden de la Edad Media son la de Santo Tomás de Aquino en relación a la conciliación de los intereses y los sociales, al afirmar en su Suma Teológica que si existía un conflicto entre lo social y lo individual en el seno del mundo material, debía prevalecer el bien común. Pero, por el contrario, si el conflicto afectaba a la esfera íntima del ser humano y a su salvación, en ese caso prevalecería el bien del hombre frente al de la sociedad. En este ámbito, de existir un conflicto patente entre el Derecho positivo y el Derecho natural, del pensamiento tomista se desprende la existencia de un derecho de resistencia contra el arbitrio de los gobernantes²¹⁶.

El planteamiento se completa con Guillermo de Ockahm para quién el derecho subjetivo, es una facultad o poder, que se divide en “ius poli” o Derecho del cielo, basado en la recta razón o en la equidad natural y “ius fori” o Derecho de la tierra , que es lo justo constituido por pacto. El concepto de ius fori es asimismo la potestad humana de reivindicar en juicio una cosa como propia anticipando por tanto la idea del derecho subjetivo básica para concebir los derechos humanos.

La segunda escolástica española desarrolla la idea del libre arbitrio, planteada por Guillermo de Ockahm y concibe la libertad como una facultad originaria anterior al derecho humano. La

²¹⁶ Fernández-Galiano, Antonio; de Castro Cid, Benito (1999). *Lecciones de Teoría del Derecho y Derecho Natural*. Madrid: Universitas. Pág. 288.

escolástica española insistirá en esta visión subjetiva del derecho, definiendo el derecho como un poder moral sobre lo propio, aunque al mismo tiempo mantuvieron la idea de de derecho como un derecho subjetivo y anunciará la existencia de ciertos derechos naturales referidos al cuerpo como el derecho a la vida y la propiedad y al espíritu como el derecho a la libertad de pensamiento y a la dignidad.

Francisco de Vitoria en sus *Relecciones teológicas* manifiesta que: - La comunidad estatal no tiene por base la fe sino el derecho natural, por lo que todo poder estatal depende de los hombres. Esta idea anticipa el principio representativo y por tanto el sistema democrático: la elección del gobernante es facultad exclusiva del pueblo y de sus representantes; - Los Estados se encuentran ligados por el derecho natural, pues la naturaleza hizo parientes a todos los hombres. Esta consagración del derecho natural trae consigo el respeto y la protección de la hermandad de los hombre y en consecuencia el principio de tolerancia y de solidaridad; - No sólo en el interior de cada Estado sino también en la comunidad de ellos existe un orden jurídico, cuyas raíces se hunden en el derecho natural; dicho orden se configura mediante la práctica y los tratados. De este modo se consagra la naturaleza social que es el fundamento primero del derecho natural.

Por su parte Francisco Suárez sostiene que la potestad política no se encuentra en un individuo en particular, sino en toda la comunidad, y para justificar la igualdad de todos los hombres acude a la ausencia de privilegios: Dios ha creado a todos los hombres a su imagen y semejanza, por tanto, todos son igualmente libres y dignos.

De estas afirmaciones también se desprende, aunque de manera indirecta, una apología del principio democrático y, por consiguiente, de los derechos civiles y políticos²¹⁷. Vázquez de Mechaca expondrá

²¹⁷ Soberanes Fernández, José Luis: *Sobre el origen de las declaraciones de derechos humanos*, p. 58.

en su obra principal *Controversias ilustres* y otras de uso corriente (1564) que todo poder sólo existe para el beneficio o utilidad de los ciudadanos”, reflexionando sobre diversas cuestiones jurídicas y políticas polémicas en su tiempo. Para este gran jurista laico que construye su edificio teórico desde la razón secular la única finalidad de este poder es la administración de justicia y la promoción y protección del bien común.

La autoridad o potestad gubernativa no es concedida directamente por Dios al príncipe para que haga lo que él considere pertinente -como se pensaba comúnmente en la Baja Edad Media- , sino que el pueblo es la sede de este poder y, cuando por motivo de la necesidad decide constituirse en una sociedad política, transfiere dicho poder con un fin muy particular: la protección de las libertades individuales. La Segunda Escolástica mantiene que la libertad, la igualdad y la propiedad son de derecho natural, pues se derivan de la libertad natural de todo hombre y cuestiona de una u otra manera, la plena potestad del Rey y del Papa. Y aún más: muchos de ellos niegan el derecho divino de los reyes y proponen, por el contrario, el principio republicano de la constitución de la autoridad gubernativa a través del pacto social. Para la Segunda Escolástica la soberanía reside y permanece en el pueblo, quien sólo la transfiere al gobernante.

Son asimismo importantes las aportaciones de la Escuela Nacionalista de Derecho natural que tuvo fuertes tendencias secularizadoras. El derecho natural teológico no era capaz de dar una respuesta universal a las respuestas de la época moderna. La Escuela Racionalista colocará a la razón en lo más alto de la capacidad humana y consagrará la voluntad como la esencia del derecho y la ética entendiendo que los individuos tienen derechos naturales que les son innatos.

Grocio considera que hay algunos principios universales que tienen que ser respetados por todas las naciones y que son tan ciertos

que a nadie, a menos de hacerse violencia, los pudiera negar²¹⁸. Samuel Pufendorf manifiesta que la persona no reconoce superior, por lo que toda norma proviene de su libertad. El derecho natural no puede ser otra cosa que las acciones inmotivadas de la libertad. La persona es la fuente de todo derecho.

Diversos filósofos europeos durante los siglos XVII y XVIII, desarrollaron el concepto de derechos naturales. Las ideas de John Locke y Voltaire, fueron muy importantes para el desarrollo de la noción moderna de derechos. Los derechos naturales, para Locke, no dependían de la ciudadanía ni las leyes de un Estado, ni estaban necesariamente limitadas a un grupo étnico, cultural o religioso en particular.

Por su parte, la teoría del contrato social, de acuerdo con sus tres principales formuladores, el ya citado Locke, Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau, se basa en que los derechos del individuo son naturales y que, en el estado de naturaleza, todos los hombres son titulares de todos los derechos. Tales reflexiones filosóficas y políticas se plasmaron en las Declaraciones de derechos de finales del siglo XVIII y concluirán con la positivación de los derechos humanos.

Las Revolución Americana y la Revolución francesa, representan el principio del complejo proceso de reconocimiento y creación de los derechos humanos tal como han llegado hasta nosotros.

La Declaración de Derechos de Virginia

Tras una lectura pública de la Declaración de la Independencia, el 1 de julio de 1776, una multitud derribaría la estatua del Rey Jorge III. Para entonces ya se había adoptado por unanimidad la Declaración

²¹⁸ *De iure belli ac pacis*, proleg. § 46 Soberanes Fernández, J. L.: *Sobre el origen...*, op. cit., p. 105.

de Virginia, documento elaborado para proclamar los derechos inherentes de los hombres incluidos el derecho a revelarse contra los gobiernos inadecuados.

La Declaración fue adoptada por unanimidad por la Quinta Convención de Virginia en Williamsburg, Virginia, 12 de junio de 1776 como un documento separado de la Constitución de Virginia, que posteriormente fue adoptado el 29 de junio de 1776. En 1830, la Declaración de Derechos sería incorporada dentro de la Constitución del Estado de Virginia, como el artículo I, pero incluso antes de que la Declaración de Derechos de Virginia declaró que era "la base y fundamento de gobierno" en Virginia²¹⁹.

²¹⁹ *"DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS hechas por los representantes de la buena gente de Virginia, reunidos en Convención plena y libre, que los derechos sean dependientes de ellos y su posteridad, como base y fundamento de Gobierno.*

I. Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran en un estado de sociedad, no pueden, por ningún pacto, privar o despojar a su posteridad, a saber, el goce de la vida y la libertad, con los medios de adquirir y poseer propiedades, y la búsqueda y obtención de la felicidad y la seguridad.

II. Que todo poder reside en y, en consecuencia derivada de, el pueblo, que los magistrados son sus mandatarios y funcionarios, y en todo momento responsables ante él.

III. Que el gobierno es, o debiera ser, instituido para el bien común, la protección y seguridad del pueblo, nación o comunidad, de todos los modos y formas de gobierno que es el mejor, que es capaz de producir el máximo grado de felicidad y la seguridad y es el más eficazmente protegido contra el peligro de la mala administración, y que, cuando cualquier gobierno sea considerado inadecuado, o contrario a estos propósitos, una mayoría de la comunidad tiene el derecho indudable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, en la forma que se que más satisfaga el bien común.

IV. Que ningún hombre o grupo de hombres tiene derecho a emolumentos exclusivos o separado o privilegios de la comunidad, sino en consideración a servicios públicos, los cuales, al no ser hereditarios, ni que los cargos de magistrado, legislador o juez ser hereditaria.

V. Que los poderes legislativo y ejecutivo del estado deben ser separados y distintos del judicial, y que los miembros de los dos primeros puede ser restringida por el sentimiento de la opresión y la participación de las cargas del pueblo, deberían, en períodos fijos, se reduce a una estación privada, vuelva a ese cuerpo del que originalmente fueron sacados, y las vacantes que se

suministra a través de elecciones frecuentes, fijas y periódicas en las que todos o parte de los antiguos miembros, para ser elegible otra vez, o inelegibles, según dicten las leyes.

VI. *Que las elecciones de los miembros que servirán como representantes del pueblo en asamblea, deben ser libres, y que todos los hombres, tener pruebas suficientes de interés común permanente, y el apego a, la comunidad tiene el derecho de sufragio y no pueden ser gravados ni privado de su propiedad para uso público, sin su propio consentimiento o el de sus representantes así elegidos, ni estar obligados por ninguna ley que ellos no tienen, de igual manera, aprobado en aras del bien público.*

VII *Que todo poder de suspender leyes, o la ejecución de las leyes, por cualesquiera autoridad, sin consentimiento de los representantes del pueblo, es injurioso para sus derechos y no debe ejercerse.*

VIII *Que en todos los procesos de capital o criminal un hombre tiene derecho a exigir la causa y naturaleza de la acusación, a ser confrontado con los acusadores y testigos, a solicitar pruebas a su favor, ya un juicio rápido por un jurado imparcial de su vecindad, sin cuyo consentimiento unánime no puede ser declarado culpable, ni puede ser obligado a declarar contra sí mismo, que nadie puede ser privado de su libertad, salvo por la ley de la tierra o el juicio de sus pares.*

IX *Esa fianza excesiva no debe ser necesaria, ni se impondrán multas excesivas, ni castigos crueles e inusuales.*

X *que garantiza generales, por lo que puede ser cualquier funcionario o agente al mando de buscar lugares sospechosos sin prueba de hecho cometido, o arrestar a cualquier persona o personas no mencionadas, o cuyo delito no está especialmente descrito y apoyado por la evidencia, son opresivas y crueles y no debe ser concedida.*

XI *Que en controversias sobre la propiedad y en conflictos entre hombre y hombre, el antiguo juicio por jurado es preferible a cualquier otro y debe considerarse sagrado.*

XII *Que la libertad de prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad y no puede ser restringido sino por los gobiernos despóticos.*

XIII *Que una milicia bien regulada, compuesta del cuerpo del pueblo entrenado para las armas, es la defensa apropiada, natural y segura de un estado libre, para que los ejércitos permanentes en tiempo de paz, se debe evitar peligrosos para la libertad; y que, en todos los casos, los militares deben subordinarse estrictamente al, y se regirán por el poder civil.*

XIV *Que el pueblo tiene derecho a un gobierno uniforme, y por lo tanto, que ningún gobierno separado o independiente del gobierno de Virginia, debe ser erigido o establecido dentro de sus límites.*

XV *Que ningún gobierno libre, o las bendiciones de la libertad, pueden ser conservados por ningún pueblo, sino con una firme adhesión a la justicia, la moderación, la templanza, la frugalidad y virtud, y con una frecuente vuelta a los principios fundamentales.*

XVI *Que la religión, o las obligaciones que tenemos con nuestro Creador, y la manera de cumplirlas, sólo pueden estar dirigidas por la razón y la convicción,*

La Declaración de Independencia

Ha de hacerse también una referencia a la llamada Carta de Derechos presentada en el Congreso el 8 de junio de 1789 por James Madison y adoptada finalmente el 15 de diciembre de 1791 cuando fueron ratificadas por tres cuartas partes de los estados.

Ya durante la propia Convención de Filadelfia se produjeron manifestaciones que planteaban la inclusión en la Constitución de los Estados Unidos de una declaración expresa de los derechos individuales que el nuevo gobierno federal debería respetar bajo todas las circunstancias. Esta propuesta fue mantenida entre otros por George Mason, que había realizado en 1776 la Declaración de Derechos de Virginia y quién al haber sido desechada por unanimidad abandonó la Convención y no firmó el texto constitucional. Pero fue rechazada entre otros por Alexander Hamilton para quién la Constitución era en si misma una Carta de Derechos.

Aquella cuestión se planteó asimismo durante los procesos de ratificación en la mayoría de los Estados y el debate se extendió al Congreso y a la opinión pública provocando una contradicción entre los antifederalistas con figuras como el propio Thomas Jefferson y los federalistas partidarios de la creación de un gobierno federal más fuerte y que cree necesario proteger a las personas de poderes que no se le concederían al gobierno.

Se realizó una relación extensa de aquellos derechos, entre ellos el libre ejercicio de la religión; no estar sometidos a registros excesivos de sus papeles, propiedad y personas; el derecho a un juicio

no por la fuerza o la violencia, y por lo tanto, todos los hombres tienen igual derecho al libre ejercicio de la religión, de acuerdo a los dictados de la conciencia, y que es deber mutuo de todos el practicar la indulgencia cristiana, el amor y la caridad hacia los demás”.

Aprobada por unanimidad 12 de junio 1776 Virginia Convención de Delegados redactadas por el Sr. George Mason

por jurados en las causas civiles; que los juicios se celebrasen en la localidad donde se hubieron cometido los delitos; el derecho a confrontar a los testigos; el derecho a la libertad de prensa; que no se les privase de sus propiedades sin su consentimiento o el de sus representantes políticos y sin ser compensados adecuadamente; no estar sometidos a leyes ni impuestos que no hubieran aceptado sus representantes reunidos conforme a la constitución; que la seguridad individual se fundase en poder recurrir a la ley libremente, en el derecho de habeas corpus, en el derecho a un juicio por jurado tanto en las causas penales como civiles y que fuera rápido y se celebrase en sus localidades, en poder defenderse por sí mismo o mediante sus abogados, en que no se obligase a declarar contra uno mismo, en poder confrontar cara a cara y ante el juez a sus adversarios, y en no ser detenido hasta que se le informase en detalle del delito del que se le acusara; el derecho a reunirse pacíficamente y a pedir al gobierno que indemnizara por los daños causados; que los militares estuvieran siempre sometidos a la autoridad civil y que no se acuartelasen las tropas en los hogares de los ciudadanos sin su consentimiento; que la milicia estuviera siempre bien armada y adiestrada; que las elecciones fueran periódicas y frecuentes; y que hubiera separación de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial.

Finalmente James Madison, delegado a la Convención constitucional de Virginia y convertido en el líder en la nueva Cámara de Representantes participando en la elaboración de muchas leyes básicas, sería quien llevaría a cabo la redacción de las primeras diez enmiendas a la Constitución, por lo que se conoce como el "Padre de la Declaración de Derechos" llegándose así a la realización de la Carta de Derechos "Bill of Rights", término por el que se conocen las diez

primeras enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos de América²²⁰.

²²⁰ ENMIENDA I *Libertad de expresión, de prensa, religiosa, asamblea pacífica y de petición al gobierno*. El Congreso no aprobará ley alguna por la que adopte una religión oficial del estado o prohíba el libre ejercicio de la misma, o que restrinja la libertad de expresión o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a pedir al gobierno la reparación de agravios.

ENMIENDA II *Derecho de las personas a tener y portar armas, así como a mantener una milicia*. Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas.

ENMIENDA III *Protección contra el alojamiento de militares*. En tiempo de paz no se alojará a ningún soldado en casa alguna sin el consentimiento del propietario; ni en tiempo de guerra, excepto en la forma prescrita por ley.

ENMIENDA IV *Protección contra registros e incautaciones irrazonables*. El derecho del pueblo a que sus personas, domicilios, papeles y efectos se encuentren protegidos contra registros e incautaciones irrazonables, será inviolable, y no se expedirán al efecto órdenes que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante juramento o afirmación y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser incautadas.

ENMIENDA V *Debido proceso, Non Bis In Ídem, auto-incriminación, propiedad privada*. Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o de otro delito infame a menos que un gran jurado lo acuse, a excepción de los casos que se presenten en las fuerzas navales o terrestres, o en la milicia nacional cuando se encuentre en servicio actual en tiempo de guerra o peligro público; tampoco se juzgará a persona alguna dos veces con motivo del mismo delito, el cual conlleve la pérdida de la vida o algún miembro; ni se le compelerá a declarar contra sí misma en ningún juicio criminal; ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni se tomará propiedad privada para uso público sin una justa indemnización.

ENMIENDA VI *Juicio por jurado y otros derechos del acusado*. En toda causa criminal, el acusado gozará del derecho de ser juzgado rápidamente y en público por un jurado imparcial del distrito y estado en que el delito se haya cometido, Distrito que deberá haber sido determinado previamente por ley; así como de que se le haga saber la naturaleza y causa de la acusación, de que se caree con los testigos en su contra, de que se obligue a comparecer a los testigos que le favorezcan y de contar con la ayuda de un abogado que le defienda.

ENMIENDA VII *Juicio civil por jurado*. El derecho a que se celebren ante un jurado los juicios de derecho consuetudinario en que el valor en disputa exceda de veinte dólares, será garantizado, y ningún hecho juzgado por un jurado será reexaminado en tribunal alguno de los Estados Unidos, salvo con arreglo a las normas del derecho consuetudinario.

Estas enmiendas limitan el poder del gobierno federal, y garantizan los derechos y libertades de las personas. Entre los derechos y libertades que la Carta de Derechos garantiza se encuentran los siguientes: la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad religiosa, la libertad de petición, y el derecho a tener y portar armas; el derecho a no ser sometido a registros e incautaciones irrazonables, o a castigos crueles e inusuales; el derecho a no testificar contra uno mismo, al debido proceso, y a un juicio rápido con un jurado imparcial y local. Además, la Carta de Derechos establece que “la enumeración en la Constitución, de ciertos derechos, no debe ser interpretada para negar o menospreciar otros retenidos por el pueblo”.

La Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789

La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789 constituye uno de los documentos fundamentales originados en la revolución francesa. Influenciada por la doctrina de los derechos naturales, los derechos del hombre se entienden como universales y válidos en todo momento al pertenecer a la naturaleza humana.²²¹

ENMIENDA VIII *Prohibición de una fianza excesiva, al igual que de castigos crueles e inusuales.* No se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirán penas crueles e inusuales.

ENMIENDA IX *Protección de derechos no específicamente enumerados en la Carta de Derechos.* No se interpretará la enumeración en la Constitución de ciertos derechos para negar o menospreciar otros derechos retenidos por el pueblo.

ENMIENDA X *Poderes de los Estados y de las personas.* Los poderes que la Constitución no delega a los Estados Unidos ni prohíbe a los Estados, quedan reservados a los estados respectivamente o al pueblo.

²²¹ Artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común.

Artículo 2. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

Artículo 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo, ningún individuo, pueden ejercer una autoridad que no emane expresamente de ella.

Artículo 4. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro: por eso, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites sólo pueden ser determinados por la ley.

Artículo 5. La ley sólo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido, y nadie puede ser constreñido a hacer algo que ésta no ordene.

Artículo 6. La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración, personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos, ya sea que proteja o que sancione. Como todos los ciudadanos son iguales ante ella, todos son igualmente admisibles en toda dignidad, cargo o empleo públicos, según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y sus talentos.

Artículo 7. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, como no sea en los casos determinados por la ley y con arreglo a las formas que ésta ha prescrito. Quienes soliciten, cursen, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deberán ser castigados; pero todo ciudadano convocado o aprehendido en virtud de la ley debe obedecer de inmediato; es culpable si opone resistencia.

Artículo 8. La ley sólo debe establecer penas estricta y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito, y aplicada legalmente.

Artículo 9. Puesto que todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado culpable, si se juzga indispensable detenerlo, todo rigor que no sea necesario para apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley.

Artículo 10. Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley.

Artículo 11. La libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, a trueque de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley.

Artículo 12. La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública; por lo tanto, esta fuerza ha sido instituida en beneficio de todos, y no para el provecho particular de aquellos a quienes ha sido encomendada.

Artículo 13. Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, resulta indispensable una contribución común; ésta debe repartirse equitativamente entre los ciudadanos, proporcionalmente a su capacidad.

Artículo 14. Los ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o a través de sus representantes, la necesidad de la contribución pública, de aceptarla

Los diputados franceses de la Asamblea Nacional se habían fijado como misión principal por el Juramento del Juego de Pelota, el 20 de junio de 1789, dar por primera vez una Constitución a Francia. A este fin crearon un comité que preparase el "orden de trabajo sobre la constitución del reino".

El 9 de julio de 1789. El mismo día que la Asamblea adoptó el nombre de Asamblea Nacional Constituyente, Jean Joseph Mounier abogado y político francés elegido diputado del Tercer Estado por el Dauphiné, para los Estados Generales de 1789 presentó ante la Asamblea el informe del comité, en el que se recomendaba redactar un preámbulo que enumerase los derechos fundamentales que la Constitución debía respetar. Se leyeron 21 proyectos de declaración, incluido uno de La Fayette y otro de Robespierre. El 19 de agosto, la Asamblea acordó que la declaración sería debatida por los diputados a partir del proyecto de 24 artículos propuesto por el 6º Bureau, que fue el proyecto más votado por delante del presentado por el Abad Sieyès.

En los días siguientes (del 20 al 26 de agosto), los artículos fueron debatidos, redactados y votados uno por uno modificándose sustancialmente el contenido de la declaración que quedó en 17 artículos y se aprobó el último artículo, el 17 relativo al derecho a la propiedad, el 26 de agosto de 1789.

El 3 de noviembre de 1789 la Declaración de Derechos sería promulgada por patente real, junto con otros textos aprobados por la Asamblea Nacional. Aquella noche también se había aprobado la

libremente, de vigilar su empleo y de determinar su prorrata, su base, su recaudación y su duración.

Artículo 15. La sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a todo agente público.

Artículo 16. Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución.

Artículo 17. Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y a condición de una justa y previa indemnización.

abolición de los privilegios en los que se basaba la sociedad del Antiguo Régimen, poniendo fin al sistema feudal. Los asambleístas tuvieron plena conciencia de que su actuación representaba los sentimientos nacionales y pretendieron la destrucción de la monarquía absoluta y de sus valores políticos y morales. La Declaración les permitió legitimar el proceso revolucionario.

Es indudable que los autores conocieron la Declaración de Virginia y la Carta de Derechos incluida en la Constitución Americana si bien en la Declaración francesa hay fórmulas originales y asimismo es distinta la finalidad puesto que la declaración francesa trataba de fundar un nuevo orden social, político y jurídico mientras que la Declaración Americana solamente tenía la pretensión de legitimar el sistema jurídico heredado de la tradición inglesa.

El artículo 2 enumera los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, que son anteriores a los poderes establecidos y son considerados como aplicables en cualquier lugar y cualquier época: la libertad; la propiedad; la seguridad; la resistencia a la opresión; la igualdad. Muchos artículos son dedicados a la libertad: Artículo 1: "Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos"; Los artículos 4 y 5 intentan definir y circunscribir la libertad. Es definida como "lo que no perjudica a nadie" y sólo la ley le puede poner límites; Los artículos 7, 8 y 9 precisan las características de la libertad individual: presunción de inocencia e irretroactividad de la ley; Los artículos 10 y 11 se refieren a la libertad de opinión, de prensa y de conciencia.

El principio de igualdad es establecido en el artículo primero, la igualdad ante la Hacienda Pública en el artículo 13 y la igualdad frente a la ley en el artículo 6 (igualdad para acceder a los cargos públicos sólo con base en las capacidades individuales). La propiedad es un derecho inviolable y sagrado (artículo 17). Según este artículo "Nadie puede ser privado de ella, excepto cuando la necesidad pública,

legalmente constatada, lo exige con evidencia y con la condición de una indemnización previa y justa."

El artículo 6 afirma que la ley es la expresión de la voluntad general, la expresión de la soberanía y la fuente de los poderes públicos. Según el artículo 15, los agentes públicos son responsables de su gestión y la sociedad tiene el derecho de pedirles que rindan cuenta de ella.

La Declaración de 1789 supone el triunfo y la culminación de iusnaturalismo nacionalista. Existe un derecho natural, esto es, un conjunto de normas que se desprenden de la naturaleza humana y que pueden ser conocidas por la razón; ese Derecho es atinente a todos los seres humanos, por lo que todos son, en consecuencia, iguales. Estos derechos se concretan como la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

CAPÍTULO 2

EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO Y POLÍTICO DE LOS CONSTITUYENTES DE CÁDIZ

CAPÍTULO 2. EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO Y POLÍTICO DE LOS CONSTITUYENTES DE CÁDIZ

En España una Junta revolucionaria se proclamó soberana, convocó unas Cortes que promulgaron a su vez una Constitución. Estos son los sucesos que requieren una precisión histórica y que anticipa la recepción de las ideas que los constituyentes de Cádiz trasladaron al texto histórico de 1812.

2.1 Los acontecimientos históricos: la Guerra de la Independencia

Podría decirse que en España no hubo una Revolución similar a la descrita en Estados Unidos y mucho menos similar a la Revolución Francesa. Habría que esperar hasta la Revolución de 1868 o Revolución Gloriosa que trajo la I República y cuyo fracaso lo constata la historia.

Se ha dicho que una Revolución hubiera podido entonces diseñar un nuevo proyecto histórico para España que acabase con una diversidad, una pluralidad de regímenes jurídicos heredados del pasado medieval y moderno y un mantenimiento de fórmulas arcaicas y de vinculaciones provenientes de las épocas anteriores y que han sido gravosas para la propia idea de la España Contemporánea, cuya gestación surge precisamente a través de la Constitución de Cádiz.

En todo caso, tanto quienes consideran que se produjo una verdadera revolución cuanto quienes mantienen otro planteamiento, lo cierto es que en el periodo que nos ocupa, el referido a los acontecimientos que transcurren entre 1808 y 1812 se produjeron una serie de sucesos que alumbraron el nuevo periodo contemporáneo y que singularmente se identifican en un hecho militar: la Guerra de la Independencia y en un hecho jurídico y político: la Constitución de Cádiz de 1812.

2.1.1 Los sucesos que marcan la Guerra de la Independencia

Considerando los hechos históricos debe recordarse que en 1788 moría Carlos III, con el que se dice que termina la historia del reformismo ilustrado en España, pues el estallido casi inmediato de la Revolución Francesa al año siguiente provocó una reacción de terror que se extendería al reinado de su hijo y sucesor, Carlos IV, quién asumiría una política más conservadora.

La invasión francesa arrastraría a España a un ciclo de revolución y reacción que marcaría el siglo siguiente, sin dejar espacio para continuar un reformismo sereno como el que había desarrollado Carlos III. El Despotismo Ilustrado, representado en España por la Monarquía de Carlos III, había tratado de acabar con la corrupción y la venalidad y para alcanzar el objetivo de una administración más eficaz. Paralelamente se impulsaron reformas de tipo económico, se apoyaron propuestas y proyectos para el progreso de la educación, para el saneamiento de las ciudades, o para la mejora de la red de carreteras. Asimismo se defendieron las prerrogativas del Estado frente a la Iglesia y se animó a los súbditos a desarrollar actividades agrícolas, comerciales e industriales.

Sin embargo aquellas reformas encontrarían la oposición y a las resistencias de los grupos privilegiados, nobleza y clero, representantes y defensores a ultranza de los principios sobre los que se asentaba el Antiguo Régimen siendo significativo el intento de formular una Ley Agraria, que con sus intenciones de reforma profunda de la estructura de la propiedad se encontraba con uno de los fundamentos inalterables de aquel sistema, la propiedad vinculada a señoríos e instituciones eclesiásticas.

El Rey Carlos IV y el viejo equipo de ilustrados, con Floridablanca o el propio Jovellanos, mostrarán su temor por la violencia de la Revolución Francesa y ello provocaría una reacción

contraria al reformismo ilustrado que se venía planteando desde el reinado de Carlos III.

Pero no fue la situación interior la que va a incidir en el cambio jurídico y constitucional que se iba a producir en España sino el hecho de una ocupación militar decidida por Napoleón Bonaparte coronado en 1804 como Emperador de Francia. Los sucesos que enmarcan la Guerra de la Independencia y la gestación de la Constitución de Cádiz de 1812 parten históricamente de una Alianza hispanofrancesa surgida por el Tratado de San Ildefonso de 1796, firmado entre la Convención Nacional Francesa, la institución principal de la Primera República Francesa, y el Rey Carlos IV de España.

Este Tratado fue una alianza militar firmada entre España y Francia en el marco de las Guerras Napoleónicas. Según los términos del acuerdo, ambos Estados convenían en mantener una política militar conjunta frente a Gran Bretaña, que en esos momentos amenazaba a la flota española en sus viajes a América, lo que preocupaba más aún al Rey de España que las relaciones con un país sumido en un mundo revolucionario.

A este Tratado seguiría el llamado Tratado de Aranjuez de 1801 realizado bajo el Consulado de Napoleón Bonaparte, consistía en un acuerdo entre Francia y España firmado por Luciano Bonaparte y Manuel Godoy que establecía las condiciones en las que se unirían los ejércitos y flotas de España, Francia y Batavia para combatir a las fuerzas de Gran Bretaña. De este modo se restablecía una alianza tradicional que desde la proclamación de Felipe V de Borbón, como Rey de España en 1700 había regido las relaciones entre España y Francia.

En mayo de 1802 Napoleón, convertido en Cónsul Vitalicio de Francia, decidió forzar la neutralidad de Portugal que se resistía a romper su condición de aliado de la Corona Británica. Entonces el ejército español intervino en Portugal provocando la efímera Guerra

de las Naranjas que puso de manifiesto la falta de resolución de la Corte española.

Desde 1803 España ayudó económicamente a Francia y puso a disposición su Armada para la guerra naval contra los británicos, que culminaría en octubre de 1805 en la Batalla de Trafalgar que significó un desastre para España. La flota franco-española fue definitiva y abrumadoramente derrotada por la superioridad técnica y táctica de la Armada Real Inglesa. Napoleón, proclamado, ya en 1804, Emperador de los franceses, hubo de renunciar a la invasión inmediata por vía marítima de Gran Bretaña, pero pudo equilibrar su posición con los triunfos militares sucesivos en Austerlitz, de 1805 y en Jena 1806, alcanzando acuerdos de paz con austriacos, rusos y prusianos.

Napoleón realizaría un intento frustrado de invadir las islas Británicas, en el que la escuadra franco-española debía distraer a la Flota Británica y alejarla del Canal de la Mancha para dirigirla hacia sus posesiones en las Indias Occidentales. Este plan de distracción fracasó, y se agravó con la consiguiente derrota de Finisterre (22 de julio de 1805). Tras esta derrota, la flota se dirigió al puerto de Cádiz, de donde zarparía el 19 de octubre hacia Trafalgar.

La batalla de Trafalgar tuvo lugar el 21 de octubre de 1805, en el marco de la tercera coalición iniciada por Reino Unido, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia para intentar derrocar a Napoleón Bonaparte del trono imperial y disolver la influencia militar francesa existente en Europa. Esta batalla frustró la intención de los franceses de invadir, o al menos bloquear, por mar a Inglaterra. Aquellas contiendas navales no significaron la destrucción de la armada española pero en todo caso la batalla de Trafalgar otorgó a los británicos el dominio absoluto de los mares no sólo durante las campañas napoleónicas, sino también durante la práctica totalidad del siglo XIX.

El hecho que la flota española fuera fuertemente debilitada durante la batalla de Trafalgar dificultó el tráfico comercial lo que

agravó la crisis económica al no permitir las comunicaciones con las colonias americanas y el tráfico militar así como el control de las colonias españolas en América que sumado a la situación de conflicto en Europa, facilitó el éxito de los patriotas en las Guerras de Independencia hispanoamericanas producidas desde el año 1810 y siguientes.

En este contexto se realizaría otro nuevo Tratado entre España y Francia, el Tratado de Fontainebleau de 27 de octubre de 1807, por el que, tras adherirse la Corona española al bloqueo continental decretado por Napoleón contra los británicos, se acordaría el reparto de Portugal en tres zonas, el norte para el Rey de Etruria, el sur para España y el centro sin decidir. Se trataba, por tanto, de una invasión francesa con la colaboración hispana de Portugal para lo cual España facilitaría a los franceses el apoyo logístico necesario al tránsito por su territorio de las tropas imperiales.

Sin embargo, Napoleón ya pensaba en ocupar España bajo la idea de derrocar a la Casa de Borbón y suplantarla por su propia dinastía, convencido de contar con el apoyo popular. Sus tropas fueron tomando posiciones en importantes ciudades y plazas fuertes como Burgos, Salamanca, Pamplona, San Sebastián, Barcelona o Figueras. El total de soldados franceses acantonados en España pronto ascendió a unos 65.000. El ejército francés controlaría no sólo las comunicaciones con Portugal, sino también con Madrid, así como la frontera francesa.

Gran parte de la oposición formada por aristócratas, como los Duques del Infantado y San Carlos, el Marqués de Ayerbe y los condes de Orgaz, Teba y Bornos, se consideraron partidarios del Conde de Aranda, noble, militar y estadista ilustrado español, Conde de Aranda, Presidente del Consejo de Castilla (1766 - 1773) y Secretario de Estado de Carlos IV (1792). Muchos de ellos, encontraron cobijo y estímulo en el Príncipe de Asturias, el futuro

Fernando VII, convertido en el enemigo más activo de Godoy, con la colaboración del canónigo Juan Escóiquiz, el preceptor de Fernando, y de la princesa María Antonia de Nápoles, la primera esposa de Fernando, con la que se había casado en 1802 que seguía la línea de su familia, antinapoleónica, enemiga de Francia y proclive a Inglaterra.

El fallecimiento prematuro de la princesa María Antonia en mayo de 1806 dejó a su esposo, Fernando, como abanderado de una oposición que veía en él la esperanza de un nuevo rumbo para la política española, único capaz de derribar a Godoy y forzar la abdicación de Carlos IV.

En los meses anteriores a octubre de 1806, Godoy había mantenido contactos y negociaciones secretas con las Cortes británica y rusa para tantear una posible entrada de España en una coalición antinapoléonica que se preparaba. Sin embargo, en octubre de 1806, Napoleón logró la importante victoria de Jena frente a los prusianos. Pese a que Godoy abandonó entonces sus veleidades antinapoleónicas, el Emperador francés había perdido su confianza en Godoy, y Fernando intentó aparecer ante el gobierno francés como el sustituto más idóneo para tener el respaldo de Napoleón.

En los últimos días de octubre de 1807 el rey Carlos IV declaró en El Escorial a sus vasallos que una mano desconocida le había revelado el más ignominioso e inaudito plan urdido contra Godoy y destinado a situar en el trono a su hijo Fernando. Tras obtener su abdicación, y la de los conjurados, miembros todos ellos de la nobleza que contaban con la aprobación del príncipe de Asturias y habían solicitado la protección del Emperador, Fernando sería recluido en sus habitaciones, y el rey ordenó celebrar misas en acción de gracias.

Pero la forma en que se resolvió la llamada Conspiración de El Escorial creó un fuerte sentimiento de desconfianza hacia Carlos IV, a quien pocos creyeron, y terminó por fortalecer la posición del partido fernandino. La mayoría de los españoles sospechó que Godoy había

tramado un complot destinado a desacreditar e incriminar a su rival, y que los Reyes lo habían secundado, uniendo su suerte a la de Godoy.

La aristocracia se convertía en portavoz de las quejas contra la tiranía del favorito y en depositaria de los valores sociales tradicionales y Bonaparte pasaba a ser un colaborador de la justa causa fernandina para acabar con Godoy. El poeta Quintana, que en 1795 había publicado un entusiasta homenaje al Príncipe de la Paz por la firma del Tratado de Basilea, vio a la España de fines de 1807 "atada, opresa, envilecida" por el mismo a quien había dedicado versos encendidos de elogios. Por entonces, la España atada de Quintana sólo tenía dos alternativas: actuar a la manera de la familia real portuguesa, abandonando la Corte y buscando refugio en Cádiz o América, para así recuperar su independencia, una opción que Godoy planteó a sus soberanos, o bien acabar con Godoy y forzar la abdicación, de los reyes.

El 18 de marzo de 1808, se produjo en Aranjuez un levantamiento nobiliario que provocaría la dimisión del Rey Carlos IV y la coronación de su hijo Fernando VII como Rey. Un motín popular organizado por los partidarios de Fernando asaltó y saqueó el día 17 la residencia de Godoy en Aranjuez, en cuyo palacio se encontraba la familia real. Los acontecimientos de Aranjuez fueron los primeros estertores de la agonía del Antiguo Régimen en España. Los sectores conservadores con una estrategia difamatoria personaron en Godoy la responsabilidad de la situación agudizándose el protagonismo entre los reformistas de Godoy y los grupos antiilustrados y consiguiendo finalmente la renuncia del Ministro Godoy y la del propio Rey Carlos IV legitimando como heredero a su hijo Fernando VII quién arrebató el trono a su propio padre, apareciendo ante los ojos del pueblo e incluso de los liberales como “el Rey deseado”²²²

²²² Surge entonces el mito del Rey deseado. La población española se había forjado una imagen casi mítica de Fernando VII. La Parra, Emilio -*El mito del*

Entre los días 17 y 19 de marzo de 1808 los enemigos de Godoy organizaron un motín asaltando y saqueando el Palacio de Godoy y de sus partidarios. La Guardia Real partidaria de Godoy fue sustituida por un regimiento llegado a Madrid. Al frente del Consejo de Castilla, Fernando VII colocó al Duque del Infantado, el aristócrata opuesto a toda reforma del monopolio señorial, colocando como consejeros personales al Duque de San Carlos y a Escoiquiz.

Pero Fernando necesitaba lograr el acuerdo de Napoleón que confirmara su acceso al trono por medios tan inadecuados. El nuevo Rey prometió a Napoleón estrechar al máximo los vínculos de la amistad hispano-francesa y solicitó que las tropas de Murat, situadas en las inmediaciones de Madrid, fueran acogidas en la capital como amigas. Napoleón aprovecharía el enfrentamiento entre Carlos IV y su hijo para consolidar sus posiciones en España, no reconociendo al nuevo soberano y nombrando a Joaquín Murat, Duque de Berg, como su lugarteniente en la Península Ibérica. Murat entró el 23 de marzo de 1808 en Madrid con las banderas desplegadas y hábilmente alentó las esperanzas de Carlos IV de recuperar la corona proponiendo una reunión en la cumbre de Burgos. Mientras tanto Napoleón se disponía a hacer el cambio de monarca, proponiendo a su hermano Luís la Corona. Murat trataba al Rey Fernando VII con indiferencia negándose a reconocerle.

Napoleón despreciaba al nuevo monarca español, de él decía que no tenía ninguna de las cualidades que son necesarias en el jefe de una nación pero Fernando VII necesitado de apoyos y de reconocimiento internacional siguió con la política de estrechar lazos de amistad con Francia enviando a su hermano Carlos al encuentro del Emperador.

Rey deseado-, en Demange Ch. , Géral P. , Hocquellet R. , Mighoneau S. y Salgues M. : *Mitos y memorias de la Guerra de la Independencia en España (1808-1908)*, Collection de la Casa de Velázquez, Vol. 99. Madrid, 2007, págs. 221 y ss.

Napoleón le pidió inicialmente que se reuniera con él en Burgos a lo que accedió el Rey el 10 de abril partiendo de Madrid con una comitiva, pero al llegar el día 12 a Burgos fue convencido por el General Savadí que continuase su viaje a Vitoria a donde llegó al día siguiente. Allí de nuevo es convencido para dirigirse a Bayona donde ya se encuentra Napoleón asegurándosele que este le reconocerá como Rey de España. Precedido por la caballería francesa llegaría a Bayona el día 20, donde nadie salió a recibirle. Aquél mismo día Godoy liberado del castillo de Villaviciosa de Odón, era entregado a los franceses y conducido a Bayona mientras que Murat declaraba en una proclama que el Emperador no reconocía a otro Rey que a Carlos IV.

El 22 de abril Carlos IV y la Reina María Luisa emprenderían viaje a Bayona donde el día 30 serían recibidos y agasajados como verdaderos Reyes²²³. El Rey Fernando ya conocía la decisión de Napoleón de sustituir a los Borbones por la familia Bonaparte. El 1 de mayo Napoleón comía con Carlos IV y Godoy y este concluía como plenipotenciario un Tratado el día 5 por el que Carlos IV concedía la Corona de España a Napoleón.

Dicha renuncia incluía en el artículo 1º el siguiente texto: “S.M. el rey Carlos que no ha tenido en toda su vida otra mira que la felicidad de sus vasallos, constante en la idea de que todos los actos de un soberano deben únicamente dirigirse a este fin; no pudiendo las circunstancias actuales ser sino un manantial de disensiones, tanto más fuertes, cuando las desavenencias han dividido su propia familia, ha resuelto ceder, como cede por el presente, todos sus derechos al Trono de las Españas y de las Indias a S.M. el emperador Napoleón,

²²³ Cevallos Pedro, *Exposición de los hechos y maquinaciones que han preparado la usurpación de la Corona de España, y los medios que el Emperador de los franceses ha puesto en obra para realizarla*, Imprenta Real, Madrid, 1080, págs. 20 y ss. Juan Escoiquiz, *Idea sencilla de las razones que motivaron el viaje del Rey D. Fernando VII a Bayona en el mes de abril de 1808, dada al público de España y de Europa*, Imprenta Real, Madrid, 1814, págs, 53 y ss.

como el único que, en el estado a que han llegado las cosas, pueda restablecer el orden; entendiéndose que dicha cesión sólo ha de tener efecto para hacer gozar a sus vasallos de las condiciones siguientes:

1º. La integridad del reino ha de ser mantenida; el príncipe que el emperador Napoleón juzgue que debe colocar en el trono de España será independiente, y los límites de la España no sufrirán alteración alguna.

2º. La religión católica, apostólica, romana será la única de España. No se tolerará en su territorio religión reformada alguna, y mucho menos infiel, según el uso establecido actualmente”.

Para entonces ya se había desatado el comienzo de una guerra armada como consecuencia de la protesta popular ante la situación de incertidumbre política y los excesos ocasionados por la presencia de las fuerzas napoleónicas en la ciudad.

El Rey Fernando VII había dejado antes de partir de Bayona un órgano de nueva planta, la Junta de Gobierno, presidida por el Infante Don Antonio. Murat solicita autorización para trasladar a Bayona a los dos hijos de Carlos IV que quedan en Madrid y la Junta ante las instrucciones del propio Rey llegadas a través de un emisario, cedería. Al sacar del Palacio al Infante Francisco de Paula, la muchedumbre se enfrenta a los soldados franceses y los guardias imperiales disparan a la multitud comenzando así un levantamiento popular espontáneo que sería aplastado por los mamelucos y lanceros napoleónicos.

La insurgencia se extendería por todo el territorio nacional. Un comisionado de la Junta Suprema, Evaristo Pérez de Castro, llegaría a Bayona comunicando al Rey los propósitos de actuación de la Junta. Fernando VII expediría dos decretos el 4 de mayo en los que se afirmaba que sellaba sin libertad y autorizaba a la Junta a ejercer el lugar seguro la plena soberanía en su nombre así como la convocatoria de Cortes.

Por su parte el Consejo de Castilla daba tácitamente su beneplácito al cambio sucesorio aplicando todas las resoluciones de Napoleón. Solo declarararía la nulidad de las renunciaciones de Bayona el 11 de agosto de 1808 tras la victoria de Bailen, que tuvo lugar el 19 de julio de 1808 y supuso la primera derrota en batalla campal de la historia del ejército napoleónico.

El 8 y 12 de mayo, Carlos IV y Fernando VII firmarían una proclama en la que justificaban su decisión y pedían al pueblo que se sometiera al Emperador para evitar males mayores. Carlos IV y María Luisa serían internados, de momento, en Fointanebleau, y Fernando VII, su hermano Carlos y su tío, el infante don Antonio, serían recluidos en el castillo de Valençay, donde permanecerían hasta su liberación en 1814. Por su parte Godoy acompañaría a Carlos IV y María Luisa a Compiègne y Marsella, instalándose en 1812 con ellos en Roma, en el palacio Barberini, donde en 1819 murieron los reyes, con diferencia de pocos meses.

Murat que había pretendido formar parte de la Junta de Gobierno dejada por Fernando VII se presentó para presidirla el 4 de mayo siendo aceptado por los restantes miembros. Por un decreto fechado el día 4 Carlos IV nombraba a Murat como Lugarteniente del Reino para que gobernara en su propio nombre.

El 6 de mayo la Junta recibía la renuncia de Fernando VII, que revertía sus derechos en su padre Carlos IV. La Junta Suprema decidió ignorarlo. No obstante, dado que Carlos IV ya había renunciado, de nuevo, a la corona, Murat quedó como Lugarteniente de un Reino sin rey. Esta situación duraría hasta el decreto de 6 de junio que proclamaría a José I Rey de España quién durante las Guerras Napoleónicas había actuado como enviado de su hermano y firmado tratados con Estados Unidos, Austria, Gran Bretaña y el Vaticano y desde 1806 a 1808 gobernaba el Reino de Nápoles. Su reinado efectivo comenzaría el 7 de julio de 1808 después de jurar la nueva

Constitución y de recibir, acto seguido, el juramento de fidelidad de los componentes de la junta española de Bayona.

2.2 La Constitución de Bayona

2.2. 1 Los orígenes de la Constitución de Bayona

Mientras en España tanto conservadores como reformistas, y entre ellos Jovellanos, considerarían las renunciaciones de Bayona como ilegítimas entendiendo que la invasión francesa no solo atentaba contra la dinastía legítima sino contra las leyes fundamentales del reino, Napoleón planteaba una alternativa constitucional de clara orientación francesa para el reino de España. Un informe del embajador Tournon a Napoleón, de 20 de diciembre de 1807, manifiesta un testimonio extraordinariamente interesante acerca de la atmósfera que rodea la inminente intervención del emperador de los franceses en la crisis política y dinástica de la Monarquía española.

El juicio de Tournon sobre *“...este hombre –Godoy–, que desde hace diez y siete años gobierna a España con un despotismo, del cual no hay ninguna idea fuera de la Península...”*, es demoledor: *“...No se puede negarle alguna sombra de talento; pero evaluándole en sus justas proporciones, se puede decir con verdad, que la astucia, la viveza y la intriga componen todo su mérito... No temo afirmar, que no posee ninguno de los conocimientos necesarios, para ocupar con algún éxito el puesto eminente al cual ha llegado, no tiene ningún conocimiento de diplomacia, no es más afortunado en los asuntos interiores y no puede hacerse una idea del estado de decaimiento en que España se encuentra...”*. Si añadimos a esta valoración la que le merecen el rey *“...buen hombre, poco inteligente...”* y, sobre todo, la reina, *“...la Mesalina de su siglo...”* se comprenderá la insistencia con

que el embajador Tournon desea atraer la atención del emperador sobre el estado de indefensión del reino.²²⁴

Un Estado, además, singularmente propiciado por el antagonismo generado entre el Príncipe de Asturias -”...*de un exterior agradable... se le supone de gran espíritu y elevación de sentimientos...*”- y el propio Godoy, que había desembocado en la supuesta conspiración del futuro Fernando VII para hacerse con el trono, y en su prisión:”...*El heredero de la Corona mostró en esta circunstancia gran firmeza y dignidad...*”.²²⁵

El cambio político en España es inminente, y la oportunidad que se presenta a Francia y su Emperador para liderarlo, convirtiéndolo al futuro soberano español en un miembro más de la red de príncipes tutelados por Napoleón, inmejorable. La conclusión que, en consecuencia, expresa Tournon al Emperador, no puede ser más explícita:”...*España atraviesa por un momento de crisis y espera su suerte del Emperador. Le considera como su solo apoyo y le mira como el protector del Príncipe de Asturias, que es toda su esperanza... Protegiendo... al Príncipe de Asturias, el Emperador se haría para siempre partidarios celosos en toda la nación española, que no debe ser desdeñada, pues si bien hoy sufre bajo un despotismo irritante, a la menor esperanza se encontrarán en ella sentimientos generosos...*”. El mecanismo de intervención es evidente: enviar un cuerpo expedicionario, cuya oportuna disposición estratégica describe el propio Tournon.²²⁶

²²⁴ *Ibidem*, pp. 453-454:”...*La Hacienda está aniquilada... los pagos del Estado, atrasados de siete meses, y todos los servicios en suspenso. España está en el último grado de aniquilamiento...*”.

²²⁵ *Ibidem*, pp. 457-458:”...*Lo que es indiscutible es, que el Príncipe de la Paz había dirigido este suceso para perder al Príncipe de Asturias, y que, por el contrario, le ha procurado el favor de la nación, mientras que él ha perdido la popularidad...*”.

²²⁶ *Ibidem*, pp. 459-460:”...*sería preciso enviar quince mil hombres a Valladolid... 2.000 hombres serían suficientes en Burgos, alejado unas 40 leguas de*

La fracasada conjura de El Escorial había convertido al príncipe Fernando en un mártir, no ya ante los ojos del pueblo español, sino de los diplomáticos destacados en España y, por extensión, de las cancillerías europeas. Las debilidades política y dinástica de la Monarquía española, constituían un enorme aliciente para los planes continentales de Francia y los ultramarinos de Inglaterra. Esta situación se acentuaría como ya hemos señalado cuando, en marzo de 1808, el “motín de Aranjuez” produjo la caída de Godoy y, como consecuencia, la abdicación de Carlos IV en su hijo, que se convertía en Fernando VII. La implicación del Imperio Francés en los acontecimientos²²⁷, se produjo de manera inmediata. El levantamiento popular sobreviene el 17 de marzo, y dos días después se produce la abdicación de Carlos.

Conocida la noticia en París el 27 siguiente, ese mismo día la correspondencia de Napoleón refleja su voluntad de sentar en el trono de España a uno de sus hermanos²²⁸ inicialmente Luis, después Jerónimo y, finalmente, José. En las semanas siguientes el general

Valladolid, pero serían precisos dos puestos intermedios de 1.000 hombres cada uno. Mil hombres serían necesarios en Miranda sobre el lado del Ebro para guardar el puente... Estos 1.000 hombres servirían de vanguardia a un cuerpo de 7 a 8.000 hombres, que habría que colocar en Vitoria... En Mondragón y en Urnieta serían necesarios 1.000 hombres para tener las comunicaciones libres... Este ejército constaría de 29 a 30.000 hombres, que serían más que suficientes para dar la ley a España...”

²²⁷ AYMES, J.-R.: *La guerre d'indépendance espagnole 1808-1814*. Paris. 1973, pp. 16-17: “...c'est en mars 1808 que les Français ont perdu la guerre d'Espagne: en jouant Godoy contre Ferdinand...”. Hay que recordar cómo Murat consiguió apenas unos días después, el 23 de marzo, una declaración escrita en la que afirmaba haber abdicado bajo coacción y, por lo tanto, declarando tal cesión de la Corona a su hijo como nula. El problema dinástico no sólo no estaba resuelto, sino que se complicaba hasta inauditos extremos, *vid.* SANZ CID, M.: *La Constitución de Bayona...*, p. 47

²²⁸ *Correspondance de Napoléon*. Paris. 1857-1870. XXXII vols., suplemento al Vol. XVI, carta a su hermano Luis, pp. 500-501: Saint-Cloud, 27 de marzo de 1808: “...Certain que je n'aurai de paix avec l'Angleterre qu'en donnant un grand mouvement au Continent, j'ai résolu de mettre un prince français sur le trône d'Espagne...”

Murat recibe nuevas instrucciones del Emperador para que procurase ganarse a la opinión pública española. Napoleón estimula las ambiciones regias del propio gran duque de Berg, mientras en Bayona, Champagny prepara un informe, enviado al emperador el 24 de abril, en donde realiza un conjunto de consideraciones históricas, geoestratégicas y políticas que van desde la instalación de los Borbones en España apenas un siglo anterior como condición del equilibrio europeo, hasta la presunta estrecha relación entre Fernando VII e Inglaterra, abogan por una esencial directriz: la plena incorporación de España al sistema político-dinástico bonapartista.²²⁹

Siguiendo instrucciones imperiales el Marqués de Caballero, antiguo Ministro de Gracia y Justicia, redactó una circular, enviada por el titular de la cartera, Sebastián Piñuela, entre el 18 y el 19 de mayo, y el 24 se publicó en la *Gaceta de Madrid* la convocatoria de una "Diputación general" en Bayona para el 15 de junio siguiente. Resulta sintomático que la convocatoria fuera redactada por un convencido absolutista, si bien la adhesión de algunos de los más fervientes partidarios de Godoy al nuevo régimen no entendía de convicciones políticas, sino de motivaciones más personales²³⁰.

²²⁹ *Ibidem*, n° 13776, Bayona, 24 de abril de 1808: "...L'Espagne est pour la France ou une amitié utile ou une ennemi dangereuse. Une alliance intime doit unir les deux nations, ou une intimité implacable les séparer... L'Espagne ne sera pour la France une amie sincère et fidèle, la guerre avec l'Angleterre ne pourra être continuée avec l'espérance d'arriver à la paix, que lorsqu'un intérêt commun unira les deux Maisons régnant sur la France et sur l'Espagne... Il faut pour l'intérêt de l'Espagne, comme pour celui de la France, qu'une main ferme vienne rétablir l'ordre dans son administration et prévenir la ruine vers laquelle elle marche à grand pas. Il faut qu'un prince, ami de la France par sentiment, par intérêt, n'ayant pas à la craindre et ne pouvant être un objet de défiance pour elle, consacre toutes les ressources de l'Espagne à sa prospérité intérieure, au rétablissement de sa marine, au succès de la cause qui lie l'Espagne à la France et au continent. C'est l'ouvrage de Louis XIV que'il faut recommencer..."

²³⁰ JURETSCHKE, H.: *Los afrancesados en la Guerra de la Independencia*. Madrid. 1962, p. 43.

Esta institución, habría de estar integrada por 150 personas”...*escogidas entre el clero, la nobleza y las otras clases de la nación española... para ocuparse de las leyes de felicidad de toda España, reconocer sus desgracias, que el antiguo régimen ha ocasionado, promover las reformas y los remedios, para impedir la vuelta...*”. La Junta establece, igualmente, además de los criterios de elección, un doble mecanismo electivo, en donde se combina la designación directa con la reserva”...*a las corporaciones, a las ciudades con voto en Cortes y a otras comunidades el nombramiento de los diputados...*”²³¹.

La distribución de los asientos en la asamblea, hasta un número total de 156, al integrar a seis representantes de las Indias, además de consolidar el voto de las ciudades tradicionalmente representadas en las Cortes, concedía una treintena de puestos a la nobleza, distribuidos entre los Grandes de España (10), y los Títulos de Castilla (10), expresamente nominados, y los representantes de los caballeros, elegidos a razón de uno por cada una de las ciudades nominadas con un criterio finalista, y medio centenar al estamento eclesiástico, distribuidos entre curas párrocos, obispos y generales de las congregaciones religiosas, pero incluía una significativa representación de los Consulados de Comercio (14), Consejos y Tribunales (12) los cuerpos militares (9), los territorios de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa, Alava, Mallorca, Canarias y Asturias (8), y de América (6), y las Universidades de Alcalá, Salamanca y Valladolid²³².

²³¹ *Actas de la Diputación general de españoles que se juntó en Bayona el 15 de junio de 1808*. Madrid. 1874, pp. 5. y ss.

²³² *Ibidem*, pp. 7 y ss.:”...se os recomienda... que concurráis a preparar la prosperidad de España, presentando a esta asamblea los planes, las ideas que usted haya concebido, sea sobre la totalidad del sistema actual, sea sobre lo que interesa a vuestra provincia en particular, con el celo y el patriotismo que caracteriza a un verdadero español...”.

La convocatoria de la asamblea de Bayona supone una radical novedad en el itinerario de las instituciones representativas españolas, tanto por la instauración de una nueva fundamentación política para su convocatoria, cuanto por el establecimiento de nuevas fórmulas de representación y elección²³³.

Esta circunstancia no pasará desapercibida a los propios convocados a la reunión de Bayona, como el Obispo de Orense, Pedro Quevedo, quien el 29 de mayo excusa a Piñuela su asistencia, dada su avanzada edad, pero no vacila en ofrecer una muy lectura política de la situación en la que se encuentra España:”...*la Nación se ve como sin Rey, y no sabe a qué atenerse. Las renunciaciones de sus Reyes y el nombramiento de teniente gobernador del Reino, son actos hechos en Francia y a la vista de un Emperador, que se ha persuadido hacer feliz a España con darle una nueva dinastía, que tenga su origen en esta familia... La Suprema Junta de Gobierno, a más de tener contra sí cuanto va insinuado, su presidente armado y un ejército que le cerca, obligan a que se la considere sin libertad, y lo mismo sucede a los consejos y tribunales de la Corte. ¡Qué confusión! ¡Qué caos y qué manantial de desdichas para España! No puede evitarla una asamblea convocada fuera del Reino, y sujetos que componiéndola, ni pueden tener libertad, ni aun teniéndola, creerse que la tuvieran...*”²³⁴.

²³³ Sanz Cid, M.: *La Constitución de Bayona...*, p. 81:”...representaba una influencia, desacostumbrada en tales convocatorias, la manera de integrar el banco eclesiástico por el alto y bajo clero, el llamamiento de los diputados de las provincias aforadas, y, sobre todo, el lugar concedido a los altos concejos, a las Universidades y cámaras de comercio, que no solamente, ponía de relieve la intervención de una mano extraña, sino concretamente la influencia napoleónica...”.

²³⁴ Ibidem, pp. 465-466. Ya en las páginas precedentes se ha venido extendiendo en similares consideraciones:”Se trata de curar males, de reparar perjuicios, de mejorar la suerte de la Nación y de la Monarquía. Pero ¿sobre qué bases y fundamentos? ¿Hay medio aprobado y autoridad firme y reconocida por la Nación para esto? ¿Quiere ella sujetarse y espera su salud por esta vía?... Los

Ratificarían la Constitución de Bayona menos de un centenar de los convocados, exactamente 91, y asistirían a la sesión inaugural de 15 de junio 65, siendo particularmente relevante el cumplimiento de los Grandes de España (9 de 10) y del Estado llano (7 de 8), y completa en el caso de los representantes del Ejército y la Marina (9 de 9), y de las Indias (6 de 6). En cuanto a las ciudades con voto en Cortes y los Consulados de Comercio acudieron exactamente la mitad (12 de 24 y 7 de 14, respectivamente), mientras se hizo notoria la inasistencia de los miembros del estamento eclesiástico, que alcanzó menos de un tercio (16 de 50), proporción exacta en el caso de las Universidades (1 de 3)²³⁵.

La asamblea de Bayona, a pesar de todas las providencias adoptadas por el poder bonapartista para garantizar su representatividad y el directo nombramiento de gran parte de sus miembros entre los más caracterizados partidarios del reformismo napoleónico, no constituyó precisamente un éxito de convocatoria, pero cumplió los fines diseñados por su patrocinador: dotar de una apariencia de legitimidad a la instauración de un modelo político constitucional sin precedentes en España, que habría de servir como coartada de una sustitución dinástica sin precedentes en la historia, y cuyo objetivo último era el sometimiento de los gigantescos recursos de

medios y medicinas no lo anuncian. Las renunciaciones de sus reyes en Bayona e infantes en Burdeos, en donde se cree que no podían ser libres, en donde se han contemplado rodeados de la fuerza y del artificio y desnudos de las luces y asistencia de sus fieles vasallos...; estas renunciaciones, que se han hecho sospechosas a toda la Nación y de las que pende toda la autoridad de que justamente puede hacer uso el Emperador y Rey, exigen para su validación y firmeza, y a lo menos para la satisfacción de toda la Monarquía española, que se ratifiquen estando los Reyes e Infantes, que las han hecho, libres de toda coacción y temor. Y nada sería tan glorioso para el gran Napoleón I, que tanto se han interesado en ellas, como devolver a la España sus augustos Monarcas y familia, disponer que dentro de su seno y en unas Cortes generales del Reino, hiciesen lo que libremente quisiesen, y la Nación misma, con la independencia y soberanía que la compete, procediese en consecuencia a reconocer por su legítimo Rey, la que la naturaleza, el derecho y las circunstancias llamasen al Trono español...”.

²³⁵ ARTOLA, M.: *La España...*, pp. 98-99.

la todavía portentosa realidad de la Monarquía de España a las directrices del Imperio Francés²³⁶.

2.2.2 *El modelo constitucional napoleónico*

Napoleón había meditado muy cuidadosamente la conveniencia de dotar a España de un texto constitucional como mecanismo legitimador de la implantación de la dinastía Bonaparte. De hecho, esa idea sólo comenzó a contar con el ánimo del Emperador en los días centrales del mes de mayo.

Resulta verdaderamente portentoso el trabajo desarrollado personalmente por el propio Bonaparte a partir de esa fecha. Los españoles presentes en Bayona, miembros del séquito regio, carecían de iniciativa y formación adecuadas al propósito de proceder a la redacción de un texto constitucional, y no antes del 26 de mayo comenzaron a llegar a Bayona los primeros diputados a la Junta, entre los que se contaban ya profundos conocedores de los fundamentos políticos e institucionales del ordenamiento legal español. Por eso, entre el 19 y el 26 de mayo, y muy concretamente entre los días 19 y 23, Napoléon I procedería, personalmente, a la redacción de una versión muy avanzada de lo que habría de convertirse en el Estatuto de Bayona.

Bonaparte había desarrollado ya una vasta labor en el ordenamiento privado francés, como evidencia la promulgación de una obra tan proverbialmente monumental como el *Code Napoléon* en

²³⁶ CONARD, P.: *La Constitution de Bayonne...*, p. 27: "...si habitué que fut l'Empereur à consoler avec des constitutions les peuples qu'il sacrifiait à son 'système', il ne pouvait vraiment attacher une grande importance à une oeuvre dont il avait adopté si tardivement d'idée. En réalité, dans l'entreprise définitive de Napoléon sur l'Espagne, disposer de toutes les ressources de la péninsule, les augmenter si possible et surtout les mieux répartir pour les intérêts de l'Empire, les utiliser pour la domination de la Méditerranée et peut-être du monde, voilà le but réel. Dans une tardive attitude de réformateur, de libérateur et de législateur, il est difficile de voir autre chose qu'un moyen d'agir sur l'opinion espagnole ou européenne, qu'un procédé tactique, qui ne produisit pas l'effet désiré..."

1804, pero también había participado activamente en la redacción de los textos constitucionales de naturaleza pública del Consulado y del Imperio. De hecho, obra suya era la Constitución francesa de 22 de Frimario de 1799, inmediatamente posterior al golpe del 18 de Brumario, creadora del Consulado instauradora del modelo bonapartista de gobierno autoritario, modificada por el Senadoconsulto del 16 de Thermidor de 1802, que instaure el Consulado vitalicio, y finalmente por el Senadoconsulto de 28 de Floreal de 1804, que instituye el Imperio. Sin embargo, existían precedentes políticos de la metodología napoleónica de dotar de textos constitucionales a los territorios incorporados a su órbita imperial y dinástica.

2.2.2.1 La Constitución de la República Bátava de 1801 y las leyes constitucionales del Reino de Holanda de 1806

Entre estos precedentes se sitúa, en primer lugar, los neerlandeses, convertidos en 1795 en una “República Bátava” que se dota en 1798 de un primer texto constitucional, calco de la Constitución francesa del Directorio a la que sucede, tras el golpe napoleónico, una nueva Constitución, promulgada en 1801.

Integrada por 106 artículos, distribuidos en ocho epígrafes, “Principios y disposiciones generales”, “Del gobierno”, “Del poder legislativo”, “De las finanzas”, “De las administraciones departamentales”, “De las administraciones municipales”, “Del poder judicial”, “Del tribunal de justicia nacional”, incluía también como apéndice el modelo de juramento de los miembros del poder legislativo y de los integrantes de la Regencia de Estado.

Entre los rasgos más distintivos del texto holandés, además de la proclamación, en el art. 1, de la “bondad de todos”, como la primera de las leyes, y la lógica instauración de preceptos constitucionales como la igualdad ante la ley, los derechos a la vida y a la propiedad y, significativamente, la protección por el Estado de las diversas

confesiones religiosas. Se establece un modelo político que reproduce el Directorio, con una Regencia de Estado, como poder ejecutivo, integrada por doce miembros, dirigida por un Presidente elegido por turno para ejercer sus funciones durante tres meses, y asistida por un poder legislativo compuesto por treinta y cinco miembros, nombrados por la propia Regencia. De la misma forma, en el ámbito administrativo se reproduce el modelo departamental francés, dividiendo el territorio en ocho departamentos. Es evidente que la iniciativa política reside en la Regencia de Estado²³⁷

En 1806 Napoleón decide convertir la República Bátava en el Reino de Holanda, y designa para a su hermano Luis para el ejercicio del poder regio. La transformación del régimen de gobierno exige la redacción de un texto constitucional, las “Leyes Constitucionales”, que se elaboran conforme a una más elaborada sistemática, divididos sus 87 artículos en “Secciones”, siguiendo el planteamiento del texto constitucional precedente, pero atribuyendo al propio soberano los poderes antes adjudicados a la Regencia de Estado, y haciéndolo desde un planteamiento conceptual y formal sumamente autoritario calco del modelo francés²³⁸.

2.2.2.2 *El Acta Constitucional de la República Italiana de 1802*

²³⁷ *Constitution de Hollande:*”35. La régence d'état nomme les ministres et agens près les puissances étrangères et tous les officiers de terre et de mer.... La régence a l'initiative de la proposition de toutes les lois... Elle conclut les traités de paix, d'alliance et de commerce... La régence d'état a l'administration des finances nationales... Elle dispose des flotes et des armées de la république... La régence d'état a la surintendance de la police...”.

²³⁸ *Ibidem,*” Section III. *Du Roi.* 1° Le roi a, exclusivement et sans restriction, l'entier exercice du gouvernement et de tout pouvoir nécessaire pour assurer l'exécution des lois et les faire respecter. Il nomme à toutes les charges et à tous les emplois civils et militaires qui, d'après les lois précédentes, étaient à la nomination du grand-pensionnaire. Il a l'entière jouissance des préeminences et prérogatives attachées jusqu'ici à cette effigie. La justice est rendue en son nom. Il a le droit d'accorder grace, abolition ou rémission des peines portées par sentences judiciaires; néanmoins il ne peut exercer ce droit qu'après avoir entendu en conseil privé les membres de la cour nationale...”.

La práctica constitucional bonapartista, en los territorios progresivamente integrados en la órbita francesa, seguía el modelo francés, pero no es menos cierto que también se observa un inteligente esfuerzo por acertar a dotar a los nuevos textos de un contenido adecuado a las preexistentes coordenadas políticas, institucionales y religiosas de cada uno de ellos.

Así lo constatamos en el “Acta Constitucional” de la República Italiana texto que contiene 128 epígrafes y que va seguido por una “Ley Orgánica sobre el Clero”, que adquiere, rango constitucional. De este modo dedica especial atención a las especiales circunstancias religiosas que concurren en Italia, el primero de los artículos del Acta, integrado en un Título I sobre la propia República Italiana, proclama como “religión de Estado” la “religión católica, apostólica y romana”.

El poder se entrega a un órgano ejecutivo cuyo presidente ejerce no sólo la jefatura del Estado, sino un liderazgo constitucionalmente respaldado por unos ministros que designa discrecionalmente, y por un poder legislativo, integrado por setenta y cinco miembros, que redundan en la misma concepción autoritaria del poder²³⁹.

Reseñamos por último la existencia de una “Ley Orgánica sobre el Clero” dentro del propio bloque constitucional. Napoleón dedicó siempre una singular atención a sus relaciones con la Iglesia Católica, y así se constata con la reapertura al culto de los templos y el restablecimiento de la fe católica en Francia, dentro de una concepción de las relaciones entre la Iglesia y el Estado que, supuesta

²³⁹ *Constitution Italienne:*” Le président reste dix ans en fonction, et il est indéfiniment rééligible. Le président a l'initiative de toutes les lois.... Il a également l'initiative de toutes les négociations diplomatiques. Il est exclusivement chargé du pouvoir exécutif, qu'il exerce par le moyen des ministres. . Il nomme les ministres, les agens civils et diplomatiques; les chefs de l'armée et les généraux.. Il nomme le vice-président...”.

la subordinación de la primera al programa imperial bonapartista, aspiraba a contar con la jerarquía católica entre sus mejores aliados.

Así la Constitución italiana de Napoleón constituye un auténtico ensayo de compartido ejercicio de la administración eclesial por parte del gobierno y de la propia jerarquía, y establece un procedimiento de intervencionismo secular en los asuntos eclesiásticos que fructificará ampliamente²⁴⁰.

2.2.2.3. *La Constitución del Ducado de Varsovia de 1807*

Dentro de la política exterior napoleónica, es singular el caso concerniente a Polonia, y la institución del Ducado de Varsovia. Desde los primeros decenios del siglo XVIII, y con antecedentes históricos como la candidatura de quien habría de ser Carlos IX de Francia al trono polaco en la segunda mitad del siglo XVI, Polonia había constituido un centro muy significativo de la política francesa en Europa oriental. Para Bonaparte, la posibilidad de incrustar un Estado satélite entre Prusia y Rusia comportaba un éxito estratégico de primer orden, y un éxito que precisaba una fórmula institucional que consolidara el poderoso sentimiento nacional polaco.

La creación del Ducado de Varsovia, en 1807, vendría acompañada de la redacción de un texto, la "Constitución del Ducado de Varsovia", integrada por 89 artículos divididos en doce Títulos: el primero, relativo a la configuración institucional y religiosa del Estado. Se trata de un texto que responde al modelo napoleónico de "Constitución otorgada", definiendo una Monarquía ducal hereditaria en la Casa de Sajonia, la histórica aliada de Bonaparte en Alemania, y un eficaz contrapoder dinástico y político a los Hohenzollern de

²⁴⁰ *Loi Organique sur le Clergé*: "Art. 1°. Les évêques de la république cisalpine sont nommés par le gouvernement et institués par le saint-siège, avec lequel ils communiquent librement pour les affaires spirituels. 2. Les curés sont élus et institués par l'évêque, avec l'agrément du gouvernement..."

Prusia, con la religión católica como única y oficial, y una concepción del ejercicio del poder marcadamente autoritaria.

Sin embargo, la propia tradición institucional polaca, y el posicionamiento popular junto al Emperador de Francia, que disfrutará siempre de la lealtad y el arrojo de la caballería polaca a la vanguardia de sus fuerzas, aconsejarán que las instituciones ejecutivas y representativas, y concretamente el Consejo de Estado y la Dieta general, disfruten de una presencia en la vida política del Estado considerablemente superior a la de aquellos reinos en los que se instaure directamente a la dinastía napoleónica²⁴¹.

2.2.2.4 La Constitución del Reino de Westfalia de 1807

El Tratado de Tilsit incluía la creación de un poderoso Estado germánico de nueva creación en el corazón de Alemania, el de Westfalia, que habría de constituir una eficaz avanzada estratégica del Imperio Francés, fiable debido a su entrega a Jerónimo Bonaparte⁴⁰.

La breve Constitución del Reino de Westfalia, constituida por 55 epígrafes distribuidos en trece Títulos, representa el más acabado ejemplo de Constitución "familiar" napoleónica, definiendo política, militar y dinásticamente un auténtico "Estado-satélite" enteramente sometido a las directrices del emperador francés.

En realidad, él mismo había creado un reino mediante la reunión arbitraria de los territorios situados entre Francia y la orilla

²⁴¹ *Constitution du Duché de Varsovie*: 5. La couronne ducale de Varsovie est héréditaire dans la personne du roi de Saxe, ses descendants, héritiers et successeurs, suivant l'ordre de succession établi dans la maison de Saxe. Le gouvernement réside dans la personne du roi. Il exerce dans toute sa plénitude les fonctions du pouvoir exécutif. Il a l'initiative des lois... Le conseil-d'état discute, rédige et arrête les projets de loi ou les règlements d'administration publique, qui ont été proposés pour chaque ministre pour les objets relatifs à leurs départements respectifs... Le conseil-d'état connaît des conflits de juridiction entre les corps administratifs et les corps judiciaires, du contentieux de l'administration, et de la mise en jugement des agents de l'administration publique...

izquierda del río Elba, incluyendo territorios como los de Brunswick-Wolfenbüttel, Magdeburgo, Halle, Hildesheim, Goslar, Hesse-Kassel, Göttingen, Osnabrück y Paderborn, es decir, los Estados hereditarios de los Hannover ingleses en el continente, así como el embrión de la futura Prusia occidental. Se trataba de territorios secularmente fragmentados, ahora políticamente unidos.

La intensidad de la dependencia política, dinástica e institucional del nuevo reino respecto de su fundador, además de expresarse en un modelo institucional autoritario que contaría con un Consejo de Estado integrado por dieciséis miembros, un ejecutivo compuesto por cuatro ministros, y unos "Estados" representativos integrados por cien miembros, para completar un modelo político formalmente institucional, llega al extremo de extender al nuevo reino, no ya el modelo administrativo departamental, o el sistema monetario o de pesos y medidas francés, sino la propia vigencia del Código civil de Napoleón a partir del primero de enero de 1808.

2.2.3 La primera redacción de la Constitución de Bayona de 1808

El Emperador de Francia disfrutaba de una extensa experiencia como legislador, en su concepción del poder real esencial al propio liderazgo de la comunidad política, y tanto en la propia Francia como en sus Estados dinásticamente dependientes y satélites.

Este doble itinerario legislador de Napoleón reside tanto en el substrato ideológico, como en la definitiva plasmación formal, de la primera versión de la Constitución de Bayona, porque si bien su arquitectura interna, y su distribución material, siguen muy fielmente el Senadoconsulto de 1804, que establece el Imperio francés, la soluciones políticas adoptadas, tanto en el ámbito de las futuras relaciones externas y dinásticas de la nueva familia real española, como en la consolidación de un modelo político autoritario, que atribuye los poderes ejecutivos al Rey, asistido por órganos

deliberantes de composición muy restringida, reproducen muy aproximadamente las soluciones ensayadas previamente en los textos constitucionales europeos que preceden al español.

En su texto se manifiesta la voluntad napoleónica de engarzar los nuevos criterios políticos y constitucionales que propone el régimen constitucional con la tradición política española. En el Título V, por ejemplo, se crea, siguiendo el modelo francés, después reproducido en los textos constitucionales europeos, un Consejo de Estado que reemplaza, en sus funciones de asesoramiento técnico, pero muy ligadas al ejercicio del poder ejecutivo, a los tradicionales Consejos españoles, pero no se elimina el de Castilla y además, se concilia su distribución funcional, a la francesa, con una fórmula de elección de sus miembros que trata de valorar, aún testimonialmente la experiencia histórica del Consejo castellano. En todo caso, es evidente que el núcleo activo del poder ejecutivo se identifica con la persona del soberano²⁴².

Pero quizás el ámbito material en el que resulta más evidente la aplicación de los principios básicos de las constituciones bonapartistas europeas sea el relativo a las Cortes, en donde se concilia el criterio revolucionario de que la representación del estado llano duplique a la conjunta de nobleza y clero -arts. 23 a 25-, con la configuración socio-profesional diversa del estado llano, extremo advertido ya en la

²⁴² *Ibidem*, p. 180: "15. Habrá un Consejo de Estado presidido por el Rey que se compondrá de 30 individuos, a lo menos, y de 60, cuando más, y se dividirá en cinco secciones, a saber: 1. Sección de Justicia. 2. Interior, Culto y Policía. 3. Hacienda. 4. Guerra. Y 5. Marina e Indias. Cada sección tendrá un presidente y cuatro individuos, a lo menos. 16. Serán individuos natos del Consejo de Estado los ministros y el presidente del Consejo de Castilla; asistirán a sus sesiones cuando lo tengan por conveniente; no harán parte de ninguna sección, ni entrarán en cuenta para el número fijado en el artículo antecedente... 22. Los actos del Rey, discutidos en Consejo de Estado, tienen fuerza de ley como si estuviesen deliberados en Cortes, a excepción, sin embargo, de aquéllos que atañen a aumento notable en el sistema de imposición o de cargas, y disposiciones fundamentales del Código civil, criminal y penal..."

Constitución italiana de 1802, por ejemplo -art. 26-, pero también la voluntad de contentar la tradición representativa y el sentimiento religioso de las ciudades españolas -art. 30- con la inequívoca intención de conceder a la Corona un amplio margen de intervención en la elección en la propia elección de los representantes en Cortes de los comerciantes y las Universidades -arts. 33 y 34-, o en su propio funcionamiento ordinario -art. 36-.

La Constitución de Bayona sería, la mejor expresión del pensamiento constitucional napoleónico fuera de Francia. Se concilia la tradición española, expresada en la definición de la fe católica como única y oficial -art. 47-, por otra parte una exigencia de Carlos IV en la cesión de sus derechos al trono, matizada desde luego por la abolición de la Inquisición -art. 48-, con el profundo intervencionismo francés, visible en el Título VIII, relativo a la organización judicial, y en donde se contempla, como en los restantes reinos de los Bonaparte, la extensión del Código Civil, la conversión de los mayorazgos en muy limitados reconocimientos de Estado, y la supresión de los órdenes jurisdiccionales no estatales -arts. 53 a 55-, así como la transformación del Consejo de Castilla en un Tribunal de casación -art. 59-²⁴³.

Resulta interesante que la última de las disposiciones constitucionales, establezca que el texto sea ejecutado por disposiciones de naturaleza ejecutiva de la propia Corona española “sucesiva y gradualmente”, con la fecha máxima, para su plena entrada en vigor, de primero de enero de 1813.

Pierre Conard, además de destacar, como líneas directrices de la Constitución bonapartista la voluntad de reformar el modelo político español desde un aplicación del orden constitucional en su más autoritaria acepción, así como el deseo de modernizar sus

²⁴³ *Ibidem:*” 53. *El Código Napoleón formará las leyes civiles del reino.*

instituciones políticas, sus órganos administrativos, y sus fuentes del derecho, llama la atención sobre la prudencia con la que se comportó el Emperador al enfrentarse con la redacción de la primera versión de la Constitución de Bayona ²⁴⁴.

Napoleón había realizado personalmente un portentoso esfuerzo intelectual en apenas cuatro días, el 19 de mayo en que había asimilado definitivamente la propuesta de Murat de dotar a la nueva Monarquía española de un texto constitucional, y el 23, en que envió el borrador al Duque de Berg. El contenido de esta primera Constitución de Bayona revela la profunda consideración que de la Monarquía de España, de su tradición histórica e institucional, sus recursos materiales, su potencial geoestratégico, y su dispositivo militar, sería Bonaparte.

España no era, como sabía perfectamente Napoleón, y habría de comprobarlo reiteradamente, las República Bátava o Cisalpina, el Ducado de Varsovia, o el Reino de Westfalia. España era el mayor de los retos políticos, estratégicos y constitucionales abordados por Napoleón en su decenio al frente de Francia y por ello resultaba tan necesario dotar al texto constitucional, tan apresuradamente redactado, de legitimidad, aunque fuera aparente, y por eso la reunión de la Junta española en Bayona le resultaba imprescindible.

²⁴⁴ CONARD, P.: *La Constitution de Bayonne...*, pp. 53-54: "1° Etablir en Espagne un régime de régularité et de simplicité administratives, un gouvernement aussi autoritaire que l'ancien, mais moins patriarcal, plus rationnel, plus moderne;... 2° Introduire ou fortifier en Espagne, non sans beaucoup de précautions et de réserves, les lumières que le XVIII^e siècle avait voulu répandre partout; assurer la suprématie de l'Etat laïque, restreindre les droits, les richesses, l'influence et le rôle de l'Eglise... 3° Favoriser dans une certaine mesure l'égalisation des conditions juridiques et sociales... abolir les privilèges des classes et des provinces... 4° Donner aux Espagnols l'illusion d'un régime de libertés politiques et de vie constitutionnelle, en restituant les antiques Cortès et en feignant d'y faire une large place aux représentants de la nation. Dans le texte primitif, qui n'était nulle part très hardi, c'était certainement ici que Napoléon montrait le plus de prudence..."

2.2.4 La Junta Española, como Asamblea “constituyente”

En el ánimo del Emperador, tanto el legislativo como el político, estaba ultimar un proyecto, y no una Constitución, y por eso tan pronto envió su borrador a Murat dispuso igualmente que su contenido fuera examinado en Madrid por La Forest y Fréville, a quienes debían unirse algunos miembros de la Junta Suprema de Regencia y del Consejo de Castilla, de manera que su enunciado pudiera mejorarse tanto en el ámbito técnico como en sus contenidos. Así realizarían en la capital española a lo largo del día 28 de mayo, al unirse a la improvisada comisión de estudios ministros como O'Farrill, Piñuela, el marqués de Caballero y el marqués de Las Amarillas, consejeros de Estado, o los consejeros de Castilla Durán y Navarro y Vidal.

Fréville y Laforest procedieron inmediatamente a poner por escrito las conclusiones del trabajo ininterrumpidamente desarrollado por la comisión entre las diez de la mañana y las cuatro de la tarde de aquella misma jornada, y ese mismo día salieron en dirección a Bayona. Esencialmente, los reunidos habían tratado de realizar un exhaustivo trabajo de análisis que, sin romper la sistemática del proyecto, lo que habría demandado un más prolongado trabajo, y por lo tanto diferir en el tiempo la aprobación de la Constitución, recogiera los anhelos esenciales de los partidarios españoles del nuevo régimen.

En este sentido, el sentimiento patriótico de los miembros españoles de la comisión resulta indudable, y sus principales peticiones se dirigen al respecto de la tradición dinástica, política e institucional de la nación. Respecto al orden sucesorio, se recoge la tradición española al indicar, respecto al art. 2, la conveniencia de contemplar la posibilidad que los derechos al trono puedan recaer sobre una mujer. Igualmente, no desea descartarse constitucionalmente la posibilidad de integración de los reinos de

España y Portugal, sino todo lo contrario -art. 3- . De la misma forma, resulta sumamente ajeno a la tradición española el sistema institucional propuesto, lo que obliga a proponer algunos enunciados complementarios -arts. 23 a 28-.

Finalmente, el trabajo se centra en tres esenciales escenarios constitucionales. En el ámbito religioso, se reafirma el carácter confesional del Estado, y se aconseja no constitucionalizar la abolición de la Inquisición -arts. 47 y ss.-; en el militar, supuesta la conveniencia de la alianza entre Francia y España, se entiende preferible incrementar el contingente naval y reducir el terrestre -art. 72- y en último término, se expresa la preocupación existente acerca de la posible intrusión de los extranjeros en la administración -art. 78-

245

²⁴⁵ SANZ CID, M.: *La Constitución de Bayona...*, pp. 212 y ss.: "Art. 2º Sería de desear, que después de la enumeración de las diferentes ramas de la familia imperial, llamadas subsidiariamente a la sucesión española, se llegase hasta prever el caso de que ninguna de esas ramas tuviese herederos varones... Art. 3º Cuando se ha tratado de Portugal, no se ha podido ahogar algún sentimiento, porque se perdían todas las esperanzas de verle reunido a España. Nos ha sido fácil borrar, hasta un cierto límite, esta impresión, haciendo notar que en lo sucesivo los dos reinos formarían parte de un mismo sistema de federación política y que se encontrarán mutuamente en ventajosas circunstancias... Art. 23 Ha sido precisa la exposición y desarrollo del sistema representativo... Nos hemos esforzado en hacer comprender, que se trataba de una representación constituida, según amplios puntos de vista, que tienden a conservar las clases superiores, el predominio y preeminencia que les corresponde, multiplicando al mismo tiempo, los lazos que deben unir las al cuerpo de la Nación, que era la que en general (y no el tercer estado en particular) se encontraba representada, por los cien diputados del tercer banco... Art. 47. Aplaudiendo esta declaración, aun lamentando el fanatismo del pueblo, han sido de aviso, que debía ser expresada de un modo más preciso y terminante, por ejemplo, en los siguientes términos: La Religión Católica, Apostólica y Romana es en España la religión dominante y única; ninguna otra será tolerada. Art. 72. ...Unanimemente se ha solicitado una reducción en este contingente, si bien, aumentándole proporcionalmente en las unidades navales que han de ser entregadas... Art. 78. La discusión, a que este artículo ha dado lugar, nos ha convencido del temor que hay de ver un gran número de puestos ocupados por extranjeros... Varios de nuestros consultados, entre otros O'Farril, han insistido con calor sobre la necesidad de hacer algo más para tranquilizar a la opinión, y determinar las circunstancias, en las cuales, el rey podría hacer deliberar al Consejo de Estado sobre la naturalización de un

Mientras la inquietud se apoderaba de los poderes del reino, Napoleón no permanecía inactivo. El 25 precedente, además de redactar su “Proclama a los Españoles”, el Emperador, que ponía fecha a la Junta convocada por Murat en Bayona, definitivamente fijada para el 15 de junio siguiente, confirmaba el política e institucionalmente precario sistema de gobierno provisionalmente instaurado en España ²⁴⁶.

A partir del 26 Napoleón disfrutaba en Bayona de la opinión de personalidades españolas particularmente cualificadas, como Azanza y Urquijo. El 4 de junio el primero hizo llegar personalmente sus observaciones al Emperador, pero fue Urquijo quien, al día siguiente, envió a Bonaparte unas extensas y bien ordenadas “Reflexiones”, que constituyen el más importante y detenido de todos las exámenes experimentados por la primera versión de la Constitución de Bayona.

Esencialmente, Urquijo trataba de atraer la atención de su interlocutor sobre diez materias, instando a la adopción de iniciativas concretas en todas ellas: el control de las Ordenes Militares, con la posibilidad de su venta, así como la conveniencia de conservar la del Toisón de Oro; el peculiar ordenamiento jurisdiccional del reino, aconsejando mantener la condición vitalicia del empleo de juez, así como los tribunales de provincia; los problemas inherentes a la supresión de la jurisdicción eclesiástica, así como la enorme significación de la Iglesia en la vida administrativa del país; la renovación de los gobiernos locales; la sensibilidad en el tratamiento de las Indias; la regulación de las contribuciones; la creación de un Consulado General; mantenimiento de los regímenes forales; la

extranjero. Se ha llegado a pedir, que una tal proposición no pudiera hacerse más, que en favor de un extranjero que hubiera residido durante varios años en el reino y hecho servicios al Estado...”.

²⁴⁶ *Correspondance*, n°. 13990:”Art. 2. Notre bien-aimé beau-frère le grand-duc de Berg est continué dans ses fonctions de lieutenant général du royaume. Art. 3. Les ministres, le conseil d'état, le conseil de Castille et toutes les autorités religieuses, civiles et militaires, sont confirmés en tant que de besoin...”.

dedicación de las rentas de la suprimida Inquisición a fines sociales; y la restricción de las actividades pecuarias, así como otras materias diversas por su naturaleza²⁴⁷.

El mensaje implícito en la obra apresurada, pero explícitamente compuesta por Urquijo, por otra parte dotada de un radicalismo constitucional muy notable, era claro: resultaba necesario “españolizar” el texto, adaptar su contenido a las muy especiales, cambiantes y plurales circunstancias de la siempre compleja realidad española, para disfrutar de un orden constitucional que disfrutara de verdaderas posibilidades de éxito.

²⁴⁷ SANZ CID, M.: *La Constitución de Bayona...*, Apéndice III, pp. 468-475.:”...Si las propiedades de las Ordenes militares se vendiesen, y si su producto fuese depositado en las cajas de un Banco nacional para facilitar las operaciones del comercio; la agricultura y la población ganarían infinitamente por esta división de propiedades. Esta división es lo que enriquece al Estado... No sé si dice en la Constitución, que los jueces, a excepción de los cinco años determinados para su entero establecimiento (...), serán a perpetuidad, a menos que un delito grave, juzgado por el tribunal de casación, no les haga indignos de su cargo. Es uno de los mejores medios de asegurar una buena administración de justicia sin la cual los Estados corren a su ruina... Si se suprime la jurisdicción eclesiástica no parece necesario establecer claramente que los obispos, estando encargados por los apóstoles de la predicación del Evangelio... conocerán de todo lo relativo a estos asuntos... Se ignora la población de España, porque todas las actas de nacimiento y matrimonio están en manos del clero. S. M. juzgará si convendría insertar en la Constitución un artículo, que ordenase que estas actas fuesen inscritas en la municipalidad además de serlo en las iglesias; así el clero no perdería en sus prerrogativas y el gobierno sabría lo que pasaba en sus dominios... Conviene que todos los gobiernos municipales perpetuos sean abolidos... Conviene, para halagar a los habitantes de las Indias españolas, que se diga en la Constitución, que se trabajará incesantemente en un Código para ellas y que tendrán precisamente las ideas liberales para su comercio... Conviene anunciar que las contribuciones serán reguladas según la fertilidad de las tierras. Las leyes de España establecen un Consulado general en la corte y se compone de cónsules de todos los Consulados generales. Si S. M. establece la Cámara de Comercio de Madrid podría tomar el nombre de Consulado general... Su Majestad verá si conviene decir, en el artículo que suprima la Inquisición... que las rentas que pertenecen a la Inquisición se aplicarán a los hospitales. Esto agrada al pueblo Como la Constitución debe de declarar la igualdad de pesos y medidas, es bueno observar que las tres provincias de Vizcaya y el reino de Navarra son la puerta y seguridad de España... Si a estas provincias se les pone al nivel de las demás hay que temer alguna agitación...S. M. verá si conviene dejar subsistir los privilegios de la Mesta que perjudican a la agricultura...”.

En los días siguientes, el Emperador procedió a recoger las sugerencias aportadas, eliminando los contenidos más polémicos del proyecto constitucional, como la pretensión de aplicación directa del Código civil francés en España, y el 13 de junio recibió, en la propia Bayona, dos nuevos “Informes” sobre el proyecto constitucional: el de Raimundo Ettenhard, Consejero de la Inquisición, y el de la Diputación del Consejo de Castilla, redactado por los consejeros Colón, Lardizábal y Torres.

El memorial de Ettenhard resulta abiertamente favorable al sostenimiento del Tribunal del Santo Oficio, y sobre todo en sus razonamientos políticos y técnicos. Según el autor, el histórico establecimiento de esta entidad obedece al objetivo de los Reyes Católicos de que “velara sobre la pureza y unidad de la religión de sus pueblos”. Adicionalmente. El mantenimiento de su ya reducida estructura no comporta ningún desembolso, y pasados son los tiempos de los “Autos de Fé”, y las ventajas que para la cohesión religiosa y la vertebración territorial de la Corona son considerablemente más tangibles que su oscura imagen externa²⁴⁸.

Pero más relevancia política e institucional hubo de revestir el segundo de los memoriales dirigidos ese mismo día 13 a Bonaparte que constituye un auténtico examen académico del sistema de fuentes

²⁴⁸ *Ibidem*, Apéndice IV, pp. 476-479: “...apenas hay en España quien haya visto reo de la Inquisición entregado a la justicia seglar para sufrir la pena del fuego. Los católicos que dejan de serlo, que faltaron a sus deberes de creencia con el dogma, que se pronunciaron con expresiones y doctrinas canónicamente prohibidas, son en estos tiempos tratados y juzgados con más suavidad....Jamás tienen lugar las penas pecuniarias... La opinión pública es muy difícil de borrar; sólo el tiempo tiene imperio sobre la opinión; mas esto sería menos viva y concluiría brevemente con la promulgación de una ley dirigida a declarar, que los delitos castigados por el Tribunal de la Inquisición sólo envuelve a los perpetradores; a éstos solo con la consecuencia civil de la pena que se les haya impuesto, sin la menos trascendencia a sus familias inocentes. Así se consideraría al Santo Oficio, como en la realidad lo es hoy, un tribunal real de religión, y su policía y en el Reino de España, tan católico y religioso, miraría en conservación con el mayor interés y consuelo...”.

vigente en el reino de España, todavía anclado en las técnicas recopiladoras, como los propios autores no dejan de resaltar, recordando como en la reciente *Novísima Recopilación* existe”... una infinidad de cédulas, decretos, pragmáticas, derogatorias unas de otras, de manera que no se sabe cuál ha de observar, naciendo en esta confusión la arbitrariedad y capricho de la administración y justicia y gobierno de los pueblos...”.

El resumen de los miembros de la Diputación del Consejo de Castilla es concluyente: “es redundante este cuerpo legal en todas las leyes derogatorias que contiene, y es diminuto y defectuoso, porque no distingue con claridad los poderes ejecutivo y legislativo ni las potestades en que deben de residir...”²⁴⁹

El memorial entiende que en las iniciativas de Bonaparte reside la sincera intención de proceder a dotar a España de un nuevo ordenamiento institucional: “Sus benéficas ideas no se dirigen a confundiros sino a que salgáis de la inacción y opresión en que os han puesto la arbitrariedad y el desorden. Nosotros tenemos leyes sabias

²⁴⁹ SANZ CID, M.: *La Constitución de Bayona...*, Apéndice V, pp. 482 y ss., y concretamente pp. 483-484: “Un Código de leyes arregladas hace falta en nuestra España. ¿cuál sería la admiración de nuestros mayores al escuchar una proposición que la graduarían temeraria? ¿Y el Fuero Juzgo? nos responderían. ¿Y el Fuero Real o de las leyes, publicado el año 1255 por Don Alfonso *el Sabio*; las Siete Partidas, premeditado por el santo Rey su padre y concluidas el 1263; el Ordenamiento de Alcalá en 1348 por Don Alfonso onceno, tantos y tantos fueros municipales de pueblos y provincias, tantos cuadernos de Cortes, y, finalmente, la recopilación de leyes de estos reinos, ordenada por Don Carlos I y publicada el 1567? ¿No son éstos otros tantos cuerpos de leyes con que se han regido y gobernado nuestros reinos?... ¿No acaba de imprimirse este cuerpo legal en el año 1805, en doce libros, habiéndose añadido las innumerables cédulas, decretos y pragmáticas de los Reyes Carlos III y IV para que nada faltase que desear a la recta administración de justicia y gobierno de nuestra Monarquía?. Bien es cierto esto, españoles, y, sin embargo, nuestra proposición es evidente. Ese conjunto de leyes desordenadas y publicadas en diferentes épocas antiguas y modernas de nuestra Monarquía, es en la mayor parte inútil por las diversas revoluciones políticas y mercantiles que han padecido todas las naciones civilizadas. No es posible que la mayor parte de las leyes de los godos puedan convenir al siglo XIX en que vivimos...”.

que sirven de base a nuestra Constitución, pero carecemos de un Código legal y metódico que las contenga...”. En este sentido entienden conveniente proceder a describir al emperador francés el preexistente ordenamiento gubernativo español.

Probablemente el mayor interés del trabajo desarrollado por la Diputación del Consejo resida en el exhaustivo examen del proyecto constitucional napoleónico, que no se entiende como un ordenamiento legislativo cerrado, sino como un documento de trabajo que permite al pensamiento constitucionalista español desarrollar sus propias propuestas políticas e institucionales.

Estas propuestas están precedidas de algunas reflexiones, con los consiguientes planteamientos de reforma, en los ámbitos económico y contributivo. En ese contexto reformista debe incardinarse el análisis del conjunto de las instituciones básicas del Estado definidas en la Carta constitucional de Bayona, y en principio del Consejo de Estado, cuya delimitación como órgano consultivo es compartida por los miembros de la Diputación del Consejo de Castilla, de las Cortes, cuya necesidad de convocatoria a lo menos trienal incluso resulta excesiva para los autores del informe y, sobre todo, de los órganos de la administración de justicia, cuyo número y elenco competencial parece excesivo y maleable, aconsejándose una eficaz reducción de sus sedes, además de su subordinación a las instancias del poder central, pero reafirmandose su autonomía jurisdiccional.

A renglón seguido se introducen nuevos escenarios de consideración. Resulta muy significativo que se dedique una especial atención al mantenimiento del Consejo de Castilla, en el que podrían refundirse, igualmente, los de Ordenes y Hacienda, pues ahora”...tendrá a su cargo la publicación de las leyes, pragmáticas y decretos y cuidará de su puntual ejecución, proseguirá en el conocimiento de los demás asuntos judiciales y de gobierno que le

pertenecen, menos en la formación de leyes consultivas... Asimismo podrá ser el Consejo un tribunal supremo de casación para todos los asuntos civiles y criminales...”. Debe también subsistir el Consejo de Indias,”...porque sus negocios son en todo diferentes de los de las Península, muchos en número y de diversa importancias...”. Un abanico sumamente diverso de materias completa el examen del borrador constitucional napoleónico.

2.2.5 El segundo proyecto o la voluntad de incorporar la realidad española a la Carta constitucional de Bayona

El texto elaborado por Colón, Lardizábal y Torres ponía fin a un conjunto de reflexiones, memoriales e informes en torno al proyecto constitucional del Emperador francés que, a pesar de las muy difíciles circunstancias y la extrema rapidez que enmarcan su redacción, habrían de constituir, en la perspectiva imperial, herramientas de trabajo útiles, como la actuación inmediatamente posterior del Emperador Napoleón, y sobre todo las modificaciones operadas en el primitivo texto constitucional, vienen a evidenciar.

Pero el propio contenido del segundo proyecto de la Constitución de Bayona manifiesta hasta qué punto el emperador de Francia había recibido y asimilado los mensajes enviados por los representantes españoles.

En este proyecto el contenido del Título I se identificaba con el primitivo Título VII,”Culto”, pero esta vez suprimiendo todos los enunciados, es decir los 48 a 52, referentes a la supresión de la Inquisición o el control de las órdenes religiosas y de sus bienes, y reafirmando, en el mismísimo art. 1º, a la religión católica como “dominante y única, ninguna otra será tolerada”. Además, en el Título II, sobre la Corona, se eliminaban los antiguos arts. 3 y 4, que impedían la reunión de la Corona de España con otras, y establecían su sometimiento a un pacto de familia imperial, y se contemplan

nuevas posibilidades en el caso de extinción de la dinastía Bonaparte
250

La segunda redacción de la Constitución de Bayona sostenía un conjunto de posicionamientos políticamente inviables. La generalizada sublevación de España contra la ocupación francesa hacía inútiles los apresurados y tardíos esfuerzos de Bonaparte por componer un texto de compromiso, que introdujera un orden constitucional que, a pesar de la revolucionaria concepción de las relaciones políticas que entrañaba, resultara asimilable en España, o al menos disfrutara de suficiente respaldo entre sus estamentos dirigentes²⁵¹.

La propia guerra, y la división de las mismas clases dirigentes entre la minoría que se encontraba presente en Bayona, y la inmensa mayoría, posicionada junto a un pueblo español levantado en armas, obligaban a retornar al proyecto inicial, técnica y políticamente más coherente. Además, Bonaparte disponía ahora de unos potenciales criterios de legitimación política y de asistencia técnica inéditos al abordar la elaboración del primero de los textos constitucionales de Bayona.

El 15 de junio se reunía en la ciudad de Bayona la primera de las sesiones de la Junta convocada al objeto de proceder a la aprobación definitiva del texto constitucional para España. Napoleón

²⁵⁰ SANZ CID, M.: *La Constitución de Bayona...*, pp. 233-235, y concretamente en esta última: "3º... En defecto de éstos, al que sea designado por testamento del último Rey, ya sea entre parientes o ya sea entre los que haya juzgado más a propósito para ceñir la Corona de España".

²⁵¹ *Ibidem*, pp. 255-256: "El segundo proyecto, no había hecho más, que perder aquellos trazos más salientes, que imprimían un carácter de innovador al primero; tales como la reforma religiosa, el establecimiento de la unidad contributiva y de fuero al suprimir los privilegios de las corporaciones, la abolición de privilegios de la nobleza, etc., sin ganar nada, en cambio en el necesario desenvolvimiento de sus títulos ni en su adaptación a la fisonomía y tradiciones de la vida política española, si se exceptúa la supresión de aquellos artículos, que realmente pugnaban con el espíritu nacional, como el que prescribía la implantación del Código civil napoleónico".

no esperaba que hicieran demasiadas aportaciones conceptuales o materiales a un trabajo cuya factura última continuaba dependiendo, esencialmente, de él mismo, y si que prestaran el debido acatamiento a su hermano, que no habría de producirse hasta la efectiva materialización del texto constitucional.

De hecho, esa primera sesión celebrada en el Obispado Viejo de Bayona, además de constituir la presidencia del órgano y verificar los nombramientos de los diputados asistentes, consistió, esencialmente, en la lectura de la cesión oficial los derechos al trono de España recaídos en Bonaparte en beneficio de su hermano José, pasando a continuación el presidente Azanza a recordar, en su discurso de salutación los elevados cometidos que les habían sido asignados a los allí presentes, quienes decidirían finalmente, por unanimidad, proceder a cumplimentar a su nuevo soberano tan pronto fuera posible.

De hecho, en la sesión siguiente celebrada por la Junta, dos días después, se aprobó que el organismo en pleno dirigiera un mensaje de lealtad al nuevo rey, cuyos términos expresados fueran en ella misma aprobados. Pero éstos inicialmente formales cometidos desembocan en la tercera sesión de la Junta, de 20 de junio, en una esencial función, como es proceder al conocimiento del proyecto constitucional entregado a su presidente por el propio Bonaparte, y que constaba esta vez de 126 artículos divididos en trece Títulos.

La lectura del nuevo y tercer proyecto constitucional, acompañada de una regia propuesta para rebajar las contribuciones de los pueblos, se cierra con el acuerdo de imprimir y entregar un ejemplar del texto *“a cada uno de los individuos de la Junta, para que lo examinasen con detención, y al cabo de tres días diesen por escrito su dictamen, sobre el todo de la Constitución o alguno de sus artículos...”*.

El verdadero debate constitucional se inicia a partir de la quinta sesión, celebrada el 22 de junio, y en su transcurso comienzan a evidenciarse dos de las esenciales inquietudes que el borrador constitucional suscita a los miembros de la Junta española: la problemática dinástica, y el tratamiento otorgado a las posesiones americanas de la Monarquía. La primera de esas inquietudes afecta a la propia fundamentación del nuevo régimen; la segunda al sostenimiento de un modelo de Monarquía ²⁵²

El modelo territorial de la Monarquía, o la pertenencia de sus dominios ultramarinos, no se cuestionaba, sino que se proponían mecanismos eficaces de integración del conjunto de los sectores sociales dentro de una nueva solución política, dentro de una mentalidad que entroncaba con la vigorosa y activa política de reformas que, muy recientemente, habían venido aplicando algunos virreyes españoles en América, y muy particularmente en la Nueva España ²⁵³.

En la séptima y octava de las reuniones celebradas por la Junta española en Bayona, a lo largo de los dos días siguientes, la reiteración temática en los ámbitos que corresponden a la Iglesia, la

²⁵² SANZ CID, M.: *La Constitución de Bayona...*, pp. 124-125: "...¿Y qué cosa más propia, que venir desde luego a protestar delante de nuestro Rey, delante del Jefe de la Nación española y centro de todas nuestras esperanzas, del sincero celo y ardiente esmero, con que en esta grande ocasión nos dedicaremos a desempeñarla? Sentimos, Señor, en nuestro corazón, la división e inquietudes momentáneas, que agitan y turban algunas provincias a instigación del vulgo... Hemos hecho y haremos cuanto esté de nuestra parte, para atraerlas a la tranquilidad y al orden, porque nada importa tanto, en este momento, como el que no opongan estorbos, al cumplimiento de los benéficos designios, que tiene sobre nosotros el héroe incomparable, que se ha propuesto vivir inmortal, en la reconocida memoria de nuestra posteridad más remota. Nosotros ofrecemos cooperar a que se cumplan y ayudar, siempre, a V. M., con la lealtad y fe debida, en el glorioso empeño, que ha contraído de no reinar, sino para el bien de los españoles; empeño muy digno de un Monarca, que la fama tiene dado a conocer al mundo, como modelo de dulzura y de bondad que eran las delicias del pueblo, que regía y que es ahora objeto de su llanto, porque lleva a otra parte sus virtudes...".

²⁵³ ARTS. MEXICO, ENRIQUE

familia real, los símbolos del nuevo régimen, y las Indias, indican que el debate constitucional se encuentra ya definido en torno a los enunciados más sensibles y polémicos de la propuesta bonapartista ²⁵⁴.

A partir de la Junta novena, celebrada el 27 de junio, resulta notoria la necesidad de proceder a una pronta conclusión de proyecto constitucional. Napoleón había tratado de resolver la instalación de la dinastía Bonaparte en España con la consiguiente provisión del trono napolitano que dejaba vacante su hermano José.

Por eso, en los últimos días del mismo mes, los representantes españoles en Bayona comienzan a concluir sus deliberaciones. Su propio presidente, considerado concluido el plazo otorgado para el examen del proyecto constitucional, estima oportuno proceder a iniciar la votación acerca del texto constitucional ²⁵⁵, y ello a pesar de

²⁵⁴ *Ibidem*, pp. 138-143. Concretamente en la sesión de 24 de junio, parece haberse delimitado ya claramente los ámbitos de discusión últimos, pp. 138-141: "...El Rvdo. P. Vicario general del Orden de San Francisco... se hizo cargo de los beneficios que la Constitución debe acarrear a la España, mejorando, como ha de mejorar, su gobierno. Expuso los servicios que los Regulares hacen a la religión y al Estado, mas reconoció que sus instituciones necesitan también de reforma..

...El Sr. Gómez... hizo presente que echaba de menos un título sobre la familia real, en que se tratase de las relaciones de las personas que la componen entre sí y con el jefe de la familia y del Estado, y de la educación de estas mismas personas...

El Sr. D. Juan Antonio Llorente, con motivo de saber que en la Junta se había conferenciado sobre el escudo de armas que usaría S. M., el actual Rey de España, leyó una Memoria sobre este punto, inclinándose en ella, a que se varíe enteramente el escudo antiguo, adoptándose uno que se compusiese de los dos mundos y las columnas de Hércules, poniendo el águila imperial en la parte inferior del escudo...

El Sr. D. Ignacio Sánchez de Tejada leyó una Memoria, en que se propuso convencer, que era absolutamente necesario el ministerio separado de Indias, que se proponía en la Constitución

²⁵⁵ SANZ CID, M.: *La Constitución de Bayona...*, p. 145: "...Que considerando hallarse los señores vocales en estado de formar opinión, por las ilustradas y libres discusiones que habían precedido, se procedería en este día a la votación de las observaciones, para determinar si la Junta las adoptaría o no, a efecto de proponer las que se adoptasen a Su Majestad Imperial y Real y cada uno manifestaría con entera libertad su modo de pensar, por el método de votación que era más propio en Juntas tan numerosas, a saber: que el que opinase que se

que se suscitan diferencias con los representantes de las provincias vascas, con el diputado de Navarra, y con un diputado catalán, acerca del tratamiento separado de la cuestión foral ²⁵⁶.

Superadas estas contingencias, ese mismo día comenzó a votarse el proyecto constitucional. Desde un principio se puso de manifiesto el refrendo de la inmensa mayoría de los representantes españoles presentes en Bayona al texto suministrado para su consideración por el Emperador.

Tanto el procedimiento de elaboración del texto constitucional, como la forzosa instauración de una nueva entidad dinástica en España, y el no menos alambicado procedimiento de legitimación formal del nuevo régimen, empujan a considerar el proyecto constitucional de Bayona dentro de la tipología formal característica de una “Constitución” o “Carta otorgada”.

En la sesión undécima, celebrada el 30 de junio, se debatió acerca del procedimiento formal de entrega del texto constitucional a los españoles, y la conveniencia de adoptar todas las disposiciones

hiciesen variaciones o adiciones a lo establecido en el proyecto de constitución expresaría su dictamen poniéndose en pie, y el que no estuviese por las variaciones o adiciones se mantuviese sentado...”.

²⁵⁶ *Ibidem*, p. 146:”...el Sr. D. José María de Yandiola, diputado nombrado por el Señorío de Vizcaya, hizo presente: que por parte de su principal había hecho representación directamente a S. M. el Emperador, pidiendo la conservación de los fueros... para que su asistencia y participación en este acto no se tuviera por adhesión a la constitución general, y que en caso necesario se abstendría de votar. Se le contestó por el Sr. *Presidente*, que todos los que estábamos reunidos habíamos sido nombrados para decir por nosotros mismos nuestro dictamen; mas que con todo no había inconveniente en admitir y que constase en el Acta su exposición. En los mismos términos lo hicieron después los Sres. Diputados del reino de Navarra y de las provincias de Guipúzcoa y Alava.

El Sr. D. José de Garriga pretendió hacer otra igual por el Principado de Cataluña; pero el Sr. *Presidente* le hizo observar que ni había sido nombrado por el Principado mismo, que era el caso de los otros diputados, ni Cataluña tenía una constitución particular.

Inmediatamente que el Señorío de Vizcaya hizo su exposición y protesta, contraprotestaron en nombre de Castilla los Diputados de la ciudad de Burgos...”.

conmemorativas ajustadas a la ocasión²⁵⁷. El 6 de julio se completaba la redacción de la definitiva versión de la Constitución, que constaba finalmente de 146 artículos. Sólo restaba que el nuevo rey y los representantes del pueblo español prestaran los correspondientes juramentos.

Los juramentos no tardaron en producirse. Al mediodía del 8 de julio el *Obispado Viejo* de Bayona acogía la undécima y última sesión de la Junta española de Bayona. Esta vez la ocasión era especialmente solemne: se trataba de asistir al juramento como Rey de España a José Bonaparte.

A continuación, José Bonaparte entregó la Constitución al presidente Azanza, y éste a uno de los secretarios, quien procedió a la lectura del texto en voz alta, lectura a la que siguió el discurso del propio Presidente de la Junta española, agradeciendo a su nuevo soberano los beneficios que a la nación deparaba el nuevo régimen instaurado. Finalmente, prestaron juramento el rey y, a continuación, los diputados presentes²⁵⁸.

²⁵⁷ *Ibidem*, p. 151: "El Sr. *Presidente*... creía preciso, en el acto mismo de la entrega de la Constitución, ofrecer a S. M. I., en homenaje, el monumento que se determinará consagrarle... La Junta la acogió con entusiasmo y hubiera querido que sus medios y facultades hubieran igualado a sus sentimientos de gratitud, para haber ideado una obra, que en su grandeza y dración explicara el extraordinario suceso cuya memoria se deseaba perpetuar... Con estas consideraciones se discurrió sobre la demostración que podría hacerse, y se fijaron los sufragios en que se acuñaran dos medallas de grande y mediano módulo, representándose en ellas el acto de recibir de mano de S. M. I. la ley Constitucional de España...".

²⁵⁸ *Ibidem*, pp. 153 y ss.: "Cuantas palabras hemos oído de boca de V. M. nos han inspirado la más segura confianza, de que nuestra cara patria va a reponerse, bajo el dulce gobierno de V. M., de los males envejecidos que la han traído a tanta decadencia... Esta misma gran Carta que V. M. ha puesto en mis manos, y que es la prueba del cuidado y desvelo con que se ocupa en obrar en bien de la España el héroe incomparable de nuestro siglo, el grande Napoleón... La Junta irá a pagarle el tributo de gracias que le es debido... ¡Y cuánto no lo será a V. M. cuando le ve dedicado enteramente a organizar su comercio, restablecer su Hacienda, vivificar

Las conclusiones del antiguo ministro de Carlos IV no podían resultar más optimistas, y la atribución de méritos a su anfitrión más lisonjera:”...*Haber dado a la España una Constitución sabia, que la restituyese a sus antiguas Cortes; asegurar la propiedad y la libertad individual; desatar las ligaduras del ingenio; establecer un gobierno sólido que fije la prosperidad nacional y haber colocado sobre el Trono de España un Príncipe justo y amable que no reinará sino según la ley, y no tendrá otra dicha que la de sus pueblos; ha sido una obra consumada de sabiduría...*” ²⁵⁹.

Con el mismo espíritu servicial a la causa bonapartista que la había reunido por primera vez, la Junta española ponía fin a sus cometidos. España disponía de un nuevo rey y, sobre todo, por vez primera en su prolongada andadura, de un texto constitucional.

su comercio, crear su industria e indicarle los caminos que había desconocido de la prosperidad y de la gloria!...”.

El juramento revistió una fórmula doble. Bonaparte satisfizo un enunciado que sintetizaba el conjunto de conceptos que fundamentaban el régimen recién instaurado:”Juro sobre los Santos Evangelios respetar y hacer respetar nuestra Santa religión; observar y hacer observar la Constitución: conservar la integridad y la independencia de España y sus posesiones; respetar y hacer respetar la libertad individual y la propiedad, y gobernar solamente con la mira del interés, de la felicidad y de la gloria de la nación española”. Los miembros de la Junta acudieron a un solución más sencilla:”Juro fidelidad y obediencia al Rey, a la Constitución y a las leyes”.

²⁵⁹ *Ibidem*, pp. 158-160. Resulta llamativa, en un servidor distinguido del Antiguo Régimen, la descripción que realiza Azanza de la España de cuyos centros de decisión política había formado parte hasta apenas unas semanas antes:”El orden social estaba a punto de disolverse entre nosotros; el Gobierno superior lo habpia atraído todo a sí para ensanchar más los límites de la arbitrariedad, escoger los negocios en que pudiera hacerse lugar la parcialidad o el capricho y dejar los demás en abandono... La Hacienda era verdaderamente un caos, y la deuda pública un abismo. Los resortes todos de la administración estaban dislocados y rotos... ¿A qué otro poder que el de V. M. I. hubiera sido concedido en tal estado, no sólo contener el mal, porque esto no bastaba, sino hacerlo desaparecer enteramente y sustituir el arreglo al desorden, la ley al capricho, a la opresión la justicia, a la incertidumbre la seguridad?”.

2.2.6 *La Constitución de Bayona y el orden constitucional bonapartista.*

Podría considerarse que el texto de Bayona se trataba de una Constitución “transaccional”, en donde, al inicial borrador napoleónico, se habían ido incorporando las sugerencias de los representantes españoles hasta configurar un texto constitucional grato a todas las partes comprometidas con tan atípico “proceso constituyente”.

Es cierto que el texto final incorporaba muchas de esas sugerencias, pero el texto constitucional de Bayona no debe inducir a confusión: la iniciativa política, la voluntad de instauración de un régimen constitucional como fundamento legitimador de un nuevo esquema de relaciones entre Francia y España, y la propia resolución técnica de las dificultades formales y materiales inherentes a semejante proceso, residen en la personalidad de Napoleón.

La Constitución consta de un preámbulo y 146 artículos divididos definitivamente en trece Títulos: I.”De la religión”; II.”De la sucesión a la Corona”; III.”De la regencia”; IV.”De la dotación de la Corona”; V.”De los oficiales de la Corona”; VI.”Del ministerio”; VII.”Del Senado”; VIII.”Del Consejo de Estado”; IX.”De las Cortes”; X.”De los reinos y provincias españolas de América y Asia”; XI.”Del orden judicial”; XII.”De la administración de hacienda”; XIII.”Disposiciones generales”.

La estructura y sentido general del orden constitucional responde al primitivo programa político napoleónico, pero se consolida, desde el mismo preámbulo, la concepción formal del texto como una solución paccionada, producto de la actividad legislativa conjunta del propio soberano y de la Junta española, bajo los auspicios del emperador de Francia: *“Habiendo oído a la Junta Nacional congregada en Bayona de orden de ... Hemos decretado y decretamos la presente Constitución, para que se guarde como ley fundamental de*

nuestros Estados y como base del pacto que une a nuestros pueblos con Nos, y a Nos con nuestros pueblos...”.

Los Títulos I y II consolidan los criterios imperiales en el sentido de definir a España como un Estado confesional, aunque no con la intensidad pretendida por la Junta española, y reservar la sucesión de la Corona a la dinastía Bonaparte. Es cierto que se retira el enunciado, presente en la primera redacción constitucional, que disponía el sometimiento de los soberanos españoles a un “pacto de familia” imperial, pero, a juzgar por la expresa pretensión introducida en las primeras sesiones de la Junta congregada en Bayona, no poca amargura debió producir entre sus miembros la reafirmación del criterio napoleónico de impedir, expresamente, la posibilidad de que a la Corona de España se incorporaran otras, especificándose en el art. 3º cómo “no podrá reunirse nunca con otra en una misma persona” ²⁶⁰

El Título III trataba, igualmente, de que una hipotética regencia no saliera nunca de la familia Bonaparte, el IV definía el patrimonio regio y las correspondientes dotaciones económicas de la familia real, y el V definía sus oficios domésticos ²⁶¹. El contenido más político de la Constitución comienza a partir del Título VI, referente al gobierno, que tras los debates acerca de la constitucionalización de su elenco de miembros, así como su número, queda finalmente integrado, como reza el art. 27, por un total de nueve ministerios, los de Justicia,

²⁶⁰ *Acta Constitucional de España*, arts. 1º a 7º.

²⁶¹ *Acta Constitucional...*: “Art. 10.”Será Regente el que hubiera sido designado por el Rey predecesor...

Art. 11. En defecto de esta designación del Rey predecesor, recaerá la Regencia en el Infante más distante del trono en el orden de herencia...

Art. 25. Los Jefes de la Casa Real serán seis, a saber:

Un capellán mayor.

Un mayordomo mayor.

Un caballerizo mayor.

Un camarero mayor.

Un montero mayor.

Un gran maestro de ceremonias”.

Asuntos eclesiásticos, Asuntos extranjeros, Interior, Hacienda, Guerra, Marina, Indias y Policía general.

El control regio de los centros de decisión política queda reforzado, igualmente, como refiere el art. 32 del texto constitucional, por la institución de un Senado integrado por los Infantes de España mayores de dieciocho años, y veinticuatro representantes de los Ministros, Capitanes generales, embajadores, y consejeros de Estado y del Consejo Real nombrados por el propio rey. Probablemente el ámbito material más extensamente abordado por la Constitución de Bayona, en un Título IX que se extiende entre los arts. 61 y 86 del texto, sea la definición de un nuevo modelo, el bonapartista, para la institución representativa de los reinos de España, para las Cortes

La Constitución de Bayona implanta un modelo francés de representación estamental que concede 25 asientos a la nobleza y al clero, y 122 al “pueblo”, estableciendo en este último supuesto un complejo procedimiento de elección que reproduce el primitivo diseño napoleónico del tercer estado, otorgando, desde luego, un muy significativo protagonismo a las ciudades, pero también a las provincias del reino, a las Universidades, a los Consulados de Comercio y a los dominios indianos.

Sus competencias, sin embargo, apenas exceden las meramente consultivas y representativas, de manera que las modificaciones”...en el código civil, en el código penal, en el sistema impositivo o en el sistema monetario serán propuestas... a la deliberación y aprobación de las Cortes...” -art. 82-, los proyectos de ley”...se comunicarán previamente por la Secciones del Consejo de Estado a las Comisiones respectivas de las Cortes...” -art. 83-, y las cuentas de

hacienda”...serán presentadas por el Ministro de Hacienda a las Cortes...”²⁶².

A estas disposiciones, verdaderamente renovadoras, debe añadirse el otorgamiento de una extraordinaria y equilibrada representatividad a los dominios indianos en las futuras Cortes, en donde contarán con 22 diputados distribuidos a razón de dos para Nueva España, Perú, Nueva Granada, Buenos Aires y Filipinas, y uno para Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Caracas, Quito, Chile, Cuzco, Guatemala, Yucatán, Guadalajara, provincias occidentales de Nueva España, y provincias orientales del mismo virreinato, nombrados por sus propios órganos de gobierno territorial, y disfrutando, adicionalmente, de representación en el Consejo de Estado²⁶³.

²⁶² *Acta Constitucional...* : La definición de los componentes de las Cortes es, sin embargo, más compleja:”Art. 64. El Estamento del pueblo se compondrá:

1º. De sesenta y dos diputados de las provincias de España e Indias.

2. De treinta diputados de las ciudades principales de España e islas adyacentes.

3º. De quince negociantes o comerciantes.

4º. De quince diputados de las Universidades...

Art. 67. Los diputados de las provincias de España e islas adyacentes, serán nombrados por éstas a razón de un diputado por 300.000 habitantes...

Art. 71. Los diputados de las treinta ciudades principales del reino serán nombrados por el Ayuntamiento de cada una de ellas...

Art. 73. Los quince negociantes o comerciantes serán elegidos entre los miembros de las Cámaras de comercio...

Art. 74. Los diputados de las Universidades... serán nombrados por el Rey entre los comprendidos en una lista: 1º De quince candidatos presentados por el Consejo Real, y 2º De siete candidatos presentados por cada una de las Universidades del Reino...”.

²⁶³ *Acta Constitucional...* :”Art. 93: Estos diputados serán nombrados por los Ayuntamientos de los pueblos que designen los virreyes o capitanes generales en sus respectivos territorios...

Art. 95. Seis diputados nombrados por el Rey, entre los individuos de la Diputación de los Reinos y provincias españolas de América y Asia, serán adjuntos en el Consejo de Estado y Sección de Indias. Tendrán voz consultiva en todos los negocios tocantes a los reinos y provincias españolas de América y Asia...”.

Por lo que se refiere a las actitudes, pueden diferenciarse tres grupos: los *conformistas*, los *asimilistas* y los *reformadores*. Los primeros, generalmente legos en cuestiones políticas, admitieron cuanto ofrecía Napoleón en su proyecto constitucional, con lo cual estaban brindando su apoyo -aunque fuese a través de la inactividad- al desafío constitucional original, de claras connotaciones francesas. Los segundos pretendían, por su parte, un mayor asimismo con el constitucionalismo galo. Así lo sostuvo, por ejemplo, Juan Soler, quien llegó a quejarse de que en el proyecto de Estatuto se reconocían demasiados elementos españoles²⁶⁴.

Finalmente, los reformadores se mostraron disconformes en algunos puntos con el proyecto, e incluyeron para que en él se recogiesen ya elementos del Antiguo Régimen (grupo de absolutistas y conservadores), ya instituciones novedosas, a las que aspiraban ilustrados y liberales (grupo de progresistas).

Ideológicamente, los diputados de la Junta de Bayona estaban divididos entre absolutistas (como Ettenhard y Salinas), partidarios del despotismo ilustrado (como Azanza), liberales (Ranz Romanillos) y anglófilos (Luis Marcelino Pereyra), así pues, la Junta de Bayona carecía de la uniformidad ideológica que se ha querido atribuir al grupo de los afrancesados²⁶⁵.

²⁶⁴ Observación de Soler, Juan 25 de junio de 1808. en Papeles reservados de Fernando VII. tomo XIV. Esta observación. inédita. la recojo en La Constitución de Bayona (1808), ob. cit... p. 406. Para el resto de observaciones de los diputados, y para las actas de la Junta, citare por la edición más común: *Actas de La Diputación General de Españoles que se juntó en Bayona el 15 de junio de 1808, en virtud de convocatoria expedida por él Gran Duque de Berg, como Lugarteniente del Reino. y La Junta Suprema de Gobierno. con fecha 19 de mayo del mismo año.* Imprenta y Fundición de. García, J. A Madrid. 1874. Las citare como Actas

²⁶⁵ Morodo, Raul “*Reformismo y regeneracionismo: el contexto ideológico y político de la Constitución de Bayona*”. *Revista de Estudios Políticos*. n.º 83, 1994, pp. 36, 59 Y ss. Reconoce la existencia de un grupo de afrancesados. especialmente los andaluces, que profesaban ideas más liberales que el resto:

Si un mérito hay que reconocerle a la Constitución de Bayona, y en este sentido la actuación de la Junta española, y concretamente de los diputados Sáenz de Tejada y Del Moral, hubo de resultar verdaderamente decisiva, es la conversión de los asuntos indianos en una auténtica prioridad de gobierno de la Monarquía de España, y una prioridad dotada del debido rango constitucional.

Desde el verano de 1808, los acontecimientos históricos se desarrollaron, con un extraordinario dinamismo, recorrido por la gran victoria española de Bailén, la precipitada huida de José Bonaparte de su Corte madrileña, y la campaña peninsular del mismísimo Napoleón.

La guerra se desarrolló en varias fases en las que ambos bandos tuvieron sucesivamente la iniciativa, y se destacó por el surgimiento del fenómeno guerrillero que, junto con los ejércitos regulares aliados dirigidos por Arthur Wellesley, duque de Wellington, provocaron el desgaste progresivo de las fuerzas bonapartistas. La población civil, padecería los efectos de una guerra total, en la que tanto los franceses como los aliados se cebaron con la población y objetivos civiles, saqueando y pillando a gran escala y devastando la industria española, considerada una amenaza para sus respectivos intereses.

Los primeros éxitos de las fuerzas españolas en la primavera y en el verano de 1808, con la batalla del Bruch, la resistencia de Zaragoza y Valencia y, en particular, la sonada victoria de Bailén, provocaron la evacuación de Portugal y retirada francesa al norte del Ebro, seguida en el otoño de 1808 por la entrada de la Grande Armée, comandada por el propio Napoleón, que culminó el máximo despliegue francés hasta mediados de 1812.

Juretschke, Hans *Los afrancesados en La Guerra de la Independencia*, Rialp, Madrid. 1962, pp. 217 Y ss.

Sin embargo desde las primeras semanas de 1809 pudo comenzar a desenvolverse el Estado bonapartista en España, y por tanto a aplicarse un modelo constitucional que tan sólo en el ámbito más próximo a los centros de decisión política josefinos hubo de revestir un carácter mínimamente inspirador. La realidad de la guerra, intensificada e internacionalizada a partir del desembarco de un contingente expedicionario británico minimizó las posibilidades ordenadoras del texto constitucional de Bayona en la configuración política e ideológica de una España insurgente.

Pero la misma España insurgente se había configurado como un ejercicio activo de soberanía que, ante el cautiverio de la familia real, se expresaba institucionalmente en un conjunto de Juntas “Supremas” de Defensa prontamente vertebradas por una Junta Central que actuaron como depositarias de la soberanía nacional, pero bajo la presidencia de personalidades completamente identificadas con el Antiguo Régimen, o el liderazgo político de figuras reformistas como Floridablanca o Jovellanos.

En este contexto, la elaboración de los textos constitucionales de Bayona y Cádiz, a pesar de la adopción de disposiciones muy similares, como producto de la plasmación escrita del pensamiento liberal y constitucional, obedece a un entendimiento y una praxis sumamente caracterizadas, pero muy diversas, de la experiencia constitucional. En la Isla de León se reunirían unas Cortes de la nación que debatieron, con profundidad, con extraordinaria brillantez, y en un marco de enorme libertad, sin ningún tipo de coacción interna, un texto que nacía de la soberanía nacional.

Volvemos a reiterar que con respecto a los españoles que participaron en el Estatuto de Bayona cabe distinguir varias posturas: por una parte los conformistas, que admitieron el texto presentado por Napoleón sin introducir cambios, las más de las veces porque ellos mismos afirmaron ser iletrados en materia política; en segundo lugar

los asimilistas que deseaban que el proyecto se aproximase lo más posible al constitucionalismo francés imperial, evitando excesivas concesiones a las tradiciones españolas; y finalmente los nacionalizadores que trataron de introducir en el texto más elementos institucionales españoles, y tratando de conservar los existentes como el Consejo de Castilla y el Tribunal de la Inquisición, ya tratando de revitalizar los periclitado como las Cortes²⁶⁶.

No existió en Bayona, en cambio, una institución representativa española investida de legitimidad constituyente, y dotada de la capacidad de elaborar y aprobar un texto constitucional, sino una Junta apresuradamente reunida para otorgar su aprobación a un proyecto constitucional previamente elaborado por Napoleón Bonaparte. Es cierto que los representantes españoles, y además en unas circunstancias personales harto complejas, casi secuestrados, no vacilaron en realizar un extenso y detenido examen del texto napoleónico, y que el propio emperador procedió en virtud de esas observaciones a una atenta lectura de su borrador inicial, como demuestra el hecho incontestable de que el texto definitivo conociera tres precedentes.

Por ello la Constitución de Bayona, suele considerarse como una “Constitución otorgada”, un texto que casa mejor con la denominación de “Acta” o “Estatuto”, que con la de Constitución.

En todo caso la Constitución de Bayona serpenteo como una alternativa constitucional afrancesada determinante para una nueva alternativa constitucional que sería la patriótica. Alberto Lista señalaría años más tarde que utiliza por vez primera la palabra constitución²⁶⁷.

²⁶⁶ Fernández Sarasola, Ignacio. *La Constitución de Cádiz, Imagen, Contenido y proyección internacional*. Centro de Estudios Políticos e Institucionales. Madrid 2011.

²⁶⁷ El Censor, Tomo IX. Pág. 308

El texto definitivo de la Constitución contuvo, sin embargo, un preámbulo en el que expresamente se describa como un pacto entre el Rey y los pueblos de España. De hecho, la Constitución fue jurada por el Rey y los diputados de la Junta de Bayona, en un acto con apariencia de pacto bilateral. Es más, aun que de forma aislada, algún diputado de la Junta de Bayona hizo mención a la Constitución como pacto o insinuó una idea de soberanía compartida²⁶⁸. Ahora bien, esta idea sería principalmente, promovida con posterioridad por la propaganda josefina²⁶⁹, a fin de legitimar un texto que los patriotas seguían considerando con razón- emanado de la voluntad del Emperador.

De esta forma, la Constitución operó en un doble nivel: en atención a su proceso constituyente es, sin duda, una carta otorgada, pero en su aplicación trató de revestirse del ropaje de un texto pactado. La colisión entre ambas interpretaciones quedó personalizada en los propios embates entre Napoleón y su hermano José Bonaparte. El primero, frustrado porque el texto no había detenido la resistencia española y, sobre todo, a partir de la derrota de Bailen, tomó directamente el mando de la situación política, haciendo caso omiso de la Constitución, a la que consideró sin ningún valor.

Bajo su interpretación, el documento emanaba de su voluntad y, en consecuencia, era libre de dejarlo sin ningún efecto *ad libitum*. Buen ejemplo de ello fueron los Decretos de Chamartín (4 de diciembre de 1808), expedidos sin legitimidad alguna por el Emperador, puenteando toda la organización institucional prevista en la Constitución de Bayona, por no hablar de la presencia de mariscales

²⁶⁸ Azanza. Junta de 8 de julio de 1808 (Aetas. pp. 48-49); Angulo, Observación de 26 de junio de 1808 (Aetas, p. 87); Cea (la fecha de la observación no figura; Aetas, p. 97).

²⁶⁹ Véase a modo de ejemplo, la Proclama de 1 de marzo del Ministro Interino de Policía. Amorós, D. Francisco dirigida al Corregidor de Ronda. en Carmen Muñón de Bustillo Romero, Bayona en Andalucía: *el Estado bonapartista en La prefectura de Xerez*, C.E.C.. Madrid. 1991, p. 369.

del Emperador, que imponían su ley frente a la voluntad de los prefectos y autoridades josefinas.

La postura contraria corrió a cargo de José I, quien trató de que se aplicase en la medida de lo posible un texto político en el que fundaba su legitimidad ante los españoles. En este sentido, conviene recordar los distintos fundamentos de legitimidad del documento de Bayona: los dos primeros proyectos constitucionales (finales de mayo y principios de junio de 1808) legitimaban la posición constituyente de Napoleón en el tratado de traslación de la Corona suscrito con Carlos IV (5 de mayo de 1808); el tercer proyecto, sometido a la deliberación de la Junta de Notables, añadía una legitimación divina del Corso.

El texto finalmente aprobado, y al que José I deseaba ceñirse, olvidaba toda referencia al tratado con Carlos IV (que José I no había suscrito) y legitimaba el poder regio en “Dios Todopoderoso” (legitimación divina), y fijaba la Constitución como pacto, desarrollando este aspecto en los artículos 6 y 7 que trataban el juramento constitucional que debían exponer respectivamente el Rey y los pueblos de las Españas. José Bonaparte no era Rey por la voluntad constitucional (frente a lo que sucedía con Fernando VI en la Constitución de Cádiz), pero hizo ver que el juramento constitucional que había evacuado ante la junta de Notables le concedía una legitimidad también pactada que quería respetar.

Frente a estos planteamientos algunos consideran que el Estatuto de Bayona fue la primera Constitución española²⁷⁰. Ni su

²⁷⁰ El término “Estatuto” con que se designa habitualmente el texto deriva de la traducción del francés “Etatut Constitutionnel”, denominación con la que se intituló el proyecto constitucional. En castellano, sin embargo, el texto se publicó con el nombre de «Constitución». La Constitución de 1808 fue publicada de forma fraccionada en cuatro números de la Gaceta de Madrid: Gaceta de Madrid, n.º. 99, de 27 de julio de 1808 (Preambul0 y arts. 1-31), Gaceta de Madrid, n.o 100, de 28 de julio de 1808 (arts. 32-86), Gaceta de Madrid, n.O 10 1, de 29 de julio de 1808 (arts. 87-123) y Gaceta de Madrid, n.o 102, de 30 de julio (arts.

naturaleza de carta otorgada, ni su filiación francesa, ni el ser diseñada en una localidad gala, ni la escasa vigencia e influjo que tuvo permiten afirmar lo contrario, y son mas fruto de prejuicios nacionalistas que de argumentos históricos y científicos. En todo caso el Estatuto era una Constitución para España, elaborada con participación de españoles y que llegó a aplicarse parcial mente en el territorio ocupado por las tropas francesas. Un texto que, además, tuvo la importancia indirecta de servir de acicate a los patriotas para aprobar su propia Constitución -la más influyente de Cádiz- como contrapunto liberal a la oferta napoleónica.

2.3 La realización de las Cortes de Cádiz

2.3.1 Las primeras ideas para realizar las Cortes de Cádiz

Fue el propio Fernando VII el que el 5 de mayo de 1808 firmó dos Decretos, uno dirigido a la Junta de Gobierno para que en lugar seguro decidiera la guerra contra Napoleón y otro en el que se pedía que se convocará Cortes con la finalidad de procurar recursos con los que hacer frente a la inevitable contienda. En este segundo se aconsejaba que aquellas Cortes quedasen permanente para lo demás que pudiera ocurrir.

El paso siguiente fue realmente el levantamiento de Madrid, el 2 de mayo de 1808. Las noticias se extendieron por España provocando reacciones de indignación y solidaridad y extendiéndose

124-final). El texto volvió a publicarse una segunda vez en la Gaceta de Madrid en 1809, tras el retorno de José I a la capital: Gaceta de Madrid, n.o 87, de 23 de marzo de 1808 (Preámbulo y arts. 1-7), Gaceta de Madrid num. 88, de 29 de marzo de 1809 (arts. 8-27), Gaceta de Madrid, n.O 89, de 30 de marzo de 1809 (arts. 28-31), Gaceta de Madrid, n.O 90, de 30 de marzo de 1809 (arts. 32-60), Gaceta de Madrid, n.o 91, de 1 de abril de 1809 (arts. 61- 95), Gaceta de Madrid, n.O 92,2 de abril de 1809 (arts. 96-final). La Constitución fue impresa también en Bayona, en 1808, en la imprenta de Duhart-Fauvert, y se publicó en el Moniteur de 15 de julio de 1808, es decir, antes incluso de su publicación en la Gaceta de Madrid

la insurrección mientras se iban conformando juntas locales. En Sevilla la junta local adoptaría el nombre de Junta Suprema de España y de Indias.

Entre mayo y junio de 1808 surgieron las Juntas Provinciales formadas por personas procedentes tanto de los viejos estamentos, sobretodo de la nobleza y del clero, como de sectores profesionales en especial abogados, profesores, eclesiásticos, funcionarios, militares, junto con comerciantes y hacendados. En estas Juntas había algunos absolutistas pero sobre todo eran liberales. El Consejo de Castilla entendió que las atribuciones que se tomaban las Juntas y sus correspondientes decisiones constituían un delito de lesa nación y por su parte las Juntas negaron al Consejo de Castilla la capacidad de convocar Cortes.

El 25 de septiembre de 1808 las Juntas se unirían en una Junta Suprema Central presidida por el Conde de Floridablanca, antiguo Secretario de Estado con Carlos IV quién ejerció las funciones de gobierno entre septiembre de 1808 y enero de 1810. La Junta Gubernativa del Reino formada por 35 representantes todos ellos de las Juntas Provinciales, comenzó en Aranjuez sus tareas ejecutivas siendo una de sus primeras decisiones remitir al Consejo de Estado el protocolo del juramento que debía prestarse. Formaban parte de esta Junta Central destacados liberales como el Conde de Tilly, Calvo de Rozas, Valdés, Quintana, Jovellanos y el referido Floridablanca. Se crearon cinco comisiones para los distintos rangos de gobierno.

Los hechos históricos que se habían ido sucediendo son bien conocidos el comienzo del reinado de José I, la llegada de Napoleón a Chamartín, el programa de gobierno de José Bonaparte. Mientras tanto el protagonismo político de la resistencia correspondía a la Junta Central. Floridablanca fallecería a finales de diciembre de 1808 siendo sustituido por el marqués de Astorga. La Junta Central salió de Madrid a finales de 1808 instalándose en Sevilla, donde el 1 de enero

de 1809 concluiría un hecho importante, decretar el reglamento al que debía sujetarse las Juntas de los distintos Reinos y provincias.

Los llamamientos a favor de reunir cortes fueron incrementándose y aparecen en las proclamas de las Juntas de Asturias, de Murcia, de Galicia, de Valencia o de Mallorca. Asimismo se unen a esta idea diversos panfletos y lo hace también el propio Jovellanos acerca de la oportunidad de reunir unas Cortes cuya misión principal sería organizar la Regencia que debía asumir el poder ejecutivo de manos de la Junta Central.

Esta idea de convocar unas Cortes Nacionales fue ganando terreno. El 15 de abril de 1809 Lorenzo Calvo de Rozas, vocal de la Junta Central por Aragón y de afiliación claramente liberal había propuesto ante el pleno que se convocasen de inmediato las Cortes formalizando su propuesta a través de la secretaria de la Junta. Manuel José Quintana fue el encargado de redactar una minuta del Decreto de convocatoria a Cortes en la que se plasmaba el ideario liberal de sus autores. Este texto fue apoyado por los liberales pero rechazado por los absolutistas y los reformistas. Jovellanos realizaría un dictamen manifestando la necesidad de identificarse con las leyes fundamentales históricas que contenía un pacto bilateral suscrito entre el rey y el reino para regular la prerrogativa para que los derechos de éste.

El Decreto de 22 de mayo dispone “que se restablezca la representación legal y conocida de la Monarquía y sus antiguas Cortes”.²⁷¹ En los últimos días de mayo serían designados por la Junta

²⁷¹ “ El pueblo español debe salir de esta sangrienta lucha con la certeza de dejar a su posteridad una herencia de prosperidad y de gloria digna de sus prodigiosos esfuerzos y de la sangre que vierte. Nunca la Junta Suprema ha perdido de vista este objeto que, en medio de la agitación continua causada por los sucesos de la guerra, ha sido siempre su principal deseo. Las ventajas del enemigo, debidas menos a su valor que a la superioridad de su número, llamaban exclusivamente la atención del Gobierno; pero al mismo tiempo hacían más amarga y vehemente la reflexión de que los desastres que la Nación padece han nacido únicamente de

haber caído en el olvido aquellas saludables instituciones que en tiempos más felices hicieron la prosperidad y la fuerza del Estado.

La ambición usurpadora de los unos, el abandono indolente de los otros las fueron reduciendo a la nada; y la Junta, desde el momento de su instalación, se constituyó solemnemente en la obligación de restablecerlas. Llegó ya el tiempo de aplicar la mano a esta grande obra y de meditar las reformas que deben hacerse en nuestra administración, asegurándolas en las leyes fundamentales de la Monarquía, que solas pueden consolidarlas, y oyendo para el acierto, como ya se anunció al público, a los sabios que quieran exponer sus opiniones.

Queriendo, pues, el Rey nuestro señor, Don Fernando VII, y en su Real nombre la Junta Suprema gubernativa del Reino, que la Nación española aparezca a los ojos del mundo con la dignidad debida a sus heroicos esfuerzos, resuelta a que los derechos y prerrogativas de los ciudadanos se vean libres de nuevos atentados, y a que las fuentes de felicidad pública, quitados los estorbos que hasta ahora las han obstruido, corran libremente luego que cese la guerra, y reparen cuanto la arbitrariedad inveterada ha agostado y la devastación presente ha destruido, ha decretado lo que sigue:

1. Que se restablezca la representación legal y conocida de la Monarquía en sus antiguas Cortes, convocándose las primeras en todo el año próximo, o antes si las circunstancias lo permitieren;

2. Que la Junta se ocupe al instante del modo, número y clase con que, atendidas las circunstancias del tiempo presente, se ha de verificar la concurrencia de los Diputados a esta augusta Asamblea; a cuyo fin nombrará una Comisión de cinco de sus Vocales que, con toda la atención y diligencia que este gran negocio requiere, reconozcan y preparen todos los trabajos y planes, los cuales, examinados y aprobados por la Junta, han de servir para la convocación y formación de las primeras Cortes;

3. Que además de este punto, que por su urgencia llama el primer cuidado, extienda la Junta sus investigaciones a los objetos siguientes, para irlos proponiendo sucesivamente a la Nación junta en Cortes:

- Medios y recursos para sostener la santa guerra en que, con la mayor justicia, se halla empeñada la Nación, hasta conseguir el glorioso fin que se ha propuesto;

-Medios de asegurar la observancia de las leyes fundamentales del Reino;

-Medios de mejorar nuestra legislación, desterrando los abusos introducidos y facilitando su perfección; -Recaudación, administración y distribución de las rentas del Estado; - Reformas necesarias en el sistema de instrucción y educación pública; -Modo de arreglar y sostener un ejército permanente en tiempo de paz y de guerra, conformándose con las obligaciones y rentas del Estado; -Modo de conservar una marina proporcionada a las mismas; -Parte que deban tener las Américas en las Juntas de Cortes; 4. Para reunir las luces necesarias a tan importantes discusiones, la Junta consultará a los Consejos, Juntas superiores de las provincias, Tribunales, Ayuntamientos, Cabildos, Obispos y Universidades, y oirá a los sabios y personas ilustradas; 5. Que este decreto se imprima y circule con las formalidades de estilo, para que llegue a noticia de toda la Nación.

Tendréislo entendido y dispondréis lo conveniente para su cumplimiento.

Central los miembros de la que sería conocida como Comisión de Cortes.

La esencia de ambos textos y las discusiones que llevaron a la elaboración de ambos se centraban en dos aspectos concretos: por una parte, la necesidad de que se reunieran las Cortes, y por otra, las reformas necesarias para la evolución de la nación. Respecto a la reunión, los textos manifestaban vehementemente la necesidad de convocar las Cortes con la mayor celeridad. Así que con este fin, en el propio Decreto de 22 de mayo se previó la creación de una Comisión dentro de la Junta Central que se encargaría de todo lo relacionado con la convocatoria y celebración de las mismas. Esta sería la Comisión de Cortes quien desempeñaría un papel esencial en proceso histórico objeto de estudio.

En los últimos días de mayo la Junta designó a los miembros de la Comisión y el 8 de junio la Comisión se reunió por primera vez de modo oficial, pues el día anterior había tenido lugar una sesión preparatoria.

La respuesta al requerimiento del primer Decreto de convocatoria de Cortes realizado el 22 de mayo de 1809 se conoce con el nombre de la “consulta al país”.²⁷² Esta consulta fue contestada ampliamente y en diversos casos con una solicitud de realizarse una nueva Constitución.

Un mes después, el 22 de junio la Comisión de Cortes había consultado la Junta Central acerca de la convocatoria de las Cortes por estamentos y esta propuesta fue admitida por la Junta Central que por

El MARQUÉS DE ASTORGA, Presidente.
Real Alcázar de Sevilla, 22 de mayo de 1809.
A DON MARTÍN DE GARAY.]

²⁷² Suarez, Federico: *Cortes de Cádiz. Informes Oficiales sobre Cortes*, EUNSA, Pamplona, vol. I (1967), vol. II (1968) y vol. III (1974).

acuerdo de 27 de junio dispuso que las Cortes se formasen con los tres brazos: eclesiástico militar y popular. El 25 de julio la Junta Central comunicó a la Comisión su pronunciamiento favorable en relación con la convocatoria proponiéndole con respecto a la representación popular que se extendiera la representación nacional: “convocamos a toda las ciudades y villas de los reinos de Valencia y Aragón y del Principado de Cataluña.” y se admitiese la representación colectiva para las ciudades de la Corona de Castilla que no tenían voto en Cortes.

El Diputado Calvo de Rosas volvería presentar el 14 de septiembre de 1809 una nueva moción a favor de la inmediata convocatoria de las Cortes, reproduciendo los argumentos de su moción del mes de abril. Finalmente el 28 de octubre de 1809 la Junta Central daba conocer la decisión de convocar las Cortes en 1 de enero de 1810 a través de un Decreto, si bien no quedaba muy explícita la composición la forma de elegir los diputados.

Acompañaba al decreto un manifiesto redactado por Quintana en el que quedaba clara la decisión de la Junta Central de no anclarse a las “formas estrechas y exclusivas” de las antiguas Cortes. Para la realización de las Cortes se creó la llamada Junta de Ceremonial que iniciaría su actividad el 25 de noviembre de 1809 adelantando pocos días después su primera propuesta a la Comisión de Cortes estableciendo quien debía convocar las Cortes y como debía efectuarse llamamiento, señalando que la convocatoria debería ser firmada por el Presidente, debería efectuar la Junta en nombre del Rey y debería llevarse a cabo por medio una carta convocatoria firmada por el Presidente de la Junta.

El 1 de enero serían despachadas las convocatorias dirigidas al estamento popular perfilándose las que se enviaría a los grandes y prelados representantes de los estamentos nobiliario y eclesiástico. Sin embargo los avances del ejército de Napoleón hizo que la Junta

decidiera el 13 de enero de 1813 trasladarse desde Sevilla a la Isla de León promulgando un Decreto de autodisolución nombrados el 31 de enero una Regencia a la que traspasó sus poderes.

El Consejo de Regencia comenzó sus funciones con sólo tres regentes de los cinco designados. Dos días después se incorporó a ella el americano Miguel de Lardizábal que sustituía a Fernando de León y no se incorporaría hasta el 29 de mayo, Pedro de Quintana, Obispo de Orense. El Decreto expedido por la junta el 29 de enero de 1809 no fue publicado desapareciendo por tanto las instrucciones referidas a las Cortes, quedando por tanto a cargo del proceso el consejo de regencia que tomaría su orientación una vez instalado finalmente en Cádiz en septiembre de dos de 1910.²⁷³

Aunque el Consejo de Regencia, promulgó un Decreto el 14 de febrero de 1910 en el que se ordenaba que las Cortes se celebrasen tan pronto como los sucesos militares lo permitiesen, sucedieron diversas razones para que pasaran varios meses sin que la convocatoria de Cortes hubiese cristalizado. El 13 de junio la Regencia tomó por fin las primeras medidas para cumplir las instrucciones recibidas de la Junta Central. En esta fecha se mandaba volver a las elecciones a los diputados provinciales y aunque este decreto no se hizo público especificaba la reunión por estamentos. El Conde de Toreno y Guillermo Hualde presentaron ante la Junta de Cádiz el 17 de enero una exposición firmada por otros 10 diputados electos por la que se pedía la reunión de Cortes a la mayor brevedad. La Regencia trató de los complejos asuntos relativos a la representación de los territorios americanos y asiáticos, acordándose por unanimidad que se abriesen las Cortes sin demora desde el momento que estuviese reunida la mayoría de los diputados.

²⁷³ Sobre la Convocatoria y composición de las Cortes. Martínez Navas, Isabel. *La convocatoria de las Cortes*. En *Cortes y Constitución de Cádiz*. Tomo I pgs. 174 a 189.

El Consejo de Regencia promulgaría un Decreto en cuya exposición de motivos reconocía que hasta entonces había frustrado el intento de que se celebrasen las Cortes extraordinarias a pesar de que se había hecho todo lo posible. Elegidos a mediados de septiembre los diputados y examinados y aprobados los poderes sólo faltaba que las Cortes comenzasen su función. Por un Decreto de 28 de abril de 1810 se confirmó la inviolabilidad de los diputados de Cortes.²⁷⁴

2.3.2 El Decreto de 24 de septiembre de 1810

El Decreto de 24 de septiembre de 1810 es sin duda el marco fundamental que anticipa la esencia de la Constitución. En el se consagra la soberanía nacional y la división de poderes: la soberanía nacional al manifestar que los diputados que componen este Congreso, y que representa la nación española, se declara legítimamente constituidos en cortes generales extraordinarias, y que reside en ellas la soberanía nacional.

Ello se incluye en la fórmula de juramento que ha de hacer el Consejo de Regencia: ¿Reconocéis la soberanía de la nación representada por los diputados de estas Cortes generales y extraordinarias? La división de poderes se consagra en la siguiente frase del Decreto: “No conviniendo queden reunidos el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, declaran las Cortes Generales y extraordinarias que se reservan el ejercicio del poder legislativo en toda su extensión”

Al constituir este Decreto un texto fundamental, nos parece importante su reproducción.

Decreto de 24 de Setiembre de 1810. Declaración de la legítima constitución de las Cortes y de su soberanía: nuevo

²⁷⁴ Pino Abad, Miguel. El Consejo de regencia y su papel en la convocatoria de las Cortes de Cádiz. En *Cortes y Constitución de Cádiz*. Tomo I pgs 190 a 197.

reconocimiento del Rey D. Fernando VII, y anulación de su renuncia á la Corona.

Septiembre 24 de 1810.

Es sabido que á consecuencia de las renunciaciones de Carlos IV de Fernando VII en 1808, los ejércitos franceses invadieron la España, ocasionando la invasión el levantamiento general de los pueblos en defensa de la independencia. En tales circunstancias se crearon en la mayor parte de las provincias juntas de gobierno, cada una de las que aspiraba á concentrar el poder de la nación.

La anarquía habría sido inevitable sin el establecimiento de la Junta central gubernativa, la cual mas adelante dió origen á la Regencia. Esta, buscando elementos para resistir la invasión francesa, determinó convocar al pueblo á elección de Cortes extraordinarias, las cuales se instalaron el 24 de Setiembre de 1810.

Los diputados que componen este Congreso, y que representan la Nación española, se declaran legítimamente constituidos en Cortes generales y extraordinarias, y que reside en ellas la soberanía nacional.

Las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española, congregadas en la Real Isla de Leon, conformes en todo con la voluntad general, pronunciada del modo mas enérgico y patente, reconocen, proclaman y juran de nuevo por su único y legítimo Rey al Señor D. Fernando VII de Borbon; y declaran nula, de ningun valor ni efecto la cesion de la corona que se dice hecha en favor de Napoleon, no solo por la violencia que intervino en aquellos actos injustos é ilegales, sino principalmente por faltarle el consentimiento de la Nación.

No conviniendo queden reunidos el Poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, declaran las Cortes generales y extraordinarias que se reservan el ejercicio del Poder legislativo en toda su extension. Las Cortes generales y extraordinarias declaran que las personas en

quienes delegaren el Poder ejecutivo, en ausencia de nuestro legítimo Rey el Señor D. Fernando VII, quedan responsables á la Nacion por el tiempo de su administracion, con arreglo á sus leyes.

Las Córtes generales y extraordinarias habilitan á los individuos componian el Consejo de Regencia, para que bajo esta misma denominacion, interinamente y hasta que las Córtes elijan el gobierno que mas convenga, ejerzan el Poder ejecutivo. El poder de Regencia, para usar de la habilitacion declarada anteriormente, reconocerá la soberanía nacional de las Córtes, y jurará obediencia á las leyes y decretos que de ellas emanaren; á cuyo fin pasará, inmediatamente que se le haga constar este decreto, á la sala de sesion de las Córtes, que le esperan para este acto, y se hallan en sesion permanente.

Se declara que la fórmula del reconocimiento y juramento que ha de hacer el Consejo de Regencia es la siguiente:

“¿Reconoceis la soberanía de la Nacion representada por los diputados de estas Córtes generales y extraordinarias?— ¿Jurais obedecer sus decretos, leyes y constitucion que se establezca segun los santos fines para que se han reunido, y mandar observarlos y hacerlos ejecutar?— ¿Conservar la independencia, libertad é integridad de la Nacion? La religion Católica, Apostólica Romana? ¿El gobierno Monárquico del reino?— ¿Restablecer en el trono á nuestro amado Rey D. Fernando VII de Borbon?— ¿Y mirar en todo por el bien del estado?— Si así lo hicierais, Dios os ayude; y si no sereis responsables á la Nacion con arreglo á las leyes.

Las Córtes generales y extraordinarias confirman por ahora todos los tribunales y justicias establecidas en el reino, para que continúen administrando justicia segun las leyes.

Las Córtes generales y extraordinarias confirman por ahora todas las autoridades civiles y militares de cualquier clase que sean. Las Córtes generales y extraordinarias declaran que las

personas de los diputados son inviolables, y que no se puedan intentar por ninguna autoridad ni persona particular cosa alguna contra los diputados, sino en los términos que se establezcan en el reglamento general que va á formarse, y á cuyo efecto se nombrará una comision.

Lo tendrá entendido el Consejo de Regencia, y pasará acto continuo á la sala de las sesiones de las Córtes para presentar el juramento indicado, reservando el publicar y circular en el reino este decreto hasta que las Córtes manifiesten como convendrá hacerse; lo que se verificará con toda brevedad.

Real Isla de Leon 24 de Setiembre de 1810, á las once de la noche. Ramon Lázaro de Dou, Presidente. Evaristo Perez de Castro, Secretario. Al Consejo de Regencia.”

2.3.3 La apertura de las Cortes y la realización del Proyecto Constitucional.

La apertura de las Cortes se realizaría el 24 de septiembre de 1810. Nicolás María de la Sierra levantaría el acta de instalación de las Cortes generales y extraordinarias de 1810.²⁷⁵ En el acta se nos refiere desarrollo de la primera sesión así como los diputados que asistieron a la misma: 104 diputados, 57 titulares y 47 suplentes.

Esta sesión pone de manifiesto la precaria situación que se vivía en Cádiz así como la dificultad de los diputados para poder llegar a la ciudad, en donde la única vía de comunicación que permanecía abierta fue el Mar. Sin embargo las Cortes se autoproclamaron generales y extraordinarias. El número de diputados gaditanos aumentaría con el transcurso de las sesiones.

Había que esperar a diciembre de 1810 cuando se planteó formalmente que las Cortes realizarían un proceso constituyente. Pedro Ceballos enviaría una misiva desde Londres felicitando a los

²⁷⁵ Fernández Martín, M. *Derecho Parlamentario de España en el siglo XIX*, II Tomos Madrid 1985. Tomo II capítulo tres pgs. 619-626.

reunidos en Cádiz por su reunión y les pedía que formasen la Constitución del reino. Hemos de recordar que por el propio Ceballos quien había difundido los decretos dictados por Fernando VII desde Bayona el 5 de mayo de 1808, en los que ordenaba que se convocasen Cortes.

La llamada Comisión de Constitución celebraría su primera sesión el 2 de marzo de 1811 estando presentes 10 de sus 13 miembros entre los que aparecían personalidades tan relevantes como Agustín de Argüelles, Francisco Gutiérrez de la Huerta, Evaristo Pérez de Castro, Alonso Cañedo y Vigil, José Espiga, Antonio Oliveros, Diego Muñoz Torrero, Francisco Rodríguez de la Bárcena, Joaquín Fernández de Leiva y Antonio Joaquín Pérez.

En ese mismo acto se nombró presidente a Diego Muñoz Torrero y secretarios a Gutiérrez de la Huerta y Evaristo Pérez de Castro se decidió asimismo que la Comisión pudiera contar con la ayuda de varios sabios, entre 3 y 5 lo que posibilitó la presencia de Ranz Romanillos quien había formado parte junto con Agustín Argüelles de la Junta de Legislación que había realizado los trabajos preliminares para la relación de un proyecto constitucional.

Por ello se le pidió a Ranz Romanillos que presentase el proyecto de Constitución que hallaba en su poder. La realización de la Constitución quedó encargada a los miembros de la Comisión para que elaborasen determinadas partes del proyecto y luego la solvencia al debate del resto de vocales.

El capítulo primero de la nación española correría a cargo de Muñoz Torrero quien asumiría un papel decisivo en la relación de todo el proyecto.²⁷⁶ El capítulo 2 titulado “De los españoles, sus derechos y obligaciones” correría a cargo de Francisco Gutiérrez de

²⁷⁶ Fernández de los Ríos, Ángel. Torrero Muñoz. *Apuntes biográficos*, Madrid 1864, pg. 11.

la Huerta y Ranz Romanillos, quien es asimismo estuvieron encargados de redactar la mayoría de los artículos relativos al Gobierno, las Cortes, el Rey, los Secretarios de Despacho, el Consejo de Estado, el Poder Judicial, la organización territorial, estación pública, y la observación de forma constitucionales.

El 23 de marzo de 1811 se expusieron en la Comisión las primeras propuestas del proyecto constitucional y desde esta fecha se fueron sucediendo los debates y la aprobación sucesiva de los artículos del proyecto. La mayor controversia la suscitó el título segundo referido los ciudadanos planteándose los problemas relativos al principio de igualdad, la ciudadanía, y la representación. Existió un acuerdo general con respecto a la declaración de confesionalidad.

Respecto al capítulo tercero referido al gobierno se realizaron importantes cambios para llegar al texto definitivo del proyecto.

Los artículos inicialmente fueron redactados Portocarrero y Pérez de Castro con una orientación claramente liberal tomando como base el principio de división de poderes según Montesquieu concluyendo que el gobierno de la nación española correspondería una monarquía moderada hereditaria. Con respecto al poder legislativo se reconocía la titularidad de la función de las cortes con el Rey. Con respecto al poder ejecutivo se entendió que los tratados de guerra y paz se debía exigir el acuerdo previo de las Cortes.

Cuando se revisaron los 240 primeros artículos se requirió a los miembros de la comisión para que los suscribieran y se negó a hacerlo José Pablo Valiente diputado suplente por Sevilla. Este Diputado había sido Ministro del Supremo Consejo de España e indias y había llegado a presidir las juntas americanas para la elección de diputados. Se opuso al sistema de elección popular en América y se negó a firmar el proyecto de constitución alegando su oposición a la abolición de los señoríos.

Tras la lectura se ordenó la publicación del proyecto comenzando el debate del articulado el 25 de agosto de 1811. En las últimas sesiones se revisaron los artículos sobre la Administración de Justicia. El 23 de diciembre de 1811 la Comisión de Constitución se ocuparía de redactar de nuevo algunos de los artículos devueltos por el Pleno.

Debemos señalar por ultimo todo una serie de disposiciones que se aprobaron en aquella época entre las cuales destacan el Decreto que proclamaba la igualdad de Derechos entre los españoles y los americanos (15 de octubre de 1810); el que decretaba la libertad de imprenta (10 de noviembre de 1810) y el que incorporaba los señoríos a la nación, que se aprobó el 6 de agosto de 1811. Las Cortes aprobarían otros importantes Decretos como el que abolía la tortura en los procesos judiciales y el comercio de esclavos; el que establecía la libertad de industria, comercio y trabajo; el que iniciaba la desamortización eclesiástica y ordenaba parcelar los bienes de propios, realengos y valdios, el que suprimía el llamado “voto de Santiago” y el que abolía el Tribunal de la Inquisición.

2. 4 Los Constituyentes de Cádiz

Si en diferentes ocasiones hemos aludido a los diputados conviene ahora fijar nuestra consideración en este elemento personal que fue el verdadero protagonista de la realización de las Cortes de Cádiz.

No hay no hay seguridad sobre número de diputados que actuaron a lo largo del tiempo de elaboración de las Cortes de Cádiz. Se sabe que en el momento en que se instalan las Cortes las actas señalado número 300 diputados, 56 propietarios y 46 suplentes. Por otra parte se sabe que el acto de la firma de la Constitución, el 18 de marzo de 1812, realizaron esta firma 184 diputados y en la sesión de clausura de las cortes acudieron 223 diputados.

Más importante es la condición de estos diputados. Melchor Fernández Almagro²⁷⁷ nos da la siguiente lista: eclesiásticos, 97; nobles, ocho; militares, 37; catedráticos, 16; abogados, 60; funcionarios, 55; propietarios, 15; marinos, nueve; comerciantes, cinco; escritores, cuatro; médicos, dos, lo que hace un total de 308 diputados. Más o menos esta es la lista que proporciona también Ramón Solís²⁷⁸ para quien el número más alto es el eclesiástico con 90, le siguen los abogados con 56 ;funcionarios con 59 y militares con 30.

Otra cuestión de interés corresponde a la participación por estamentos. Llama la atención el peso específico del estamento religioso. Pues sin duda el estamento mas numeroso pero no fue uniforme en términos políticos. Jose María García León recuerda que hubo destacados liberales como Muñoz Torrero, Manuel Luján, Espiga y Gadea pero también significados absolutistas como Inguanzo y Rivero, Blas de Ostolaza y realistas más moderados como Cañedo y Vigil y Rodríguez de la Bárcena.

El primero en hablar de la necesidad de una Constitución fue precisamente Antonio Oliveros, diputado por la Provincia de Extremadura, Canónico de la Colegiata de San Isidro de Madrid. Este diputado junto con Espiga y Gadea y Muñoz Torrero propuso la realización de una Constitución, y formaría parte de la Comisión que se creo para elaborar un Proyecto de Constitución Política de la monarquía. Según el Conde de Toreno era un varón ilustrado, tolerante, de bella y candorosa condición.²⁷⁹

La mayoría de los religiosos que forman parte de las Cortes de Cádiz eran canónigos, siete de ellos eran Obispos entre otros los

²⁷⁷ Fernández Almagro, Melchor: *las Cortes del siglo XIX y la práctica electoral*, Revista de Estudios Políticos, Madrid, 5,943. Pg. 82.

²⁷⁸ Solís, Ramón: *El Cádiz las Cortes*, Madrid, 1958, pg.250.

²⁷⁹ García León, José María. *los Diputados Socialistas*, volumen dos, pg 316

obispos de Barcelona, de Mallorca, de Ibiza, de Sigüenza, de Plasencia, y que Calahorra. Algunos de ellos son Catedráticos como Ramón Lázaro Dou, que es Catedrático de Decretales; Antonio Joaquín Pérez y Martínez Robles que es Catedrático de Filosofía y Teología; Diego Muñoz Torrero que es Catedrático de Filosofía; Pedro Inganzo Rivero que es Catedrático de Derecho Canónico, Martiniano Juan de la Torre que es Catedrático de Teología y Joaquín Lorenzo de Villanueva y Astengo que es Catedrático de Teología. Hay algún Inquisidor como Matías Gómez Ibar-Navarro y Pedro María Riesco.

Si el estamento religioso copó casi una tercera parte de los del total de los diputados de Cádiz la nobleza no estuvo realmente muy representada. No llegaron a 30 las personas que aparecen con una catalogación nobiliaria de ellos unos 10 Marqueses; 4 Condes; 3 Barones y unos 12 miembros de la nobleza menor local. La nobleza más alta probablemente quedaría ajena a este proceso o vinculada al Rey José I que incorporó a su Corte a muchos títulos.

Destaca así mismo la presencia de representantes del ejército, estamento militar que gozaba de una serie de privilegios y exenciones. Encontramos varios Mariscales de campo como Francisco Ramón Eguía y López de Letona, Gregorio Laguna y Calderón de la Barca, Antonio Samper y Samper. Varios Generales, Coroneles, Comandantes, Capitanes y Tenientes.

Con respecto a las profesiones de los que formarían el tercer estado la más amplia de todas es la de los funcionarios. Encontramos Abogados de los Reales Consejos; Abogados de la Real Audiencia, Consejeros de Hacienda; Consejeros de Guerra de Castilla; Consejeros Reales y de la Cámara de Castilla; Cuerpo Diplomático; Fiscales de la Audiencia; y Magistrados de la Audiencia; Oficiales de Secretaría; Oidores de la Audiencia, etc.

Un grupo importante está formado por Catedráticos, varios son Catedráticos de Derecho Civil, concretamente Francisco Javier Borrull y Villanova; Vicente Morales Duárez. Otros son Catedráticos de Jurisprudencia, Derecho, Prima de Cánones Decretales, Derecho Canónico. Hay un Catedrático de Arquitectura, Joaquín Martínez y un Catedrático de Filosofía, este fue uno de los hombres más ilustres de las Cortes de Cádiz, José Mejía Lequerica. Un historiador Antonio Capmany y Montpalau; un economista Antonio Porcel, ex Secretario de Indias; un Geógrafo Isidoro de Antillón y Marzo.

Hay una larga lista de abogados entre 20 y 40 y también una amplia referencia de cargos institucionales locales que ocupa sobre todo el cargo de regidor y en algún caso de alcalde. Encontramos cerca de una decena de comerciantes y ocho hacendados, un hilo industrial y un número no muy grande de diputados con profesiones desconocidas.

A esta referencia personal dedicaremos un Apéndice destacando las figuras más relevantes vinculadas a sus posiciones ideológicas y políticas.

2.5 El legado filosófico, jurídico y político de los Constituyentes de Cádiz.

El legado filosófico, jurídico y político estará presente en la Constitución de Cádiz de 1812 desde muy diversas posiciones siendo la más complaciente con el pasado la que pretende extraer de el derecho histórico los principios y las instituciones que pretenden establecer.

A esto se le ha venido llamado el ideal restaurador de las Cortes de Cádiz y esta idea aparece claramente desarrollada en el discurso preliminar cuando manifiesta que lo que se ofrece por la

Comisión en su proyecto ya se haya del modo más auténtico y solemne en los diferentes cuerpos de la legislación española.

Son las antiguas leyes fundamentales de la monarquía las que contienen los grandes principios que se definen por los constituyentes de Cádiz entre cuyos principios sobresalen el principio de la soberanía nacional del que se dice que estaba reconocido “del modo más auténtico y solemne” en el Fuero Juzgo.

El historicismo nacionalista jugará un papel importante a través de la recepción que los grandes constituyentes de Cádiz han recibido de las aportaciones en el campo de la historia jurídica y política entre otros de Macanaz, Aso de Manuel, Sempere y Guarín, Burriel, Jovellanos y sobretodo de Martínez Marina.

Una segunda parte de constituyentes de Cádiz son herederos del pensamiento de la Ilustración y seguidores del ideario ilustrado que en gran medida han plasmado los grandes pensadores políticos españoles y reformadores como Feijó, Macanaz, Campomanes, Aranda, Floridablanca y el propio Jovellanos. Estos diputados ya no piensan convertir al monarca en el eje de sus reformas sino legitimar en la nación un nuevo entramado político. Son liberales en sus grandes posicionamientos, en la proclamación de la libertad de imprenta e industria, en la disolución de los gremios, en la abolición de la Inquisición, en la extinción de los Señoríos y tienen una dimensión moral.

Sus premisas la defensa de la Constitución y la soberanía nacional ya venían siendo planteadas por muy diferentes autores como Foronda, Cabarrus, Arroyal, Cañuelo, Quintana e Ibáñez de la Rentería, y es por ello por lo que se habla de un liberalismo predoceañista, es decir, de unas corrientes de pensamiento liberal en España que llegaría hasta los diputados realistas en las cortes de Cádiz.

Ilustrados y liberales comparten la creencia de un orden natural puramente inmanente como supremo regulador e inspirador de la legislación positiva, el sustrato racionalista, apriorístico y abstracto y la dimensión utópica a la hora de concebir la acción del derecho y del Estado sobre el hombre y la sociedad.

Esta dimensión moral aparece claramente en varios artículos de la Constitución de Cádiz reflejando el espíritu ilustrado del liberalismo de los constituyentes en artículos como el 4º en el que se señala “la nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabías y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen”; el artículo sexto que manifiesta “ el amor a la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles, y asimismo el ser justos y benéficos”; el artículo séptimo que manifiesta que “todo español está obligado a ser fiel a la constitución, obedecer las leyes y respetar las autoridades establecidas”; y el artículo décimo tercero según el cual se manifiesta que “el objeto del gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otra que el bienestar de los individuos de la compone”.

Queda asimismo manifiesto el espíritu de los liberales de Cádiz cuando ponen su confianza al desarrollar el artículo 9º de la Constitución en la instrucción pública entendiendo que la cultura y la educación son los mecanismos de regeneración moral y asimismo elementos del progreso social, económico y político. Todo ello permite entender que la teoría constitucional de los liberales de Cádiz respondía a una mezcla de influencias doctrinales, y por ello las ideas propiamente liberales quedaban atenuadas y contrarrestadas por otras que procedían de unas corrientes de pensamiento distintas del liberalismo.

En todo caso es innegable que, ni las similitudes que tuviera la obra de los legisladores de Cádiz con el reformismo ilustrado, ni las

apelaciones que en muchos casos se hace a la tradición nacional llegaron a impedir que la teoría constitucional que mantuvieron y plasmaron los liberales de las Cortes de Cádiz presentaron un matiz o un carácter indudablemente revolucionario y un claro entronque con el liberalismo europeo de la época.

Ello no impide que el tradicionalismo obtuviera todavía algunas victorias como la ausencia de una declaración de derechos ordenada y sistemática o la intolerancia religiosa que se consagra en la Constitución pero queda claro que la constitución se inspiró en los principios filosóficos y políticos y en los principios del constitucionalismo europeo y en concreto en el dogma de la soberanía nacional, en la teoría de la división de poderes y en el reconocimiento de la igualdad jurídica y de la libertad personal.

2.5.1 El pensamiento político clásico en los constituyentes de Cádiz

Parece generalizada la opinión que la influencia más importante en los constituyentes de Cádiz es la que deviene de la influencia inglesa o francesa vinculada a los orígenes del liberalismo y a la Ilustración pero evidentemente el pensamiento político que asumen los constituyentes de Cádiz están vinculados a la historia del pensamiento político español y a la llamada escuela de Salamanca como núcleo difusor de las ideas tardeoeclesiásticas que enseñaron Francisco de Vitoria y sus discípulos y sucesores como Soto, Azpilcueta, Vázquez de Menchaca, Covarrubias, Láinez, Molina, Suárez y una larga lista de juristas y filósofos seguidores de aquel pensamiento.²⁸⁰

La idea básica se vincula con el Iusnaturalismo que se fundamenta en la creencia en un orden natural que debe inspirar todo el actuar humano lo que supone la posibilidad de determinar unas

²⁸⁰ Negro, Dalmacio: *El liberalismo en España*, Madrid 1984 pg 25 iss

leyes universales que rigen las acciones humanas. Estas normas fundamentarían un orden político natural en el que la autoridad descansa democráticamente en el pueblo. Esta teoría política tiene su fundamento en la doctrina aristotélica según la cual “son las leyes bien establecidas las que deben tener la soberanía”²⁸¹.

La doctrina aristotélica sería recogida por Tomás de Aquino por su *Summa Theológica* en donde expone que “El consentimiento de todo el pueblo, expresado por una costumbre, vale más en lo que toca a la práctica de una cosa que la autoridad del soberano, que tiene facultad de dictar leyes solo en cuanto representante de la multitud. Por eso aunque las personas particulares no pueden instituir leyes, la totalidad del pueblo sí puede instituir las”²⁸²

Las leyes para Aristóteles deben orientarse hacia un fin común para la sociedad pues como manifiesta asimismo en la *Summa Theológica* “toda ley se ordena al bien común de los hombres, y de esta ordenación recibe su fuerza y su carácter de verdadera ley; en la medida en que se aparta de esta finalidad, pierde su fuerza obligatoria”.²⁸³

Es sobre esta base sobre la que Santo Tomás de Aquino asume que el Príncipe recibe la fundamentación de su poder por traspaso de aquella legalidad y que en su actuación ha de quedar sujeto al respeto de la ley. “Por eso, ante el juicio de Dios, el príncipe no está exento de la ley por lo que toca a su fuerza directiva, y debe cumplirla voluntariamente, no por coacción”²⁸⁴

La doctrina de Santo Tomás aparece recogida en la obra de Francisco de Vitoria y consecuentemente su reflexión sobre la autoridad, el poder y la ley que serían recogidas en sus lecciones y

²⁸¹ Aristóteles *Política libro 3 capítulo 11*

²⁸² Tomás de Aquino *Summa Theológica* 1-2 Q. 96 a.3

²⁸³ Tomás de Aquino *Summa Theologica*, I-II, q. 96, a.6

²⁸⁴ Tomás de Aquino *Summa Theologica*, I-II, q. 96, a. 5

reelecciones, así suele ser referida la defensa del Absolutismo del Derecho Divino que realiza en una reelección univesitaria de 1598 en defensa de la Monarquía Católica del Emperador Carlos V.

En su escrito “*De Potestate Civili*” Francisco de Vitoria pone de manifiesto el carácter natural del poder que se fundamenta en una condición innata que brota de la naturaleza: “Queda claro, por consiguiente, que el origen de las ciudades y de las repúblicas no es una invención de los hombres, y que no hay que considerarlo algo artificial, sino como algo que brota de la naturaleza que sugirió este modo de vida a los mortales para su defensa y conservación. De este mismo capítulo se infiere enseguida que los poderes públicos tienen ese mismo fin y esa misma necesidad. Pues, si las comunidades y sociedades de los hombres son necesarias para la salvaguarda de los mortales, ninguna sociedad puede tener consistencia sin una fuerza o poder que la gobierne y la proteja”.

Consecuentemente ha de aceptarse un poder o fuerza ordenada que organice todos y cada uno de los miembros para la utilidad final. Y concluye que la causa final y principalísima del poder civil y secular es la utilidad.²⁸⁵

²⁸⁵ En efecto, la utilidad y finalidad del poder público y de la sociedad o comunidad son una misma cosa. Pues, si todos fueran iguales y ninguno estuviera sometido a la potestad de otro y dejándose llevar cada uno de su propia opinión y su albedrío a cosas diversas, necesariamente se disgregaría la república, y se aniquilaría la ciudad si no hubiera alguien que se preocupase de mirar por el bien común. Todo reino en sí dividido, será desolado; y donde no hay uno que gobierne se disolverá el pueblo, como dice el Sabio. Del mismo modo que el cuerpo humano no puede conservarse en su integridad si no hay una fuerza ordenada que organice todos y cada uno de los miembros para la utilidad de los demás, y sobre todo para el provecho de todo el hombre, eso ocurriría, sin lugar a duda, también en la ciudad si cada uno se preocupase sólo de su propio provecho y se despreocupase del bien público. Por consiguiente, tenemos como causa final y principalísima del poder civil y secular la utilidad, o más bien una gran necesidad a la que nadie puede oponerse, a no ser los dioses. Francisco de Vitoria *De potestate civili* p.5

Justifica que el poder reside en la misma República por Derecho Natural y Divino y que tiene su propia justificación secular y democrática de origen divino. “Por consiguiente, la república tiene este poder por institución divina. Y la causa material en la que reside tal poder por derecho natural y divino, es la misma república, a la que de suyo le compete gobernarse y administrarse así misma y dirigir todos sus poderes al bien común. Y esto se prueba del siguiente modo: porque, habiendo por derecho natural y divino un poder de gobernar la república y como, una vez eliminado el derecho positivo y humano común, no haya mayor razón para que aquel poder esté más en uno que en otro, la comunidad misma necesariamente será suficiente para sí misma y tendrá el poder de gobernarse”.²⁸⁶

Este argumento lo refuerza al pronunciarse contra quienes admiten que el poder de la república es de derecho divino pero no de la regia majestad, argumentándolo del siguiente modo porque, si los hombres o la república no tuvieran poder recibido de Dios, sino que se pusieran todos de acuerdo por un pacto y quisieran constituir un poder sobre ellos mismos, por el bien público, ese poder vendría ciertamente de los hombres, como el que los religiosos otorgan a su abad. Pero no es así, pues en la república, incluso contra la potestad de todos los ciudadanos, se constituye una potestad para administrarse a sí misma y para desempeñar ese cargo están constituidos los soberanos civiles.²⁸⁷

Francisco de Vitoria se manifiesta como claro defensor del absolutismo de Derecho Divino al proponer que la monarquía o potestad regia no sólo es justa y legítima, sino que los reyes tienen poder por derecho divino y natural y no recibido de la república, ni en modo alguno de los hombres. “Esto se prueba porque, teniendo la república potestad sobre las partes de la república y no pudiendo ser

²⁸⁶ Francisco de Vitoria *De potestate civili* p.7

²⁸⁷ Francisco de Vitoria *De potestate civili* p.8

ejercida por la multitud de los que la constituyen, puesto que la multitud no podría dictar leyes cómodamente, ni dar edictos, ni dirigir pleitos, ni castigar a los transgresores, fue necesario que se encomendara la administración de ese poder a alguno o algunos que se dedicaran a eso”.

Es a la Republica a la que compete administrarse a sí misma y dirigir todos sus poderes al bien común “Y esto se prueba del siguiente modo: porque, habiendo por derecho natural y divino un poder de gobernar la república y como, una vez eliminado el derecho positivo y humano común, no haya mayor razón para que aquel poder esté más en uno que en otro, la comunidad misma necesariamente será suficiente para sí misma y tendrá el poder de gobernarse”.

La Escuela de Salamanca entre ellos Martín de Azpilcueta, Domingo de Soto, Diego de Covarrubias o Fernando Vázquez de Menchaca mantienen en gran medida la doctrina de Francisco de Vitoria en alguna manera más avanzada por Juan Roa Dávila, quién había cursado leyes en la Universidad de Salamanca, para ingresar y luego abandonar la Compañía de Jesús estableciendo finalmente su residencia en Roma.

El carácter polémico de sus obras provocó los recelos de la Inquisición lo que le obligo a establecer su residencia en Roma donde murió hacia 1630. Roa Dávila²⁸⁸ señalará que es la comunidad política la titular del poder, en virtud de la libertad humana y la concesión divina...Así la libertad política aparece com un derecho natural del hombre que se proyecta a la comunidad. La titularidad del poder que reside de forma originaria y exclusiva en Dios, se trasmite al pueblo como órgano inmediato d ela posted pública... La potestad política no reside en ningún indiviuo o grupo social, sino que se haya en el conjunto de todos aquellos que coponen la sociedad.

²⁸⁸ Roa Dávila, J: *De regnorum iustitia*, Madrid, CSIC pg 3y9

Textualmente en su Tratado *De regnorum iustitia* (1951) mantiene que el pueblo, territorio o nación, que da su consentimiento a un jefe o rey, o incluso a su sucesores, al alegirlos como a sus propios generales y a tenor de las condiciones del consentimiento , les confiere el poder de soberanía, libremente acordado y estable..Los pueblos pueden cambiar sus gobenante, cualquiera que haya sido el sistema de designación, cuando se presentan nuevos motivos justificados".

A la Escuela de Salamanca sucede la nueva escuela Jesuística en los inicios del siglo XVII de entre la que consideraremos los planteamientos realizados por Francisco Suarez y Juan de Mariana.

2.5.2 El pensamiento filosófico y político de la Ilustración Española y su influencia en los Constituyentes de Cádiz.

Como ya señalamos en el capítulo primero, la cosmovisión del mundo barroco eclosiona ante una nueva mentalidad que se desarrolla lo largo del siglo XVIII y que se articula bajo el nombre de Ilustración. La Ilustración se fundamenta en el espíritu crítico que rompe con el principio autoridad, el predominio de la razón y en la experiencia.

Esta época se define en la historia de las ideas como el “Siglo de las Luces” o “el Siglo de la Razón”, siendo su característica más relevante la búsqueda de la felicidad humana a través de la cultura y el progreso. Se pensaba que a través del juicio de la razón podría llegarse a un progreso ilimitado fundamentado no solo en logros técnicos sino en valores morales. El conocimiento que procede de la experiencia y de la observación, guiadas por la razón, podría cambiar a los seres humanos en suma, mejorar la humanidad y conseguir la felicidad.

El marco histórico en que se efectúa este proceso en España corresponde al reinado de Carlos III que marca el comienzo y el desarrollo de una corriente proliberal pero nos menos cierto que éste se encuentra en manos de una minoría ilustrada. Carlos III es el

prototipo del Monarca ilustrado y cuenta con la asistencia de importantes ministros como Floridablanca, Campomanes, Aranda, Grimaldi y el marqués de Esquilache.

Las ideas ilustradas entrarían en España a través de numerosas vías entre las cuales destacamos la difusión de las ideas de algunos ilustrados como Gregorio Mayans, Martín Sarmiento y Benito Jerónimo Feijoo. La propagación de las ideas enciclopedistas francesas (Rousseau, Voltaire, Montesquieu), pese a la censura de la época para evitar su introducción en la Península y la vigilancia de la Inquisición; las traducciones de libros franceses de todos los géneros y la contratación de profesores extranjeros o eruditos en determinadas materias.

A estas vías de penetración de la Ilustración en España habría de añadirse la creación de una serie de instituciones culturales y de *Sociedades Económicas de Amigos del País* destinadas a promover el progreso social y económico de España mediante la reforma de las prácticas tradicionales.

Surgidas en los círculos culturales como organismos no estatales, las Sociedades Económicas de Amigos del País tuvieron como fin promover el desarrollo de España, estudiando la situación económica de cada una de las provincias y buscando soluciones a los problemas que hubiera. Estas Sociedades se encargaron de impulsar la agricultura, el comercio y la industria, y de traducir y publicar las obras extranjeras que apoyaban las ideas de la fisiocracia y el liberalismo.

Las Sociedades Económicas de Amigos del País contaban con licencia real para constituirse y reunirse, y en su fundación intervinieron los sectores más dinámicos de la sociedad: importantes figuras de la nobleza y numerosos cargos públicos, de la Iglesia, del mundo de los negocios y los artesanos.

La primera de las sociedades se fundó en el País Vasco en 1765, y pronto se difundieron por toda la nación. Estaba constituida por ilustrados procedentes de la aristocracia, la burguesía y el clero.

En este siglo se crearon organismos de gran importancia, como la *Real Academia Española*, fundada para ocuparse de la lengua española y su literatura cuyo primer esfuerzo se destinó a la elaboración de un *Diccionario de la lengua castellana*. Otras instituciones que surgieron en aquella época fueron la *Biblioteca Nacional* (1712), la *Real Academia de la Historia* (1738), el *Real Jardín Botánico* (1755), la *Real Academia de Bellas Artes de Fernando* (1751), la *Real Academia de Buenas Letras* de Barcelona (1752) y el *Museo del Prado* (1785).

No debemos olvidar por último los viajes de estudio y el conocimiento de las costumbres europeas realizados por los intelectuales españoles y la aparición de periódicos o publicaciones donde las ideas ilustradas se difundían. Ello estará presente en nuestra exposición sobretodo en la incidencia que algunas de estas publicaciones directamente tuvieron sobre los constituyentes de Cádiz, como sería el *Semanario Patriótico* fundado por Manuel José Quintana en 1808.

Este diario sería editado por él mismo Quintana en su primera etapa madrileña con la intención de difundir en la España patriótica las nuevas ideas democráticas de la monarquía constitucional y alentar la convocatoria de las Cortes Constituyentes que se reunirían en las Isla de León y después en Cádiz en 1810. Quintana encargaría la edición de la segunda etapa del *Semanario*- la sevillana- a José María Blanco White, para abordar los asuntos políticos, y a Isidoro Antillón, para la descripción de la campaña del ejército patriótico contra Napoleón. La parte Política del *Semanario*, redactado por Blanco White, constituye la primera exposición periodística de las ideas liberales publicada en España.

Los ilustrados pese a contar en muchas ocasiones con el apoyo de la corona, no tuvieron el reconocimiento de los grupos privilegiados y muchos de ellos fueron calificados como extranjerizantes y acusados de atentar contra la tradición y la enseñanza religiosa.

Entre los ilustrados cabe destacar la figura de Gaspar Melchor de Jovellanos nombrado por Manuel Godoy Ministro de Gracia y Justicia y más tarde Consejero de Estado. De su peso específico en las ideas de Cádiz trataremos más detenidamente recordando tan solo en este momento que uno de sus escritos más difundidos fue el *Informe en el Expediente de la Ley Agraria* (1725), redactado por la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, desde la perspectiva del liberalismo económico.

Recordemos también la figura de Juan Meléndez Valdés, Catedrático en Salamanca quien mantuvo amistad con Cadalso y Jovellanos, desempeñando como jurista destinos en Zaragoza, Valladolid y finalmente Madrid donde actuó como Fiscal del Supremo.

Caído en desgracia Jovellanos, Melendez Valdés sería desterrado a Medina del Campo luego a Zamora y por último a Salamanca Tras la ocupación francesa, se pone al servicio de José I de España, ocupando puestos en el Consejo de Estado y la condecoración como Caballero de la Orden Real de España, lo que le acarrearía graves problemas como afrancesado a la salida del rey tras la Guerra de la Independencia

Meléndez Valdés se constituye prototipo de los afrancesados, ideológicamente herederos de la tradición ilustrada que asumió las medidas reformistas y en alguna medida se convirtieron en colaboradores de José I, aceptando el nuevo régimen y jurando fidelidad al nuevo monarca.

Los afrancesados defendieron medidas económicas innovadoras y claramente reformistas como la supresión de las aduanas interiores, la abolición del sistema señorial de los mayorazgos y los privilegios de la nobleza y Clero. Entre estos personajes se encuentran Azanza, O’Farril, Cabarrús, Urquijo, y Leandro Fernández de Moratín y entre los escritos en donde aparece su ideología y su actuación política se encuentran las siguientes obras: “la Representación” de Amorós²⁸⁹, escrito representativo del sector intelectual del afrancesamiento, la “Defensa política y canónica” de Llorente²⁹⁰, escrito representativo del afrancesamiento de los eclesiásticos el “Manifiesto” de O’Farril y Azanza²⁹¹, escrito representativo de los políticos y gobernantes el “Examen de los delitos de infidelidad a la Patria” de Reinoso, escrito representativo de la ideología afrancesada, así como algunas publicaciones y textos de Uriarte, Lista, Moratín y otros.

Los afrancesados tratarían de imponer pacíficamente en España las nuevas reformas políticas y sociales sin los peligros del desbordamiento revolucionario y la anarquía; de evitar la irremediable postración interna que la Guerra de Independencia produjo en España, y de alejar el peligro de desmembración territorial de España y de emancipación de las Américas.

Los afrancesados tratarán de construir un sistema constitucional sobre bases moderadas de cartas otorgadas y manifestarán su posición y temor a los avances de la Soberanía Popular. Se apoyan en las renunciaciones de Bayona para entender que es más sensato aceptar una monarquía constitucional, la de José I, que la anarquía, la de la España que lucha contra la invasión francesa, y justifican su conducta

²⁸⁹ Representación del consejero de Estado D... defendiendo la política que ha tenido. París, 1814.

²⁹⁰ Defensa canónica y política de D... contra injusticias acusaciones de fingidos crímenes. París, 1812.

²⁹¹ Memoria de los hechos que justifican su conducta política. París, 1815.

exponiendo sus temores ante la actuación de las juntas provinciales en las que quieren ver comités revolucionarios populares.

Los afrancesados apoyan también su actuación al observar que estos acontecimientos se producen cerca de los excesos demagógicos de la Revolución Francesa mirando con comprensión los avances políticos del pueblo pero preocupados por lo que entienden que conduce a la anarquía y atacan a las Cortes de Cádiz y al liberalismo que la ilumina. Exponen su concepción política doctrinaria y aunque realmente son hijos espirituales de Francia, como lo son los liberales, ambos profesan ideologías políticas contrapuestas. Los afrancesados serán portadores de la ideología moderada doctrinaria hacia la que evoluciona el régimen político francés tras la revolución y bajo Napoleón y los liberales de Cádiz la ideología democrática de la soberanía Nacional que apoyarán en toda su integridad.

Los afrancesados en el fondo preferirán el despotismo ilustrado y frenarán la causa popular mientras que los liberales serán decididamente patriotas y exaltados, reivindicadores de la soberanía popular, amigos de las reformas radicales y entusiastas de la libertad²⁹².

2.5.3. *El pensamiento de Francisco Martínez Marina*

Sin duda una de las obras más relevantes de aquel tiempo fue la de Francisco Martínez Marina publicada precisamente en 1808 bajo el título “*Ensayo histórico-crítico sobre la legislación y principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla especialmente sobre el Código de las Siete Partidas de don Alonso el Sabio*”.

Jovellanos leyó con admiración el Ensayo histórico-crítico de Martínez Marina, obra que en muchas ocasiones habría de elogiar y recomendar, intentando incluso que el propio Martínez Marina se incorporará a la Junta Central en calidad de asesor.

²⁹² Viñas-Mei, Carmelo. Nuevos datos para la Historia de los afrancesados.

Nacido en 1754 en Corrada del Obispo, Oviedo, Francisco Javier Martínez Marina ingresaría en la Universidad de esta ciudad en 1769 para estudiar Filosofía, obteniendo después el Bachillerato en Artes y comenzando el estudio de Teología que proseguirá en la Universidad de Toledo pasando a la de Alcalá de Henares donde sería nombrado Rector en 1778. Carlos III lo nombra Capellán Real. Martínez Marina sería considerado liberal y progresista.

Martínez Marina sería bibliotecario del Colegio de San Ildefonso de Alcalá de Henares. El Consejo de Castilla le confiaría la censura de libros y periódicos, ser juez en oposiciones a cátedras y dar su opinión en diversas materias. En todos sus trabajos manifiesta tener extensos conocimientos en lenguas, historia, derecho, políticos y morales, pero destacará sobre todo por haber sido el primero que intentó desentrañar la formación de los códigos legales españoles.

Su "Ensayo histórico-crítico" se crearía originariamente para servir de prólogo a *Las Partidas* y trataba sobre la historia del derecho castellano hasta la Edad Media y en su *Teoría de las Cortes* ampliaría este camino, trazado ya por Campomanes, defendiendo que los bienes de la nación cayeran en manos muertas, adelantándose al proyecto de desamortización intentado por las Cortes de Cádiz y puesto en práctica después por Mendizábal.

Es importante señalar que el mismo año de 1808, Martínez Marina redactaría una "*Carta sobre la antigua costumbre de convocar a las Cortes de Castilla*", que enviaría a Jovellanos y sería publicada por Blanco White en Londres²⁹³. Aunque la obra es histórica finaliza con las siguientes palabras: "Yo no diré aquí los males y calamidades que se siguieron en el reino de la abolición o menosprecio de las Cortes, y produjo el despotismo. Es necesario correr un velo para

²⁹³ Artola, Gallego M. "*Estudio introductorio a la edición de la Teoría de las Cortes*" de Martínez Marina, 3 vols; Junta General del Principado de Asturias 1996.

ocultar ese horroroso cuadro de nuestro pasado gobierno, y consolarnos con la esperanza de una nueva, justa y permanente organización de la monarquía”

Años después Martínez Marina publicará su famosa obra "Teoría de las Cortes", un tratado en varios volúmenes, escrito entre 1808 y 1813 que constituye el más ambicioso e importante estudio escrito sobre las asambleas políticas representativas en el mundo occidental, y que en el fondo no es otra cosa que una defensa de la Constitución y de las Cortes de Cádiz.

Manifiesta José Antonio Escudero que para entender a Martínez Marina y a su obra conviene tener en cuenta que el derrumbamiento del antiguo régimen con la revolución francesa dio paso en la Europa del siglo XIX a un Estado constitucional que trajo la superación del absolutismo político mediante el control del poder por el pueblo representado en asambleas²⁹⁴.

Convenía que los parlamentos populares constituidos en el siglo XIX por intensas convulsiones revolucionarias, no aparecieron como una novedad radical y, por ello, perturbadora. Resulta oportuno mostrar que esto había sido ya ensayado con mayor o menor éxito en la Edad Media y, por consiguiente, era acorde con las tradiciones jurídicas nacionales. En efecto en algunos casos, la verdadera tradición nacional había consistido precisamente en un sistema de libertades públicas y de control del poder, configurado en los tiempos medievales y que se había desvirtuado luego por el absolutismo regio de los siglos modernos.

Esto es lo que trataría de resaltar Martínez Marina con su “Teoría de las Cortes”, pretendiendo entroncar la asamblea constitucional de Cádiz con las antiguas cortes medievales. Las Cortes

²⁹⁴ Escudero, J.A. “Martínez Marina y la Teoría de las Cortes” en *Teoría de las Cortes. Estudio introductorio*. Junta General del Principado de Asturias. 2002.

alumbradas en Cádiz vendrían así a enlazar, con las que en la Edad Media habrían tenido lugar en estos reinos.

Jovellanos en carta a Lord Holland de 2 de noviembre de 1808 recomienda la obra de Martínez Marina como la mejor fuente de información de cuál ha sido la Constitución histórica de España.

Martínez Marina cuenta el espíritu con el que realiza la Teoría de las Cortes: «Animado con el buen éxito de la anterior empresa y persuadido que todo ciudadano debe sacrificarse por la causa de la patria, extendí un papel, cuyo objeto era demostrar, entre otras cosas, la absoluta necesidad que había de establecer prontamente un gobierno legítimo y constitucional, y que el primer paso debía ser juntar Cortes Generales y reunir la representación nacional para que la nación, cuya era la gloria, el interés y el peligro, tomase de común acuerdo una resolución acertada y medidas convenientes para consolidar el género de gobierno que le pareciese más ventajoso en tan crítica situación, concluyendo que ésta había sido la práctica que en semejantes casos y en otros de menor gravedad se observó constantemente en Castilla, como parece por una continuada serie de hechos y documentos que presento de su historia»

Y añade: «Este escrito anónimo pudo penetrar hasta la Junta Central, donde un sabio individuo de ella procuró dar valor a sus ideas.» El «sabio individuo» al que se refería Martínez Marina era el mismo Jovellanos.

Marina escribiría a Jovellanos que “faltando el monarca, no por eso falta ni deja de existir la nación en la cual permanece como en su centro la autoridad soberana», y que sólo podía fundarse la autoridad en «la nación legítimamente representada... reuniéndose los procuradores... elegidos legalmente y autorizados con poderes suficientes en la Principios naturales de la moral, de la política y de la legislación”.

En el discurso preliminar de la Teoría de las Cortes Martínez Marina reproduce y amplía estas referencias, e incluso reproduce la correspondencia que se cruzó entre él y Jovellanos²⁹⁵. Las cartas de Jovellanos son del 4 y 7 de octubre de 1808. forma que prescriben nuestras leyes...», como «consta de los documentos de nuestra historia y de las actas de aquellos célebres congresos». Y Jovellanos revela su satisfacción «con el sabio extracto que Vmd. ha hecho de nuestras Cortes con respecto al objeto que tanto nos interesa en el día».

La idea de una nación soberana, representada legítimamente por las Cortes como principios e instituciones que constan de «los documentos de nuestra historia y de las actas de aquellos célebres congresos», se abre paso hasta la Junta Central, y es de creer que Jovellanos pasó el extracto de Martínez Marina a la Junta de Legislación.

Con independencia de este señalado cauce personal, la obra de Martínez Marina circuló de mano en mano, se imprimió en Londres por Blanco White y, según parece, se reimprimió en Valencia. La voz de Martínez Marina no era, desde luego, la única, pero sí la que se respaldaba con una impresionante erudición histórica.

Era lógico que el Decreto de la Junta Central de 22 de mayo de 1809 sobre convocatoria de Cortes afirmara que «los desastres que la nación padece han nacido únicamente de haber caído en el olvido aquellas saludables instituciones que en tiempos más felices hicieron la prosperidad y la fuerza del Estado», y que en su parte dispositiva decretara el restablecimiento de «la representación legal y conocida de la monarquía en sus antiguas Cortes», y que definiera entre los objetos prioritarios investigar «los medios de asegurar la observancia de las leyes fundamentales del reino» .

²⁹⁵ Marina, F.M : *Teoría de las Cortes*. Edición preparada por Pérez Prendes. Madrid 1979. Vol. 1. págs. 114-118.

No es, pues, de extrañar que la Comisión iniciara su Discurso preliminar con aquellas célebres palabras: «Nada ofrece la Comisión en su proyecto que no se halle consignado del modo más auténtico y solemne en los diferentes cuerpos de la legislación española», y que lo cerrara creyendo haber «demostrado hasta la evidencia que las bases de este proyecto han sido para nuestros mayores verdades prácticas, axiomas reconocidos y santificados por la costumbre de muchos siglos».

Recientemente Salustiano de Dios se pregunta por el alcance y la dimensión del legado castellano en el diseño de la institución de las Cortes que se venía preparando desde 1808 y acabo plasmándose en la Constitución de 1812 manifestando que las Cortes de Cádiz de ningún modo supone una continuidad de sustancia con las Cortes de Castilla, que prolongaron sus reuniones hasta el siglo XVIII. Las últimas son de 1789, ni cabría hablar con propiedad de que en Cádiz se produce una constitucionalización de las viejas prácticas de las Cortes castellanas, al menos de las que definían sus atribuciones, pero es que tampoco cabe mantener siquiera ideas de mixtura o mestizaje entre unas y otras²⁹⁶.

En su especializado estudio este autor manifiesta que las Cortes de Cádiz son muy distintas a las de Castilla y que esto hay que dejarlo sentado de antemano. Con el anuncio de la reunión de las Cortes de Cádiz, ciertamente acaba la historia de la institución de las Cortes de Castilla y comienza una nueva historia, la de las Cortes Constitucionales de España, por mucho que se llamen Cortes unas y otras. Sin embargo hay una iniciativa que recoge, el proyecto constitucional de León de Arroyal de 1794 en el que aparecen mezcolanzas de tipo liberal, como su afirmación de que en las Cortes

²⁹⁶ Salustiano de Dios “*El legado castellano en las Cortes de Cádiz*” en *Cortes y Constitución de Cádiz 200 años*. Vol 1. Págs. 485 a 516.

reside la soberanía nacional, con otras afirmaciones ilustradas y aún de simbología absolutista.

En efecto León de Arroyal es el primer escritor del siglo XVIII en pedir, e incluso esbozar una Constitución para España, y uno de los más radicales en esa petición en sus *Cartas político-económicas al Conde de Lerena*, por entonces Ministro de Hacienda, que se redactaron en un periodo de diez años hasta 1795, que es la fecha de la última²⁹⁷.

Esta obra consta de dos partes. La primera dirigida a Lerena está formada por cinco cartas, y contiene un análisis político, histórico, social y económico de la decadencia de España, y una propuesta de reforma “El pueblo verá con gusto la disminución de un poder que regularmente se funda en su opresión y en su debilidad. Las grandes riquezas de los particulares siempre son despojos del común. La naturaleza ama la igualdad y los hombres vemos con complacencia la humillación del que está en mayor altura o prosperidad que nosotros. La soberbia y la altanería, compañeras casi inseparables del dinero, hacen odioso a aquel que le posee, y nos le representan como un usurpador de aquellos que juzgamos deberíamos nosotros poseer. Carta IV”.

En la segunda parte se esboza un proyecto de Constitución. Esta parte está formada por siete cartas más y está dirigida a Francisco de Saavedra, siguiente ministro de Hacienda, permanecieron inéditas y anónimas, siendo atribuidas a Francisco Cabarrús, Campomanes, o el propio Jovellanos.

En estas cartas se ataca el consuetudinarismo legal español antiguo que anquilosa e impide cualquier progreso y defiende una reforma legislativa radical "feliz revolución" y la creación de una

²⁹⁷ Pallarés Moreno, José: *León de Arroyal o La aventura intelectual de un ilustrado*. Granada: Universidad de Granada. 1993.

constitución que con el poder de las leyes límite el poder del rey y fomenta la igualdad y la libertad económica dándose el paso desde la petición de libertades económicas a la petición de libertades políticas en forma de una Constitución.

Una Constitución que se funde en la ley natural del pacto social. Esta Constitución debe hacer una reforma radical en la estructura religiosa y el sistema judicial, eliminar los privilegios de la nobleza y racionalizar la distribución del territorio. La Monarquía constitucional es el modelo que propone en las tres últimas cartas: la soberanía debe residir en la nación y el monarca actúa como su primer magistrado, quedando sometido al poder judicial, pues la constitución debe consagrar la división de poderes propuesta por Montesquieu.

En síntesis parece evidente que el libro de Martínez Marina tenía un gran valor pragmático e instrumental, el que no está con historia de las Cortes de Castilla la necesidad de una pronta convocatoria de cortes, pues si los anteriores será perceptiva la reunión de Cortes para resolver los problemas algo cetrino, ninguna ocasión podría estimarse más propicia que la que entonces vivía España para una inmediata convocatoria.

Por tanto Martínez Marina con sus interesadas versiones históricas castellanas medievales impulsaría a Jovellanos para la realización de este objetivo que sería la convocatoria de Cortes, encontrando entre sus resonancias el respeto que tiene a la vieja composición de las Cortes de Castilla, asignándole un cupo para los diputados de las ciudades que estuvieron representadas en las Cortes de 1789.

2.5.4 Jovellanos y la Memoria en defensa de la Junta Central (1810)

El 1 de septiembre de 1808 la Junta General del Principado de Asturias eligió a Gaspar Melchor de Jovellanos como su representante

en la Junta que debía asumir el poder unificado de las Provincias levantadas contra la invasión napoleónica.

Jovellanos era ya en 1808 una figura respetada y admirada, no sólo como prototipo de la Ilustración sino por su integridad. Nacido en el seno de una familia noble de Gijón, aunque sin fortuna, su familia decide destinarle al servicio de la iglesia. En 1757 con 13 años recibe la primera tonsura de manos del Obispo de Oviedo y en 1760 bajo la protección del obispo asturiano de Avila parte hacia esta ciudad, sede de las universidades sostenidas por la Iglesia para estudiar derecho civil y canónico. Se gradúa como bachiller en Cánones en la Universidad de Osma y obtiene la licenciatura en la Universidad de Ávila en 1763 ocupando después una plaza de Magistrado en la Audiencia de Sevilla como Alcalde del Crimen y Oidor. En 1778 consigue el traslado a la sala de Alcalde de Casa y Corte en Madrid.

Integrado en la vida aristocrática madrileña establece relaciones personales con Campomanes y a través de él con Francisco de Cabarrús financiero ilustrado. La desgracia política de este le obliga a marchar de la Corte desterrado estableciéndose en Gijón en 1790. Godoy impulsado por Francisco de Cabarrús le ofrecerá el puesto de embajador en Rusia que Jovellanos rechaza pero sin embargo acepta el 10 de noviembre de 1787 el puesto de Ministro de Gracia y Justicia en cuyo gobierno estará nueve meses, volviendo después a Asturias.

Para entonces ya pasa a ser considerado un peligroso disidente y se ve envuelto en una complicada situación política como consecuencia de la publicación en Londres de la primera edición castellana del Contrato Social de Rousseau, obra que había sido condenada por la Iglesia. El autor de esta edición era el Abate Marchena que se había pasado al jacobinismo.

El Abate Marchena, llamado en realidad José Marchena y Ruíz de Cueto, era un político liberal y afrancesado, escritor, publicista y traductor que había pasado la mayor parte de su vida exiliado en

Francia para escapar de la Inquisición. Nacido en Utrera en 1768 había ingresado en la Universidad de Salamanca donde conoció a profesores y alumnos de ideas ilustradas como Juan Meléndez Valdés, Ramón de Salas o Diego Muñoz Torrero y donde leyó a los principales filósofos ilustrados.

De Salamanca pasó a Madrid donde escribió la Oda a la Revolución Francesa. En 1792 pasa a Francia primero a Bayona y después a París llamado por el Gobierno revolucionario de los Girondinos. Allí sufrirá la persecución de los Jacobinos con Robespierre y pasará 14 meses en prisión siendo liberado por los Girondinos y colaborando con el Nuevo Régimen de los Termidorianos. Volverá a la cárcel y a la salida parece que colaboró en el golpe del 18 Brumario que llevó al poder a Napoleón en noviembre de 1799, del cual fue cerebro Sieyes.

La actividad intelectual de Marchena abarcaba la economía política, siendo un firme partidario del liberalismo de Adam Smith y la filosofía, siendo gran admirador de Voltaire y del Rousseau. Vuelto a España con el ejército francés como miembro del aparato de propaganda a las órdenes del General Murat, pasará a ser un alto funcionario de la Monarquía de José I Bonaparte en el Ministerio de Interior abandonando el país en 1814.

En su traducción del Contrato Social de Rousseau, Marchena hacía una comprometida comparación entre Jovellanos –Jovino- y el Ministro Urquijo, manifestando que Jovellanos merecía el homenaje de todo buen español y que el Ministro Urquijo debía seguir sus pasos y desplegar su genio e hiciese conocer al Monarca que sus verdaderos intereses eran los del mismo pueblo. Aquello provocó un gran escándalo, favorecido por la difusión de libro y sería objeto de una delación anónima que señalaba a Jovellanos.

Ello causó la detención de Jovellanos el 13 de marzo de 1801 y su destierro a Mallorca, primero a la Cartuja de Valdemosa y después

a la prisión del Castillo de Bellver. Jovellanos sufre entonces problemas de salud y permanece en el destierro hasta el 6 de abril de 1808 gracias al Motín de Aranjuez que supuso la renuncia al trono de Carlos IV y el comienzo del reinado de Fernando VII quien suspendió el arresto que padecía Jovellanos.

Liberado volvió a Madrid donde sus amigos, y entre ellos Cabarrús que se había sumado con vehemencia al partido francés, intentaron contar con él para colaborar con los franceses, recibiendo la proposición de formar parte del Gobierno de José Bonaparte. Jovellanos se negó a aceptar cualquier ministerio.

Paralelamente la Junta del Principado de Asturias le comunicaba la decisión de que fuera su representante en la Junta Central. Jovellanos aceptó este nombramiento realizando un importante trabajo con la ayuda de Francisco Martínez Marina, entendiendo que era imprescindible convocar las Cortes.

Ante la llegada de las tropas francesas, Jovellanos trabajó en el traslado de los Tribunales y de las Instituciones Constitucionales a Sevilla. Desde allí impulsó la reunión de la asamblea dirigiendo la Comisión de Cortes. Pero la entrada de los franceses en Andalucía obligó al Gobierno a dejar Sevilla y refugiarse en Cádiz. La propaganda de los aristócratas que se negaban a la reunión de Cortes provocó la caída de la Junta Central y la restauración de una Regencia, cuyo Reglamento fue redactado de nuevo por Jovellanos y Martín de Garay.

Jovellanos abandonaría Cádiz embarcando rumbo a Asturias. Una tempestad le condujo a Muros el 6 de marzo de 1810 permaneciendo en Galicia varios meses donde escribió la justificación política de su actuación en la Junta Central, “Memoria en Defensa de la Junta Central” que se imprimió en La Coruña.

Los dos últimos años de su vida, desde su vuelta de Cádiz fueron realmente dolorosos. Se encontró viejo y enfermo, calumniado

tanto como la misma Junta Central como por sus enemigos absolutistas del Antiguo Régimen y acorralado por las fuerzas invasoras que de nuevo habían ocupado Asturias. Desde Burgos el 8 de marzo de 1910 testimonia su angustia en una queja amarga a Lord Holland “ni siquiera tengo patria, que tal nombre no quiero dar a una pequeña porción del país, donde ni se defiende con rabia y furor la libertad ni con justicia y gratitud el honor y decoro de los que tanto han trabajado por ella”. Tras la marcha de los franceses de Gijón trataría de volver a Gijón, pero enfermo de pulmonía muere en Puerto de Vega el 27 de noviembre de 1811. Las Cortes reunidas en Cádiz el 24 de enero de 1812, le otorgaron el título de “hijo benemérito de la patria”.

Según Pedro Cerezo Galán, Jovellanos fue el centro de referencia entre los jóvenes liberales, no ya por su enorme prestigio intelectual, sino por su propia experiencia política que le llevó a una actitud de ruptura con el absolutismo monárquico y el despotismo, abogando por una reforma constitucional en Cortes.²⁹⁸ En todo caso Jovellanos sería el mentor de un pequeño grupo de intelectuales entre los que figuran Manuel José Quintana, José María Blanco White, Isidoro de Antillón y Agustín de Argüelles entre otros, quienes trabajaron al amparo de la Junta Central y constituyeron la vanguardia liberal de la Constitución gaditana.

Jovellanos se interesó por el problema de la legitimidad tras los vergonzosos acontecimientos de Bayona y la abdicación forzada de Fernando VII como Rey de España y hubo que justificar la constitución de la Junta Suprema Central que se tuvo que articular de manera confusa y precipitada. En el Dictamen que le fue solicitado se pronunció a favor de la elección de una regencia y la convocatoria a Cortes.

²⁹⁸ Cerezo Galán, Pedro. *El litigio por la soberanía. Jovellanos ante las Cortes de Cádiz*

Jovellanos estaba convencido de que sus poderes en la Junta Central eran interinos. La crisis entre absolutistas y liberales desembocó en la autodisolución de la Junta Central no sin nombrar antes un Consejo de Regencia y redactar el último decreto sobre la celebración de las Cortes. Manuel José Quintana recuerda a este propósito en su Memoria de Cádiz de las Cortes que Jovellanos “solía decir confidencialmente a sus compañeros que la Junta Central, para acabar con honor y seguridad, debía morir en brazos de las Cortes.”²⁹⁹

Jovellanos se consagró enteramente a la Junta Central, diseñó el plan de sus reformas, redactó las instrucciones de las distintas Comisiones y preparo dictámenes y decretos sobre su composición y organización. Todo ello se constata en su correspondencia con Lord Holland.

Sin embargo la postura de Jovellanos no es la misma que la de otros importantes personajes. Para algunos las Cortes tenían que llevar a cabo una ruptura con el Antiguo Régimen mientras que para Jovellanos debían servir para reformar las leyes fundamentales del Reino y posibilitar una monarquía constitucional, moderada, al estilo de la inglesa. Jovellanos era un ilustrado que tenía una visión reformista.

En su “Memoria en defensa de la Junta Central” Gaspar Melchor de Jovellanos trata de justificar su función y la de la Junta Central. Jovellanos pretendía responder en la Memoria a las acusaciones que se habían vertido contra los vocales de la Junta Central en especial por el Consejo reunido y por algunas Juntas Provinciales, como la de Cádiz y Sevilla. Después Jovellanos tratará de justificar su conducta personal en dicho empeño. Las presiones sobre la Junta Central acabaron en enero de 1810 por agotarla y el 29

²⁹⁹ *Memoria del Cádiz de las Cortes*, ed. De Durán, Fernando. Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1996, pag 89.

de enero se decidió de forma precipitada formar un Consejo de Regencia, idea que ya venía estando en la mente de la Junta.

Desde distintas voces y concretamente por las Juntas de Sevilla y Cádiz y por las críticas vertidas por el Consejo de Castilla, se acusó a los vocales de la Junta Central de haber usurpado el poder regio y, sobre todo, de haberse hecho con numerosas riquezas con las que, se decía, pretendían huir a América. En marzo de 1810, Jovellanos y Camposagrado acudieron al Consejo de Regencia, dirigiéndole una representación en la que le solicitaban una reparación por los ataques contra su honor y rebatían las acusaciones que una consulta del Consejo de Castilla había vertido contra la Junta Central.

El Consejo de Regencia dio una satisfacción muy relativa. Tan solo dictó una resolución en la que se limitaba a declarar las pesquisas que sobre la documentación de la Junta Central se había hecho. Como no se atendió a sus requerimientos. Jovellanos empezó a redactar lo que sería la Memoria en defensa de la Junta Central, cuya primera parte está firmada el 22 de julio de 1810, y la segunda el 2 de septiembre de dicho año. Las Cortes se iban a reunir y Jovellanos esperaba que se defendiese la causa de los vocales de la Junta Central ante las Cortes. Finalmente en noviembre las Cortes de Cádiz acordaron que los vocales de la Junta Central no fuesen sujetos a juicio, sino que se personasen ante las propias cortes dándoles un plazo de dos meses para personarse ante la Cámara y dar cuenta de sus gestiones.

Se les concedió un plazo para presentarse hasta junio pero Jovellanos pidió licencia al Gobierno para trasladarse a Cádiz y le fue denegada por el capitán general de Galicia, de orden de la Regencia.

Jovellanos no llegaría a ver impresa la segunda parte de esta obra que vería la luz a finales de 1811 cuando ya había fallecido.³⁰⁰

Jovellanos se encontraba ante la necesidad de responder a la gran acusación que el Consejo de España e Indias había hecho a la Junta Central de estar ejerciendo el poder supremo, esto es la soberanía, por una violenta y forzada usurpación, tolerada, más bien que consentida, por la nación. Pero Jovellanos argumentó que el poder de la Junta Central procedía por transferencia de las Juntas Provinciales casi me habían sido elegidas por el pueblo. La soberanía, si el Rey estaba ausente y abdicado estaría en la actitud del pueblo de luchar por su independencia. Jovellanos apelaría al Código de las Siete Partidas que consagraban el derecho de levantamiento contra un enemigo usurpador y a la lucha por la libertad.

Además, entonces utilizaría el pensamiento jurídico de los tratadistas españoles del siglo XVI que admitían un derecho de resistencia al tirano, y éste podría ser tanto el usurpador del poder como el conductor del mismo por degeneración. Jovellanos se sitúa como ilustrado reformista de una parte frente al ideal revolucionario, y de otra contra la vuelta y restablecimiento del absolutismo monárquico.

Se destaca siempre el papel realizado por Lord Holland en la difusión del constitucionalismo inglés. Lord Holland fue un gran amigo de Melchor Gaspar de Jovellanos. Jovellanos se encontró con lord Holland en Sevilla, cuando formaba parte de la Junta Central y pasados los años este personaje incluso urdió un plan para liberarlo de su confinamiento en el Castillo de Bellver.

Con Jovellanos, Holland mantendrá una frecuente y densa correspondencia. Es la persona que mejor conoció y más sinceramente

³⁰⁰ Melchor de Jovellanos, Gaspar. *Memoria en defensa de la Junta Central*. Edición y notas de Fernández Sarasola, Ignacio.

respetó, a pesar de la diferencia de edad que le separaba. Se intercambian libros y Jovellanos le manda libros españoles, muy en particular la obra de Martínez Marina sobre las Cortes, asegurándole que con esta obra podrá conocer mejor el carácter de la Constitución española, se entiende que la histórica. La Guerra de la Independencia atrae extraordinariamente el interés de Holland. En el *Spanish Journal*, editado por su esposa, Holland se preocupa por la marcha de la guerra de España. En sus Cartas a Jovellanos va siguiendo las informaciones que aquel le va dando sobre la constitución de las juntas, la aplicación del rey, los problemas derivados de la falta de gobierno. Manifiesta que España su segunda patria y si hace conocedor de lo que en Londres se habla de las cortes, de la reformas y de los inicios de la revolución liberal en España³⁰¹.

Las cuestiones de tipo constitucional son las que interesan a Lord Holland conocedor de los intentos de reforma liberal ensayados en la mayor parte de los países europeos. Holland es un experto en el constitucionalismo inglés pero también conoce el constitucionalismo francés, el proceso español y la situación del reino de Nápoles. El referido *Spanish Journal* de Lady Holland es el mayor testimonio del afecto que los esposos se entiende por España sorprendiendo el alto grado de información que tiene de la época.

El viaje por la península de 1808-1809 sería enteramente su propia iniciativa. Lord y Lady Holland encontrarían alojamiento en Sevilla en el Palacio de las Dueñas, perteneciente al Duque de Berwick. Los Holland se encontrarían con los miembros de la Junta Central. Allí les visitaría Capmany, Jovellanos, y sobre todo estaría directamente en contacto con la verdadera situación política y militar de España.

³⁰¹ Melchor de Jovellanos, Gaspar “*Cartas a lord Holland sobre la forma de reunión de las Cortes de Cádiz*” Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes <http://www.cervantesvirtual.com/>

La persona más citada en el Spanish Journal es Jovellanos. De él se admira su dilatada producción literaria en verso y prosa, su conocimiento de la ley y su profunda sabiduría en todas las ramas de la política, así como sus cualidades morales, la serenidad de su temperamento y la elevación de su carácter. La correspondencia entre ambos es continua, los dos políticos amigos no dejan de intercambiarse libros. Holland le envía libros y gacetas de contenido político, conociendo el interés de Jovellanos por las cosas inglesas, y éste le manda igualmente libros españoles.

A fines del año 1809 Jovellanos le dice, por ejemplo, que aunque no hay libertad de prensa, su existencia en la práctica es un hecho, hasta el punto de que los periódicos se cruzan y todo el mundo los deja discurrir. En una de sus cartas a Jovellanos escrita el 5 de mayo de 1809 le manifiesta que “cada país, como dice usted, tiene sus usos y sus costumbres, y más que todos España, que serán suficientes para asegurar la libertad, si se trabaja de buena fe para darles ese efecto. Y no se ha de examinar cuál ley sería más hermosa en la teoría y sonaría mejor en el papel, sino los agravios que pesan y han pesado, y los medios que tiene España en su seno para aliviarlos y prevenir la reincidencia en ellos”.

Entrando ya en su pensamiento constitucional continua “Las Cortes, adaptadas a las luces del siglo y hasta cierto punto a las mudanzas que ha hecho el tiempo en la relación entre ciudades y ciudades, y entre provincias y provincias; y sobre todo, aumentadas en el número de sus vocales, me parecen todo lo que se necesita por ahora, prescindiendo, tal vez, de la libertad de la imprenta”.

Lord Holland llega a expresar su opinión sobre la convocatoria de Cortes: “me parece indispensable que los de la Junta, que son enteramente aficionados a las Cortes, ajusten entre sí el modo en que las guste que sean elegidos y tenidos los que quieren las compongan, qué número de cámaras, etc., etc., para que no desavengan entre sí en

la Junta misma, habiendo condescendido recíprocamente con sus respectivos dictámenes aparte y prosiguiendo con unanimidad el remate de ellos en la Junta”.

En sus Cartas a un napolitano—Letter to a Neapolitan from an Englishman—³⁰² plantea que “no es sabio ni practicable introducir las leyes que quedan en un país no acostumbrado a los mismos hábitos y modos de pensamiento”; “una Constitución de este tipo levanta expectación que no es fácilmente realizable, dado que no es posible una perfección ideal, a lo que quizá no es capaz la sociedad humana”. Para la Constitución del reino de Nápoles recomienda la existencia de dos cámaras “porque cada país que ha intentado gobernarse por una, después de mucha turbulencia y confusión ha vuelto a dos”.

Manifiesta a Jovellanos su idea de la composición de las Cortes. En una carta sin fecha le manifiesta “Cuando las Cortes estarán unidas espero que llegará el número de sus miembros a ser de 150 a 200 personas, en ese caso me parece que por el poco uso que tienen sus paisanos en el manejo de semejantes juntas o congresos se encontrará alguna dificultad en arreglar el mundo de tenerlas... la forma en que se ha de deliberar y votar y varias otras órdenes, como las llamamos nosotros, en qué consiste el Código interior de un Senado o asamblea. Éste punto que tal desatinadamente han despreciado los franceses, es de mucha importancia, y aunque en otros asuntos no sea de imitar una nación la otra, tal vez sería útil el estudio de las leyes y usos que en esta materia ha producido en nuestra Camara Baja (House of Commons) el tiempo y la experiencia”.³⁰³

Según Holland, las Cortes españolas deberían constituirse según sus antiguos usos y las circunstancias presentes, teniendo en cuenta los deseos de la opinión pública para evitar todo

³⁰² Letter to a Neapolitan from an Englishman, London 1818

³⁰³ *Carta a Jovellanos* I.86

enfrentamiento con el poder ejecutivo. En sus cartas, Holland manifiesta ya de regreso a Inglaterra, ser testigo de la extraordinaria expectación ante la reunión de las Cortes en la ciudad de Cádiz, pero para él, las Cortes de Cádiz están constituidas por jóvenes de más ardor e imaginación que experiencia o ponencia y que, además habían bebido sus nociones de libertad de los enciclopedistas de Francia, más que de la historia de sus antiguas instituciones o de los inmediatos deseos de su propio país.³⁰⁴

Lo que interesa destacar es cómo Lord Holland se preocupa de que sus amigos españoles reciban obras inglesas para su ilustración política. A Jovellanos le dirá en una carta de 31 de mayo de 1809 que le ha enviado un manuscrito sobre “las formas de la Cámara de los Comunes, y, desde luego, me empeñaré en hacerle copia en una letra más clara.”³⁰⁵

Jovellanos se acerca a las teorías de Hume o Edmund Burke, defensor el primero de la constitución inglesa concebida como una constitución histórica. Para Burke, ha de mantenerse el edificio histórico, sin excluir con ello un principio de mejora.³⁰⁶ En esa misma línea Jovellanos asume una idea de progreso gradual que llevará a cada nación a buscar aquella forma de gobierno que estuviese más cerca de su pasado para pasar de ella a otra mejor.

En síntesis, Jovellanos se presentará como el principal valedor del constitucionalismo británico quien, en su Memoria en Defensa de la Junta Central así como en otros escritos y dictámenes redactados entre 1809 y 1811, se limitó a defender el sistema británico de

³⁰⁴ Moreno Alonso, Manuel. “*Lord Holland y los orígenes del liberalismo español*” Revista de Estudios Políticos, Nueva Epoca, Numero 36, Noviembre-Diciembre 1983

³⁰⁵ Somoza, Julio. *Cartas de Jovellanos y Lord Vassall Holland sobre la Guerra de la Independencia* (1808-1811), 1911 (Madrid : Imprenta de los Hijos de Gómez Fuentenebro)

³⁰⁶ Jovellanos tiene en su poder las obras de Hume y Burke. Pierre Clément, Jean. *Las lecturas de Jovellanos* (Ensayo de reconstrucción de su biblioteca) 1980

gobierno según la doctrina de la monarquía «mixta» y «equilibrada». A su juicio, era preciso vertebrar en España un Estado basado en el «equilibrio político» entre sus diversos poderes, señaladamente entre el Monarca y las futuras Cortes, y, de este modo, alcanzar la «balanza constitucional».

Jovellanos asumió la forma constitucional inglesa que reflejaban los textos normativos y la temprana doctrina del siglo XVIII y olvidó la práctica de las convenciones y las más modernas tendencias doctrinales y vio en Inglaterra una Monarquía constitucional, equipada con controles mutuos (checks and balances), esto es, una “balanced constitution”, tal y como defendían Locke, Montesquieu, Blackstone, De Lolme, Harrington, Ferguson y Adams, todos ellos leídos por Jovellanos.

Respecto a su teoría del Estado, Jovellanos adopta, como punto de partida, la sociabilidad natural del hombre, siguiendo a gran parte del iusnaturalismo racionalista de los siglos XVII y XVIII. Jovellanos hace referencia al estado natural del hombre y entiende que la base de la sociabilidad se encuentra en el origen divino de la ley natural. No buscaba el origen del derecho natural en la naturaleza humana sino en Dios, la indagación racional de la ley natural a través del estudio del hombre era sólo posible en cuanto Dios la había grabado en su naturaleza. Jovellanos reconoce la sociabilidad, el fenómeno asociativo que constituye la formación de la sociedad civil.

La sociedad civil se forma a través de un pacto social o ley fundamental, pacto en el que se perfeccionan las obligaciones y libertades recíprocas de los hombres impuestas por la ley natural. Fundamenta el pacto social en que cada individuo procedía a una renuncia parcial de una porción de su independencia para componer la autoridad pública, siguiendo completamente las doctrinas pactistas del iusnaturalismo racionalista.

Tiene un concepto unitario. Inicialmente mantenía un concepto clásico que la Constitución no tenía sino un mero carácter descriptivo. Desde la década de 1780, Jovellanos comenzaría hablar de Constitución en un sentido más restringido, para referirse a la estructura política de la sociedad civil, para lo que utilizaba frecuentemente la expresión “Constitución política”.

Hasta 1787 no había otro modelo racional normativo de constitución formal que la constitución americana. Para Jovellanos la Constitución es una norma interna, no escrita, no identificada con ningún texto concreto, ni siquiera con las leyes fundamentales.

Para Jovellanos durante la historia de la nación española ha habido distintas constituciones identificando la constitución política con la forma de gobierno. Los primeros experimentos de constituciones normativas formales, la referida constitución americana del 1787 y la francesa de 1791 obligan a Jovellanos a cambiar su concepto de constitución. Conoce ambas constituciones: la Constitución americana que recoge los postulados de Montesquieu a quien Jovellanos respeta profundamente y la constitución francesa que le causa más problema porque rechaza sin matices la revolución.

Jovellanos propone la vigencia una constitución histórica inalterable en determinados aspectos y en otros susceptibles de Reforma, pero nunca de ruptura.³⁰⁷ La Constitución es para Jovellanos la norma o conjunto de normas a tres de las cuales la sociedad civil determina la forma de gobierno y de traspasar el ejercicio de la soberanía. Para el debe estructurarse en dos niveles: uno mínimo, estático y otro exterior, dinámico. La Constitución es susceptible de

³⁰⁷ Suanzes, Varela. *La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico*. La doctrina de la Constitución histórica: de Jovellanos a las Cortes de 1845. *Revista de Derecho Político* 39/1945

mejora, lo que encaja con la idea ilustrada de progreso propia de Jovellanos.³⁰⁸

Otra de las cuestiones sobre las que reflexiona Jovellanos es la referida a la soberanía y al poder constituyente. Jovellanos mantendrá en su dictamen que el poder de los soberanos no es absoluto sino limitado por las leyes en su ejercicio y mantendrá que los monarcas de España no son absolutos en el ejercicio del poder legislativo y que no es ilimitado tampoco el ejercicio de la potestad judicial por parte de los soberanos.

Puede decirse también que Jovellanos no captó la realidad constitucional ya existente en esos momentos: la existencia de una Monarquía parlamentaria. De este modo defendió un sistema de gobierno monárquico-constitucional, vertebrado en torno a un Monarca robusto, a quien correspondía nombrar y cesar libremente a «sus» ministros, responsables tan sólo penalmente ante las Cortes, aunque es verdad que Jovellanos defendió también su responsabilidad «moral»; quizá gracias al influjo de Burke y Fox, a quienes el ilustrado asturiano conocía, o del propio Lord Holland.

Jovellanos no llegaría a defender nunca una auténtica responsabilidad política de los Ministros ante las Cortes ni hizo mención alguna a los partidos políticos ni, por tanto, al papel de la oposición en el seno del Estado Constitucional. Un silencio ciertamente muy elocuente, al que se sumarían los Diputados gaditanos.

2.5.5 Personalidades que influyen en los Constituyentes de Cádiz

2.5.5.1 Álvaro Flórez Estrada y el proyecto de Constitución para la nación española

³⁰⁸ Fernandez Sarasola, Ignacio. *Estado, Constitución y formas de Gobierno en Jovellanos*

Una de las personalidades liberales más importantes en el proceso que se lleva a acabo en las Cortes de Cádiz es Álvaro Flórez Estrada, calificado de liberal exaltado y de teórico de la revolución pero ante todo y sin duda una figura relevante en la historia del origen del constitucionalismo español.

Nacido en Pola de Somiedo, Asturias, en 1765, de familia noble, estudia Humanidades y Derecho en la Universidad de Oviedo, licenciándose en leyes hacia 1786, pasando luego a Madrid donde se hace magistrado. Nombrado por Godoy a los 30 años tesorero General del reino, renuncia por considerar su cargo incompatible con las convicciones liberales que profesaba y se retira de nuevo a Pola de Somiedo. La Junta General del Principado de nombra en 1798 su Procurador General.

Al producirse la invasión francesa y consecuentemente el levantamiento de Asturias contra Napoleón, Flórez Estrada que había sido testigo de los acontecimientos del 2 de mayo en Madrid, se convierte en una figura clave en el levantamiento del 25 de mayo de 1808 de Oviedo contra el invasor francés, encabezando la Junta General del Principado y promoviendo desde Oviedo la Junta Central³⁰⁹.

Protagonista de aquellos hechos redacta la Proclama de la Junta de 24 de mayo de 1808: “han profanado nuestros templos, disfrutando esta religión, han faltado la prometida y no hay derecho alguno que no hubiesen hollando, ya llamando en la proclama “alarma, alarma, asturianos” contra las tropas invasoras”. Esta es una de las más claras llamadas a la guerra contra el francés que genera la guerra de la independencia y que Álvaro Flórez Estrada plantea desde una perspectiva político militar que luego desarrollará en Cádiz una verdadera revolución político-militar.

³⁰⁹ Obras de Flórez Estrada, Álvaro. 1. *Estudio preliminar de Artola Gallego, Miguel*. ediciones Atlas. Madrid 1958.

La actividad de Flórez Estrada en el seno de la Junta asturiana viene determinada por una serie de circunstancias políticas: la quiebra del antiguo régimen, manifestada por la desaparición de las estructuras administrativas hasta entonces vigentes y por el olvido de las autoridades constituidas; la oportunidad para habilitar la evolución política hacia nuevas direcciones y, finalmente, la reiteración de un programa aun no concretado, de reformas políticas y económicas.

El Marqués de la Romana procederá a la disolución de la Junta el 2 de mayo de 1809 y la creación de una Junta sometida a su voluntad. Privado de sus funciones Flórez Estrada se traslada Sevilla valiéndose de un disfraz. Allí se entrevista con Jovellanos y el marqués de Campmosano, vocales de Asturias en la Junta central³¹⁰. Pública en Sevilla dos importantes escritos, el primero titulado "Reflexiones sobre la libertad de imprenta" y el segundo titulado "Constitución para la nación española"³¹¹.

En sus Reflexiones sobre la libertad de imprenta, escrita en Sevilla y publicada posteriormente en Inglaterra, hace un canto de las libertades inglesas manifestando "si en nuestros días hubiéramos estudiado la legislación de Inglaterra y hubiéramos hallado que la perfección de sus artes, el progreso de sus ciencias, el poder de esta nación, en una palabra, que todas las ventajas que disfruta sobre las demás naciones es debido únicamente a las libertades que gozan sus individuos; y si adoptásemos este sistema en breve España estaría a su nivel"³¹².

Según manifiesta Miguel Artola este segundo texto llamado "Constitución para la nación española" entregado a la Comisión el 1

³¹⁰ Uría Rúa, Juan: *Asturias en la segunda mitad del siglo XVIII* y rasgos biográficos de *D. Flórez Estrada, Álvaro*. Oviedo, 1948, págs. 24-32.

³¹¹ Flórez Estrada, Álvaro: *Constitución para la nación española presentada a S.M. la Junta Suprema Gubernativa de España e Indias en 1 noviembre 1809*. En obras ed. BAE, 1958, II, 307-344.

³¹² Flórez Estrada, Álvaro: *Obras* 2, 347-350.

de noviembre de 1809, presentaba un radical liberalismo, perfectamente articulado presidido por una serie de consideraciones filosófico-políticas. Su principio filosófico convertido ahora en principio político es el derecho a la felicidad: “los individuos tienen derecho a la “seguridad, libertad e igualdad de condiciones”. La función de la Constitución es determinar con reglas precisas “los derechos del ciudadano y los deberes de los depositarios de la autoridad pública”.

La constitución no será sino el conjunto de reglas claras, sencillas y a todos inteligibles que asegurar la permanencia de este equilibrio. Para garantizar este equilibrio Flórez Estrada recurre a la división de poderes distinguiendo entre el soberano denominación que reserva para un congreso que formaría los representantes de todas las provincias en proporción a su pueblo a población y el rey, ante atribuyó la función ejecutiva.

En su texto plantea asimismo el principio de igualdad. “Todos los españoles están sujetos a una misma ley. Esta habla igualmente a todos. Todos deben ser juzgados por ella de y o mismo modo, sin distinción de clases y personas”.

Flórez Estrada se traslada a Inglaterra en la primera estancia que se prolongaría hasta 1812, manifestando su interés por cuestiones económicas que predominaban entonces en Inglaterra. En 1776 Adam Smith había publicado “La riqueza de las naciones” que señala nuevos derroteros para la ciencia económica y en 1798 Malthus publicaría el “Ensayo sobre el principio de la población”.

A esta época corresponden dos de sus obras más significativas, la “Introducción para la Historia de la Revolución Española” que publicó en Londres en 1810 y el “Examen imparcial de las disensiones de la América con la España, de los medios de su reconciliación y de la prosperidad de todas sus naciones” que vería la luz al año siguiente.

En su introducción sobre la revolución española defiende la idea de la patria y la inmovible fe de que los que la defienden han de triunfar necesariamente. La patria es el lugar en el que se realizan ciertos derechos individuales, cuya defensa hace que el ciudadano se resista a todo yugo extraño. En el Examen Imparcial Flórez Estrada plantea la cuestión del levantamiento de las colonias negando que los criollos luchen por su libertad por cuanto este mismo era el impulso que animaba a los españoles en su lucha contra los franceses, encontrando una comunidad de intereses entre los españoles de ambas orillas del Atlántico y cargando sobre el Antiguo Régimen la culpa entera del descontento de los americanos, para concluir exhortando al restablecimiento de la amenazada unidad política.

“El interés de todos es uno mismo. Establecer una Constitución que asegure la libertad civil de unos y otros y por la que iguales derechos de propiedad disfruten americanos y españoles; establecer un sistema de comercio y administración, el más libre y el menos dispendioso posible y abolir las principales causas que impidieron hasta ahora los progresos de la prosperidad nacional; he aquí lo que conviene a todos y lo que, si se examina desprevénidamente, se verá que no está en contradicción.”³¹³

En 1812 Flórez Estrada regresa a España tras haber adquirido unos conocimientos científicos de carácter económico y una importante información sobre temas constitucionales. Aunque no es segura su paternidad, es probable que Flórez Estrada colaborase publicando artículos en el periódico titulado “El Tribuno del Pueblo Español” cuyo primer número vería la luz el 3 de noviembre de 1812. En este periódico aparecen los temas de las Cortes, del régimen representativo, de la división de poderes, de la necesidad y perfil de una Constitución liberal y de una nueva organización de la sociedad.

³¹³ *Obras de Álvaro Flórez Estrada I Estudio preliminar*, edición de Artola Gallego, Miguel. pg. XXI

El retorno de Fernando VII y el establecimiento de tribunales fernandinos posibilita la marcha de Flórez Estrada de nuevo a la Gran Bretaña tras su condena a la pena capital. Durante esta estancia publicará un escrito político titulado “Representación a Fernando VII en defensa de las cortes”. En la que manifiesta que el rey con su marcha a Bayona y su abdicación perdió todo derecho la Corona quedando la nación española en absoluta libertad para constituirse tan como tuviera por conveniente.

La Representación a Fernando VII en defensa de los Cortes sin duda constituye una de las obras más importantes en la historia de los inicios del constitucionalismo contemporáneo³¹⁴.

Esta obra sería publicada en Londres, en 1840. Antes de su publicación, este escrito se había difundido por España entre los liberales, contribuyendo en el plano de las ideas a preparar el ambiente propicio para la el pronunciamiento de Riego. «La Representación de Flórez Estrada -diría su amigo Andrés Borrego, colaborador en Málaga de aquel pronunciamiento- impresa en Londres y que con profusión había clandestinamente circulado por la Península, fue durante los seis años transcurridos de 1814 hasta el restablecimiento en 1820 del régimen constitucional, la bandera, la apología y, en cierto modo, el lábaro de las justas quejas del liberalismo español³¹⁵»,

La autoridad doctrinal más citada a lo largo de esta primera parte, e incluso de toda la Representación, era Locke, «uno de los primeros sabios de Europa, que ni ha sido jacobino, ni revolucionario». El liberal asturiano traía a colación párrafos enteros

³¹⁵ Martínez Cachero, Luis Alfonso. *Álvaro Flórez Estrada. Su vida, su obra política y sus ideas económicas*, Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1961, pág. 62.

del Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil para defender el gobierno por consentimiento de los gobernados, la división de poderes, los límites de la prerrogativa regia y la supremacía del poder legislativo en la estructura del Estado.

Flórez Estrada llega a afirmar que las facultades que tenía el Monarca inglés eran las mismas que la Constitución de Cádiz había otorgado a Fernando VII: «Desde el establecimiento de la actual feliz Constitución británica, ninguna otra nación ha disfrutado igual tranquilidad, igual industria, igual riqueza, tanto patriotismo, tantas luces ni tanta gloria. El genio del mal y la obcecación son los dos únicos obstáculos que pueden impedir a un monarca español tomar por modelo a esta nación tan grande por todos respetos. ¡Y será posible que vuestros consejeros hayan podido seduciros al punto de hacer castigar cómo reos de Estado y sin ser oídos a los autores de una Constitución que os concedía los mismos privilegios que los que disfruta el monarca británico!»³¹⁶,

Esta afirmación pone en evidencia lo difícil que resultaba conocer, con exactitud el funcionamiento del sistema de gobierno inglés incluso para aquellos que, cómo Flórez Estrada, a su indudable capacidad intelectual, que en este escrito se pone de relieve, unían el haber vivido durante varios años en Inglaterra

2.5.5.2 Manuel José Quintana y el *Semanario patriótico*

Otra de las personalidades relacionadas con Lord Holland es Manuel José Quintana, a quién Capmany llamaría con toda razón “patriarca del liberalismo”. Quintana sería uno de los mas apasionados

³¹⁶ Martínez Cachero, Luis Alfonso. *Álvaro Flórez Estrada. Su vida, su obra política y sus ideas económicas*, Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1961, pág. 177.

liberales, patriarca de las letras españolas y quizás el más amigo de los esposos ingleses después de Jovellanos.

Hijo de padres extremeños, estudia Jurisprudencia Civil y Canónica en Salamanca donde mantiene una relación cordial con el rector liberal Diego Muñoz Torrero. Su padre, Juan Antonio Quintana había obtenido una licencia para leer libros prohibidos por el Santo Oficio, lo que permitió a su hijo familiarizarse con las obras más renombradas de la época. Quintana se educa entre ilustrados entre los que circula las obras de lo Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Bolingbroke, Burke, a pesar de las prohibiciones de Godoy y de la Inquisición.

Quintana ejerce como abogado en Madrid desde 1795, siendo nombrado Procurador Fiscal de la Junta de Comercio y Moneda. Su pensamiento es liberal, tal y como se constata claramente en 1805 en que escribe el poema el “Panteón de El Escorial”, que no es si no una crítica a la tiranía y al fanatismo. El discurso político que acompaña a sus obras es el de la libertad, los valores patrióticos, la moralidad, el amor a la justicia y sacrificio como valores que constituyen el patrimonio histórico de la nación.

La amistad entre Quintana y Lord Holland se fraguó en el segundo viaje realizado por el inglés en los años de 1802 a 1805. La vocación literaria de Quintana, su sensibilidad intelectual y su ideología política constituirían la base de la firme amistad mantenida de por vida entre estos dos hombres. Los Holland diría que “Quintana fue uno de los últimos políticos españoles que creyeron en la eficacia de las ideas y de las leyes para moldear los hombres de la comunidad”³¹⁷.

La patria es para Quintana la nación soberana que asegura con leyes los derechos individuales y la ciudadanía, tal y como describirá

³¹⁷ Vila Selma, J. “*Ideario de M. J. Quintana*” Madrid 1961.

en sus proclamas: “La Patria, españoles, no debe ser ya un nombre vano y vago para vosotros: debe significar en vuestros oídos y en vuestro corazón el santuario de las leyes y las costumbres, el campo de los talentos, y la recompensa de las virtudes.”

Antes de 1808 Quintana tiene ya fama de patriota liberal. En agosto de aquel año comenzaría la publicación del Semanario Patriótico, el periódico liberal más influyente durante la Guerra de la Independencia fundado por Manuel José Quintana y editado por él mismo en su primera etapa madrileña. La intención del periódico fue la de difundir en la España patriótica las nuevas ideas democráticas de la monarquía constitucional y alentar la convocatoria de las Cortes Constituyentes que se reunirían en las Isla de León y después en Cádiz en 1810.

Quintana encargaría la edición de la segunda etapa del Semanario- la sevillana- a José María Blanco, para abordar los asuntos políticos y al también diputado en las Cortes de Cádiz Isidoro Antillón, para la descripción de la campaña del ejercito patriótico contra Napoleón. Como luego consideraremos, la parte Política del Semanario, redactado por Blanco, constituye la primera exposición periodística de las ideas liberales publicada en España. Antillón, por su parte, haría una descripción patriótica pero objetiva de la lucha militar.

En el referido Semanario Patriótico, Quintana se rodeó de algunos de los asistentes a su tertulia: Blanco White, Isidoro de Antillón, Eugenio Tapia, Rebollo y Juan Álvarez Guerra. Para ellos, la nación había tomado la soberanía y levantándose en armas había formado Juntas que constituyeron un gobierno nacional: la Junta Central. El Semanario haría continua referencia a la independencia como condición para la libertad de la nación y como ésta sólo podía conseguirse a través de la lucha, lo consecuente era luchar por la independencia.

Para Quintana, según escribirá en el *Semanario Patriótico*, “la defensa de la patria es para afianzar la independencia política, y el establecimiento de nuevas leyes fundamentales para una administración interior justa y benéfica”.³¹⁸ Aquel grupo de idealistas utilizaron las cabeceras como la del *Semanario Patriótico*, *El Voto de la Nación Española* o el *Espectador Sevillano* para extender la doctrina liberal, cimentada en el naturalismo racionalista, el contractualismo y el constitucionalismo, defendiendo una serie de ideas como la soberanía nacional, los derechos individuales, la igualdad ante la ley, la separación de poderes, el cameralismo único y la idea de la Constitución como contrato político emanado de la voluntad nacional.

En suma, aquel grupo de liberales pretendieron acelerar el proceso revolucionario preparando una Proposición elaborada con Quintana y Calvo de Rojas para que la Junta Central convocase a Cortes constituyentes. Esta Proposición fue presentada finales de abril de 1809 pero no salió adelante por su marcado tinte liberal aunque se constituyó en el precedente del Decreto de Convocatoria de Cortes realizado el 22 de mayo siguiente aunque este era mucho más moderado.

Ante la aparición de un decreto tan sólo reformador se produciría la alianza entre los reformistas de Jovellanos y los liberales de Quintana, tras lo que se producía el Decreto 28 de octubre de 1809, en el que ya quedaría manifiesto que la reunión de las Cortes quedaría vinculada a la elaboración de una nueva Constitución. Así se establecería la Junta Suprema cuyo secretario sería Agustín de

³¹⁸ *Semanario Patriótico*, 24 – 11 – 1808. Blanco White, José. *Semanario Patriótico*. Sevilla, 1809, edición e introducción de Garnica Antonio, Silva y Rico Linage, Raquel (Obras completas de José Blanco White, i. periódicos políticos, vol. i), Granada, Almed, 2005

Argüelles que elaboraría una verdadera pauta constituyente para los diputados de Cádiz.

Quintana no se presentó a las elecciones a Cortes, ni siquiera como suplente, prefiriendo continuar con la difusión del liberalismo en la opinión pública. “El discurso de un español a los diputados en Cortes” realizado el 21 de octubre de 1810 recordaría que la misión de los representantes nacionales era la de elaborar una Constitución que impidiera toda clase de tiranías e introducir reformas materiales y morales en la sociedad para que los particulares sirvieran a la revolución, y no la revolución a los particulares”.

El 9 de abril de 1811 Quintana sería nombrado por las Cortes Secretario de Interpretación de las Lenguas y participa además en la Junta de Instrucción Pública, con la función de asistir a los Consejos de Ministros y levantar actas de las decisiones de las Cortes, así como escribir los manifiestos gubernamentales. Fue entonces cuando sería muy criticado por Antonio Capmany quien publicó dos folletos contra su persona y su actuación política.

Capmany descalificaría a Quintana como persona y como escritor, manifestado que era un inepto y que sus ideas eran francesas, es decir, ilustradas, enciclopedistas y jacobinas. Se planteó una gran polémica en Cádiz entre ambas personalidades, escribiendo a favor de Quintana sus amigos liberales, pero a pesar de la defensa de sus amigos, Quintana acabaría perdiendo su cargo que sería eliminado tras una proposición presentada a las Cortes que no pudo evitar Argüelles quien evidentemente se había posicionado a favor de Quintana con el que tenía una gran relación.

Volviendo a Quintana, hemos de manifestar que a la vuelta de Fernando VII al trono, Quintana sería arrestado el 10 de mayo de 1814 y conducido a prisión junto a Argüelles, Alcalá Galiano y otros, acusado de haber tratado de subvertir las leyes fundamentales de la

monarquía, con la proposición de las Cortes nacionales y presionar al rey por haber proclamado que la soberanía residía en la nación.

Durante el trienio liberal Quintana se convertiría en un defensor del liberalismo moderado, lo que le llevaría a la crítica de los liberales exaltados y de nuevo al acabar el trienio liberal sería confinado en Badajoz donde escribiría sus cartas a Lord Holland, en las que examinaría los factores de inestabilidad del sistema político español.³¹⁹

Moreno Alonso publica la correspondencia de Quintana con Lord Holland y manifiesta que la amistad entre los dos hombres se fraguó en los viajes de la familia Holland los años 1802-1805 y 1808-1809. Lady Holland se refiere por primera vez a Quintana en su diario ese diciembre de 1803, a propósito de una cena a la que asistió como invitado. Los esposos conocerían que Quintana había podido huir de Madrid con la invasión y se volvería a encontrar en Sevilla.

Cierto es que Quintana disiente del tradicionalismo excesivo que mantiene Jovellanos para la convocatoria de Cortes y por tanto de las posturas de Jovellanos que se considera como la persona más cercana de Lord Holland, pero lo que queremos destacar es que Quintana va a tener una relación muy directa que le permite informar a Lord Holland de muchos de los sucesos en un epistolario que comenzaría el febrero de 1805 y que inicialmente tiene sobre todo un contenido literario.

Las primeras cartas tienen precisamente este carácter, Holland conoce bien a los escritores españoles del Siglo de Oro y principalmente a Lope de Vega, de quien escribe una obra que según

³¹⁹ Dérozier, Albert: *Les étapes de la vie officielle* de Josef Quintana Manuel. Bulletin Hispanique 66 (1964). Dérozier, Albert: *Manuel Josef Quintana et la naissance du libéralisme en Espagne*, Paris, *Annales littéraires de l'Université de Besançon*. Martínez Torrón, Diego: *Manuel José Quintana y el espíritu de la España liberal*, Sevilla, 1995

el propio Quintana puede considerarse como el mejor libro escrito fuera de España sobre esta época.³²⁰

Producida la invasión, es decir la lucha patriótica y las preocupaciones políticas serán las únicas razones que interesan a Quintana y los amigos españoles de Lord Holland. Como bien explica Moreno Alonso, Quintana enviará a Lord Holland sus nuevos escritos como sus odas “A España en abril de 1808” y “A las provincias españolas, armadas contra los franceses”, pero también le enviará manifiestos, proclamas y otras composiciones patrióticas publicadas por la Junta Suprema.

La defensa de la causa patriótica y de la libertad política es su gran ocupación, Quintana informa a Lord Holland de la marcha del conflicto, de las batallas, y de las implicaciones internacionales, de las victorias de los patriotas y de lo que dicen los franceses y asimismo, de los acontecimientos de fuera de las fronteras. Lógicamente también le va informando de los debates que se celebrará entre las Juntas Provinciales y la Junta Chica.

Junto a estas alusiones aparecerá una gran actividad, o mas bien, un gran objetivo, que él llamará “el gran negocio”, que no será otro que la convocatoria de Cortes. Quintana envía a Lord Holland un ejemplar impreso del Decreto de Cortes de 25 de mayo de 1809 que aunque no le convence su contenido le parece importante por la urgencia del tema. En una carta que escribe a Lord Holland el 26 de mayo de 1809 dirá que “después de tanto ruido, ha salido el parto de los montes: vergüenza me da que se diga que yo he andado en esto”.³²¹

³²⁰ Moreno Alonso, Manuel: *Principios políticos y Razones Personales para la Reforma del Estado de España* (1805 – 1840) (De la correspondencia inédita de Quintana, M.J. con Lord Holland) en Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) Núm. 70 Octubre-Diciembre 1990

³²¹ Moreno Alonso, Manuel: *Principios políticos y Razones Personales para la Reforma del Estado de España* (1805 – 1840) pg. 299

Lo más significativo de esta relación entre Lord Holland es la formación que va teniendo el español sobre la necesidad de aplicar el modelo político inglés. La formación inglesa de Quintana es muy importante en sus escritos cita a Addison, Bacon, Pope, Gibbon, Hume, Adam Smith, Coxe, Blair, entre otros. La preferencia de Quintana por sus relaciones con los amigos ingleses y por la sabiduría política inglesa queda manifiesta en sus “Cartas a Lord Holland sobre los sucesos políticos de España en la segunda época constitucional”, que manifiesta la familiarización de Quintana con la producción política inglesa como lógicamente lo estará con el mundo literario inglés Quintana conoce las obras de Arnot, Dugald, Johnson, las obras completas de Walter Scott,, Byron, Young y Thomson.

Precisamente será el Semanario Patriótico de Quintana, en su segunda fase de Sevilla el que difundirá fundamentalmente el pragmatismo político inglés, al tiempo que critica los vicios políticos españoles, muchos de ellos de raíz francesa.

Quintana informará a Lord Holland sobre la reunión de las Cortes en la isla de León, explicándole las razones por las que desea la reunión de las Cortes. Estas son “primero, para establecer desde luego una barrera contra la arbitrariedad de los que mandan”; “segundo, porque las he creído el único medio de salvarlos y aun la formación de la opinión pública, ya por la manifestación de talentos de toda especie, ya, en fin, por el impulso y actividad hubieran dado a todo”.

Sin embargo manifestará a Lord Holland en una carta de 10 de marzo de 1810 que las causas que han impedido la celebración de Cortes hasta el momento son “la ambición de unos pocos, la ignorancia de los más y las lentitudes formalistas de otros”.

Quintana trata de explicar a Lord Holland de las sesiones de Cortes hablándole del espíritu sano, liberal y enérgico que reina en ellas y explicando como se establece en primer lugar la libertad

imprensa, como se plantea la soberanía de la nación y la división de los tres poderes.

Quintana confesaría a Lord Holland a dos meses de la reunión de las Cortes que son mayoría los diputados liberales.

Volviendo a la obra de Quintana, habríamos de recordar la segunda etapa del Seminario Político que fue publicada en Sevilla en 1809, desde el 4 de mayo hasta el 10 de agosto, 17 números. Este periódico fue nominalmente el órgano oficioso de la Junta Central, instalada entonces en la casa de la ciudad. Realmente se constituye como una crítica de la política seguida por la Junta Central que no acababa de poner en marcha las cortes costo dientes.

El periódico trasladará las ideas de los liberales por medio de Isidoro Antillón y José María Blanco. Éste Semanario de Sevilla, se convierte en un documento imprescindible para conocer el debate político anterior a la convocatoria de las Cortes de Cádiz que se plantearían como unas verdaderas Cortes Constituyentes.

De todo lo escrito deducimos que Quintana fue una relación especialísima de este personaje inglés y un transmisor importante de la defensa del constitucionalismo inglés como modelo para la Constitución de Cádiz.

A la muerte Lord Holland ocurrida inesperadamente en 1840, Quintana hará un escrito necrológico calificándole como parlamentario como político y como hombre esencialmente pragmático así como amigo, manifestado que a él se le debía no poco del decreto de 22 de mayo de 1809 por el que se abrió el camino a la reforma política del Estado, que los años antes había parecido suyo criminal de una imaginación lisiada, y ya entonces se presentaba no sólo como útil y posible, sino también como necesaria”.

2.5.5.3 Antonio Ranz Romanillos

El 28 de septiembre de 1810, el diario El Conciso apostaba por elaborar un nuevo código de leyes capaz de frenar el despotismo y formar costumbres puras y liberales. Fueron los diputados Oliveros y Mejia Lequerica los que mas insistieron en esta idea proponiendo en la sesión de 8 de diciembre que las Cortes no se disolvieran sin haber elaborado, a semejanza de la Asamblea Nacional francesa, una Constitución.

A tal finalidad se creó una Comisión en la que se admitió como miembro, aunque no era diputado a Cortes a Antonio Ranz Romanillos quien ya previamente junto con Jovellanos y Valiente había formado parte de una junta auxiliar creada por las Cortes. No puede olvidarse que Romanillos había sido uno de los firmantes de la Constitución de Bayona y también una de sus máximos inspiradores.

Antonio Ranz Romanillos de Atienza había nacido en el pueblo soriano de Barcones y había estudiado en Sigüenza, en el Colegio-Universidad de San Antonio Portaceli, pasando luego a la Universidad de Zaragoza donde recibe el grado de bachiller en leyes y doctor en Cánones siendo profesor auxiliar de esta Universidad, dedicándose luego a la abogacía.

El 1808 se adhirió a la causa francesa asistiendo en Bayona a la elaboración de la Constitución como secretario de la misma y tercer firmante después de José I y del ministro Urquijo. Ranz Romanillos realizó una traducción al español de la Constitución de Bayona. Antonio Capmany pidió su expulsión de la Academia de la Historia por ser traidor a la patria. El rey José I le nombraría Consejero de Estado y Hacienda pero se negó a seguirle cuando la Corte abandonó Madrid.

Romanillos sería rehabilitado por Fernando VII y tomaría parte en la elaboración de la Constitución de Cádiz. La Junta Central le confió una misión en Londres en enero de 1809, elevando una memoria a Fernando VII. Aparece ya entonces viviendo en Cádiz

donde se nombra vocal de la Junta de arbitrios y de la Real Junta de Hacienda.

Fue nombrado integrante de la Comisión encargada de elaborar el proyecto de Constitución y aunque no era parlamentario su influencia debió ser bastante grande. La Comisión no elaboró el anteproyecto que presentó a las Cortes sino que se limitó principalmente a trabajar sobre el texto redactado por Ranz Romanillos.

Romanillos utilizó el trabajo que había desarrollado la Junta de Legislación en los tiempos de la Junta Central en Sevilla, basados en la tradición legislativa española y tomó como referencia la Constitución norteamericana de 1787 y la francesa de 1791.

Especialmente se apoyaría en la Constitución francesa por cuanto los liberales españoles admiraban el proceso político que en la monarquía francesa había llevado a la realización de un pacto para crear un régimen constitucional aunque luego pasasen a la revolución a través de la violencia.

Elaborada ya la Constitución, se le nombró Ministro de Hacienda, entrando pocos días después a formar parte del Consejo de Estado por lo que tuvo que renunciar a dicho ministerio. Con la reacción absolutista conseguiría de nuevo ser nombrado Consejero de Hacienda y luego también sería Consejero de Estado durante los tres años del trienio liberal.

2.5.5.4 José María Blanco White y la defensa del sistema Británico de gobierno

Es conocida la influencia de José María Blanco White en el liberalismo de Cádiz. Blanco White, quien fue el único publicista, liberal y anglófilo a la vez, que en los años de la invasión francesa defendió el sistema británico de gobierno, tal como éste funcionaba realmente. bien es verdad que omitiendo el papel, ciertamente

decisivo, que jugaban los partidos políticos en la estructura constitucional inglesa.

Hijo de comerciantes, nacido en Sevilla en 1775, de ascendencia irlandesa, Blanco White estudió en la Universidad de Sevilla ordenándose sacerdote y ganando en 1801 por oposición una canongia de la catedral de Cádiz, trasladándose posteriormente a la Capilla Real de San Fernando de Sevilla como capellán magistral.

Ya en Madrid frecuentó la tertulia de Manuel José Quintana e hizo viajes a Salamanca, llegando a ser preceptor del infante Don Francisco de Paula por un corto periodo de tiempo gracias al favor de Manuel Godoy.

Al estallar la Guerra de la Independencia volvería a Sevilla donde colaboraría con Isidoro Antillón en la redacción del Semanario Patriótico durante los años 1808 y 1809. El Seminario Patriótico nació en la casa de Quintana, en Madrid, convertida durante los sucesos de marzo de 1808 en el centro de la reunión de patriotas. Aquí surgió la idea de publicar el semanario y allí se redactó. El primer número fue lanzado el 1 de septiembre de 1808 y contaba con 3000 subscriptores. El segundo número apareció el 1 de diciembre, casi al tiempo en que los franceses ocuparon Madrid.

Quintana y sus tertulianos se encontrarían de nuevo Sevilla a principios de 1809 y se reunirían en la Secretaría de la Junta Central. Martín de Garay, jefe de la Secretaría, indicó a Quintana la conveniencia de restablecer el Semanario. Quintana pidió a Blanco White que se encargará de la publicación del periódico lo que hizo con Isidoro Antillón, Catedrático de Geografía e Historia del Colegio de Nobles de Madrid quien aceptó ocupase de la parte histórica. La sección política estaría cargo de Blanco White.

El nuevo numero apareció en Sevilla el 4 de mayo de 1809 pero la publicación tendría corta vida y cesaría el 31 de agosto con el número XXXII.

El objetivo de El Semanario Patriótico no fue otro que el de hacer una propaganda política de la ideología liberal, si bien en los comienzos esta propaganda estaba todavía algo velada, sí puede sobreentenderse en este fragmento: “La opinión es la que coronará nuestros esfuerzos con la independencia y la soberanía que íbamos á perder, y ella en fin consolidará nuestra fortuna con una organización interior que nos ponga a cubierto por mucho tiempo de los males que hemos sufrido”.

En aquella empresa está presente Lord Holland que tuvo una relación cercana con Quintana y a quien transmitió las ideas anglófilas que influyeron en el liberalismo español. Tanto más importante fue la relación entre Blanco y Jovellanos, el liberal sevillano sentía una gran admiración por el político de Asturias.

El 23 de febrero de 1810 Blanco White embarcaría desde Cádiz con destino a Inglaterra, teniendo en Londres su lugar habitual de residencia. En Londres publicaría El Español (1810-1814), prohibido en España donde se mostró crítico con las autoridades españolas y muy comprensivo con los revolucionarios hispanoamericanos que empezaban a levantarse contra España, si bien su posición era la de la autonomía, no la de la independencia absoluta.

La defensa del sistema británico la haría Blanco White a través de las páginas de El Español, un periódico dirigido por él mismo y publicado en Londres desde Abril de 1810 hasta Junio de 1814. En el primer número del Español, Blanco publicó una “Carta sobre la costumbre de convocar las Cortes de Castilla para resolver los negocios graves del Reino” cuyo autor era Martínez Marina, así como diversos trabajos relativos a la antigua Constitución española.³²²

³²² Pérez-Prendes y Muñoz de Arracó, : Martínez Martina, José Manuel y Blanco-White sobre las Cortes de Castilla, revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 73, PFS 317 y ss.

En 1810 aparece en el Español un trabajo titulado “Modo de proceder en la Cámara de los Comunes de Inglaterra”, traducido del inglés por Blanco-White y que, con más extensión había redactado Jeremy Bentham. Mirabeau había recomendado sin éxito a la Asamblea francesa de 1789 que hiciera un documento de este tipo, una especie de borrador de Reglamento y Blanco espera más suerte confiando que los miembros de las cortes de Cádiz lo tuvieran en cuenta. Blanco tradujo y publicó en su periódico los *Principios de filosofía moral y política* que William Paley había publicado en 1785.

Filósofo y teólogo utilitarista británico, William Paley, es recordado por sus argumentos para demostrar la existencia de Dios en su obra *Teología Natural* en la que expone la conocida analogía del relojero: si encontráramos un reloj abandonado, la compleja configuración de las partes nos llevaría a concluir que todas las piezas han sido diseñadas para un mismo propósito y dispuestas para un uso concreto. Análogamente, para Paley, el universo también tuvo que ser diseñado para que todas sus partes funcionen tan perfectamente como un reloj. Así, pues, concluye Paley, alguna inteligencia superior debió crearlo.

Blanco-White es también un gran admirador de Edmund Burke cuyas obras elogia en diferentes ocasiones calificándolas de profundas y elocuentes.

Blanco, conocio a la mayor parte de los intelectuales españoles de su generación, confiesa haber estado notablemente influido por las ideas políticas revolucionarias que había encontrado en los libros franceses del siglo XVIII. Pero a diferencia de Agustín Argüelles o Muñoz Torrero, por citar dos ejemplos significativos, está primera fase la superó relativamente pronto, y además, de forma radical. Blanco-White, en realidad, era un anglófilo, cuya anglofilia le había llevado a una virulenta francofobia, que recuerda a la de un ilustre Diputado de las Cortes de Cádiz, el catalán Antonio de Capmany,

autor de un libro titulado “ Centinela contra franceses”, publicado en 1808 y dedicado a Lord Holland a cuyo círculo perteneció, como el propio Blanco.

Blanco White considera que la filosofía política de la revolución francesa y su influencia, es a su entender nefasta, en las Cortes de Cádiz y en la Constitución de 1812. En su crítica a la Constitución de Cádiz, se pone de manifiesto el influjo de diversos autores ingleses, poco o nada conocidos en España por aquel entonces, como Jeremy Bentham, que es el autor inglés más publicado y comentado en *El Español*, pero también William Paley y Edmond Burke, cuyas obras elogia en diversas ocasiones, calificándolas de «profundas y elocuentes»³²³

Importa considerar el pensamiento de Blanco-White sobre la Constitución de Cádiz. Blanco entiende que el despotismo no es patrimonio privativo de los Reyes, sino que también puede ser de las asambleas como yo sucedió en Francia y como, a su entender, estaba sucediendo en España. Para él, la soberanía del pueblo y la idea de los derechos naturales del hombre le parecen dogmas peligrosos e inútiles para proteger la libertad. La soberanía del pueblo conduce a no tomar precauciones contra el poder y por eso es perniciosa a la libertad.³²⁴

Crítica también el modo en que la Constitución de Cádiz organizaba los poderes del Estado, sobre todo por marginar al Monarca de la función de gobierno en beneficio de las Cortes, que, a su entender, se convertían en un órgano excesivamente poderoso. A su juicio, los legisladores de Cádiz habían cometido la imprudencia de sembrar una enemistad perpetua entre el legislativo y el ejecutivo.

³²³ *El Español*, T. 5, Octubre de 1812, p. 401.

³²⁴ Varela Suanzes, Joaquín: *Un precursor de la monarquía parlamentaria: Blanco-White y “El Español”* (1810-1814). Revista de estudios políticos (Nueva época). Número 79. Enero-marzo 1993.

Tampoco le convence la división de poderes ni el principio de la soberanía nacional. Muestra también su disconformidad con el esquema unicameral que habían adoptado los liberales en la constitución de Cádiz. Siguiendo los pasos de los franceses. Discrepa profundamente de la monarquía que los constituyentes de Cádiz habían establecido y pone como ejemplo el de la monarquía inglesa.

Blanco no ve en la Monarquía inglesa una simple Monarquía «limitada» o constitucional, sino una Monarquía en un proceso innegable de parlamentarización, que él contrapone como modelo alternativo a la que, siguiendo los pasos de la francesa de 1791, se había articulado en la Constitución de Cádiz. Sin embargo, como antes se adelantó, nada dice acerca del papel que los partidos políticos llevaban a cabo en Inglaterra en el marco del sistema parlamentario de gobierno ni tampoco sobre la importancia de institucionalizar una oposición al Gobierno en el mareo de este sistema.

Posteriormente ingresaría en la Iglesia anglicana y la revolución liberal española de 1820 le hace nuevamente interesarse por su país redactando, por encargo de Thomas Campbell, director de *The New Monthly Magazine*, las *Letters from Spain* o *Cartas desde España*, que fueron apareciendo en 1821 y llegarían a recogerse en un volumen en 1822.

2.6 Constituyentes de Cádiz y modelos constitucionales

Para sustituir la monarquía hispánica por una monarquía constitucional, tal y como se pretendió realizar en las Cortes de Cádiz, según ya hemos indicado, había dos grandes modelos: la monarquía inglesa y la monarquía francesa de 1791.³²⁵

³²⁵ Varela Suances, Joaquín. *Los modelos constitucionales y las Cortes de Cádiz*. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes www.cervantesvirtual.com *Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812* Anuario de Derecho Parlamentario, N°. 26, 2012 (Ejemplar dedicado a: Las Cortes de Cádiz) , págs. 191-208

La monarquía inglesa se había ido construyendo a lo largo de un dilatado proceso histórico del que la revolución de 1688 había supuesto un hito decisivo. En efecto, la revolución inglesa de 1688 fue una rebelión del pueblo y del parlamento contra el rey; Jacobo II, católico y con tendencias absolutistas. Cuando no encontró el apoyo para restablecer la monarquía absoluta ni para cambiar la religión perdió el trono.

La Revolución Gloriosa fue una revolución pacífica que produjo cambios históricos entre los que figura la Declaración de los derechos de 1689 que establecía que el rey no tenía derecho a: imponer tributo, mantener un ejército, variar la religión, dictar leyes. Los derechos pertenecen a los súbditos y el rey no debe quitarles: derecho de elección libre (religiosa), derechos de ser juzgados por los tribunales. Para impedir que el rey pudiera cometer abusos el parlamento debe reunirse con frecuencia. Todo rey o reina, antes de asumir el poder, debería prestar juramento de respetar los derechos de los ingleses. De este modo, la Revolución Gloriosa concedió libertad religiosa, reforzó la independencia judicial, estableció un nuevo equilibrio de poder entre el rey y el parlamento, hizo de la Cámara de los Comunes la primera institución del Estado, abolió la censura y estableció la libertad de expresión.

El modelo de la monarquía francesa de 1791, sería diseñado en la Asamblea constituyente de 1789 de acuerdo con unas premisas racionales. La Constitución francesa de 1789 establece que la soberanía reside en la nación y no en el rey; proclama la libertad de pensamiento y de prensa, y la libertad religiosa; suprime la nobleza y las distinciones hereditarias, las corporaciones y gremios, y establece el libre acceso a los oficios y funciones que hasta ahora se reservaban a la nobleza o se heredaban. Este modelo establece que el mantenimiento de los lugares de culto pasa a depender del Estado que remunerará a los religiosos. Se garantiza la inviolabilidad de la

propiedad privada y se crea un servicio de instrucción pública para proveer a los ciudadanos con una educación básica libre y gratuita.

Asimismo la Constitución de 1789 insta la división de los poderes ejecutivos, legislativos y jurídicos. La elaboración de las leyes correspondía a una Asamblea Legislativa. Votaba las leyes, los impuestos y declaraba la guerra, con aprobación del rey. El poder ejecutivo quedaba en manos de la monarquía, el rey tiene el poder de nombrar y destituir a los ministros. El poder judicial se otorgaba a unos tribunales independientes. Finalmente, establece un sistema de elección clasificando a los ciudadanos en activos que eligen a los electores de su departamento y ciudadanos pasivos para quienes no paguen impuestos.

En alguna medida el modelo inglés sería difundido por los diputados realistas y aceptado en gran parte por ellos mismos, y el modelo francés sería sostenido por los liberales. Quedaría un tercer modelo que era el republicano y Federal de los Estados Unidos América, recién constituido.

Joaquín Varela Suanzes, en su estudio sobre los modelos constitucionales en las Cortes de Cádiz, mantiene que ninguno diputado, ni aún de entre los procedentes de la América hispana, se manifestó expresamente a favor del modelo constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica, si bien a estos ni el modelo inglés ni el modelo francés le resultaban convincentes. El modelo inglés porque la mentalidad antiaristocrática de los representantes de ultramar, partidarios de un igualitarismo liberal, chocaba con los principios básicos del constitucionalismo inglés. Tampoco podían aceptar el modelo constitucional francés al entrañar el radical uniformismo político y administrativo, basado en el dogma jacobino de la soberanía nacional. Ello suponía un insuperable obstáculo para que los diputados representantes de ultramar.

Hagamos una consideración de estos diferentes modelos atendiendo primero al modelo constitucional de los Estados Unidos de América. Los redactores de la Constitución americana fundaron una república porque reconocían que el mandato del pueblo podía ser una amenaza tan grande a la libertad como el gobierno de un rey. James Madison explica en El Federalista LXIII, que la representación “puede ser necesaria en ocasiones para defender al pueblo contra sus propios errores e ilusiones transitorias”³²⁶. Por tanto, el marco constitucional de Estados Unidos busca proteger al pueblo de los peligros de la democracia popular sin control. Los representantes del pueblo son los últimos responsables y deben rendir cuentas a los ciudadanos que, con su voto, los pueden desplazar de su cargo y representación cuando lo estimen oportuno.

El modelo republicano queda fuera del pensamiento de los constituyentes de Cádiz. Con respecto a la influencia del modelo constitucional de los Estados Unidos América, en la opinión establecida por J. Varela Suances no hubo ningún grupo en las Cortes de Cádiz, ni tampoco ningún diputado que se manifestara a favor de la República, ni siquiera entre los diputados de la América Española.

Martínez Sospedra manifiesta que el modelo norteamericano era de muy difícil asimilación. No sólo se trataba de una constitución republicana tendencialmente democrática sino también de una ley fundamentalmente federal. Nadie pensaba en Cádiz en establecer algo diferente a una Constitución fundamentalmente centralizada. Además para el referido autor se trata de un texto constitucional nacido de una ruptura sangrienta y dolorosa con respecto al régimen anterior, y con marcado tinte radical.

³²⁶ Richard Brookhiser, *James Madison*, Basic Books; 2011

Sin embargo si podría servir como ejemplo de cómo organizar la relación entre el ejecutivo y el legislativo – parlamento - y podía servir de fuente de argumentos sobre la cuestión de las facultades del Rey, dado el carácter marcadamente monárquico de la institución presidencial junto con la rígida separación de poderes que establece la Constitución americana.

Pero no sólo parece que el modelo constitucional americano constituyera un modelo sino que incluso los diputados liberales repudiaron de forma expresa el modelo constitucional de los Estados Unidos. Así se recoge en el debate del Título VI del Proyecto de Constitución que organizaba el gobierno interior de los reinos y provincias, en los que se enfrentaron las tesis uniformistas de los liberales y las tesis provincialistas de los diputados hispanoamericanos.

Los diputados liberales llegaron a calificar de federalistas a los diputados hispanoamericanos al acusarles de pretender desvirtuar el uniformismo. En este debate tomaría parte el asturiano Jose María Queipo de Llano y Ruiz de Sarabia, Conde de Toreno, uno de los grandes impulsores y el principal defensor de un texto constitucional muy diferente del francés de 1791 que actuó como un verdadero revolucionario³²⁷.

³²⁷. “En estas Cortes su participación fue muy notable, casi siempre al lado de Agustín Argüelles, diez años mayor que él, con el que compartió vivienda. Toreno fue el diputado más joven y quizá el más radical de aquella Asamblea, en donde defendió, entre otras muchas medidas, la abolición de los señoríos- siendo él señor de varios-, de las pruebas de nobleza para acceder al ejército, del voto de Santiago y del Tribunal de la Inquisición, además de apoyar con ardor juvenil la elaboración de un texto constitucional no muy distinto al francés de 1791, basado en la soberanía nacional y en la división de poderes. Dos principios a partir de los cuales la Constitución de 1812 redujo de forma muy considerable los poderes del rey, entonces ausente, y atribuyó la dirección política del Estado a unas Cortes unicamerales, elegidas por un amplio cuerpo electoral. Toreno llegó a sostener en Cádiz algunas medidas que no se atrevieron a defender los demás liberales, como la de prohibir al monarca el veto de las leyes aprobadas en Cortes, incluso de forma meramente suspensiva, como establecía la Constitución de 1812”. Joaquín

El Conde de Toreno señalaría que la Constitución en ciernes intentaba por todos los medios “excluir el federalismo puesto que no hemos tratado de formar sino una Nación sola y única”³²⁸. Más adelante realizará una expresa referencia a la Constitución americana al manifestar que “Lo dilatado de la Nación la impele bajo un sistema liberal al federalismo; y si no lo evitamos si vendría a formar, sobre todo con las provincias de Ultramar, una federación como la de los Estados Unidos, que insensiblemente pasaría a imitar la más independiente de los antiguos cantones suizos, y acabaría por configurar Estados separados”.³²⁹

Cabe señalar, este espíritu uniformista en los doceañistas Agustín Argüelles, Conde de Toreno y Diego Muñoz-Torrero, que fueron liberales en las Cortes de Cádiz y moderados desde el Trienio. El propio Agustín Argüelles insistiría en los supuestos problemas del federalismo y en la necesidad de alejarse del modelo de la “Federación Angloamericana”³³⁰

Esta actitud del Conde de Toreno sería muy diferente a la que tendría con los años en su evolución descrita por J. Varela hacia el liberalismo europeo, acomodándolas a las que eran ya mayoritarias en el seno de nivel europeo, en donde el utilitarismo de Bentham, el positivismo sociológico de Comte o la teoría constitucional de Constant y de los doctrinarios franceses, pese a sus diferencias,

Varela Suanzes-Carpegna “*La trayectoria del conde de Toreno: del liberalismo revolucionario al liberalismo conservador*” *Historia Constitucional* (revista electrónica), n.5, 2004. <http://hc.rediris.es/05/indice.html> pg,309.

³²⁸ *Diarios de las Discusiones y Actas de las Cortes*. Tomo 11, pg 212

³²⁹ *Diarios de las Discusiones y Actas de las Cortes*. Tomo 11, pg 247

³³⁰ *Diarios de las Discusiones y Actas de las Cortes*. Tomo 11, pg. 244-246. Sobre las diversas concepciones de los Diputados doceañistas respecto de la distribución territorial del poder en el nuevo Estado Constitucional, *vid.* Joaquín Varela Suanes «*Las Cortes de Cádiz: representación nacional y centralismo*», en la obra colectiva *Las Cortes de Castilla y León. 1188-1988*, Valladolid, 1990, vol. II, pp. 217-245.

coincidían en su crítica al iusnaturalismo racionalista que había inspirado a los revolucionarios franceses de 1789 y, en buena medida, a los liberales españoles de 1812. Recordemos que Toreno llegará a ser Presidente del Gobierno en junio de 1835 con la Reina gobernadora, y a ser elegido diputado por Asturias aprobada ya la Constitución de 1837.

En todo caso, constatamos con Joaquín Varela la intransigencia con que Toreno defendió, no ya un Estado unitario, sino también uniforme. Según este autor, su jacobinismo nacionalista es una constante de su pensamiento y se hace patente tanto en sus discursos en Cádiz, en donde denunció con especial vehemencia el federalismo de los americanos, no menos que el formalismo de algunos realistas.

Su pensamiento político entronca con el modelo isabelino en el que recalarían muchos hombres que procedían de las filas del despotismo ilustrado, como el antiguo afrancesado Javier de Burgos que modelaría la división territorial de España, vertebrada según el modelo del centralismo francés.³³¹

Si el modelo americano, según vemos, apenas tuvo trascendencia no podemos decir lo mismo del modelo constitucional inglés. El constitucionalismo inglés tuvo en España una indudable difusión, como también lo tuvieron los pensadores del siglo XVIII europeo.³³² En España se conocieron los comentarios constitucionales

³³¹ Varela Suanzes-Carpegna, Joaquín. “*La trayectoria del conde de Toreno: del liberalismo revolucionario al liberalismo conservador*” pg 312

³³² Entre las obras mas significativas de la recepción del pensamiento europeo en España durante el siglo XVIII, incluida la teoría constitucional inglesa, señalaremos las siguientes: MARAVALL, J. A. «*Las Tendencias de reforma política en el siglo XVIII*», Revista de Occidente, t. XVIII, 1967, pp. 51 y 82. Ídem, «*Cabarrús y las ideas de reforma política y social en el siglo XVIII*», Revista de Occidente, t. XXIII, n.º 69, 1968, pp. 285-286. SÁNCHEZ AGESTA, Luis .*El Pensamiento Político del Despotismo Ilustrado*, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1953, pp. 95 a 113 y 260. ANES, C.G. *Economía e Ilustración en la España del siglo XVIII*, Barcelona, 1969. ELORZA, A. *La Ideología Liberal en la Ilustración española*, Tecnos, Madrid, 1970. Mariano y PESET, Jose Luis *La Universidad Española (siglos XVIII y XIX). Despotismo Ilustrado y*

de Blackstone, pero sobre todo, el autor inglés mas conocido sería Locke que se percibe en ilustrados como Campomanes y Jovellanos y liberales como Cabarrus y Martínez Marina. Pero sobre todo el constitucionalismo inglés que se difundió en la España del siglo XVIII fue a través de la obra de Montesquieu “El espíritu de las leyes”, sin duda la obra mas conocida por destacados liberales e ilustrados como Ibáñez de la Rentería, Enrique Ramos, León Arroyal, Alonso Ortiz, Alcalá Galiano, Cadalso, Foronda y Jovellanos.³³³ Es bien conocida la lectura de Montesquieu por Jovellanos.³³⁴

El constitucionalismo inglés tendría una notoriedad a partir de la Guerra de la Independencia sobre todo en la España no ocupada por los franceses, puesto que Inglaterra se había convertido en el principal aliado del pueblo español en la lucha contra la invasión francesa.

El papel más destacado en la difusión del constitucionalismo inglés correspondería al tantas veces citado, el aristócrata inglés Lord Holland. Henry Richard Vassal Fox, tercer barón de Holland, y a él mismo se atribuye también la construcción del liberalismo en España³³⁵. Nacido en Winterslow House, en 1773, y educado en Eton y en Oxford había visitado París en 1791 conociendo a La Fayette y a Talleirand así como casi todos los hombres importantes de la época. En 1793 conoció por primera vez España y en la primera de 1796 tomaría asiento en la Cámara de los Leones.

Revolución Liberal, Taurus, Madrid, 1974. SARRAILH, *La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII*, Fondo de Cultura Económica, México. 2.^a reimp. 1979. HERR, R. *España y la Revolución del siglo XVIII*, Aguilar, Madrid, 1979. ORTIZ, A. DOMÍNGUEZ *Carlos III y la España de la Ilustración*, Alianza, Madrid, 1989. SÁNCHEZ-BLANCO PARODY, Francisco. *Europa y el pensamiento español del siglo XVIII*, Alianza Universidad, 1991.

³³³ Elorza, Antonio. *La Ideología Liberal en la Ilustración Española*, capítulo IV, «La recepción de Montesquieu», pp. 69 y ss.

³³⁴ *La distribución de poderes según Montesquieu* por el Académico de Número Excmo. Sr. Vallet de Goytisolo, D. Juan. Sesión de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de 13 de octubre de 1987.

³³⁵ Moreno Alonso, Manuel. *La Forja del liberalismo en España. Los amigos españoles de Lord Holland 1793-1840*, Madrid, 1997.

Este personaje había venido a España en 1803 por razones de salud y se convertiría en un gran defensor de las libertades públicas. A su salón literario, Holland House (Holland Park), en Londres, acudirán notables diputados, escritores y artistas. Según ya hemos señalado no solo es a Jovellanos con quien conecta y se relaciona Lord Holland, realmente conoce a toda una serie de personalidades que serán decisivas en la obra de la Constitución de 1812, uno de los mas ilustres amigos es Manuel José Quintana con quien mantiene treinta y cinco años de amistad. En los papeles de la Holland House que se conservan en la British Library se encuentran 28 cartas del epistolario entre ambos, estudiado y publicado por Manuel Moreno Alonso. Quintana le dedicará su obra política mas importante “Cartas a Lord Holland sobre los sucesos políticos de España en la segunda época constitucional”.

También hemos señalado como Arguelles sería otro de los grandes amigos de Holland en España. Le considera un hombre de lectura y reflexión pero le achaca haber cometido errores como legislador por la pasión por el aplauso. Para Lord Holland, las Cortes gaditanas estuvieron formadas de jóvenes con más imaginación que experiencia y opulencia, y que además, “han bebido sus nociones de libertad de los enciclopedistas de Francia, más que de la historia de sus antiguas instituciones o de los inmediatos deseos de su propio país”.

2.7 Los diputados de Cádiz y su ideologías

Disponemos en la actualidad de un numero apenas superior a los 300 de personajes que fueron diputados en las Cortes de Cádiz, diputados o diputados suplentes por cada una de las representaciones tanto españolas como de Ultramar. Conocemos en gran medida las tendencias de cada uno, quienes eran absolutistas, quienes eran conservadores, quienes eran realistas, quienes eran anti-liberales y también quienes eran liberales.

De ello daremos cuenta en el apéndice final. Ello permite una clasificación que con diversos matices se viene haciendo aunque es evidente que no se puede hablar propiamente de partidos políticos ni estructuras ideológicas más o menos organizadas. Lo más claro es que hay una tendencia liberal que prevalece aunque no hay partido liberal en sentido estricto ni siquiera todos los liberales defienden las mismas posiciones.

2.7.1 Los liberales de Cádiz

Quizá, son los liberales los que mejor define el grupo avanzado que pretende instaurar en la nueva Constitución una limitación del poder absoluto la división de poderes y la soberanía nacional. Hemos visto que los más importantes personajes de esta tendencia liberal tiene una formación intelectual sólida y además han conectado con escenarios diferentes o con personalidades como es el influyente Lord Holland así como con publicaciones como las conocidas El Semanario Patriótico, El Espectador Sevillano, El Observador, El Español.

Suele considerarse que este grupo de liberales está encabezado por Agustín de Arguelles, así nos lo presenta el Conde de Toreno y así figura como defensor de la libertad, máximo inspirador de la libertad de prensa, defensor de la abolición de la esclavitud y del tormento, defensor de la abolición de la Inquisición. Junto a él figura como destacado liberal Diego Muñoz Torrero, sacerdote que defiende la abolición de la Inquisición a la que no ve ningún sentido y defiende también la libertad de imprenta y, como el mismo diría, los derechos de la libertad. Destacado liberal es asimismo, Joaquín Lorenzo Villanueva y Astengo, del que el Conde de Toreno dice que, aunque en un principio era incierto en sus opiniones, se afirmó después y sirvió al liberalismo.

Pertenece al grupo liberal Antonio Capmany y Monpalau, elegido diputado por el Principado de Cataluña. Liberal moderado, perteneció a la Comisión que debía elaborar el Proyecto de

Constitución y, junto con Agustín Argüelles y Jaime Creus Martí, formó parte de una junta especial de inspección para dar el visto bueno a dicho Proyecto, donde se acordó, entre otras disposiciones, el hacer un Diario de Sesiones.

También perteneció Capmany a la Comisión de once diputados, encargada de elaborar el proyecto de libertad de imprenta, que defendió con gran entusiasmo y a la comisión de doce diputados encargada de elaborar el reglamento interior de las Cortes y a él se debió también la iniciativa de que en la plaza principal de todos los pueblos de España se colocara una lápida conmemorando la promulgación de la Constitución.

José María Queipo de Llano y Ruiz de Saravia, Conde de Toreno, elegido junto a Argüelles por el Consejo de Regencia, fue un reconocido liberal que intervino con gran entusiasmo a favor de la libertad de imprenta y en la discusión sobre la soberanía nacional. La obra referida de Joaquín Varela Suanzes-Carpena documenta minuciosamente su trayectoria en 1888 de Oviedo a Londres y su paso a Cádiz cerca de la Junta Central y la Regencia para convertirse en el diputado más joven de Cádiz.

Otros liberales reconocidos serían José María Calatrava, gran orador, que defendió la causa constitucional y manifestó que no había de buscarse antecedentes a cada precepto del proyecto. A él se le vincula como a los más significados personajes de esta época entre ellos Argüelles, Isturiz, Toreno, Mendizábal la masonería. Al lado de Argüelles y Mendizabala formará parte del grupo de “La Trinidad” del partido liberal. Liberal es asimismo Manuel García Herreros que perteneció como Argüelles, Zorraquín y Fernández Golfín, a un grupo de liberales a los que se llamó “Los Suplentes” que se caracterizaron por su ideología claramente radical.

También se le atribuye la credencial de liberal a Joaquín Díaz Caneja, diputado por León que hizo gala de un liberalismo avanzado.

Evaristo Pérez de Castro y Colomera, diputado por Valladolid, fue también liberal, si bien se mostró partidario del poder moderador de la institución monárquica como instrumento para atender a la revolución y las acciones que surgen en todas las asambleas parlamentarias.

José Espiga y Gadea, canónigo, era un destacado liberar al que se había acusado de jansenista. Influenciado por el pensamiento de Rousseau y por la tesis de Sieyes sobre la creación de un hábeas corpus que había propuesto el diputado Andrés Llano expresó que las circunstancias actuales no eran las más apropiadas para ello, por ser tiempos de guerra.

Manuel Mateo Luján y Ruiz, Diputado por Extremadura es asimismo considerado liberal. Se habían negado a reconocer a José I y a jurar su gobierno y fue conducido a Bayona aunque se fugó siendo elegido diputado en Cádiz. Será fiel seguidor de su gran amigo Muñoz Torrero a quien apoya cuando este presenta su propuesta de soberanía nacional. Afirma que la seguridad personal y la libertad individual son tan recomendables que conviene liberarlas de los terribles ataques que sufren en todos los tiempos.

Antonio Oliveros, diputado por Extremadura y calificado por Menéndez Pelayo como clérigo jansenista destacó por su decidido liberalismo y por la claridad de sus discursos figurando entre los liberales más destacados. Fue uno de los primeros diputados junto con Espiga y Gadea y Muñoz Torrero en proponer una Constitución formando parte de la Comisión que se creó para elaborar un Proyecto de Constitución Política de la monarquía y asimismo defendió la división de poderes.

Antonio José Luis de Padrón, diputado de Canarias, franciscano, había conocido a Benjamin Franklin y a Washington y predicó con gran virulencia contra la esclavitud y la trata de negros. Considerado liberal, votó en contra del Tribunal de la Inquisición.

Forma parte del grupo de diputados que Menéndez Pelayo llamó jansenistas.

Hubo también destacados liberales entre los diputados americanos, como José Ramón Ramos de Arizpe defensor de la libertad de comercio e inspirador luego en México del llamado liberalismo rutinero.

Carlos Pla en su escrito sobre la génesis del liberalismo español distingue tres grupos de liberales, los liberales preconstitucionales (Capmany, Pérez Villamil, Jovellanos...), los liberales constitucionales de referencia inglesa como el Conde de Toreno y los liberales constitucionales radicales como Muñoz Torrero.³³⁶

2.7.2. Los Absolutista, Realistas y Reaccionarios.

En el otro lado de la ideología liberal, también con distintos matices, pueden situarse toda una serie de personajes a quienes se les considera reaccionarios, absolutistas y en ocasiones se les llama serviles. A veces se incluye en este grupo a los reformistas moderados también llamados jovellanistas.

Según manifiesta José María García León este grupo tiene una serie de principios básicos, aceptan que todo poder viene de Dios, llegándose que pueda coparticipar este poder. El poder de los reyes procede de Dios, en un contrato con el pueblo que supone que la soberanías indivisible y compete de lleno al monarca. En gran medida siguen siendo defensores de la sociedad estamental y consecuentemente de los mayorazgos y también en muchas ocasiones defiende la primacía de la Iglesia y también el mantenimiento de la Inquisición.

Gracias este grupo una serie de personajes representan un realismo moderado. El primero de estos personajes sería Ramón

³³⁶ Pla, Carlos: *La génesis del liberalismo español*, Marco, José María (Coord.): *Genealogía del liberalismo español (1759-1931)*, Madrid, 1998, pg. 90-91.

Lázaro de Dou, jurisconsulto, diputado provincial por Cataluña, canónigo de Barcelona quien de una parte podemos considerarle como portador de un liberalismo moderado que votó la soberanía nacional y firmó la Constitución pero también es defensor de los mayorazgos y se le considera un reformista de pensamiento moderadamente conservador.

Alonso Cañedo y Vigil, diputado por Asturias, sacerdote, es decididamente antiliberal y muestra un espíritu marcadamente reaccionario. Sigue la misma tesis de Borrull en cuanto a la representatividad y se manifiesta contra unas cortes unicamerales, proclives a la democracia. Apoya decididamente a la Inquisición, aunque no estaba de acuerdo con la Constitución sería uno de los firmantes.

El referido Francisco Javier Borrull y Villanova, diputado por Valencia, que había sido Secretario del Santo Oficio, se presenta como un conservador moderado, defiende la existencia de los señoríos jurisdiccionales y es contrario al jacobinismo liberal y centralizador. En el debate sobre la soberanía nacional, la rechaza e incluso rechaza la misma idea de Constitución que veía como ataque directo a la soberanía real y al principio de legitimidad tradicional de que participaban las llamadas leyes fundamentales.

Destacado absolutista es Pedro Inganzo, perteneciente al más genuino pensamiento conservador de principios tradicionalistas. De gran elocuencia, entendió que la religión debía estar en la Constitución como una ley que obligase a todos los españoles a profesarla. La religión es la primera de todas las leyes fundamentales. Se mostró partidario de la monarquía moderadora y contrario a un unicameralismo democrático. Javier Creus y Martí diputado provincial por Cataluña profesaba también ideas absolutistas y principios tradicionalistas sin embargo votó a favor de la soberanía nacional y fue uno de los firmantes de la Constitución.

Simón López de Or, diputado por Murcia es considerado un absolutista radical. Hizo la observación de que en el primer proyecto constitucional no se hiciera mención a la Virgen y se declaró infractor de la Constitución en todo lo que atacara a la religión de palabra o escrito.

Defendió la Inquisición. José Pablo Valiente, diputado por Sevilla, absolutista, se manifiesta partidario de la institución monárquica como la mejor para la sociedad de los hombres. Defiende la libertad de imprenta pero manifiesta que su aplicación no debe ser inmediata dadas las circunstancias. Es considerado uno de los diputados más serviles y le une una gran relación con Inganzo.

Francisco Gutierrez de la Huerta, diputado por Burgos, de espíritu reformador, se le considera como un destacado jurista de opiniones muy conservadoras. José Luis Morales Gallego, diputado por Sevilla se distinguió en principio como diputado conservador, fue contrario a la libertad de imprenta, pero progresivamente, se fue acercando al bando liberal y admitirá el principio de soberanía nacional.

Santiago Key y Muñoz, diputado por Tenerife y la Palma, de pensamiento absolutista, apoyó la política de los realistas, como Simón López de Or, huyendo de los elementos avanzados. Diputado americano conservador es Blas Ostolaza que había sido Confesor del Rey en su destierro de Valençay. Se distinguió por su espíritu reaccionario. Acabaría sus días siendo denunciado por corruptor. Dos diputados realistas Ignacio Martínez de Villela, diputado por Aragón y de pensamiento absolutista y Cristóbal Góngora Fernández Delgado, diputado por Granada y afrancesado, habían firmado antes la Constitución de Bayona.

2.7.3. Los Metropolitanos

Hemos de destacar la gran presencia de diputados ultramarinos. Para ser elegido diputado de Ultramar era preciso haber nacido en la

provincia que se representaba. Las elecciones tuvieron lugar en septiembre de 1810 en la Isla de León y Cádiz para facilitar la elección de ciertas provincias fue necesario la reunificación de unidades electorales.

Según manifiesta Joaquín Varela estos formarían la tercera tendencia constitucional presente en las Cortes. Las élites criollas seguirían apostando por mantener los lazos con la madre patria aunque a través de una Constitución que tuviese en cuenta el autogobierno de las provincias de Ultramar y que diesen una justa representación a la población americana en los órganos del estado constitucional.

Con estas premisas en los referidos constituyentes se mezclaron principios procedentes de la escolástica española y del derecho de Indias con principios revolucionarios, Rousseau y los enciclopedistas e incluso el influjo del iusnaturalismo germánico.

Fue importante el número de diputados ultramarinos por Cuba: Andrés Jáuregui, Bernardo O'Gabán, Marqués de San Felipe y Joaquín de Santa Cruz; Por Chile, Joaquín Fernandez de Leyva y Miguel Riesco Puente, por Filipinas, Jose Manuel Couto y Avello Bravo, Pedro Perez de Tagle, Ventura de los Reyes; Por Guatemala Jose Ignacio Avila, Florencio del Castillo, Antonio Larrazabal y Arrivillaga, José Antonio López de la Plata, Andrés Llano, Manuel Llano, José Francisco Morejón Mariano Robles Dominguez; Por Nueva España José Ignacio Beye de Cisneros, José Eduardo Cárdenas, José María Couto, Francisco Fernandez Munilla, Jose Cayetano Foncerrada y Uribarri, Miguel González Lastiri, Jose Miguel Gordo Barrios, Juan Jose Gureña y Garayo, Jose Miguel Guiridi Alcocer, Jose María Gutierrez de Terán, Máximo Maldonado, Joaquín Maniau, Mariano Mendiola, Manuel María Moreno, Octaviano Obregón, Antonio Joaquín Pérez y Martinez Robles, Pedro Bautista Pino, José

Miguel Ramos Arizpe, Salvador Sanmartín, Andrés Savariego, José Simeón de Uría.

Los diputados americanos no funcionaron de forma uniforme salvo a la hora de tratar objetivos comunes intervinieron sobre los principios liberales como hicieran Mejía Lequerica, Guridi Alcocer, Ramos Arizpe, Larrazábal, Ramón Feliu.

De una serie de reformas para lograr un equilibrio entre el autonomismo y el independentismo. Inca Yupanqui, Florencio del Castillo, Guitierrez de Terán, Antonio Larrazabal, Gordo y Barrios defendieron en muchas ocasiones la libertad de imprenta y fueron contrarios a los privilegios de la nobleza.

Hubo liberales activos sin tantas reivindicaciones americanistas, otros a medio camino entre las ideas liberales y las mas tradicionales, y otros abiertamente independentistas como José Álvarez de Toledo, Beye de Cisneros, José Domingo Caicedo y Santa María, y Florencio del Castillo.

2.8 Destacados constituyentes de Cádiz:

Aun cuando nos ha parecido conveniente considerar una breve biografía de cada uno de los diputados que intervinieron en las Cortes de Cadiz y que reseñamos al final de este trabajo en un apéndice que recoge una semblanza de 303 diputados doceañistas, nos parece de interés en este epígrafe en el que recogemos la recepción de la aportación filosófica y política en el conocimiento de aquellos diputados así como su concreta actuación dar una breve referencia de aquellas personalidades mas destacadas y de su ideología y participación en los debates.

A tal efecto recogemos solamente algunas de las figuras más destacadas, dejando para el siguiente capítulo intervenciones singulares y concretas que afectan a cada una de las grandes

aportaciones de la Constitución de Cádiz al pensamiento filosófico, jurídico y político contemporáneo.

2.8.1 Agustín de Arguelles y su Discurso preliminar a la Constitución de 1812

Agustín de Arguelles era el último hijo de una familia de hidalgos, y acabará convirtiéndose en el más renombrado parlamentario al servicio de Ideario Político Liberal, de la regeneración política española y del nacimiento del parlamentarismo en España.

Nacido en Rivadesella en 1776, Agustín Arguelles, a los doce años ingresa en la Universidad de Oviedo y aparece ya como Bachiller en Derecho hacia 1790, completando estos estudios con los de Cánones. La primera ocupación que tuvo en Argüelles fue la de familiar asistente del asturiano Pedro Díaz Valdés, protegido de Campomanes y Jovellanos y nombrado por este obispo de Barcelona.

Jovellanos que había nacido en Gijón 20 años antes y que había sido al inicio de la Revolución francesa apartado de la vida pública por Carlos IV por sus ideas ilustradas le acepta para que le acompañe a la Embajada de Moscú, cargo que finalmente no se produce pues Jovellanos será detenido y desterrado a Mallorca.

Arguelles pasa a Madrid en 1800 y ocupa dos empleos en la Administración, el primero en la Secretaria de interpretación de lenguas, dependiente del Ministerio de Estado, que desempeñaba Leandro Fernández de Moratín y el segundo en la Secretaria de Estado y del Despacho de Hacienda trabajando ya en 1805 como oficial de la Convalidación de Vales reales, con Sixto Espinosa, hombre de confianza de Godoy quién facilita que fuera enviado a Londres, con una misión diplomática secreta con la Corte inglesa.

La noticia de haberse apoderado los ingleses de Buenos Aires había sorprendido el gobierno de Madrid que quería ver en aquel acto

el principio de una revolución general en América. Para abrir negociaciones el ministro Sixto Espinosa propuso a Godoy que enviase a Argüelles como agente secreto. Conoció en Londres las nuevas corrientes ideológicas que recorrían Europa y para así evitar las buenas relaciones con políticos ingleses del partido liberal, sobretudo con Lord Holland.

Con la caída de Godoy en 1808 recibe la orden de regresar y conoce en Londres la presencia de Torrero y De la Vega comisionados de la Junta de Asturias, poniéndose en contacto con ellos y participando activamente en las negociaciones con los representantes del Gobierno inglés, retornando en diciembre de 1808 con ellos a Asturias.

Arguelles pretende alistarse en las milicias que combaten al ejército francés, pero no es aceptado ni por su salud ni por su edad pues ya tiene 33 años. En 1809 marcha a Sevilla donde se une a Jovellanos quién tras el motín de Aranjuez, había rechazado formar parte del gobierno de José Bonaparte y representaría a Asturias en la Junta Central con la idea de contribuir a reformar las Cortes.

Quizá, por su gran personalidad, importa recordar la relación que existe entre Lord Holland y Agustín Arguelles. Hasta su llegada a Sevilla procedente de Inglaterra en 1809, Agustín de Argüelles era un perfecto desconocido entre los españoles, pero Lord Holland le conocía desde su primer viaje España en 1793 cuando éste era todavía muy joven.

En sus memorias, Lord Holland manifiesta que había conocido a Arguelles cuando era joven en Oviedo en 1793 entablando relaciones estrechas con su familia y según parece alojándose en su casa. De ahí nacería una amistad entre ambos. Argüelles sería enviado a Londres en 1806 cuando Godoy requirió sus servicios para que entrara en conversaciones con el gobierno británico de cara al establecimiento de una alianza contra Napoleón.

Según Olozaga, la estancia de Argüelles en Londres la aprovechó bien porque se dedicó a estudiar profundamente las leyes y costumbres de aquel original y bien gobernado pueblo y sobre todo a comprender el mecanismo a que deben los ingleses la libertad de que gozan tantos años y la fabulosa prosperidad que ha alcanzado.

Arguelles asiste diariamente a las sesiones del Parlamento y es allí donde esté estrecha su amistad con Holland tan aficionado a la literatura española³³⁷.

La amistad con Lord Holland que le sería muy útil en Londres donde pudo construir una pequeña red de amigos y estudiar el régimen político de aquel país. Luego le encontrará en Londres cuando se produce el levantamiento español contra los franceses.

La Junta del Principado de Asturias envía una delegación a Londres formada por Andrés Ángel de la Vega y el que poco después sería conde de Toreno. Argüelles y Toreno fortalecieron allí su amistad.

Arguelles sería nombrado por la Junta Central Secretario de la Junta de Legislación cuyos acuerdos serían los precedentes de los decretos de las copias del proyecto constitucional. Lord Holland conoce esta designación en una de las cartas que le envía Jovellanos: “Tenemos aquí a Don Agustín de Argüelles, que vino de Asturias en compañía del Conde de Torrero. Le hemos nombrado Secretario de la Junta de Legislación. Para esta fecha nombramos también a Blanco, pero ha reusado”³³⁸.

Marcelino Menéndez Pelayo manifiesta en su Historia de los heterodoxos el cambio que ira a efectuar Argüelles. “Andando el tiempo llegó a ser uno de los santones del bando progresista”. Era

³³⁷ *Agustín de Arguelles, de 1820 a 1824. Reseña Histórica. Con una noticia biográfica del autor por don José de Olózaga y un prólogo de don Ángel Fernández de los Ríos.* Madrid. 1864, p.14.

³³⁸ Sevilla 11 de octubre de 1809. *Carta de Jovellanos a Holland*, 387

entonces “sólo un mozo de esperanzas, de natural despejo, y fácil aunque insípida afluencia, que sabía inglés, y había leído expositores de la constitución británica, sin corregir por ello la confusa verbosidad de su estilo”³³⁹.

El 25 de noviembre de 1809 la Comisión de Cortes nombraría los componentes de la Junta de Legislación que estaría presidida por un vocal de la Junta Central Rodrigo Riquelme, y por Manuel de Lardizábal, el Conde de Pinar, José Pablo Valiente, Antonio Ranz Romanillos, José blanco White, Alejandro Dolarea y Agustín Argüelles como Secretario con voto. Argüelles aceptaría complacido el encargo.

La Junta de Legislación acordaría la elaboración de un proyecto constitucional que sirviera a las Cortes en el que se diseñaron la división de poderes, el papel de las Cortes, la organización administrativa y la libertad de imprenta.

El proyecto elaborado por aquella Junta no pretendía ser sino una reforma alejándose de las ideas de los revolucionarios franceses especialmente de los jacobinos. Se quería presentar aquel proceso como el resultado de la forma del antiguo, la adecuación del antiguo a los nuevos tiempos evitando la ruptura y aprovechando la situación planteada por obligación de para hacer una revolución justificada por la modernización.

Refugiada la Junta Central en Cádiz en enero de 1810 los liberales presionaron a la agencia nombrada tras la disolución de la Junta Central. Argüelles el Conde de Toreno ejercieron de líderes de aquellos liberales y dirigieron sus opiniones en los debates parlamentarios. Fue entonces cuando Argüelles, que había sido elegido como diputado suplente, cobraría fama de orador, sobre todo

³³⁹ Menéndez Pelayo, Marcelino: *Historia de los Heterodoxos españoles*. Pag 343.

en su discurso sobre el proyecto de ley relacionado con la libertad imprenta y tomaría la dirección de las reuniones de la Comisión constitucional apoyándose en Romanillos un personaje singular.

Después de participar en la Junta de Legislación constituida por la Junta Central, nombrado diputado, se convertiría en uno de los grandes líderes del grupo liberal de aquellas Cortes que se inauguraron solemnemente el 24 de septiembre de 1810 .Argüelles jugara un papel importante en la primera de las grandes cuestiones planteadas como sería la libertad de imprenta.

Lord Holland manifiesta que en la primera apertura de las Cortes, Argüelles consiguió un gran ascendiente sobre sus colegas, llegando ser el líder del partido popular en la Asamblea. Le achaca, sin embargo, que por “la pasión por el aplauso” cometió muchos errores como legislador y hombre de Estado. Según Holland “En toda historia imparcial de aquellos tiempos, Argüelles debe soportar su parte de culpa por los errores en la Constitución, el recelo ante Wellington y los ingleses y el injusto e impolítico tratamiento de las colonias americanas”³⁴⁰.

Pero sobretodo destacará su prestigio como parlamentario según refleja el conde de Toreno: "a la cabeza de los liberales campearon Agustín Argüelles, brillante en la elocuencia, en la expresión numeroso, de ajustado lenguaje cuando se animaba, felicísimo y fecundo en extemporáneos debates, de conocimientos varios y profundos, particularmente en lo político, y con muchas nociones de las leyes y gobiernos extranjeros. Lo suelto y noble de su acción, nada afectada, lo elevado de su estatura, la viveza de su mirar, daban realce a las otras prendas que ya le adornaban”.³⁴¹

³⁴⁰ Moreno Alonso, Manuel. *La Forja del liberalismo en España*. Pg. 43.

³⁴¹ Queipo de Llano, José María. VII Conde de Toreno. *Historia del levantamiento, Guerra y revolución de España*. BAE. Tomo LXIV. Madrid. 1953. Pgs. 3 y 4

Su labor queda expuesta con precisión por J.L.Comellas. “Destaca, ante todo, la actividad verdaderamente titánica de Agustín Argüelles. Sistemáticamente los debates, acudiendo a la derecha cada vez que la discusión cobra un sesgo difícil o, improvisando argumentos sobre la marcha, o contradiciéndose con pasmosa naturalidad cuando no quedaba otro recurso. El Divino, con su oratoria fluida y apasionada, fue el héroe de la reforma constitucional.”³⁴²

Designado miembro de la Comisión de Constitución, fue nombrado en el seno de esta Comisión, en unión de Antonio Espiga, para preparar el Discurso Preliminar de la Constitución. En este discurso se encuentra realmente su pensamiento político.

En la excelente introducción al Discurso Preliminar de la Constitución de Cádiz realizada por Luis Sánchez Agesta se matiza que el fuese el autor de todo el texto, lo cierto es que él fue quien lo leyó ante las Cortes por acuerdo de la propia Comisión de Constitución, pronunciando un breve discurso. Sin duda hubo alguna otra colaboración que pudo ser de Ranz Romanillos, de Espiga, de Muñoz Torrero y del secretario Pérez de Castro, pero la pluma de Argüelles fue quizá la predominante en este texto.

Suele considerarse como fuente principal de la Constitución la raíz tradicional según se señala en una frase de este Discurso Preliminar: “nada ofrece la Comisión en su proyecto que no se haya consignado del modo más auténtico y solemne en los diferentes cuerpos de la nación española...”.

Esta frase supone que Argüelles acepta la influencia de Martínez Marina. En efecto en una carta enviada a Lord Holland el 2 de noviembre de 1808 recomienda la obra de Martínez Marina como

³⁴² Comellas, José Luis. *El trienio constitucional*. Estudio general de Navarra. Madrid. 1963.

la mejor fuente de información de cuál ha sido la constitución histórica de España. Se refiere no a la Teoría de las Cortes, obra que aparecería cinco años después, sino al Ensayo histórico sobre la antigua legislación y principales cuerpos legales de León y Castilla.

Otra de las cuestiones que aparece destacada en el Discurso Preliminar es la referida a la Soberanía Nacional. Había quedado claro en los decretos publicados entre septiembre de 1810 y enero de 1811 que los principios fundamentales en los que la Constitución debía fundarse eran: soberanía nacional, división de poderes, monarquía moderada y libertad de los ciudadanos. Las Cortes habían afirmado ya el 24 de septiembre que: “Los diputados que componen este Congreso, y que representan a la nación española, se declaran legítimamente constituidos en Cortes Generales y extraordinarias y que reside en ellas la soberanía nacional.”

Quedaba claro de este modo que la soberanía nacional reside en el Congreso, que representa a la nación y que expresa su voluntad general. Fue Muñoz Torrero quien anunció de forma irreversible el proceso constituyente con una reforma radical. Las Cortes no aceptan las usurpaciones de Napoleón y declara la libertad, la independencia y la soberanía nacional considerando que era nula la renuncia hecha en Bayona, por falta de consentimiento de la nación.

El Discurso Preliminar se refiere asimismo a la libertad de imprenta como vehículo de las luces e instrumento que contribuye a la ilustración y un adelantamiento general de las naciones, la primera cuestión planteada, la libertad de imprenta y la libertad de opinión cuyo reconocimiento fue encomendado por la Junta Central a la regencia y que las Cortes apresuraron a regularla.

Otro de los grandes contenidos del Discurso Preliminar es el referido a la división de poderes y la racionalización de la estructura constitucional. Nuevamente es el Decreto de 24 de septiembre el que recoge su fundamentación al manifestar que: “ no conviniendo queden

reunidos el Poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, declaran las Cortes generales y extraordinarias que se reservan el ejercicio del Poder legislativo en toda su extension...Las Cortes generales y extraordinarias declaran que las personas en quienes delegaren el Poder ejecutivo, en ausencia de nuestro legítimo Rey el Señor D. FernandoVII, quedan responsables á la Nacion por el tiempo de su administracion, con arreglo á sus leyes...Las Cortes generales y extraordinarias habilitan á los individuos componian el Consejo de Regencia, para que bajo esta misma denominacion, interinamente y hasta que las Cortes elijan el gobierno que mas convenga, ejerzan el Poder ejecutivo.”

El Discurso Preliminar se limitara en éste asunto a subrayar que esta clasificación está señalada por la naturaleza misma de la sociedad y por consiguiente se considera lógico que el ejercicio de la autoridad soberana se divida en potestad legislativa, ejecutiva y judicial.

Su realización es algo sencillo tal y como lo mantiene el propio discurso al señalar que: “su separación es indispensable, mas los límites que se deben señalar particularmente de la autoridad legislativa ejecutiva para que formen un justo inestable equilibrio son tan inciertos que se establecimiento así donde todos los tiempos manzana de la discordia entre los autores más grandes de la ciencia del gobierno.”

Manifiesta Sánchez Agesta que este Discurso Preliminar es en cierta manera un caso único en historia del constitucionalismo universal y más que un preámbulo es un estudio analítico que señala la divisoria entre dos regímenes políticos verdaderamente diferentes , el que corresponde al Antiguo Régimen y el que corresponde a la nueva arquitectura constitucional planteada por la Constitución de Cádiz de 1812, con un examen de las causas y los medios con que cabe restaurar el nuevo edificio constitucional de España.

Si el Discurso Preliminar es una pieza esencial para entender la Constitución de Cádiz no es menos importante la obra del propio y Argüelles realizado bajo el título la Reforma Constitucional de Cádiz.

Puede decirse que la ocupación de escribir se había apoderado de muchos de los refugiados de los emigrados liberales españoles después del trienio liberal. Argüelles se encuentra en Londres y allí escribirá el *Examen Histórico de la Reforma Constitucional*. Su escrito tiene un carácter informativo, contar las cosas tal y como el vio que fueron.

En la introducción manifiesta dos puntos “la Reforma Constitucional de España no fue un acto superfluo ya literario de las cortes extraordinarias, y el carácter y extensión que tuvo provinieron de voluntariedad o capricho.” “La Junta Central tuvo al fin que reconocerlo solemnemente cuando, en mayo de 1809, anunció la convocación de cortes generales de toda la monarquía para que echasen los fundamentos del gobierno con que sabía de regir el uso excesivo la nación”³⁴³

La reconstrucción de Argüelles es verdaderamente interesante. Tras una larga introducción desarrolla el tiempo en que se crea hasta la disolución de la Junta Central y el nombramiento del Consejo de Regencia. En un segundo capítulo parte del Decreto de 24 de septiembre de 1810 para tratar de la elección de diputados de las provincias y de suplentes en Cádiz y de la instalación de las Cortes extraordinarias. Un tercer capítulo lo dedica a la propuesta de la discusión de la libertad de imprenta y a las referencias de las proposiciones de los diputados de América así como al nombramiento de la Regencia.

³⁴³ Agustín Argüelles. *La reforma constitucional de Cádiz*. Comentado por Longares, Jesús.. Madrid, Iter Ediciones 1970.

El capítulo cuarto habla de la traslación de las Cortes a Cádiz y el quinto de las primeras discusiones. En el sexto se ocupa de las tensiones internas en las Cortes, de las diversas alternativas y partidos y de la triste y dolorosa separación de América. El capítulo siete se refiere a la presentación a las Cortes del Proyecto de Constitución realizado por la Comisión de Constitución. Los siguientes capítulos tratarán de diversas cuestiones para finalizar con el cierre de las sesiones de las Cortes Extraordinarias.

2.8.2 Diego Muñoz-Torrero destacado artífice de la Constitución de 1812

Uno de los artífices de las Cortes de Cádiz y el principal protagonista del fin de la Inquisición Española así como uno de los máximos defensores de la libertad de imprenta sería Diego Muñoz-Torrero y Ramírez Moyano.

Muñoz Torrero había nacido en Cabeza del Buey, Badajoz el 21 de 1761. Hijo de un boticario y maestro de latín, con el que estudiaría hasta su ingreso en la Universidad de Salamanca adonde iría a estudiar Teología y Filosofía, en 1778 obtiene el título de bachiller en artes y 1783 se gradúa como bachiller en Teología.

Ordenado sacerdote en 1784 es nombrado primeramente Catedrático de Filosofía y dos años después Catedrático de Regencia de Artes. Reconocido como una persona de gran categoría intelectual y humana será elegido en 1787 Rector cuando apenas tenía 27 años, en plena época en donde las nuevas filosofías y las nuevas ideas políticas se extendían por toda Europa.

Su ejercicio como Rector fue sobresaliente llevando a cabo importantes medidas, incrementando los fondos existentes en la biblioteca universitaria, solventado los conflictos existentes entre las facultades de medicina y artes por un lado y los de Teología y jurisprudencia por otro, creando el colegio de filosofía y

preocupándose por la reforma de los métodos de enseñanza y por el cambio de los estudios, prácticas académicas y libros de textos.

Paralelamente y ya configurando su personalidad llenándola de valores políticos e intelectuales, acudir a las tertulias organizadas por el abogado Ramón de Salas en su casa o en su despacho, con militares, juristas, nobles, filósofos y estudiantes en las que se intercambian ideas y opiniones, todas ellas encuadradas en el espíritu de los nuevos tiempos. Durante esta época trabó amistad con diversos personajes entre ellos con el poeta Manuel José Quintana.

Concluido su ejercicio como Rector decidió dedicarse en exclusiva al ejercicio de la vida religiosa, abandonando la Universidad y trasladándose a Madrid para opositar a una de las capellanías vacantes adscritas a la iglesia de San Isidro. Esta plaza no la obtiene a pesar de que estos momentos es Primer Ministro el también extremeño Manuel Godoy.

Conociendo sus méritos el Marqués de Villafranca del Bierzo le concede una canonjía como patrono que era de la Colegiata de Santa María del Villafranca del Bierzo donde permanecerá una serie de años hasta su traslado a la Isla de León a finales de verano de 1810, como diputado en las Cortes de Cádiz por la provincia de Extremadura.

En los acontecimientos de mayo de 1808 que se suceden en Madrid, Muñoz-Torrero es uno de los que arenga al pueblo madrileño en contra del invasor dedicándose a organizar en la clandestinidad la resistencia patriótica y las Juntas de Defensa contra el enemigo francés. El 23 de julio de 1810 será elegido Diputado por la provincia de Extremadura marchando a la Isla de León donde asistirá a la apertura de las Cortes.

Muñoz-Torrero será el primer diputado en intervenir haciendo varias proposiciones del tipo liberal según se reproduce en el Diario de Sesiones : “En seguida tomó la palabra el Diputado D. Diego

Muñoz-Torrero y expuso cuan conveniente sería decretar que las Cortes generales y extraordinarias estaban legítimamente instaladas: que en ellas reside la soberanía; que convenía dividir los tres Poderes legislativo, ejecutivo y judicial, lo que debía mirarse como base fundamental, al paso que se renovase el reconocimiento del legítimo Rey de España el Sr. D. Fernando VII como primer acto de la Soberanía de las Cortes; declarando al mismo tiempo nulas las renunciaciones hechas en Bayona, no solo por la falta de libertad, sino muy principalmente por la del consentimiento de la Nación desenvolvió estos principios con muchos y sólidos fundamentos sacados del derecho público, y de la situación política de la Monarquía.³⁴⁴,”

La intervención de Muñoz-Torrero sería recogida en una minuta que fue discutida por los diputados en una sesión que se prolongó hasta las 12 de la noche del mismo día y fue aprobada por unanimidad tras un acalorado debate. El texto sería ratificado por el Consejo de Regencia para darle validez legal y base jurídica quedando la declaración del siguiente modo: “Los diputados que componen este Congreso y representan a la nación española se declaran legítimamente constituidos en Cortes generales extraordinarias, en las que reside la soberanía nacional”.

De este modo las Cortes de Cádiz se constituyen como un poder revolucionario, auténtico depositario de la soberanía guardando preeminencia las disposiciones aprobadas por ellas sobre el resto de las disposiciones del Estado.

Asimismo el texto afirmaría que: “las Cortes Generales extraordinarias, conformes en todo con la voluntad general, pronunciada del modo más enérgico y patente, reconocen, proclaman y juran de nuevo como único y legítimo rey al señor don Fernando VII

³⁴⁴ *Diario de sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias*, Sesión de 24 de Septiembre de 1810

de Borbón, y declaran nula, de ningún valor ni efecto, la cesión de la corona que se dice hecha en poder de Napoleón, no sólo por la violencia que intervino en aquellos actos injustos e ilegales, sino principalmente por haberle faltado el consentimiento de la Nación”.

Estas afirmaciones suponían la declaración de ilegítimo e ilegal el reinado de José I. A este principio de la soberanía nacional se unirían otros como el de la separación de poderes, el de la responsabilidad del poder ejecutivo ante el legislativo; el de designación parlamentaria del gobierno, el de la inviolabilidad de los diputados y el que las cortes serían competentes para el nombramiento y remoción de todo tipo de autoridades.

El Decreto de 24 de septiembre de 1810 se convertirá en la piedra angular sobre la que va a pasarse la constitución de Cádiz que dos años más tarde se juraría y la participación de Muñoz-Torrero en la elaboración de la Constitución de Cádiz sería verdaderamente notable.

Muñoz-Torrero se dedicó en cuerpo y alma a la tarea parlamentaria, pasaba muchas horas en la sala de las cortes preparando las sesiones y los debates parlamentarios. Muñoz-Torrero participó en nueve comisiones creadas por las Cortes para tratar diversos asuntos, fue Presidente de las mismas Cortes por algún tiempo y participó activamente en numerosos debates sobre todo en los referidos a las doctrinas liberales como la libertad de imprenta, la abolición de Santo Oficio y desde luego la redacción del texto constitucional.

La intervención de Muñoz-Torrero fue decisiva en las más importantes cuestiones siendo la primera la realización de la propia Constitución. A fines de 1810 se planteaba dentro de las Cortes la urgencia de redactar un texto constitucional que recogiera los principios que fundamentarían el nuevo Estado diseñado por los constituyentes de Cádiz.

Para ello se creó una Comisión formada por 13 diputados entre los que se encontraba Muñoz-Torrero para que propusieran un proyecto de Constitución Política de la Monarquía. Sería elegido Presidente de esta Comisión el propio Muñoz-Torrero y en este mismo mes de marzo comenzaría la confección de este documento que finalizaría en agosto de 1811 cuando se presentaba ante el Congreso los resultados de la Comisión iniciándose los debates sobre el proyecto de Constitución.

Para defender y aclarar los artículos del texto constitucional participaría activamente Muñoz-Torrero quien manifestó que no se encontraba nada nuevo que no estuviera ya contenido en los diferentes cuerpos de la legislación española, tratando de este modo de unir los nuevos principios liberales con las tesis más conservadoras que defendían la continuidad tradicional.

Una segunda cuestión en la que Muñoz-Torrero actuó de manera decidida fue la relativa al principio de Soberanía Nacional que quedaría establecida por los artículos 2 y 3 del proyecto de Constitución que establecerían que la Soberanía Nacional se halla depositada las Cortes en su calidad de único órgano de representación.

Esta cuestión dividió a los diputados de Cádiz en dos grupos, los absolutistas para quienes la Soberanía Nacional no existe sino está referida al monarca y los liberales para quienes la Nación se sitúa por encima de soberano, que se limita a ratificar y hacer ejecutivas las decisiones adoptadas por las Cortes constituidas como la primera Institución del Reino.

Muñoz-Torrero fue uno de los grandes defensores del principio de la Soberanía Nacional manifestando que siempre había sido la nación su depositaria aunque luego sería despojada de ella por la actuación arbitraria y despótica de los sucesivos gobiernos tras la implantación de la monarquía absoluta. En este sentido manifestaría que las actuaciones de los Reyes habían estado sometidas a las normas

aprobadas por las Cortes defendiendo por tanto una fundamentación histórica.

2.8.3 Isidoro de Antillón y Marzo

Isidoro de Antillón y Marzo había nacido en un pueblo de Teruel y había cursado estudios en el Seminario Conciliar y en las Universidades de Zaragoza y Huesca, realizando luego los estudios en Leyes, doctorándose en Valencia en ambos Derechos.

Especializado en Derecho Canónico, se instalaría en Madrid como profesor de Geografía en el Seminario de Nobles. En mayo de 1801 se convertía en abogado de los Reales Consejos e ingresaría en la Academia de Derecho Español de Santa Bárbara de Madrid para la que elaboró un discurso titulado “Disertación sobre el origen de la esclavitud de los negros, motivos que la ha perpetuado, ventajas que se atribuyen y medios que podrían adoptarse para hacer prosperar nuestras colonias sin la esclavitud”

La actividad intelectual y el cargo de catedrático de Geografía e Historia del Seminario de Nobles abrió a Antillón en octubre de 1802, el camino para el ingreso en la Academia de la Historia, realizando una profusa e intensa carrera científica que se interrumpiría dramáticamente en mayo de 1808.

El comienzo de la guerra contra Napoleón convirtió a Antillón en un infatigable publicista y en un activo político contra la invasión francesa. Antillón estuvo los sitios de Zaragoza, donde figuró en su Junta de Defensa, asistiendo también a la resistencia de Teruel como el miembro más destacado de su Junta de Gobierno.

Fue entonces cuando en 1809 pasó a Sevilla donde se encargó de dirigir, junto con José María Blanco el “Semanario Patriótico”, que había fundado Manuel Quintana y que tan ardorosamente contribuyó a difundir las opiniones liberales, ocupando también el cargo de director del Archivo de Indias y de la “Gaceta del Gobierno”. La Junta

Suprema, refugiada en Cádiz, le nombró magistrado de la Audiencia de Mallorca, puesto del que tomó posesión en junio de 1810.

Aunque en un principio fue anulada su elección para ser luego admitida, Antillón fue elegido diputado a las Cortes de Cádiz por Aragón, tomando posesión de su escaño el 23 de mayo de 1813, siendo uno de los más notables diputados, a pesar de lo tardío de la fecha en que llegó a Cádiz casi al final ya de la legislatura.

Durante los seis meses siguientes a su elección desarrolló una gran actividad en las Cortes como destacado miembro del grupo liberal y llegó a significarse tanto que se atrajo la enemiga del grupo antirreformista, siendo objeto de un atentado que dejó más maltrecha su ya precaria salud. Sus intervenciones en las Cortes se refieren esencialmente a temas jurídicos y económicos.

Formó parte de las Comisiones de Honor, Justicia, Sanidad y Traslación de las Cortes, mantuvo su desacuerdo con la propuesta que impedía que los diputados que pertenecían a las Cortes extraordinarias de 1810 volvieron a presentarse como cantidad a las ordinarias de 1813 y como jurista Antillón defendió siempre el estricto seguimiento de las normas jurídicas y oponiéndose a las facultades discrecionales de los jefes políticos, defendió la publicidad de las sentencias y de los votos de los magistrados.

Antillón consiguió la abolición de la pena de azotes y en particular de los azotes en las escuelas, “para que con ese castigo no envileciese a los jóvenes, a fin de que no pudiese recordarlo cuando llegasen a hombres”. Esta propuesta suya quedaría plasmada en el Decreto de 17 de agosto de 1813, que debía aplicarse en todos los centros educativos y que consideraba esta práctica como contraria al pudor, a la decencia y a la dignidad de los que son, o nacen, y se educan para ser hombres libres y ciudadanos de la noble y heroica nación española.” Asimismo defendió la libertad de imprenta.

En el aspecto económico Antillón apoyó la libertad económica y combatió las normas gremiales, defendió la contribución única y directa e intervino en favor de las desvinculaciones de tierras y contra los monopolios gubernamentales. Por último, Antillón intervino también en temas relacionados con el funcionamiento de las Cortes, el gobierno de la nación, la integridad de la Monarquía en los dos hemisferios, la Junta de Sanidad o defendiendo la necesidad de establecer sanciones contra los afrancesados.

En suma, este personaje fue sin duda un destacado significado liberal y progresista cuyo relevante papel que había llegado a tener en el período revolucionario daría lugar a que al producirse el golpe de estado reaccionario de Fernando VII, que abolió la Constitución de 1812, Antillón se convirtiera en uno de los 40 primeros políticos destacados que habían de ser arrestados y juzgados.³⁴⁵

2.8.4 Jose María Queipo de Llano, Conde de Toreno

Otro de los constituyentes más significados es José María Queipo de Llano y Ruíz de Sarabia, VII Conde de Toreno. Recordemos sobre este personaje la excelente biografía realizada por Joaquín Varela Suanzes-Carpena a la que hemos hecho diversas alusiones.

Nacido en Oviedo en 1786 pertenecía a una de las familias más nobles y acaudaladas Asturias. Único hijo varón tuvo cuatro hermanas una de ellas casa con el General Juan Díaz Porlier, militar español perteneciente a una importante familia afincada en la América española quien siempre defendería a la Constitución de Cádiz.

³⁴⁵ Beltrán, Ricardo y Rospide: *Isidoro de Antillón, geógrafo, historiador y político*. Discurso leído ante la Real Academia de la Historia en la recepción pública de Ricardo, D. Beltrán y Rospide, el 31 de mayo de 1903, Madrid, Imprenta y Litografía del Deposito de la Guerra. Alberto Gil Novales: *Isidoro Antillón. Las pequeñas Atlántidas*, Barcelona, 1959, pgs 125-132.

El Conde de Toreno curso estudios de humanidades y ciencias en Cuenca, Salamanca y Madrid y establecidos sus padres en Madrid en 1797 entraría en contacto con Agustín Argüelles, Ramón Gil de la Cuadra y José Fernández Crespo. Hijo de su tiempo conocerá las obras más relevantes de los pensadores de la ilustración y del liberalismo, como Locke, Montesquieu, Voltaire y Rousseau.

En 1803 regresaría a Asturias donde formó parte de la Junta revolucionaria durante la Guerra de Independencia. Tras los sucesos del 2 de mayo de 1808 de los que fue testigo, se incorporó a la Junta General del Principado de Asturias junto a Álvaro Flórez Estrada. La Junta se proclamó soberana declarando la guerra a Napoleón y decidió enviar a Londres una delegación presidida por el Conde de Toreno para recabar el apoyo británico a la lucha contra los franceses.

Una vez realizado su cometido, el Conde de Toreno regresaría de Londres en diciembre de 1808 y después de una breve estancia en Oviedo se trasladaría a Sevilla, sede de la Junta Central, primero como alférez mayor del Principado de Asturias y comisionado por su Junta y la de León y posteriormente elegido como constituyente de Cádiz tomando su cargo el 11 de marzo de 1811 y teniendo una importante relación con Jovellanos porque sentía una gran admiración.

En las Cortes de Cádiz su participación fue muy notable, interviniendo a favor de la libertad de imprenta con gran entusiasmo así como la discusión del artículo 3º sobre la Soberanía Nacional. También intervino el debate sobre la desamortización de los bienes atacando el sistema gremial que consideraba una rémora para el progreso de la nación.

Fue contrario a la pervivencia del foro eclesiástico y también contrario al mantenimiento de la Inquisición. Es considerado uno de los grandes oradores de las Cortes de Cádiz, prototipo de aristócrata ilustrado. Defendió la nobleza de los señoríos y las pruebas de la nobleza para acceder al ejército. Llegó a sostener algunas medidas

más allá de los demás liberales como la de prohibir al monarca el veto de las leyes aprobadas en Cortes, incluso de forma meramente suspensiva.

Con la reacción absolutista en 1814 viajó a Lisboa y allí conoció que el rey Fernando VII le había condenado a muerte y confiscando sus bienes. Muchos años después, en 1827 comenzó a escribir su historia del levantamiento y revolución de España, que publicaría en París en 1832.

En esta obra recuerda en sus primeros libros los acontecimientos históricos que se sucedieron el Montín de Aranjuez, las renunciaciones de Bayona, el levantamiento del pueblo de Madrid, la creación de las Juntas por toda España, la elaboración de la Constitución de Bayona, el asentamiento de la monarquía de José I, el desarrollo de la Guerra de independencia.

A partir de los libros undécimo y duodécimo examina los acontecimientos de 1810, los avatares de la Junta Central, de la residencia y de la convocatoria de las Cortes así como de la elección de sus miembros.

En el libro 13 examina la obra de las Cortes y en particular la elaboración de la Constitución de 1812, dando cuenta de los inquietantes pronunciamientos contra la metrópoli en varias provincias americanas. En el libro décimo octavo examina la obra de las Cortes, la Constitución de 1812.³⁴⁶

2.8.5 Juan Nicasio Gallego y Hernández del Creso

Juan Nicasio Gallego y Hernández del Creso había nacido en Zamora y estudiaría en Salamanca Filosofía y Derecho Civil y Canónico. Ordenado sacerdote, a causa de la invasión napoleónica huirá a Sevilla y a Cádiz, participando durante el proceso de

³⁴⁶ Varela Suances-Carpegna, Joaquín. *el Conde de Toreno: biografía de un liberal (1786-1843)*. Marcial Pons, 2005.

preparación de la convocatoria de Cortes, como Secretario de Jovellanos, en la creación de la Junta de Ordenación y Relación de los escritos e informes relativos a los puntos que se habían de tratar en las Cortes. Elegido diputado por Zamora, fue uno de los diputados liberales moderados, de clara intencionalidad reformista.

En el debate sobre la Soberanía Nacional Juan Nicasio Gallego mostraría una gran clarividencia para interpretar su significado con todas las consecuencias. Para preguntarse “¿con qué facultades y con qué objeto estamos sancionando las leyes y discutiendo una Constitución, si ha estar en manos del Rey destruirla con un decreto al momento que llegue? Todo esto es legítimo y nulo si no es esencialmente soberana la nación que representamos.”³⁴⁷

Juan Nicasio Gallego formo parte de la comisión de 11 diputados que elaboró el proyecto de Libertad de imprenta, enfrentándose al diputado Joaquín Tenryto y Montenegro, coronel del Ejército, elegido por Galicia y contrario a las reformas liberales, que pedía la censura previa y al que recordaría que el derecho más legítimo del hombre es publicar sus propias obras. Tenreyro sería uno de los delatores en 1814.

2.8.6 Antonio Capmany

Antonio Capmany había sido elegido diputado el 25 de febrero de 1810 por Tarragona y pertenecía a la comisión que debía lograr el proyecto de Constitución formado parte una Junta especial de inspección para dar el visto bueno a dicho proyecto junto con Arguelles y Creus.

También pertenece a la Comisión de 11 diputados encargado de elaborar el proyecto de libertad de imprenta que defendió con gran entusiasmo y a la Comisión de 12 diputados encargado de elaborar el

³⁴⁷ García Leon, Jose María: *Los diputados doceañistas*. Volumen II Cádiz 2012 pg. 160

reglamento interior de las Cortes. Pero no fue una persona apacible como consta cuando se manifiesta contra Ranz Romanillos al que acusó de afrancesado, entre otras razones, por haber traducido el Estatuto de Bayona, proponiendo que fuera expulsado de la Academia de Historia por maligno. Capmany publicó varios folletos en Cádiz entre ellos su discurso pronunciado en la sesión pública de las cortes en lo de mayo de 1813 denunciando el impreso intitulado “el defensor acérrimo de los derechos del pueblo.”³⁴⁸

Lord Holland tuvo también una relación directa con Capmany y manifiesta haberle oído contar diversas anécdotas sobre Felipe II y singularmente manifestarle los prejuicios ocasionados por los jesuitas en la literatura. En su diario español Lady Holland manifiesta que según el historiador catalán la decadencia de las letras españolas coincidió con el auge de la Compañía de Jesus que había marcado a España por su profunda ignorancia y groseros prejuicios.³⁴⁹

Lord Holland manifestaría en su diario que para la realización de las Cortes se puede sacar mucho del auxilio de don Antonio Capmany. “Cuando se trata de principios de gobierno, y aún más de lengua, es algo caprichoso y muy porfiado en sus ideas; pero prescindiendo de que es muy buen español y tiene una pluma mordaz, en cuanto los hechos de tiempos antiguos, y a lo que llama los franceses “recherches”, me parece que es uno de los más útiles del día y tal vez, aun cierto punto, el padre de esa ciencia en España.”³⁵⁰

2.8.7 José Miguel Guridi y Alcocer

Hemos de resaltar entre los constituyentes de origen americano la personalidad de José Miguel Guridi y Alcocer³⁵¹, distinguido

³⁴⁸ Enric Jardí: *Els catalans de les Corts de Cadis*, Barcelona, 1963. Guillermo Forteza: Juicio crítico de las obras de Capmany, D. Antonio Barcelona, 1857

³⁴⁹ *The Spanish Journal of Elizabeth Lady Holland*, pg. 153

³⁵⁰ *Carta a Jovellanos*, en Cádiz, a 31 de mayo de 1809

³⁵¹ Guridi y Alcocer, José Miguel: 1763-1828, nacido el 26 de diciembre de 1763 en San Felipe Ixtacuistla, Tlaxcala, estudia en los seminarios de Puebla y el de

canónigo, orador y escritor liberal que perteneció a una generación de abogados que contribuyó a dar forma jurídica a la independencia de México y a su forma de gobierno, desde el enfrentamiento entre el ayuntamiento de la Ciudad de México y la Real Audiencia en 1808, hasta la promulgación de la Constitución de 1824.

Guridi y Alcocer tomó parte como diputado en aquellos sucesos. En 1810, al recibirse la convocatoria a las Cortes por la Audiencia de México, Guridi y Alcocer fue elegido diputado propietario por el distrito de Tlaxcala en las Cortes Extraordinarias españolas.

Al igual que los otros diecisiete diputados que representaron a la Nueva España, Guridi y Alcocer defendió la abolición de la Inquisición, la libertad de prensa y la autonomía de las provincias frente al poder monárquico. Siendo uno de los once diputados de ultramar que ocuparon la presidencia durante las Cortes de Cádiz y el Trienio Liberal.

Su actividad en las Cortes de 1810-1813 fue muy fecunda. Destacó como orador eclesiástico y parlamentario. Intervino en numerosos discursos, destacando su actuación sobre la abolición de la esclavitud, la congrua de los curas de los indios; la igualdad de derechos y territorios entre españoles y americanos, de modo que implícitamente los territorios americanos dejaran de ser Patrimonio Real de la Monarquía absoluta: “La providencia fue sapientísima en lo político, y ningún error tiene en lo físico, pues (los territorios

Santos, para después pasar al Real Colegio de Abogados, donde se doctoró en teología en 1791, y en cánones en 1801. Posteriormente, estuvo en el Seminario Palafoxiano, de donde partió como párroco a diversos lugares cercanos a la capital del virreinato como Acajete y Tacubaya. Más tarde, fue cura en la iglesia del Sagrario Metropolitano. También fue promotor fiscal y defensor del juzgado de testamentos en la curia de Puebla, y provisor y vicario general en la de México. En la Catedral fue canónigo lectoral.

americanos) no son partes de la Península, sino de la Monarquía, que se compone de ésta y de aquella”³⁵².

Fue importante su intervención sobre la definición de la nación española. A la propuesta de que "La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios", Guridi y Alcocer respondió: "La colección de vecinos de la Península y demás territorios de la Monarquía unidos en un Gobierno ó sujetos a una autoridad soberana", es decir cambió la palabra "colección" de individuos en vez del concepto “reunión”.

De este modo se adelantaba la idea de un Estado Nación y de un posible federalismo, sin referirse a la monarquía: "La unión del Estado consiste en el Gobierno ó en sujeción a una autoridad soberana, y no requiere otra unidad. Es compatible con la diversidad de religiones, como se ve en Alemania, Inglaterra, y otros países; con la de territorios, como en los nuestros, separados por un inmenso Océano; con la de idiomas y colores, como entre nosotros mismos, y aun con la de naciones distintas, como lo son los españoles, indios y negros. ¿Por qué, pues, no se ha de expresar en medio de tantas diversidades en lo que consiste nuestra unión, que es en el Gobierno?"

Guridi y Alcocer propuso la organización de un Estado federal para la Monarquía hispana. La "diversidad" de las naciones sólo tenía un nexo de "unión", el Gobierno. A diferencia de otros diputados americanos, Guridi no propuso la Monarquía como el vínculo de legitimación de las distintas partes que formaban el Estado, ¿dejaba el camino expedito para formular otras formas de Estado? Su propuesta, omitida, apelaba a un estado republicano”.

Fue suya la propuesta de cambiar la palabra “esencialmente” por “radicalmente”, en la redacción del siguiente artículo: "La

³⁵² Entre sus obras se encuentra la titulada “*Representación de la Diputación Americana a las Cortes de España*” Mexico 1820.

soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo le pertenece exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales, y de adoptar la forma de gobierno que más le convenga."³⁵³

El mismo en el debate del Acta Constitucional de la República Federal de México manifestaría que desde que fue individuo de la Comisión de Constitución en las Cortes de España propuso se dijese que la soberanía reside radicalmente en la nación, para explicar no sólo que la soberanía es inagenable e imprescriptible, sino el modo con que se halla en la nación, pues que esta conserva la raíz de la soberanía, sin tener su ejercicio." ³⁵⁴

2.8.8 Pedro Inganzo y Rivero

Había nacido en Herrerías el 22 de diciembre de 1764. Prelado, teólogo y canonista español, era hijo de Antonio José de Inganzo Posada y de María Teresa Rivero y Valdés, de antigua y acomodada familia. Comenzó sus estudios con los benedictinos de Llanes, tras lo cual marchó a Palencia, a estudiar Filosofía y Artes en el convento de San Pablo, donde permaneció durante cinco años, entre 1775 y 1780.

Después se trasladaría a Sevilla llamado por el Arzobispo Alonso Marcos de Llanes, de quien era familiar, porque le nombró su Secretario, doctorándose en la Universidad de Sevilla en Derecho

³⁵³ A su regreso a México, fue diputado en los Congresos Constituyentes de 1822-1823 y 1823-1824. Durante este último, el 10 de diciembre de 1823, en el debate del Acta Constitucional de la República Federal de México, Guridi y Alcocer reiteró sus razones de por qué la soberanía debe residir "radicalmente" en la nación:

³⁵⁴ Así el artículo 3º del Acta mencionada quedó asentado de la manera siguiente: "La soberanía reside radical y esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece exclusivamente a ésta el derecho de adoptar y establecer por medio de sus representantes la forma de gobierno y demás leyes fundamentales que le parezcan más convenientes para su conservación y mayor prosperidad, modificándola o variándola, según crea conveniente."

Canónico y ganando por oposición aquella Cátedra. En 1798 volvería a Asturias para ocupar el puesto de gobernador eclesiástico de la diócesis.

La Junta Superior del Principado de Asturias le encarga en 1808 de los asuntos de Gracia y Justicia, y será elegido diputado por Asturias para las Cortes de Cádiz, en las que juró el 21 de junio de 1811. Perteneciente al pensamiento conservador de principios tradicionalistas y dotado de gran elocuencia destaca por su defensa sistemática de las posiciones reaccionarias, defensa de la Inquisición y la cámara alta, así como por su oposición sistemática a cualquier reforma que afectase a la Iglesia.

Para Pedro Inganzo la Monarquía era una institución permanente e inmutable, si bien se mostró partidario de una Monarquía moderadora.

En 1813 publicó el Discurso sobre la confirmación de los obispos (publicado en Cádiz ese mismo año y con 2ª edición en Madrid, en 1836) y el Discurso sobre la segunda proposición preliminar del proyecto acerca de la Inquisición, en el nº 23 del diario Apéndice al Procurador general de la Nación y del Rey. Al año siguiente en 1814 se le designó para formar parte de la Comisión de la Universidad de Sevilla.

A la vuelta de Fernando VII, obtuvo el obispado de Zamora (el 26 de septiembre de 1814), haciendo gala de sus ideas monárquicas. Es uno de los informantes contra los diputados liberales en 1814-1815, y se le encargó impugnar la Teoría de las Cortes de Martínez Marina, lo que hizo en dos folletos. Se negaría a jurar la Constitución de Cádiz en 1820 y el 3 de agosto de 1824 consigue el arzobispado de Toledo, siendo el 20 de diciembre nombrado cardenal por León XII.

2.8.9 Lázaro de Dou y Bassols

Canónigo español. Diputado provincial por Cataluña, fue elegido el primer Presidente de las Cortes en la sesión inaugural que se celebró en la Isla de León el 24 de septiembre de 1810.

Nacido en Barcelona el 11 de febrero de 1742, era hijo de Ignacio Dou y Sala, asesor y juez de Letras en el tribunal del Almirantazgo de Cataluña. Estudió con los jesuitas de Barcelona y posteriormente inició la carrera de Derecho en la Universidad de Cervera, que finalizaría en 1765; doctorandose en cánones en 1767. En 1770 ganó la Cátedra de decretales de Cervera. Fue ordenado sacerdote en 1795 y canónigo de Barcelona en 1805.

Diputado a las Cortes de Cádiz por Tarragona. , el 24 de septiembre de 1811 ocupó su presidencia. No fue ajeno a las controversias: tuvo un incidente con el Marqués de Palacios, al escribir contra él Sueños del marqués de Palacios y desvelos de la provincia de Cataluña (Cádiz, 1812, folleto en el que usó el pseudónimo de Antonio Filopolita).

Regalista, amante de las tradiciones locales y de la monarquía absoluta, empañó su fama por un dictamen en el claustro universitario, reproducido por la Gaceta de Madrid (3 de mayo de 1823), en el que empleó la frase "lejos de nosotros la peligrosa novedad de discurrir", que luego, ligeramente modificada, ha pasado a ser el símbolo de la época absolutista.

Se deben a su trabajo, entre otras obras: Instituciones de Derecho público general de España, con noticias del particular de Cataluña y de las principales reglas de gobierno en cualquier estado (Madrid, 1800-1803), Memoria sobre los medios de hallar dinero para los gastos de la guerra en que está empeñada la España, mediante una deuda nacional con la correspondiente hipoteca (Isla de León, 1810), y Memorias sobre vales (publicada en Diario Mercantil de Cádiz, 31 de julio de 1811).

Liberal moderado, votó la soberanía nacional y firmó la Constitución. Intervino en los debates sobre la abolición del tormento, la libertad de imprenta, la organización de las provincias, la reforma de la hacienda y el reglamento del consejo de regencia.

Derogada la Constitución se consagró al gobierno de la Universidad de Cervera. En 1815-1817 publicó en Cervera *La riqueza de las naciones*, explicación-corrección del libro de Adam Smith y siguió con un Proyecto sobre vales (Cervera, 1820), que ya había sido presentado a las Cortes de 1810, Equivalencia del Catastro de Cataluña con las rentas provinciales de Castilla (Cervera, 1822).

2.9 Otras aportaciones referidas a la Constitución de Cádiz de 1812

2.9.1 Presidentes y Secretarios de las Cortes

Para el funcionamiento de las Cortes extraordinarias se creó una Comisión encargada de hacer un Reglamento que fuera utilizado de forma interina. Esta Comisión fue nombrada el 6 de octubre de 1810 y terminó su trabajo y el 15 de noviembre presentándose el Reglamento ante las Cortes para su aprobación el 27 de noviembre de 1810.

En el segundo capítulo de dicho Reglamento se regulaban las competencias del Presidente y vicepresidente limitándolas a dirigir las sesiones invitar estipulando la duración del mandato del Presidente.

Las funciones del Presidente consistían en: abrir y cerrar las sesiones de las Cortes a la hora prevista; conceder la palabra los diputados por el orden que la hubieran pedido; fijar previo anuncio público el orden del día para la siguiente sesión; citar a los diputados para sesiones extraordinarias; conceder el uso de la palabra a los diputados que lo hubiera solicitado y por el orden en que hubiera sido

pedida; mantener el orden en la sala y firmar los decretos provenientes de las Cortes.

En total hubo 37 presidentes de la Cámara de los cuales 10 fueron americanos. El número de presidentes de las Cortes de 1810 ascendió a cinco y fueron los siguientes:

- Benito Ramón Hermida Maldonado. Fue catedrático y juez de Castilla, amigo de Jovellanos tenía una gran preparación jurídica, de ideas conservadoras defendió la libertad de imprenta.

- Ramón Lázaro de Dou y Bassols. Reputado jurisconsulto, escritor canonista, dependencia moderada, pero de ideas reformadoras. Trabajo sobre la abolición del tormento la libertad de imprenta el reglamento del consejo de regencia y la inquisición.

- Luis Rodríguez del Monte. Capitán de fragata, de tendencia liberal, formo parte de la Comisión encargada de elaborar el proyecto de Libertad de imprenta y de la del comercio de negros.

- José Luis Morales Gallego. Abogado y fiscal togado, conservador y finalmente liberal. Formo parte de 12 comisiones entre otras de la encargada de redactar el reglamento de Cortes. Fue opuesto a la libertad imprenta y contrario a la monarquía constitucional.

- Alonso Cañedo y Vigil. Sacerdote, de ideología antiliberal, hombre de grandes conocimientos científicos apoyo la Inquisición, exigió la firma de la Constitución, perteneció a la Comisión encargada de elaborar el Proyecto de Constitución.

El Reglamento para el gobierno interior de las Cortes establecido por Decreto de 24 de noviembre de 1810 señalaba también la normativa sobre las funciones, prerrogativas y obligaciones de los Secretarios de las Cortes. En el capítulo tercero titulado: de los secretarios, se prescribe que habría dos Secretarios que se elegirían entre los diputados por escrutinio.

Conocemos así mismo una larga lista de secretarios de los cuales se le referimos tan sólo algunos: José Aznarez, Miguel Antonio Zumalacarregui, Ramón Feliu, José María Calatrava, José Antonio Navarrete, Juan Nicasio Gallego, y finalmente Tadeo Joaquín de Gárate.

*2.9.2 Diputados que se negaron a jurar la Constitución*³⁵⁵

La Constitución fue jurada el 19 de marzo de 1812 interviniendo los diputados para realizar dicho juramento de forma solemne. La sesión se abría con la lectura de dos oficios del Ministro de Gracia y Justicia sobre las disposiciones de la Regencia para solemnizar la publicación de la Constitución.

Los Secretarios se colocaron las dos tribunas del Congreso, mientras uno leía la Constitución el otro cotejaba los artículos con otro ejemplar y acabada la lectura los presentes se pusieron en pie manifestando que aquella era la Constitución política de la monarquía española que las Cortes habían sancionado.

Firmó entonces a constitución el Presidente y todos los diputados que entonces eran 184. Algunos diputados realistas presentaron reticencias sobre el modo de efectuar el juramento entre ellos estaba Blas Ostolaza, Inganzo Rivero y Cañedo y Vigil. Esto hicieron los americanos Mejía Lequerica y el conde de Puñonrostro que no se quisieron dar por enterados de la obligatoriedad del juramento manifestando asimismo que sus países de origen eran ya prácticamente independientes.

Otros diputados se negaron sin mas a firmar la Constitución como los diputados Eguía, López de Or, Veladiez y Herrera y González Llamas.

³⁵⁵ García León, Jose María. *En torno a las Córtes de Cádiz*. Quorum editores. Cádiz 2012

Francisco Ramón Eguía y López de Letona era diputado suplente por Vizcaya, General de infantería y único diputado que tuvo Vizcaya en las Cortes. Absolutista radical, apenas quiso asistir a las sesiones de las Cortes, obtenido dispensa de éstas para poder acudir a la Junta General Militar sin perjuicio de su cargo de diputado

Alegó su negativa a jurar manifestando que no había asistido las discusiones y no había visto en las corporaciones de las que había sido miembro que se hubiese firmado sobre asunto alguno el que no hubiese asistido, afirmando asimismo que no tenía instrucciones de su provincia y debía dirigirse por la opinión general de sus paisanos que ama mucho sus fueros. Finalmente juraría la Constitución.

Simón López de Or, era diputado por la provincia de Murcia. Absolutista radical, hizo la observación de que el proyecto constitucional no se hiciera mención a la Virgen y declaró infractor de la Constitución a todo el que atacara a la religión de palabra o escrito. Dijo que la celebración de las sesiones en la Iglesia de San Felipe Neri de Cadiz se podría interpretar como un acto de profanación de un templo, defendió la Santa Inquisición y mostró su oposición a las corridas de toros. Finalmente firmaría la Constitución.

Jose María Veladiez y Herrera era diputado por Guadalajara. Fue destituido de su cargo de diputado, sin que se sepan las causas. En principio se negó a firmar la Constitución por estimar que era contraria a sus convicciones, aunque finalmente lo hizo ante la proposición de García Herreros, que declaraba indigno de la condición de español con pérdida de todos sus honores, distinciones, empleos, sueldos y privilegios, a quien se negara a firmarla y jurarla.

Pedro González Llamas era diputado por la provincia de Murcia. Mariscal de Campo de infantería, de pensamiento tradicional fue un declarado defensor de las leyes fundamentales o constitución histórica, manteniendo la tesis de que, aunque las Cortes no podían

derogar las leyes sí habría cierta posibilidad en sentido contrario, siempre que hubiera acuerdo entre las Cortes del Rey.

En la sesión secreta de 17 de marzo, alegó que sus principios y sentimientos no le permitían firmar ni jurar la nueva Constitución y que anticipaba esta declaración para que las Cortes determinasen lo que les pareciese justo y conveniente. Finalmente sería uno de los firmantes de la Constitución.

2.9.3 Relación de Diputados que firmaron la Constitución de 1812

Incluimos en nuestro trabajo como Apéndice una amplia reseña biográfica de los Constituyentes de Cádiz por orden alfabético, indicando su ideología y su actuación en la realización del texto Constitucional.

El 18 de marzo de 1812 se procedió a la firma por parte de los diputados de la Constitución de Cádiz de 1812. En total firmaron 183 diputados, no se estableció un orden de las firmas. Del total de firmantes pertenecía a la península 131 diputados siendo los demás representantes, en número de 52, pertenecientes a los territorios de la monarquía hispánica tanto de América como de Asia.

De entre los diputados del Reino de España encontramos los siguientes: 17 Valencia, 16 Castilla-León, 16 Cataluña, 15 Galicia, 14 Andalucía, 10 Castilla La Mancha, 10 Extremadura, 7 Asturias, 7 Murcia, 5 Aragón, 5 Baleares, 4 Canarias, 3 País Vasco, 1 Navarra y 1 Madrid). Desde los territorios de la monarquía hispánica en Ultramar encontramos los siguientes: 20 de México, 9 de Perú, 3 de Argentina, 3 de Venezuela, 2 de Cuba, 2 de Chile, 2 de Colombia, 1 de Guatemala, 1 de Honduras, 1 de Salvador, 1 de Nicaragua, 1 de Costa Rica, 1 de Panamá, 1 de Ecuador, 1 de Uruguay, 1 de República Dominicana, 1 de Puerto Rico y 1 de Filipinas.

Diputados firmantes

Vicente Pascual, diputado por la ciudad de Teruel, Presidente. **Antonio Joaquín Pérez**, diputado por la provincia de la Puebla de los Ángeles. **Benito Ramón de Hermida**, diputado por Galicia. **Antonio Samper**, diputado por Valencia. **José Simeón de Uría**, diputado de Guadalajara capital del Nuevo Reino de la Galicia. **Francisco Garcés y Varea**, diputado por la Serranía de Ronda. **Pedro González de Llamas**, diputado por el Reino de Murcia. **Carlos Andrés**, diputado por Valencia. **Juan Bernardo O'Gavan**, diputado por Cuba. **Francisco Xavier, Borrull y Vilanova**, diputado por Valencia. **Joaquín Lorenzo Villanueva**, diputado por Valencia. **Francisco de Sales Rodríguez de la Bárcena**, diputado por Sevilla. **Luis Rodríguez del Monte**, diputado por Galicia. **José Joaquín Ortiz**, diputado por Panamá. **Santiago Key y Muñoz**, diputado por Canarias. **Diego Muñoz Torrero**, diputado por Extremadura. **Andrés Morales de los Ríos**, diputado por la ciudad de Cádiz. **Antonio José Ruiz de Padrón**, diputado por Canarias. **José Miguel Guridi Alcocer**, diputado por Tlaxcala. **Pedro Ribera**, diputado por Galicia. **José Mejía Lequerica**, diputado por el Nuevo Reino de Granada. **José Miguel Gordo y Barrios**, diputado por la provincia de Zacatecas. **Isidoro Martínez Fortún**, diputado por Murcia. **Florencio Castillo**, diputado por Costa Rica. **Felipe Vázquez**, diputado por el Principado de Asturias. **Bernardo, Obispo de Mallorca**, diputado por la ciudad de Palma. **Juan de Salas**, diputado por la Serranía de Ronda. **Alonso Cañedo**, diputado por la Junta de Asturias. **Gerónimo Ruiz**, diputado por Segovia. **Manuel de Rojas Cortés**, diputado por Cuenca. **Alfonso Rovira**, diputado por Murcia. **José María Rocafull**, diputado por Murcia. **Manuel García Herreros**, diputado por la provincia de Soria. **Manuel de Aróstegui**, diputado por Álava. **Antonio Alcaina**, diputado por Granada. **Juan de Lera y Cano**, diputado por La Mancha. **Francisco, Obispo de**

Calahorra y la Calzada, diputado por la Junta Superior de Burgos.**Antonio de Parga**, diputado por Galicia.**Antonio Payan**, diputado por Galicia. **José Antonio López de la Plata**, diputado por Nicaragua.**Juan Bernardo Quiroga y Uría**, diputado por Galicia.**Manuel Ros**, diputado por Galicia.**Francisco Pardo**, diputado por Galicia.**Agustín Rodríguez Bahamonde**, diputado por Galicia.**Manuel de Luján**, diputado por Extremadura.**Antonio Oliveros**, diputado por Extremadura.**Manuel Goyanes**, diputado por León.**Domingo Dueñas y Castro**, diputado por el Reino de Granada.**Vicente Terrero**, diputado por la provincia de Cádiz.**Francisco González Peinado**, diputado por el Reino de Jaén.**José Cerero**, diputado por la provincia de Cádiz.**Luis González Colombres**, diputado por León.**Fernando Llarena y Franchy**, diputado por Canarias.**Agustín de Argüelles**, diputado por el Principado de Asturias.**José Ignacio Beye Cisneros**, diputado por Méjico. **Guillermo Moragues**, diputado por la Junta de Mallorca. **Antonio Valcarce y Peña**, diputado por León.**Francisco de Mosquera y Cabrera**, diputado por Santo Domingo. **Evaristo Pérez de Castro**, diputado por la provincia de Valladolid.**Octaviano Obregón**, diputado por Guanajuato.**Francisco Fernández Munilla**, diputado por Nueva España.**Juan José Güereña**, diputado por Durango, capital del reino de nueva Vizcaya.**Alonso Nuñez de Haro**, diputado por Cuenca.**José Aznarez**, diputado por Aragón.**Miguel Alfonso Villagómez**, diputado por León.**Simón López**, diputado por Murcia.**Vicente Tomás Traver**, diputado por Valencia.**Baltasar Esteller**, diputado por Valencia.**Antonio Lloret y Martí**, diputado por Valencia.**José de Torres y Machy**, diputado por Valencia.**José Martínez**, diputado por Valencia.**Ramón Giraldo de Arquellada**, diputado por la Mancha.**El Barón de Casa-Blanca**, diputado por la ciudad de Peñíscola.**José Antonio Sombiela**, diputado por Valencia.**Francisco Santalla y Quindos**, diputado por la Junta Superior de León. **Francisco Gutiérrez de la Huerta**, diputado por

Burgos. **José Eduardo de Cárdenas**, diputado por Tabasco. **Rafael de Zufriategui**, diputado por Montevideo. **José Morales Gallego**, diputado por la Junta de Sevilla. **Antonio de Capmany**, diputado por Cataluña. **Andrés de Jáuregui**, diputado por la Habana. **Antonio de Larrazabal**, diputado por Guatemala. **José de Vega y Sentmanat**, diputado por la ciudad de Cervera. **El Conde de Toreno**, diputado por Asturias. **Juan Nicasio Gallego**, diputado por Zamora. **José Becerra**, diputado por Galicia. **Diego de Parada**, diputado por la provincia de Cuenca. **Pedro Antonio de Aguirre**, diputado por la Junta de Cádiz. **Mariano Mendiola**, diputado por Querétaro. **Ramón Power**, diputado por Puerto Rico. **José Ignacio Ávila**, diputado por la provincia de San Salvador. **José María Couto**, diputado por Nueva España. **José Alonso y López**, diputado por la Junta de Galicia. **Fernando Navarro**, diputado por la ciudad de Tortosa. **Manuel de Villafañe**, diputado por Valencia. **Andrés Ángel de la Vega Infanzón**, diputado por Asturias. **Máximo Maldonado**, diputado por Nueva España. **Joaquín Maniau**, diputado por Veracruz. **Andrés Savariego**, diputado por Nueva España. **José de Castelló**, diputado por Valencia. **Juan Quintano**, diputado por Palencia. **Juan Polo y Catalina**, diputado por Aragón. **Juan María Herrera**, diputado por Extremadura. **José María Calatrava**, diputado por Extremadura. **Mariano Blas Garóz y Peñalver** **Francisco de Papiol**, diputado por Cataluña. **Ventura de los Reyes**, diputado por Filipinas. **Miguel Antonio de Zumalacarregui**, diputado por Guipúzcoa. **Francisco Serra**, diputado por Valencia. **Francisco Gómez Fernández**, diputado por Sevilla. **Nicolás Martínez Fortún**, diputado por Murcia. **Francisco López Lisperguer**, diputado por Buenos Aires. **Salvador Samartín**, diputado por Nueva España. **Fernando Melgarejo**, diputado por La Mancha. **José Domingo Rus**, diputado por Maracaibo. **Francisco Calvet y Rubalcaba**, diputado por la ciudad de Gerona. **Dionisio Inca Yupangui**, diputado por el Perú. **Francisco Ciscar**, diputado por

Valencia.**Antonio Zuazo**, diputado del Perú.**José Lorenzo Bermúdez**, diputado por la provincia de Tarma del Perú.**Pedro García Coronel**, diputado por Trujillo del Perú.**Francisco de Paula Escudero**, diputado por Navarra.**José de Salas y Boxadors**, diputado por Mallorca.**Francisco Fernández Golfín**, diputado por Extremadura.**Manuel María Martínez**, diputado por Extremadura.**Pedro María Ric**, diputado por la Junta Superior de Aragón.**Juan Bautista Serrés**, diputado por Cataluña.**Jaime Creus**, diputado por Cataluña.**José, Obispo Prior de León**, diputado por Extremadura.**Ramón Lázaro de Dou**, diputado por Cataluña.**Francisco de la Serna**, diputado por la provincia de Ávila.**José Valcarcel Dato**, diputado por la provincia de Salamanca.**José de Cea**, diputado por Córdoba.**José Roa y Fabián**, diputado por Molina.**José Rivas**, diputado por Mallorca.**José Salvador López del Pan**, diputado por Galicia.**Alonso María de la Vera y Pantoja**, diputado por la ciudad de Mérida.**Antonio Llaneras**, diputado por Mallorca.**José de Espiga y Gadea**, diputado por la Junta de Cataluña.**Miguel González y Lastiri**, diputado por Yucatán.**Manuel Rodrigo**, diputado por Buenos Aires.**Ramón Feliú**, diputado por el Perú.**Vicente Morales Duarez**, diputado por el Perú.**José Joaquín de Olmedo**, diputado por Guayaquil.**José Francisco Morejón**, diputado por Honduras.**José Miguel Ramos de Arizpe**, diputado por la provincia de Cohahuila.**Francisco de Eguia**, diputado por Vizcaya.**Joaquín Fernández de Leiva**, diputado por Chile.**Blas Ostolaza**, diputado por el reino del Perú.**Rafael Manglano**, diputado por Toledo.**Francisco Salazar**, diputado por el Perú.**Alonso de Torres y Guerra**, diputado por Cádiz.**El Marqués de Villafranca y los Vélez**, diputado por la Junta de Murcia.**Benito María Mosquera y Lera**, diputado por las siete ciudades del reino de Galicia.**Bernardo Martínez**, diputado por la provincia de Orense de Galicia.**Felipe Aner de Esteve**, diputado por Cataluña.**Pedro Inganzo**, diputado por Asturias.**Juan de Balle**, diputado por

Cataluña.**Ramón Utgés**, diputado por Cataluña.**José María Veladiez y Herrera**, diputado por Guadalajara.**Pedro Gordillo**, diputado por Gran Canaria.**Félix Aytés**, diputado por Cataluña.**Ramón de Lladós**, diputado por Cataluña.**Francisco María Riesco**, diputado por la Junta de Extremadura.**Francisco Morrós**, diputado por Cataluña.**Antonio Vázquez de Parga y Bahamonde**, diputado por Galicia.**El Marqués de Tamarit**, diputado por Cataluña.**Pedro Aparici y Ortiz**, diputado por Valencia.**Joaquín Martínez**, diputado por la ciudad de Valencia.**Francisco José Sierra y Llanes**, diputado por el Principado de Asturias.**El Conde de Buena Vista-Cerro**, diputado por Cuenca.**Antonio Vázquez de Aldana**, diputado por Toro.**Esteban de Palacios**, diputado por Venezuela.**El Conde de Puñonrostro**, diputado por el Nuevo Reino de Granada.**Miguel Riesco y Puente**, diputado por Chile.**Fermín de Clemente**, diputado por Venezuela.**Luis de Velasco**, diputado por Buenos Aires. **Manuel de Llano**, diputado por Chiapas.**José Cayetano de Foncerrada**, diputado de la provincia de Valladolid de Michoacan. **José Maria Gutiérrez de Terán**, diputado por Nueva España, secretario.**José Antonio Navarrete**, diputado por el Perú, secretario.**José Zorraquin**, diputado por Madrid, secretario.**Joaquín Díaz Caneja**, diputado por León, secretario.

CAPITULO 3

LOS GRANDES PRINCIPIOS FILOSÓFICOS Y JURÍDICOS DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ

CAPITULO 3. LOS GRANDES PRINCIPIOS FILOSÓFICOS Y JURÍDICOS DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ

3.1. El Principio de Libertad.

El gran debate que se produce en los comienzos de la España contemporánea es el debate sobre la libertad. España estaba ocupada por el ejército francés y con instalación en Sevilla de la Junta Central a finales de diciembre de 1808 Sevilla se convierte en la capital política de la España libre. Todos los esfuerzos que se están produciendo y el impulso de los constituyentes de Cádiz no son sino consecuencia del entusiasmo por una libertad política.

Los representantes más clásicos del liberalismo distinguen entre la libertad natural y la libertad civil, entre la libertad absoluta o ilimitada, popularizada por Hobbes y Locke, de la cual gozaban los individuos en el estado de la naturaleza, y la libertad propiamente dicha, la limitada por las leyes.³⁵⁶

Los liberales, siguiendo a Jeremy Bentham, sostendrán que la libertad auténtica es la libertad natural, la que goza el hombre que no está sometido a ninguna ley. Ello da origen a una utopía liberal que coincide con un mundo sin normas jurídicas. El gobierno más perfecto será el que, respetando la libertad e independencia natural del hombre, le hace disfrutar de todas las ventajas sociales.

Esta es la libertad natural de la que parte Rousseau en el Contrato Social. El hombre es libre por naturaleza, pero se encuentra sin embargo encadenado. Esta libertad le otorga ventajas o desventajas para que ejerza alguien autoridad sobre otro, más que el

³⁵⁶ Rivera García, Antonio: *El concepto de Libertad en la época de las Cortes de Cádiz* en M. Chust, I. Frasquet (eds.), *La Trascendencia del Liberalismo Doceañista en España y América*. Biblioteca Valenciana 2004

derecho del más fuerte. Será la fuerza que es un acto de necesidad o dependencia pero no de voluntad, luego no es consecuencia de un derecho.

Rousseau argumenta que, entonces, es necesario encontrar una asociación que sea capaz de defender y proteger a toda la fuerza común, a la persona y a cada uno de los asociados, de tal manera que unidos a su vez y desobedecer si así mismos, la respuesta se encuentra en el contrato social. A través del contrato social el hombre pierde su libertad natural y el ilimitado derecho a todo lo que pueda o intente alcanzar, pero gana la libertad civil y la propiedad de todo lo que posee según el derecho del primer ocupante, que es semejante al derecho del mas fuerte.

Sería Benjamín Constant, quien describirá la distinción entre las llamadas dos libertades política y civil, o bien antigua y moderna, conforme el las denominó.

Constant había nacido en Lausana en 1767 y era contrario al belicismo de la época su pensamiento había decidido influencias de Rousseau y de Kant y su teoría en la posición y disfrute de los derechos civiles, del imperio de la ley y de la libertad hemos sentido amplio, confrontaba en este sentido a la actividad del Estado: “ la independencia individual es la primera necesidad de los modernos, por lo tanto no hay que exigir nunca su sacrificio para establecer la libertad política. En consecuencia, ninguna de las numerosas y muy a las instituciones que perjudican la libertad individual en las antiguas repúblicas, resulta admisibles en los tiempos modernos.”³⁵⁷

Pero está clara distinción planteada por Constant no llegaría a los constituyentes de Cádiz de modo tan definido aunque si el elemento común que es el concepto de libertad de Montesquieu.

³⁵⁷ Constant, Benjamin: "*De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos*", 1819.

Montesquieu tiene una idea clara de la libertad política que parece influida del pensamiento de Locke, de la libertad dentro de la ley o lo que es igual de la ley como constitutiva de la libertad: “liberty to follow my own will in all things, where the rule prescribes not”

Para Montesquieu la libertad política depende de las posibilidades vigentes en la repúblicas antiguas. La libertad se identifica para Montesquieu con obediencia la ley: “la libertad política no consiste en hacer lo que uno quiera. En un Estado, es decir, en una sociedad en la que hay leyes la libertad puede consistir en poder hacer lo que se quiere que le bien no está obligado hacer lo que no se quiere querer”... hay que tomar conciencia de lo que la independencia y lo que es la libertad. La libertad el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten, de modo que si funciona lo pudiera hacer lo que las leyes prohíben, ya no habría libertad, pues los demás tendrían igualmente esa esta facultad”.³⁵⁸

La libertad política, considerada con relación al ciudadano, consistiría en la seguridad personal que este experimenta al abrigo de las leyes y de una Constitución que señale límites precisos a la acción del gobierno.

Esta es la libertad que Montesquieu creyó ver establecida las leyes, al margen de que la disfrutase o no en los hechos, del pueblo inglés. La división y equilibrio de los poderes, la representación del pueblo la cámara baja y el cuerpo de nobles limitando al monarca desde la Cámara alta y el sistema judicial, se le presenta como resortes necesarios para asegurar la libertad del ciudadano.

La recepción de las ideas de Locke, de los enciclopedistas, de Montesquieu, Turgot, Rousseau se ha producido ya en España desde fines del siglo XVIII. En 1770 se crea la Cátedra de Derecho Natural y

³⁵⁸ Aguilar, Enrique . *La libertad política en Montesquieu: su significado*. Filosofía política contemporánea. Argentina 2003.

de Gentes de los Reales Estudios de San Isidro. Joaquín Marín de Mendoza autor de una Historia del Derecho Natural y de Gentes propagaría sus cursos del pensamiento de los enciclopedistas y las ideas liberales.

Debemos considerar la existencia por entonces de una concepción católica de libertad. Desde esta posición, la libertad no es una facultad de hacer; más bien coincide con el libre albedrío, esto es, con la potencia de todos los hombres para obedecer o desobedecer la ley natural.

La libertad católica se alza contra la idea de autolegislación y soberanía del pueblo, o lo que es lo mismo, contra la autonomía completa de la esfera política. Frente a la concepción revolucionaria que acaba relacionando la libertad con el derecho subjetivo y con el autodomínio y poder de los ciudadanos, el concepto católico subraya la relación de la libertad con el deber, la obediencia o la subordinación.

José de Torres Flores, en su *Disertación sobre la libertad natural jurídica del hombre* (1788), distingue dos tipos de libertad, una superior, absoluta y sin límites y otra inferior, circunscrita o limitada. La primera, la infinita, sólo reside en Dios, mientras que la segunda, la limitada, es propia del hombre, pues la acción libre de la criatura está sujeta a la ley que le prescribe su legislador; o en otras palabras, sus actos siempre han de ser justos, rectos y santos.

Sólo en los actos indiferentes posibles, aquellos que no son prohibidos u ordenados por leyes divinas o humanas, el hombre goza de la mayor libertad.³⁵⁹

A esta libertad ilimitada, cuyo origen podría remontarse hasta la libertad cristiana defendida por Lutero,³⁶⁰ opone la católica libertad

³⁵⁹ TORRES FLORES, J. DE: *Disertación sobre la libertad natural jurídica del hombre*. Universidad de León, 1995, pp. 42-43 y 57.

jurídica y legal; la libertad que, además de estar acotada por la ley Natural, esto es, “por la ley suprema, que el Divino Legislador grabó” en el corazón de cada hombre, lo está por la ley civil del príncipe que, de acuerdo con el iusnaturalismo tomista, dimana de la natural.

Para Torres Flores, la libertad natural jurídica coincide, en realidad, con el libre albedrío, el cual, a su vez, se identifica con el deber del buen cristiano, dado que “dio el Señor al hombre el libre albedrío para su bien, no para su mal”, para que usase, y no abusase, de la “jurídica legal libertad”.³⁶¹

Joaquín Lorenzo Villanueva, en su Catecismo del Estado según los principios de la religión de 1793, critica la libertad civil de los libertinos o revolucionarios que “se opone a la subordinación a la legítima autoridad, y por otro nombre se llama independencia”. El jansenismo de Villanueva se puede apreciar en la acentuación de la corrupción original del hombre, en la defensa de la sumisión de la Iglesia a toda autoridad civil, aunque el príncipe sea un tirano, y en el aprecio demostrado en todo su catecismo por San Agustín.

³⁶⁰ Para los juristas católicos, Lutero, al defender que la libertad del cristiano implica la liberación de toda sujeción debida a la ley, estaría suministrando una base teológica al pensamiento de los filósofos libertinos: “Los enemigos de nuestra sagrada religión todo lo truecan, todo lo confunden y lo que se dice con certeza de una libertad la del cristiano, lo apropian a aquella, que si gozara de este carácter se opondría al bien de la sociedad, como de facto contradice y repugna aquel principio fundamental que de la libertad social presenta Lutero en su tratado de Libert. Christ. [...]: “... nullo opere, nulla lege Christiano homini opus esse ad salutem, cum per fidem sit liber ab omni lege”. Principio del que los nuevos filósofos de nuestros días han deducido y con sofismas han intentado sostener la libertad absoluta del hombre, que no debe estar sujeto a ninguna ley, permaneciendo todos sin distinción en una perfecta igualdad.” (Ibidem, p. 46). En contraste con esta versión protestante y libertina, el católico Torres Flores sostiene que la libertad espiritual del cristiano, que la liberación de la esclavitud de la culpa o del pecado original, no se tradujo en una absoluta libertad, ya que “Jesucristo libertó a su Pueblo Cristiano, pero no le libertó de la [ley] divina, que obliga siempre y por siempre a toda humana criatura. Esta ley es la que prescribe la sujeción y dependencia que debe haber entre el superior por Naturaleza, o ley, y el inferior. Y de esta prescripción dimana la sujeción a las leyes positivas de los supremos Príncipes terrenos.” (Ibidem, p. 48).

³⁶¹ Ibidem, p. 52.

A este respecto, al clérigo español no le basta con desautorizar a los nuevos filósofos y revolucionarios franceses; también rechaza el laxismo católico que se halla en la raíz de la doctrina que “autoriza al pueblo para juzgar al Príncipe”.³⁶²

Frente a la libertad revolucionaria o la de los católicos más laxos se alza tanto la “libertad esencial del hombre que consiste en la naturaleza del libre albedrío”, como “la libertad de servidumbre que se opone a la esclavitud”. Estas dos libertades, libre albedrío y libertad de servidumbre, son las únicas libertades que, según Villanueva, son compatibles con “la sumisión y obediencia de los súbditos a las cabezas del Estado”.³⁶³

Las obras de Martínez Marina “Discurso sobre el origen de la monarquía” (prólogo de la Teoría de las Cortes de 1813) y “Principios naturales de la moral, de la política y de la legislación” (1824) constituyen asimismo otro buen ejemplo de este concepto de libertad católica.

Para Martínez Marina, la libertad, en contraste con la tradición protestante y con el emergente liberalismo europeo, “no podía en su concepto quedar reducida a una decisión voluntaria de adquisición de una condición política, individual o colectiva. No podía fundamentarse en el verbo querer sino en el verbo deber”. Por tanto, “ser libre no consiste en hacer lo que se quiere, sino lo que se debe y es capaz de contribuir a la consecución de un bien sólido y permanente”.³⁶⁴

³⁶² “[...] algunos Católicos han tenido atrevimiento para enseñar este error [...]: enseñan doctrinas contrarias a la seguridad y a la vida del Príncipe que abusa de su potestad [...] Que el Príncipe legítimo que abusa de su potestad, si amonestado no quiere enmendarse, puede ser depuesto por su pueblo, aun cuando le hubiese jurado obediencia perpetua; y que dada esta sentencia, puede quien quiera ponerla en ejecución.” (Ibidem, cap. VII).

³⁶³ Ibidem, cap. I.

³⁶⁴ Cit. en PORTILLO, J. M.: o. c., p. 445.

La divinidad –concluye Marina– “dio al hombre la razón para conocer el bien, la conciencia para promoverlo, y la libertad para adoptarlo”.³⁶⁵ De este modo, la libertad más natural es un satélite de la razón,³⁶⁶ y el ciudadano goza de ella cuando puede seguir los dictados de la recta razón o *lex naturalis*. Veremos que Donoso Cortes apenas se aparta de este esquema, y que el ciudadano es libre para obedecer a un gobierno desempeñado por quienes más saben, y, por tanto, se ajustan al derecho natural racional.

Martínez Marina no nos habla de libertad natural³⁶⁷ porque se desarrolle plenamente, como piensa Bentham, en el estado natural, allí donde no hay leyes ni deberes sociales, sino porque el hombre ostenta por naturaleza la capacidad suficiente para seguir el derecho natural positivo que, por lo demás, ha de influir materialmente en las constituciones humanas. Incluso, en caso de contradicción, el deber del hombre católico siempre primará sobre el del ciudadano.³⁶⁸

El sabio legislador católico, si desea la paz social, tiene la misión de armonizar la libertad civil con la libertad natural, lo permitido por las leyes del Estado con lo exigido por la ley natural preceptiva.

Martínez Marina pertenece a una tendencia moderada cuyo principal objetivo residía en integrar catolicismo y revolución, Tomás

³⁶⁵ Cit. en *ibidem*, p. 446.

³⁶⁶ “Quede –escribe Marina en un fragmento de su obra, pues establecido como un principio que la libertad satélite es de la razón, en cuyo torno debe rodar y describir la órbita de sus movimientos, como los satélites en derredor de su astro principal.” (Cit. en *ibidem*, p. 450).

³⁶⁷ Para Marina, la libertad es natural “porque precede a todas las instituciones humanas, a todas las leyes positivas, a todos los pactos y convenciones facticias, y a todos los gobiernos políticos; natural, porque es inseparable del hombre y le acompaña en todas las circunstancias y situaciones de su vida.” (Cit. en *ibidem*, pp. 447-448).

³⁶⁸ “El hombre libre –escribe Martínez Marina en otro fragmento– no siempre puede hacer lo que las leyes positivas no prohíben, pues hay muchas cosas y acciones toleradas y positivas por la ley política, que reprueban y condenan la razón y la moral.” (Cit. en *ibidem*, p. 449).

de Aquino y Rousseau. Ya en su Discurso sobre el origen de la monarquía sostenía que había sido el Aquinate quien estableciera, cinco siglos antes que el ginebrino, el contrato como fundamento de la sociedad política.³⁶⁹

Veamos junto al concepto católico de libertad nuevas aportaciones en pensadores que influyen sobre los Constituyentes de Cádiz. Tomemos el testimonio que de libertad da José Canga Arguelles quien en 1808 formó parte de la Junta Suprema de Valencia y en noviembre de 1810 será nombrado por la Regencia ministro interino de Estado y ministro de Hacienda, trasladándose luego a la isla de León donde organiza las finanzas del Estado y ocupando en 1813 la condición diputado por Asturias en Cádiz.

En 1811, Canga Argüelles en sus *Reflexiones sociales y otros escritos*, realiza una consideración de la libertad manifestando que “el goce de la libertad más absoluta no compensa al hombre los males que le ocasiona la vida aislada y solitaria”³⁷⁰. Canga Argüelles define la libertad del hombre en sociedad como “la facultad de hacer con seguridad quanto le pareciere más acomodado a sus deseos, siempre que con ello no dañe a los demás hombres”.³⁷¹

Similar es el planteamiento que realiza Álvaro Florez Estrada, reconocido liberal que renunció al cargo de tesorero general del Reino, nombrado por Godoy, y se incorporará a Cádiz donde redacta un bosquejo de Constitución liberal, aunque monárquica. Marchando luego a Londres, donde expondrá su ideario. De vuelta a España en

³⁶⁹ Martínez Marina, F.: *Discurso sobre el origen de la monarquía y sobre la naturaleza del gobierno español*, Madrid, CEC, 1988, p. 103.

³⁷⁰ Canga Arguelles, J.: *Reflexiones sociales y otros escritos*, Madrid, CEC, 2000, p. 19.

³⁷¹ Canga Arguelles, J.: o. c., p. 20. El absolutista Peñalosa ya nos proporciona una definición de esta libertad: “significa en general la idea de poder, según las leyes, disponer de nosotros mismos y de cuanto nos pertenece.” (Cit. en PORTILLO, J. M.: *Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812*, Madrid, CEC, 2000, p. 102).

1812 será diputado de las Cortes de Cádiz fundando un periódico liberal.

Flórez Estrada entiende que “la libertad consiste en poder hacer todo lo que a otro no perjudica, y así el ejercicio de los derechos naturales del hombre no tiene otros límites que los que asegura a los demás miembros de la sociedad el disfrutamiento de estos mismos derechos, límites que sólo la ley puede determinar.”³⁷²

Para la Comisión Constitucional encargada de añadir un capítulo sobre los derechos fundamentales, que al final no fue incluido en la Constitución de Cádiz la libertad implicaba la capacidad de “poder hacer todo lo que no perjudica a la sociedad ni ofende a los derechos de otro”.

En resumen, la libertad civil no coincide con la libertad natural, la que no está limitada por ninguna ley, ni con la libertad moral, la que juzga la autonomía de la voluntad y de las intenciones; sino con el poder, facultad o derecho de hacer lo que se quiere, aunque, desde luego, dentro de los límites establecidos por las leyes; leyes que, no obstante, eran la expresión de la voluntad del querer de todos los ciudadanos, de forma que la limitación era más bien una autolimitación.

En contraste con esta noción revolucionaria o ilustrada, que identifica libertad y derechos, la noción católica identifica la libertad con el deber; y así, mientras la primera nos proporciona una concepción autónoma de la política basada en la soberanía y autolegislación del pueblo, la segunda subordina la voluntad de los ciudadanos a la Ley Natural o al mandato de las clases que en cada momento histórico encarnan el principio de la razón.

Debemos considerar asimismo el principio de libertad que pasa a las famosas declaraciones de derechos. Para que la libertad del

³⁷² Cit. en *ibidem*, p. 253

ciudadano sea completa no solo se requiere poder constituyente en manos de la nación y separación de poderes sino que también se precisa que las leyes fundamentales reconozcan todos esos derechos individuales, naturales e inalienables, sancionados en las declaraciones de derechos de los Estados Unidos y de Francia y reconocidos también en el artículo cuatro de la Constitución de Cádiz.

El conocimiento de la filosofía política referida al concepto de libertad permitirá a los constituyentes de Cádiz articular su propio fundamento, que llevarán a su máxima expresión en la propia Constitución.

Los revolucionarios españoles no se han apartado demasiado de la tradición republicana cuando rechazan radicalmente el concepto de libertad natural. En los políticos gaditanos prevalece el concepto civil de libertad y no el natural.

La libertad en la Constitución de Cádiz estará presente en el reconocimiento de la soberanía nacional considerado como el primer pilar de la libertad. Los tres artículos primeros de la Constitución son rotundos en su formulación. En Cádiz se encuentra asimismo la separación de poderes que parte de ella nuclear del liberalismo de que la separación de poderes es básicamente la diferenciación entre quien hace las leyes, quienes ejecuta y que los aplica.

Otro pilar de la libertad en la Constitución de Cádiz es una declaración de derechos. Ciertamente que la Constitución de 1812 carece de una parte dogmática o catálogo de derechos pero encontramos en ella el artículo 4º que es una invocación la obligación de la nación de conservar y proteger con leyes sabias justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos.

Asimismo la constitución de Cádiz consagra la libertad personal en el artículo 172 destino a imponer restricciones a la autoridad real. “ no puede llegar ningún individuo de su libertad y ponerle por sí, pena alguna. El Secretario de Despacho que firme la

orden después que la ejecute será responsable ante la nación y castigado como reo de atentado contra la libertad individual”.

La Constitución de Cádiz consagra asimismo la libertad de expresión, de prensa e imprenta condición previa para asegurar el libre el derecho de libre expresión del pensamiento.

Todos estos aspectos serán tratados en otros apartados en otros epígrafes de este trabajo por lo que pasamos a considerar la abolición de la esclavitud.

3.1.2 La abolición de la esclavitud

La circunstancia de afrontar la libertad en la Constitución de Cádiz chocaba con una realidad, la necesidad de abolir la esclavitud. Se daba la circunstancia de que Cádiz tenía en su propio sistema económico y social la realidad de la esclavitud. La ciudad se dedicaba al comercio ultramarino, siendo al mismo tiempo una ciudad donde se venía desarrollando el comercio de esclavos desde el propio los comienzos del esclavismo hacia America y una sociedad en donde la esclavitud formaba parte de un subproletariado que trabajaba en la servidumbre doméstica y secundariamente en diversos trabajos y oficios con funciones de personal auxiliar.

Esto no facilitaba precisamente la comprensión de la idea de la supresión de la esclavitud que se venía juzgando como una necesaria decisión en el marco de los derechos de la humanidad³⁷³ en el marco del impulso de una corriente antiesclavista que venia de los países europeos.

Las colonias de América dependieron a lo largo de la época moderna del trabajo de los esclavos. Fue la deportación forzada de la mano de obra procedente de África que acarreó entre los siglos XVI y XVII el traslado a América de unos 11 millones de personas siendo

³⁷³ Parrilla Ortiz, Pedro, *La esclavitud en Cádiz durante el siglo XVIII*, Cádiz, 2001.

sobre todo Gran Bretaña, España, Francia y Portugal los principales actores del comercio de esclavos, pero no solo estos países sino también Dinamarca, Suecia, Prusia, Holanda y Genova.

En Francia existía un cuerpo normativo que regulaba la institución esclavista, el Código Negro instaurado por Luís XIV en 1665 en el que quedaba claro que la voluntad de los amos era la única ley en las recónditas plantaciones de la Isla y ésta se aplicaba casi siempre de manera brutal y violenta.

Tortura y represión corporal, no eran, sin embargo, las únicas manera de controlar a los cautivos, también apelaban los amos a la aculturación religiosa e ideológica para domesticarlos e imponerles su sometimiento racial, como algo natural, destinado por Dios.

Frente a aquella situación la filosofía de la Ilustración dejaría clara su oposición al esclavismo. Diderot escribía en 1772 que: "la verdadera noción de propiedad implica el derecho de uso y de abuso. Jamás un hombre puede ser la propiedad de un soberano, un hijo la propiedad de un padre, una mujer la propiedad del marido, un criado la propiedad de un dueño, un esclavo la propiedad de un colono".

En la Enciclopedia se describe en la definición de esclavitud: la "ley del más fuerte, el derecho de la guerra injurioso a la naturaleza, la ambición, la sed de conquistas, el amor de la dominación y de la comodidad, introdujeron la esclavitud que para vergüenza de la humanidad, penetró en casi todos los pueblos del mundo. En efecto, no sabríamos poner los ojos sobre la Historia Sagrada, sin descubrir en ella los horrores de la servidumbre. La Historia de los Griegos, de los Romanos, y de todos los pueblos que pasan por ser los más cultivados, son igualmente monumentos de esta antigua injusticia ejercida, con mayor o menor violencia, sobre toda la faz de la tierra, a través de los tiempos, los lugares y las naciones."

Rousseau en su obra "El Contrato Social" consideraría que: "el hombre ha nacido libre pero en todas partes está encadenado".

Paralelamente y desde el pensamiento liberal comenzó a considerarse que la libertad individual era un derecho social y no un don otorgado por el Rey. La posición antiesclavista de Rousseau es manifiesta: "La fuerza ha hecho los primeros esclavos, su cobardía los ha perpetuado"... "El más fuerte no es jamás tan fuerte como para ser siempre el señor, a no ser que transforme su fuerza en derecho y la obediencia en deber".

Rousseau entiende que las palabras, esclavitud y derecho, "son contradictorias; se excluyen mutuamente". No puede justificarse la esclavitud en la guerra ...La guerra no es una relación de hombre a hombre, sino de Estado a Estado, en la cual los particulares solo accidentalmente son enemigos, pero no como hombres, ni siquiera como ciudadanos, sino como soldados; ni siquiera como miembros de la patria, sino como sus defensores. En fin, cada Estado solo puede tener como enemigo a otros Estados y no a hombres, dado que entre cosas de diversa naturaleza no se puede establecer ninguna relación verdadera.

Rousseau critica a los que "deducen de la guerra otro pretendido origen del derecho a esclavizar. Teniendo el vencedor, según ellos, el derecho de matar al vencido, este puede rescatar su vida al precio de su libertad; convención tanto más legítima que beneficia a ambas partes....Al ser la finalidad de la guerra la destrucción del Estado enemigo, se tiene derecho de matar a los que lo defienden, mientras tengan las armas en la mano; pero tan pronto como las deponen y se rinden, cesando de ser enemigos o instrumentos del enemigo, vuelven a ser simplemente hombres y no se tiene ya derecho sobre su vida. Incluso a veces se puede matar al Estado sin matar a uno solo de sus miembros. Así pues la guerra no da ningún derecho que no sea necesario a su finalidad.", concluyendo su argumentación manifestando que "Si la guerra no da ningún derecho

al vencedor de masacrar a los pueblos vencidos, este derecho que no posee no puede ser el fundamento del de esclavizarlos."

Montesquieu en su obra "Mis Pensamientos" rompe con la resignación o aceptación de su estado por parte del esclavo, propugnada en las epístolas de San Pedro y San Pablo: "Un esclavo puede pues liberarse; le está permitido huir. Como que no forma parte de la Sociedad, las leyes civiles no le conciernen" y proseguirá manifestando que "La guerra de Espartaco ha sido la más legítima que jamás se haya emprendido".

De entre los revolucionarios franceses el planteamiento más claro y radical sería el realizado por Condorcet³⁷⁴ quien en su obra firmada con el seudónimo de M. Schwartz, "Reflexiones sobre la esclavitud de los negros", replicaría a dos argumentos muy utilizados por los esclavistas: el de la ayuda que les prestaban otros negros y el de la necesidad de los esclavos manifestando: "...el infame comercio de unos bandidos de Europa, alumbra entre los Africanos guerras casi continuas, cuyo único motivo es el deseo de hacer prisioneros para venderlos. A menudo, los mismos Europeos fomentan las guerras con su dinero o con sus intrigas; de manera que son culpables, no sólo del crimen de reducir a unos hombres a la esclavitud, sino también de todos los crímenes cometidos en África para preparar este crimen. Poseen el arte perverso de excitar la codicia y las pasiones de los Africanos, de comprometer al padre a entregar a sus hijos, al hermano a traicionar a su hermano, al príncipe a vender a sus súbditos."

³⁷⁴ En 1774, Turgot nombraría a Condorcet inspector general de la Moneda. A partir de ese momento, Condorcet desplaza su centro de interés desde las matemáticas a la filosofía y la política. Los años siguientes, se interesa por la defensa de los Derechos humanos, en particular los de las mujeres, los judíos y los negros. Recibió las ideas innovadoras que llegaban desde los recientemente constituidos Estados Unidos, y realizó en Francia propuestas de reformas políticas, administrativas y económicas.

Entre 1777 y 1804, la esclavitud fue ilegalizada en el norte de Estados Unidos. Dinamarca abandonó el comercio de esclavos en 1792 y Gran Bretaña, en 1807, pero el tráfico de esclavos persistiría. La marina británica tomó drásticas medidas contra el comercio de esclavos desde 1815, pero la esclavitud seguía siendo legal en casi todas partes.

En el marco de la Revolución Francesa fue significativa la aprobación por la Convención de la Constitución civil del clero del 12 julio 1790, de inspiración galicana, que trató de establecer la total independencia de la Iglesia de Francia respecto al Papado y en la que se destacó al diputado jacobino y abolicionista Abate Gregoire primer miembro eclesiástico que decidió jurar la Constitución civil del clero el 4 de marzo de 1794, erigido como uno de los mayores impulsores de la Abolición de la Esclavitud en Francia³⁷⁵.

Tras haber conocido a Julien Raimond, un plantador mulato de Santo Domingo que estaba tratando de conseguir acceder a la Asamblea Constituyente como representante de su grupo, en octubre de 1789, Grégoire adquirió un gran interés en el abolicionismo, publicando numerosos panfletos y libros abogando por la igualdad racial, y convirtiéndose en un influyente miembro de la Sociedad de Amigos de los Negros.

Fue por medio de una moción presentada por Grégoire en mayo de 1791 que la Asamblea Constituyente aprobó la primera ley que reconocía la igualdad de derechos a las personas negras adineradas en las colonias francesas.

³⁷⁵ Grégoire, Henri: (Abbé Grégoire 1750 –1831) clérigo católico romano francés, obispo constitucional de Blois y líder revolucionario. Por su aparentemente contradictoria condición de clérigo y el ahínco con que defendió la causa revolucionaria, fue una de las figuras más detestadas por los legitimistas, y una de las más admiradas por los republicanos franceses.

Fue entonces decisiva una revuelta de esclavos producida en la colonia francesa de Santo Domingo en 1791-1793 que condujo a la abolición en Francia, aunque en 1803 se volvió a legalizar la esclavitud. En la Abolición de la Esclavitud en Francia se establece expresamente que: "la Convención declara la esclavitud de los negros abolida en todas sus colonias; en consecuencia, decreta que todos los hombres sin distinción de color, domiciliados en las colonias, son ciudadanos franceses y gozarán de todos los derechos asegurados por la constitución"³⁷⁶.

No obstante esta propuesta contravenía lo preestablecido legalmente de modo que la esclavitud se mantendría en las colonias francesas determinándose que únicamente solamente tendrían los derechos de los ciudadanos blancos aquellos negros libres a partir de la segunda generación.

Robespierre, ideológicamente muy influenciado por Rousseau, manifestara en su obra "La teoría del gobierno revolucionario" que el gobierno constitucional se ocupa principalmente de la libertad civil; y el gobierno revolucionario de la libertad pública. Bajo el régimen constitucional es suficiente con proteger a los individuos de los abusos del poder público; bajo el régimen revolucionario, el propio poder público está obligado a defenderse contra todas las facciones que le ataquen. El gobierno revolucionario debe a los buenos ciudadanos toda la protección nacional; a los enemigos del pueblo no les debe sino la muerte.

Sobre este fundamento plantearía en la Asamblea Legislativa, en el debate sobre la igualdad de derechos el argumento -que luego se oiría en España - de que todo progreso de la población negra sometida puede significar una rebelión de los blancos y la pérdida de las

³⁷⁶ Martínez Altamira, María Magdalena. *Apuntes sobre la abolición de la esclavitud en España*, Ed, Universidad de Alicante.

colonias: "Perderéis vuestras colonias -se nos dice- si no arrancáis sus derechos a los ciudadanos libres de color..."³⁷⁷

La esclavitud sería restablecida mediante la aprobación de la ley de 10 mayo 1802, justo después de haberse producido la caída de Robespierre. Tras el restablecimiento de la esclavitud mediante esta norma, tuvieron lugar muchas revueltas y muertes en Guadalupe y suicidios masivos de ex-esclavos en la Reunión y en Santo Domingo.

Del mismo modo que en Francia desde fines del siglo XVIII ya se habían producido en Inglaterra intensos debates en torno al abolición de la esclavitud destacando la figura de Lord Willbefore.

En el movimiento en contra de la esclavitud en Inglaterra tendría una destacada importancia la Society for Effecting the Abolition of Slavery (Sociedad para efectuar la abolición de la esclavitud) fundada en 1789 por Thomas Clarkson quien en sus presentaciones informaría al público de la trata de esclavos y sus prácticas buscando el apoyo del Parlamento.

En 1807 se prohibió la trata de esclavos en los barcos ingleses pero deberían pasar unos cuantos años hasta que el 23 de agosto de 1833 se aprobó la Slavery Abolition Act (Ley de abolición de la esclavitud) por la que desde el 1 de agosto de 1834 quedaban libres todos los esclavos de las colonias británicas.

³⁷⁷ "Yo pido en primer lugar, a la Asamblea Nacional, si es digno de unos legisladores hacer transacciones de esta naturaleza con el interés, la avaricia, el orgullo de una clase de ciudadanos. Yo me pregunto si es político decidirse según las amenazas de un partido para traficar con unos derechos de hombre, con la justicia y la humanidad...Además Señores, me parece que esta objeción puede oponerse a los mismos que la hacen. Si los Blancos, por un lado os hacen esta objeción, los hombres de color pueden, por su parte, haceros otra semejante y deciros: si nos arrancáis nuestros derechos, estaremos descontentos, y pondremos el mismo coraje en defender nuestros derechos sagrados e imprescriptibles -pues nos vienen de la naturaleza- que obstinación pondrán nuestros adversarios en su voluntad de arrancárnoslos."

Del mismo modo la esclavitud fue un tema muy significativo en Inglaterra y a sus colonias procediéndose el 1 de mayo de 1808 a la prohibición de la trata de esclavos (captura y venta), pero no se prohibió la posesión de los mismos.

El movimiento abolicionista en los Estados Unidos de América tuvo sus raíces en el siglo XVIII, donde había nacido con el objetivo de prohibir la trata de esclavos. La posesión de esclavos se permitió hasta el final de la Guerra de Secesión, particularmente en los estados del sur. La Constitución trataba en ciertos puntos la esclavitud, aunque en ninguno se usaba esta palabra.

Todos los estados al norte de Maryland abolieron la esclavitud entre 1789 y 1830, gradualmente y en diferentes momentos. Sin embargo, su estatus permaneció inalterado en el sur, y las costumbres y el pensamiento público evolucionaron en defensa de la esclavitud como respuesta al creciente fortalecimiento de la actitud anti-esclavitud del norte³⁷⁸.

En cuanto a la esclavitud en España podemos gran parte de la doctrina científica declara que en la España peninsular la desaparición de la esclavitud tuvo lugar en 1766, año en el que un enviado del sultán de Marruecos compró la libertad de los esclavos musulmanes de Sevilla, Cádiz y Barcelona.

Junto a este dato son diversas las posiciones teóricas de quienes plantean ya la supresión de la esclavitud en España, pero es indudable que serían las Cortes de Cádiz las que plantearían claramente una posición abolicionista de la esclavitud.

³⁷⁸ El punto de vista contra la esclavitud que mantenían muchos hombres del norte tras 1830 fue llevando lenta e imperceptiblemente hacia el movimiento abolicionista. Pero la mayoría de los estados del norte no aceptaban las posiciones extremas de los abolicionistas. Abraham Lincoln, a pesar de ser contrario a la esclavitud, tampoco aceptaba el abolicionismo y eso sería una de las causas que provocaría la Guerra Civil

El primer intento de un diputado en las Cortes de Cádiz para plantear la cuestión de la esclavitud es el escrito dirigido al Congreso por Domingo García Quintana³⁷⁹, diputado por Galicia quien declaró: "ya te oigo, hermano negro y mulato que tuviste la suerte feliz de nacer español ¿piensas que me olvido de ti? Ya sé que naciste de Adán, y en la presente como yo, y que la misma legítima te cabe que a mi en la herencia de nuestro padre común. Déjame respirar, que ya te buscaré de un modo que sin mal de otro, se verifique tu bien".

Pocos meses después se produciría la primera intervención en las Cortes de Cádiz la plantea una de las personas precisamente que vienen de América, el diputado suplente por Caracas, Esteban Palacios³⁸⁰ quien manifiesta "en cuanto a que se destierre la esclavitud, lo apruebo como amante de la Humanidad, pero como amante del orden público, lo repruebo".

El 25 marzo 1811 el diputado propietario de Tlaxcala, José Miguel Guridi Alcocer, presentó en el debate ocho proposiciones para proceder a la abolición paulatina de la esclavitud. En sus propuestas

³⁷⁹ García Quintana, Domingo fue un presbítero y político español, diputado por Lugo en las Cortes de Cádiz en las que juró el 14 octubre 1810. En sus intervenciones en los debates de las Cortes se pronunció en el debate sobre el decreto de libertad de imprenta favor de Argüelles y criticó duramente la situación del ejército español. En cuanto a los debates sobre la obra colonizadora de España en América, del mismo modo que así hiciera Francisco Javier Borrull y Válcárcel Dato, se mostró muy crítico con las acciones de España en sus colonias. Fue expedientado por las Cortes al ser acusado de haber repartido unos pasquines donde se queja de estar preso y estr suspendido de sus dietas, siendo sentenciado posteriormente con la privación del cargo de diputado, levantamiento del arresto, apercibimiento y condena al pago de costas.

³⁸⁰ Palacios, Esteban nacido en Caracas (1763-1830) era hijo de Feliciano Palacios y Gil de Arratia y de Francisca Blanco Infante y Herrera y de este modo era un importante representante de la gran familia de los mantuanos. Asimismo era el tío materno y padrino de confirmación de Simón Bolívar, siendo muy influyente en el pensamiento de su sobrino. El futuro diputado llegó a España en 1792. Finalmente se convirtió en diputado pero Esteban palacios no se destaco principalmente por su actuación en las Cortes, ya que sólo se le conoce un único discurso relativo a las reformas de ultramar, en el cual expresó los intereses de la élite caraqueña, al tomar partido en contra de la abolición de la esclavitud.

solicitaba la interdicción de la trata de negros y una ley del "vientre libre"; solicitaba la introducción de medidas que suavizaran la condición del esclavo, pudiendo incluso este recibir un sueldo para poder volver a comprar su libertad³⁸¹.

José Miguel Guridi Alcocer continúa su batalla en contra de la esclavitud ya que creía que esta era contraria al derecho natural y debía ser abolidas enteramente, siendo la primera de sus ocho propuestas muy tenaz a la hora de luchar contra la esclavitud: "se prohíbe el comercio de esclavos y nadie en adelante podrá vender ni comprar esclavo alguno, bajo la pena de nulidad del acto y pérdida del precio por el esclavo, el cual quedará libre".

El 2 de abril de 1811 hubo un gran debate en las Cortes sobre la esclavitud. Pocos días antes, presentó una propuesta que incluía la abolición inmediata de la trata de esclavos y un plan gradual de abolición de la esclavitud que preveía que los hijos de los esclavos fuesen libres. Además, suavizaba la condición del esclavo ya que mediante el cobro de un salario, podía comprar su libertad. El proyecto fue enviado a la Comisión de la Constitución, sin ser tratado por el pleno.

En cambio si fue admitida a discusión, produciéndose un gran debate, la propuesta de abolición de la tortura y del tráfico de esclavos que presentó el 2 de abril el diputado Agustín Argüelles. A José Miguel Guridi Alcocer se le quiso aclarar por qué no había sido tratada su proposición en el pleno, con las siguientes palabras del diputado Sr. Mejía: "Las proposiciones del Sr. Alcocer han pasado à esta comisión, porque encierran un caso distinto, cual es el abolir la esclavitud, negocio que requiere mucha meditación, pulso y tino".

³⁸¹ Rieu-Millan, Marie Laure, *Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz: igualdad o independencia*, Ed. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1990, p.168.

La propuesta de Argüelles tuvo a su favor, el que en aquellos momentos, el gran aliado de España, la Gran Bretaña, estaba proponiendo a todos los países que suscribiesen un acuerdo de prohibición de la trata de esclavos y por otro lado, se trataba de una prohibición que al no liberar a los actuales esclavos, no iba en contra del respeto a la propiedad privada.

Esta importante matización volvió a quedar evidenciada durante el debate, cuando el diputado García Herreros pidió "que se declare que no sean esclavos los hijos de esclavos, porque de lo contrario se perpetúa la esclavitud aunque se prohíba este comercio". Le replicó de inmediato, el diputado Sr. Gallego diciendo: "Esto trae otros inconvenientes, porque al cabo es una propiedad ajena, que está autorizada por las leyes".

Argüelles denunció la crueldad y la tortura realizada contra los esclavos. Este diputado en el debate de sesiones celebrado el 2 abril 1811 declararía expresamente: "me limito por ahora a que se prohíba solamente el comercio de esclavos. Para tranquilizar a algunos señores que hayan podido dar a la proposición sentido diferente, expondré mis ideas. El tráfico, señor, de esclavos, no sólo es opuesto a la pureza y liberalidad de los sentimientos de la nación española, sino al espíritu de su religión. Comerciar con la sangre de nuestros hermanos es horrendo, es atroz, es inhumano, y no puede el Congreso Nacional vacilar un momento entre comprometer sus sublimes principios o el interés de algunos particulares".

Argüelles añade que: "entre varias reflexiones alegadas por los que sostuvieron gloriosamente en Inglaterra la abolición de este comercio, una de ellas era profetizar que los mismos plantadores y dueños de esclavos experimentarían un beneficio con la abolición, a causa de que no pudiendo introducir en adelante nuevos negros, habrían de darles mejor trato para conservar los individuos; de lo que

se seguiría necesariamente, que mejorará la condición de aquellos infelices, se multiplicarían entre sí con ventaja suya y de sus dueños".

Juan Nicasio Gallego diputado por Zamora, liberal moderado manifestaría su repudio por la esclavitud y el tráfico de personas en el debate de la sesión del día 2 abril 1811: "de lo que aquí se trata es de abolir el comercio de negros. Y una cosa es abolir la esclavitud, que fue lo que decretó la asamblea, y otra es abolir este comercio. Acerca de la esclavitud se tratará cuando y con la circunscripción que corresponda. De cualquier manera estos negocios han de tener toda la publicidad posible..... por tanto, es mi opinión que puesto que no hay los inconvenientes que se temen, y una vez anunciados en público tales asuntos, se continúan también en público".

El diputado Evaristo Pérez de Castro se pronunció sobre la esclavitud declarando que: "se trata según ella únicamente suprimir el comercio de esclavos, sin tocar por ahora a la esclavitud, al punto en cuestión no debe reservarse para la constitución, porque no pertenece a ella: y que la supresión del comercio de qué se trata, recomienda por principios de religión y de humanidad, no puede existir aclamaciones de nuestros comerciantes, pues no son en general los españoles los que se dedican al trabajo de la esclavatura".

Otra intervención destacable la realizaría el diputado Aner de Esteve quien hizo referencia a la abolición de la esclavitud en Inglaterra afirmando que: "éste es un asunto que en Inglaterra se discutió por espacio de muchos años, y finalmente se acordó que sea abolirse el comercio de esclavos. Parece que la humanidad se interesa en esto, pero conviene atender a que para las regiones remotas de América es preciso indagar el modo de reponer la falta de estos brazos tan necesarios para cultivar aquellas tierras. Este es negocio que necesita grande examen y una larga discusión; y así lo desearía que se nombrase una comisión para que propusiese el modo con que,

aboliendo el comercio de esclavos se remédiense la falta de brazos útiles que ha de producir en América semejante abolición".

El diputado por la HaBana Andrés Jáuregui, nacido en el seno de una familia criolla de ricos propietarios se distinguiría en los debates sobre la abolición de la esclavitud, pues si bien no se oponía a ella, juzgó que se debía actuar con prudencia dado que tal medida podría suponer un serio inconveniente para la economía de la isla por lo que , ante el temor por las perturbaciones que pudieran originarse por causa de una abolición efectuada de forma rápida, opto por apoyar la posibilidad de una abolición progresiva, recordando la violenta Rebelión de Haiti, que tanta controversia había despertado el seno de la Asamblea Nacional francesa.

Jáuregui había escuchado los alegatos antiesclavistas de Argüelles, Guridi y Mejía Lequerica, y expresó que se identificaba con sus principios y sentimientos aunque expresó el inconveniente que resultaría todo ello frente a la opinión pública, temiendo que se anticipe el juicio de tantos interesados en un negocio tan delicado.

En su intervención en la sesión del 2 abril 1811 hizo mención al revuelo y peligro que podría alterar la paz en Cuba el hecho de abatir al tema de la esclavitud en público y expresó que: "no basta decir que la presente cuestión se decidirá combinando todos los extremos, y con el pulso y prudencia que caracterizan al Congreso. Yo así lo creo y espero; pero el mal esta en tratarse en público: está en que inevitablemente se anticipe el juicio de tantos interesados en un negocio tan delicado, y que de aquí resulten las tales consecuencias, que es más fácil y seguro llorar, que preveer y remediar. A la isla de Cuba, y en especial a La Habana, a quien representó, es a quien más interés este punto: todo aquel vasto territorio goza huir de profunda tranquilidad. Con la noticia de que de esto se trata sin que le acompaña una resolución que concilie tantos intereses como en sí encierra este asunto, puede comprometerse el sosiego que felizmente

reina en una posesión tan interesante bajo todos aspectos.... Por tanto, concluyó, y hago sobre ello proposición formal, " que este negocio se trate por quien V.M. determine; pero precisamente en sesión secreta, para evitar las consecuencias que de otro modo son de temer, y que están presentes tuvo V.M. en otra sesión que llegó citada, no insertándose tampoco en el Diario de las Cortes esta discusión".

Contra estas voces abolicionistas, el ayuntamiento de la Habana hizo llegar el 10 de julio de 1811 un memorándum en el que se oponía a la abolición diciendo que los esclavos estaban en Cuba "no por nuestra culpa", sino por la del padre Bartolomé de las Casas que dos siglos antes, para proteger a los indios, había propuesto importar esclavos negros. Según el escrito, debía de aceptarse que la economía de Cuba se basaba en el trabajo esclavo.

Otro diputado de las Cortes, Isidoro de Antillón, ya había demostrado su abolicionismo unos años antes, cuando el 2 de abril de 1802, pronunció una conferencia en la Academia Matritense de Derecho Español y Público, en favor de la prohibición de la trata de esclavos y de la abolición gradual de la esclavitud.

En 1811 le dio forma de publicación, con el título "Disertación sobre el origen de la esclavitud de los negros, motivos que la han perpetuado, ventajas que se le atribuyen y medios que podrían adoptarse para hacer prosperar sin ellos nuestras colonias". Además le añadió al final unas "Notas de 1811" en las que se reproduce y se da apoyo a la propuesta de abolición del comercio de esclavos presentada a las Cortes por el diputado Agustín de Argüelles, así como a la propuesta presentada en el mismo debate por el diputado García Herreros pidiendo la libertad para los hijos que tuviesen las esclavas.

Como señala Antillón, las ideas de prohibición de la trata y de abolición gradual de la esclavitud, cuando las expuso en 1802, eran una arriesgada novedad, pues como dice en el preámbulo de la transcripción de la citada conferencia: "en una corte donde reinaba el

más absoluto y más incensado despotismo, en donde se premiaba el espionaje y la delación como las acciones heroicas se premian en una república, en donde todas las corporaciones de más autoridad, todos los agentes del gobierno tenían declarada la guerra a la razón y proscrito al filósofo que osase invocarla, hubo ¿quien lo creyera? un congreso de jóvenes honrados, que arrostrando las cárceles, los destierros y toda la indignación del favorito y de los ministros, discutían libremente cuestiones muy delicadas de moral y de política, raciocinaban sobre la libertad del ciudadano y sobre la constitución de las sociedades...".

Prosigue Antillón: "No creía yo, ni esperaba cuando en el año 1802 leí en la Academia de Santa Bárbara mi discurso sobre la esclavitud de los negros, que en España nueve años después llegaría a reconocerse y proclamarse la soberanía del pueblo, origen fecundo de todos los derechos del hombre en sociedad...;Que contraste entre los sublimes y patrióticos discursos pronunciados en las Cortes.... y las hediondas arengas de prostitución y servilidad que formaban toda la elocuencia de los cortesanos de Carlos IV!

El mes de agosto de 1813 fue muy dramático para Isidoro de Antillón. La expulsión de España de los ejércitos de Napoleón ya había empezado a dar esperanzas a los nostálgicos del absolutismo.

El 9 de Agosto, Antillón intervino eficazmente oponiéndose con un largo discurso a las propuestas en favor de un rápido traslado de las Cortes a Madrid o Sevilla, y el abandono de Cádiz en donde los partidarios de la Constitución eran fuertes. El día 13 aprovechó el debate de la petición de los procuradores y ciudadanos de Trujillo (Perú) en favor de "abolir por ley fundamental la que ordena la infamante pena de azotes y cárcel al indio que no asiste en su parroquia a la doctrina" para formalizar una proposición de sentido más amplio, en la que se pedía: "Que en el plan de instrucción pública que aprueben las Cortes, se tenga presente la necesidad de abolir el

castigo de azotes en las enseñanzas públicas como indigno de los ciudadanos españoles, y por la misma razón la pena de azotes quede abolida en el Código criminal de la Monarquía".

Una vez aprobada esta proposición por las Cortes, prosiguió el debate y Antillón se opuso a quienes proponían una anticipada disolución de las Cortes, dejando en su lugar a la Diputación General con el encargo de preparar una nueva elección de diputados.

A los pocos días Antillón fue agredido por tres asesinos en la calle, al salir de las Cortes, y dejado por muerto. A consecuencia de las heridas murió al año siguiente en su población natal (Santa Eulalia), cuando era conducido a Zaragoza para ser ejecutado, víctima de la represión que en 1814 desencadenó Fernando VII contra quienes se habían distinguido como liberales en las Juntas ciudadanas de defensa contra los invasores franceses y en las Cortes de Cádiz, cuya Constitución fue abolida el 4 de mayo de 1814.

La Constitución de 1812 en su artículo. 5 manifestará que: "Son españoles. Primero.- Todos los hombres libres nacidos y avecinados en los dominios de las Españas; y los hijos de éstos...Cuarto. Los libertos desde que adquieran la libertad en las Españas".

En lo que atañe a los libertos les afecta el que en el Capítulo IV, al definir quienes además de ser españoles son "ciudadanos españoles", es decir, españoles con plenitud de derechos, se exijan varios requisitos, si se es de origen africano, entre ellos no ser liberto, es decir, ser hijo de padres libres "ingenuos".

En el artículo 22 la Constitución de 1812 se establece que "A los españoles que por cualquiera línea son habidos y reputados por originarios del África, les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser ciudadanos: en su consecuencia las Cortes concederán carta de ciudadano a los que hicieren servicios calificados a la Patria, o a los que se distingan por su talento, aplicación y

conducta, con la condición de que sean hijos de legítimo matrimonio de padres ingenuos; de que estén casados con mujer ingenua, y avecindados en los dominios de las Españas, y de que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con un capital propio”.

Ha de señalarse también que según el artículo 25.3 se establece que “el ejercicio de los derechos de ciudadano español se suspenden. Por el estado de sirviente doméstico, sin que intervenga el origen racial en este hecho”.

Por tanto la Constitución de 1812 quedó a medio camino, que a estas alturas puede incluso parecer apenas un paso adelante.

El proceso abolicionista en España se reabría de nuevo en el Trienio Liberal en el que se plantea impulsar penalizar el incumplimiento del tratado de 1817 de prohibición de la trata de esclavos que Fernando VII firmó con Inglaterra, sin gran voluntad de cumplirlo, a cambio de 400.000 libras.

La esclavitud fue objeto de debate en toda Latinoamérica produciéndose diferentes acontecimientos en este aspecto en muchos de sus países. En Puerto Rico la Constitución de 1812 se aplicó el 14 julio 2012, en virtud de la cual se otorgaba la ciudadanía española a los puertorriqueños, declarándose a Puerto Rico como una de las provincias españolas, y concediendo el derecho al voto a su pueblo, no obstante estos privilegios no se aplicaban a los esclavos.

Los avances contra la esclavitud se producirán en Chile y en Argentina, siendo esta última independiente mediante la constituyente de Buenos Aires en 1813, proclamándose la abolición gradual de la esclavitud hasta que en 1817 la Constitución argentina de hacienda la abolición de la esclavitud aunque no la aplique formalmente. En 1817 Simón Bolívar hizo una la defensa de la abolición de la esclavitud, realizando un llamamiento en todo Latinoamérica para conseguir su abolición definitiva.

La primera abolición legal de la esclavitud en España se produjo en el año 1837, en donde se recogía únicamente la abolición de la esclavitud en el territorio metropolitano, ya que en las provincias de ultramar si estaría permitida.

En 1842 se aprueba la "Reglamentación de la esclavitud" cuya principal finalidad era la de inventar humanizar el fenómeno de la esclavitud, no obstante esta reglamentación fue incumplida en la mayoría de los casos.

Otro elemento normativo de la época, a pesar de sus escasos resultados, fue la aprobación en 1845 de la denominada "ley de persecución del tráfico negrero", firmado por varios estados europeos entre los que se encontraban Inglaterra y España, y cuya principal finalidad era la de acabar con el contrabando de esclavos.

3.2. La Libertad de Opinión, de Expresión y de Prensa

3.2.1.El marco filosófico y jurídico de las libertades de opinión expresión y prensa en el Antiguo Régimen

Volciendo la mirada hacia los orígenes de la imprenta los libros primeramente eran difundidos a través de copias manuscritas y por ello el descubrimiento de la imprenta por Gutenberg a fines de la Edad Media trasformaría la sociedad humana y abriría una nueva era al conservar el pensamiento escrito y difundirlo en numerosos ejemplares. El descubrimiento de la imprenta facilitaría la producción masiva y económica de toda clase de impresos.

De manera no oficial la Inquisición se haría cargo a partir de 1478 de controlar y llevar a cabo la censura de libros impresos. Una Pragmática en 1502 prohibiría terminantemente producir, publicar, vender o importar todo tipo de escritos impresos sin la perceptiva

licencia real³⁸². Los encargados de dar las licencias de impresión serían los Arzobispos de Toledo, Sevilla, Granada, así como los Obispos de Burgos y Salamanca, junto con los Reyes y los Presidentes de las Audiencias de Valladolid y Granada.

Esta Pragmática no determinaba claramente el procedimiento a seguir para la obtención de la licencia de impresión, sólo establecía que ningún libro puede imprimirse ni venderse sin contar con la licencia correspondiente y que, una vez obtenida la misma, se debe de llevar un ejemplar impreso a la autoridad competente para que se compruebe que se ha impreso tal como se entregó cuando se le dio la licencia, sin realizar modificación alguna.

La figura en la que el Consejo de Castilla delegó la concesión de las licencias de impresión fue el llamado “Juez de Imprentas” creándose posteriormente la figura de los Jueces subdelegados.

Con los Austrias menores se endurecieron las medidas para controlar la impresión. Por una Real Orden de 13 de junio de 1627 se prohibirá “imprimir papeles algunos sin las licencias que requieren”, así no se podrían imprimir cartas, apologías, coplas, gacetas, panegíricos, sermones, discursos...etc si no se contaba con la aprobación de los comisarios, presidentes de las audiencias o chancillerías, oidores, ministros o justicias obligándose a incluir siempre la fecha de impresión constituida también como un elemento de control. La multiplicación de órganos censores, no conectados entre sí acabó relajando la obtención de las licencias de impresión.

Paralelamente hemos de referirnos a la cuestión de los libros prohibidos cuyo origen se encuentra en los listados que realizaban los Obispos a partir del Concilio de Letrán y cuya centralización en torno al Santo Oficio se produce en el pontificado de Pablo IV.

³⁸² García Pérez, María Sandra *Imprenta y censura en España desde el reinado de los Reyes Católicos a las Cortes de Cádiz: Un acercamiento a la legislación*. Boletín de la ANABAD, ISSN 0210-4164, Tomo 48, Nº 2, 1998 , págs. 197-204

En España se establece, a través de la Pragmática de 7 de septiembre de 1558 otorgada por Felipe II, la prohibición de poseer, vender o imprimir libros que el Santo Oficio de la Inquisición prohibía o vedaba su acceso.

Suele fijarse en el Siglo XVII el comienzo de la libertad de imprenta al calor de las dos grandes revoluciones que se suscitan en los Países Bajos y en Inglaterra. La Guerra de Flandes que enfrentó a las 17 Provincias de los Países Bajos contra su soberano el Rey de España generó ideas favorables a la libertad de prensa conectadas con la diversidad de la creencia de libertades religiosas y la tolerancia que se desarrolló en un clima de libertad y producción cultural.

En Inglaterra pervivía el sistema de censura previa plasmado en la “Licensing Act de 1662” que regularía la impresión de folletos y la importación de libros. Disposiciones similares a las contenidas en una orden de la Cámara Estrellada “Star Chamber” de 1637, tribunal inglés ubicado en el Palacio de Westminster cuyo objetivo principal eran los casos de calumnias y traición.

Los libreros ingleses argumentaron que los autores tenían un derecho natural e inherente de la propiedad de lo que escribieran y este argumento convenció al Parlamento que promulgó la primera Ley de Propiedad Intelectual.

Se trataba del llamado Estatuto de la Reina Ana, promulgado el 10 de abril de 1710, que constituye un antecedente histórico de gran importancia en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual siendo la primera norma legal que reconoció lo que se conoce en el derecho anglosajón como copyright. Esta normativa fue enfocada a corregir los problemas existentes en ese momento en torno a la reproducción y venta de obras literarias, reconociendo al autor su derecho de propiedad.

Esta norma pretendía eliminar los monopolios que se habían creado y brindar al autor el reconocimiento como titular de su obra y

por consiguiente de los derechos que de ella derivan, entre estos, el de autorizar la reproducción de su obra y poder escoger el editor que las realice. Se buscaba de igual forma el fomentar las artes literarias y artísticas pero siempre buscando que sea el autor el que tenga la libertad de reproducción y difusión de sus obras.

Lo que se pretendía era eliminar los monopolios de los editores, pero fueron ellos mismos quienes propusieron tener un plazo de protección de 14 años, lapso prorrogable por otros 14 años si es que el autor aún se encontraba con vida. La otra opción que tenía el autor era que transcurridos los 14 años podía escoger a otro editor. Las obras impresas anteriormente a la expedición del Estatuto, gozan de un plazo de protección único de 21 años, a partir de la fecha de aprobación.

En cuanto a la libertad de pensamiento vinculada a la libertad de prensa y de imprenta cabe significar la figura de John Milton (1608-1674) y su obra la *“Aeropagítica: Un discurso del Sr. John Milton al Parlamento de Inglaterra sobre la libertad de impresión sin censura”*, obra publicada el 23 de noviembre de 1644 y en la que abundan referencias bíblicas y clásicas a las que Milton recurre para reforzar su argumentación sobre el principio del derecho a la libertad de expresión y la posición a la censura y a la necesidad de licencia de impresión.

Milton había sufrido la censura en su intento de publicar diversos escritos defendiendo el divorcio y por ello escribe un texto que constituye una llamada a la libertad de expresión en la que Milton pide una mayor libertad constitucional, y alberga una de sus frases más célebres: «Pues los libros no son en absoluto cosas muertas, sino que contienen un potencial de vida en ellos que los hace tan activos como el alma de la cual provienen; no, preservan como en un tubo de ensayo los extractos más puros del intelecto vivo que los engendró».

Paralelamente el propio John Locke informaría negativamente sobre la ley de censura previa de 1662.

Volviendo a la consideración de la situación en España, puede entenderse que la nueva dinastía de la Casa de Borbón supuso una continuidad sustancial con las políticas de los Austrias al haberse reiterado por la Real Orden de 4 de octubre de 1728 la prohibición de imprimir sin licencia previa del Consejo de Castilla sin duda por la importancia que el gobierno atribuía al control de la imprenta.

Sin embargo un cambio significativo lo constituyó la Real Resolución de 28 de septiembre de 1744 dada por Felipe V que atribuyó al monarca las funciones del Consejo sobre el otorgamiento de licencias para la impresión de tratados de paz u otra materia relacionada con asuntos de Estado. Ya en esta época se produce un predominio de la censura civil en detrimento de la inquisitorial y la eclesiástica³⁸³.

La Escribanía de Gobierno aparece como el único tribunal competente para conceder las licencias de impresión. Rumeu de Armas manifiesta que a principios del Setecientos no existía dependencia efectiva del Juez de Imprentas porque “cuando la censura se encomendó a los Jueces, los secretarios desde sus despachos, prohibían cuantas publicaciones deseaban de Real Orden”³⁸⁴. Pero la licencia estatal no era una garantía definitiva porque en cualquier momento la Inquisición podía prohibir cualquier impreso.

En 1748 y 1749 se tomarían medidas en relación con manifestos y defensas legales porque era demasiado corriente imprimir alegaciones en pleitos con el fin de denigrar a la parte contraria. Para ello se acuerda que no se podría imprimir “papel

³⁸³ Enciso Recio, Luís Miguel “*Prensa y ideología, historia de España*”, XXIX, II, Madrid 1985, pp. 197-199.

³⁸⁴ Romeu de Armas, A.: *Historia de la censura literaria gubernativa en España*, Madrid, 1940.

alguno, de volumen grande, o pequeño sin que primero se presente manuscrito al Consejo o Tribunal en que esté pendiente el negocio de que se trate”. Lo cual parece importante porque se podría colapsar la Administración de Justicia ante una gran copia de papeles por ello la Real Orden de 4 de mayo de 1760 limitaría la impresión de estos documentos dirigidos a su Majestad.

Con Carlos III aparecen una serie de disposiciones tendentes a potenciar el libro español aboliéndose la tasa que se imponía a los librereros e impresores y eliminándose los privilegios otorgados a los impresores reconoce tan solo una especie de precedente de los derechos de autor³⁸⁵. Este monarca puntualiza las disposiciones sobre libros prohibidos dictaminando por una Real Resolución de 14 de junio de 1768 que antes de prohibir una obra el Tribunal de la Santa Inquisición debía escuchar a su autor o defensor y que si un libro era desautorizado en una parte no hacía falta incluirlo en la lista sino modificarlo.

El conocimiento de los autos de censura en esta época³⁸⁶ viene facilitado por el informe que Gregorio Mayans y Siscar uno de los grandes representantes de la Ilustración española³⁸⁷ realiza en 1752 a propósito del auto dado por el Juez de Imprentas Juan Antonio Curiel y Luna³⁸⁸ el 22 de noviembre de 1752, de este texto que sobresalen

³⁸⁵ *Reales órdenes de 22 de marzo de 1763; de 20 de octubre de 1764 y de 8 de noviembre de 1877.*

³⁸⁶ Mestre, A.. *Informe de Mayans sobre, el Auto de Censura de Libros*, establecido por Curiel, Juan en 1752. Publicado en Homenaje al Dr. D Juan Reglá Campistol, vol. II (1975)

³⁸⁷ Mayans, Gregorio estudia derecho en 1713 en Valencia y Salamanca ganando la Cátedra de Código Justiniano de la Universidad de Valencia defendiendo la reforma de los estudios jurídicos en el sentido de disminuir la perportancia del derecho romano y aumentar la atención sobre el derecho autóctono español.

³⁸⁸ Curriel y Luna, Juan Antonio se licenció en Derecho pasando a Salamanca donde consiguió una Cátedra de refléctales comenzando la carrera de magistrado que ejerció de alcalde de Casa y Corte (1739), fiscal del Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda (1741), ministro honorario del Consejo de Castilla (1745). Tan rápidos y espectaculares ascensos culminaron con el nombramiento de juez

dos aspectos, el centralismo y la dureza constatada en la posibilidad de utilizar los medios represivos más enérgicos y su propia lectura nos permite conocer la situación en que se encuentra por entonces la libertad de imprenta³⁸⁹.

“Auto de censura de libros. Juan Curiel. 1752

1. Nadie puede imprimir libros, memoriales o cualquier papel, "aunque sea de pocos renglones", sin licencia del Consejo, bajo pena de dos mil ducados y seis años de destierro.

2. Además de la licencia, es necesario el examen del original con firma en cada página del escribano del Consejo y, una vez impreso, la entrega del original con dos ejemplares para que se constate su fidelidad. En caso de transgresión, la pena será de perdición de bienes y destierro perpetuo.

3. Antes de venderse los libros impresos el Consejo debe tasarlos y corregirlos, bajo las penas contenidas en las leyes.

4. No puede cambiarse la fecha o lugar de edición o dar nombre supuesto de autor, so pena de pérdida de bienes y destierro perpetuo. A los libreros que consientan tales hechos se les amenaza con cincuenta mil maravedíes y destierro por dos años, con el correspondiente aumento si se repiten.

5. Si se trata de libros dogmáticos se impondrá pena de muerte y perdimiento de bienes, además de quemarlos públicamente. Los mismos castigos para quien imprima, reimprima, venda o posea una obra prohibida por la Inquisición.

6. Quien imprima informaciones de derecho o defensas legales sufra la pena de doscientos ducados y privación perpetua del oficio.

7. No haya prensas ocultas ni se opondan al registro.

de Imprentas (1752) y consejero de la Inquisición (1753). 1 Una amplia biografía del personaje, en Gonzalez Palencia, A: *El Sevillano Don Juan Curiel, Juez de Imprentas, Sevilla, 1945*.

³⁸⁹ Sobre los capítulos de Curiel ver también, Javier Bragado Lorenzo, Caro López, Ceferino. “*La censura gubernativa en el siglo XVIII*” Hispania, núm. 217 LXIV/2, 2004. pag 571-600.

8. La fe de erratas debe indicar el precio de cada pliego y de todo el libro.
9. Cúmplanse las leyes para la impresión de bulas, indulgencias...
10. Las reimpresiones de cartillas para niños, gramáticas, diccionarios..., que no necesitan licencia del Consejo, deberán obtenerla de los preladados y ordinarios diocesanos.
11. Es necesaria la licencia de la Inquisición en su ámbito.
12. Empléese buen papel para los libros, so pena de pérdida de la obra y la multa de cincuenta ducados, que aumentará ante nuevas reincidencias.
13. Nadie pueda introducir en España o vender libros españoles impresos en el extranjero, bajo pena de muerte y pérdida de bienes.
14. Los libros impresos en el extranjero deben ser tasados en el Consejo antes de introducirse en España o venderse. Los transgresores serán multados con cien mil maravedíes y pérdida de libros.
15. Las mismas penas para quien vende libros de extranjeros de primera edición o de españoles en reediciones, impresos fuera de España.
16. Nadie ponga trabas a la inspección del superintendente de Imprentas o sus delegados.
17. No se pueden vender librerías después de la muerte de su propietario hasta haber pasado cincuenta días, so pena de doscientos ducados.
18. Quien introduzca o venda misales, breviarios..., editados en el extranjero, sin entregarlos al Consejo, incurra en pena de pérdida de bienes y destierro perpetuo.
19. Todos estos capítulos se aplicarán también en los antiguos reinos de la Corona de Aragón.”

Más de treinta libreros y editores que constituían por entonces la vanguardia del pensamiento ilustrado elevaron su protesta recurriendo al supremo órgano de justicia que era el Consejo. El Juez de imprentas tuvo que dar cuenta de cada uno de los artículos contenidos en su auto y justificar la dureza de las penas. Los fiscales

del Consejo aceptaron el informe el 13 de enero de 1753, declararon que el auto se ajustaba a las reales ordenanzas y, en consecuencia, debía desecharse la protesta de los libreros.

Los libreros enviaron unos memoriales al Monarca en los que se pedía la suspensión del auto, que el oficio del corrector de libros fuese suprimido, los derechos de tasas y licencia moderados, que éste remitió a los fiscales del Consejo. Los fiscales consideraron que uno de estos memoriales merecía un castigo por la manera de tratar los decretos reales y los insultos a sus ministros pero Juan Curiel fue cesado.

Señalemos que es entonces cuando aparece la figura de Manuel de Roda como autor del referido Memorial y así será localizado a instancias de los fiscales del Consejo de Castilla. Manuel de Roda había estudiado Derecho en la Universidad de Valladolid y acabaría siendo uno de los más significados hombres de Estado de la Ilustración³⁹⁰.

Mayans apoya el Memorial de Roda que satiriza las leyes sobre la materia y en el fondo a los propios Reyes que las dieron y ridiculiza al Juez de imprentas: “La defensa de Vm. está admirable. Las leyes son como las medicinas, acomodadas a las circunstancias de los tiempos. La inobservancia de ellas, si no ha sido justa acrimina a todos los ministros de justicia; y si es justa favorece a Vm. como lo

³⁹⁰ Roda y Arrieta, Manuel de (1708-1802) sería nombrado embajador en Roma desde 1760, ministro plenipotenciario ante el Papa. En 1765 fue nombrado ministro (secretario) de Gracia y Justicia; fue el primer ministro español libremente elegido por Carlos III y llegó a influir poderosamente sobre el monarca, sobre todo en materias eclesiásticas; fue de hecho la eminencia gris de este reinado desde 1765 a 1777, fecha en que pierde su ascendiente al preferir el monarca a Floridablanca. Su actuación fue decisiva en la Expulsión de los Jesuitas (1767).

entiendo. El Juez de impresiones debe a Vm. muchas gracias por la modestia con que se ha explicado³⁹¹”

La crítica se extiende al excesivo control y al centralismo contenido en el Auto de censura de libros de Curiel. Mayans ataca a aspectos puramente técnicos como el tema de los precios³⁹², el de la autoría o más bien como la publicación de un libro sin nombre³⁹³, la imposición de la pena de muerte al vendedor de un libro herético³⁹⁴.

³⁹¹ Reflexiones sobre el reciente auto tocante a impresiones que se publicó, siendo juez de imprentas Curiel, D. Juan colegial mayor y hechura de los jesuitas. Mayans, D. Gregorio hizo estas Reflexiones a instancia de D. Manuel de Roda que era el abogado de los impresores y libreros, y que por ello fue procesado, y aburrido dejó la carrera de abogado y tomó la de secretarías, lo que fue para ser más exaltado en Roma y en Madrid.

³⁹² Sobre el capítulo 3 me atreveré a decir que el que inventó la tasación de los libros fue un ignorante que no sabía que prudencialmente se puede saber el coste de una impresión, pero que es incierta su venta y no se sabe cuánto tardará en despacharse, para que pudiera de algún modo regularse el precio. Dejo aparte que el autor esparce su obra y ésta se vende en varias partes, unas más distantes que otras, y en unas hay más despacho que en otras, y todos estos segundos vendedores no admiten regla fija en los precios. Ni éstos se pueden poner a los libros extranjeros por la variedad de los costes en diferentes reinos y repúblicas por razón del papel, falta o abundancia de oficiales, distancia o proximidad de España, más o menos diligente corrección, abundancia o rareza de los libros, antiguos o modernos, de primera o segunda impresión. No hallo término a las consideraciones que sobre esto se me ofrece.

³⁹³ Sobre el capítulo 4, entre otras cosas, se ofrece decir que puede haber mil razones políticas para que los autores no manifiesten su nombre. Y esto lo han practicado los hombres más prudentes y sabios de todas las naciones. Y poner contra esto pena de perdimiento de bienes y destierro perpetuo de estos reinos, es un injusto rigor. Y mucho más injusto que al librero, mercader de libros o encuadernador que divulgare, vendiere o encuadernare libro o papel impreso en otra forma que la prevenida incurra en tan graves penas como se les impone, porque es imposible que averigüen si son verdaderos o fingidos todos los nombres de los papeles y libros que venden.

³⁹⁴ El capítulo 5 es también notoriamente injusto, porque los vendedores de los libros no son teólogos dogmáticos, ni están obligados a leer, entender y saber si los libros que venden tienen herejías, bastándoles para poder venderlos lícitamente que ignoren que contienen doctrina herética y no perjudicial a las costumbres y regalías, que los vean con licencias que si son extranjeros no se introduzcan ocultamente, y que los compren usados de personas honestas y timoratas. Y poner pena de muerte a quien obra con estas precauciones es desafuero. Que se quemen las obras malas, es justo. Pero no lo es imponer pena de muerte a la reimpresión de cualquier obra vedada por el Oficio de la Inquisición en cualquier lengua y de cualquier calidad y materia que sea la obra,

La impresión de libros fuera de España, la llegada de libros procedentes del extranjero³⁹⁵.

El asunto Curiel acabó favoreciendo la centralización en manos del Juez de Imprentas de más competencias en el campo de la Censura Gubernativa, siguiendo la política del Consejo de Castilla, de hecho en 1763 salió una orden del Consejo “para que se remitieran al Juez de Imprentas todas las licencias que se dieran en el Consejo para escribir”. Ello perjudicaría a la propia impresión pues tener que recurrir a la licencia del Juez de Imprentas de Madrid alargando los trámites y hacían más dificultosas las solicitudes.

La confrontación entre la censura civil y eclesiástica se plantearía en el caso llamado del Sermón Panegírico en el que los fiscales del Consejo acusarían al Vicario General de no respetar la Real Cédula de 20 de abril de 1763 luego incluida en otra Real Cédula de 1 de febrero de 1778 según la cual ciertas impresiones precisaban de la autorización del Consejo si tocaban asuntos de religión.

La censura gubernativa adquiere su principal importancia a finales del siglo XVIII en dos materias significativas, la importación de libros extranjeros y la censura de la prensa periódica.

La prensa, es decir, el primer periódico diario nace en Inglaterra a principios del S. XVIII desarrollándose una actividad

siendo constante que muchas muy útiles están prohibidas en perjuicio de las regalías o por causas políticas que ya cesaron.

³⁹⁵ De la observancia del capítulo 14 se seguiría que nadie pediría libros fuera de España, primeramente porque el Consejo no podía tasarlos debidamente, porque no sabe si el libro que se hace venir de fuera ha costado poco o mucho, si fuera de España es raro o no, si ha salido de la oficina o de algún librero, si de lejos o de cerca; todas las cuales circunstancias y otras muchas varían los precios notablemente, siendo cierto que hay libro que en Madrid vale diez pesos y en Londres cien doblones. Fuera de esto, haber de llevar el libro a Madrid para que se tase, tiene el gasto del portador a la ida y vuelta, la solicitud del procurador, la molestia de las cartas, el gasto de la tasación y la impaciencia de tantas y tan inútiles diligencias; y por decirlo en una palabra, esto es impedir el comercio de los libros, tan importante que los reyes han querido que fuesen francos.

empresarial y una estructura informativa con fines lucrativos y adquiriendo rápido desarrollo en los países europeos.

Como antecedente de la prensa suelen considerarse los mercurios o gacetas, una especie de boletines que informaban de las novedades ocurridas en los puertos y en las ferias comerciales. En la segunda mitad del siglo XVII aparecería la Gaceta Ordinaria de Madrid que se editaría ininterrumpidamente desde finales de este siglo.

Entre 1737 y 1750 se consolida la aparición de la prensa en España con los primeros periódicos. Todas las ciudades importantes empezarían a tener gacetas y pronto aparecen los periódicos.

La primera publicación periódica diaria de España sería el Diario Noticioso, Curioso, Erudito, Comercial y Político a la que se concedió permiso para publicar por un Real Privilegio de 1758, siendo el más influyente de los periódicos El Censor (1781), de influencia enciclopedista, liberal, regalista y jansenista, que cuestiona políticas y principios legislativos y religiosos; haciendo crítica social y profunda de las instituciones y asimismo cuestiona la estructura estamental de la sociedad.

El Censor tuvo que luchar constantemente para poder obtener licencia de impresión y luego contra la censura y la oposición del poder conservador.

La Revolución Francesa constituiría un obstáculo para las pretensiones de la libertad de imprenta al recrudecerse la censura previa y las medidas de control. Sin embargo es entonces cuando aparece un texto considerado como paradigma y referencia obligada en el avance de la libertad de imprenta y de los derechos y libertades en general: la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789, que reconoce la libertad de expresión e imprenta como uno de los derechos irrenunciables del hombre.

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano establece su artículo 11: “La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; todo ciudadano puede por tanto hablar, escribir, imprimir libremente, sin perjuicio de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley.”

Cabe señalar en España la defensa de la libertad de imprenta por los críticos ilustrados que la vinculan con la instrucción pública entendiendo el gobierno debía ilustrar al pueblo en las verdades políticas.

Destaca la figura de Valentín de Foronda, político y periodista quien en 1780 presentó una disertación sobre la libertad de escribir, publicada en un periódico de la Corte. De familia noble y acaudalada, conocedor de la obra de Montesquieu, de Locke, Adam Smith, lector de Rousseau, tras la invasión francesa, en vísperas de su llegada a Cádiz publica en Filadelfia unos “Apuntes ligeros sobre la Nueva Constitución proyectada por la Majestad de la Junta Suprema de España y reformas que intenta hacer en las leyes”, que merecieron los elogios de Jefferson.

En este escrito defiende un gobierno constitucional con separación de poderes, la soberanía del pueblo y las libertades individuales frente al despotismo y entre 1809 y 1811 publica diversos panfletos sobre temas constitucionales (Cartas sobre varias materias políticas, Santiago, 1811, Ligeras observaciones sobre el proyecto de Nueva Constitución, La Coruña, 1811 etc.), en los que denuncia una constitución que no especifica claramente los derechos individuales, otorga excesivos poderes al rey y no separa los espacios político y religioso.

Para Foronda la libertad de imprenta era el medio idóneo para las discusiones científicas y la difusión de los conocimientos racionales y útiles que debe servir de base a la instrucción pública. “Si no hay libertad

escribir y decir cada uno su parecer en todos los asuntos, a reserva de los dogmas de la religión católica y determinaciones del gobierno, todos nuestros conocimientos llacerán el eterno olvido.”³⁹⁶

Se señala también las figuras de Manuel de Aguirre, militar, quien en 1786 había escrito un proyecto de código constitucional español en el que solicitaba a los gobernantes que estableciesen una sensata libertad de imprenta³⁹⁷, y del banquero y hacendista Francisco de Cabarrús quien defendió la libertad de imprimir para que pudieran circular las ideas y prevaleciera la opinión ilustrada.³⁹⁸

3.2.2. Las propuestas de libertad de imprenta en España: El Decreto de 1810

Si las revoluciones europeas del siglo XVII habían atacado frontalmente al sistema de censura serían las revoluciones del siglo XVIII las que fundamentarían el origen de la libertad de prensa incluyendo esta libertad entre los derechos del hombre y del ciudadano.

Sin embargo la censura previa continuaría en los comienzos del siglo XIX. Por un Real decreto de 11 de abril de 1805 se disponía que la autoridad relativa a las imprentas y librerías, se reuniera de hoy en adelante en un solo Juez de imprentas, con inhibición del Consejo y demás Tribunales. La explicación que se daba era la siguiente, con fecha de 11 del corriente se ha servido S. M. expedir el decreto siguiente: «El abuso que se ha hecho y hace en varios países extranjeros de la libertad de la imprenta, con grave perjuicio de la

³⁹⁶ Alvarez Junco, Jose; de la Fuente Monge, Gregorio. El nacimiento del periodismo político, *La libertad de imprenta en las Cortes de Cádiz* (1810 – 1814). 2009

³⁹⁷ Fernandez Sarasola, Ignacio. *Proyectos constitucionales en España*, 1786-1824, Madrid 2004, pgs 7-14

³⁹⁸ Fernández Sebastian, Javier. *El imperio de la opinión publica* según Álvaro Flórez Estada en Varela Suanzes-Carpegana, Joaquín coord., Álvaro Flórez Estada (1766-1853) Oviedo 2004, pgs 335-398,pg 347

religión, buenas costumbres, tranquilidad pública y derechos legítimos de los Príncipes, exige providencias eficaces para impedir que se introduzcan y extiendan en mis dominios los impresos que tantos males ocasionan.

El orden que hasta ahora se ha observado en cuanto a las licencias para imprimir, como también para la introducción de libros extranjeros, no basta a evitar el gran daño que causan las malas doctrinas. Los muchos negocios que están a cargo de mi Consejo no le permiten atender, a este con la vigilancia y celo que hoy se necesitan: el Ministro del mismo, que tiene la comisión del juzgado de imprentas y librerías del Reino, y sus Subdelegados en las Provincias, ocupados en otros negocios, se ven precisados a fiarse de Subalternos, cuyo interés privado suele prevalecer al público.

De ser inconexas y divididas las autoridades, de quienes dependen las licencias para imprimir, resulta el poder conseguirlas por un conducto, cuando justamente se han negado por otro. Como los Censores no tienen premio ni estipendio alguno, se elude la responsabilidad, no se suelen desempeñar estos encargos con el celo necesario, o se rehúsa admitirlos, mayormente no teniendo la debida libertad para informar imparcialmente, sin comprometerse con los autores por la falta de sigilo de parte de los Subalternos.

Para evitar estos y otros graves inconvenientes, simplificar y uniformar el gobierno de un ramo tan importante, facilitar el curso de las obras útiles, e impedir la publicación e introducción de las perjudiciales, he resuelto, después de una madura deliberación, que la autoridad relativa a las imprentas y librerías de mis dominios, se reúna de hoy en adelante en un solo Juez de imprentas, con inhibición del Consejo y demás Tribunales, bajo las reglas que he mandado comunicar por mi Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia a D. Juan Antonio Melón, Ministro de mi Junta general de Comercio y Moneda, a quien he tenido a bien nombrar para dicho destino.

Téngase así entendido en el Consejo, como también el Reglamento adjunto que he mandado formar para su inteligencia y gobierno.»

Esta disposición ponía fin a un tiempo final y la libertad de imprenta recibiría un tratamiento político y jurídico que concluiría con su legalización por las Cortes de Cádiz.

El Estatuto de Bayona de 1808, constituido como la norma constitucional de la España napoleónica establecería en su artículo 39 lo siguiente: “toca al Senado velar por la conservación de la libertad individual y de la libertad de imprenta”.

Los principios básicos que regirían la libertad de imprenta según los artículos 45 a 50 fijan que correspondería a una Junta senatoria de libertad de la imprenta, formada por cinco senadores nombrados por la propia cámara y renovados por quintas partes cada seis meses.

La Junta Senatorial de libertad de imprenta sería competente para conocer de los casos de violación de esta libertad, pudiendo recurrir a ella directamente, por medio de una petición, los autores, impresores y demás que tenían motivo para quejarse de que se les hubiera impedido la impresión por la venta de una obra.

Esta Junta tendría que velar por el ejercicio de la concesión de la libertad, quedándose exceptuados de tal protección los papeles periódicos, sometidos a licencia superior y censura gubernativas. Por su parte a las Cortes le correspondería elaborar la futura ley de prensa. Sin embargo nunca se desarrolló aquella articulación si bien un decreto del 29 de diciembre de 1809 autorizó a la imprenta real la publicación del régimen de exclusividad, de las leyes del reino.

Es importante considerar que según el artículo 145 de la Constitución de Bayona se establecería que habría que hacerse una ley en Cortes dos años después de haberse ejecutado esta Constitución. Ello suponía diferir la libertad de imprenta y convertir en letra muerta

los preceptos que consagraba la nueva libertad³⁹⁹. Por otra parte hemos de hacer constar que al desaparecer la Inquisición desapareció también el control del Santo Oficio sobre la prensa.

Corresponde ahora considerar la libertad de imprenta a la luz de los constituyentes de Cádiz puesto que las Cortes de Cádiz harían de la libertad de imprenta una de sus primeras preocupaciones y ocupaciones⁴⁰⁰.

Se ha discutido si el tratamiento dado a la libertad de imprenta en la Constitución de Bayona sería una fuente de inspiración para los constituyentes de Cádiz pero esto ha sido rechazado puesto que si no podemos olvidar que en Cádiz hubo personalidades que luego participarían muy activamente en la elaboración de las Cortes de Cádiz sobre todo como la figura de Antonio Ranz Romanillos, ni por la ilegitimidad de origen, ni por su significado ni por el diseño de la libertad y el sistema de garantías puede pensarse hubiera tal influencia.

La libertad de imprenta y de opinión se planteará desde los orígenes del propio proceso que conduciría a la elaboración de la Constitución de Cádiz, es decir desde la creación de la Junta Central y a partir del Decreto de la Junta Central de 22 de mayo de 1809 que contenía una primera convocatoria de Cortés.

La primera voz que se alzó a favor de la libertad de imprenta parece ser que fue la del Vizconde de Quintanilla, Vocal de la Junta Central, quien emitió un dictamen el 31 de agosto de 1809 en el que se señalaba que era urgentísimo conceder la libertad de prensa bajo justas

³⁹⁹ Fernández Segado, Francisco “*La libertad de imprenta en el periodo inmediato anterior a su legalización por las Cortes de Cádiz*” (1808-1810) Pensamiento Constitucional Nº17, 2012 / ISSN 1027-6769

⁴⁰⁰ Artola, Miguel “*El camino a la libertad de imprenta, 1808-1810*” En homenaje a Maravall, José Antonio; reunido por Iglesias, Carmen; Moya, Carlos; y Rodríguez Zúñiga, Luís. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas y otras instituciones, 1985, pp. 211 y ss: en concreto, p.212

condiciones. Pero la voz más destacada y la que se reconoce como iniciadora del reconocimiento de la libertad de imprenta sería la de Lorenzo Calvo de Rozas quien el 12 de septiembre de 1809 elevaría una larga proposición a la Junta Central en favor del reconocimiento legal de este derecho⁴⁰¹.

Recordemos nuevamente la figura del liberal Lorenzo Calvo de Rozas, comerciante de próspera fortuna nacido en el valle de Carranza, señorío de Vizcaya, que había huido a Zaragoza al estallar la Guerra de la Independencia dónde fue Secretario de las Cortes de Aragón en 1808 organizando la defensa contra los franceses y pasando luego a la Junta Central en Sevilla donde el 15 de abril de 1809 propondría la convocatoria de Cortes que culminaría con el Decreto de 22 de mayo.

La Junta Central se encontró con que hubo de abordar la actuación de la prensa en el proceso político y a fines de mayo de 1809 la propia Junta ordenó la suspensión de varios periódicos, entre ellos el Correo político y literario de Sevilla, por la publicación de un artículo crítico con el ejército, remitido por el vocal de la Junta Lorenzo Calvo de Rozas.

Es en este contexto en el que Lorenzo Calvo de Rozas presentaría una “Proposición hecha a la Junta Central el 12 de septiembre de 1809 sobre la libertad de imprenta⁴⁰². Se recuerda que Lorenzo Calvo de Rozas era muy próximo al poeta Quintana quien había publicado unos años antes su “Oda a la Invención de la Imprenta” y que a su vez ambos tenían una gran cercanía con Lord

⁴⁰¹ La Proposición fue publicada por el autor en diciembre de 1810, véase Calvo de Rozas, Lorenzo, Reglamento que dio al Consejo interno de Regencia la Suprema Junta Central, motivos que ocasionaron su nombramiento y la abdicación de la misma junta, y proposición hecha en el mes de septiembre de 1809 sobre la libertad de la imprenta, Cádiz, 1810, págs.15-19.

⁴⁰² El texto de esta Proposición puede verse en Fuentes, Juan Francisco (ed): Si no hubiera esclavos habría tiranos. Madrid: Ediciones El Museo Universal 1988, pp. 34-37.

Holland quién justamente vivía en aquél tiempo en la capital andaluza, por lo que realmente se piensa que este personaje inglés ejercería una presión sobre sus amigos en relación con la libertad de imprenta.

Para Lorenzo Calvo de Rozas debía ser libre la facultad de escribir y comunicar por medio de la prensa, siendo su fundamento el derecho individual que existe “donde los que mandan no temen la censura pública, donde respetándose las facultades del hombre no se menosprecia el derecho que como hombre y como miembro de la ciudad tiene de pensar y escribir”. Como segundo argumento a la patria le interesa tener una opinión pública instruida y vigorosa y para ello hay que establecer la libertad de prensa y la libre comunicación de las ideas.

Por último y como tercer argumento la libertad de imprenta y opinión son necesarias para ganar la guerra. “interesa que no se apague el noble entusiasmo que encendió la venganza nacional, lo que sería inevitable si hubiesen de sus subsistir abusos y defectos que sólo pudiesen ser destruidos por la libertad de escribir o por la autoridad soberana aconsejada o ilustrada por esta.”

La Junta Central reclamaría el pronunciamiento del Consejo reunido de España e Indias y de la Comisión de Cortes al entender que el tema planteado era relevante.

El dictamen del Consejo sería negativo y se fundamentaba en las limitaciones que la vida en sociedad impone a la libertad. Los fiscales del Consejo entendieron que debía prohibirse los siguientes escritos: los atacan a la religión católica, los atacan directamente al gobierno o a las autoridades públicas, aquellos que fueran en contra de la obediencia que se debe a las leyes fundamentales del reino, los libelos o sátiras contra personas pública o particulares y los escritos contra la moral y las buenas costumbres.

Manuel de Lardizábal, miembro del Consejo actuaría como Juez de Imprenta elaborando un dictamen en donde restringía aún más la libertad, solicitando proponer un endurecimiento de las penas en poner a los contraventores de la legislación que a su juicio podrían ser tan sólo pecuniarias sino también personales de mayor o menor gravedad en función del delito.

Los argumentos del Consejo sería más políticos que jurídicos y aluciría a las obras sediciosas e impías de Voltaire, Rousseau, D'Alembert, Diderot, Condorcet, Mercier y Raynal, sosteniendo que estos autores son los que pusieron los fundamentos de la Revolución Francesa haciendo el mayor estrago en las piadosas costumbres de la juventud española.

En suma el Consejo se pronunció por no permitir la libertad de prensa y por el mantenimiento del régimen de censura previa existente⁴⁰³. Sólo hubo una voz discrepante, la de José Pablo Valiente quién en un voto particular se mostró a favor de la libertad de Imprenta.

La Comisión de Cortes, sin embargo, mantuvo una posición favorable respaldando la “Memoria sobre la libertad política de imprenta” presentada por el canónigo José Isidoro Morales. Este personaje considerado como un ilustrado presentaría ante la Junta de instrucción pública una memoria en defensa de la libertad de imprenta porque los beneficios que dimanaban de la imprenta eran múltiples, rebatiendo los peligros que para la religión podía suponer el ejercicio de esta libertad y defendiendo que la libertad de imprenta era más beneficiosa frente a los abusos que podían producirse como las calumnias y los ataques a las personas haciendo finalmente hincapié

⁴⁰³ Cabrera Bosch, Isabel, “*Libertad de la imprenta: Sus antecedentes e incidencias en el Consejo (1808-1810)*” En Fernández Albaladejo, Pablo y Ortega López, Margarita. *Antiguo Régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola*, vol. 3 (Política y Cultura). Madrid: alianza editorial – ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid 1995, pag 445.

en el carácter de libertad política con respecto a la libertad de imprenta. Esta memoria sería aprobada por la Junta de instrucción publica quien la mandó imprimir⁴⁰⁴.

Pero sin duda fue Álvaro Flórez Estrada quién en mayor medida realizaría una importante aportación con respecto a la libertad de imprenta. Flórez Estrada es considerado como un exponente del radicalismo liberal, defensor de la Revolución Francesa y del sistema político inglés así como introductor de las ideas económicas de Adam Smith.

El 17 de noviembre de 1809 Flórez Estrada llevó a la Junta Central unas “Reflexiones sobre la libertad de la imprenta” en las que reiteraba algunas de las ideas que ya había expuesto manifestando que todos los males de la sociedad provienen únicamente de la ignorancia y del error. Para él en ningún país nacen sabios los hombres, es necesario que en todas partes los forme la educación siendo la libertad de imprenta el único remedio para mejorar la educación. La libertad de imprenta serviría para instruir al ciudadano en el conocimiento de sus derechos y en la defensa de sus libertades.

En su opinión, la libertad de imprenta es inexcusable para la difusión de las luces sin las que los españoles no podrán ser libres ni felices; la libertad de imprenta es fundamental para que no desaparezca el patriotismo; la libertad de imprenta es la única salvaguardia de la confianza y de la seguridad individual. La Junta central abordó el debate sobre la libertad de imprenta en la que algunos presentaron reflexiones en la misma dirección como

⁴⁰⁴ Morales, José Isidoro, *Memoria sobre la libertad política de la imprenta*, leída en la Junta de Instrucción Pública por uno de sus vocales... y aprobada por la misma Junta, Sevilla, Muñoz Álvarez, Manuel 1809. Peña Díaz, Manuel *José Isidoro Morales y la Libertad de Imprenta*. Imprenta y libertad en tiempos revueltos (1808-1810) Peña Díaz, Manuel. Andalucía en guerra, 1808-1814 coord. por María Amparo López Arandía; Delgado Barrado, José Miguel (dir.), 2010, ISBN 978-84-8439-504-1, págs. 257-265.

Guillermo Moragués, Isidoro de Antillón y Alberto Lista pero otros propusieron justamente lo contrario.

Isidoro de Antillón que tuvo una participación destacada en el *Semanario Patriótico* editado en Sevilla junto con Blanco White, reclamaría la edición de un impreso sobre los males del despotismo y habitabilidad y las reglas para componer una legitimación nacional.

La Junta de Legislación se pronunciaría a favor de la libertad de imprenta asumiendo el dictamen favorable de la Junta de instrucción pública sobre la memoria presentada por Isidoro de Morales. De este modo la Junta Central recibía dos posiciones antitéticas, el dictamen contrario a la libertad de imprenta del Consejo y el pronunciamiento favorable realizado por la comisión de Cortes.

Fue entonces cuando se produjo la disolución de la Junta y el nombramiento de un Consejo de Defensa en cuyo reglamento se enlucía el artículo 19 que disponía que: “la regencia propondrá necesariamente a las Cortes una ley fundamental, que proteja y asegure la libertad de imprenta, y entre tanto protegerá de hecho esta libertad, como uno de los medios más convenientes, no sólo para difundir la ilustración general, sino también para conservar la libertad civil política de los ciudadanos”.

El 29 de enero de 1910 se crearía el consejo de regencia cuya actuación sería insensible con respecto a la libertad imprenta. La regencia incumpliría el mandato de la Junta Central y restringiría al máxima la libertad de imprenta manteniéndose la censura.

Sería el comienzo de las Cortes de Cádiz el que de nuevo plantearía los debates parlamentarios sobre la libertad de imprenta. Tres días después de comenzadas las Cortes el 14 de octubre de 1810, estas aprobaron la proposición del diputado Mejía de admitir las memorias y escritos que se recibiesen sobre la libertad de prensa. El diputado Pérez de Castro pidió que se realizase una comisión para que pusiera su reflexiones sobre el modo en que podría establecerse dicha

libertad. Muñoz Torrero lo defendió aquella idea y sus palabras posibilitaron el triunfo de los defensores de la imprenta libre nombrándose un la referida comisión constituida por 11 diputados entre los que se encontraban Argüelles, Pérez de Castro, Capmany y Muñoz Torrero.

Esta Comisión trabajo con celeridad presentado desde octubre a las Cortes un proyecto de Decreto sobre libertad política de imprenta que comenzaría a ser discutido. El proyecto elaborado por la Comisión suscitó un amplio debate que mostró el perfil social e ideológico de las Cortes de Cádiz.

Se marcan entonces las dos tendencias políticas que acaban por ser bandos enemigos, los liberales frente a los serviles, constitucionalistas frente a anticonstitucionalistas. Se destaca que es entonces cuando los diputados americanos apoyaron a los liberales.

El artículo primero resultó aprobado por 68 votos a favor y 32 en contra.

Decreto de 10 de Noviembre de 1810. Libertad política de la Imprenta.

“Atendiendo las Córtes generales y extraordinarias á que la facultad individual de los ciudadanos de publicar sus pensamientos é ideas políticas es, no solo un freno de las arbitrariedad de los que gobiernan, sino también un medio de ilustrar á la Nación en general, y el único camino para llevar al conocimiento de la verdadera opinión pública, han venido en decretar lo siguiente:

ARTICULO I. Todos los cuerpos y personas particulares, de cualquier condición y estado que sean, tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anteriores á la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que se expresarán en el presente decreto.

ARTICULO II. Por tanto quedan abolidos todos los actuales juzgados de Imprentas, y la censura de las obras políticas precedente á su impresion.

ARTICULO III. Los autores é impresores serán responsables respectivamente del abuso de esta libertad.

ARTICULO IV. Los libelos infamatorios, los escritos calumniosos, los subversivos de las leyes fundamentales de la monarquía, los licenciosos y contrarios á la decencia pública y buena costumbre serán castigados con la pena de la ley, y las que aquí se señalarán.

ARTICULO V. Los jueces y tribunales respectivos entenderán en la averiguacion, calificacion y castigo de los delitos que se cometan por el abuso de la libertad de la Imprenta, arreglándose á lo dispuesto por las leyes y en este reglamento.

ARTICULO VI. Todos los escritos sobre materias de religion quedan sujetos á la previa censura de los ordinarios eclesiásticos, segun lo establecido en el Concilio de Trento.

ARTICULO VII. Los autores, bajo cuyo nombre quedan comprendidos el editor ó el que haya facilitado el manuscrito original, no estaran obligados á poner sus nombres en los escritos que publiquen, aunque no por eso dejan de quedar sujetos á la misma rasponsabilidad. Por tanto deberá constar al impresor quien sea el autor ó editor de la obra, pues de lo contrario sufrirá la pena que se impondria al autor ó editor, si fuesen conocidos.

ARTICULO VIII. Los impresores están obligados á poner sus nombres y apellidos y el lugar y año de la impresion en todo impreso, cualquiera que sea su volúmen; teniendo entendido que la falsedad de alguno de estos requisitos se castigará como la omision absoluta de ellos.

ARTICULO IX. Los autores ó editores que abusando de la libertad de la Imprenta contravinieren á lo dispuesto, no solo sufrirán la pena señalada por las leyes segun la gravedad del delito, sino que este y el castigo que se les imponga se publicarán con sus nombres en la gaceta del Gobierno.

ARTICULO X. Los impresores de obras ó escritos que se declaren inocentes ó no perjudiciales serán castigados con cincuenta ducados de multa en

caso de omitir en ellas sus nombres ó algun otro de los requisito indicados en el artículo VIII:

ARTICULO XI. Los impresores de los escritos prohibidos en el artículo IV, que hubiesen omitido su nombre ú otra de las circunstancias ya expresadas, sufrirán ademas de la multa que se estime correspondiente, la misma pena que los autores de ellos.

ARTICULO XII. Los ipresores de escritos sobre materias de religion sin la previa licencia de los Ordinarios, deberán la pena pecuniaria que se les imponga, sin perjuicio de las que, en razon del exceso en que incurran, tenga ya establecidas las leyes.

ARTICULO XIII. Para asegurar la libertad de la Imprenta, y contener al mismo tiempo su abuso, las Córtes nombrarán una Junta suprema de Censura, que deberá residir cercadel Gobierno, compuesta de nueve individuos; y á propuesta de ellos otra semejante en cada capital de provincia compuesta de cinco.

ARTICULO XIV. Serán eclesiásticos tres de los individuos de la Junta suprema de censura, y dos de los cinco de las Juntas de las provincias, y los demas serán seculares, y unos y otros sugetos instruidos, y que tengan virtud, probidad y talento necesario para el grave encargo que se les encomienda.

ARTICULO XV. Será de su cargo examinar las obras que se hayan denunciado al Poder ejecutivo ó Justicias respectivas; y si la Junta censoria de provincia juzgase, fundando su dictámen, que deben ser detenidas, lo harán así los jueces, y recogerán los ejemplares vendidos.

ARTICULO XVI. El autor ó impresor podrá pedir copia de la censura, y contestar á ella. Si la Junta confirmase su primera censura, tendrá accion el interesado á exigir que pase el expediente á la Junta suprema.

ARTICULO XVII. El autor ó impresor podrá solicitar de la Junta suprema que se vea primera y aun segunda vez su expediente, para lo que se le entregará cuanto se hubiese actuado. Si la última censura de la Junta suprema fuese contra la obra, será ésta detenida sin mas exámen; pero si la aprobase, quedará expedito su curso.

ARTICULO XVIII. Cuando la Junta censoria de provincia ó la suprema, segun lo establecido, declaren que la obra no contiene sino injurias personales, será detenida, y el agraviado podrá seguir el juicio de injurias en el tribunal correspondiente, con arreglo á las leyes.

ARTICULO XIX. Aunque los libros de religion no puedan imprimirse sin licencia del Ordinario, no podrá éste negarla sin prévia censura y audiencia del interesado.

ARTICULO XX. Pero si el Ordinario insistiese en negar su licencia, podrá el interesado acudir con copia de la censura á la Junta suprema, la cual deberá examinar la obra, y si hallase digna de aprobacion, pasar su dictamen al Ordinario, para que mas ilustrado sobre la materia, conceda la licencia, si le pareciere, á fin de excusar recursos ulteriores.

Tendrálo entendido el Consejo de Regencia, y cuidará de hacerlo imprimir, publicar y circular.

Real Isla de León, 10 de Noviembre de 1810. Luis del Monte, Presidente. Evaristo Perez de Castro, Secretario. Manuel Lujan, Secretario. Al Consejo de Regencia.—

Los discursos más destacados en defensa de la libertad de prensa fueron pronunciados por Agustín Argüelles, José Mejía de Lequerica, Juan Nicasio Gallego y Diego Muñoz Torrero. También se debe considerar la defensa de otros diputados liberales como Antonio Oliveros, Evaristo Pérez de Castro, Joaquín Díaz Caneja y Manuel M. Luján.

Los que se opusieron a la libertad de imprenta lo hicieron porque es su opinión con la censura a posteriori se producirían daños muy difíciles de subsanar dado que la libertad imprenta causaría de los perjuicios tres a la religión, al Estado, las costumbres y a los particulares.

Los argumentos principales fueron el que la libertad de imprenta era uno de los derechos del hombre tal como defendió

Muñoz Torrero; el que los gobernantes necesitan conocer la opinión pública y la libertad de imprenta es el medio para conseguirlo, tal como defendería de Pérez de Castro; el que la libertad de prensa es el medio para ilustrar al pueblo tal como había expuesto Flórez Estrada; el que la libertad de prensa es necesaria para que España evitase en el futuro los errores del pasado y enderece el curso decadente de su historia tal como defendió Muñoz Torrero y Agustín de Argüelles y finalmente que la libertad de imprenta fomenta el patriotismo fundamentalmente en el periodo de lucha que entonces se vivía conocido como la guerra de independencia, posición que plantearían nuevamente Muñoz Torrero y Agustín Argüelles⁴⁰⁵.

3.2.3 La Libertad de Imprenta en la Constitución de Cádiz

Un año después de aprobado el Decreto las Cortes de Cádiz volverían a legislar sobre la libertad de imprenta a propósito de eximir del impuesto sobre los ingresos a los periódicos oficiales del momento. Pero sobretodo la libertad imprenta se consideraría en el texto constitucional.

La libertad de imprenta sería reconocida por el artículo 371 de la Constitución de Cádiz,⁴⁰⁶ referida tan solo a materias políticas porque los escritos religiosos debían ser sometidos a la aprobación y licencia de los obispos.⁴⁰⁷ Este proyecto recoge la libertad imprenta en términos casi idénticos al artículo 1º del decreto de 10 de noviembre de 1810.

⁴⁰⁵ Fuente Monge Gregorio, Álvarez José De la *La libertad de imprenta en las Cortes de Cádiz 1810-1840*. Capítulo 7 y 8. Pág. 117 a 150.

⁴⁰⁶ “Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes” (art. 371).

⁴⁰⁷ “En vano un diputado liberal, el americano Mejía, propuso que fuera suprimida también la censura religiosa. Diputados liberales de la importancia de Argüelles y Muñoz Torrero combatieron la proposición del diputado americano, rechazada casi por unanimidad de los representantes del país.” (Albornoz, A.: o. c., p. 133).

Además la Constitución de 1812 hace referencia la libertad de imprenta en el punto 24 del artículo 131 al señalar que una de las facultades de las Cortes es la de proteger la libertad política de imprenta.

Es importante señalar que el artículo de la libertad de imprenta se ubica en el capítulo constitucional dedicado a la instrucción pública porque se considera esa libertad como un medio para propagar los conocimientos y educar al ciudadano. También hemos de considerar que el 22 de febrero de 1813 se produjo la abolición del Tribunal de la Santa Inquisición por ser incompatible con la Constitución de 1812 y por lo tanto se acababa con la censura eclesiástica.

A la ley de la libertad de imprenta se añadiría el 10 de junio de 1813 tres decretos parlamentarios. El primero contenía unas adiciones a la ley de libertad de imprenta; el segundo, el Reglamento de las Juntas de Censura, y el tercero, unas Reglas para conservar a los escritores la propiedad de sus obras.

Éstos decretos cierran la legislación sobre la imprenta de las Cortes de Cádiz guardando total coherencia con los principios de la ideología liberal y perfilando un procedimiento capaz de garantizar la libertad de escribir. Recordemos por último como todo lo dispuesto por las cortes sería eliminado a la vuelta de Fernando VII.

Aun cuando el decreto de 2 de febrero de 1814 manifestaba en su artículo 1º el deseo de salvaguardar la obra y consolidar la situación existente en España, Fernando VII negaría la legitimidad de las Cortes y solicitaría que se suspendiesen los efectos de la Constitución y Decretos dictados en Cádiz. Concretamente con respecto a la libertad de imprenta se mantendría que esta libertad de escribir era perjudicial en una nación, pundonorosa y además subversiva en las Américas.

Una circular de 4 de mayo de 1814 dejaría sin efecto la libertad de imprenta restableciendo la censura y licencias previas, a la vez que supone la suspensión efectiva de las Juntas de censura.

3.3. El Principio de Igualdad.

La igualdad será otros de los grandes principios incorporados a la Constitución de Cádiz. El derecho a la igualdad se configura como aquel derecho inherente que tienen todos los seres humanos a ser reconocidos como iguales ante la ley y de disfrutar de todos los demás derechos otorgados de manera incondicional, es decir, sin discriminación por motivos de nacionalidad, raza, creencias o cualquier otro motivo.

Éste derecho se consagró en la Revolución Francesa, junto con la fraternidad y la libertad, bajo la inspiración de los humanistas y de los ilustrados.

Los constituyentes de Cádiz se plantearon la defensa del principio de igualdad que suponía acabar con una situación de inferioridad de unos ciudadanos frente a otros o en sus propias palabras de una situación en la que el vasallo aparece como la víctima despótica de la estructura social del antiguo régimen frente a la cual se enarbola la bandera del ciudadano y sus derechos.

Los Constituyentes de Cádiz habrían recibido la influencia de la obra de Emmanuel Sieyès⁴⁰⁸ “Ensayo sobre los Privilegios”⁴⁰⁹ en la que se pone al descubierto la imposibilidad de que permanezcan los

⁴⁰⁸ Sieyès, Emmanuel-Joseph: Conde Sieyès (Fréjus, 1748 - París 1836) fue político, eclesiástico, ensayista y académico francés, uno de los teóricos de las constituciones de la Revolución francesa y de la era napoleónica. En 1788, Sieyès publica Consideraciones sobre los medios de actuación de los cuales podrán disponer los representantes de Francia en 1789, donde sienta las bases de su pensamiento político, escribiendo el “Ensayo sobre los privilegios” y publicando su celebre panfleto: «Qu’est-ce que le tiers état?» (¿Qué es el tercer estado?).

⁴⁰⁹ Suances Carpen, Valera: *La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico* (Las Cortes de Cádiz) Madrid 1983

privilegios cuando se trata de establecer en la sociedad un criterio igualitario⁴¹⁰.

Este ensayo no fue sino un ataque frontal a los privilegios que según Sieyès él “todos los privilegios son, pues, por su propia naturaleza, injustos, odiosos, y están en contradicción con el fin supremo de toda sociedad política”. “El tema de los privilegios es inagotable, como los prejuicios que conspiran para sostenerlos. Pero dejemos este tema y ahorremos las reflexiones que inspira. Llegará un día en que nuestros descendientes, indignados, queden estupefactos ante la lectura de nuestra historia y den a esta inconcebible demencia el nombre que merece. Hemos visto en nuestra juventud cómo algunos escritores se distinguían atacando valerosamente opiniones de gran fuerza, pero perniciosas para la humanidad. Hoy se contentan con repetir en sus conversaciones y en sus escritos razonamientos anticuados contra prejuicios que no existen ya. Éste de los privilegios es quizá el más peligroso de los que han aparecido sobre la tierra, el más íntimamente ligado con la organización social, el que más profundamente la corrompe y en el que hay más intereses ocupados en defenderle”.

El ensayo defendía una nueva y revolucionaria visión política según la cual la soberanía reside en la nación y ésta la componen los ciudadanos que se rigen por una misma Ley lo que excluía a los estamentos privilegiados y legitimaba que el estado llano reformara por sí solo las instituciones de la Monarquía.

⁴¹⁰ Máiz Suárez, Ramón ed. Escritos y discursos de la Revolución. Centro de Estudios Constitucionales. 1990 Nación Y Revolución: *La Teoría Política De Emmanuel Sieyès*. Tecnos. 2007 Ayala, Francisco (ed) Sieyès, Emmanuel Joseph ¿Qué es el Tercer Estado?. Orbis. 1985 Sieyès, Emmanuel Joseph (1991). Máiz Suárez, Ramón. ed. El Tercer Estado y otros escritos de 1789. Espasa Calpe. ISBN 84-239-1987-0. Sieyès, Emmanuel Joseph (2003). Lorente Sariñena; Marta María; Vázquez, Lydia. eds. *¿Qué es el Tercer Estado?* precedido de ensayo sobre los privilegios. Madrid: Alianza Editorial. ISBN 84-206-5586-4

Para Sieyès, la concesión de un privilegio exclusivo sobre lo que pertenece a todo el mundo, representa hacer daños a todos a favor de uno solo; por lo que, sería una injusticia y la más absurda sin razón, aún, la concesión de un privilegio honorífico como contraprestación a un ciudadano que haya prestado un gran servicio a la patria, es injusto, porque coloca al cuerpo social por debajo del individuo privilegiado.

La propuesta de Sieyès adquirió una gran difusión durante el proceso de convocatoria de los Estados Generales y fue recibida por el pensamiento político de su época. Es por ello por lo que los constituyentes de Cádiz influidos por Sieyès entienden esta situación del ciudadano humilde convertido en una víctima de una estructura en la que por encima de él se encuentran los grandes y nobles y por encima de todos ellos el monarca que se atribuye un derecho extensivo sobre las vidas y haciendas de los ciudadanos.

La primera intervención sobre este debate la realizaría el diputado Vicente Terrero⁴¹¹, en la sesión de 25 de abril de 1811, comentando el trabajo realizado por la Comisión de la que manifestaría que ha desempeñado completísimamente su encargo en favor de la igualdad.

“Señor, he pedido la palabra para felicitar á V. M. y á la Nación entera por haber aparecido la aurora de la libertad y felicidad del ciudadano español... el Monarca se atribuía un derecho extensivo sobre las vidas y haciendas de los ciudadanos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué ignominia! Y qué degradación de la especie humana!. Dimanaban de aquí los homicidios impunes, las violencias, los saqueos ó robos, los destierros, las deportaciones y todo género de usurpación, que en la mayor parte descargaba

⁴¹¹ Terrero Monasterio, Vicente; religioso nacido en San Roque en 1776, párroco rector de Algeciras Participó activamente como diputado de las Cortes de Cádiz de 1812. En 1820 publicó un opúsculo alabando la Constitución de 1812. Fue inmortalizado por Pérez Galdós, Benito en sus Episodios Nacionales. Falleció en Cádiz en 1825.

sobre los pobres y humildes, á quienes se les llamaba pueblo bajo con la mayor injuria. V. M., reconociendo felizmente el derecho del hombre, al cual no puede prescribir ningún otro, ha debido concebir este sentimiento nobilísimo, encargó la comisión de Justicia formase un reglamento para que pusiese en salvo los derechos del ciudadano....”⁴¹².

Sin embargo los diputados de Cádiz no quieren identificarse con el igualitarismo de la fase jacobina de la Revolución francesa y consecuentemente con la imagen de desorden social y anarquía que había a su juicio caracterizado ese período. Asimismo tampoco plantean la defensa de la igualdad que diera origen a reclamaciones excesivas que ni siquiera los más radicales de entre los diputados de Cádiz estaban dispuestos a asumir⁴¹³.

La idea limitada de igualdad aparece reflejada en la intervención del diputado Joaquín Fernández de Leiva⁴¹⁴ cuando a la

⁴¹² “Siglos y más siglos habían corrido, acaso desde os tiempos cercanos á Jafeth, primer habitador de nuestro continente, sin que el hombre constituido en sociedad gozase del libre derecho de sus facultades. Desde las pocas épocas remotas de la barbarie y paganismo, y aun desde las ilustradas con las luces de la verdadera religión, el hombre humilde era el oprobio, el ludibrio y aun el despojo del noble, éste lo era del grande, y el grande lo era, el Monarca. El Monarca se estimaba un Dios sobre 1ª tierra, el grande una semidivinidad y el noble un magnun aliquid en cotejo del ciudadano honrado... Yo quisiera que puesto que este asunto interesa tanto á la humanidad, no fuese la discusión prolongada, sino que cada uno manifestase sus reparos entra cualquiera de los capítulos que no le satisficiesen, que estos fuesen contestados por la comisión, y se terminaría pronto; Porque, Señor, así creo que debería hacerse mientras existan racionales en la sombra y las tinieblas, racionales que deben gozar del cielo, y de la tierra”. Intervención de Terrero en la sesión de 25 de abril de 1811 Diario de Sesiones, 928.

⁴¹³ Pérez Ledesma, Manuel: *Las Cortes de Cádiz y la sociedad española*. Ayer 1, 1991. Pag, 164 y siguientes.

⁴¹⁴ Joaquín Fernández de Leiva (Santiago de Chile, 1775 Lima, 11 de julio de 1814); abogado y político chileno. Hijo del comerciante español, avecindado en Chile. Se doctoró en leyes en la Real Universidad de San Felipe. En 1803 figuraba como vicerrector de esa corporación. Por aquel tiempo también desempeñó el cargo de regidor del Cabildo de Santiago. El 3 de febrero de 1809 se le extendió oficialmente un poder para que representara a Chile ante las Cortes

hora de tratar sobre el artículo 22 del proyecto de Constitución que se convertiría finalmente en el artículo 22 de la Constitución de Cádiz de 1812 en el capítulo cuatro que trata de “los ciudadanos españoles” y en lo correspondiente a los españoles originarios de África, tras defender la igualdad de estos y criticar las condiciones que se les impone en el texto⁴¹⁵ manifiesta que “la privación o casi la privación de los medios para ser honrados y gozar de los beneficios de una Constitución liberal, expone á los que comprende á sesgar del camino de las buenas acciones, y á fomentar pasiones perjudiciales al buen orden”.

de Cádiz. En tal calidad permaneció en España los años 1810, 1811 y 1812 participando muy activamente en el debate en la Comisión de Constitución, sobre todo en lo relativo a los siguientes temas: La Regencia Reformas de la administración colonial del Imperio español Señoríos Poder Judicial. Aparece como uno de los firmantes de la Constitución española de 1812. Terminada su participación como constituyente fue nombrado oidor de la Real Audiencia de Lima. En ese puesto falleció, en 1814.

⁴¹⁵ . “Después de haber declarado que la Nación española, sin que reside esencialmente en la soberanía nacional, es la reunión de todos los españoles, y que son españoles todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas, y los hijos de estos, es ciertamente extraño que cuando se trata de establecer el primer grado de existencia civil ó política, la ciudadanía, se pongan tales trabas en los que por cualquiera línea traen origen de África que pueden quedar desesperados de obtenerla, y en un estado de abatimiento pernicioso al orden social. Las grandes dificultades se confunden con la imposibilidad. Se exigen méritos eminentes, de que es incapaz una clase excesivamente humillada; y aunque después se habla de los que se distinguen por su aplicación, sus talentos y su conducta, deberá entenderse esta definición heroica por estar en seguida del grado eminente que se necesita en los servicios. Por manera que los grandes esfuerzos de virtudes sociales, que en cualquiera sociedad bien constitución da hacen á los hombres dignos del voto general y de los primeros honores, se premian en los originarios de África con la ciudadanía. Se exige también el matrimonio; por consiguiente, si por una inclinación libre siguen otro estado que las leyes respetan, no son ciudadanos...por estas y otras observaciones he creído que el artículo (22 del proyecto de Constitución) , lejos de fomentar las esperanzas de los originarios de África, era el mejor medio de angustiarles y dejarles reducidos á su nulidad. Así, que establecí como principios fundamentales de mi voto los siguientes: primero, que es impolítico en una Nación que se constituye dejar descontenta una clase numerosa y en disposición de mirar con rivalidad á las demás, mayormente en las circunstancias en que se halla la española.

Es entonces cuando plantea una diferencia entre la igualdad planteada por los revolucionarios franceses y lo que el llama la igualdad racional y legal: “Que es muy distinta la igualdad jacobina de la igualdad racional y legal. Aquella, confundiendo todas las clases y jerarquías de la sociedad, produce la anarquía y todos los horrores que la son consiguientes. Viola la justa y equitativa ley de los premios graduales del mérito y la virtud”.

El Diputado Vicente Herrero finaliza su argumentación planteando que: “la igualdad racional consiste en abrir á los españoles la carrera de los premios, en términos que con buenas esperanzas puedan practicarse las virtudes que son tan necesarias para la felicidad de la sociedad. Que el ciudadano no es otra cosa que un estado de hombres buenos, que se hallan en aptitud de poder ser premiados y atendidos según sus méritos”⁴¹⁶.

Como ejemplo de sus ideas hará finalmente referencia a la ley de Carlos III a favor de los gitanos declarándolos “hombres buenos del estado llano común general” y por tanto extendiéndole los correspondientes derechos ante la libertad civil y la propiedad. En efecto Carlos III en 1783 nacionaliza a los gitanos mediante una

⁴¹⁶ “La distancia en que se hallar de la esclavitud de sus progenitores quita inconvenientes con que se podría argüir en caso de inmediación. Ahora añado que a los libertos ni á sus hijos les dejó en desesperación. Quedan los primeros en mi voto sujetos la formalidad establecida para la ciudadanía de los extranjeros, y los segundos á la de los hijos de estos. Cuando hablo por los originarios de África no puedo menos que acordarme de los efectos benéficos que produjo en España la ley de Cárlos III en favor de los gitanos. Eran estos despreciados, abatidos y mirados por la preocupación como hombres de otra especie. Aquel gran Monarca interpuso oportunamente su mano Real; les declara hombres buenos del estado llano común general, Ya casi no se conocen los que antes eran tan marcados por su absoluta nulidad política. Carlos IV, para liberrar liberrar a los niños expósitos de los efectos perjudiciales del desprecio por poderse presumir incestuosos, manceres, etc., les declaró comprendidos en el mismo estado llano. Y á vista e esto, la Nación española, al constituirse, abandonará la nulidad á los españoles que por cualquier línea traen origen del África V. M. es muy justo y sabio, y no puede dejar de ser conciliador. La Constitución debe ser amada”.

pragmática que declara a los gitanos como ciudadanos españoles y, por lo tanto, el deber y derecho de los niños a la escolarización a los 4 años, libres de fijar su residencia, o de emplearse, trabajar en cualquier actividad, penalizándose a los gremios que impidan la entrada o se opongan a la residencia de los gitanos. Pero a costa de que los gitanos abandonen su realidad étnica, como la forma de vestir, no usar el caló, asentarse y abandonar la vida errante. En esa misma pragmática se ilegalizará la palabra gitano.

Otra importante intervención sobre el sentido de la igualdad es el que realiza el Diputado por Zamora Juan Nicasio Gallego⁴¹⁷, clérigo liberal mordera de clara intencionalidad reformista. En la sesión del día 15 de agosto de 1811 en el que se debate la condición de alumno de ciertos colegios militares para lo que era necesario justificar nobleza.

Su crítica parte de la necesidad que España sostenga grandes ejércitos y a propósito de la reforma planteada dice basarse esta en que “se ha mudado el sistema de la nación” y restituidos los españoles a sus inherentes imprescriptibles derechos preguntándose porque si todos puedes ser Obispos o Ministros porque se les está prohibido ser cadetes argumentando su propuesta del siguiente modo:

“Dice que el origen de la nobleza ha sido el mérito y servicios personales de nuestros mayores. La comisión dice eso mismo. Que es un delirio pensar en una igualdad absoluta entre los hombres. Es claro que nosotros, eh todo igual les en el estado

⁴¹⁷ Gallego Fernández, Juan Nicasio (Zamora, 1777, Madrid, 1853) poeta español de la Ilustración. Ordenado Sacerdote en 1804 fue designado diputado constituyente (como procurador suplente) por Zamora y trabajando en la comisión encargada de clasificar los informes relacionados a la convocatoria de las Cortes de Cádiz para la que había sido designado y en la redacción del proyecto de ley de libertad de imprenta. Allí vivió en febril actividad, integrando hasta ocho comisiones e interviniendo en la discusión de 71 asuntos, hasta el regreso del rey Fernando VII, quien lo persiguió por ser liberal hasta su liberación en 1820

natural, no podemos serlo en el estado social en que hemos nacido. La comisión no se lo niega. Que de esa quimérica igualdad resultaría la disolución de los Estados, pues cada cual diría “yo nací libre y a nadie quiero obedecer”. No hay cosa cierta. Pero pregunto yo: cuando la comisión ha hablado de la igualdad en ese sentido, cuando en el Congreso se han dicho tales cosas absurdas. Se ha tratado de la igualdad social, de la igualdad, ó por mejor decir, de la imparcialidad de las leyes; y que consiste en que éstas comprendan á todos. Si dice una ley “muera quien mata”, la igualdad estriba en que si hace una muerte un grande, un noble, un clérigo, sufren la pena como la sufriría un artesano y un pordiosero. Esta es la igualdad, según la entiende la comisión. Esta es la que apoya el señor preopinante, y esta la que he oído siempre proclamar en el Congreso.

“Es cierto que el Estado llano ha tenido la puerta abierta para cuantos destinos tiene la Nación, con muy pocas excepciones. Pueden ser generales, Ministros, Obispos, Regentes... (pues qué no pueden ser Bien pronto está la respuesta) y de estos se está tratando. ¿No le parece extraño y aún ridículo al Sr. Inganzo, que pudiendo ser todos Obispos y Ministros, les esté prohibido ser cadetes? No se ha dado jamás por ofendida la nobleza española porque los plebeyos a sean admitidos á IOR empleos de Regentes, de consejeros, de generales, y si se tendrá por humillada si se les admite en un colegio militar, si se les pone un cordón en el hombro derecho y un fusil en el izquierdo? Tampoco se confirma con la segunda razón de la comisión que es la necesidad de buenos oficiales, y la escasez actual de jóvenes en estado de probar nobleza.” Y finaliza:

“La razón que á primera vista parece más fuerte, entre las que he oído contra el proyecto en esta discusión, es el temor de rivalidades perniciosas en los colegios por la mezcla de nobles y plebeyos. Sin embargo, bien examinada no presenta grava

inconveniente, No hay duda que si hasta aquí daba el favor alguna vez á sujetos en quienes no concurrían las circunstancias que exigen los reglamentos de los referidos colegios, 103 demás les echaban en cara su defectos, negándoles á alternar con ellos; pero esto hacia de que estando la ley vigente era fácil ver si se cumplía lo que esta dispone. Mas desde el momento en que la ley se derogue, y lo que antes era un requisito necesario deje de serlo, no podrá haber rivalidad entre personas cuya desigualdad no será conocida”.

De aquí su constante preocupación por definir qué igualdad se pretendía. Joaquín Fernández de Leiva, diputado por Chile, gran orador, liberal reformista dirá que no se defiende la «igualdad jacobina» que «confundiendo todas las clases y jerarquías de la sociedad produce la anarquía y todos los horrores que le son consiguientes»; se trataba más bien de la «igualdad racional y legal» consistente en eliminar los privilegios y «abrir a los españoles la carrera de los premios» de la que podrían beneficiarse quienes estuvieran dotados del «mérito y la virtud».

En otro debate Juan Nicasio Gallego añadiría que era «un delirio pensar en una igualdad absoluta entre los hombres» al menos en el estado social: la aplicación de esa «quimérica igualdad» llevaría de forma inevitable a «la disolución de los Estados» cuando todos los individuos hicieran suya la fórmula «yo nací libre y a nadie quiero obedecer».

De aquellos recelos derivó una definición por el lado negativo de la igualdad, los hombres serían iguales cuando desaparecieran los privilegios y sobre todo las exclusiones a que estos privilegios daban lugar; es decir cuando cada uno fuera medido según sus capacidades y sus «méritos». El ideal de los diputados radicales por tanto era una sociedad meritocrática más que estrictamente igualitaria.

A ello les conducía tanto la pertenencia de muchos a instituciones jerarquizadas en las que el ascenso estaba condicionado a los méritos como su propia formación de clérigos o juristas asentada en el principio de que los premios y los castigos permitían en esta vida y también en la otra recompensar la virtud y desterrar los vicios y los delitos.

Los reformadores gaditanos coincidían con Sieyes él en la necesidad de sustituir los privilegios por las recompensas, y en la idea de que el mayor premio era «el tributo de consideración ofrecido a los grandes hombres por el pueblo» a través de sus representantes; y estaban igualmente de acuerdo en rechazar los «derechos exclusivos» y las dispensas a la ley común que constituían el aspecto más odioso e indeseable del sistema de privilegios; aunque, más moderados que el abate francés, los diputados españoles no propusieron nunca la desaparición de los privilegios honoríficos ni de su transmisión hereditaria, lo que habría supuesto un enfrentamiento frontal con los estamentos superiores del período anterior.

3.3.1 Igualdad frente a exclusiones

Si como hemos señalado el primer planteamiento de la libertad se produce con motivo de acabar con el privilegio nobiliario en el acceso los colegios militares y por consiguiente a los puestos oficiales en el ejército en la Marina Real, nada más plantearse este problema, la discusión se desplazó hacia el régimen general de privilegios y exclusiones, y dará lugar a valoraciones rotundamente opuestas sobre el papel de la nobleza en la vida social.

Ya en la Consulta al país, que la Comisión de Cortes realizó en 1809, petición a las instituciones más representativas (instituciones civiles y eclesiásticas, profesores de universidades, destacados ilustrados, etc.) sobre las reformas que debían emprenderse, la forma de reunir las Cortes y los temas a tratar en ellas, para la que se creó una comisión —presidida por Jovellanos— con el fin de analizar las

respuestas y preparar la celebración de las Cortes, habían aparecido abundantes críticas del papel tradicional de la nobleza y el clero.

Los nobles eran tachados de «inútiles» en cuanto que el Estado se había adueñado ya de las antiguas funciones, en especial militares, de este estamento; el clero, por su parte, fue acusado de «ignorante», aunque también se puso de manifiesto la inutilidad de una parte del mismo, los beneficiados, en contraste con la multiplicidad de tareas a que estaban sometidos los párrocos.

Por tanto resultaba injustificable la permanencia de los privilegios de ambos estamentos en un momento en el que había desaparecido la prestación de servicios que antaño era el correlato de los mismos.

Por otra parte la guerra había cambiado la percepción de la utilidad de los estamentos sobre todo el nobiliario vinculado al militar la resistencia nobiliaria habría servido de muy poco sin la masiva intervención del pueblo en el conflicto. Todos podían contemplar decía el dictamen de la Comisión de guerra cómo «sin distinción de clases ni de personas, a porfía se lanzan los españoles en la carrera de la inmortalidad» y de qué manera «el valor, el desinterés, las grandes virtudes han venido de tropel para admiración del mundo y asombro de la posteridad». ¿Qué razón había entonces para reservar a unos pocos, con exclusión de los demás, el acceso a los puestos militares más destacados y a los centros donde se educaba para desempeñar esos puestos?

Juan Nicasio Gallego, uno de los grandes defensores de la soberanía nacional y de la libertad de imprenta plantearía «la imperiosa ley de la necesidad» para permitir la igualdad en materia de acceso al ejército ya que «en la alternativa de haber de derogar el requisito de justificar nobleza o perderse los ejércitos sin el competente número de buenos oficiales no queda a los diputados ni aun el arbitrio de la elección».

Lo cierto es que esta cuestión planteó un enorme debate que tuvo lugar el 11 de agosto de 1811 en el que se produjeron extrañas alianzas o mezclas de opinión en defensa de las diferentes posiciones . Unos debates en los que más que de los colegios militares, se habló de los privilegios nobiliarios y de su extensión.

Se produjo en las Cortes una curiosa mezcla, a un teniente general (Pedro Llamas) aliado con varios clérigos (Alonso Cañedo, Blas Ostolaza, Pedro Inganzo) en la defensa de tales privilegios y también vieron a otros clérigos (Florencio del Castillo, Juan Nicasio Gallego, Antonio Oliveros) unidos con el conde de Toreno, con un coronel de los Reales Ejércitos (Francisco Fernández Golfín), con el relator del Supremo Consejo de Castilla (Manuel Luján) e incluso con el capellán de honor y predicador de Su Majestad, Joaquín Lorenzo Villanueva, amén de los inevitables Agustín de Argüelles y Manuel García Herreros, en la tarea de combatirlos.

A pesar de que la situación apuntaba a eliminar las desigualdades todavía se produjeron las intervenciones contrarias. Blas Ostolaza diputado suplente por Perú uno de los hombres más reaccionarios de Cádiz, y no ciertamente enemigo de la igualdad pues llegó a pedir que los negros fueran considerados ciudadanos y manifestaría que la nobleza era «en cierto modo de institución divina», una «especie de sacerdocio en la jerarquía social, del que los soberanos son sumos sacerdotes»; quienes disfrutaban de ella, gracias a su nacimiento privilegiado, debían ser considerados «guías naturales» y «magistrados natos de los pueblos», e incluso «tutores de los infelices» y modelos para las demás clases.

La igualdad, desde esa visión paternalista de la sociedad, no podía considerarse más que como un invento, fabricado en «la mollera exaltada de los enciclopedistas que perdieron la Francia»; como un invento, dicho sea de paso, contrario a la naturaleza, que hacía desiguales a los hombres, tanto en lo físico como en lo espiritual. A lo

sumo, y como concesión al auditorio, se podría aceptar la siguiente interpretación de «esta voz tan vaga»: el «igual derecho» de todos los hombres «a ser protegidos en las [leyes] que le son propias a su clase». Lo que venía a significar la protección de los privilegios nobiliarios, puesto que también ellos formaban parte de las leyes propias de este estamento.

Los más reaccionarios como Ostolaza o Inguanzo no se conformaron con defender una fórmula moderada como la creación de colegios militares separados para nobles y plebeyos, que propuso Cañedo para evitar la «confusión de clases» y los recelos nobiliarios a enviar a sus hijos «bien criados» a centros en los que el contacto con los plebeyos podría «echarles a perder».

Pedro Inguanzo conservador y tradicionalista sería menos radical manifestando que se puede aceptar que existe una igualdad natural, ya que todos los hombres “son ... de una misma sangre y una misma masa»; pero existen comportamientos diferentes, unos merecedores de premio y otros de castigo. ¿Y qué tiene de extraño que los premios se hereden? En cuanto a la igualdad social, bastaba con que existiera la posibilidad de ascender a los grados más altos de la soberanía del nacimiento por los gastos, del estamento por la clase» con el fin de abrir exclusivamente el mando militar a la burguesía de la sociedad y a sus correspondientes privilegios siempre que hubiera méritos para ello: La igualdad no consiste en que todos tengamos iguales goces y distinciones sino en que todos podamos aspirar a ellos. No consiste en que todos ocupen un mismo lugar y clase en la república, sino en que el que hoyes inferior, pueda mañana ser superior; que el que no es noble pueda llegar a serlo por iguales medios, y siéndolo, disfrutar iguales privilegios.”

Francisco Fernández de Golfín diputado por Extremadura y aristócrata defendería sin embargo el estado llano, y al plantearse el ingreso en los colegios militares fue de la opinión de que no fuera uso

exclusivo de la nobleza, expresando que era el medio seguro de sacar partido de todos los individuos de España. Las clases superiores tienen ya el estímulo de sus privilegios, presentemos a los demás el de mejorar su condición: “ Señor, al paso que la juventud del estado llano hace rápidos progresos en la carrera literaria, porque afianzan en su aplicación y adelantamiento la garantía de su premio y de su fortuna, nos acredita una triste experiencia que los hijos de los nobles, seducidos con la abundancia de sus progenitores, o con la protección que los dispensa el valimiento del favor, prefieren la ignorancia al saber, la distracción al estudio y la ociosidad a la meditación) o para señalar que si los colegios militares eran sufragados por los plebeyos por el «benemérito comerciante el honrado labrador y el útil artesano» dijo de nuevo Golfín no había razón alguna que impidiera a los hijos de esos contribuyentes el acceso a tales centros.”

Finalmente es el Diputado Manuel Garcia Herreros de espíritu abiertamente liberal como Arguellas, Zorraquin y Fernández Golfín quien asume una posición mediana a favor de la igualdad tal como expone en el preámbulo de la comisión. “Señor dijo García Herreros la sangre y el alma de los nobles en nada se distingue de la de los plebeyos; los talentos Dios los da a quien quiere y como quiere; consiste pues toda la diferencia en la educación»...Era necesario, entonces, abrir el camino para que todos pudieran demostrar sus virtudes y aspirar a los puestos más altos, como ya se venía haciendo en las ciencias, e incluso en la Iglesia (que, con ser tan alta su misión, no exigía para las dignidades y condecoraciones «otras prendas que la virtud, el talento y la disposición») son «odiosas, injustas e impolíticas» a las distinciones y privilegios era su carácter de exclusividad, en virtud del cual se cerraba el acceso a la mayoría de los ciudadanos.

Estos diputados dejarían manifiesta la posición que consagraría la igualdad: Enhorabuena que haya nobleza y distinciones

hereditarias, homenaje tal vez debido a los hijos de aquellos varones respetables, que con su saber y sus afanes en otro tiempo honraron a la Patria; pero no se cierre la entrada a esos honores a los que desgraciadamente no tuvieron la feliz casualidad de nacer nobles». «Haya enhorabuena distinciones que sirvan de premio a unos y de estímulo a otros, para empeñarlos a todos a que cooperen a los fines de la sociedad con el esfuerzo que exigen las grandes acciones; pero reconózcase al mismo tiempo el igual derecho que todos tienen a aspirar a las distinciones, con el que son incompatibles las exclusivas de que tratamos.

Pero como diría Juan Nicasio Gallego: nada de igualdades absolutas o «quiméricas»; de lo que se trataba era «de la igualdad, o por mejor decir de la imparcialidad de las leyes, y que consiste en que éstas comprendan a todos.

Estos argumentos representaban el sentir mayoritario de las Cortes. Prueba de ello fue el triunfo de la propuesta reformadora, después de media docena de sesiones de debate. Aunque el éxito no fue absoluto, y los redactores del texto tuvieron que eliminar, en la versión definitiva, la crítica del estamento nobiliario para dejar reducida la explicación inicial a un simple reconocimiento de los «heroicos esfuerzos» realizados durante la guerra por «los españoles de todas clases».

Resultaron infructuosas las propuestas de Agustín de Argüelles y del diputado mexicano Alcocer para suprimir el «infame tráfico» y otorgar la libertad al menos a los hijos de quienes vivían sometidos a la esclavitud.

Tampoco tuvieron mejor resultado los esfuerzos abolicionistas posteriores de Isidoro de Antillón. Frente a todos ellos, los diputados aceptaron en palabras de Mexía que la desaparición de la esclavitud era «negocio que requiere mucha meditación, pulso y tino, porque el libertar de una vez una inmensa multitud de esclavos a más de

arruinar a sus dueños podría traer desgraciadas consecuencias al Estado».

Por ello los constituyentes de Cádiz aceptaron sin más el mantenimiento de la situación sin ningún cambio sustancial, que vino a suponer la exclusión de los esclavos de la condición de español, y de los derechos que a ella correspondían cuyo disfrute se restringió a «los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas», y en todo caso según se disponía en el artículo 5 a los libertos, una vez alcanzada esta condición.

3.3.2 Igualdad civil e igualdad política

Para que la igualdad tuviera su más completa plasmación, y se delimitara con claridad quiénes debían beneficiarse de ella, era necesario precisar su sentido en la nueva Constitución.

Uno de los problemas era la de definir la condición de español cuando en el territorio español había diversidad de situaciones sobre todo por el hecho de haber dos hemisferios. La Constitución de Cádiz definiría dos condiciones la de español y la de ciudadano.

Aunque la precisión planteaba algunos problemas: sobre todo, el derivado de la diversidad de situaciones de los habitantes del territorio español en ambos hemisferios, que llevó a los redactores de la Constitución a la definición de dos condiciones distintas, la de español y la de ciudadano. Una diferenciación que, de nuevo, provocaría duros enfrentamientos, si bien en esta ocasión las posiciones contrapuestas no respondían a concepciones ideológicas alternativas, sino a la procedencia peninsular o americana de los diputados.

El Decreto de 15 de octubre de 1810 se constituye en el punto de partida para la elaboración del texto constitucional, y a cuya interpretación se dedicaron más tarde con gran intensidad varios diputados:

“Decreto de 15 de Octubre de 1810. Igualdad de derechos entre los españoles europeos y ultramarinos: olvido de lo ocurrido en las provincias de América que reconozcan la autoridad de las Cortes⁴¹⁸.”

Las Cortes generales y extraordinarias confirman y sancionan el inconsuso concepto de que los dominios españoles en ambos hemisferios forman una sola y misma monarquía. una misma y sola nacion, y una sola familia, y que por lo mismo los naturales que sean originarios de dichos dominios europeos ó ultramarinos son iguales en derechos á los de esta península, quedando á cargo de las Cortes tratar con oportunidad, y con un particular interés de todo cuanto pueda contribuir á la felicidad de los de ultramar, como también sobre el número y forma que deba tener para lo sucesivo la representación nacional en ambos hemisferios.

Ordenan asimismo las Cortes que desde el momento en que los países de ultramar, en donde se hayan manifestado conmociones, hagan el debido reconocimiento á la legítima autoridad soberana, que se halla establecida en la madre Patria, haya un general olvido de cuanto hubiese ocurrido indebidamente en ellos dejando sin embargo á salvo el derecho de tercero.—

Lo tendrá así entendido el Consejo de Regencia para hacerlo imprimir, publicar y circular, y para disponer todo lo necesario á su cumplimiento.—

Real Isla de León, 15 de Octubre de 1810.—Ramón Lázaros de Dou, Presidente.—Evaristo Perez de Castro, Secretario.—Manuel Lujan, Secretario.—Al Consejo de Regencia.—

Del hecho de que los dominios españoles de ambos hemisferios formaban «una sola y misma monarquía, una misma y sola nación, y una sola familia» se deducía en ese decreto que «los naturales que sean originarios de dichos dominios europeos o ultramarinos son iguales en derechos a los de esta Península».

Ese reconocimiento de igualdad, no aclaraba cuál sería la situación de los habitantes de los territorios españoles que no eran

⁴¹⁸ Pérez Ledesma, Manuel, *Las Cortes de Cádiz y la sociedad española*. AYER 1, 1991. Pág. 167 a 206.

originarios de dichos dominios: es decir, de los esclavos, y más en general de las «castas».

Las Cortes promulgaron un decreto el 9 marzo de 1811 que en su artículo 1 reiteraba la prohibición de admitir «informaciones de nobleza» para la entrada en los colegios, academias o cuerpos militares «aunque los interesados quieran presentarla voluntariamente», al tiempo que en el artículo 2 prohibía el uso de «expresiones ni distinciones que contribuyan a formentar entre sus individuos las perjudiciales ideas de desigualdad legal, o la rivalidad de clases, salvos, sin embargo, los tratamientos respectivos con arreglo a las leyes».

La Constitución de Cádiz establecía el concepto de nación española y españoles en sus primeros artículos:

“Artículo 1.- La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.

Artículo 2.- La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona.

Artículo 3.- La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales.

Artículo 4.- La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen.

El artículo 5.º del capítulo II define a “los españoles” diciendo que lo son:

Primero. Todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas, y los hijos de éstos.

Segundo. Los extranjeros que hayan obtenido de las Cortes carta de naturaleza. Tercero. Los que sin ella lleven diez años de vecindad, ganada según la ley en cualquier pueblo de la Monarquía.

Cuarto. Los libertos desde que adquieran la libertad en las Españas.”

De ello resulta que la “Nación” abarcaba todos los naturales y naturalizados del territorio de las llamadas “Espanñas” en “ambos hemisferios”⁷, excepto los hombres “no libres”. Esto quiere decir que los esclavos (negros en mayoría) no disfrutaban de la categoría o estado de los naturales/españoles componentes de la “Nación”, pero sí los libertos, aunque fueran originarios de África. Además todos los españoles tenían las siguientes obligaciones:

La Constitución incluiría tal y como ya hemos visto una mención a la libertad en su artículo 4: «la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos» resaltando los deberes y obligaciones entre los que se encontraban el amor a la patria la exigencia de «ser justos y benéficos» la fidelidad a la Constitución, la obediencia a las leyes, el respeto a las autoridades establecidas, la contribución «sin distinción alguna... en proporción a sus haberes» a los gastos estatales, e incluso la participación en la defensa de la patria «con las armas cuando sea llamado por la ley» (arts. 6 a 9).

Por otra parte del capítulo cuarto, artículo 18 a 21 establecía la condición de ciudadanos:

“Artículo 18.- Son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios y están vecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios.

Artículo 19.- Es también ciudadano el extranjero que gozando ya de los derechos de español, obtuviere de las Cortes carta especial de ciudadano.

Artículo 20.- Para que el extranjero pueda obtener de las Cortes esta carta, deberá estar casado con española, y haber traído o fijado en las Españas alguna invención o industria apreciable, o adquirido bienes raíces por los que pague una contribución directa, o estableciéndose en el comercio con un capital propio y considerable a juicio de las mismas Cortes, o hecho servicios señalados en bien y defensa de la Nación. Artículo 21.- Son, asimismo, ciudadanos los hijos legítimos de los extranjeros domiciliados en las Españas, que habiendo nacido en los dominios españoles, no hayan salido nunca fuera sin licencia del Gobierno, y

teniendo veinte y un años cumplidos, se hayan avecindado en un pueblo de los mismos dominios, ejerciendo en él alguna profesión, oficio o industria útil.

Artículo 22.- A los españoles que por cualquier línea son habidos y reputados por originarios del África, les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser ciudadanos: en su consecuencia las Cortes concederán carta de ciudadano a los que hicieren servicios calificados a la Patria, o a los que se distinguan por su talento, aplicación y conducta, con la condición de que sean hijos de legítimo matrimonio de padres ingenuos; de que estén casados con mujer ingenua, y avecindados en los dominios de las Españas, y de que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con un capital propio.”

Estos artículos se completan con los cuatro siguientes 22 a 26 este ultimo referido a las causas de pérdida de los derechos:

“Artículo 23.- Sólo los que sean ciudadanos podrán obtener empleos municipales, y elegir para ellos en los casos señalados por la ley.

Artículo 24.- La calidad de ciudadano español se pierde:

Primero. Por adquirir naturaleza en país extranjero.

Segundo. Por admitir empleo de otro Gobierno.

Tercero. Por sentencia en que se impongan penas aflictivas o infamantes, si no se obtiene rehabilitación.

Cuarto. Por haber residido cinco años consecutivos fuera del territorio español sin comisión o licencia del Gobierno.

Artículo 25.- El ejercicio de los mismos derechos se suspende:

Primero. En virtud de interdicción judicial por incapacidad física o moral.

Segundo. Por el estado de deudor quebrado, o de deudor a los caudales públicos. Tercero. Por el estado de sirviente doméstico.

Cuarto. Por no tener empleo, oficio o modo de vivir conocido.

Quinto. Por hallarse procesado criminalmente.

Sexto. Desde el año de mil ochocientos treinta deberán saber leer y escribir los que de nuevo entren en el ejercicio de los derechos de ciudadano.

Artículo 26.- Sólo por las causas señaladas en los dos artículos precedentes se pueden perder o suspender los derechos de ciudadano, y no por otras.”

La condición de ciudadano abría a quienes disfrutaban de ella la posibilidad de elegir y ser elegidos para los «empleos de república» (art. 23), e incluso la de convertirse en «representantes de la nación» siempre que dispusieran de «una renta anual proporcionada, procedente de bienes propios»

Agustín de Argüelles señalaría de acuerdo con el primero de estos artículos «los individuos de que se habla pueden ser desde este momento prebendados, magistrados, prelados, eclesiásticos, ministros, consejeros de Estado, virreyes y capitanes generales»; al tiempo que por el segundo «pueden y deben ser procuradores de Cortes, no sólo nombrar a quienes hagan sus veces, sino venir al Congreso nacional a representarse a sí mismos, a sus conciudadanos, a la nación entera». El título de ciudadano «habilita a todo español para serlo todo en su país, sin que reglamentos ni privilegios de cuerpos ni establecimientos puedan rehusar su admisión» 24.

Según el proyecto de Constitución no todos los naturales, no todos los españoles podían conseguir, la «apreciable condición de ciudadano».

Dos limitaciones tuvieron especial importancia: la primera, que dio lugar a un intenso debate, recortaba el acceso a la condición de ciudadano a las castas, es decir, a dos españoles que por cualquier línea traen origen de Africa»; la segunda suspendía el ejercicio de los derechos de ciudadanía a quienes trabajaban como sirvientes domésticos además de a los incapacitados, los sometidos a proceso criminal, los deudores o aquellos que no tenían «empleo, oficio o modo de vivir conocido» .

En el primero de esos supuestos, la comisión había dejado abierto un camino para la obtención por las castas de la condición de ciudadano, de la «puerta de la virtud y el merecimiento», que podrían

atravesar quienes realizaran «servicios eminentes» o se distinguieran «por sus talentos, su aplicación y su conducta» (siempre que, en este último caso, fueran además hijos de legítimo matrimonio, de padres libres, estuvieran casados con mujeres igualmente libres y se dedicaran a «alguna profesión, oficio o industria útil con un capital propio, suficiente a mantener su casa y educar sus hijos con honradez»).

Con el diputado Alcocer manifestaría que: «Es injusticia semejante negativa» a conceder la ciudadanía a quienes sufrían al igual que los demás españoles las cargas del Estado; porque los originarios de África «defienden a la Patria, componiéndose de la mayor parte de ellos los regimientos veteranos y las milicias, y ejercen casi exclusivamente en América los oficios y las artes, siendo el atlante que sostiene el ramo de la industria tan productiva al erario como indispensable a la sociedad».

La definición del ciudadano remitía directamente a la Constitución jacobina de 1793, como se puede observar al comparar los artículos correspondientes (arts. 1921 y 2426 del texto español, y arts. 46 del francés); pero los diputados gaditanos, enemigos de la «igualdad jacobina», no aceptaron la universalidad del derecho de voto que definía a ésta. Claro que tampoco utilizaron las exigencias, mucho más restrictivas, de la Constitución de 1791, con la que por otro lado compartían la definición general de la igualdad civil.

Mientras para ser «ciudadano activo» hacía falta, según la primera Constitución francesa, pagar una contribución equivalente como mínimo al valor de tres jornadas de trabajo, y para llegar a elector se necesitaba ser propietario o usufructuario de bienes cuyas rentas superaran el valor de 150 jornadas de trabajo, en el texto español las exigencias económicas o no aparecían o estaban muy amortiguadas.

El inmenso número de originarios de África establecidos en los países de Ultramar explicaba Argüelles en su Discurso Preliminar, sus diferentes condiciones, el estado de civilización y cultura en que la mayor parte de ellos se halla en el día, han exigido mucho cuidado y diligencia para no agravar su actual situación, ni comprometer por otro lado el interés y seguridad de aquellas vastas provincias.

Una cosa era la igualdad civil, de la que todos los españoles podían beneficiarse, y que incluía según la Constitución la igualdad ante la ley y la desaparición de los privilegios en el sistema de contribuciones; y otra, muy distinta, la participación en la vida política y el derecho a ocupar cargos públicos, es decir, los derechos políticos de los que algunos sectores como las castas quedaban excluidos.

Tampoco los sirvientes fueron aceptados como ciudadanos, entendiéndose por siguiente el que estaba “a soldada de otro”. El Diputado Fernández Golfín diría que «muchos individuos utilísimos al Estado, tales como los aperadores de los cortijos, los mayores y otros varios dependientes de los labradores hacendados, los empleados en las fábricas, los cajeros de las casas de comercio, etc., los cuales sirven todos a soldada de otro» quedarían incluidos en tal suspensión; incluso la mayor parte de los «beneméritos patriotas» que, una vez acabada la guerra, tendrían que trabajar como asalariados en «las labores del campo, los talleres, la industria, los escritorios de comercio» acabarían desprovistos de la plena ciudadanía. Pero no era éste el sentido que los redactores habían pretendido dar a su texto, como de inmediato manifestaron: a quien se privaba del voto era al «criado destinado sólo al servicio de la persona», es decir, al «sirviente doméstico», y no al resto de los asalariados o trabajadores dependientes, «cuyos servicios no eran meramente personales» y con los que no tenía nada que ver la suspensión.

En esta causa que supone el rechazo de los sirvientes domésticos y como luego veremos de las mujeres el criterio es el de la

dependencia directa de otro, la falta de autonomía. La mezcla de ambos criterios otorgó a la Constitución española de 1812 unas características peculiares, que quedarán más destacadas si las contrastamos con los textos constitucionales franceses, en los que sin duda los redactores del proyecto se habían inspirado, al menos en parte.

3.3. 3 Igualdad y derechos de la mujer

Además de las castas quedaría el tema de los derechos de la mujer a la que aludió Muñoz Torrero poniendo de manifiesto que las mujeres estaban desprovistas del derecho a participar en la política.

Las reivindicaciones en pro de la igualdad femenina venían planteando si también en la segunda mitad del siglo XVIII, tal y como se constata en el discurso sobre la educación física y moral de las mujeres (1769) obra de la ilustrada española Josefa Amar y en la importancia de la instrucción que conviene dar a las mujeres (1784) en los que defiende el feminismo de la igualdad: el cerebro no tiene sexo y la aptitud de las mujeres para el desempeño de cualquier función política o social es exactamente igual, por naturaleza, a la de los hombres. Si existe alguna diferencia se debe a la educación.

Josefa Amar nacida en Zaragoza en 1749 alcanzó una erudición más que notable que ejerció con independencia de juicio y dentro de los parámetros del europeísmo de la época. Conocía toda la obra de los ilustrados e ideólogos franceses y la de John Locke, y su pensamiento pasó de una Ilustración avanzada a un liberalismo convencido.

Entre los ilustrados franceses una vez más destaca la figura de Condorcet quien en su obra “Bosquejo de una tabla histórica de los progresos del espíritu humano” (1743) reclamó el reconocimiento del papel social de la mujer comparando la condición social de las mujeres de su época con la de los esclavos.

En una línea más avanzada figura Olimpia de Gouges autora de un gran número de obras de teatro, pero sobretudo conocida por su Declaración de los Derechos de la mujer y de la ciudadana, publicada en el año 1791 y por la cual sería considerada como la precursora del feminismo.

En los 16 artículos que componen esta Declaración se proclamaba que la mujer debe gozar de los mismos derechos y obligaciones del hombre, por lo cual nada de lo que pueda hacer el hombre deberá negársele a la mujer y asimismo cuando la situación lo ameritase la mujer debía ser juzgada con el mismo rigor de la ley que el hombre.

Según ella la Revolución habría olvidado a las mujeres en su proyecto igualitario y liberador. Estas reclamaciones feministas fracasaron siendo su autora encarcelada y ejecutada durante la Dictadura Jacobina.

3.3.4 Igualdad jurisdiccional y derechos señoriales

Tampoco podía existir igualdad si se mantenían los derechos señoriales de carácter jurisdiccional de aquí que en los primeros meses de 1811 algunos diputados liberales presentaran diversas propuestas para conseguir la desaparición de los mismos.

Tales derechos estaban íntimamente relacionados con los demás componentes del régimen señorial; en concreto con la existencia de señoríos territoriales y solariegos de los que no era fácil a veces distinguir los señoríos jurisdiccionales; y también con el cobro por los señores de derechos privativos y exclusivos de muy variado origen pero cuya pervivencia impedía el establecimiento de la igualdad contributiva. De esta mezcla de cuestiones derivó la larga duración y el alto grado de complejidad de las discusiones sobre la abolición del régimen señorial.

Agustín de Argüelles manifestaría que: los derechos jurisdiccionales «son poco útiles a sus dueños», de manera que su conservación respondía más a «la vanidad y altanería de los grandes y señores» que a razones económicas, y su abolición redundaría «a la larga necesariamente en utilidad misma de los que los pierden»

El Diputado García Herreros reconocido como liberal sugeriría en la sesión de 1 de junio de 1811, la aprobación de un decreto que restituyera a la nación el goce de sus naturales, inherentes e imprescriptibles derechos, mandando que desde hoy queden incorporados a la Corona todos los señoríos, jurisdicciones, posesiones, fincas y cuanto se haya enajenado o donado, reservando a sus poseedores el reintegro a que tengan derecho, que resultará el examen de los títulos de adquisición, y el de las mejoras, cuyos juicios no suspenderán los efectos del decreto.

Lázaro de Dou manifestaría: hemos sentado que el ciudadano ha de ser libre con seguridad en su persona y bienes, que nadie puede ser condenado sin ser oído, que a toda costa debe sostenerse la fe pública, que el Estado debe ser sumamente religioso en el cumplimiento de los pactos y que ha de ser sagrado el derecho de propiedad, y a renglón seguido proponemos que a :30.000 ciudadanos, o acaso más, contra lo pactado, contra lo establecido en las leyes de la nación, contra el parecer de los fiscales más ilustrados, contra toda orden judicial y extrajudicial, se les despoje sin oírlos y sin reintegrarles su contingente de las propiedades y derechos de que han gozado pacíficamente por espacio de ocho o más siglos.

Desde la posición abolicionista, Manuel Luján reconocía, por su parte, que por motivos de «conveniencia pública, justicia y razón» debían quedar excluidas de la incorporación a la Corona las propiedades obtenidas por sus dueños por compra, o como resultado de donaciones de la misma Corona «en remuneración de servicios a la patria»; o incluso aquellas otras fincas o propiedades que «si se

retraen o incorporan, harían infeliz a un ciudadano bien acomodado, sin que de ello se hubiese de seguir una grande utilidad a la nación, que si ha de entrar el precio de la alhaja percibiría de ella menores productos».

Por lo que los diputados de Cádiz entendieron que los derechos señoriales, la jurisdicción, los cargos de la administración pública, son una parte integrante de la soberanía; ésta es indivisible, y todo y cada una de sus partes se hallan tan íntimamente unidas entre sí que es imposible separarlas sin destruir la soberanía.

Con la misma argumentación se realizaron múltiples intervenciones que repitieron la misma argumentación; entre ellas, las de Torrero, Argüelles, Villafañe, Aner o el propio García Herreros.

La mayoría de los diputados apoyaron la desaparición de los señoríos jurisdiccionales y de los derechos privativos de los señores con el deseo de constituir un nuevo cuerpo político de ciudadanos iguales en sus derechos, y liberados de las cargas del despotismo y el «feudalismo» de los siglos precedentes.

La propuesta del diputado Alonso y López sería también la eliminación de los símbolos feudales. «Que se destierre sin dilación del suelo español y de la vista del público el feudalismo visible de horcas, argollas y otros signos tiránicos e insultantes a la humanidad». «Quedan abolidos los dictados de vasallo y vasallaje, y las prestaciones así reales como personales que deban su origen a título jurisdiccional» era, por su parte, la fórmula incluida en el artículo 4 del texto definitivo del decreto de 6 de agosto de 1811, exigiendo a los ayuntamientos la demolición de todos los signos de vasallaje aún existentes en edificios públicos, «puesto que los pueblos de la Nación española no reconocen ni reconocerán jamás otro señor

De este modo se procedió a eliminar la jurisdicción señorial y establecer la igualdad de los individuos bajo un único poder soberano. Ni siquiera Fernando VII se decidió a dar marcha atrás en este asunto;

aunque en el período absolutista no era fácil entender que la finalidad básica del decreto había sido, en palabras de los Constituyentes de Cádiz, restituir a los españoles «la libertad civil, o sea la dignidad de hombres libres que se les había usurpado».

3.3. Los Derechos Humanos

No existe en la Constitución de Cádiz una Declaración de Derechos ni tampoco una clausula genérica de la igualdad constituida como el gran símbolo de la superación del antiguo régimen ni una declaración e libertad de conciencia como existe en la declaración de Virginia.

Considerados ya los principios de libertad y específicamente la libertad de expresión, opinión e imprenta y el principio de igualdad, y consecuentemente la supresión de la esclavitud afrontamos un planteamiento general de los restantes llamados derechos humanos.

3.3.1 Antecedentes e influencia de la positivación de los Derechos Humanos

La protección de los derechos humanos en la Constitución de 1812 tuvo sus antecedentes e influencias en la Declaración de Derechos del hombre y el ciudadano de 1789; en la pionera Declaración de derechos del buen pueblo de Virginia, de 12 de junio de 1776, en la propia Constitución de los Estados Unidos, en la Inglaterra liberal y en la Francia revolucionaria.

La Constitución de Cádiz se presenta como uno de los primeros pasos del proceso histórico constitucional español, caracterizándose por ser una Constitución de corte liberal en el que, dejando de lado los postulados del Antiguo Régimen, intentaría promover el desarrollo y garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Los derechos humanos han sido definidos como las libertades, facultades e instituciones relativos a los bienes básicos que son inherentes a toda persona sin realizar ninguna distinción ni acto discriminatorio por razón de idioma, religión, etnia, sexo, color, ideología o cualquier otro tipo que pudiera suponer una diferencia.

En relación a los orígenes más remotos de los derechos humanos, muchos filósofos consideraron que no se podía hablar de los derechos humanos hasta la llegada de la modernidad en occidente. La creación, desarrollo y protección de los derechos subjetivos tal y como los conocemos en la actualidad, fueron siendo objeto de análisis y debate a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII.

Debemos recordar que el concepto de libertad considerado por Ockham como un dominio propio que dota de autonomía e independencia a cada individuo tuvo gran influencia en toda Europa y generó una visión del derecho natural distinta de la visión clásica representada principalmente por Tomás de Aquino. Este derecho natural sufriría una serie de transformaciones hasta convertirse en nuestro actual concepto de derechos fundamentales actuales, siendo decisiva la transformación efectuada por el pensamiento de la llamada Segunda Escolástica Española cuyos principales representantes son Francisco de Vitoria, Francisco Suárez y Fernando Vázquez de Mecha⁴¹⁹.

La libertad para la Segunda Escolástica es una facultad originaria anterior al derecho humano. Todos los hombres nacen igualmente libres y poseen capacidad para elegir a su gobernantes que

⁴¹⁹ Galán y Gutiérrez, Eustaquio. *Ius naturae*: lecciones de cátedra. Una introducción a la historia de la filosofía del derecho natural al tenor de las fuentes, con especial atención al pensamiento iusnaturalista español del siglo XVI, desde el punto de vista de la actual filosofía de la historia y de la actual sociología del conocimiento y según la concepción cristiana del mundo y de la vida. Solana Marcial, Los grandes escolásticos españoles del siglo XVI: sus doctrinas filosóficas y su significación en la historia de la filosofía. Madrid Imprenta de la Viuda e Hijos de Jaime Ratés, 1928

deben actuar siempre en interés de su pueblo. La libertad la igualdad y la propiedad son de derecho natural pues se derivan de la libertad natural de todo hombre.

Paralelamente cabe vincular el origen de los derechos humanos a las aportaciones de la Escuela racionalista de derecho natural, también conocida como Iusnaturalismo nacionalista que tenía fuertes tendencias secularizadoras.

Según el racionalismo del Siglo XVII los hombre tenían en común su naturaleza racional y por ello el derecho natural no apela como primera estancia a la divinidad, sino a la naturaleza humana.

Los pensadores del Iusnaturalismo nacionalista, Hugo Grocio, Samuel Pufendorf o el propio John Locke, entienden la idea de libertad como un poder originario o derecho subjetivo anterior al derecho humano siendo los tres grandes derechos naturales, la libertad, la igualdad y la propiedad.

Durante la Revolución inglesa se fueron limitando los abusos de la corona, y al mismo tiempo. Inglaterra fue precursora en materia de derechos y libertades. En general, los textos ingleses se separan de las modernas declaraciones de derechos, pues mientras aquellos encuentran su fundamento en la historia y en la tradición, estas tienen una fundamentación racional; solo el Bill of Rights de 1689 esta mas cerca de esta segunda concepción que de la primera al que precedieron la Petición de Derechos (*Petition of Rights*, 1627) y la Ley de Habeas Corpus (*Habeas Corpus Amendment*, 1679) que establece la puesta a disposición del juez de cualquier detenido en un plazo determinado y posteriormente mediante la elaboración del Bill of Rights en 1689⁴²⁰,

⁴²⁰ *La Carta de Derechos o Declaraciones Derechos* (Bill of Rights) se elaboró en Inglaterra en 1689 siendo su principal final recuperación y fortalecimiento de algunas competencias parlamentarias. Fue un documento impuesto por el parlamento como condición a su coronación, a la reina María II Estuardo y a su esposo Guillermo de Orange constituyendo un contrato entre el pueblo y los soberanos.

siendo ésta una declaración de derechos, aunque no propiamente de derechos humanos ya que este catálogo se refería únicamente a los derechos de ámbito nacional y no al hombre como ser humano del mundo.

A pesar de haber constituido un relevante precedente, estos pactos declaraciones carecen del requisito de la generalidad y, aun siendo comprensible en su contexto histórico, es lo cierto que consagran notables desigualdades ante la ley.

Recordemos asimismo la conformación del derecho de los ciudadanos por Rousseau y Hobbes⁴²¹ quienes entienden que los derechos del individuo son naturales, que son inherentes al ciudadano, y que por tanto todos los ciudadanos son titulares de derechos.

Según Voltaire en cualquier sociedad en la que se pretenda que haya una vida en común se exige una convención, es decir, un pacto social, que permita preservar el interés individual de los ciudadanos. Este pensador declaró que: "la naturaleza dice a todos los hombres: os he hecho nacer a todos débiles e ignorantes, para vegetar unos minutos sobre la tierra y abonarla con vuestros cadáveres. Puesto que sois débiles, socorredos mutuamente; puesto que sois ignorantes, ilustrados y ayudaos mutuamente"⁴²². Sus reflexiones sobre los derechos y la esclavitud se orientaban a que en sí misma la esclavitud

⁴²¹ Hobbes, Thomas (1588-1679) fue un famoso filósofo inglés quien estableció como premisa básica del estado la existencia de un pacto entre todos los ciudadanos, no obstante entiende que para garantizar la seguridad de los ciudadanos han de ceder parte de su libertad y su capacidad de autogobierno, llegando a concluir que el hombre es considerado un lobo para el hombre: "*Homo homini lupus*".

⁴²² Marie Arouet, François conocido como Voltaire (1694-1778) fue un abogado, historiador, filósofo y escritor francés considerado como uno de los máximos exponentes de la Ilustración. En referencia a los derechos, Voltaire vio posible humanizar la esclavitud, llegando incluso a no criticar la esclavitud sino su forma de practicarla, ya que entiende que la falta de humanidad de los patrones es la principal causa que provocan los males de la esclavitud.

no era mala, sino que lo único que era detestable y había que corregir era el maltrato que se daba a los esclavos.

De este modo el iusnaturalismo racionalista y la afirmación del carácter no natural de la sociedad y del Estado llevó a afirmar la igualdad natural de los individuos y al reconocimiento de unos derechos naturales e inherentes al mismo, siendo la Constitución un instrumento en el que se podría garantizar que estos derechos fueron recogidos en una constitución y por tanto respetados en el Estado de Derecho.

Tales antecedentes nos conducen a la positivación de los derechos humanos que se producirán a partir de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. En tal sentido debemos considerar que los orígenes de la garantía de los derechos humanos en la constitución de Cádiz en 1812 se remontan a la elaboración de otras grandes cartas y catálogos de derechos que supusieron un hito en la historia para la garantía de los derechos humanos.

Las primeras declaraciones de derechos en Norteamérica fueron precedidas de una serie de textos legales en los que se recogieron las reivindicaciones de las colonias americanas frente a la Metrópoli⁴²³ tales como el Cuerpo de libertades de la *Bahía de Massachusetts* (1641), en el que se defiende la tesis de la positivación de los derechos naturales: “proclamamos que deben ser considerados como leyes y no podrán imponerse penas que los infrinjan o incumplan”; el Acta de tolerancia de Maryland (1669-1670); las Normas fundamentales de Carolina (1669-1670).

Estos documentos⁴²⁴ acogen la tradición jurídica inglesa del *Common Law* y se inspiran en el *iusnaturalismo racionalista*, según el

⁴²⁴ Asís Roig, R.: «*El modelo americano de derechos fundamentales*». en *Anuario de Derechos Humanos*. 6 (1990), p. 52.

cual los derechos naturales corresponden al hombre por su condición de persona humana; incorporan una concepción pactista de la sociedad y tratan sobre aspectos esenciales para la comunidad (los límites del poder, la tolerancia y la humanización del derecho penal y procesal). A raíz de la aprobación en Inglaterra del Bill of Rights (1689) por el rey Guillermo de Orange, los textos americanos recibirán, ya en el siglo XVIII, más intensamente, la doctrina iusnaturalista. Así sucedió con la *Carta de privilegios de Pennsylvania* (1701), la *Declaración de derechos y agravios* (7 de octubre de 1765), la *Declaración de deberes norteamericanos* (1774) y la *Declaración de Levantamiento de armas* (6 de julio de 1775).

El antecedente más importante es la Declaración de Derechos del buen pueblo de Virginia de 1776 elaborada por George Mason y que sería proclamada en la Convención de Virginia de 12 junio de 1776, Declaración que comienza afirmando que todos los hombres son libres y poseen una serie de derechos naturales innatos, haciendo referencia al pacto como medio por el cual los individuos constituye la sociedad.

Por otra parte la Declaración señala la necesidad de la existencia de tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, consagra los derechos de sufragio, la libertad de prensa y la libertad religiosa.

Esta Declaración sirve de influencia para la incorporación de la Declaración de Derechos Humanos contenida en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 4 julio de 1776, cuyos tres principios básicos son la representación parlamentaria, la ley natural y el pacto.

En esta misma Declaración de Independencia de Thomas Jefferson se declaraba que: "sostenemos como verdaderas evidencias que todos los hombres nacen iguales, están dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales se encuentra el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad".

La Declaración de Derechos de Virginia y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos produjeron la positivación hacia los principales principios del iusnaturalismo racionalista como la soberanía popular, la igualdad de todos los hombres en su dignidad, el reconocimiento de derechos inalienables de la persona, como son la vida, la libertad, la seguridad la búsqueda de la felicidad y la propiedad, y al mismo tiempo también la obligación de que las autoridades públicas y gobernantes se encargaran de garantizar estos derechos a sus ciudadanos⁴²⁵.

La Constitución americana aprobada en 1787 no incorporó una declaración expresa de derechos. Esta ausencia, producto de factores históricos y filosóficos, quedó paliada con la aprobación de las Enmiendas a la Constitución que constituyen una verdadera Declaración de derechos expresados sobre todo como límites del poder político. Las diez primeras enmiendas a la Constitución americana (Bill of Rights) fueron aprobadas por el Congreso y ratificadas el 15 de diciembre de 1791 y “enumeran ciertos derechos individuales y declaran que otros derechos no enumerados no deben ser menospreciados”⁴²⁶.

A través de estas enmiendas se incorporó la libertad de cultos, expresión, prensa, asociación, reunión y petición al gobierno (1.^a Enmienda); el derecho a poseer y llevar armas (2.^a Enmienda); la inviolabilidad del domicilio en tiempos de paz y en tiempos de guerra (3.^a Enmienda); el secreto de la correspondencia (4.^a Enmienda); las garantías procesales, derecho a la defensa y a ser juzgado mediante jurado; derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo delito; derecho a la propiedad privada y, en su caso, a la expropiación con

⁴²⁵ Gómez Sanchez, Yolanda, "*Las Cortes de Cádiz y los derechos humanos*", dentro de Escudero, José Antonio (dirección), *Cortes y Constitución de Cádiz. 200 años*, tomo II, Ed. Espasa, Madrid 2011, pp. 101-102.

⁴²⁶ *Ibídem*.

justa remuneración; prohibición de castigos crueles (5.^a, 6.^a y 7.^a Enmiendas); la prohibición de exigir fianzas y multas excesivas y de infligir penas crueles y desusadas (8.^a Enmienda); la interpretación extensiva de los derechos (9.^a Enmienda) y la atribución de poderes a los Estados y al pueblo (10.^a Enmienda).

Debemos referir como antecedente aún más cercano a la Constitución de 1812, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 basada en el iusnaturalismo racionalista, que promueve el establecimiento de derechos subjetivos como el elemento principal del orden jurídico.

La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada el 26 de agosto de 1789 por Asamblea Nacional, proclama que el fin de toda asociación política es la conservación por la comunidad de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre (artículo 2º); que tales derechos naturales son la libertad, la propiedad, la seguridad, y la resistencia a la opresión (artículo 2º); la libertad e igualdad de derechos de todos los hombres (artículo 1º); el derecho a participar en la elaboración de las leyes y acceder a los cargos públicos (artículo 6º); la separación de poderes para garantizar los derechos frente a los abusos del poder (artículo 16º); la libertad de opinión y prensa (artículo 10º) la libertad de conciencia y culto (Artículo 10º); la presunción de inocencia (artículo 8º) las garantías procesales para los detenidos (artículo 7º); la irretroactividad de las leyes penales (artículo 8º); el derecho de propiedad inviolable y sagrado (artículo 17º)⁴²⁷.

Las enmiendas restantes, 11.^a a 27.^a, se han aprobado sucesivamente desde 1795 (11.^a Enmienda) hasta 1992 (27.^a Enmienda). Estas enmiendas han completado el elenco recogido en las diez primeras, reconociendo importantes derechos y libertades entre

⁴²⁷ Gómez Sánchez, Yolanda, *Las Cortes de Cádiz y los Derechos del Hombre en Cortes y Constitución de Cádiz 200 años*. Tomo II. Pág. 98 a 119.

los que se encuentran la abolición de la esclavitud (13.^a Enmienda, 6 de diciembre de 1865); el derecho de ciudadana (14.^a Enmienda, 9 de julio de 1868) y el derecho de sufragio (15.^a enmienda, 3 de febrero de 1870; 19.^a Enmienda, 18 de agosto de 1920; 24.^a Enmienda, 23 de enero de 1964 y 26.^a Enmienda, 1 de julio de 1971).

Cuando la Constitución de Cádiz vio la luz, Francia ya había aprobado diversos textos constitucionales (los de 1791, 1793⁴²⁸, 1795 y 1799 modificado, este último, en 1802 y 1804); Estados Unidos había aprobado también su Constitución en 1787 que, con numerosas Enmiendas, sigue todavía vigente; e Inglaterra tenía ya décadas años de experiencia constitucional⁴²⁹.

Los diputados de las Cortes de Cádiz decidieron que en la Constitución no se incluyera ni una referencia al catalogo de derechos y libertades de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadanos francesa y de las declaraciones americanas, ni tampoco quisieron que finalmente en el texto constitucional de reprodujera una catalogo expreso de derechos, por lo que el carácter liberal y progresista, que muchos atribuyeron a la Constitución de Cádiz, podría quedar en entredicho debido a la falta de una regulación de un catalogo expreso de derechos de los ciudadanos.

No obstante, si es cierto que de forma fragmentaria a lo largo de todo el documento constitucional se recogen derechos que se intentaban garantizar, aunque finalmente la correspondiente protección y garantía de los mismos no sea la más adecuada.

3.3.2 Los derechos reconocidos en la Constitución de Bayona

No debe olvidarse que paralelamente al proceso que llevaría a la Constitución de Cádiz se realizó la llamada Constitución de Bayona

⁴²⁸ No llegó a tener aplicación

⁴²⁹ Con todo, España fue uno de los cinco primeros países del mundo que llegaron a poseer una Constitución escrita.

o carta otorgada promulgada el 20 de julio de 1808 en el que podemos considerar algunos de los llamados derechos fundamentales de los que señalamos los siguientes:

La inviolabilidad de domicilio, será garantizada en el artículo 126 que señala: "La casa de todo habitante en el territorio de España y de Indias es un asilo inviolable; no se podrá entrar en ella sino de día y para un objeto especial determinado por una ley, o por una orden que dimanase de autoridad pública."

La libertad sería consagrado en el artículo 127 que impide las detenciones "como no sea en flagrante delito, sino en virtud de una orden legal y escrita".

El artículo 133 declara abolido el tormento, así como todo rigor o apremio en el acto de prisión, en la detección y ejecución, que no esté expresamente autorizada por la ley.

El artículo 125 establece que los extranjeros puedan ser admitidos a gozar del derecho de vecindad, si se cumplen una serie de condiciones.

El artículo 145 establece la libertad de imprenta, dos años después de haberse ejecutado enteramente la Constitución.

3.3.3. Los Derechos reconocidos en la Constitución de Cádiz.

Como ya hemos señalado la Junta Central puso en marcha el proceso constituyente siendo articulada por la Junta Central en los últimos días del mes de mayo, la llamada Comisión de Cortes de suerte que el 8 de junio de 1809 la Comisión celebraría la primera sesión.

Esta Comisión de Cortes, integrada por cinco miembros de la Junta Central y presidida por Jovellanos, solicitó numerosas opiniones a instituciones civiles y eclesiásticas de diverso carácter, la preparación de la consulta al país, obteniendo respuestas abundantes.

Para seleccionar el material recibido, se formó una Junta de ordenación que asumió la tarea de clasificar los escritos que se recibían y de sintetizarlos y al mismo tiempo se formaron diversas comisiones para la elaboración de proyectos legislativos que recogieran las demandas más importantes que se gestaban tanto en la *Comisión de Cortes* como en la *Junta Central* y que deban someterse a las Cortes una vez reunidas.

Puede decirse que los derechos y libertades no fueron en este momento tema prioritario en los promotores del Texto Constitucional gaditano. Jovellanos tuvo un papel destacado en este periodo y elaboró unas Instrucciones para el funcionamiento de las Juntas antes referenciadas en las cuales se contenían principios claramente ilustrados (igualdad ante la ley, unidad de códigos, ordenación del gasto público...), aunque no figuraba el principio básico de la limitación del poder del Rey por la propia Constitución.

Las Cortes, en su primera reunión (Decreto I, de 24 de septiembre de 1810), proclamaron su carácter de Cortes Generales y Extraordinarias (constituyentes) y proclamaron los principios de soberanía nacional y división de poderes. El 23 de diciembre de 1810, las Cortes nombraron una Comisión encargándole la redacción de un proyecto de Constitución.

La Comisión de Constitución comenzaría sus sesiones el día 2 de marzo de 1811 acordando que se “recogerían todas las memorias y proyectos que se trabajaron sobre Constitución en tiempo de la Junta Central y demás que, por otras personas, se hubieren presentado o presentaren y que se tendrían a la vista.

El proyecto de Constitución incluyó inicialmente un catálogo de derechos en el Capítulo II, con diez artículos, con el título de “De

los españoles, sus derechos y obligaciones”⁴³⁰ entre los que se encontraba expresamente reconocida la igualdad, lo cual había dado lugar a un amplio debate previo. El primero de estos diez artículos se refería a la adquisición de la nacionalidad; mientras que el artículo 2º reconocía como “derechos de los españoles” la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad, cuyo alcance estaba detallado en los artículos 3º a 6º. Los artículos 7º a 10 que completaban el capítulo incluían “obligaciones” y no derechos.

Sin embargo aquél planteamiento no prevalecería. En la sesión del 7 de agosto de 1811 se acordó que se propusieran “diferentes pensamientos dirigidos a dar otro aire a los artículos que tratan de los derechos de los españoles, por parecer a algunos de los señores de la Comisión que será mas original y sencillo enunciar las cosas sin hacer la enumeración de los derechos”⁴³¹.

Este nuevo planteamiento de los miembros de la Comisión tendría como consecuencia una alteración de la referencia a los grandes principios como la “igualdad”, que sería solo insinuada y la libertad consagrada como hemos visto en el artículo 4º que manifiesta que “La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen”.

Este Capítulo II cambiaría su título por el de “De los españoles” y fueron suprimidos los derechos más significativos, aunque se mantuvieron las obligaciones que figuraban en el proyecto constitucional: el amor a la Patria era la primera y principal de estas obligaciones y también “ser justos y benéficos unos con otros”; se constitucionalizó también la obligación de fidelidad a la Constitución,

⁴³⁰ Suarez, F.: *Actas de La Comisión de Constitución* (1811-1813), Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1976, p. 81.

⁴³¹ *Ibíd.*, pp. 78 y 79.

obediencia a las leyes y respeto a las autoridades establecidas; la obligación de contribuir, sin distinción alguna, “en proporción de sus haberes para los gastos del Estado” y la defensa de la Patria “con las armas, cuando sea llamado por la ley”.

En todo caso, podemos constatar como en la Constitución finalmente se eliminaron los paradigmáticos derechos liberales de libertad, seguridad, propiedad e igualdad.

Todo ello muestra la profunda fractura que se produjo en orden a la inclusión de un catalogo de derechos en la Constitución de Cádiz, ya que las reticencias a cualquier influencia francesa, pero también la escasa predisposición de una mayoría de los diputados al reconocimiento de las libertades, impidieron adoptar el modelo establecido por la declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

De este modo la Constitución de 1812 incorporaría una exigua primera generación de derechos que, además, serían escasamente garantizados.

3.3.4 Derechos reconocidos y dispersión de derechos

Como primer criterio que hemos de señalar en la Constitución de 1812 es el criterio de la dispersión de los derechos, no hay una espesa declaración de derechos en la que de forma conjunta y separadas integren las diversas opciones que se reconocen.

Por tanto una de las características de la Constitución de 1812 que resulta, además, discordante con los precedentes más inmediatos americanos y franceses es la ausencia en su articulado de un catalogo de derechos sistemático. La demanda liberal de reconocimientos de libertades se zanjó en Cádiz con la inclusión dispersa a lo largo del Texto Constitucional de algunos derechos que, en ocasiones, quedaron desvirtuadas.

Se considera que esta falta de declaración sistemática nace ya de la redacción imprecisa y equívoca del Discurso Preliminar⁴³² redactado por Agustín de Arguelles que es sumamente cauteloso en materia de derechos y libertades. Frente a esta presentación de Arguelles cabe considerar el proyecto de Flórez Estrada de 1809 quien realizó la Declaración de Derechos en el que se incluía la libertad ideológica, de expresión y de imprenta, la libertad religiosa, la inviolabilidad del domicilio, la libertad personal y la igualdad formal o ante la ley.⁴³³

Asimismo era sobradamente conocido el proyecto de León de Arroyal que reconocía derechos como la libertad civil, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la legítima defensa, derecho de propiedad, derecho a la igualdad formal y algunos derechos procesales-penales⁴³⁴.

Se piensa que la decisión de no incluir una Declaración de Derechos está relacionada con la idea de alejarse deliberadamente de las ideas de los revolucionarios franceses, en especial de los jacobinos aunque se haga una alusión a la necesidad de proteger la “Libertad

⁴³² *Discurso Preliminar a la Constitución de 1812*. Introduccion de Sanchez Agesta, Luis CEPC, Madrid, 1981. El texto del Discurso esta tambien disponible en: <http://hc.rediris.es/Ol/Cons-tituiciones/discurso.htm>

⁴³³ Flórez Estrada, Álvaro fue diputado en las Cortes de 1812. Redacto en 1822, con Martínez Marina, el primer proyecto del Código Penal español y el 3 de marzo de 1823 es nombrado ministro de Estado. Sobre Flórez Estrada puede consultarse <<150 Aniversario de Álvaro Flórez Estrada>>. en Historia Constitucional, núm. 5 (2004, monográfico). Disponible en: <http://www.seminariomartinezmarina.com/ojs/index.php/historiaconstitucional/issue/view/6/>. Fernandez Sarasola, Ignacio, El pensamiento político-Constitucional de Álvaro Flórez Estrada a través de la prensa. Historia Constitucional (revista electrónica), n. 5, 2004. <http://hc.rediris.es/05/indice.html>

⁴³⁴ Arroyal y Alcazar, León de; fue el primer escritor español del siglo XVIII en pedir una Constitución en sus “Cartas político - económicas al Conde de Lerena”, que era en aquel momento Ministro de Hacienda. La parte en la que dibuja un proyecto de Constitución consta de siete cartas dirigidas a Francisco de Saavedra, siguiente ministro de Hacienda, en las que se propugna la limitación del poder del rey, el fomento de la igualdad y de las libertades económicas.

individual en el ejercicio de las facultades físicas y morales de cada particular según sus necesidades o inclinaciones”⁴³⁵.

Con respecto a la Constitución de Cádiz en relación a las primeras constituciones y en materia de derechos se destaca que no aparece la cláusula genérica de la igualdad contenida en la Declaración de Virginia de 12 de junio de 1776 como en la Declaración de Independencia de las trece Colonias de 4 de julio de 1776 y de la Declaración de Derechos del hombre y del ciudadano de 26 de agosto de 1789 aunque hay afirmaciones de carácter igualitario como la contenida en el artículo 56 que señala que “la ley ha de ser igual para todos: y en su aplicación no ha de haber acepción de personas”.

Con respecto a la libertad recordemos que aunque muchos diputados fueron partidarios abolir la esclavitud, esta prohibición no llegó al texto constitucional. Finalmente tampoco se contempla la libertad religiosa que aparecen en la declaración de Virginia y la Constitución de los Estados Unidos y asimismo en la Declaración francesa de derechos humanos⁴³⁶.

Dentro de los derechos humanos el texto de la Constitución de Cádiz, consagra la libertad y la propiedad tal y como señala el artículo 4º redactado en los siguientes términos: “ la nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen”.

También está reconocida la libertad como prohibición de detención arbitraria como una limitación del poder regio a disponer el artículo 172.11 que el Rey no puede privar a ningún individuo de su libertad, ni ponerle por si pena alguna.

⁴³⁵ *Discurso Preliminar*, ob. cit., p. 98

⁴³⁶ Retortillo Baquer Lorenzo, Martín: *Los derechos humanos en la Constitución de Cádiz en Cortes y Constitución de Cádiz 200 años* Tomo II. Pag. 405 a 426.

Como ya hemos mencionado se consagra asimismo la libertad de imprenta e instrucción pública en el artículo 371 que reconoce que “los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o comprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes”.

El derecho a la propiedad se encuentra en el artículo 172.10 como limitación del poder regio, prohibiéndose al Rey tomar la propiedad de ningún particular ni corporación, ni turbarle en la posesión, uso y aprovechamiento de ella.

La igualdad será reconocida en el artículo 6º del proyecto con la eliminación de las diferencias entre los individuos que componen la nación el uso y goce de sus derechos, definición de igualdad formal equivalente a la supresión de la desigualdad jurídica. Pero este artículo sería eliminado durante el debate de la Comisión de Constitución, con lo cual la Constitución de Cádiz consagraría la existencia de hombres libres y de esclavos y distinguiría entre nacionales y ciudadanos.

Si estarían presentes en la Constitución de Cádiz la soberanía nacional, que quedaría consagrado en el artículo 1º de la Constitución, la representación política y el principio de la división de poderes.

La inviolabilidad del Domicilio.

Entre una serie de garantías para el proceso criminal la Constitución de 1812 reconoce la inviolabilidad del Domicilio en el artículo 306 que prescribe que “no podrá ser allanada la casa de ningún español, sino los casos que determine la ley para el orden y seguridad del Estado”. Este proyecto que tenía raíces en el derecho histórico supone una garantía de las libertades individuales.

Derechos políticos

La constitución de Cádiz abre la puerta a un cierto carácter universal para sufragio activo, aunque limitados a los hombres, siempre que sustente la condición de ciudadano que se regula específicamente los

artículos 18 y siguientes y se proyecta algunos extranjeros hijos extranjeros pero no a todos los españoles que sean negros. Esta potenciación del sufragio está relacionada con la superación de la fórmulas está mentales con el intento de alcanzar una representación nacional. Otro de los avances en materia política es el establecimiento en el artículo 28 de un estatuto de parlamentarios a disponerse que “los diputados eran inviolables por sus opiniones y que en ningún tiempo ni caso por ninguna autoridad podrán ser reconvenidos por ellas”.

Se protege también jurídicamente a los parlamentarios al establecerse que durante las sesiones de las cortes, y un mes después, los diputados no podrán ser demandados, civilmente, ni ejecutados por deudas”.

El reconocimiento de la libertad de los ciudadanos y el poder judicial

Como principio rector que debían seguir las normas constitucionales quedó ratificado el reconocimiento de la libertad los ciudadanos con la aprobación de los artículos 285 y 288 que establecía en el primer caso que la prisión de cualquier ciudadano debería ser realizada mediante mandamiento judicial escrito y sólo cuando el reo fuese acusado por hechos que merecían pena corporal.

El artículo 295 prescribiría la prohibición de encarcelar a aquel que diera fiador y en los casos no prohibidos por la ley y el artículo 296 establecía que en cualquier estado de la causa en que aparezca que el reo, no merece pena corporal debía ser puesto en libertad bajo fianza.

Con relación al arresto el proyecto determinaba la necesidad de que el reo debería ser presentado al juez para prestar declaración siempre que no haya cosa que lo estorbe. Sólo cuando esto no se pudiera llevar a cabo, el arrestado sería encarcelado en calidad de detenido, estando obligado el juez a tomarle declaración en las 24 horas siguientes según se dispone el artículo 288. La garantía de que los arrestos se realizarían dentro de la legalidad se establece en el artículo 291.

Administración de justicia, tutela judicial y derechos del detenido

La Constitución de Cádiz regula extensamente esta materia con 67 artículos consolidando gran parte del procedimiento judicial integrándolo en la Constitución. De este modo se reconocen entre otros la extensión a los tribunales de la exclusividad de la función jurisdiccional -artículos 242 y 225-; como expreso desapoderamiento del Rey de las Cortes -artículo 443-; la unificación de los códigos civil, criminal y de comercio -artículo 258-; la uniformidad del procedimiento -artículo 244-; la unidad de fueros para las causas civiles y criminales -artículo 248- la inamovilidad de los jueces y un fuero especial para el Tribunal Supremo de justicia -artículo 259-.

En este referido Título V se encuentran asimismo las garantías derivadas del derecho a la tutela judicial y los derechos del detenido al reconocer la Constitución de Cádiz de 1812 el derecho al juez competente - artículo 247-; la inviolabilidad personal -artículo 287-; la prohibición de detención arbitraria -artículo 299- el derecho a ser informado de los hechos que se le imputan-artículo 305-; el derecho de hábeas corpus - artículo 290-; el derecho a declarar contra sí mismo artículo 291-.

Se recalca el principio del carácter público del proceso, tras destrucción según se considera por el artículo 297.

Se abre la puerta que legislador puede introducir la figura del jurado según establece el artículo 307 de la Constitución aunque no se decide dar el paso de forma terminante.

Deben considerase la aparición de algunas reglas de política penitenciaria al determinar que las cárceles deben configurarse de manera que sirvan para asegurar y no para molestar a los presos, pero nunca en calabozos subterráneos ni malsanos según establece el artículo 297.

La abolición de la tortura

El artículo 303 prohibiría el uso del tormento o de los apremios en la administración de justicia. “No se usará nunca del tormento ni de los apremios” y el artículo 304 prohibirá la pena de confiscación de bienes.

La instrucción pública

Mención de especial referencia es la regulación de la educación pública en la Constitución de 1812 aunque no se formula en términos de reconocimiento del derecho individual sino como un compromiso de los poderes públicos.

La Constitución dedica a la instrucción pública el Título IX, artículos 366 y siguiente, materia que ya había sido objeto de tratamiento por las primeras Constituciones francesas. El Discurso Preliminar es expresivo ya de la importancia que se da a la instrucción pública al señalarse que el estado necesita de ciudadanos que ilustren a la nación y promuevan su felicidad con todo género de luces y conocimientos. El artículo 366 declarará la extensión de la educación al prescribir que en todos los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras letras en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles.

La libertad de empresa

También se señala también como uno de los avances de la Constitución de Cádiz la preocupación por promover y fomentar todas las industrias y renovar los cálculos que la entorpezcan según aparece en el artículo 131 de las facultades de las cortes.

La supresión de los privilegios nobiliarios

Volvemos a recordar dentro de los derechos la supresión de los privilegios mobiliarios. Recordando que las cortes de Cádiz no tuvieron ningún carácter estamental. Aunque el nuevo texto constitucional no deroga de forma expresa la distinción de estados pues no mencione ninguna ocasión los términos estamento, nobleza o hidalguía el nuevo texto de la Constitución de Cádiz abole la vieja organización estamental al establecer que todo español sin distinción alguna está obligado a contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado -artículo 8-; al establecer que no puede el rey concede privilegios exclusivo a persona y corporación alguna -artículo 172-; y al establecer que ningún español

podrá excusarse del servicio militar, cuando llegue la forma que fue llamado por la ley –artículo 361- y, entre otras disposiciones.

3.4. El Principio de Confesionalidad y Unidad Religiosa

3.4.1. Las relaciones Iglesia-Estado a fines del siglo XVIII.

La Iglesia española no sólo no fue ajena a los acontecimientos que se produjeron en el conflicto contra los franceses desde la invasión que estos hicieron a la península ibérica, sino que se vio intensamente afectará por dichos acontecimientos. Para la religión y para el clero este sería uno de los períodos más convulsos de su historia, siendo la cuestión religiosa uno de los recursos utilizados en la guerra de la independencia para levantar el ánimo patriótico de los españoles⁴³⁷.

Desde todas las instancias del país se entiende que se va a vivir una transformación importante y esto sucederá con la iglesia, que ve como se va a superar la tradición regalista, que supone una estrecha vinculación entre la Iglesia y el Estado y se va a articular una nueva formulación política donde la Iglesia pueda adaptarse a un nuevo papel en el marco de la transformación global del Estado.

La relaciones Iglesia-Estado hubieron de sufrir las consecuencias del proceso ideológico y científico que hemos venido exponiendo y que conducía hacia la secularización de la sociedad. La concepción del hombre libre de todo poder teológico y capaz de construir un nuevo universo sería desarrollada por la ilustración y acentuada por el iluminismo, el liberalismo y el positivismo que propugnaron el derecho de libertad religiosa.

La relaciones Iglesia Estado durante el siglo XVIII estaban definidas por el regalismo borbónico y por el Concordato de 1753. El

⁴³⁷ Suárez Bilbao, Fernando: *Las Cortes de Cádiz y la Iglesia Cortes y Constitución de Cádiz* Tomo II Pág. 23-68

regalismo no discutió la directa potestad del Papa en la esfera espiritual, sino en las materias vistas, la defensa a ultranza de las regalías inherentes a la Corona.

Las relaciones entre la Iglesia y el Estado con la nueva dinastía de los Borbones pasarían diversas fases a lo largo del siglo XVIII. Tras la Guerra de Sucesión en donde cabe recordar que el Papa Clemente XI reconoció al archiduque Carlos de Austria como Rey de España, se iniciaron negociaciones que condujeron al Concordato de 1717, sustituido por el Concordato de 26 de septiembre de 1737 y el Concordato de 11 de febrero de 1753 en el que el Papa otorgó al Rey de España el derecho universal a dominar y presentar los beneficios ante reservados a la Santa Sede.

Estos Concordatos lograron la extinción de la imposición de pensiones, células bancarias, expolios de las mitras y frutos de las iglesias vacantes así como otras contribuciones. Pero el concordato de 1753 no transfirió al monarca las facultades de control de toda la iglesia quedando intactos los actos jurisdiccionales, como el patronato universal, las competencias de la anunciatura y la tramitación e las dispensas matrimoniales.

Durante el periodo de Carlos III se plantearon algunas novedades importantes como fueron la creación del Tribunal español de la Rota, la reimplantación del “pase regio” según el cual todos los despachos de Roma se someterían a la rigurosa censura previa del Consejo para evitar posibles ataques a las regalías y la expulsión de los jesuitas.

La expulsión de los jesuitas sería uno de los hechos más determinantes y tendría lugar a mediados del siglo XVIII en las monarquías católicas europeas identificadas como despotismos ilustrados culminando con la supresión de la Compañía de Jesús por el Papa Clemente XIV en 1773. Antes y después de esas fechas los

jesuitas también fueron expulsados de otros estados, en algunos más de una vez, como es el caso de España que sucedería en 1767 y 1835.

La llegada al trono de España del nuevo rey Carlos III en 1759 supuso un duro golpe para el poder y la influencia de la Compañía de Jesús, pues el nuevo monarca, a diferencia de sus dos antecesores, no era nada favorable a los jesuitas, influido por su madre la reina Isabel de Farnesio, que siempre les tuvo prevención, y por el ambiente antijesuítico que predominaba en la corte Nápoles de donde provenía.

La expulsión se produciría a través de una Pragmática Sanción de 1767 que se justificaba: “por gravísimas causas relativas a la obligación en que me hallo constituido de mantener en subordinación, tranquilidad y justicia de mis pueblos, y otras urgentes, justas y necesarias que reservo en mi real ánimo, usando la suprema autoridad que el Todopoderoso ha depositado en mis manos para la protección de mis vasallos y respeto a mi Corona”.

Las razones expuestas en documento de Carlos III eran múltiples: la tendencia del gobierno por hacer recaer en los jesuitas la responsabilidad del Motín de Esquilache, el acoso internacional, con los ejemplos de Portugal y Francia, la discrepancia entre el absolutismo político de Carlos III por derecho divino y el populismo atribuido a los padres de la Compañía o los intereses económicos -los que apoyaron la tesis de Campomanes en el *Tratado de la Regalía de Amortización*-, sociales -enfrentamiento entre colegiales y manteístas - y políticas —intento de identificar a los jesuitas con los opositores al gobierno de Carlos III, y aun las discrepancias entre las órdenes religiosas y de los obispos con los padres de la Compañía.

Otro de las más importantes transformaciones que se producen en esta época es la conversión de la Inquisición en el instrumento de poder absoluto al servicio de los intereses regalistas.

En el reinado de Carlos IV el gobierno insistirá para que la curia ceda a los obispos la facultad de las dispensas matrimoniales y la

jurisdicción disciplinar. El Ministro Urquijo aprobaría el Decreto de 5 de septiembre de 1799, dentro de la tradición regalista, reduciendo la Nunciatura a una simple embajada y devolviendo a los obispos la plenitud de las facultades disciplinarias.

Por último recordemos que para intentar solucionar la crisis financiera del Estado, se aumentaría la presión fiscal sobre el clero e iniciándose un proceso desamortizador entre 1798 y 1808.

Esta primera desamortización fue realmente importante porque en este periodo se enajenaron la sexta parte de las propiedades eclesiásticas adscritas a facilitas a cofradías y obras Pías para invertir los fondos resultantes de esta venta en la Caja de Amortización de vales reales.

La reforma de la iglesia realizada bajo el regalismo de los Borbones con el apoyo del Episcopado español constituía el fundamento del sistema de alianza entre el trono y el altar.

Constatamos por tanto como durante la nueva dinastía de los Borbones se plantea una cierta reforma de las relaciones entre la Iglesia y Estado que va teniendo como protagonistas sucesivamente por Macanaz, Olavide, Campomanes, Floridablanca y Urquijo.

Es asimismo importante considerar la población eclesiástica que existe en la España de finales del siglo XVIII. Los censos de Ensenada, Aranda, Floridablanca y Godoy, realizados en 1752, 1768, 1787 y 1797 permiten conocer la evolución de la demografía eclesiástica.

Dentro de los 150.000 eclesiásticos que se supone entonces habían en España en una población total de unos 11 millones de habitantes los eclesiásticos provenían de estratos sociales bajos atraídos por las facilidades que les ofrecía las escuelas religiosas.

Hay un predominio del clero regular sobre el secular descendiendo en un 20% el clero regular como consecuencia de las

reformas ilustradas de Carlos III y Carlos IV y hay una reducción progresiva del peso específico de los eclesiásticos. El alto clero en virtud del patronato regio era designado directamente por el monarca que fiscalizaba su actuación.

El clero capitular estaba constituido por dignidades, canónigos y racioneros que ejercerían su función en catedrales y colegiatas. El bajo clero constituía un número muy elevado poco más de 60.000 personas a finales del siglo, constituido por un conglomerado heterogéneo de curas párrocos, capellanes, presbíteros y clérigos de menores.

El alto clero había manifestado en varias ocasiones su descontento contra la política de Godoy, y a ello había de añadirse una posición menos clerical por parte de la población y concretamente de que vivía en las ciudades más pobladas.

La experiencia francesa de las relaciones entre la Iglesia y el Estado partió de la Ley sobre la Constitución Civil del Clero votada el 12 de julio de 1790 por la Asamblea Constituyente, llamada a sustituir el Concordato de 1516 con el objetivo de reorganizar en profundidad la Iglesia de Francia, transformando a los sacerdotes católicos parroquiales en "funcionarios públicos eclesiásticos".

De inspiración galicana, esta constitución civil trataba de establecer la total independencia, salvo en materia doctrinal, de la Iglesia de Francia respecto al papado.

Este proyecto de constitución civil constaba entre otras de las siguientes medidas: Se suprimen antiguas instituciones como los cabildos catedralicios. Se reestructuran las diócesis y parroquias tomando como modelo la estructura departamental. Se establecen 83 diócesis, una por departamento. Los obispos y sacerdotes son elegidos por los fieles. El Estado se hace cargo de la remuneración del clero. Se otorgan derechos civiles a todos los religiosos, que les permitían

abandonar sus cargos. Los religiosos son ahora ciudadanos como los demás, sin privilegios ni regalías.

El papa Pío VI consideró esta constitución civil del clero herética, sacrílega y cismática. Prohibió a los clérigos prestar dicho juramento y ordenó a los que ya habían jurado a retractarse. Esto originó una ruptura en el seno de la Iglesia Francesa entre los clérigos juramentarios y los refractarios, y la ruptura definitiva entre la Revolución y el Papa. La mayor parte de los sacerdotes católicos tomaron partido por la contrarrevolución y pasaron a ser sospechosos para los revolucionarios, sufriendo persecuciones. Muchos católicos que habían apoyado en principio la Revolución pasaron a la oposición.

Napoleón, tras acometer con éxito un golpe de estado contra el Directorio en 1799 y autoproclamarse Primer Cónsul un mes después con el apoyo del voto popular, entendió la necesidad de cambiar esta situación llegando a un acuerdo con la Iglesia, convencido de que un acuerdo con la Iglesia Católica sería crucial para la estabilidad de su régimen y la consolidación de los logros revolucionarios.

La Iglesia Católica había tenido discrepancias fundamentales con la Revolución, especialmente desde que la Asamblea Nacional, a través de la Constitución civil del clero, confiscó las tierras controladas por la Iglesia, que se convirtió en departamento del estado, rechazando toda autoridad del Papa sobre su funcionamiento interno.

Es así como llegaría a realizar el Concordato de 1801 entre la Francia revolucionaria dirigida en ese momento por Napoleón Bonaparte y la Santa Sede ocupada por el papa Pío VII.

Este Concordato de 1801 incluiría además de otras cosas, las siguientes: Una declaración de que "el Catolicismo era la religión de la gran mayoría de los franceses" pero no la religión oficial del estado, extendiéndose así la tolerancia religiosa a los judíos y protestantes; el Papado tendría el derecho de elegir a los obispos; el Estado pagaría un

salario clerical y el clero juraría lealtad al estado; la Iglesia renunciaría a reclamar las tierras que le fueron confiscadas durante la Revolución francesa; el calendario republicano francés sería abolido y reemplazado por el tradicional Calendario Gregoriano; algunas comunidades católicas de Francia rechazaron la firma del Concordato y decidieron su escisión de la Iglesia Romana manteniéndose al margen de la misma hasta hoy en día bajo el nombre de la Petite Église.

Cuando Napoleón decide invadir la península ibérica sabía que debía contar con el clero español antes de nombrar como Rey a José I y respaldarlo con el Estatuto de Bayona.

Su experiencia es grande como impulsor del Concordato de 1801. Las estipulaciones de este Concordato servirán de modelo a los Concordatos firmados posteriormente que reglamentan los derechos y deberes recíprocos de la Iglesia y del Estado, incidiendo en cuestiones económicas y en asuntos relativos al régimen y a la actividad de la Iglesia.

Con la pretensión de consolidarse proclamó el catolicismo como la religión oficial del Estado con el fin de atraerse a la iglesia. El artículo 1 señalaba que “La religión Católica, Apostólica y Romana, en España y en todas las posesiones españolas, será la religión del Rey y de la Nación y no se permitirá ninguna otra”.

Napoleón por su parte enviaría al Abate de Pradt, Capellán Mayor y Arzobispo de Malinas para desplazarse con él a España con la idea de realizar un plan de reforma de la Iglesia española decidido a implantar en España la reforma eclesiástica francesa y convirtiendo al clero en colaborador político del nuevo régimen.

Es por ello por lo que se propone proveer a la remuneración del clero una vez suprimidos los diezmos y expropiados los bienes de la iglesia así como racionalizar la distribución geográfica de las diócesis

y parroquias para adaptarlas a las nuevas circunscripciones administrativas.

El plan de reforma elaborado por el Abate Pradt, sería completado con otro plan realizado por Juan Antonio Llorente titulado “reglamento para la Iglesia española” enviado a Napoleón, un documento que comprende un amplio estudio acerca de la organización eclesiástica y que escribiría pocos días antes de acudir a la Asamblea de Bayona.

Veamos como paralelamente los constituyentes de Cádiz van a plantearse la relaciones entre la Iglesia en el Estado. Cabe destacar que la religión se constituye como uno de los argumentos que ha de defenderse junto a la nación y los reyes.

El pueblo español no se mostraba anticlerical y aun cuando los clérigos más conservadores intentaron plantear su oposición a las reformas que se habían de plantear y otros miembros del clero apoyarían a la nueva dinastía, no puede considerarse como manifiesta Emilio la Parra, que en las Cortes de Cádiz hubiera manifestaciones de anticlericalismo, aunque en esta época si aparecen panfletos anticlericales.

En todo caso es importante constatar que las Cortes de Cádiz quedarían ajenas a cualquier articulación estamental y por lo tanto que la Iglesia perdería el espacio que había tenido precisamente en aquel tiempo en donde se constituía como uno de los más importantes brazos, uno de los tres brazos de representación política.

La iglesia que se diseña en la nueva estructura política quedará ajena al Estado y las Cortes prescinden de cualquier permiso o rendimiento de cuentas con la Iglesia y con Roma.

En todo caso el clero va a sumarse a al lucha contra el invasor. La proclama de la Junta de Sevilla de 1808 hará referencia de tener a la patria y a la religión como única esperanza para la historia y la

Junta Central hará un llamamiento al clero para sumarse al conflicto y coger las armas contra el invasor. Pastorales y Obispos, catecismos y hojas sueltas que se reparten en las Iglesias incitan a oponerse al francés y en muchos de ellos a resistir la invasión haciendo referencia a la religión.

3.4.2. *Los diputados eclesiásticos en las Cortes de Cádiz*

Ha de recordarse que España no tiene solo un secular trasfondo católico sino también que el clero era enormemente influyente en la sociedad y enmarcada de un profundo sentimiento religioso y que fue el estamento más numeroso que encontramos en las Cortes de Cádiz.

Cabe por tanto considerar el enorme peso que tuvieron los eclesiásticos en la realización de la propia Constitución de Cádiz. En este sentido José María García León en su estudios sobre los diputados doceñistas destaca la enorme relación de diputados que pertenecieron al clero y quizá la más numerosa de todos los grupos que participaron en la realización de dicha constitución y su importante actuación ya ha sido estudiada en la obra de Gabriel María Vergara “Los diputados eclesiásticos en las Cortes de Cádiz”⁴³⁸.

Aunque no se conocen todos los diputados gaditanos sabemos que de un total de unos 306, el número de eclesiásticos, según Fernández Almagro era de 97; de 90 según contabiliza Ramón Solís y de 94 según Moran Ortí. Era por tanto un número superior a los abogados que sumarían unos 60, a los funcionarios públicos que sumarían 55 y a los militares que sumarían 37.

Este clero no es unitario, hay gente es muy diversas, hay un grupo importante de obispos, de sacerdotes, de canónigos, hay catedráticos de derecho canónico, deontología de filosofía..etc por tanto no podemos decir que hay una visión política uniforme. Porque

⁴³⁸García León, José María *Los diputados doceñistas* Capítulo I Pag 105 a 122. María Vergara, Gabriel “*Los diputados eclesiásticos en las Cortes de Cádiz*”. University of Michigan Library (January 1, 1912)

suposición depende de la educación recibida del cursos o no, de las dignidades ocupa y por tanto de si pertenece al clero alto y medio o pertenece al clero llano.

Hay por tanto muchas diferencias políticas como sucede si comparamos la figura de destacados liberales como Muñoz Torrero, Oliveros, Manuel Luján o Espiga y Gadea y significados absolutistas como Inganzo y Rivero, López de Orz, Blas de Ostolaza, Key Muñoz o realistas más moderados cómo Cañedo y Vigil o Rodríguez de la Bárcena.

Consecuentemente hay partidarios de la monarquía absoluta, muy combativos en materia religiosa, partidarios de elaborar la constitución, personas que se negaron a firmar la Constitución, partidarios de la libertad de prensa, partidarios y no partidarios del mantenimiento de la inquisición etcétera⁴³⁹.

En todo caso las posiciones no son inmovilistas, sino que evolucionan y van cambiando según se desarrollan los debates e influyen las circunstancias de la guerra y el contacto con los demás diputados.

3.4.3 La religión católica en las Cortes de Cádiz

La Constitución de Cádiz estará impregnada de elementos religiosos. La Constitución se realizará por los diputados de Cádiz que para aceptar su cargo de diputados habían efectuado un juramento bajo la siguiente fórmula: “¿juráis la santa religión católica, apostólica romana, sin admitir otras mujeres reinos?”. Este juramento se realiza en la apertura solemne de las Cortes y se hace ante los evangelios.

En el artículo 117 incide en que los diputados deben ratificar anualmente su condición de diputados ante los símbolos cristianos: “*En todos los años, el día 25 de Febrero, se celebrará la última junta preparatoria, en la que se hará por todos los Diputados, poniendo la*

⁴³⁹ García León, José María . *Los diputados doceañistas*. Vol I Pág. 115 a 122.

mano sobre los Santos Evangelios, el juramento siguiente: ¿Juráis defender y conservar la religión Católica, Apostólica, Romana, sin admitir otra alguna en el Reino? --R. Sí juro. -- ¿Juráis guardar y hacer guardar religiosamente la Constitución política de la Monarquía española, sancionada por las Cortes generales y extraordinarias de la Nación en el año de 1812? --R. Sí juro. --¿Juráis haberos bien y fielmente en el cargo que la Nación os ha encomendado, mirando en todo por el bien y prosperidad de la misma Nación? --R. Sí juro. --Si así lo hicieréis, Dios os lo premie, y si no, os lo demande”.

La Constitución también establece la fórmula que debe utilizar el monarca para jurar su cargo: *“El Rey, en su advenimiento al trono, y si fuere menor, cuando entre a gobernar el Reino, prestará juramento ante las Cortes bajo la fórmula siguiente: “N. (aquí su nombre), por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Rey de las Españas; juro por Dios y por los Santos Evangelios que defenderé y conservaré la religión Católica, Apostólica, Romana, sin permitir otra alguna en el Reino; que guardaré y haré guardar la Constitución política y leyes de la Monarquía española”*

Un enunciado similar es el que debe utilizar el heredero de la Corona: *“El Príncipe de Asturias, llegando a la edad de catorce años, prestará juramento ante las Cortes bajo la fórmula siguiente: “N. (aquí el nombre), Príncipe de Asturias, juro por Dios y por los Santos Evangelios, que defenderé y conservaré la religión Católica, Apostólica, Romana, sin permitir otra alguna en el Reino; que guardaré la Constitución política de la Monarquía española, y que seré fiel y obediente al Rey. Así, Dios me ayude”.*

Pero lo más importante será como se realiza el reconocimiento de la religión católica como única para la nación española.

Recordemos antes que en el Preámbulo de la Constitución se cita a la Santísima Trinidad: *“En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Autor Supremo Legislado de la sociedad”*. Este carácter tan escueto molestó a los grupos y diputados ultramontanos que pidieron que la Constitución incluyera más referencias a la doctrina católica pero para los liberales la Constitución era ante todo un documento político.

Los debates que tuvieron lugar entre los diputados sobre la cuestión de la religión en la Constitución están recogidos en el Diario de Sesiones de las Cortes del 2 de septiembre de 1811.

Según la Comisión la redacción de este artículo quedaría de esta manera:

La Nación Española profesa la religión católica, apostólica y romana, única verdadera con exclusión de cualquier otra”.

En el debate tomaría la palabra Pedro Inganzo y Rivero, diputado por el Principado de Asturias que había tomado contacto con las ideas jansenistas y pertenecía al más tradicional pensamiento conservador.

En el Diario de Sesiones de 2 de septiembre de 1811 había manifestado que: “La religión debe entrar en la Constitución como una ley que obligue a todos los españoles a profesarla, de modo que ninguno pueda ser tenido por tal si esta circunstancia. La religión es la primera de todas las leyes fundamentales, porque todas las demás estriban en ella”.

De este modo el obispo de Calahorra solicitaría una declaración tajante de la fe para constituir la religión en el precepto fundamental y por delante de todos los demás y también intervino en el debate del artículo 12 de la Constitución reclamando que fuera más allá y que la ley obligue a todos los españoles a profesar la religión católica:

“Decir que la nación española profesa la religión católica, es decir un puro hecho(...). La religión debe entrar en la constitución como una ley que obligue a todos los españoles a profesarla, de modo que ninguno pueda ser tenido por tal sin esta circunstancia”.

Inganzo propondría una redacción más radical y excluyente del artículo 12: *“Me opongo a que el artículo corra como viene, y me parece que debe extenderse de modo que abrace los extremos indicados; esto es, que se proponga como ley primera y antigua fundamental del Estado, que deba subsistir perpetuamente, sin que alguno que no la profese pueda ser tenido por español, ni gozar de derechos como tal”.*

En la misma línea intervendría Joaquín Lorenzo Villanueva y Astengo diputado por Valencia, Doctor en teología que había sido nombrado en 1795 capellán de honor y predicador del Rey, quién después se iría decantando a favor del grupo liberal siendo el diputado más influyente de la Comisión eclesiástica.

Este diputado haría una llamada en la isla de León al fervor religioso por el bien de la patria con las siguientes palabras: *“Para tener la bendición del cielo sobre las medidas enérgicas con que procurar la libertad de la patria, se expida un decreto en que manden rogativas públicas y se promueva la penitencia y la reforma de costumbres en los términos que parezca más procedentes a las Cortes y más a propósito para conseguir este fin”.*

Los diputados Villanueva y Muñoz Torrero, plantearían una redacción más comedida, aunque este último se muestra dispuesto a hacer alguna concesión a los más conservadores representantes de la Iglesia planteando que a las fórmulas utilizadas se pudiera añadir la prohibición del ejercicio de las sectas:

El artículo 12, tras varias sesiones de debate, recogería la referencia a la religión, encuadra en el Título II: *“Del territorio de las Españas, su religión y su Gobierno, y de los ciudadanos españoles”.*

“La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”¹⁷”.

Sin embargo el artículo 12 no dejó totalmente clara la confesionalidad del estado y no confunde el catolicismo con el Estado como haría la reacción posterior mediante la alianza entre el trono y el altar por lo que algunos autores entienden que es necesario ser prudente al afirmar la confesionalidad de las Cortes de Cádiz⁴⁴⁰.

3.4.4. La supresión de la Inquisición

Unas de las cuestiones decisivas entre las reformas capitales de la Constitución de Cádiz es la relativa a la abolición de la Inquisición que se produciría el 22 de octubre de 1813 al declararse el Tribunal de la Inquisición “incompatible con la Constitución Política de la Monarquía”, esto es con la Constitución de Cádiz. El día 23 la regencia del Reino procedía a la abolición del Santo Oficio.

El debate sobre la supresión del Santo Oficio o Tribunal de la Inquisición desataría duras polémicas.

El antecedente nuevamente es la Constitución de Bayona en la que se produjo también un importante debate tras haberse realizado dos informes emitidos por el Consejero de la Inquisición Raiundo Etternhard y Salinas y por los tres miembros del Consejo de Castilla, Lardizábal, Torres y Colón. A pesar de la oposición manifestada por el propio Napoleón en el proyecto constitucional se suprimió el precepto que ordenaba la abolición del santo oficio.

Napoleon aboliría la Inquisición por el Decreto de 4 de diciembre de 1808. La decisión final del Emperador, al parecer está relacionada según el diputado Francisco Riesco por la negativa del tribunal a apoyar a la nueva dinastía pero con razón entiende José

⁴⁴⁰ La Parra López, Emilio: *El primer liberalismo y la Iglesia*, Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, 1985, Alicante, p. 54

Antonio Escudero que la abolición de la Inquisición era una idea fija de Napoleón que también tenía unas consecuencias económicas. Lo que se plantea es que Napoleón carecía de autoridad para dictar el Decreto dado que el Rey de España era José, que ni firmó ni convalidó lo dispuesto por su hermano⁴⁴¹.

En las Cortes de Cádiz los diputados liberales eran contrarios a la Inquisición y ello se planteó desde un principio a propósito del establecimiento de la Libertad de Imprenta. Agustín Arguelles y Diego Muñoz Torrero fueron firmes defensores de la supresión y también Espiga, Mendiola Oliveros y Jáuregui. Por los conservadores presentaron argumentos en defensa del Santo Oficio, Inguanzo, Simón López, Ostolaza, Cañedo y Hermida.

La Comisión de Constitución presentaría su dictamen el 8 diciembre 1812 y la discusión finalizaría el 5 febrero 1813 con el correspondiente Decreto de las Cortes referido a esta materia. La Comisión de Constitución había tenido previamente que informar a las Cortes sobre si el establecimiento de la Inquisición era o no conforme a la Constitución Política de la monarquía sancionada por las Cortes.⁴⁴²

Para ello solicitaría al Gobierno que se le facilitasen las bulas y los documentos relativos a la Inquisición con la finalidad de realizar el correspondiente dictamen y entre ellos los documentos de establecimiento de la Inquisición a partir de la bula de Sisto IV de 1478, los referentes a la resistencia a su establecimiento así como las reclamaciones efectuadas contra la Inquisición.

Paralelamente se pide la documentación que acredite la incompatibilidad de la Inquisición con la Constitución y en concreto

⁴⁴¹ Escudero, José Antonio. *Las Cortes de Cádiz y la Supresión de la Inquisición: antecedentes y consecuentes en Cortes y Constitución de Cádiz*. Tomo II. Pg. 285 – 308.

⁴⁴² *Decreto de las Cortes Constituyente 8 de diciembre de 1812* Pag 4.189

la incompatibilidad con la soberanía y la independencia de la nación y con el principio de libertad individual así como el antecedente que suponía la abolición de la inquisición en Sicilia decretada por Fernando IV.

Se afirma en el dictamen de 8 de diciembre de 1812 que la Inquisición estuvo siempre en continua lucha con los Obispos, Audiencias y Consejos del Reino y era incompatible con la Constitución porque se oponía a la soberanía e independencia de la nación y a la libertad civil de los españoles. Concretamente se dice que no es compatible ni con la soberanía ni con la independencia de la nación y que los juicios no tiene influencia en la autoridad civil y por tanto se les condena civilmente siendo así que en la potestad secular no pueda conocer ni intervenir de modo alguno.

Se abunda en esta idea afirmando que se procede en el sumario y en las sentencias por leyes dictadas por el Inquisidor General y por tanto que la nación no ejerce la soberanía ni los juicios de la Inquisición,⁴⁴³ y se manifiesta que el Tribunal de la Inquisición no es compatible con la libertad individual mantenida en diversos artículos de la misma citándose entre ellos los artículos 290, 294, 300, 301, 302,303, 304 y 305, todos ellos pertenecientes al capítulo III del título V “De la Administración de Justicia en lo Criminal”

La Comisión propondría que se discutieran dos proposiciones. Primera: “La religión católica, apostólica, romana, será protegida por leyes conformes a la Constitución”. Segunda: El Tribunal de la Inquisición es incompatible con la Inquisición. Pero paralelamente planteaba la implantación de los tribunales de la fé proponiendo someter aprobación u “Proyecto de Decreto sobre los Tribunales protectores de la religión”.

⁴⁴³ *Decreto de las Cortes Constituyentes 8-12-1812* pag 4203,

Este dictamen sería suscrito por Diego Muñoz Torero-Presidente-, Agustín Argüelles, José Espiga, Mariano Mendiola, Andrés de Jáuregui y Antonio Oliveros-vicesecretario-.

La proposición que declaraba el Tribunal de la Inquisición como incompatible sería probada el 22 de enero 1813 por 90 votos a favor y 60 en contra.

Inmediatamente se planteó la discusión sobre el oficio secreto y sobre la posición de la Inquisición y el establecimientos de las fuerzas de "este decreto incluye en sus quedando establecidas las proposiciones preliminares quedando aprobados y establecidos los dos primeros artículos que contenían las proposiciones preliminares aprobadas.

La Inquisición se oponía a los derechos del individuo plasmado en la Constitución de 1812. Finalmente se suprimiría la Inquisición por el Decreto de 22 de febrero de 1813, desmantelándola como Tribunal especial.

3.5. La Soberanía Nacional, la Separación de Poderes, el Derecho de Petición y el Derecho de Sufragio

Nos corresponde finalmente hacer una breve consideración a aquellos conceptos ya planteados en el capítulo primero acerca de los fundamentos filosóficos y políticos referidos a la soberanía nacional y a la teoría de la separación de poderes o división de poderes constituida como una ordenación y distribución de las funciones del Estado, en la cual la titularidad de cada una de ellas es confiada a un órgano u organismo público distinto.

Estas teorías se constituyen junto a la consagración constitucional de los derechos fundamentales como uno de los principios que caracterizan el Constitucionalismo contemporáneo y

que singularmente fundamentan los principios filosóficos políticos jurídicos de la constitución de Cádiz de 1812.

3.5.1 La Soberanía y la Representación Nacional en la Constitución de Cádiz

Recordemos nuevamente que la noción de soberanía nacional aparece en los siglos XVII y siglo XVIII, fundamentalmente a través del pensamiento John Locke y Montesquieu, quien introdujo el principio de separación de poderes, principio que conduce a la creación de sistemas de representación. El principio de la soberanía nacional, explícitamente pasará a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto 1789 que manifiesta que "El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo ni individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente ".

Consecuentemente, la soberanía pertenece a la nación, constituida como una entidad abstracta y única. Este conjunto es ficticio, ya que no se limita a los ciudadanos presentes, si no que incluye a los ciudadanos pasados y futuros siendo mayor que la suma de los individuos que lo componen. Se trata, asimismo, de una soberanía que tiene entidad colectiva e indivisible de la nación.

Unos meses antes, en enero de 1789, Sieyès había publicado su celebre panfleto "Qu'est-ce que le tiers-état? ("¿Qué es el Tercer Estado") a lo que responde "¿Qué es el Tercer Estado? Todo. ¿Cómo ha sido hasta ahora en el orden político? Nada. ¿Qué desean ser? Algo." Esta idea jugaría un papel principal en los primeros años de la Revolución en la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la ampliación de la teoría de la soberanía nacional, la soberanía popular, y la representación.

Al abordar el principio de la representación directa, pondría en evidencia la situación del tercer estado que exigiría que el numero de diputados de su orden sería igual que el de los ordenes privilegiados

(nobleza y clero). Así sucedería en la reorganización de los Estados Generales adoptándose esta medida proponiendo Sieyès que los miembros del primero y del segundo se unieran al tercero y se convirtieran en un cuerpo unido para representar a la Nación en su conjunto. Aquella medida, adoptada el 5 de junio de 1789, posibilitaría que el tercer estado asumiera la autoridad para representar a la nación.

El principio de soberanía se materializaría en Francia a través de la ley por cuanto que la Constitución de 1791 establece que: "No hay soberanía superior a la ley". Asimismo, la soberanía nacional se refleja en un gobierno representativo, ya que la nación no puede gobernar directamente. Las decisiones de este gobierno representativo son una expresión de la voluntad general.

La soberanía nacional establecida a través del sistema representativo exige, para su control, la separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y supone el establecimiento del sufragio contemplado como un derecho de los ciudadanos.

Las primeras teorías filosóficas y políticas sobre el término nación se construyeron realmente en el siglo XVII, destacando el pensamiento de John Locke, y posteriormente pasaría a la revolución francesa y a la revolución americana constituyendo una influencia notable para plantear el concepto de ciudadanía y de nación, siendo textos muy representativos en esta materia tanto la Declaración de Independencia de los Estados Unidos como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

El concepto de nación desde una perspectiva político-jurídica tiene sus orígenes en la filosofía política racionalista ilustrada de los siglos XVII y XVIII, época en la que pensadores como Hobbes y Kant empezaron a establecer los cimientos del liberalismo político. El concepto de nación ya se usa habitualmente en el siglo XVIII para designar una "colección de individuos" que se relacionan

constantemente y tienen algo en común, según la definición establecida por David Hume⁴⁴⁴.

El término nación fue desarrollado por Rousseau y Hegel que plantearon ideas diferentes sobre el contenido y la esencia del concepto nación. Para Rousseau los individuos libres y soberanos ponen sus voluntades en común para constituir la nación, de modo que son las personas las que construyen y forman una nación. La diferencia entre nación y pueblo radica para uso entre el pueblo se constituye como carbonato de voluntad, por el contrato social, de manera que un pueblo que es lo mismo que una República, , un estado, Un cuerpo político un soberano o una potencia y sus miembros.⁴⁴⁵

El concepto de nación se empezó a utilizar con mayor intensidad desde la revolución americana y la revolución francesa, siendo un concepto analizado por varios pensadores. Para Sieyes la nación se constituye como el titular de la soberanía, la cual se ejerce mediante el poder constituyente, y tras el establecimiento de la constitución, sería el pueblo el que se definiría como titular del poder constituido.

Según los postulados planteados por Sieyès, el concepto de nación estaría configurado por el conjunto de ciudadanos iguales en derechos y sin privilegios que denoten una acusada discriminación. Paralelamente Sieyès denominaba a la nación como el "tercer estado", y consideraba la nación como un elemento previo al Estado y titular de la soberanía originaria, debiendo ser considerado como un sujeto que tuviese atribuida su propia Constitución y así podría estar capacitada para crear un Estado.

⁴⁴⁴ Lopez Fernandez, José: *La nación: entre identidad política y la voluntad política*. Anales de Derecho. Universidad de Murcia. Número 17. 1999. Pg. 145

⁴⁴⁵ *Contrato social* 1.6

Sieyès emplea el término nación y pueblo inicialmente como sinónimos, pero posteriormente procede a diferenciarlos, reservando el término nación para designar al titular de la soberanía y consecuentemente del poder constituyente, y el término de pueblo para referirse a los ciudadanos, es decir, a los gobernados.⁴⁴⁶

La nación no es un ente de razón sino que constituye una colectividad humana concreta, “une chose vivante”, “un corps social” formada por el conjunto de los individuos⁴⁴⁷. Donde están todos los habitantes de un territorio aquí reside la nación.

La finalidad de una constitución es doble, por un lado intenta garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, y por otra parte intenta crear un marco jurídico e institucional en el que las instituciones, elegidas y controladas por los ciudadanos, garanticen el pleno ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Sieyes acuñó un concepto propio de "nación" en el que se vislumbra una serie de elementos claves: la nación: no se constituye como un concepto teológico o metafísico sino que realmente es un conjunto de personas que habitan en un territorio, y que se identifican como pueblo de ese territorio, distinguiéndose entre la nación-constituyente, y la nación-constituida; la nación-constituyente es el conjunto de personas libres e iguales que tienen la voluntad de aprobar una constitución para crear un estado con la misión final de garantizar la libertad de los ciudadanos; la nación-constituida: estará formada por el conjunto de ciudadanos.

La nación, constituida como una generalidad de los ciudadanos, deviene así titular de soberanía en cuanto conjunto de individuos unidos por el interés compartido de proteger sus derechos y la

⁴⁴⁶ Sieyès, E. “Discurso y moción del 15 de junio de 1789”, en *Escritos y Discursos de la Revolución*. Maíz, Ramón. CEC: Madrid 1991, pg. 44

⁴⁴⁷ Sieyès, E. *¿Qué es el tercer estado?*, en “*El Tercer estado y otros escritos de 1789*”. Espasa-Calpe 1991, pg 189

consiguiente voluntad de dotarse de un estado. Esta soberanía nacional previa al Estado se actualiza y se realiza a través del poder constituyente. La nación es previa al estado y éste al constituirse, incide sobre la nación, reforzándola y transformándola en cuerpo político a partir de la realidad social. Es por tanto un concepto de nación derivado, político, no natural, no original sino resultado de la acción nacionalizador del Estado. Sieyès postulará que la nación, una vez ejercida su soberanía mediante el poder constituyente, de viene en un lazo mágico “lien magique”. Para Sieyès el pueblo es la nación jurídicamente organizada⁴⁴⁸.

El principio de la soberanía nacional se constituirá en el fundamento del sistema político de la Constitución de 1812 y aparece como postulado que permite el paso del antiguo régimen al régimen liberal.⁴⁴⁹ Este principio de la soberanía nacional se apoya sistema político de Cádiz permitiendo el paso del antiguo régimen al régimen liberal pasando la titularidad del poder antes identificado con la persona del rey a la nación.

El artículo 3 de la Constitución de 1812 manifiesta que “La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales”.

Este principio se convertiría en el auténtico germen de las profundas transformaciones sociales, políticas y económicas que hubieron de enunciar y legislar posteriormente las Cortes de Cádiz. Sin duda la declaración de la soberanía nacional, constituyó un de los mas importantes logros.

⁴⁴⁸ Sieyès, E. Opinion de Sieyès sobre varios artículos de los títulos IV y V del Proyecto de Constitución” en “*Escritos y discursos de la Revolución*”. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007, pg. 255

⁴⁴⁹ Fernández García, Antonio. *La cuestión de la soberanía nacional*. Cuadernos de Historia Contemporánea. Vol. 24 (2002) pg 41-59

La Constitución de Cádiz se erigió como la Constitución liberal de referencia que inició el proceso constitucional español, en el cual tendrán una especial relevancia los conceptos tanto de nación, de ciudadanía. Los conceptos de "Nación" y "Ciudadano" se recogían en la Constitución de Cádiz de 1812 con sus propias peculiaridades. La regulación jurídica del concepto nación en este texto constitucional se recoge principalmente en los artículos 1 al 6 mientras que el concepto de ciudadanos a recoger a principalmente en los artículos 18 a 26. La Constitución de Cádiz se constituye como un hito importante en la definición de la "nación" española ya que por primera vez explícita a la Nación española como un sujeto titular del poder constituyente y fundamento de todos los demás poderes constituidos, consolidándose la nación y por tanto pasándose de un poder en el monarca a un poder cuyo centro será la nación.

La soberanía nacional es el fundamento constitucional de los liberales de Cadiz, entre los que continuamente señalamos a Agustín Argüelles, Toreno, Golfín o Diego Muñoz Torrero- que parten de la idea de soberanía nacional, entendiendo «nación» como un ente ideal y abstracto, distinto de la mera suma de individuos o de provincias que la integraban.

La nación es soberana, no porque el Trono quedase vacante. sino porque ésta era su natural e irrenunciable condición. En el fondo de esta concepción late una idea iusracionalista, basada en las teorías de estado, de naturaleza y pacto social: los individuos, libres e iguales por naturaleza, habían renunciado a parte de sus libertades para constituir un Estado y una Sociedad a través del pacto social, confiriendo la titularidad de la soberanía a la colectividad o nación.

Si la nación es la titular de la soberanía, su ejercicio, por el contrario, debía repartirse entre diversos órganos. De ahí deducían la doctrina de la división de poderes, extraída ante todo de las teorías de Montesquieu.

Sin embargo, al partir del dogma de la soberanía nacional, esta división -separación de poderes- se desvirtúa. Los liberales de Cádiz tienden a considerar que los tres órganos del Estado -Rey, Cortes y Poder Judicial- no se encuentran en una situación de paridad. Las Cortes, en cuanto representantes de la soberanía nacional, aparecían como el verdadero centro político del Estado, asumiendo las más altas funciones de dirección política.

Los liberales de Cádiz entendieron que para instaurar la soberanía nacional es necesario asumir una nueva tarea constituyente. Si la nación era soberana, entre sus atributos se encuentra el de otorgarse una Constitución, en la que se decide, sin ataduras históricas, de gobierno que desearan otorgarse y es por ello por lo que, a la luz de las teorías sobre el poder constituyente de Sieyès, los liberales de Cádiz niegan el concepto realista de «Leyes Fundamentales» y consideraron que a la nación soberana no podrá imponérsele ningún límite en su capacidad de decidir el contenido de la norma fundamental.

Así se constata en el famoso discurso de 24 de septiembre de 1810 de Muñoz Torrero para proponer el principio de soberanía nacional la división de poderes, la inviolabilidad de los diputados. El prestigio adquirido como joven Rector de Salamanca, su condición de liberal moderado hizo que los diputados de Cádiz vieran a Muñoz Torrero como el más idóneo para pronunciar el discurso inaugural y trascendente de aquellas Cortes, donde manifestó: “Los Diputados que componen este Congreso y representan a la Nación española se declaran legítimamente constituidos en Cortes Generales y Extraordinarias, en las que reside la Soberanía Nacional”.

Ello significaba que las Cortes se constituían como un poder revolucionario, auténtico depositario de la soberanía, y que las decisiones aprobadas, tendrían preeminencia sobre el resto de disposiciones de las Instituciones del Estado. Las propuestas de

Muñoz-Torrero fueron discutidas por los diputados en una sesión que se prolongó hasta las 12 de la noche, fueron aprobadas por unanimidad, se publicaron para conocimiento del pueblo y fueron ratificadas por el Consejo de Regencia para darle validez legal y base jurídica para el futuro.

De este modo se considera que Muñoz-Torrero es el padre de la Constitución en tanto que él elaboró e introdujo los conceptos de “Soberanía nacional” y “Nación”. definiendo los principios fundamentales en que había de basarse el proceso revolucionario de Cádiz: Los Diputados allí reunidos, eran auténticos representantes de la Nación española, que se declaraban legalmente constituidos en Cortes Generales y Extraordinarias; que en ellas residía la Soberanía Nacional y, la necesidad y conveniencia de la separación de los poderes, como pilar básico donde se asentase el nuevo edificio constitucional.

Las propuestas formuladas por Muñoz-Torrero serían aprobadas por unanimidad en una larga sesión y tras un acalorado debate entre absolutistas y liberales, siendo publicada para conocimiento del pueblo y ratificada por el Consejo de Regencia para darle validez legal y base jurídica para el futuro.

Para Muñoz Torrero, la “Soberanía Nacional” se hallaba depositada en las Cortes en su calidad de único órgano de representación, y estaba recogido en el Título I, Capítulo I (arts. 2 y 3) del proyecto que él aportó. Lo defendió con verdadera pasión contra los conservadores que arremetían contra él. Dijo que la Soberanía Nacional había residido siempre en la Nación, pero que fue despojada de ella por la actuación arbitraria y despótica de sucesivos Gobiernos tras la implantación de la monarquía absoluta. Los antiguos códigos legales de los diferentes reinos o provincias que componían la Península demostraban que, en otro tiempo, los reyes no habían tenido en exclusiva el poder de gobierno sobre sus vasallos y que sus

actuaciones habían estado sometidas a las normas aprobadas por las Cortes.

Establecido el concepto de “Soberanía nacional”, que Muñoz Torrero lo ligaba al de “Nación”, debía ser libre e independiente. La Nación era para él una e indivisible, se debía alcanzar la unificación legal de todos los territorios que la constituían, que debían ser divididos en provincias, eliminando de esta forma los diferentes fueros existentes en diversos puntos de la nación. Logrando estas premisas previas, se conseguiría un Estado independiente, fuerte y homogéneo. Y también elaboró el Título referente a los derechos individuales, que aparecen formalmente por primera vez durante la discusión del art. 5º del proyecto constitucional, aunque luego vendrían recogidos en los arts. 6, 8, 9, 10 y 247 del texto constitucional. Y fue el principal autor del título XII sobre la reforma eclesiástica y las relaciones con la Iglesia, así como el proponente y férreo defensor de que se aboliera la Inquisición.

El historiador Rafael María de Labra, dice en su libro “Muñoz Torrero y las Cortes de Cádiz”: “...Su carácter y rasgo personal, su intervención en los actos y resoluciones más señaladas de las Cortes gaditanas, su posición o influencia dentro de ellas...le hacen muy superior a todos sus compañeros y le aseguran tal representación que no se puede hablar de aquellas Cortes sin hablar de Muñoz Torrero”.

Frente a estos planteamientos, aparece como posición contraria, la posición de los realistas

Los planteamientos de los realistas -como Inguanzo, Borrull o Alonso Cañedo (a la sazón sobrino de Jovellanos)- discurrían por derroteros bien distintos. La soberanía era un atributo compartido entre el Rey y la nación, formada esta última por la suma de estamentos y provincias. Tal concepción, que negaba por supuesto las teorías iusracionalistas, se basaba en una concepción historicista, próxima al ideario ilustrado del reformismo histórico mencionado en

el primer epígrafe. Para la corriente realista la historia nacional poseía un efecto prescriptivo, de modo que elementos tales como la Monarquía, la religión o los pactos pretéritos suscritos entre el Rey y los estamentos, formaban parte de una «Constitución histórica», materializada en las antiguas Leyes Fundamentales. Precisamente la afirmación de la existencia de esas Leyes Fundamentales, y su carácter inmutable, formaban una segunda nota distintiva de los realistas. Éstos negaban la virtualidad del poder constituyente y, por tanto, la libertad de la nación para trastocar las antiguas Leyes Fundamentales abordando un nuevo proceso constituyente. Según los realistas, las Leyes pretéritas resultaban intangibles, inmodificables. Sólo algunos aspectos podían modificarse, pero siempre a través de un nuevo pacto suscrito entre los dos sujetos cosoberanos -Rey y Cortes-. Hallándose preso el primero en Bayona, resultaba, pues, un sacrilegio el que las Cortes trataran de alterar la forma de gobierno histórica.

Los realistas apenas admitían algunas «perfecciones» que podrían realizar las Cortes sobre dicha Constitución histórica. En realidad, estas reformas pretendían reforzar lo que los realistas consideraban que ya había existido en España: una forma de gobierno consistente en una Monarquía moderada o templada. Se trataba de un modelo de equilibrio constitucional conforme al cual el Monarca dirigía el Estado con la colaboración de las Cortes; dicho en otros términos, la dirección política la asumían los dos cosoberanos. Según los realistas, este modelo constitucional propuesto no resultaba novedoso, sino que hundía sus raíces en la historia nacional, en especial la castellana. En este sentido, los realistas equiparaban un gobierno mixto -que, supuestamente había existido en Castilla- con la división de poderes; del mismo modo identificaban clásica la reunión por estamentos en Cortes, con el bicameralismo de corte británico, por mucho que las diferencias entre ambos resultaban más que evidentes.

En el proceso constituyente la opción liberal, mayoritaria, logró imponer sus posturas casi a lo largo de todo el articulado. La declaración de soberanía nacional, la posibilidad de la Nación de alterar a su voluntad la forma de gobierno, la posición preeminente de las Cortes, entre otros muchos factores que, a continuación, se exponen, muestran la ideología liberal subyacente.

3.6. La Soberanía y la Representación Popular: La Soberanía Nacional

El segundo de los principios del constitucionalismo moderno es el de la soberanía nacional aparecido como un concepto ideológico surgido de la teoría política liberal, que puede remontarse a Locke y Montesquieu según el cual la soberanía pertenece a la nación, una entidad abstracta y única, vinculada normalmente a un espacio físico a la que pertenecen los ciudadanos presentes tanto como los pasados y futuros, y se define como superior a los individuos que la componen.

En los debates previos, fue notable la aportación del abate Sieyès con su obra “Qué es el Tercer Estado”, en que identificaba los intereses de éste con los de la nación francesa. La formulación que se acuñó en el artículo 3 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano determinó que "toda soberanía reside esencialmente en la nación". Así la soberanía nacional se concebirá como una, indivisible e inalienable, que no puede confundirse con los individuos que la conforman.

En los Estados Unidos de América, las Asambleas coloniales asumieron la soberanía, y fueron los representantes de los nuevos Estados los que adoptaron la Constitución de 1787. En Francia, en cambio, la soberanía se trasladó del Monarca al pueblo y a la Nación; y a través de la idea de la soberanía del pueblo, surgieron todas las bases de la democracia y el republicanismo. Por ello, todas las Constituciones revolucionarias francesas de 1791, 1793, 1795, 1799 e

incluso, las reformas imperiales de 1802 y 1804, fueron todas sometidas a aprobación popular, hasta que con la Restauración de la Monarquía en 1814, la Constitución pasó a ser de nuevo una Carta otorgada por el Monarca, en ese caso por Luis XVIII.

De este modo se consagraba el concepto de Soberanía Nacional surgido para privar al Rey de su soberanía que quedaba como personificación del pueblo reemplazando al Rey en su ejercicio. El principio de la soberanía que se atribuida a la Nación y no al Rey o a los gobernantes, estaría presente en el texto de la Declaración de los Derecho del Hombre y del Ciudadano, según la cual “El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer autoridad alguna que no emane de ella expresamente” (Art. 3).

En España, la Constitución de Cádiz de 1812, para asegurar la representación popular, seguiría el esquema inicial francés configurando a las Cortes conforme a la fórmula unicameral, lo cual ya se había dispuesto en el Reglamento de elecciones dictado por la Junta Central Gubernativa del Reino el 6 de octubre de 1809 para la elección misma de las Cortes, en las cuales la nobleza no encontró representación alguna.

De acuerdo con esos mismos principios, la soberanía nacional, como poder supremo de una comunidad, también pasó en España del Monarca, quién antes la ejercía por la gracia de Dios, a la Nación española, con lo que se puso fin al principio de la soberanía absoluta del Monarca que había sido lo característico del Antiguo Régimen.

La Constitución de 1812 fue así decretada por “las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española”, es decir, por el cuerpo representativo de la Nación, declarándose expresamente en ella que “la soberanía reside esencialmente en la Nación” (art. 3). De ello derivó, entonces, que el Rey tuviera un poder delegado, por la nación conforme a la Constitución, habiendo dejado de ser sólo Rey “por la

gracia de Dios”, comenzando además a serlo por “la Constitución” (art. 173).

En todo caso, como consecuencia del principio de la representación, la Constitución de Cádiz incorporó por primera vez en la historia constitucional de España un completo sistema de elecciones libres para la elección de los diputados a las Cortes, con una regulación detallada del sistema electoral. Se estableció, para ello, un procedimiento electoral indirecto, en cuatro fases de elección de compromisarios de parroquias, de partido y de provincia; conforme al cual estos últimos elegían los diputados a Cortes. El sufragio fue limitado, reservado a los hombres y censatario respecto de los elegidos.

3.7. El principio de Separación de Poderes en la Constitución de 1812

El cuarto principio del constitucionalismo moderno, pertenece a la misma idea de limitación al poder del Estado para garantizar la libertad de los ciudadanos. Este principio encuentra antecedentes en la Grecia clásica y sobretodo en Platón quién en su obra “Las Leyes” comienza a tratar los principios de esta doctrina y en el pensamiento de Aristóteles que distingue las tres partes que debe haber en todo gobierno. Pero sobretodo la teoría de la separación de poderes se hace común en diversos pensadores de los siglos XVII y XVIII, como Hobbes, Locke, quién señalo que la potestad suprema no podía permanecer en manos de una persona subrayando la separación de poderes y su equilibrio Alexander Hamilton, Jean-Jacques Rousseau y sobretodo Montesquieu, quién en el “Espíritu de las Leyes” distingue claramente los poderes legislativo ejecutivo y judicial que constituyen los pilares del estado de derecho manifestando la necesidad de evitar el abuso de el poder y promoviendo por tanto su separación.

Su consagración constitucional también deriva de las Revoluciones francesa y americana.

El principio, por supuesto, se recogió aún con mayor fuerza en el sistema constitucional que resultó del proceso revolucionario francés, donde se le agregaron, como elementos adicionales, el principio de la supremacía del Legislador resultado de la consideración de la ley como expresión de voluntad general; y el de la prohibición a los jueces de interferir en cualquier forma en el ejercicio de las funciones legislativas y administrativas.

El principio de la separación de poderes comenzó a tener aplicación en España, en el Decreto dictado por las Cortes de Cádiz el mismo día de su constitución, el 24 de septiembre de 1810, que partía del supuesto de que no convenía “queden reunidos el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judiciario”, declarando entonces que las propias Cortes, que venían de arrogarse la soberanía nacional, “se reservan el ejercicio del poder legislativo en toda su extensión”. En cuanto al Poder Ejecutivo, el mismo, en ausencia del Rey, se delegó al Consejo de Regencia; y en cuanto al Poder Judicial, las Cortes declararon que confirmaban “por ahora a todos los tribunales y justicias establecidas en el reino, para que continúen administrando justicia según las leyes”.

Conforme al mismo, las potestades estatales se distribuyeron así: la potestad de hacer las leyes se atribuyó a las Cortes con el Rey (art.15); la potestad de hacer ejecutar las leyes, al Rey (art. 16); y la potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales, a los tribunales (art. 17). Esto último se ratificó en el artículo 242, al disponer que “La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los tribunales.”

3.8. La Reforma de la Justicia

El quinto principio del constitucionalismo que derivó de las Revoluciones americana y francesa se refiere al Poder Judicial y a la idea misma de la función de impartir justicia. El Poder judicial se configura como un poder del Estado que, de conformidad con el ordenamiento jurídico, es el encargado de administrar justicia en la sociedad, mediante la aplicación de las normas jurídicas en la resolución de conflictos.

Montesquieu compuso su teoría de la División de Poderes después de un viaje a Inglaterra en donde interpretó que un poder judicial independiente puede ser un freno eficaz del poder ejecutivo. Bajo esta separación de poderes, nace el llamado Estado de Derecho, en el cual los poderes públicos están igualmente sometidos al imperio de la ley. El Poder judicial debe ser independiente para poder someter a los restantes poderes, en especial el ejecutivo, cuando estos contravengan el ordenamiento jurídico y convertirse en el encargado de hacer efectivo la idea del Derecho como elemento regulador de la vida social.

La Constitución de Cádiz establecería específicamente la autonomía del poder judicial al garantizarse a los magistrados y jueces que “no podrán ser depuestos de sus destinos, sean temporales o perpetuos, sino por causa legalmente probada y sentenciada; ni suspendidos, sino por acusación legalmente intentada” (art. 252). Por otra parte, la Constitución dispuso que “ni las Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún caso las funciones judiciales, avocar causas pendientes, ni mandar abrir los juicios fenecidos” (art. 243); y los tribunales “no podrán ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado (art. 245). Ello conllevaba la prohibición a los tribunales de “suspender la ejecución de las leyes, ni hacer reglamento alguno para la administración de justicia” (art. 246).

Por otra parte, en relación con las funciones del Tribunal Supremo de Justicia (art. 259) para garantizar la Constitución, solo se

le atribuyó competencia en el artículo 261, para “oír las dudas de los demás tribunales sobre la inteligencia de alguna ley, y consultar sobre ellas al Rey con los fundamentos que hubiere, para que promueva la conveniente declaración en las Cortes”.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

(1) La Constitución española de 1812 habría de convertirse en el hito democrático de la primera mitad del S.XIX que trascendería a las constituciones europeas y americanas de la época contemporánea impactando en los orígenes constitucionales y parlamentarios de una gran parte de los Estados. La Constitución de Cádiz nace en un tiempo histórico concreto el mismo que ha alumbrado las revoluciones americana y francesa y sus grandes Constituciones que asimismo trascienden a la historia contemporánea, pero ante todo es deudora del pensamiento filosófico y político moderno que arranca del pensamiento humanista y renacentista, de la secularización, de la superación del absolutismo, del ascenso de la burguesía y de la libertad convertida por entonces en el objetivo principal de la reflexión filosófica. El liberalismo se convierte en la gran fuerza que sostiene el proceso revolucionario que da origen a la transformación del antiguo régimen e inspira la organización del Estado de derecho y la revolución liberal. Parece necesario por tanto fundamentar las ideas y los principios filosóficos, jurídicos y políticos que enmarcan aquellos hechos y consecuentemente la génesis constitucional de los principios y valores que informaron la Constitución de Cádiz y que en gran medida informan nuestro mundo contemporáneo.

(2) A finales del año 1810, cuando la Guerra de la Independencia alcanzaba ya proporciones dramáticas en un país en su mayoría ocupado por las fuerzas napoleónicas, el Diputado liberal Antonio Oliveros propuso a las Cortes Generales que se habían convocado en la ciudad de Cadiz el nombramiento de la comisión encargada de redactar un proyecto de constitución política de la monarquía. Las Cortes aprobarían esta propuesta.

(3) Formaban parte de las Cortes personas muy diversas reunidas para realizar aquella importante labor, Diputados que como

se ha dicho tantas veces no pertenecían a partidos políticos pues estos no estaban aun organizados pero que pudieran agruparse en diferentes tendencias constitucionales de las que hemos dado cuenta en el Anexo de la presente obra, fundamentalmente Diputados realistas que tenían como fundamentos doctrinales el escolasticismo, el historicismo nacionalista y que en alguna medida planteaba el respeto a la Constitución histórica de España como esencia de las leyes fundamentales tal como expondría Jovellanos en su “*Memoria en Defensa de la Junta Central*”. Estos Diputados eran contrarios al pensamiento revolucionario francés y preferentemente planteaban una reforma.

Asimilados a estos Diputados realistas podrían sumarse los Diputados que hemos dado en llamar absolutistas, contrarios claramente al principio de soberanía nacional y consecuentemente de no realizar una ruptura con el pasado sino de plantear un afán continuista de las antiguas Cortes históricas. Muchos de ellos fueron defensores de la Inquisición y muchos de ellos se unirían a la reacción absolutista de 1814.

(4) Frente a estas posturas conservadora y absolutistas aparecen los considerados diputados liberales cuyos principios serían fundamentalmente los defendidos por los constituyentes americanos y por los revolucionarios franceses de 1789 que defendían fundamentalmente la soberanía nacional y la división de poderes en muchos casos fundamentados en sus ideas sobre la libertad y la igualdad en el iusnaturalismo racionalista: Locke, Rousseau, Montesquieu y los enciclopedistas y en algunos casos en la neoescolástica española y el positivismo de Bentham. En algunos casos se aludía a la cercanía de su pensamiento con los valores que sustentaban la Revolución americana, a su vez inspirados en el iusnaturalismo racionalista.

Por todo ello parece evidente, la necesidad de vincular la dependencia de aquellas ideas mantenidas por los constituyentes de Cádiz , influencias que aparecen significadas directamente en la obra de Antonio Alcalá Galiano “Indole de la Revolución en España en 1808” al manifestar que “Cuando empezó a remontarse la fama de Voltaire y de Montesquieu, cuando voló después hasta igualarse con la de ambos la de Rousseau, y cuando otros inferiores ingenios de la escuela llamada filosófica consiguieron una nombradía que posteriormente han perdido, no faltaban españoles que admirasen y estudiaran tan celebres modelos.” Efectivamente aquellos modelos al que alude Alcalá Galiano estaban ya en boca de algunas de las personalidades más significadas de la época y desde luego de los más significados liberales constituyentes de Cádiz pues ni la Inquisición que trataba de impedir la difusión de aquellas ideas ni las autoridades al servicio del infante Carlos III y de sus antecesores pudieron evitarlo.

Es por ello por lo que no puede entenderse la clara defensa de unos principios y valores sin acudir a sus fuentes originales y singularmente a la construcción y fundamentación de la filosofía política que va a alumbrar el liberalismo contemporáneo.

(5) Entre los filósofos de la época moderna, suele considerarse a Thomas Hobbes como el fundador del liberalismo, destacándose que en su obra define la libertad de forma negativa y justifica la coacción legítima del Estado en la protección de la libertad dándole una preeminencia ética y ontológica a la sociedad civil frente al Estado. En este sentido se destaca de Hobbes su defensa implícita e indirecta del derecho individual y del individualismo metodológico aunque por otra parte parezca legitimar un Estado autoritario en el que la búsqueda de la seguridad y el orden es más importante que las libertades individuales. Las ideas de Hobbes son conocidas y en alguna medida rechazadas. Frente a Hobbes, Jovellanos afirmará que

el fin del hombre, ínsito a su naturaleza, es el amor; un fin trascendente, no inmanente y con tal afirmación Jovellanos se oponía a Hobbes y a su afirmación de la iniquidad de la especie humana; una maldad congénita que fundamentaría el exacerbado individualismo del inglés. Jovellanos se opone además abiertamente a las doctrinas contractualistas que subyacen al constitucionalismo liberal, provenientes precisamente de Hobbes, el teorizador del absolutismo.

(6) Padre del empirismo y del liberalismo moderno, John Locke desarrolla una teoría contractualista de la sociedad y del Estado, que anticipa los principios del liberalismo: la idea de una libertad y una igualdad natural de los hombres, el derecho del individuo a la vida, a la libertad, a la propiedad, la tolerancia religiosa, la supremacía de la sociedad sobre la política, la supremacía del derecho, la división de poderes entre legislativo y ejecutivo, y el derecho de resistencia de los ciudadanos contra un gobierno injusto, así como el gobierno por consentimiento dentro de unos fines y unos medios delimitados para ejercer el poder público. El pensamiento de John Locke tuvo fuerte influencia en los pensadores políticos españoles de finales del siglo XVIII, como Jovellanos, Foronda, Cabarrus, Arroyal...: La trilogía de Locke de libertad, propiedad y seguridad fue comentada por Foronda; en el epistolario de Jovellanos aparece con frecuencia referencias a Locke. La soberanía del pueblo y la separación de poderes, más flexible que en Montesquieu, fueron citas frecuentes. Locke estaría presente además en el constitucionalismo americano, de cuyo conocimiento hicieron gala los diputados de Cádiz"

(7) La recepción de las ideas de Locke es amplísima. El Conde de Cabarrús, en sus cartas a Jovellanos, se hace eco de la doctrina del pacto social expuesta por Locke y recogida y ampliada por Rousseau. El acto de reunirse para protegerse contra la agresión origina el pacto social. En él no debe tener primacía una de las partes. Si se quiere

perpetuar y reafirmar la monarquía sólo existe un medio: reconciliarla con el interés y la voluntad general. En general, Jovellanos adopta cuanto de constructivo existe en la teoría de Locke, rechazando toda solución violenta de las cuestiones sociales. Locke había establecido la separación de poderes. Jovellanos la acepta, y esto se manifiesta muy claro cuando escribe a Lord Holland refiriéndose a las Cortes de Cádiz; «Han puesto el poder ejecutivo, ya antes muy débil por su naturaleza y falta de apoyo, en absoluta dependencia del legislativo». Palabras que habría suscrito Locke.

(8) Consideramos la aportación de David Hume como precursor de la ideología liberal. Hume expresa su desconfianza en los intentos de reformar la sociedad y aconseja a los pueblos que no se revelen contra sus gobernantes excepto en casos de tiranía flagrante. Jovellanos asume la posición de David Hume con respecto al proceso constituyente. Reformar sin revolución, sin rupturas, sin quiebras, lo que supone acercarse al liberalismo de corte historicista. Las críticas de Jovellanos al proceso consituyente reproducen prácticamente las que había vertido David Hume a propósito de la Revolución inglesa de 1688 y asimismo, se constata la influencia con las posiciones de Edmund Burke planteadas en sus reflexiones sobre la Revolución francesa.

(9) En las aportaciones filosóficas que planteamos se encuentra también la referida a la obra de Jeremy Bentham considerada como el padre del utilitarismo que fundamenta asimismo el liberalismo. Bentham, autor de *Principios de la ciencia social o de las ciencias morales y políticas*, reformador, codificador e implacable crítico de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de los Revolucionarios Franceses escribía al Barón Holland una larga carta el 13 de noviembre de 1808 con el fin de obtener permiso para viajar a Méjico. La relación entre Bentham y Lord Holland es importante dado el gran ascendiente de Holland en el mundo político e intelectual que

rodeaba a los constituyentes de Cádiz. Años después se publicaría una obra de Bentham titulada consejos que dirige a las Cortes y al pueblo español y también una carta de Bentham al Conde de Toreno sobre el proyecto de Código Penal presentado a las Cortes. Bentham consideraba la Constitución de Cádiz preferible a la británica: «¡Pueblo de Europa! Si has dado gracias al Altísimo por haber puesto ante tus ojos el Código Constitucional español, da también gracias por no haber puesto ante ti la visión del código inglés», *Rid yourselves of Ultramarina* (1820).

(10) Consideramos también el Liberalismo conservador de Edmund Burke, considerado como padre de los viejos liberales británicos. Burke ha viajado a París en 1773 y ha conocido a los enciclopedistas. Burke se muestra contrario acérrimo a la Revolución francesa y considera que la libertad está en relación directa con la disposición a atar con cadenas morales sus apetitos, la libertad debe ser limitada para ser poseída. Recordemos como un paso de sus ideas a los constituyentes de Cádiz el conocimiento que se tuvo de su obra. Blanco-White en uno de los tomos de el Español, el tomo V publicado el 5 de octubre de 1812 se manifiesta gran admirador de Burke cuyas obras elogia en diversas ocasiones calificándolas de profundas y elocuentes.

(11) En gran medida estas son las fuentes ideológicas de la Revolución Norteamericana, el liberalismo democrático inglés y las aportaciones de la Revolución Francesa. John Adams se convierte en un firme defensor de las libertades que el considera como un derecho natural de los colonos, Thomas Jefferson justifica la independencia de los Estados Unidos en la Declaración de Independencia que recibe la influencia de la obra de John Locke, George Mason realiza con la ayuda de James Madison los borradores de la Declaración de Virginia. Los constituyentes americanos beben directamente las corrientes intelectuales de la época, entre ellas del liberalismo de John Locke, la

teoría del contrato de gobierno de Tomas Jobbes y la doctrina de la división de poderes de Montesquieu. Finalmente Tocqueville planteará la relación entre igualdad y libertad para afrontar la relación entre democracia y liberalismo.

(12) El pensamiento filosófico y político de los enciclopedistas franceses la gran idea determinante del contrato social de Jean Jacques Rousseau, su estudio de las desigualdades y su concepción de la libertad y de la igualdad serán determinantes en la evolución filosófica y política que conduce a la revolución francesa y a la transformación de las mentalidades superadoras del antiguo régimen. En las nuevas ideas ocupa un lugar excepcional Montesquieu y fundamentalmente su obra “El espíritu de las leyes” (1748) donde aborda de manera mediata la democracia, la libertad política y la separación de poderes figurada como una distribución de los poderes del Estado entre diferentes grupos sociales más que como una división de los poderes estatales. El absolutismo regio es finalmente arrumbado socavando las bases del sistema la Revolución Francesa que alumbra como elementos fundamentales un lema, libertad, igualdad y fraternidad y nuevos principios. La soberanía nacional, la nación y el poder constituyente.

(13) Elemento finalmente decisivo de la transformación filosófica, jurídica y política será la positivación de los derechos humanos realizada a través de las Declaraciones de la Independencia, de la Declaración de Derechos del buen pueblo de Virginia y de la Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional francesa, hechos relevantes que tendrán un carácter decisivo y fundamental en la transformación del nuevo tiempo contemporáneo y la consecuente constitución de un nuevo orden social político y jurídico, constituyendo el triunfo y la culminación del iusnaturalismo nacionalista de los siglos preferentes.

(14) Todo este legado pasará a constituirse en la fundamentación de la Constitución de Cádiz de 1812 en la que necesariamente los acontecimientos históricos serán decisivos para la puesta en marcha del proceso que culminará con la realización de dicha Constitución. Aquellos sucesos se enmarcan dentro de lo que se denomina la Guerra de Independencia. Puede decirse que en España no hubo entonces una revolución similar a la que sucedió en Estados Unidos y mucho menos similar a la Revolución Francesa pero muchos consideran que sí se produjo una verdadera revolución que daría paso a un nuevo proyecto histórico para España, cuya gestación se produce precisamente a través de la Constitución de 1812.

(15) Paralelamente a los hechos militares, al desarrollo de la Guerra de Independencia se va a producir todo un desarrollo del proceso jurídico que conduce a Cádiz. Elemento fundamental de este proceso es el intento de crear un orden constitucional que se plasma en la llamada Constitución de Bayona. Napoleón ha creado ya un modelo constitucional, como se constata con la Constitución de la República Bátava de 1801, la Constitución de la República italiana de 1802, la constitución del Ducado de Varsovia de 1807 y la Constitución del reino de Westfalia de 1807. El propio Napoleón será el que ponga en marcha personalmente el primer proyecto. Los españoles que están en Bayona tienen diversas actitudes, son conformistas, asimilistas y reformadores, y pueden dividirse entre absolutistas (Ettenhard y Salinas), partidarios del despotismo ilustrado (Azanza), liberales (Ranz Romanillos) y anglófilos (Luis Marcelino Pereyra). Bayona no será una Constitución, es más una Carta Otorgada y un Estatuto que una Constitución, pero en todo caso fue una alternativa constitucional que sienta un precedente y que como diría Alberto Lista inaugura la palabra constitución. Es curioso considerar que dos diputados realistas Ignacio Martínez de Vilella, diputado por Aragón y de pensamiento absolutista y Cristóbal

Góngora Fernández Delgado, diputado por Granada y afrancesado, habían firmado la Constitución de Bayona y luego firmarían la Constitución de Cádiz.

(16) La realización de las Cortes de Cádiz es la historia de un largo proceso que comienza cuando el propio Fernando VII el 5 de mayo de 1808 firma un decreto por el que pide que se convoquen Cortes. Surgen luego las Juntas Provinciales, que se unen el 25 de septiembre de 1808 en una Junta Suprema Central presidida por el Conde de Floridablanca, el territorio español y la junta central se instala en Sevilla. La idea de convocar unas Cortes nacionales va ganando terreno y da paso al importante Decreto de 24 de septiembre de 1810 que declara legítimamente constituidas las Cortes y manifiesta que en ellas reside la soberanía nacional. Este Decreto es sin duda el marco fundamental que anticipa la esencia de la Constitución. En el se consagra la soberanía nacional y la división de poderes. La soberanía nacional al manifestar que los diputados que componen este Congreso, y que representa la nación española, se declara legítimamente constituidos en cortes generales extraordinarias, y que reside en ellas la soberanía nacional. Ellos se incluye en la fórmula de juramento que a de hacer el Consejo de Regencia: ¿Reconoceís la soberanía de la nación representada por los diputados de estas Cortes generales y extraordinarias? La división de poderes se consagran en la siguiente frase del Decreto: “ No conviniendo queden reunidos el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, declaran las Cortes Generales y extraordinarias que se reservan el ejercicio del poder legislativo en toda su extensión”.

(17) La llamada Comisión de Constitución creada el 24 de septiembre de 1810 integraría personalidades tan relevantes como Arguelles y Muñoz Torrero, los líderes del liberalismo español. Las Cortes empezarán su tarea legislativa el mismo 24 de septiembre, si bien habría que esperar a diciembre de 1810 cuando se planteó

formalmente que las Cortes realizarían un proceso constituyente. La Comisión de Constitución celebraría su primera sesión el 28 de marzo de 1811. Desde el 23 de marzo se irían sucediendo los debates y la aprobación sucesiva de los artículos del proyecto. En total aparecerán 300 diputados, 56 propietarios y 46 suplentes, con un grupo importante de religiosos, representantes del ejército, de profesiones jurídicas, catedráticos, comerciantes y hacendados. La ideología de estos diputados, conservadora, absolutista, liberal, moderada, realista, anti-liberal, aparece reflejada en el apéndice que presentamos en esta misma obra.

(18) Martínez Marina aparece como el historiador más relevante de su tiempo en el fundamento del constitucionalismo a la tradición histórica nacional y según Jovellanos, la mejor fuente de información de cual ha sido la Constitución histórica de España. Su correspondencia con Jovellanos, quien lee con admiración la obra de Marina, es reveladora por su valor pragmático e instrumental aun cuando las Cortes de Cádiz alumbran un escenario enormemente diferenciado del existente en el Antiguo Régimen.

(19) La labor de Jovellanos sería decisiva en la realización de las Cortes de Cádiz. Jovellanos es el alma de la Junta Central, cuya actuación es determinante. La Junta Central es la protagonista inicial de una alternativa constitucional patriótica. La labor de la Junta Central tras expedir el Decreto del 22 de mayo de 1809 por el que se convocan Cortes, es la de una institución convertida en el principal actor político del proceso y la verdadera responsable de la iniciativa de la elaboración constitucional y ello justifica las presiones que acaban por votar al órgano y decidirle a formar un Consejo de Regencia. Jovellanos es un verdadero ilustrado conoce bien la literatura filosófica, política y jurídica de su tiempo, conoce la política de Aristóteles, conoce el Leviathan de Hobbes y el Tratado Teológico-Político de Baruch Espinoza, conoce los Ensayos de David Hume,

conoce el Discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres de Rousseau y conoce y es claro seguidor de Montesquieu. Jovellanos menciona las obras completas de Rousseau desde 1794. Obras que están prohibidas por la Inquisición. Ha leído también a Voltaire, Grotius para quien tiene en gran estima, *De jure belli ac pacis* estaba prohibida por la Inquisición. Desde luego a leído a Machiavelli en italiano aunque su obra estaba prohibida y lo califica de “pernicioso maestro” Lee la Enciclopedia Británica; Lee a Bossuet, Condorcet, a d’Alembert, Mirabeau, d’Aguesseau, Cambacères, Domat, Beccaria, Wolf, Blackstone, de Adam Smith lee la Riqueza de las Naciones también prohibida por la Inquisición. Descartes, Goudin, Helvetius, Francis Bacon y desde luego el Ensayo de John Locke juzgando en su memoria sobre la Educación pública “ muy perspicua y sólida” y lee también de Locke los dos Tratados de Gobierno. Lee la Constitución Francesa del año tercero la lee en 6 días y la encuentra admirable. Lee la Constitución de Inglaterra de Jean Louis de Lolme. De todo ello da cuenta Jean-Pierre Clement en su obra “Las lecturas de Jovellanos”.

(20) En el pensamiento político y constitucional de Jovellanos tiene especial relevancia la figura de Lord Holland. Las reuniones de Lord Holland y Jovellanos durante su estancia en Sevilla así como la correspondencia que entre ellos mantuvieron en el periodo 1808- 1811 es de una importancia extraordinaria. Hemos de recordar como Lord Holland y su colaborador John Allen redactaron para Jovellanos dos propuestas para la organización de las Cortes en las que se planteaba ya una modificación del modelo británico para combinarlo con las tradiciones españolas. No fue por tanto la enseñanza de un modelo británico que fue determinante a juicio de los expertos. Ni tan solo la influencia de Lord Holland en Jovellanos y en la formación de liberalismo español, si no su propia actuación basada en su conocimiento de la situación española y de la arquitectura política española y su innegable influencia en el pensamiento de Jovellanos

hasta el punto de sugerir un camino de actuación. Un hombre al que Jovellanos califica en una carta de Sevilla de 11 de febrero de 1809 como un amigo de España.

(21) La Memoria en defensa de la Junta Central realizada por Jovellanos no solo pretende restaurar el valor histórico, político y jurídico de su actuación si no reparar el honor de la Junta Central frente a los ataques dirigidos desde el Consejo y desde las propias Juntas. Sin la Memoria en defensa de la Junta Central el nombre de Jovellanos hubiera quedado manchado acusado de haber usurpado el poder regio, acusación todavía más sucia al mezclar en su actuación la posible corrupción de haberse apropiado de las riquezas. La Memoria salva el nombre de Jovellanos y consecuentemente su actuación al frente de un organismo capital para la final consecución de la realización de una Constitución liberal para España en un marco político y jurídico lleno de dificultades.

(22) Los mas significados constituyentes asumen indudablemente el legado filosófico y político anterior: Álvaro Flórez Estrada, es conocedor de Rousseau, Montesquieu y Mably; Manuel José Quintana, llamado por Capmany “el patriarca del liberalismo” está influido enormemente por Lord Holland, en la defensa de la causa patriótica y la libertad política; Ranz Romanillos, había sido el hombre que más influye en la creación de la Constitución de Bayona y nuevamente uno de los más influyentes en la Constitución de Cádiz para la que toma como referencia la Constitución de los Estados Unidos de 1787 y la francesa de 1791; y Jose María Blanco-White, quien considera nefasta la filosófica política de la Revolución francesa, discrepando profundamente de los constituyentes gaditanos, entendiendo que es la monarquía inglesa en un proceso innegable de parlamentarización, el mejor de los modelos.

(23) Agustín de Arguelles que participaría en 187 debates y fue sin duda el Diputado que mas participó seria consecuentemente

el más renombrado parlamentario al servicio del ideario político liberal. Arguelles ha realizado una estancia en Londres donde se ha formado en el constitucionalismo británico y recibe también una gran influencia de Lord Holland, situándose a la cabeza de los liberales. El Discurso Preliminar a la Constitución de 1812 constituye el verdadero preámbulo de la Constitución y es realmente una exposición ajustada al texto del contenido sin más punto polémico que la referencia al fundamento histórico. Esta referencia se encuentra en la famosa frase con la que se inicia el Discurso: “ Nada ofrece la Comisión en su proyecto que no se halle consignado del modo más auténtico solemne en los diferentes cuerpos de la nación española...”. Sobre esta frase mantenemos la postura del profesor Sánchez Agesta para quien no es más que una concesión literaria o histórica al pensamiento y a la obra de Martínez Marina, pero que nada se corresponde con la realidad de la propia Constitución y puede considerarse una referencia hipócrita para mejor disimular un propósito realmente revolucionario.

(24) Destacado artífice de la Constitución de 1812 será también Diego Muñoz Torrero, uno de los mayores defensores de la libertad de imprenta que será el primer diputado en intervenir haciendo diversas proposiciones de carácter liberal, tal como reproduce el diario de sesiones al defender que en las Cortes reside la soberanía que convenía dividir los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial y en la defensa de la libertad y singularmente de la libertad de imprenta y la abolición del santo oficio. Muñoz Torrero se dedica en cuerpo y alma a la tarea parlamentaria y será asimismo uno de los grandes defensores de la soberanía nacional manifestando que siempre había sido la nación su depositaria aunque luego fuera despojada de ella por la actuación despótica y arbitraia de los sucesivos gobiernos tras la implantación de la monarquía absoluta.

(25) Necesariamente habremos de considerar algunos constituyentes convertidos en personalidades relevantes como Isidoro

de Antillón, quién con el poeta Quintana tan ardorosamente contribuyó a difundir las opiniones liberales en el “Semanario patriótico”, destacado liberal y progresista que pagaría la enemiga de los antireformistas como atentado; José María Queipo de Llano, conde de Toreno que participa notablemente en las Cortes interviniendo a favor de la libertad de imprenta, de la soberanía nacional, de la desamortización de bienes; el liberal y reformista Juan Nicasio Gallego y Hernández de Crespo destacado ya en la elaboración del proyecto de libertad de imprenta; Antonio Capmany personaje singular que jugará un importante papel de equilibrio; los diputados de origen americano como Jose Manuel Guridi y Alcocer que defenderá la abolición de la Inquisición y la libertad de prensa. Diputados conservadores como Pedro Inganzo y Ribero dotado de gran elocuencia para defender posiciones reaccionarias.

(26) Diputados de Cádiz, más de 300 personajes de muy diversas ideologías, absolutistas, conservadores, realistas, antiliberales y desde luego liberales, una tendencia que prevalece aunque no haya partido liberal en sentido estricto ni siquiera todos los liberales defienden las mismas posiciones. Importantes personajes, algunos con una sólida formación intelectual hombres muchos de ellos con una trayectoria importante, que tienen distintos principios pero que acaban compartiendo posiciones no siempre confrontadas, liberales y moderados, destacados constituyentes en un tiempo de reforma. Influidos también por diversos modelos constitucionales pero con la necesidad de alejarse de las ideas de los revolucionarios franceses, especialmente de los jacobinos.

(27) El gran debate que se produce en los comienzos de la España contemporánea es el debate sobre la libertad. Todos los esfuerzos que se están produciendo y el impulso de los constituyentes de Cádiz no son sino consecuencia del entusiasmo por una libertad política. Los constituyentes reciben las ideas de libertad popularizadas

por Hobbes y Locke, las ideas de libertad natural y de libertad civil la del desarrollo de la libertad en Bentham, la idea de libertad natural en Rousseau y la idea de libertad política en Montesquieu. La doctrina política de la época formula disertaciones sobre la libertad, en las obras de Jose de Torres Flores, Joaquin Lorenzo Villanueva y Martines Marina y en pensadores cercanos a los constituyentes de Cádiz como José Canga Arguelles y Alvaro Florez Estrada.

(28) La libertad en la Constitución de Cádiz estará presente en el reconocimiento de la soberanía nacional considerado como el primer pilar de la libertad. Los tres artículos primeros de la Constitución son rotundos en su formulación. En Cádiz se encuentra asimismo la separación de poderes que parte de ella nuclear del liberalismo de que la separación de poderes es básicamente la diferenciación entre quien hace las leyes, quienes ejecuta y que los aplica. Otro pilar de la libertad en la Constitución de Cádiz es la declaración de derechos. Ciertamente de la Constitución de 1812 carece de una parte dogmática o catálogo de derechos pero encontramos en ella el artículo 4 que es una invocación la obligación de la nación de conservar y proteger con leyes sabias justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos.

(29) Afrontar la libertad suponía abolir la esclavitud. El pensamiento de los enciclopedistas es claro en su oposición al esclavismo Diderot, Rousseau, Montesquieu sobre la base de los epístolas de San Pedro, Conde Orcet, el propio Robbespierre manifiestan los abusos que supone la esclavitud. Gran Bretaña e Inglaterra prohibirán la trata de esclavos y aún antes tiene raíces el movimiento abolicionista en los Estados Unidos. Las intervenciones de los constituyentes de Cádiz son asimismo muy claras Domingo Garcia Quintana, Esteban Palacios, José Miguel Guridi Alcocer, Arguelles, Juan Nicassio Gallego, Mejía Lequerica, Andres Jauregui e Isidoro de Antillón son defensores de suprimir la esclavitud. El

artículo 5º de la Constitución dirá que son españoles todos los hombres libres nacidos y avecindados en las Españas y el artículo 22 deja abierta a todos los españoles la condición de ciudadanos.

(30) Los constituyentes de Cádiz asumen como primera tarea la defensa de la libertad de opinión, de expresión y de prensa. Álvaro Flórez Estrada, considerado como un exponente del radicalismo liberal y también defensor de la Revolución Francesa, se ha adelantado con sus reflexiones sobre la libertad de imprenta, tomando el relevo Isidoro de Antillón, Diego Muñoz Torrero, Juan Nicasio Gallego y José Mejía de Lequerica siendo el principal argumento el que la libertad de imprenta es uno de los derechos del hombre, es asimismo el medio para ilustrar al pueblo y esta también necesaria para que España evite en el futuro los errores del pasado y enderece el curso decadente de su historia. Así se llega al Decreto de 10 de noviembre de 1810 y a su consagración en la Constitución.

(31) La igualdad será otros de los grandes principios incorporados a la Constitución de Cádiz. El derecho a la igualdad se configura como aquel derecho inherente que tienen todos los seres humanos a ser reconocidos como iguales ante la ley y de disfrutar de todos los demás derechos otorgados de manera incondicional, es decir, sin discriminación por motivos de nacionalidad, raza, creencias o cualquier otro motivo. Éste derecho se consagró en la Revolución Francesa, junto con la fraternidad y la libertad, bajo la inspiración de los humanistas y de los ilustrados. Los constituyentes de Cádiz se plantearon la defensa del principio de igualdad que suponía acabar con una situación de inferioridad de unos ciudadanos frente a otros o en sus propias palabras de una situación en la que el vasallo aparece como la víctima despótica de la estructura social del antiguo régimen frente a la cual se enarbola la bandera del ciudadano y sus derechos. Igualdad civil e igualdad política consagradas en los primeros artículos de la Constitución y asimismo igualdad jurisdiccional.

(32) No existe en la Constitución de Cádiz una Declaración de Derechos ni tampoco una clausula genérica de la igualdad constituida como el gran símbolo de la superación del antiguo régimen ni una declaración e libertad de conciencia como existe en la declaración de Virginia predomina el criterio de la dispersión de los derechos, no hay una espesa declaración de derechos en la que de forma conjunta y separadas integren las diversas opciones que se reconocen. Por tanto una de las características de la Constitución de 1812 que resulta, además, discordante con los precedentes más inmediatos americanos y franceses es la ausencia en su articulado de un catalogo de derechos sistemático. La demanda liberal de reconocimientos de libertades se zanjó en Cádiz con la inclusión dispersa a lo largo del Texto Constitucional de algunos derechos que, en ocasiones, quedaron desvirtuadas.

(33) El principio de confesionalidad y unidad religiosa aparece en la Constitución de Cádiz. El artículo 12, tras varias sesiones de debate, recogería la referencia a la religión, encuadra en el Título II: “Del territorio de las Españas, su religión y su Gobierno, y de los ciudadanos españoles”. *“La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”*¹⁷. Sin embargo el artículo 12 no dejó totalmente clara la confesionalidad del estado y no confunde el catolicismo con el Estado como haría la reacción posterior mediante la alianza entre el trono y el altar por lo que algunos autores entienden que es necesario ser prudente al afirmar la confesionalidad de las Cortes de Cádiz. Añadamos asimismo como una de las cuestiones decisivas entre las reformas capitales de la Constitución de Cádiz la relativa a la abolición de la Inquisición que se produciría el 22 de octubre de 1813 al declararse el Tribunal de la Inquisición “incompatible con la Constitución Política de la Monarquía”, esto es con la Constitución de

Cádiz. El día 23 la regencia del Reino procedía a la abolición del Santo Oficio. En todo caso la libertad religiosa que había sido reconocida en el constitucionalismo inglés, americano y francés no se reconocería en la Constitución de 1812. Por otra parte los partidarios de mantener la Inquisición no trataban de defender la religión sino de sostener el despotismo y atacar los principios que iban a fomentar la Constitución liberal de Cádiz.

(34) La Constitución de Cádiz recibe asimismo un último legado que supone una ruptura con el Antiguo Régimen sustentando en dos principios medulares, la soberanía nacional y la división de poderes, recogidos ambos en el primer acto normativo de las Cortes de Cádiz, en Decreto de 24 de septiembre de 1810, obra de Muñoz Torreto y Lujan. Los liberales defienden la necesidad de establecer una división de poderes con el influjo de Montesquieu y Locke combinando estas teorías con las más revolucionarias de Rousseau, Mably y Sieyès para finalmente adscribirse a la teoría clásica que opta por una separación estricta de poderes, siguiendo una separación estricta de la francesa y dejando claro su voluntad de frenar el poder del monarca. La soberanía según el artículo 3 “reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales”.

(35) El 23 de mayo de 1813 las Cortes de Cádiz convocaron Cortes ordinarias en las que prohibía la elección de los diputados que elaboraron la Constitución de 1812. La vida de aquellas Cortes fue breve, Fernando VII regresó a España y unió a sus deseos de volver a la situación anterior del deseo de sectores realistas que realizaron el Manifiesto de los Persas y al que inmediatamente acompañó el Decreto de Fernando VII expedido en Valencia el 4 de mayo de 1814 derogando la Constitución de 1812 y todos los Decretos aprobados por las Cortes de Cádiz, declarándolos “*nulos y de ningún valor y*

efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos, y se quitasen de en medio del tiempo”.

APÉNDICE

DIPUTADOS POR CADIZ

**Selección de diversos Diputados
con referencias personales e ideológicas ***

APENDICE

DIPUTADOS POR CADIZ

Breve referencia personal e ideológica *⁴⁵⁰

ABSOLUTISTAS

1.- Francisco Mateo Aguiriano y Gómez. 1742-1813

Diputado por Burgos. Nacido en Alesanco en 1742. Estudia jurisprudencia Toledo. Abogado del Consejo Supremo de Castilla. Destinado Nueva España pasas el Rector del Seminario Conciliar de la diócesis de México. Obispo de Calahorra y la Calzada. Rechaza el afrancesamiento del gobierno. Es partidario de que unas únicas Cortes comprendieran los tres estados, únicas competentes, en su opinión, para promulgar leyes. Votó en contra del principio de soberanía nacional, siguiendo la línea doctrinal de presentar las Cortes de Cádiz no como una ruptura constitucional con el pasado, sino como un afán continuista que enlazaba con las antiguas Cortes castellanas. Formó parte de la Comisión de Prebendas Eclesiásticas. Absolutista según unos y moderadamente conservador, según otros, se opuso al principio de soberanía nacional. Fue uno de los defensores a ultranza de la Inquisición. Junto con Cañedo y Vigil y Nadal, obispo de Mallorca, apostó por la celebración de un Concilio como medida absolutamente precisa para salvar a la nación del inminente riesgo en que se hallaba.

2.- Conde de Buenavista del Cerro (Diego Ventura de Mena)

Diputado por la provincia de Cuenca. De profesión militar. Fue uno de los diputados que reiteradamente se negaban a que se trasladaran las Cortes de la Isla de León a Cádiz. De pensamiento absolutista, fue uno de los firmantes de la Constitución con la reacción absolutista de 1814 se erigió en delator de los más significados diputados liberales.

⁴⁵⁰ La más completa relación de los diputados de Cádiz ha sido editada por Jose María García León bajo el título “*Los diputados doceañistas*. Dos volumentes. Quorum editores. Cádiz 2012

3.-Manuel Caballero del Pozo.

Diputado por la provincia de Salamanca. Nacido en Aldeadávila de la Ribera. Catedrático de Prima de Canones. Declaró en 1796 en el proceso inquisitorial contra el catedrático liberal Ramón Salas y Cortés, acusándolo de fomentado doctrinas perniciosas a la religión del Estado. Decidido partidario de la Inquisición.

4.- Jaime Creus y Martí (1760 - 1825)

Diputado provincial por Cataluña. Nació en Mataró en 1760. Realizó estudios en Barcelona donde fue profesor de su Seminario y cura párroco de la Garriga. Se doctoró en Teología en la Universidad de Cervera. Elegido diputado por Tarragona. Aunque de ideas absolutistas y principios tradicionalistas, sin embargo votó por la soberanía nacional y fue uno de los firmantes de la Constitución. Formó parte de la Comisión encargada de elaborar el proyecto del Reglamento Interior de las Cortes y fue elegido Presidente de las Cortes. Votó en contra del nombramiento de Wellington como general en jefe de las tropas peninsulares; y en la votación para formar parte de la diputación permanente de las Cortes.

5.-José Cayetano de Foncerrada y Uribarri

Diputado por Valladolid de Michoacán, Virreinato de Nueva España, era sacerdote, canónigo de la catedral Metropolitana, abogado de la Real Audiencia y miembro del Colegio de Abogados. Participó muy poco en los debates parlamentarios, aunque celoso de los intereses provinciales, propuso que cada diputado debía ser forzosamente originario de la circunscripción que representaba. Formó parte de la comisión de Supresión de prebendas eclesiásticas, posteriormente de la comisión de Poderes.

6.- Manuel Freire de Castrillón

Diputado por Galicia, por la provincia de Mondoñedo. Nació en Santiago de Compostela en 1751. General de Infantería regidor y diputado del común y síndico del Ayuntamiento. Fue un periodista polémico, redactor redactor de Napoleaca , publicación periódica de carácter patriótico y político que se publicaba

en Santiago. atribuyéndosele comúnmente la autoría del Diccionario razonado y que era un fuerte alegato contra los elementos más innovadores de las Cortes, lo que provocó la indignada reacción de éstos que daría origen al posterior Diccionario Crítico Burlesco de Bartolomé José Gallardo.

7.- Joaquín Gárate Tadeo

Diputado por Puno, Virreinato del Perú. Fue intendente y gobernador de la ciudad de Chucuito. El día 29 de agosto pronunció un largo y bien preparado discurso en el que hacía una serie de reivindicaciones para su provincia. Fue elegido Secretario de las Cortes, también, fue miembro del Tribunal de las mismas. Único diputado que denunció a sus colegas americanos, siendo uno de los veintiún informadores que entre mayo y junio de 1814 prestó servicios a la policía a fin de indagar qué diputados tanto en las Cortes Extraordinarias como Ordinarias han sido los causantes de los procedimientos contra la soberanía de S.M. Firmante número 43 del manifiesto de los Persas llegó a ser recompensado por ello en 1814, siendo nombrado gobernador intendente de la provincia de Puno. Después de la derrota de Ayacucho, regresó a España en 1825, viviendo en Madrid en condiciones tan precarias que se dijo que la única fortuna que poseía era su propia biblioteca, valorada en 2000 pesos. Recurrió al Consejo de Estado en busca de ayuda, enumerando en la instancia correspondiente sus servicios en las Cortes Extraordinarias y Ordinarias, añadiendo que había sido separado de la intendencia de Puno por haber sido uno de los sesenta y nueve diputados conocidos como los Persas.

8.- Francisco Gómez Fernández

Diputado por Sevilla. Abogado. Tuvo una notable participación en Cortes, participando activamente en los debates sobre el Reglamento del Consejo de Regencia, Reformas de Ultramar, Reglamento del Poder Judicial, Indultos, Repartimiento de baldíos y Abolición de señoríos. Perteneció a la comisión de Justicia, así en el debate sobre el poder judicial y, frente a los que pedían la unidad jurídica, defendió el establecimiento de Tribunales especiales, los tribunales de Corte. Pidió que las futuras Cortes tuvieran potestad para poder alterar el texto

constitucional, pues pensaba que sus poderes deberían ser iguales a las de las Cortes Extraordinarias.

9.- Manuel Jiménez del Guazo

Diputado por la provincia de Granada. Oficial de la secretaría de Gracia y Justicia. Formó parte de la comisión de Guerra, sustituyendo a Juan Miguel Páez de la Cadena, diputado por Sevilla, y contando con diversas intervenciones tales como la libertad de imprenta, abolición de rentas provinciales, infractores de la Constitución, diputación permanente de las Cortes y tributo indio, sobre el que pidió su desaparición.

10.- Manuel Jiménez del Hoyo

Diputado por la provincia de Córdoba. Prebendado de la catedral de Córdoba. Absolutista partidario de la institución monárquica, consideraba al Rey un símbolo de la permanencia del ser histórico de España. Tuvo una escasa participación en los debates parlamentarios, solamente se pueden contar dos intervenciones, una sobre la abolición de la Inquisición y otra sobre el restablecimiento de conventos. En el debate sobre la permanencia del Tribunal de la Inquisición, adoptó una postura transigente no opuesta a su supresión, pues no lo consideraba contrario a la seguridad de la Nación. No obstante, reconoció que debía ser reformada en su sentido y estructura.

11.-Santiago Key y Muñoz. 1772-1821

Diputado por Canarias. Nació en Icod de los Vinos (Tenerife) el 24 de julio de 1772. Presbítero y de pensamiento absolutista. Estudió Leyes y Cánones en la Universidad de Sevilla y se doctoró en 1806. Elegido Vicepresidente de las Cortes y Secretario, el 24 de septiembre de 1812. Participó en los debates sobre las condiciones de rentas de los diputados y en los expedientes de rehabilitación de algunos diputados.

12.-Gregorio Laguna y Calderón de La Barca. 1764-1826

Elegido diputado por Badajoz. Nacido en Badajoz en el año 1764. Mariscal de campo de caballería en 1808. Tuvo una discreta participación en las Cortes, interviniendo en cuestiones tales como Jubilaciones y cesantías, en los debates

sobre cuestiones militares, en asuntos de Estado Mayor del Ejército, como ascensos o exención del servicio de armas, en la Junta Suprema de Guerra, etc...Además formó parte de varias comisiones como la comisión de Guerra o la comisión de Premios.

13.-Juan de Lera y Cano. 1754-1831

Diputado por la provincia de la Mancha. Nacido en Peñas de San Pedro (Albacete). Parroco. Doctor en Teología. Formó parte de una sola comisión, la de Prebendas eclesiásticas, y participó en debates sobre diez cuestiones diferentes destacando los de Señoríos, Inquisición, Proyecto de Constitución... Se opuso al principio de soberanía nacional.

14.- Simón Lopez Or. 1744-1838

Sacerdote del oratorio del colegio de San Felipe en Murcia, nació en Nerpio (Albacete) el 11 de abril de 1744. Doctor en Teología, fue elegido Diputado por la provincia de Murcia. Como absolutista convencido, era partidario de la monarquía absoluta, a la que consideraba el brazo temporal de la fuerza civilizadora de la Iglesia, mostrándose muy combativo en materia religiosa. Frente a la opinión de Argüelles y otros liberales, siempre mantuvo que las cuestiones religiosas, aunque se debatieran en las Cortes, eran competencia del Papa.

15.- Ignacio Martínez de Villela

Diputado por Aragón por los partidos de Teruel y Albarracín. Miembro del Consejo de Castilla. Estuvo presente en la junta de Bayona. Consejero de Indias con José I. Formó parte de la comisión de Secuestros y Confiscos.

16.- Agustín Moreno y Garino

Diputado por la provincia de Sevilla. Canónigo de la Santa Iglesia Catedral. Presentó un proyecto, que no fue aprobado, por el cual, suponiendo dos millones de vecinos en la Península los dividía en cuatro clases, a fin de imponer sobre cada vecino una contribución personal proporcionada a su respectiva riqueza, que debería cobrar los curas párroco.

17.- Francisco Morros y Cíbila

Diputado por la provincia de Cataluña. Nacido en Igualada. Párroco. Participó en las sesiones correspondientes al inicio de la de la legislatura, siendo el único diputado que rechazó, en su integridad, la redacción del artículo segundo sin proponer alternativa alguna. En el debate sobre la libertad imprenta dijo que esta era del todo irreconciliable con los cánones e instituciones de la iglesia. Formó parte de la comisión de Prebendas. Fue contrario a la supresión de los gremios.

18.-Luís Palafox y Melci. 1772-1843

Diputado por la provincia de Aragón. Marqués de Lazán y Cañizar. Nació en Zaragoza, el 2 de junio de 1772. Estudió Humanidades, mostrando un gran interés por las lenguas clásicas. Ingresó en la Guardia de Corps y fue mariscal de campo y gobernador militar de Zaragoza. En los debates intervino en dos ocasiones, en la referente al gobierno de las provincias y en la responsabilidad de los infractores de la Constitución.

19.-Francisco de Papiol

Diputado provincial por el Principado de Cataluña. Presbítero y catedrático. Siempre se mantuvo consecuente con sus principios tradicionales permaneció en todas las situaciones controvertidas al lado de los suyos aunque votó a favor de la soberanía nacional. Firmó junto con otros diputados catalanes un alegato a favor de la Inquisición, considerando como presagio del tolerantismo en España, el tiránico decreto de Napoleón que la abolió.

20.- Vicente Pascual

Diputado por Aragón. Presbítero y canónigo penitenciario de la catedral de Teruel. Nombrado Presidente de las Cortes. Formó parte de las comisiones de Disciplina externa, Diario de Cortes, Poderes, Prebendas eclesiásticas, de Honor, Traslación de las Cortes y Poderes. También, formó parte de la comisión encargada de continuar los trabajos preparados por la Junta Eclesiástica, que formó en Sevilla la Junta Central. Se opuso, junto con los otros diputados por Aragón, al proyecto de administración territorial propuesto por los liberales y que se consideraba demasiado centralista. Presentó varias proposiciones destinadas a garantizar la congrua de los párrocos frente a ciertas apropiaciones de diezmos por parte de los

intendentes, destinados a ayudar a sufragar los gastos del Ejército. Criticó la lentitud de la justicia, abogando por mejorar las causas criminales y proponiendo una reforma del reglamento judicial y la visita extraordinaria a las cárceles, pues creía que el origen de los abusos procedía, después del juicio propiamente dicho, en la ejecución de la sentencia. Y se mostró partidario de esperar la entrada en vigor del Código Civil para abordar dichos cambios e intervino también en el debate sobre los señoríos.

21.- Antonio Joaquín Pérez y Martínez Robles (1763-1829)

Diputado por Puebla de los Angeles, Virreinato de Nueva España. Su labor como diputado fue muy destacada, terciando en muchos debates, como la Reforma de Ultramar, el Plan de Hacienda, la Libertad de Comercio, Organización Territorial, Inquisición. Formó parte de varias comisiones, como la que redactó el proyecto de Constitución, Bellas Artes, establecimiento del Consejo de la Inquisición; y fue elegido para la Presidencia de las Cortes en la sesión del día 24 de enero de 1811. Fue uno de los doce americanos que firmó el llamado Manifiesto de los Persas.

22.- José Pablo Valiente

Diputado suplente por Sevilla. Natural de Cumbres Mayores y vecino de Madrid. Pertenecía a la Junta Suprema de Sanidad y Ministro del Supremo Consejo de España e Indias. Era uno de los pocos diputados peninsulares que conocían bien la realidad de América, llegando a presidir las juntas americanas para la elección de diputados. Opuesto al sistema de elección popular en América, se mostró, en cambio, partidario de los diputados elegidos por las capitales de provincia. Negó cualquier concesión de derechos a los indígenas, de los que tenía un concepto muy peyorativo. Formó parte de la comisión para elaborar el Proyecto de Constitución, aunque luego se negó a firmarlo, alegando su oposición a la abolición de los señoríos. También perteneció a la comisión encargada de estudiar el restablecimiento de la Inquisición. Contrario al traslado de las Cortes fuera de la Isla de León, apostó por una mayor coordinación entre las Cortes y la Regencia, pidiendo mejoras en la defensa y mayores garantías de seguridad. Fue Presidente de las Cortes. Partidario de la institución monárquica como el mejor para la

sociedad de los hombres, si bien con el mínimo de limitaciones. Defendió la libertad de imprenta como un derecho inherente a la libertad del hombre, aunque matizando que su aplicación no debía ser inmediata, dadas las circunstancias del momento.

23.- Alfonso María Vera y Pantoja (1755 - 1813)

Diputado por la ciudad de Mérida. Nació en Mérida el 17 de agosto de 1755. Al inicio de la Guerra de la Independencia, era alcalde Mayor y Gobernador interino de Mérida. Organizó el batallón de Voluntarios de Mérida y fue nombrado regidor. Denunció en términos muy duros la actuación gubernativa de las Cortes. Ante el dilema de constituir una Regencia con más autoridad, dada la debilidad de esta institución, inició un debate, al parecer no por iniciativa propia sino del Presidente de las Cortes, preguntándose qué podía hacer esta Regencia expuesta siempre a la censura de los detractores y al principio del Poder Ejecutivo. Se opuso a la venta de propios y baldíos.

24.- Miguel Alfonso Villagomez y Lorenzana

Diputado suplente por León. Pertenecía al Supremo Consejo de Castilla y era Caballero de la Orden de Carlos III. Declaró inocentes a los implicados en el llamado proceso de El Escorial. Se opuso al traslado de estas de la Real Isla de León a Cádiz, haciendo notar que en dicha ciudad, en el convento de los filipenses, se había dado casos de fiebre amarilla. Perteneció, a las comisiones de Honor y Justicia, e intervino en treinta y ocho debates, tales como Organización de provincias, Reglamento del Consejo de Regencia, Reformas de Ultramar, Plan de Hacienda, Libertad de comercio. Mostró su rechazo a la resolución que iba dirigida contra aquellos que se negaban a jurar la Constitución. Defendió el restablecimiento de los conventos mostrándose disconforme con que a los territorios ultramarinos se le diera la consideración de provincias y no de colonias, ya que, según su criterio, formaban parte del Patrimonio Real. Delator con la reacción absolutista de 1814.

LIBERALES

1.- Agustín de Argüelles y Álvarez Gonzalez

Diputado suplente por Asturias y luego propietario. Se le considera el diputado más reconocido de las Cortes de Cádiz y padre de la Constitución de 1812. Nacido en Ribadesella el 28 de agosto de 1776. Estudió leyes en Oviedo. Se traslada a Sevilla donde actuó como secretario de la Junta preparatoria para la reunión de Cortes. Firme partidario de la libertad de prensa, abogó por la abolición de la trata de negros. Solicita y obtiene la abolición del tormento como prueba en los procesos de índole criminal. Presenta a la Comisión que el mismo preside sus trabajos sobre el Proyecto de Constitución. Es autor del discurso preliminar donde plantea que no hay ruptura entre las Cortes de Cádiz y la tradición política española sosteniendo que el proyecto guarda relación con las antiguas leyes del Reino. Apuesta decididamente por una nueva división territorial. Realiza un importante discurso sobre contra de Inquisición.

2.- Pedro Antonio Aguirre

Diputado por Cádiz. Considerado liberal y activo, perteneció a la comisión de Hacienda, creada el día 14 de octubre de 1810, y volvió a formar parte de la misma, cuando se decidió su ampliación, esta vez con doce diputados, el día 30 de dicho mes. Planteó lo inútil que podría ser una intervención paralela de las Cortes en cuestiones hacendísticas respecto a la Regencia; y se le encargó, junto a Argüelles la impresión del proyecto de libertad de imprenta. También formó parte de la comisión de Comercio y Marina creada en la sesión del día 21 de mayo de 1811. Fue marcadamente proteccionista.

3.- José Alonso y López Nobal.

Diputado por Galicia. Nacido en el Ferrol, el 2 de noviembre de 1763. Piloto de la Marina e ingeniero, fue comisario de la Inspección General de Caminos. Fue elegido diputado el 30 de julio de 1810. Formó parte de la comisión de once diputados, encargada de elaborar un proyecto de arreglo y organización de las provincias y también de la comisión de Comercio y Marina, compuesta por cinco diputados. También participó en la comisión del reglamento de las Cortes,

llegando a firmar la Constitución. Propuso la abolición de todo derecho. Se opuso a la Inquisición. Fue firmante de la Constitución

4.- Isidoro de Antillón y Marzo.

Diputado provincial por Aragón. Nacido en Santa Eulalia del Campo (Teruel) en 1778 Realizó estudios en Zaragoza y Valencia. En 1809 dirige el Archivo de Indias. Publica un Resumen de los sucesos militares de España desde fines de noviembre de 1808 a mayo de 1809. Fue redactor del Semanario Patriótico. Fue uno de los más notables diputados de las Cortes. Formó parte de las comisiones de Honor, Justicia, Sanidad y Traslación de las Cortes. Fue partidario de la libertad de imprenta y de la libre contratación laboral, manifestándose en contra de los gremios.

5.- Juan José Arias Dávila y Matéu, Conde de Puñonrostro.

Diputado suplente por el Virreinato de Santa Fe. Nació en Quito el 22 de septiembre de 1783. Coronel de caballería. Participó en la Guerra de la Independencia luchando contra los franceses; y formó parte, en 1809, de la Junta Central. En las Cortes. Intervino muy activamente en conseguir la igualdad de representación entre americanos y peninsulares y mantuvo contactos en Cádiz con los independentistas americanos. Se abstuvo de intervenir en los debates y votaciones sobre el Proyecto de Constitución, alegando que su provincia se hallaba en franca rebeldía. Pidió que se le excusase de su asistencia al Congreso por desacuerdo con la política que las Cortes iban desarrollando respecto a los territorios americanos. Votó a favor de la libertad de imprenta y perteneció a las comisiones de Honor y Guerra. Fue uno de los firmantes de la Constitución.

6.- José Ignacio Beye de Cisneros.

Nacido en 1759 en Méjico. Catedrático de Prima de Leyes. Participó en la conspiración del cabildo mexicano contra el Virrey. En las Cortes de Cádiz fue partidario de conceder los derechos de ciudadanía a las castas y al establecimiento obligatorio de una escuela gratuita para niños pobres. Abogó por una reforma de la administración de justicia. Perteneció a la comisión para estudiar el reglamento de las guerrillas.

7.- José Domingo Caicedo y Santa María

Diputado suplente por Santa Fe. Nacido en Bogotá el 4 de agosto de 1783 en la hacienda de Puente Aranda (Cundinamarca) cuando formaba parte del Virreinato de Nueva Granada. Estudia Leyes. Fue catedrático de Latinidad. Ejerció la abogacía en la Real Audiencia de Santa Fe. Su padre estuvo procesado por ser un destacado cabecilla de la revolución en el Virreinato. Elegido diputado en Cádiz fue partidario decidido de las iniciativas independentistas. Abandonó las Cortes y desde América se dedicó al activismo emancipador.

8.- José María Calatrava.

Diputado suplente por Extremadura. Nació en Mérida el 26 de febrero de 1781. Estudió en el Seminario de Mérida y Derecho en la Universidad de Sevilla, trabajando luego como abogado en Badajoz. Tomó posesión como diputado, tras la renuncia del obispo de Orense el 1 de Noviembre. En 1811 sería elegido Secretario de las Cortes y posteriormente Vicepresidente. Formó parte de la Comisión de Poderes y propuso que se suprimiera el fuero eclesiástico en lo referente a los asuntos comunes.

9.- Vicente Cano Manuel y Ramirez de Arellano

Diputado por Murcia. Nació en Chinchilla (Albacete) en 1764. Estudió Filosofía en el Seminario de San Fulgencio de Murcia y, luego, Derecho en dicha Universidad. Abrió bufete en Madrid y posteriormente fue Alcalde del Crimen en la Audiencia de Valencia y Oidor de la Chancillería de Granada. Presidente de las Cortes, la Regencia le nombró ministro de Gracia y Justicia, formó parte de la comisión encargada del Examen de las operaciones de los ex regentes durante su Gobierno, compuesta por seis diputados. Intervino en todos aquellos debates relacionados con su competencia jurídica.

10.- Antonio Capmany y Montpalau.

Diputado por el Principado de Cataluña. Nacido en Barcelona el año 1742. Fue miembro de la Real Academia de la Historia en 1776, siendo secretario perpetuo desde 1790. Se refugió en Cádiz donde dirigió la Gaceta de la Regencia de España e Indias que se publicaba en vez de la Gaceta de Madrid. Liberal

moderado, perteneció a la comisión que debía elaborar el Proyecto de Constitución y, junto con Argüelles y Creus, formó parte de una junta especial de inspección para dar el visto bueno a dicho Proyecto, donde se acordó, entre otras disposiciones, el hacer un Diario de Sesiones. También perteneció a la comisión de once diputados, encargada de elaborar el proyecto de libertad de imprenta, que defendió con gran entusiasmo y a la comisión de doce diputados encargada de elaborar el reglamento interior de las Cortes. El conde de Toreno lo calificaría de "centinela siempre dispuesto contra todo lo que tirarse al menoscabar la independencia nacional".

11.-José Joaquín Castelló y Ferre

Diputado a Cortes por Valencia. Había nacido en la localidad del Bocayrente en 1748. Era miembro del Consejo Supremo de Guerra y Marina e intendente de Extremadura. Fue un decidido defensor de las atribuciones de las Cortes. Cuando se discutía artículo 15, en que se decía que "la potestad hacer las leyes reside las Cortes con el Rey", pidió que se suprimiera "con el rey", argumentando que "el ejecutivo no puede tener parte en el legislativo", a no ser que se confunda ambos poderes. Si mostró contrario a que el Consejo de Estado fuera tan numeroso como lo propuso el proyecto de Constitución y con las atribuciones que le señalan. Planteó que se nombrase una comisión de las Cortes para que vigilase el cumplimiento de sus decretos.

12.- Francisco Ciscar y Ciscar.

Diputado provincial por Valencia, nació en Oliva, en 1760. Guardamarina. Partidario de una postura conciliadora con las provincias de Ultramar, creía en la Constitución como mejor elemento de pacificación y unión de las mismas. Sustituyó a Álvarez de Toledo en la Comisión de Marina. Firmante de la Constitución, formó parte de la comisión de nueve diputados que, a iniciativa del diputado asturiano Vega Infanzón, propuso la conveniencia de nombrar a Wellington general en jefe de las tropas peninsulares contra Napoleón. Dicha propuesta fue aprobada, votando a favor los más destacados liberales como Mejía, Calatrava o Argüelles. Fue elegido Presidente de las Cortes el día 24 de diciembre de 1812, volviendo a ser diputado, suplente, en las Cortes Ordinarias de 1813.

13.- Joaquín Díaz Caneja

Diputado por el reino de León. Nacido en Oseja de Sajambre (León) en 1777. Estudió Derecho en Valladolid. Se estableció en Madrid llegando a ser Abogado de los Reales Consejos, habilitado del colegio de abogados de la Corte. Participó la Comisión de Justicia y en la comisión encargada de examinar los expedientes sobre el Consejo Supremo.

14.- José Espiga y Gadea

Diputado por la Junta Superior de Observación y Defensa de Cataluña. Arcediano de Benasque, era canónigo de la catedral de Lérida, capellán de honor de Carlos IV y auditor del Tribunal de la Rota. Vocal de la Junta, fue elegido el 5 de febrero de 1810 en las Casas Consistoriales de la ciudad de Manresa. Aquel mismo día se le otorgó su poder, jurando su cargo en las Cortes y tomando posesión el 29 de octubre. Participó en la comisión encargada de elaborar el proyecto de Constitución y, muy activamente, junto con Argüelles, en los debates sobre el artículo 1º. Elaboró, junto con el diputado por la Habana, Andrés Jáuregui, el decreto sobre las elecciones de los nuevos ayuntamientos, ante las quejas de los diputados americanos sobre su escasa representación política. Partidario de mantener las grandes divisiones administrativas vigentes en América, mostró su desacuerdo ante los intentos de crear nuevas divisiones que consideraba como excesivas.

15.- Francisco Fernández Golfín.

Nacido en Almendralejo (Badajoz) en el año 1771, era hijo del IV Marqués de la Encomienda, Francisco Fernández de Córdoba y Ulloa. Ingresó en el Ejército, llegando a ser coronel de Infantería durante la Guerra de la Independencia. Destacado liberal, fue elegido diputado por Extremadura. Tuvo una intensa participación en las Cortes, formando parte de la comisión encargada de la elaboración del Reglamento Interior de las Cortes y también de la comisión de Guerra. Formó parte de la comisión encargada de redactar el Proyecto de Constitución, llegando a firmar esta.

16.- Juan Nicasio Gallego y Hernández del Crespo.

Poeta de la escuela salmantina, nació en Zamora el 14 de diciembre de 1777. Con estudios en Filosofía y Derecho Civil y Canónico fue ordenado sacerdote en 1804. Director eclesiástico del Real Colegio de Pajes. Diputado suplente por la provincia de Zamora formando parte de varias comisiones, entre ellas la creada para elaborar el proyecto de libertad de imprenta o la de Inspección del Diario de Cortes.

17.- Manuel García Herreros

Nacido en San Román de Cameros (Soria) en 1766. Doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá, en 1803, fue nombrado Procurador General del Reino. Elegido el 23 de septiembre de 1810 diputado suplente por Soria. Perteneció, como Argüelles, Zorraquín y Fernández Golfín, al grupo de liberales llamado los suplentes que se caracterizaron por su ideología claramente radical. Participó muy activamente en las comisiones a las que perteneció, formando parte de la encargada de elaborar el Reglamento de las Cortes. En el debate sobre la cuestión de los señoríos sugirió que volvieran a la nación todos los señoríos jurisdiccionales. Secretario de las Cortes, formó también parte de la comisión encargada de examinar las operaciones de los ex regentes durante su Gobierno y de la encargada de extender el decreto sobre señoríos. Se le acusó de ser uno de los inspiradores de El Robespierre Español, periódico que se editaba en Cádiz, radicalmente liberal y antimilitarista, que llegó a importunar tanto a absolutistas como a liberales moderados. Magistrado de la Audiencia de Madrid

18.- Domingo García Quintana

Diputado por Lugo, reino de Galicia. Intervino en el debate sobre el decreto de libertad de imprenta a favor de Argüelles. En el debate sobre la actitud del obispo de Orense, propuso que el caso fuera a un próximo Concilio Nacional y que, mientras, estuviera recluido en un monasterio. Cuando, todavía en la Isla de León, se planteó un posible traslado de las Cortes, propuso que no fueran a Cádiz a tenor de los datos que proporcionaba la Junta de Sanidad por causa de la fiebre amarilla. En los debates sobre la obra colonizadora de España en América, al igual que Francisco Javier Borrull y Valcárcel Dato, se mostró especialmente crítico con ella. Considerado como uno de los diputados más significados del ala más belicista

de las Cortes y bastante extravagante, fue expedientado por las Cortes, acusado de haber repartido unos pasquines, donde se quejaba de estar preso desde el día 24 de mayo de 1811 y estar suspendido de sus dietas, viéndose, por tanto, obligado a pedir limosna. En noviembre se le dictó sentencia, con privación del cargo de diputado, levantamiento del arresto, apercibimiento y condena al pago de costas, deduciéndolas de las dietas devengadas.

19.- José Miguel Guridi Alcocer

Diputado por Tlaxcala, Virreinato de Nueva España. Nació el 23 de diciembre de 1763 en el pueblo de San Felipe de Isetacuytla. Se licenció y luego se doctoró en Teología y Cánones en la Universidad de Méjico. Formó parte del Real Colegio de Abogados. Considerado como un liberal avanzado, destacó muchas veces por sus propuestas radicales, siendo uno de los redactores del Proyecto de Constitución y, sobre la potestad del poder legislativo. Sincero defensor de la obra de España en Ultramar. Asimismo se propuso abolir la esclavitud y abogó por la igualdad política entre peninsulares y americanos. Afirmó que cada diputado debía haber nacido en la provincia que representaba, mostrándose favorable a unas Cortes cuya duración no pasara de los dos o tres años, dado que resultaba más económico para las provincias.

20.-José María Gutierrez de Teran

Diputado suplente por el virreinato de Nueva España. Guardia de Corps retirado y teniente del regimiento de Toluca. Secretario de las Cortes. Fue elegido Vicepresidente en la sesión del día 24 de marzo de 1812 sustituyendo, como Presidente, a Morales Duárez por muerte de éste. Participó más bien poco en los debates de las Cortes, pero no rehuyó las cuestiones más importantes. Formó parte de cuatro comisiones: Honor, Ultramar, Poderes y Guerra. Participó en siete debates, destacando en los relativos a la libertad de imprenta, reformas de Ultramar y Tribunal de la Inquisición.

21.- Dionisio Hincá Yupangui

Diputado suplente por el Virreinato del Perú, nació en Cuzco. De familia india, pertenecía a un antiguo linaje inca. Teniente coronel de dragones. Se

caracterizó por sus entusiastas discursos en favor de la causa americana. Formó parte de la comisión de diez diputados americanos, encargada de informar a las provincias de Ultramar sobre la instalación de las Cortes y el proceso de elección de diputados. También perteneció a la comisión de Marina al separarse de la de Comercio. Su primer discurso, de clara influencia roussoniana, sobre la situación y causas de éstos, causó especial impacto en las Cortes. Favorable a la supresión del llamado tributo indígena, calificó la conquista española de los antiguos imperios indígenas como de usurpación de sus imprescindibles derechos, dando una interpretación muy negativa de la colonización española. Figuró en otras muchas comisiones como las de Guerra, Marina, Ultramar y fue uno de los firmantes de la Constitución.

22.-Antonio Larrazábal y Arrivillaga. 1779-1853

Diputado por la ciudad de Santiago de los Caballeros, Capitanía General de Guatemala. Nacido en dicha ciudad en 1779. Doctor en Teología y Cánones. Formó parte de varias comisiones como la de Justicia, Ultramar, Reclamaciones de Puerto Rico..., siendo elegido Presidente de las Cortes el 24 de octubre de 1811. Se dedicó más a las grandes cuestiones de fondo, no distinguiendo con claridad la diferencia entre leyes constituyentes y ordinarias. Presentó siete proposiciones, basadas en las Instrucciones, que el ayuntamiento de Guatemala le había enviado y participó activamente en los debates sobre el proyecto de Constitución, defendiendo la tesis realista en cuanto al principio de soberanía, aunque protestó por lo que consideraba una evidente desigualdad representativa entre la Península y América. Resultó elegido para formar parte de la diputación permanente de las Cortes, en la sesión del día 6 de septiembre de 1813.

23.- Antonio Lloret y Marti

Abogado de los Reales Consejos. Vecino de la Villa de Albarique, del partido de Alzira, diputado por la provincia de Valencia. Formó parte de tres comisiones: Supresión de empleos, Poderes y Examen de Memoriales; y actuó en nueve ocasiones, destacando en los debates sobre la organización de las provincias, plan de Hacienda, señoríos, agricultura. Llegó a pedir la abolición de los señoríos

valencianos, basándose en los derechos de la auténtica reconquista frente a una nobleza incompetente.

24.- Máximo Maldonado

Diputado suplente por el Virreinato de Nueva España Canónigo de Guadalajara., jurando su cargo en las Cortes. Se mostró partidario de la libertad de imprenta y fue uno de los firmantes de la Constitución. No tuvo ningún tipo de participación activa.

25.- Joaquín Maniau Torquemada

Diputado por la ciudad de Veracruz, Virreinato de Nueva España. Nacido en Méjico. Comisario honorario del ejército y contador general de la Renta del Tabaco. Elegido Vicepresidente de las Cortes y Presidente. Perteneció a las comisiones de Negocios Ultramarinos, Comercio, Hacienda, Honor y Secuestros y Confisco. Además formó parte, junto con Aner, de una comisión en octubre de 1811, encargada de informar sobre la distribución de caudales del Ejército y de la contrata de víveres. Fue elegido Vicepresidente de las Cortes. Considerado como un constitucionalista moderado, se mostró de acuerdo con que se aplicara la Constitución en América.

26.- José Mejía Lequerica

Diputado suplente por el virreinato de Santa Fe (Venezuela). Nacido en Quito en 1729. Estudió en la Universidad Santo Tomás de Aquino. Obtiene la cátedra de filosofía. Fue uno de los primeros en plantear la necesidad de que las Cortes elaboraron una Constitución. Defensor de la igualdad económica, jurídica y política entre americanos y peninsulares. Formó parte de la comisión encargada de informar a las provincias americanas del proceso de instalación de las Cortes y de elección de diputados. Intervino el debate sobre la directamente de imprenta mostrándose partidario de ella. Perteneció la Comisión de Hacienda. Participó en el debate sobre comercio de esclavos tachando a la esclavitud como contraria al derecho natural. Publicó junto con Bartolomé José Gallardo “La Abeja”, uno de los periódicos más populares del momento de matiz liberal exaltado. Combatió duramente a la Inquisición.

27.- Mariano Mendiola Velarde

Diputado por Querétaro, Virreinato de Nueva España. Abogado de las Audiencias de Méjico y Guadalajara. Formó parte tanto de la comisión encargada de elaborar el proyecto de Constitución como del Tribunal de las Cortes. Junto con otros diputados americanos, propuso un voto particular sobre el artículo 373 de la Constitución, exigiendo mayores garantías ante la posibilidad de que surgieran objeciones a su legitimidad o validez, de forma paralela a un escrito, en el que pedía la revisión de la Constitución antes de adquirir validez legal, condición sin la cual se opondría al principio de soberanía nacional y de representación. Atacó en diversas ocasiones el sistema colonial español y optó porque se crearan instituciones, como la Diputaciones Provinciales, que fueran capaces de representar los intereses de todos los grupos sociales.

28.- José Francisco Morejón

Diputado por la provincia de Honduras. Capitanía general de Guatemala. Abogado. Estudió Leyes en la Universidad de San Carlos. La mayor parte de su actuación la dedicó a defender los intereses de su provincia. Pidió que las rentas pertenecientes a la silla suprimida en la catedral de Comayagua, relativa a la abolida Inquisición, se destinaran a la dotación de cátedras de Filosofía y Derechos, canónico y civil, estableciéndose éstas en la capital de dicho obispado.

29.- Francisco Mosquera y Cabrera

Diputado por la Capitanía General de Santo Domingo. Abogado. Fiscal de la Hacienda de la Habana. Oidor honorario, que había renunciado a su cargo. En sus escasas intervenciones parlamentarias se limitó a defender los intereses de Santo Domingo. Pidió la abolición del llamado tributo indígena, aunque mostró sus reticencias a un inmediato reconocimiento de los derechos de los que no fueran exclusivamente reputados como blancos, pues se podría caer en el riesgo de una cierta inestabilidad social. Perteneció a las comisiones de Justicia y Examen de Memoriales. Tras el informe del gobierno sobre el establecimiento de Audiencias, después de manifestar el abandono en que se hallaba la Isla de Santo Domingo y la utilidad de restablecer en ella la antigua Audiencia, propuso y se aprobó, que la comisión de arreglo de Tribunales la estableciera y, de no poder hacerse, que se

hiciera en Puerto Rico, evitando así que, en el caso de ambas islas, se tuviera que acudir a la distante Audiencia de Caracas.

30.- Antonio Oliveros

Diputado por la provincia de Extremadura. Canónigo de la colegiata de San Isidro de Madrid. Figura entre los liberales más destacados y tuvo una participación activa muy intensa, interviniendo en muchas y muy variadas cuestiones. Planteó el traslado de las Cortes a Cádiz, preguntando si se ha de elegir la casa de San Felipe Neri para salón de sesiones y demás oficinas, a lo que las Cortes accedieron. Fue uno de los primeros diputados, junto con Espiga y Muñoz Torrero, en proponer una Constitución, formando parte de la comisión que se creó para elaborar un Proyecto de Constitución Política de la Monarquía. Formó parte de la comisión de Sanidad Pública, así como de la comisión encargada de examinar los poderes de los parlamentarios que se iban incorporando, aunque ya había sido nombrado con anterioridad, para este cometido, por la propia Regencia. Intervino varias veces en los debates a favor del decreto de libertad de imprenta presentado por Argüelles. Respecto a América, pidió que hubiera en las Cortes el mismo número de representantes de Ultramar que de la Península e Islas Adyacentes. Fue elegido Secretario de las Cortes.

31.-José Joaquín Ortiz Galvez

Diputado por Panamá, Virreinato de Santa Fe. Estudió Leyes. Desempeñó altos puestos en la Administración Pública de España, entre ellos el de Consejero de Estado y Alcalde del Crimen de la Audiencia de Barcelona. Sus intervenciones fueron escasas, votando en contra de la Inquisición y solicitando la creación de más Diputaciones Provinciales para América. Formó parte de la comisión de Poderes. También perteneció a las comisiones Poderes, Marina y Hacienda. Fue elegido Vicepresidente de las Cortes el 24 de enero de 1812

32.- Pedro Bautista Pino

Diputado por Nuevo Méjico, Virreinato de Nueva España. Comerciante. Licenciado en Derecho. Se mostró muy favorable a la liberalización del comercio ultramarino y contrario a conseguir la pacificación del territorio mejicano,

solamente, con la utilización de la fuerza. Así, consiguió la libertad de comercio para el puerto de Guaymas para poder establecer relaciones comerciales con países asiáticos. Perteneció a la comisión de Honor. Expuso en las Cortes la situación y posibles mejoras de su territorio bajo el título de “Exposición sucinta y sencilla de la provincia de Nuevo Méjico”, donde se lamentaba de la poca atención que se había prestado a dicha provincia. Denunció el monopolio del tabaco como perjudicial para los intereses económicos de Nuevo Méjico, así como la inactividad del puerto de San Bernardo, situado sobre el mar de las Antillas. Planteó en toda su crudeza el reconocimiento de las castas, refiriéndose al problema de la tierra y a su relación con los levantamientos que se producían.

33.- Juan Polo y Catalina

Diputado provincial por Aragón. Nació en Cabo la Fuente el 2 de julio de 1777. Estudió en Calatayud y Zaragoza con los escolapios, doctorándose en Jurisprudencia en esta Universidad, donde desempeñó una cátedra. Oficial de la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda de España, y Secretario del Rey con ejercicio de decretos. Su actuación en las Cortes fue destacada, interviniendo y formando parte de varias comisiones como las de Hacienda, Honor, Reglamento del Poder Ejecutivo, Uniformidad de la moneda y de la Organización del Gobierno. También formó parte de la comisión especial encargada de tratar de la uniformidad de todas las monedas de España y de la comisión extraordinaria y especial, encargada de examinar las Memorias presentadas relativas al ramo de Hacienda. Decidido defensor de la libertad y de la riqueza del hombre, era partidario de que el Estado se apropiara de las rentas monacales como medio de obtener recursos, y asimismo se mostró a favor de la ley de señoríos, siendo muy crítico dado su origen feudal, por lo que pidió la desaparición de los calificativos de señor y vasallo y que todos los impuestos que originariamente pertenecían a los lugares de realengo pasaran a la Hacienda Pública. Elegido Secretario de las Cortes y, posteriormente, Presidente.

34.- Juan Clímaco Quintano

Diputado suplente por la provincia de Palencia. Oficial de la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda, y Secretario del Rey con ejercicio de decretos.

Formó parte de la comisión de Inspección del Diario de Cortes y de la comisión ordinaria de Hacienda. Obtuvo permiso de las Cortes para reclamar del Gobierno algunos papeles a fin de justificar su conducta ante las acusaciones que, contra él, vertió el superintendente de la factoría de tabacos de la Habana. Fue elegido Secretario de las Cortes.

35.- José Roa y Fabián

Diputado por la provincia de Aragón. Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de Valencia y juez examinador sinodial de aquel Arzobispado. Formó parte de la comisión encargada de la supresión de prebendas eclesiásticas, compuesta por cinco diputados. También perteneció a la comisión, creada el día 1 de marzo de ese mismo año, que debía presentar a la mayor brevedad posible una lista de alhajas que en cada iglesia se considerarían absolutamente necesarias para el culto.

36.- Mariano Robles Domínguez de Mazariego

Diputado por Chiapas, Capitanía General de Guatemala. Abogó porque se suprimiera el estanco del tabaco que consideraba de grave perjuicio económico, sobre todo, como causante de la miseria de los indios. Consiguió que se otorgara la libertad de comercio a los puertos de Tonalá y Tapachula para comerciar con las provincias de Guatemala, Nueva España y Perú. Perteneció a las comisiones de Honor y Eclesiástica, llegando a ser un decidido defensor de los intereses de los indígenas.

37.- Agustín Rodríguez Bahamonde

Abogado de los Reales Consejos, diputado por la provincia de Tuy en Galicia. Tuvo una participación muy activa en las Cortes, formando así parte de la comisión de once diputados encargada de elaborar un proyecto de arreglo y organización de las provincias, y también de las comisiones de Examen de documentos y Reformas del Ejército. Presentó en la comisión de Constitución una serie de proposiciones relativas a una nueva demarcación de los corregimientos que deberían hacerse en la provincia de Galicia, así como otras medidas de tipo político y económico. También apostó por una Regencia compuesta de cinco miembros,

formando parte de la comisión de Guerra, elegido Secretario de las Cortes en la sesión del día 24 de enero de 1813.

38.- Antonio José Ruiz de Padrón

Diputado por Canarias, por la Junta Suprema establecida en la Laguna y de los cabildos de las cuatro islas menores (Fuerteventura, Gomera, Hierro, y Lanzarote). Nació en San Sebastián de la Gomera el 9 de noviembre de 1757. Franciscano, en 1784 cuando se dirigía a la Habana una tempestad le condujo a Pennsylvania, donde tuvo oportunidad de conocer a Benjamín Franklin y a Washington. En Filadelfia expuso sus ideas sobre la Inquisición. Defendió el liberalismo como el medio más adecuado para luchar contra la ignorancia y la superstición del pueblo y de los que, en buena parte, era culpable la Iglesia.

39.- Juan de la Torre Martiniano

Diputado por la provincia de Córdoba. Sacerdote y Catedrático de Teología. Tuvo una escasa participación activa pues las Cortes anularon su elección por defectos de forma. En el debate sobre la Inquisición se mostró partidario de su permanencia, aunque con una serie de reformas que sólo podrían emprenderlas un Concilio Nacional. También intervino en el debate sobre los Pleitos fenecidos.

40.- Vicente Tomás Traver

Diputado provincial por Valencia. Abogado de los Reales consejos y catedrático perpetuo de Derecho Canónico de la Universidad de Valencia. Capitán de Voluntarios Honrados. Formó parte de la comisión para Arreglo de las provincias y de la comisión renovada de Hacienda. También perteneció a la comisión extraordinaria y especial encargada de examinar las memorias presentadas relativas al ramo de Hacienda. Se declaró enemigo de los afrancesados y de todo lo francés. Abogó por la creación de un Estado Mayor del Ejército. Fue secretario de la comisión especial de la Reforma de Regulares. Más tarde fue elegido Secretario de Cortes.

41.- José Simeón de Uría Barruecos y Galindo

Diputado por Guadalajara, Virreinato de Nueva España. Estudió en el Seminario Conciliar y en San Idelfonso y se doctoró en Teología en la Real y Pontificia Universidad de Méjico, obteniendo la cátedra de Filosofía. Canónigo penitenciario de la catedral de Guadalajara. Criticó el escaso interés de las Cortes hacia la economía de Ultramar. Partidario de la total igualdad de derechos políticos de los habitantes de América, incluso para los negros. Formó parte de la comisión de Honor y de Prebendas Eclesiásticas. Fue elegido Vicepresidente de Cortes.

42.- Ramón de Utges

Diputado provincial por Cataluña. Abogado de la Real Audiencia del Principado de Cataluña y Catedrático de Decretos de la Universidad de Cervera. Formó parte de seis comisiones, Reglamento de la Secretaría de Estado, Premios, Arreglo de Tribunales, Examen de Poderes, Tribunal de Cortes, y Justicia. Participó fundamentalmente en los primeros debates de las Cortes para ir luego cediendo en su actividad. Propuso que los diputados eclesiásticos se abstuvieran de votar en aquellos asuntos criminales que se presentaran en las Cortes. Fue elegido Vicepresidente de las Cortes. Se le considera más bien como un diputado irrelevante que, poco a poco, fue evolucionando hacia un liberalismo de corte moderado.

43.- Felipe Vázquez Canga

Diputado provincial por Asturias. Político discreto. Catedrático de Prima de Cánones en la Universidad de Oviedo. Secretario de la Junta Superior de Asturias y concejal del Ayuntamiento ovetense. Intervino en varios debates como Inquisición, Confiscos y secuestros, Proyecto de Constitución, aunque preferentemente participó en cuestiones relativas a los procedimientos judiciales, reclamando más tiempo para que los jueces pudieran estudiar mejor los casos. Formó parte de la comisión de Arreglo de provincias, en sustitución de Morales Gallego; de la comisión de Poderes, y de las comisiones de Justicia, Tribunal de Cortes, Infracciones y Señoríos, llegando incluso a ser elegido Presidente de las Cortes. Estuvo implicado en un oscuro e impreciso golpe de Estado planeado por

los liberales, con la intención de proclamar una república y prolongar el período de sesiones de las Cortes.

44.- Antonio Zuazo y Mondragón

Diputado suplente por el Virreinato del Perú. Marqués de Almeiras. Coronel del regimiento de Oaxaca, Brigadier de los Reales Ejércitos, y Mariscal de Campo de Infantería. Perteneció a las comisiones de Guerra, Honor y, también de la encargada de tratar con la Regencia acerca del estado en que se hallaba Maracaibo. Defendió la necesidad de conservar el fuero militar, que finalmente fue respetado. Participó muy poco en los debates parlamentarios, limitándose prácticamente a los asuntos militares y obviando los relacionados con América. Aún así, se mostró a favor de la igualdad de representación entre americanos y peninsulares, considerando que, de no conseguirse dicha igualdad, se favorecería la aparición de movimientos independentistas. También, votó por la libertad de imprenta y en contra de la Inquisición.

45.- Miguel Antonio de Zumalacarregui e Imáz

Diputado suplente por Guipúzcoa. Nació en Idiazábal en 1763. Perteneciente a la nobleza local, estudió Filosofía en el Colegio de San Pelagio de Córdoba y Leyes en la Universidad de Sevilla. Oidor de la Audiencia de Oviedo en 1804. Secretario de las Cortes y, posteriormente, Presidente de las mismas. Formó parte de la comisión encargada de examinar los empleos vacantes que debían quedar suprimidos.

REALISTAS

1.- Francisco Basilio Alaja

Diputado por la provincia de Sevilla. Cura de Ecija. Tuvo una marcada intransigencia en materia religiosa que se puso de manifiesto en el debate sobre la defensa del catolicismo. Su gran temor eran los renovadores, con lo que, en el fondo, Alaja pretendía desprestigiar todas las reformas que se estaban llevando a cabo en las Cortes.

2.- José Álvarez de Toledo.

Diputado suplente por Santo Domingo. Nacido en la Habana, el 14 de mayo de 1779. En 1794 ingresó como guardiamarina en Cádiz, siendo alférez de fragata en 1795. Nombrado elector por la representación de Santo Domingo y Cuba en las Cortes, resultó elegido diputado suplente el día 21 de septiembre de 1810. Formó parte de la comisión de Guerra creada el día 4 de octubre de 1810. Desertó de Cádiz publicando un manifiesto contra las Cortes. Fue declarado indeseable en el trienio liberal. Luchó por la independencia de Tejas.

3.- Felipe Amat Cortada

Diputado por el Principado de Cataluña. Formó parte de una comisión de seis notables creada el 25 de septiembre de 1810, y que estaba encargada de examinar la legitimidad de los poderes de los diputados que se fueran incorporando a las Cortes y elaborar un reglamento de puntos que deberían tratarse en las próximas sesiones de Cortes. Los seis notables que la formaban eludieron el encargo. No entendió el discurso de Muñoz Torrero en la sesión inaugural de Cortes cuando reclamó la soberanía nacional y la división de poderes.

4.- Tomás Aparicio Santis

Diputado por Salamanca. Canónigo y luego Deán de la catedral de Ciudad Rodrigo. Participó en un debate sobre las reales cédulas y no formó parte de comisión alguna. Voto en contra, junto con otros diputados realistas como Borrrul y Ostolaza, algunos algunos artículos del proyecto de reglamento de censura de prensa.

5.- Alonso Cañedo y Vigil.

Diputado por Asturias. Nacido en Candamo (Asturias) en 22 de enero de 1760. Estudió Leyes y Cánones en Oviedo y después en Salamanca, donde se ordenó sacerdote. Mostró un espíritu marcadamente antiliberal, siendo considerado como un clérigo ultramontano. Fue uno de los trece ponentes de la comisión encargada de elaborar el Proyecto de Constitución, siendo elegido Presidente de las Cortes.

6.- Florencio del Castillo.

Diputado por Costa Rica, por la ciudad de Cartago, -Capitanía General de Guatemala-. Nació en Ujarrás de Cartago el día 17 de octubre de 1778. Fue ordenado sacerdote. Catedrático en León (Costa Rica). Se ocupó de las cuestiones ultramarinas, a cuya comisión perteneció, propugnando una mayor igualdad social y política entre España y América. Opuesto los principios mercantilistas. Fue secretario de las Cortes, el 24 de octubre de 1812, Vicepresidente, el 24 de julio, y, Presidente, el 24 de mayo de 1813. Regalista como los la mayoría de los criollos. Solicitó la abolición de la Inquisición y que el Consejo de Estado perviviera, no basándose la división estamental de sus miembros, sino con vocales que fueran partidarios del nuevo estado. Intervino en las comisiones de Justicia y Sanidad.

7.- Vicente García Leaniz

Diputado por la ciudad de Soria. Alcalde de dicha ciudad. Su participación activa fue casi nula, salvo un discurso suyo donde quiso asegurar el traslado de las Cortes a Madrid, proponiendo el nombramiento de la diputación permanente.

8.- Juan Nieto y Fernández

Diputado por la provincia de Córdoba. Hermano del anterior. Sacerdote en la Carlota. Su participación política fue nula, ya que no realizó ninguna intervención parlamentaria, ni formó parte de ninguna comisión. Presentó un dictamen en el que se declaraba no haber lugar a deliberar sobre el proyecto de ley propuesto por la comisión de Constitución en el asunto del Tribunal del Santo Oficio.

9.- Blas Ostolaza

Diputado suplente por Perú. Nació en Trujillo (Perú). Estudió Teología en su ciudad natal y Leyes en Lima, llegando a ser rector del Colegio Conciliar de San Carlos (Trujillo) en 1804. Ya en España se unió en 1808 a la comitiva que acompañaba a Fernando VII a Francia, llegando a ser confesor del Rey en su destierro de Valençay hasta 1809. Participó muy activamente en los debates sobre la abolición del tributo indígena, y llegó a pedir que los negros fueran considerados ciudadanos. Criticó lo que consideraba una muy insuficiente representación americana en las Cortes, y se opuso al artículo 375 de la Constitución, considerando que aquéllas debían ratificarlo. Asimismo, fue uno de los primeros en solicitar la convocatoria de un Concilio Nacional, para tratar, entre otras medias, la salvación de la religión. Se mostró contrario a la abolición del llamado Voto de Santiago por considerar dicha medida como antipolítica y haberla llevado a cabo, con anterioridad, José Bonaparte, alegando que dividiría los ánimos y disminuiría nuestra fuerza moral, que consiste en la unidad de sentimientos y en la conformidad de nuestros esfuerzos contra el enemigo común. Informador, fue el firmante número 25 del llamado Manifiesto de los Persas y posiblemente uno de sus inspiradores.

10.- Salvador San Martín

Diputado suplente por el Virreinato de Nueva España. Prebendado de la catedral de Guadalajara. Tuvo muy escasa participación activa, formando parte de la comisión de honor e interviniendo una sola vez, en la del caso de un religioso emparedado en un convento. Se mostró partidario de la Inquisición. Acusó a los peninsulares de querer limitar el número de representantes ultramarinos. Formó parte de la comisión de Honor, encargada de recibir al Consejo de Regencia con ocasión del día de San Fernando, onomástica del Rey. Perteneció a la Diputación permanente de las Cortes. Fue firmante, número 49 , del llamado Manifiesto de los Persas.

11.- Joaquín Tenreiro y Montenegro

Diputado por la provincia de Santiago. Conde de Vigo. Coronel del ejército. Formó parte solamente de una comisión, la de Reglamento interior. Contrario a las reformas liberales. Sin embargo, como no había nacido en Galicia,

hecho que el mismo Tenreiro se encargó de comunicar a las Cortes, éstas acordaron que no podía seguir siendo diputado. Así pues, por certificado expedido por las Cortes se anuló su nombramiento de diputado. Fue uno de los delatores más destacados cuando la reacción absolutista de 1814, por lo detallado de sus informes sobre sus ex compañeros liberales y por las conclusiones que aportaba, sobresaliendo aquella afirmación suya sobre la aprobación del decreto de soberanía nacional del 24 de septiembre de 1810.

12.- Manuel Valcarcel y Saavedra

Diputado por Galicia. Abogado de la Real Audiencia de la Coruña, vocal de la Junta de Subsidios y Defensa de la ciudad y partido de Lugo. Vicepresidente de las Cortes. Formó parte de la comisión de Arreglo de provincias. Tuvo más bien una participación anodina, interviniendo solamente en dos debates. Las Cortes le concedieron una licencia de cuatro meses por motivos de salud.

CONSERVADORES

1.- Juan Antonio Andueza

Diputado por el Ayuntamiento de Chachapoyas, Virreinato del Perú. Nacido en 1770 de familia modesta, se doctoró en Leyes y ejerció la abogacía en la Real Audiencia de Lima. Era cura de Yungay cuando fue elegido el día 10 de diciembre de 1810. De ideología conservadora, consideraba que la tarea principal de las Cortes era acabar con la guerra contra Napoleón, antes que aspirar a un nuevo orden constitucional que solo traería problemas y descontentos. Perteneció a diversas comisiones, como las de Honor, Prebendas Eclesiásticas y Justicia. Volvió a América y apostó decididamente por la independencia de su país, siendo diputado por Trujillo en la primera Asamblea Constituyente, en 1822, y Presidente de la misma.

2.- Felipe Aner de Esteve.

Diputado por el Principado de Cataluña. Nacido en Barcelona en 1754. Abogado. Elegido como vocal de la Junta Superior el día 23 de febrero de 1810. Mostró su oposición al traslado de las Cortes a Cádiz desde la isla de León, proponiendo que se retrasara al máximo este traslado. De pensamiento conservador, aunque fluctúa entre absolutistas y liberales. En el artículo tercero sobre que la soberanía reside esencialmente en la nación, manifestó que la nación española no se haya en el caso de variar la forma de gobierno y por lo tanto que manifestar que la soberanía reside esencialmente en la nación y que a ella le pertenece el derecho de establecer sus leyes fundamentales y adoptar la forma de gobierno que más le convenga, manifestó que esta frase se podría interpretar como un menoscabo de la monarquía. A la propuesta de José María Calatrava sobre la unificación de los Códigos Civil y Penal expresó que en las actuales circunstancias no era posible porque cada provincia tenía sus propias leyes, usos y costumbres. Apoyó la propuesta del exequatur regio del diputado Sombiola, referente a las competencias del Tribunal Supremo de Justicia en los recursos de fuerza establecidos por el Concilio de Trento. Mantuvo su criterio opuesto al pensamiento centrista de los liberales para simplificar y uniformar la administración.

3.- Pedro Aparici y Ortiz.

Diputado suplente por Valencia. Nacido en Ayelo de Malferit (Valencia) en 1761. Abogado de los Reales Consejos del Colegio de Valencia y Relator en lo civil de su Audiencia. Partidario de la Inquisición como puntal de la fe, formó parte de la comisión de Poderes, de la comisión de Supresión de empleos, y de la comisión encargada de extender el decreto sobre señoríos, siendo uno de los firmantes de la Constitución. Fue elegido Secretario de las Cortes.

4.- Felix Aytes

Diputado suplente por Cataluña. Cura párroco de Agramunt (Lérida). Participó en la sesiones de Cortes, perteneciendo a la comisión de Hacienda, y a la comisión de Agricultura, compuesta por cinco diputados, siendo sustituido por el diputado mallorquín Guillermo Moragues. Se mostró partidario de la Inquisición.

5.- José Aznarez

Diputado suplente y luego propietario por Aragón. Fiscal de los cuerpos y tropas de la Casa Real, Auditor de Guerra del Ejército de Andalucía, abogado del Ilustre Colegio de Madrid, y de los Reales Consejos. De ideología conservadora, fue elegido Secretario de las Cortes, y posteriormente Vicepresidente. Apostó por la reforma judicial, siendo una de sus prioridades la de uniformar la pluralidad jurídica que había prevalecido a lo largo del Antiguo Régimen; y firmó la Constitución. Fue informante con la reacción anticonstitucional

6.- Francisco Javier Borrull y Villanova

Diputado por la provincia de Valencia. Nacido en Valencia el 3 de diciembre de 1745. Estudió en el Seminario de Nobles, se licenció en ambos Derechos fue Secretario del Santo Oficio y Juez por su Majestad de Diezmos, Tercios y Primicias, desempeñó la cátedra de derecho Civil en la Universidad de Valencia. Conservador de cierta moderación y de principios tradicionalistas, contrario al jacobinismo liberal y centralizador, viene a ser el único diputado realista que mantiene el carácter estamental y territorial de la representación política. Defendió la permanencia de la Inquisición. Acusó las Cortes de experimentar un progresivo afrancesamiento de sus ideas.

7.- Ramón Lázaro de Dou y de Bassols.

Diputado provincial por Cataluña. Elegido primer presidente de las Cortes. Nacido en Barcelona el 11 de febrero de 1742, estudió Derecho en Cervera, ganando en 1770 la cátedra de Decretales de Cervera. Se ordenó sacerdote y publicó “Las Instituciones de Derecho Público General de España y particular de Cataluña”. Votó la soberanía nacional. Intervino en los debates sobre la abolición del tormento, la libertad de imprenta, la organización de las provincias, la reforma de la Hacienda y el reglamento del Consejo de Regencia. Partidario de la contribución directa única, proyectada ya por el Marqués de la Ensenada, con la supresión de las rentas provinciales y conservación de las aduanas y algunos monopolios.

8.- Pedro González Llamas

Diputado por la provincia de Murcia. Fue mariscal de Campo de Infantería en 1795, Teniente General en 1808 y perteneció al Consejo Supremo de Guerra. De pensamiento tradicional, fue un declarado defensor de las leyes fundamentales o Constitución histórica, mostrándose claramente contrario a la libertad de imprenta. Formó parte de la comisión encargada del Examen de las operaciones de los ex regentes durante su Gobierno y, fue sustituido por Riesco en la comisión de Premios. Fue uno de los firmantes de la Constitución, a pesar de su negativa a hacerlo en los primeros momentos, pues, en la sesión secreta del 17 de marzo, alegaba que sus principios y sentimientos no le permitían firmar ni jurar la nueva Constitución y que anticipaba esta declaración para que las Cortes determinasen lo que les pareciese justo y conveniente.

9.- Francisco Gutiérrez de la Huerta

Abogado de los Reales Consejos, era natural de Salinas del Rocío y vecino de Madrid. Considerado comúnmente como un destacado jurista de opiniones muy conservadoras. Fue elegido Diputado suplente por la provincia de Burgos, formando parte de varias comisiones como encargada de la elaboración del Reglamento de las Cortes y la de la elaborar la Constitución. También perteneció a la comisión especial para estudiar el restablecimiento de la Inquisición. Miembro del Tribunal de las Cortes, presentó su renuncia del mismo, al no estar de acuerdo con el proceder de dicho Tribunal, siendo sustituido por el diputado Ramón Utgés.

Elegido Vicepresidente de las Cortes. Sobre la división territorial propugnada por los liberales, estuvo de acuerdo con ella, argumentando que era necesaria por lo complicado que resultaba la administración de la justicia y la recaudación de las rentas.

10.-Pedro Inganzo y Rivero.

Diputado provincial por el Principado de Asturias. Nació en la Herrería (Llanes) el 22 de diciembre de 1764. Acabó la carrera de Leyes que ya había comenzado en Oviedo. Se doctoró en Derecho Canónico y obteniendo la cátedra. En 1797, durante su estancia en Madrid, tomó contacto con las ideas jansenistas. Participó en diversos debates, tales como Proyecto de Constitución, abolición de la Inquisición y estado de la administración pública. Tachado de delator, en 1820

11.- Francisco López Lisperguer

Diputado suplente por el Virreinato de Buenos Aires. Abogado. De marcado carácter conservador. Defensor acérrimo de una clase criolla, madura e ilustrada, y de los derechos de los indios. Formó parte, junto a otros diputados americanos, como Mejía Lequerica, Power o Inca Yupanqui, de la comisión encargada de informar a las provincias americanas del proceso de instalación de las Cortes y de todo lo relativo al procedimiento de elección de diputados. También formó parte de la comisión destinada a examinar los empleos y pensiones.

12.- Ramón López Pelegrín

Diputado por la Junta Superior y de Observación y Defensa del Señorío de Molina de Aragón. Miembro de la Chancillería de Valladolid. Procurador general del Señorío de Molina de Aragón. Ministro de la Junta Suprema de Represalias, fue elegido para la Junta de Censura, siendo vicepresidente de la misma. Formó parte de la comisión de Arreglo de las provincias y también perteneció a la comisión de Agricultura.

13.- Ramón de Lladós

Diputado por la provincia de Cataluña. Presbítero. Formó parte de la comisión para examinar los poderes de los diputados que se iban incorporando a

las Cortes, sustituyendo a Valcárcel Peña en la comisión de Arreglo de las provincias. Formó parte de cuatro comisiones, Poderes, Hospitales de campaña, Premios y Exámenes de Memoriales. Participó solamente en tres debates, sobre la libertad de comercio, señoríos, y ascensos militares, votando en contra de los territoriales. Votó en contra de la supresión de los gremios. Formó parte de la comisión de Examen de memoriales, junto con Vadillos y Silves.

14.- Plácido de Monteoliú y de Brú

Diputado por Cataluña, por la ciudad de Tarragona, fue regidor decano y caballero del Hábito de San Juan. Formó parte de la comisión de Justicia. Presentó en las Cortes junto con varios oficiales de las Milicias Urbanas de la ciudad, para formar de nuevo este cuerpo después de su liberación, poniendo de relieve para ello los relevantes servicios prestados.

15.- José Luís Morales

Diputado por Sevilla. Fiscal togado del Tribunal Extraordinario de Seguridad Pública en Sevilla. Formó parte en 12 comisiones en las que participó en muchos debates. Perteneció la comisión para el arreglo de las provincias y a la comisión encargada de extender el decreto sobre señoríos. Admitió el principio de la soberanía nacional pero puso una serie de objeciones. Contrario a la libertad imprenta. En el debate sobre el poder judicial abogó por la unidad de jurisdicción.

16.- Vicente Noguera Climent

Diputado por la Junta Superior de Valencia. Barón de Antella. Vocal de la Junta Superior y Oidor decano de la Real Audiencia de Valencia. Propuso amonedar la plata que había en Cádiz, tanto si se encontraba en barras como la que estaba labrada, para que sirviera de hipoteca para los préstamos que exigían las circunstancias del momento. Formó parte de la comisión de empleos y pensiones y de la de Inspección del Diario de Cortes. Fue elegido Presidente.

17.- Pedro María Ric y Monserrat- Barón de Valdeolivos

Diputado por la Junta Superior de Aragón, Consejero Real, regente de la Audiencia de Aragón y magistrado de la misma. Formó parte de las comisiones de Proyecto de Constitución, Libertades individuales, Tribunal de Cortes, Honor, y

Justicia. En esta última se encargó de examinar la exposición del obispo de Orense. Votó a favor de la Inquisición pero también de la soberanía nacional y de la libertad de imprenta, interviniendo en un gran número de debates, y uno de los firmantes de la Constitución. Fue el diputado por Aragón que más peticiones presentó, exponiendo en las Cortes cualquier clase de escrito que le enviaban desde su jurisdicción.

18.- Mariano Rodríguez Olmedo

Nacido en Guarganqui el 24 de septiembre de 1771, se doctoró en Teología por la Universidad de Alcalá de Henares. Canonjía de la ciudad de la Plata, capital de Charcas. Como diputado electo, formó parte de dos comisiones, la de Honor, y la de Festividad por la onomástica del Rey, y participó en tres debates, destacando su petición de crear una Universidad en Charcas. Propuso también destinar las rentas de la extinta Inquisición para atender cátedras de agricultura, mineralogía y medicina e hizo continuas proposiciones en pro de la educación de su provincia.

19.- Celestino Sánchez

Diputado por la provincia de Sevilla. Cura de San Isidro. Tuvo una muy escasa participación. Fue, más de una vez, objeto de las iras del pueblo asistente a las sesiones de Cortes, siendo insultado y hasta amenazado. Como consecuencia de ello, se formó una comisión que acordó tomar las medidas oportunas para que no quede impune este exceso, y se eviten otros atentados de semejante naturaleza.

20.- Ramón de Sanz Sanchez de Barutell

Diputado por Cataluña, por la ciudad de Barcelona. Nació en Barcelona en 1764. Alférez de fragata. Participó en la campaña marítima del Rosellón y Cataluña contra la Francia revolucionaria. Regidor perpetuo de Barcelona y Caballero de Justicia de la Orden de San Juan,

Formó parte de la comisión de Guerra y presentó una razonada proposición para que se nombrara los oficiales que debían trabajar en la secretaría de las Cortes. Partidario de que las sesiones de Cortes fueran públicas porque, según argumentaba, así se ganaban la confianza de la Nación, se mostró en contra de la libertad de imprenta.

21.- Juan Bautista Serres

Diputado provincial suplente por Cataluña. Abogado. No participó en ningún debate, aunque perteneció a las comisiones de Arreglo de provincias, Examen de memoriales, Confiscos y Secuestros, y Elecciones en León. Sustituyó a Rovira en la comisión de Poderes y formó parte de la comisión de Premios. Partidario de seguir las tradiciones en los medios de producción, mostrando su rechazo contra el decreto que pedía la supresión de los gremios.

22.- Francisco Sierra

Diputado por el reino de Valencia. Nacido en Chilches (Castellón de la Plana). Presbítero beneficiado de la Iglesia parroquial del Salvador y bibliotecario archivero diocesano. Perteneció a la comisión Eclesiástica, publicando en Cádiz un Dictamen leído sobre el artículo primero del proyecto de decreto acerca de los tribunales protectores de la religión. Considerado como un sacerdote antirromano y ultrarregalista. Se le nombró para la comisión de Biblioteca de las Cortes.

23.- Tamarit, Marques de (Juan de Suelves y de Montserrat)

Diputado suplente por el Principado de Cataluña. Formó parte de la comisión del Arreglo de las provincias y de la comisión especial encargada de recibir a la Regencia.

24.- Alonso María Torres Guerra y Lorenzo de Mendoza

Diputado por la provincia de Cádiz. Nacido en Sevilla en 1754. Guardiamarina y capitán de fragata. Tuvo una relativa participación, perteneciendo a las comisiones de Premios, Honor y Cortes. Partidario de fomentar la construcción de buques en América y Filipinas, y de la fabricación de útiles necesarios a este efecto, siempre y cuando el comercio con estos territorios se hiciera en buques con patente y bandera nacional, así como sus tripulantes, admitiéndose, en todo caso, una tercera parte de tripulación extranjera. Formó parte de las comisiones de Comercio, Marina y Guerra. Fue elegido Vicepresidente de las Cortes.

25.- Antonio Vázquez de Parga y Bahamonde

Diputado por la provincia de Lugo. Subdelegado de Rentas Reales y abogado de los Reales Consejos. Formó parte de la comisión para elaborar el reglamento de las Cortes y de la de Poderes. También formó parte de las comisiones de Hacienda, Justicia y Agricultura.

26.- Villafranca Marques de (Francisco de Borja Alvarez de Toledo y Osorio)

Diputado por la Junta Superior y Defensa de Murcia. Grande de España de primera clase y Gentil hombre de Cámara. Presidente de la Junta Superior. Teniente General del reino de Murcia. En el debate sobre el regente Lardizábal se manifestó partidario de atenerse a las leyes establecidas, y no por medidas más radicales. Abogó por un criterio de movilidad a voluntad de las propias Cortes, que fue el que en definitiva se aprobó. Perteneció a la comisión de Guerra, en la que propuso la creación de un establecimiento militar para los inválidos, al tiempo que reprochó a ciertos diputados el excesivo afán que tenían por pedir responsabilidades sobre la marcha de la guerra. Fue elegido como Secretario de las Cortes. Formó parte de la comisión de Premios.

Esta relación esta obtenida fundamentalmente a través de extractos obtenidos por la documentación existente referida a la Constitución de Cádiz de 1812; de la información existente en red <http://www.cadiz2012.es> así como de la obra impresa de Jose María García León: Los diputados doceañistas. Quorum editores. Cádiz 2012. Asimismo, de las obras referidas a los diputados por cada uno de los territorios:

- Federico Rahola y Tremols: *Los diputados por Cataluña en las Cortes de Cádiz* Barcelona 1912

- Francisco Caballero Mesa: *La política andaluza en las Cortes de Cádiz* Málaga 1911

- Manuel Morán Ortí: *Poder y gobierno en las Cortes de Cádiz (1810-1813)* Pamplona 1986

- Emilio La Parra López: *El primer liberalismo en la Iglesia*. Alicante 1985
- Jose Luis Millán Chivite: *Representación andaluza y pensamiento político en las Cortes de la isla de León y Cádiz* (1810-1813), Gades, Cádiz, 16 (1987)
- Marie Laure Rieu Millán: *Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz*, Madrid, 1990
- Francisco Molla Jimenez y Celestino Rey Joly: *El ejercito y la marina en las Cortes de Cádiz*, Cádiz ,1912
- Javier Paniagua, y José A. Piqueras, (dirs.): *Diccionario Biográfico de Políticos Valencianos 1810-2005*, Institució Alfons el Magnànim.
- Federico Suárez Verdaguer: *Las Cortes de Cádiz*, Madrid, 1982
- Enric Jardí *Els catalans de les Corts de Cadis*. Barcelona 1963
- Concepción Torres Liarte: *Los diputados aragoneses en las Cortes de Cádiz* (1808-1814) Zaragoza, 1987.
- Manuel Ardit: *Els valencians de les Corts de Cadis*, Barcelona 1968
- Miguel Perfecto García y Javier García Martín: *Los diputados salamantinos en las Cortes de Cádiz*
- Joseba Agirreazkuenaga *Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia (1808-1976)*, Victoria, 1993
- María Teresa Berruezo León,: *La participación americana las Cortes de Cádiz (1810-1814)*, Madrid.
- *Diccionario biográfico de la Guerra de la Independencia*.
- Román Gómez Villafranca: *Los extremeños de las Cortes de Cádiz*, Badajoz, 1912.

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

FUENTES IMPRESAS

Archivo Histórico Municipal

- Edicto de la Junta de Presidencia, Cádiz 17 de julio 1810
- Real Decreto del Consejo de Regencia, 20 septiembre 1810

Biblioteca Provincial de Cádiz

- Guía Política de las Españas para el año 1813. Cádiz. Imprenta Real
- Reglamento para el gobierno interior de las Cortes. Cádiz, en la Imprenta Nacional, año 1813.

Biblioteca de Temas Gaditanos

Colección de Órdenes y Decretos de las Cortes de Cádiz, Madrid, reedic 1987:

1811

- 9 feb. En que declaran algunos derechos de los americanos
- 18. feb. Traslación de las Cortes desde la Rea Isla de Leon a la ciudad de Cádiz.
- 22 abr. Abolición de la tortura y de los apremios y prohibiciones de otras prácticas aflictivas.
- 6 agos. Incorporación de los señoríos jurisdiccionales a la Nación; los territoriales quedaran como propiedades particulares.
- 3 sep. Reconocimiento de la deuda Pública.
- 22 sep. Celebración del aniversario de la instalación de las Cortes

1812

- 8 jun. Reglamento del Consejo de Estado
- 16 jun. Reglas para verificar la aplicación de parte de los diezmos a las urgencias del estado
- 10 jul. Reglas sobre la formación de los Ayuntamientos constitucionales
- 14 oct. Abolición del Voto de Santiago
- 22. feb. Abolición de la Inquisición. Establecimiento de los Tribunales de Fe.
- 22 feb. Se declaran nacionales los bienes que fueron de la Inquisición, varias medidas sobre su ocupación y sobre el sueldo y destino de los individuos de dicho Tribunal.

Ordenes

1810

- 8 jun y 23 dic. Relativas a los sueldos y dietas de los señores Diputados de Cortes

1811

- 10, 13 y 21 jun. Relativas a los sueldos y dietas de los señores Diputados.
- 6 julio. Por la cual se aprueba el establecimiento del Estado Mayor general permanente.

- Diario de Sesiones y otras fuentes parlamentarias.
- Actas de la Diputación General de Españoles que se juntó en Bayona el 15 de junio de 1808, Madrid, Imprenta y Fundición de J. A. García, 1874.
- Actas de la Comisión de Constitución, en Francisco Suárez Verdaguer (Ed.), Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1976.
- Diario de las Discusiones y Actas de las Cortes (1810-1813), 23 vols., Cádiz, Imprenta Real (vols. 1-16), Imprenta Nacional (vols. 17-19) e Imprenta de D. Diego García Campoy (vols.20-23), 1813.
- Diario de Sesiones de las Cortes. Legislaturas de 1812-1821, 1821, 1821-1822 y 1822-1823, 10 vols., Madrid, Imprenta de J. A. García, 1871-1875.
- Diario de Sesiones de las Cortes. Estamento de Procuradores. Legislaturas de 1834-1835, 1835-1836 y 1836, 5 vols., Madrid, Imprenta de J.A. García 1867-1869.
- Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de 1836-1837, 10 vols., Madrid, Imprenta de J.A. García, 1876-1877.
- Diario de Sesiones de las Cortes. Congreso de los Diputados. Legislaturas de 1837, 1838, 1839 y 1840, 13 vols., Madrid, Imprenta de J.A. García, 1874-1875.

FUENTES DOCUMENTALES 505 – 511

ANTILLÓN, I., de *Carta de de aragonés rediente en Mallorca a su amigo D.M.J.Q. establecido en Cádiz sobre la necesidad de asegurar con leyes eficaces la libertad de! ciudadano contra los atropellamientos de las fuerzas armadas*, Mallorca, 1811.

Apuntes sobre el bien y el mal de España o ensayo sobre las causas de la decadencia y los medios de la restauración política de España e Indias, Cádiz, 1810.

Agustín de Arguelles: Su sabiduría, su piedad, su verdadero amor por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, su todo. Contra los egoístas, déspotas, usurpadores y contra los ignorantes preocupados. Por F.M.C.N., Cádiz, 1814.

CAPMANY, A., *Centinela contra los franceses*, Manresa, 1808.

Exposición preparatoria por... que hizo en la sesión pública de septiembre de 1812, antes de antes de abrirse la discusión sobre la minuta de decreto contra los que han servido al gobierno intruso, Cádiz, 1812

Discurso pronunciado en la sesión pública de las Cortes el día 9 de agosto de 1813, denunciado el impreso intitulado “El defensor acérrimo de los derechos del pueblo”, Cádiz, 1813.

Exposición que a favor del Ayuntamiento hizo el Sr. Diputado... en la sesión pública de las Cortes el día 13 de junio de 1813,

Carta del modo que tal vez convendría a las Cortes seguir en el examen de los objetos que conducen a su fin y dictamen sobre ellos, Cádiz: Imprenta de Manuel Jiménez Carreño, s.a.

Carta al señor D. Antonio Capmany, por D. Juan Nicasio Gallego, Cádiz, 18 de agosto 1811.

Carta del modo que tal vez convendría a las Cortes seguir en el examen de los objetos que conducen a su fin y dictamen sobre ellos, Cádiz: Imprenta de Manuel Jiménez Carreño, s.a.

Carta sobre el establecimiento del Tribunal de la Inquisición por el Dr. D. Blas Ostolaza, capellán de honor, confesor de S. M. católica el Sr. Fernando VII y diputado en las Cortes de Cádiz. Imprenta de Manuel García Quintana.

Carta de Juan de la nación y Juan Vecino, escrituras para la instrucción del pueblo sobre la soberanía y sobre el Rey, por D. Damián Tubiols, Cadiz: Imprenta Manuel Santiago de Quintana y Martínez, octubre 1811.

Catecismo Patriótico. Cádiz: Oficina de Gómez de Requena, 1809.

Catecismo político arreglado a la Constitución de la Monarquía Española, para ilustración del pueblo, instrucción de la juventud y uso de las escuelas de primeras letras por D. J. C., Cádiz: Imprenta de Lema, 1812.

Censuras de las Cortes y Derechos del pueblo español y de cada uno de los miembros que componen con respeto el Congreso Nacional y a los que lo forman. Por el ciudadano Gonzalo Luna y Montojo, Cádiz: Imprenta de Manuel Quintana, 1811.

Constitución política de la Monarquía Española, Cádiz, 1812.

Consejo de Regencia a la Nación Española en el día de San Fernando, Cádiz: Imprenta real, 1811.

Consejos de Regencia de España e Indias a la América Española, Cádiz: Imprenta real, 1811.

Contestación de autor del Diccionario critico burlesco a la Primera Calificación de esta obra expedido por la Junta Central de la provincia Marítima de Cádiz, Cádiz, 1812.

Conversaciones militares, por D. Francisco Fernández Golfín. Conversación primera, sobre la moral militar, Cádiz: Imprenta Patriótica de Ramón Vergés, 1813.

Diccionario razonado, manual, para inteligencia de ciertos escritores que por equivocación han nacido en España. Aumentado en más cincuenta voces y una receta eficacísima para matar insectos filosóficos. Obra útil y necesaria en nuestros días, 2ª ed., Cádiz: Imprenta de la Junta Superior, 1811.

Discusión del proyecto del decreto sobre el Tribunal de Inquisición, Cádiz: Imprenta Nacional, 1813.

GARCIA QUINTANA, Domingo: *Proyecto Especulación patriótica para encontrar un buen y pronto socorro con que acudir a las necesidades urgentes,* Isla de León, 1810.

Incompatibilidad de la libertad española con el restablecimiento de las Inquisición, por Ingenio Tostado. 11 octubre 1811.

Informe sobre el Tribunal de la Inquisición sobre el proyecto de decreto acerca de los tribunales protectores de la religión, presentado a las Cortes Generales y extraordinarias por la Comisión de Constitución, Cádiz: Imprenta Tormentaria, 1812.

Informe sobre las Cortes Constitucionales, Cádiz: Imprenta de Niel, 1811.

Instrucción jurídica al papel intitulado el patriotismo perseguido a traición por la arbitrariedad y el egoísmo, Cádiz: Imprenta Real, 1810.

LAZÁN, marqués de: *Exposición en justa defensa de la opinión de su hermano, el Capitán General de Aragón, D. Jose Palafox y Melci, contradiciendo el papel titulado "Cuadro de la Espala desde el reinado de Carlos IV", dado a la luz por el Coronel D. Ignacio Garcigny,* Cádiz: Imprenta Real, 1812.

LOPEZ DE OR, Simón: *Despertar cristiano-político en que se manifiesta que los autores del trastorno universal de la iglesia y de la Monarquía son los filósofos francmasones: se descubren las artes diabólicas de que se valen y se apuntan los medios de atajar sus progresos*, Cádiz, 1810.

Memoria sobre los medios de hallar dinero por los gastos de la guerra en que está empeñada la España mediante una deuda nacional con la correspondiente hipoteca. Su autor Ramón Lázaro Dou, Cádiz, 1811.

El observador del congreso. Los conciudadanos que mas realzan el merito de las Cortes Generales y extraordinarias de la Nación española, con cinco estados en que se desganan los diputados que discutían y votaron contra ellas, Cádiz, Imprenta Patriótica, 1812.

OSTOLAZA, Blas: *Sermón patriótico moral por los españoles emigrados de los países ocupados por el enemigo común*, Cádiz, 1810, Madrid: Imprenta de la Compañía, 1814.

El Patriotismo a la moda. Sátira de F.P.V., Cádiz: Imprenta de Manuel Jiménez Carreño, 1813.

PEINADO, José Maria: *Instrucción para la Constitución fundamental de la Monarquía Española y su Gobierno dada por el Ayuntamiento de Guatemala a su Diputado Don Antonio Larrazábal*, Cádiz: Imprenta Junta Superior, 1811.

Respuestas a las reflexiones que hacen contra la Inquisición el Seminario Patriótico numero 61 y periódico titulado El Español, numero 13 y breve aviso a los señores arzobispos, obispos y diputados en Cortes, Cádiz: Imprenta de Nicolás Gomez de Requena, 1811.

Resultado de la causa en averiguación de los autores y cómplices de las órdenes falsas que se circularon a fin de poner sobre las armas los regimientos provinciales por D. Ignacio Martínez de Villela, Cádiz, 1820.

RUIZ DE ALCALÁ, Antonio: *Defensa de D. Miguel de Lardizábal, presentada en 4 de mayo de 1812 ante el Tribunal especial creado por las Cortes Generales y Extraordinario*, Cádiz, 1813.

RUIZ DE PADRON, Antonio: *Carta sobre varios puntos de su dictamen en orden al Tribunal de la Inquisición, leído en sesión pública de 18 de enero del año corriente de 1813*.

TERRERO, Vicente: *Refutación del periódico de la Triple Alianza en su número 2. Manifiesta los errores que contiene aquel papel contra las verdades de la santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana*, Cádiz: Imprenta de Antonio Murguía, 1811.

URIORTÚA. F.: *De la tendencia sobre la necesidad de variar la representación nacional que se ha de convocar en las futuras Cortes*, Cádiz, 1810.

VADILLO, José Manuel: *Reflexiones sobre la urgencia de remedio a los graves males que hoy se padecen en España por causa de muchas monedas que circulan en ella*, Cádiz, 1846.

VILLANUEVA, Joaquín Lorenzo: *Apuntes sobre el arresto de las vocales de Cortes. Ejecutado en mayo de 1814. Escritos en la cárcel de la corona*, Madrid: Imprenta de Diego Garcia Campoy y Compañía, 1820.

- *Las angélicas o el tomista en las Cortes*, Imprenta de la Junta de la Provincia, 1811.

- *Dictamen acerca de la segunda proposición preliminar del proyecto de decreto sobre los tribunales protectores de la religión. Leído en las sesiones de los días 20 y 21 de enero*, Cádiz: Imprenta de Diego García Campoy, 1813.

FUENTES BIBLIOGRAFICAS

- ALCALÁ GALEANO, A., *Memorias*, Madrid, 1955
- ALMAGRO, Melchor Fernández. *Del antiguo régimen a las Cortes de Cádiz. Revista de estudios políticos*, 1962, no 126, p. 9-30.
- ALVARADO, F. F., (*El Filósofo Rancio*): *cartas Criticas en la que con la mayor solidez erudición y gracia se impugnan las doctrinas y máximas perniciosas de los nuevos reformadores y se descubren sus perversos designios contra el religión y el Estado*, Madrid, 1824
- ANTILLON. I., *Quatro verdades útiles a la nación, extraídas de algunos escritos españoles*, Palma de Mallorca, 1810.
- ARGÜELLES, Agustín, *Examen histórico de la reforma constitucional que hicieron las Cortes Generales y Extraordinarias en Cádiz*, 2 vols, Londres, 1835.
- *La reforma constitucional de Cádiz*. Iter ediciones, Madrid, 1970.
- BAYO. E., *Historia de la vida y reinado de Fernando VII, Rey de España, con documentos justificativos, ordenes reservadas y numerosas cartas del mismo monarca*, t.i., Madrid: Imprenta Repullés, 1842.
- BLANCO WHITE J. M., *Autobiografía* (ed. Y notas de Antonio Garnica), Sevilla, 1975.
- *Cartas de España* (introd. De Vicente Llorens y ed, y notas de Antonio Garnica), Madrid, 1986.
 - *Cartas de Juan Sintierra (Critica de las Cortes de Cádiz)* (ed. De Manuel Moreno Alonso), Sevilla, 1990
 - *Semanario Patriótico*. Sevilla 1809.
- BORREGO, A., *De la institución y de los intereses de España en el movimiento reformador de Europea*, Madrid, 1848.
- LE BRUN, CH., *Retratos políticos de la revolución de España*, Filadelfia, 1826.
- CASTRO, A., (atribuida a): *Cádiz en la guerra de la independencia (cuadro histórico)*, 2ª ed. Cádiz, 1865.
- *Cortes de Cádiz, Complementos de lasa sesiones verificadas en la Isla de León y en Cádiz*, vols. I y II, Madrid, 1913.
- ESCALERA, M., *Nomenclátor de las calles de Cádiz. Explicación del significado de cada uno de sus nombres*, Cádiz, 1856.
- ESCOQUIZ, J., *Memorias*, Madrid, 1957.
- FLÓREZ ESTRADA, A., *Constitución política de la nación española en lo tocante a la parte militar*, Cádiz, 1813
- *En la defensa de las Cortes. Con dos apéndices, uno sobre la libertad de imprenta y otro, en defensa de los derechos de reunión y asociación*, Madrid, 1973.
 - *Examen imparcial de las disensiones de la América con la España, de medios de su reconciliación y de la prosperidad de todas las naciones*, Cádiz: Imprenta de Manuel Jiménez Carreño, 1812.

- “Constitución para la nación española presentada a S. M.” La Junta Suprema Gubernativa de España e Indias en 1 de noviembre de 1809.
- *Obras*, BAE, 1958.
- FUENTE, V., de al: *Historia de las Sociedades Secretas, antiguas y modernas en España y especialmente la Masonería*, t.i., Madrid, 1847.
- GALLARDO, B. J., *Diccionario crítico burlesco*, Madrid, 1838.
- GARCIA DE LEÓN Y PIZARRO, J., *Memorias* (ed. Pról. Apéndices y notas de Álvaro Alonso castillo), vol. I, Madrid, 1953.
- MARIANA, P., *Historia general de España*, t. III, Madrid: Imprenta y Librería Gaspar Roig, 1835.
- MARTINEZ DE LA ROSA, F., *El espíritu del siglo*, T. vi, Madrid, 1843
- MARTINEZ MARINA, F., *Teoria de las Cortes o Grandes Juntas Nacionales de los reinos de León y Castilla, con algunas observaciones sobre la ley fundamental de la monarquía española sancionada por las Cortes Generales y Extraordinarias y promulgada en Cádiz a 19 de septiembre de 1812*, Madrid: Imprenta de Fermín Villalpando, 1813.
- MARTÍNEZ NAVAS, Isabel, “La convocatoria de las Cortes” en *Cortes y Constitución de Cádiz*. Tomo I.
- LLORENTE, J., *Historia critica de la Inquisición en España*, t. IV, Madrid, 1981.
- QUIN, Michael J.: *Memorias históricas de Fernando VIII*, t. I, Madrid 1840
- QUINTANA, Manuel Jose: *Cartas de Holland. Obras completas*, t. XIX, Madrid 1945.
- *Memorial del Cádiz de las Cortes* (ed. de Fernando Durán López), Cádiz, 1996.

- SAN MIGUEL, Evaristo: *Vida de Don Agustín de Argüelles*, t. I, Madrid, 1857.
- SANTILLÁN, Ramón de: *Memorias* (Ed. y notas de Ana María Berazaluze), t. I, Pamplona, 1960.
- TORENO, conde de: *Historia del levantamiento, guerra y revolución en España*, t. III, Madrid, 1835.
- VARGAS Y PONCE, José: *Servicios de Cádiz desde MDCCCVIII a MDCCCXVI*, Cádiz: Imprenta de la Misericordia, 1818.
- VÉLEZ, P. Rafael: *Apología del Altar y del Trono o Historia de las reformas hechas en España en tiempo de las llamadas Cortes, e impugnación de algunas doctrinas publicadas en la constitución, Diarios y otros escritos contra la Religión y el Estado*, 2 vols. Madrid: Imprenta de Cano, 1818.
- *Preservativo contra la irreligión o los planes de la Filosofía contra la religión y el Estado, realizados por la Francia para subyugar la Europa, seguidos por Napoleón en la conquista de España y dada a la luz por algunos de nuestros sabios en perjuicio de nuestra patria*, Cádiz: Imprenta de la Junta de Provincia, 1812.
- VILLANUEA, Joaquín Lorenzo: *Apuntes sobre el arresto de los vocales de Cortes. Ejecutado en mayo de 1814. Escritos en la cárcel de la corona*, Madrid: Imprenta de Diego García Campoy y compañía, 1820.

- “Mi viaje a las Cortes”, en ARTOLA GALLEGO, Miguel (ed): *Memorias de tiempos de Fernando VI*, t. II, Madrid 1957.

ZACCONNE, Pedro: *Historia de las sociedades secretas, antiguas y modernas*, t. I., Madrid, 1880.

BIBLIOGRAFÍA

AABYE KIERKEGAARD, Soren: *Postscriptum no científico y definitivo a Migajas Filosóficas*, traducción castellana de Javier Teira y Nekane Legarreta, editorial Sígueme, Salamanca. 2010.

ABELLÁN, J. L., *Historia del pensamiento español: de Séneca a nuestros días*. Espasa Calpe, 1996.

ADAMS, John, *Thoughts on Government: Applicable to the Present State of American Colonies*. Vol. 4 Works Boston 1855, 1776

- *A Defence of the Constitutions of Government of the United States of America*. Works Boston 1855, 1787.

AGIRREAZKUENAGA, Josefa y otros: *Diccionario biográfico de los parlamentarios de vasconia (1808-1976)*, Vitoria, 1993.

AGUADO, A. *Política española, para el más proporcionado remedio de nuestra Monarquía*. Madrid, 1746.

- “Liberalismos y ciudadanía femenina en la formación de la sociedad burguesa”, en Chust; Frasquet (eds.), 2004.

AGUIAR, A. (ed.) *La constitución de Cádiz de 1812. Hacia los orígenes del constitucionalismo iberoamericano y latino*, Caracas: UCAB, 2004.

AGUILAR, Enrique, *Benjamin Constant y el debate sobre las dos libertades*, Revista Libertades 28 (mayo 1998).

- *La libertad política en Montesquieu: su significado*. Filosofía política contemporánea. Argentina, 2003.

ALBERICH, José: “La imagen de Inglaterra en la España de ochocientos”, *Gades* (Cádiz), 10 (1982), 1982.

ALBORNOZ, A., *La tragedia del Estado español*. Caro Raggio, Madrid, 1925.

ALCALÁ, A. *Inquisición española y mentalidad inquisitorial*. Barcelona.

ALDEA, Quitín: *Diccionario de Historia Eclesiástica de España*, Madrid, 1975.

ALMARIO, Oscar. Del nacionalismo americano en las Cortes de Cádiz al independentismo y nacionalismo de Estado en la Nueva Granada, 1808-1821. *Boletín de Historia y Antigüedades*, 2008, vol. 840, p. 22-45.

ALONSO TEJADA, L. (1969). *Ocaso de la Inquisición*. Vizcaya. Reforma/abolición del Tribunal de la Inquisición (1812-1823) Manuscripts 17, 1999.

ALGUACIL PRIETO, Maria Luisa: “Proyecto y texto definitivo de la Constitución de 1812. Discurso preliminar. Facsímiles de la primera y últimas páginas de firmas de las Constituciones”, *Revista de las Cortes Generales* (Madrid), 1987.

ALMUIÑA FERNÁNDEZ, Celso Jesus: *Formas de resistencia frente a los franceses. El concepto de guerra total*, colaboración al volumen colectivo

Repercusiones de la Revolución francesa en España, Universidad Complutense, Madrid, 1990.

ALMUNIA FERNANDEZ, Celso y SANCHEZ MOVELLAN, Elena: “La Constitución gaditana. El marco histórico inmediato y sus azarosas proclamaciones”, *Gades* (Cádiz), 16 (1987).

ANTONIO MARAVALL CASESNOVES, José: (1911-1986), *Carlos V y el pensamiento político del Renacimiento*, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1960, Parte primera, Capítulo primero: *Medievalismo y Renacimiento*, págs.7-36, la cita en página 9. Hay reedición de esta monografía, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1999; Id, *La ilustración en España*, en la revista *Arbor* (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid), número 114, 1955, págs. 345-349; Francisco Javier Caspístegui, *José Antonio Maravall entre el medievalismo cultural y el historiográfico*, en *Revista de Historia Jerónimo Zurita*, número 82, 2007.

ALONSO BAQUER, Miguel: “La doctrina de los diputados de Cádiz”, *Revista de Historia Militar* (Madrid), 3 (1972).

ALONSO DE ANTONIO, Ángel Luis: *La Diputación Permanente de las Cortes en la Historia Militar Constitucional Española*, Madrid, 1991.

ALONSO-FUEYO, Sabino. *Saavedra Fajardo: el hombre y su filosofía*. Editorial Guerri, 1949.

ALTMANN, Alexander: *Moses Mendelssohn*, Philadelphia, 1973.

ÁLVAREZ ALONSO, CLARA (2006): “¿El abandono de la edad de la tutela? Algunas cuestiones sobre el constitucionalismo revolucionario”, en Álvarez Junco; Moreno Luzón (eds.).

- “Catecismo político de la primera etapa liberal española”. En FERNANDEZ ALBALADEJO, Pablo y ORTEGA LÓPEZ, Margarita (eds.): *Antiguo Régimen y liberalismo. III Política y Cultura*, Madrid, 1995.

ÁLVAREZ DE MORALES, A. (1982). *Inquisición e Ilustración (1700-1834)*. Madrid.

ÁLVAREZ JUNCO, J. (2001): *Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX*, Madrid: Taurus.

- MORENO LUZÓN, J. (eds.): *La Constitución de Cádiz: historiografía y conmemoración. Homenaje a Francisco Tomás y Valiente*, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006. (de la) FUENTE MONGE, Gregorio, *El nacimiento del periodismo político. La libertad de imprenta en las Cortes de Cádiz (1810-1814)*, Cádiz, 2009.

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, María Ángeles: “Documentos sobre la Junta Superior de Gobierno de Cádiz (1808-1813)”, *Gades* (Cádiz), 16 (1987).

ANES, Gonzalo: *Economía e Ilustración en la España del siglo XVIII*, Barcelona, 1990.

- “El siglo de las Luces”, en ARTOLA, Miguel (dir.): *Historia de España*, vol. IV, Madrid, 1994.

ANTISERI, D; REALE, G., *Historia del pensamiento filosófico y científico*. Herder, 2012.

ANTILLÓN, I., de *Carta de de aragonés rediente en Mallorca a su amigo D.M.J.Q. establecido en Cádiz sobre la necesidad de asegurar con leyes eficaces la libertad de! ciudadano contra los atropellamientos de las fuerzas armadas*, Mallorca, 1811.

ANTONIO AGUIRRE ROJAS, Carlos: *Dimensiones y alcances de la obra de Fernand Braudel*, en el volumen colectivo *Primeras Jornadas Braudelianas*, Instituto de investigaciones Doctor José María Luís Mora, México D.F. 1993, pág. 10-34; Fernand Braudel, *A manera de conclusión*, en *Cuadernos Políticos*, número 48, 1986; Id. *La historia y las ciencias sociales* traducción castellana, Alianza Editorial, Madrid 1968; Immanuel Wallrstein, *Braudel, los Annales y la historiografía contemporánea*, en la revista *Historia* número 3 1983; *Pierre Bordieu, Aspirant philosophe*, en el volumen colectivo, *Les enjeux philosophiques des années 50*, París, 1989; Francis Hartog, *Evidence de l'histoire. Ce que vivent les hisorins*, EHESS. París, 2003; William H. Mac Neill, *My thistory and other essays*. University of Chicago Press, Chicago 1986.

ANTÓN DE OLMET, Fernando (marqués de Dos Fuentes): *El Cuerpo diplomático español en la Guerra de la Independencia*, vol. V, Madrid s.a.

AQUINO, Tomás (de), *Summa Theologica*.

ARAGÓN GÓMEZ, Jaime: "El alojamiento de los Diputados en la Isla de León durante la primera instalación de las Cortes en 1810", en *Actas de los XIV Encuentros sobre las Cortes y Constitucionalismo*, Cádiz, 1999.

ARANGUREN, José Luis López. Lectura política de Quevedo. *Revista de estudios políticos*, , no 49, 1950.

ARDIT, Manuel: *Els valecians de les Cortes de Cadis*, Barcelona, 1968:

ARENA FENOCHIO, J. (2002): "Ruiz de Apodaca, "El negro Roberto» y el artículo 22 de la Constitución de 1812 en la Nueva España", en BARRIOS PINTADO, F. (coord.): *Derecho J administración pública en las Indias hispánicas*, 2 vols. Toledo: Universidad de Castilla-La Mancha, vol. I, pp. 123-141.

ARGÜELLES, Agustín de: *La reforma constitucional de Cádiz* (comentarios de Jesús Longares), Madrid, 1970.

- *Discursos* (estudios preliminar de Francisco Tomás y Valiente), Oviedo, 1995.

ARGÜELLES, Julio: *Biografías de los diputados asturianos en las Cortes de Cádiz*, (pról.. de Ramón Maria de Labra), Oviedo, 1912.

ARGÜELLES, Luis Ángel: "La Constitución de 1812 y la prensa de Cuba", *Cádiz e Iberoamérica* (Cádiz), 3 (1985).

ARISTÓTELES, *Política*.

ARMELLADA, C. de: *La causa indígena americana en las Cortes de Cádiz*, Madrid: Cultura Hispánica, 1959.

- *La causa indígena americana en las Cortes de Cádiz*, Madrid, 1959.

ARRIAZU, M^a I. et al. *Estudios sobre Cortes de Cádiz*, Pamplona Universidad de Navarra, 1967.

ARTOLA GALLEGO, M. *Los afrancesados*, Madrid: Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1953.

- *Los orígenes de la España contemporánea*, 2 vols., Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1959.

- *Partidos y programas políticos (1808-1814)*, Madrid, 1974.

- *La burguesía revolucionaria (1808-1874)*, Madrid: Alfaguara, 1975.

- *Antiguo Régimen y Revolución Liberal*, Madrid, 1978.

- "La España de Fernando VII", en Ramón Menéndez Pidal (dir.): *Historia de España*, vol. XXXII, Madrid, 1978.

- *La burguesía revolucionaria (1808-1874)*, primera edición de 1973, Ediciones Alfaguara, Alianza Editorial, Madrid 1981
- “La burguesía revolucionaria (1808-1874)” en Ramón Menéndez Pidal (dir.): *Historia de España*, vol V, Madrid, 1990.
- “Las Cortes de Cádiz”, Ayer, Madrid, 1991.
- “Estudio introductorio a la edición de la Teoría de las Cortes” de MARTÍNEZ MARINA, 3 vols., Junta General del Principado de Asturias, 1996.
- *Obras de Álvaro Flórez Estrada I. Estudio preliminar.*
- “El camino a la libertad de imprenta, 1808-1810” en IGLESIAS, Carmen, MOYA, Carlos y RODRÍGUEZ ZUÑIGA, Luis, *Homenaje a José Antonio Maravall*, Centro de Investigaciones Sociológicas y otras instituciones, Madrid, 1985.

ARTOLA, M. y MORÁN ORTI M., *Las Cortes de Cádiz*. Vol. 1. Marcial Pons Historia, 1991.

ASIS ROIG, R., “El modelo americano de derechos fundamentales” en *Anuario de Derechos Humanos* 6 (1990).

ASIÁN PEÑA, J. L. *Manual de Historia de España*, Barcelona: Bosch, 1942.

AUNÓS PÉREZ, Eduardo: (1894-1967), *Itinerario histórico de la España contemporánea (1808-1936)*, Editorial Bosch, Barcelona, 1940; Javier Fernández Sebastián, *Cádiz y el primer liberalismo español. Simposio historiográfico y reflexiones sobre el bicentenario*, en J. Álvarez Junto y J. Moreno Luzón (editores), *La Constitución de Cádiz: historiografía y conmemoración. Homenaje a Francisco Tomas y Valiente*, Madrid, 2006; *Liberales y liberalismo en España 1810-1850. La forja de un concepto y la creación de una identidad política*, en *Revista de Estudios Políticos*, Nueva Época (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid), núm. 134, 2001, págs. 125-176; Id, con J.Chassin, *L'avènement de l'opinion publique. Europe et Amérique XVIIIème-XIXsiècles*, Ed. Lharmattam, Paris, 2006.

AYER, A. J., *Thomas Paine*, 1989.

AYMES, J.R. “Le débat idéologico-historiographique autour des origines françaises du libéralisme espagnol: Cortès de Cadix et Constitution de 1812”, *Historiaconstitucional*, n.º 4 (<http://hc.rediris.es/04/Numero04.html>), 2003.

- *La guerra de la independencia en España (1808-1814)*, Madrid, 1974.
- *La crise de l'Ancien Régime et l'avènement du libéralisme en Espagne (1808-1833)*, Paris: Ellipses, 2005.

AZCARATE, Pablo de. *Wellington y España*, Madrid, 1960.

BACHOFEN, Blaise, *La Condition de la liberté. Rousseau, critique des raisons politiques*. Payot, París, 2002.

BANDA BALDÓ, Marc, *Laudatio academica del doctor José María Jover Zamora*, pronunciada en el acto de investidura de este último como doctor Honoris Causa de la Universidad de Valencia, recogida en el volumen ya citado de José María Jover Zamora, *Historia y Civilización. Escritos seleccionados*, págs. 15-20, la cita en pág. 19: “en 1961 comenzó a publicar trabajos sobre historiografía reciente; en 1963 forjó un proyecto que tenía como objeto –por decirlo con sus propias palabras- dar razón de la historia del pueblo español y de sus avatares durante el largo trecho de los siglos XIX y XX. Este proyecto es la culminación del proceso de renovación historiográfica de Jover que desarrolló durante más de 25 años”.

- Y VARGAS, Antonio de la: “El Cádiz de las Cortes visto por un refugiado”, *Gades*, Cádiz, 11 (1983).
- BARBASTRO GIL, L.: *Revolución liberal y reacción (1808-1813)*, Alicante, 1987.
- BARRIOS, Feliciano: *El Consejo de Estado de la Monarquía Española (1521-1812)*, Madrid, 1984.
- BARTLETT, C.J. “The question of religious toleration in Spain in the Nineteenth Century”. *Journal of Ecclesiastical History*, VIII, 1957.
- BATAILLON, M., *Erasmus y España: Estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI*. 1983.
- BAYLY, C.A., *Empire and information. Intelligence Gathering and social communication*, en Francis M. Cornford (1879-1943), *Microcosmographia Academica: Being a guide for the Young academic politician*, Cambridge, 1908.
- BECKER, Jerónimo: *Historia de las relaciones externas de España durante el siglo XIX*, Madrid, 1924.
- *La Independencia de América (Su reconocimiento por España)*, Madrid, 1922.
 - *La Reforma ña Constitucional en España, estudio histórico – critico acerca del origen y vicisitudes de las constituciones españolas*, Madrid, 1923.
- B. Seidel, *Das Zeitalter der revolutionen en Aspekte sozialer Wirklichkeit* en la serie *Sozialwissenschaftliche Abhandlungen*, volumen 7, Berlín, 1958,
- BEJCZY, István Pieter. *Erasmus and the Middle Ages: the historical consciousness of a Christian humanist*. Brill, 2001.
- BELDA Y LABRA, Rafael María: *Las Cortes de Cádiz en el Oratorio de San Felipe*, Madrid, 1912.
- BELTRÁN Y ROSPIDÉ, Ricardo, *Isidoro de Antillón, geógrafo, historiados y político. Discurso leído antre la Real Academia de la Historia en la recepción pública de D. Ricardo Beltrán y Róspide, el 31 de mayo de 1903*. Imprenta y Litografía del Depósito de Guerra. Madrid.
- BELTUEZO, M. T. (1986): *La participación americana en las Cortes de Cadiz, 1810-1814*, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
- BERNSTEIN, S: “Les cultures politiques en France, Ed. Seuil, París, 1999.
- BERRUEZO, LEÓN, María Teresa: *La lucha de Hispanoamérica por su independencia en Inglaterra (1818-1830)*, Madrid, 1989.
- (1986): *La participación Americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814)*, Madrid.
 - (1988): “El funcionamiento Americano en las Cortes gaditanas. América y las Cortes de Cádiz”, *Cuadernos Hispanoamericanos* (Madrid), 460 (1988).
- BENTHAM, Jeremy. *Tratados de Legislación Civil y Penal*. Madrid: Editorial Nacional, 1981, p. 28-29.
- BETHENCOURT, F. *L’Inquisition à l’époque moderne: Espagne, Portugal, Italie XV- XIX e siècle*. París, 1995.
- BLANCO, P.L. *Respuesta pacífica de un español á la carta sediciosa del francés Gregoire que se dice obispo de Blois*. Madrid, 1798.
- BLANCO VALDES, Roberto L.: *Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España Liberal, 1808-1823*, Madrid, 1988.
- BLASCO, Ricardo: *Los albores de España fernandina*, Madrid, 1969.

- BLEIGBER, G.: *Diccionario de Historia de España*, t. I, Madrid, 1969.
- BOBBIO, Norberto: *Sur la notion de constitution chez Hegel*, en *Annales de philosophie politique*, número 12, 1980, págs. 133-144; Francisco Elías de Tejada y Spínola, *Lo spirito oggettivo nella teologia hegeliana della storia*, en *Actes du III Congrès pour l'étude de la philosophie de Hegel*, Lille, 1969; G. W. F. Hegel, *Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte*, en Id, *Sämtliche Werke*, Fr. Frommanns, Verlag, Stuttgart, volumen XI, 1949.
- BÖCKENFORDE, E. W: *Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation*, en el volumen antológico de distintos ensayos de Böckenforde, *Recht, Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und Verfassungsgeschichte*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt and Main, 1991.
- BODIN, Jean, *Les six livres de la république*, I.
- BORDELOIST, Ivonne: *Etimología de las pasiones* traducción castellana, libros del Zarzal, Buenos Aires, 2006, página 83; Philippe Fontaine, *Les Passions* Ed. Ellipse París, 2004.
- BORRAMEO, A. "Regalismo e Inquisición bajo Carlos III: la Real Cédula de 5 de febrero de 1770". *Actas del Congreso Internacional "Carlos III y la Ilustración"*. T. I: *El Rey y la Monarquía*. Madrid, 1989.
- BOURBON LEBLANC, *Filosofía política*. Madrid, 8 de abril, 1824.
- BOURGEOIS, Bernard: (n.1929), voz, *Hegel, Georg Wilhelm Friederich, 1770-1831*, en la obra colectiva editada bajo la dirección de Philippe Raynaud y Stéphane Rials, *Diccionario Akal de Filosofía política*, traducción de Mariano Peñalver y Marie-Paule Sarazin, del original en francés, *Dictionnaire de Philosophie Politique* (Presses Universitaires de France, París, 1996), Ediciones Akal, (Tres Cantos, Madrid), 2001, págs. 349-357, la cita en página 349; Id, *Hegel à Francfort ou Judaïsme, christianisme, hegelianisme*, París, 1970; Id, *La pensée politique de Hegel*, Presses Universitaires de France, París, 1969; Id, *Le prince hégélien*, en el volumen *Etudes hégéliennes: raison et décision. Berlin 1818-1831*, Presses Universitaires de France, París, 1992; Id, *Hegel Les actes de l'Esprit*, París, 2001; Jacques d'Hondt, *Hegel en son temps*, Editions Sociales, París, 1968; Franz Rosenzweig (1866-1929), *Hegel und der Staat*; dos volúmenes, Berlín, 1920 (hay edición en francés *Hegel et l'Etat*, Vrin, París, 1950 (hay tercera edición del año 1960).
- BRAGADO LORENZO, Javier y CARO LÓPEZ, Ceferino, "La censura gubernativa en el siglo XVIII", *Hispania*, núm. 217 LXIV/2, 2004.
- BRINKMANN, C: en *Handwörterbuch der Sozialwissenschaften*, volumen IX, Stuttgart-Tübingen-Göttingen, 1956, págs. 10 y siguientes; K.Griewank, *Dernezeitliche Revolutionsbegriff*, Weimar, 1916.
- BREMMER, G: *Order and Change. The Pattern of Diderot's thought*, Cambridge University Press, Cambridge (United Kingdom) 1983.
- BROOKHISER, Richard, *James Madison*, Basic Books, 2011.
- BRUMWELL, Stephen, *Redcoats: The British Soldier and War in the Americas, 1755-1763*. Cambridge University Press, 2006.
- BRUN, J. Le "Autorité doctrinale, définition et censure dans le catholicisme moderne. Notes critiques". *Revue de l'Histoire des Religions*, XXXI-3, 1994.
- BURGO, Jaime del: *Bibliografía del siglo XIX. Guerras carlistas y luchas políticas*, 2.ª ed., Pamplona, 1978.

BURKE, Edmund; PUJALS, Esteban. *Reflexiones sobre la revolución francesa*. Ediciones Rialp, 1989.

CARBRERA BOCH, Isabel: “Algunas consideraciones en torno al Consejo de Estado en la Constitución de 1812”, *Revista de Estudios Políticos*, (Madrid), 93 (1996).

- “Libertad de imprenta: sus antecedentes e incidencias, en el Consejo”, en *Antiguo Régimen y Liberalismo. III: Política y Cultura (Homenaje a Miguel Artola)*, Madrid, 1995.

CAREY, George W. ed., *The Political Writings of John Adams*, 2011.

CARO LÓPEZ, Ceferino, y BRAGADO LORENZO, Javier “La censura gubernativa en el siglo XVIII”, *Hispania*, núm. 217 LXIV/2, 2004.

CALLAHAN, W.J. (1984). *Church, Politics and Society in Spain, 1750-1874*. Harvard.

CALERO, Francisco Calero. “Traiciones a Luis Vives”. En *Anales del Seminario de Historia de la Filosofía*. Servicio de Publicaciones, 1996.

CANGAS ARGÜELLES, J., *Reflexiones sociles y otros escritos*. CEC, Madrid, 2000.

CANO REVORA, Inmaculada: “La mujer y las tertulias gaditanas: una aproximación a través de los Episodios Nacionales de Pérez Galdós” en *VII Encuentro de la Ilustración al Romanticismo. La mujer en los siglos XVIII y XIX*, Cádiz, 1994.

CANO CASENAVE, Marieta, DURÁN LÓPEZ, Fernando y ROMERO FERRER, Alberto (eds.): *La guerra de pluma. Estudios sobre la prensa en Cádiz en el tiempo de las Cortes (1810-1814)*, 3 vols., Cádiz, 2008.

CALASSO, Roberto: *La rovina di kasch gliadelphi*, Biblioteca Adelphi Milano, 1983, edición posterior 1984.

CALVO MARCOS, Manuel: *El régimen parlamentario en España*, Madrid, 1883.

CALZADA RODRÍGUEZ, Luciano de la: *La evolución insitucional. Las Cortes de Cádiz, precedentes y consecuencias*, Zaragoza, 1959.

CAMBRONERO, Carlos: *El Rey Intruso*, Madrid, 1909.

CAMPANINI, G.; NEPI, P. (1992). *Cristianità e modernità. Religione e società civile nell'epoca della secolarizzazione*. Roma.

CANAL, Jordi: *Guerra civil y contrarrevolución en la Europa del Sur en el siglo XIX. Reflexiones a partir del caso español*, en la revista *Ayer*, número 55, 2004, págs. 37,60, la cita en página 50; Jean Clément Martin (editor), *La contre-révolution en Europe XVIII-XIX, siècles. Realités politiques et sociales, resonances culturelles et idéologiques*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2001; Carlos Garriga y Marta Lorente, *Cádiz, 1812. La constitución jurisdiccional*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007.

CANO BUESO, J. (ed.) (1989): *Materiales para el estudio de la Constitución de 1812*, Sevilla: Parlamento de Andalucía.

CANTERO NÚÑEZ, Estanislao: *Antonio de Capmany (1742-1813). Pensamiento, obra histórica, política y jurídica*, Madrid, 1993.

CAPMANY, A., *Centinela contra los franceses*, Manresa, 1808.

CAPPA, R. (1994). *La Inquisición española*. Madrid, 1888 [ed. facsímil, Valencia].

CARBASSE, J.M. (1987). “La constitution coutumière: du modèle au contre-modèle”. *Modelli nella storia del pensiero politico*, II. Florencia.

CÁRCELES DE GEA, B. (1997). “*Voluntas et iurisdictio*: obediencia, ejecución, cumplimiento de la voluntad real en la Corona de Castilla en el siglo XVII”. *Imperio, monarquía, pueblos, mayo 1996*. Alicante.

CARR, R. (1966): *Spain, 1808-1939*, Oxford: Clarendon Press (2nd edition).

CARVAJAL, Patricio. TEORÍA POLÍTICA Y DISCURSO POLÍTICO BARROCO. SOBRE LOS ORÍGENES DEL LIBERALISMO CLÁSICO: J. ALTHUSIUS, J. LOCKE, B. SPINOZA. UNA INTERPRETACIÓN. *Revista de estudios histórico-jurídicos*, nº 21, 1999.

CASANOVA Y PATRÓN, Santiago: *Anales gaditanos o inventario de los sucesos de mayor trascendencia acaecidos en Cádiz desde los tiempos más remotos hasta 1905*, Cádiz, 1905.

- *El Oratorio de san Felipe Neri. Palacio de Cortes en 1812*, Cádiz, 1911.

CASSIRER, Ernst, *Rousseau, Kant, Goethe: filosofía y cultura en la Europa del siglo de las luces*. FCE, Madrid, 2007.

- *La filosofía de la ilustración*. Fondo de Cultura Económica, México, 1984.

CASTELAR, E. *Cartas a un obispo sobre la libertad de la Iglesia*. Madrid, 1864.

CASTELLS, Irene: *La utopía insurreccional del liberalismo. Torrijos y las conspiraciones liberales de la década ominosa*, Barcelona, 1989.

CASTILLO MELÉNDEZ, F.; FIGALLO PÉREZ, L.J.; SERRERA CONTRERAS, R. (1994): *Las Cortes de Cádiz y la Imagen de América. La visión etnográfica y geográfica del Nuevo Mundo*, Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.

CASTILLO y MAYONE, J. del. *El tribunal de la Inquisición llamado de la Fe o del Santo Oficio. Su origen, prosperidad y justa abolición*. Barcelona, 1935.

CASTRO, Concepción de: *La revolución liberal y los municipios españoles*, Madrid, 1979.

CASTRO Y COMPAÑÍA, J.: *Los Ministros en España desde 1800 a 1869*, Madrid, 1869.

CASTRO, Demetrio. *Burke: la Revolución y los intelectuales*, Barcelona, 1993.

CEBALLOS, F. de. *La falsa filosofía, o el ateísmo, materialismo...* Madrid, 1774.

CEPEDA GÓMEZ, José: *El Ejército en la Política Española (1787-1843)*, Madrid, 1990.

CEREZO GALÁN, Pedro. *El litigio por la soberanía. Jovellanos ante las Cortes de Cádiz*.

CEROLO DURÁN, Armando: *Estudio Preliminar al volumen. El conservador 1818-1820 de Fracoís-René Chataubriand*, editado y traducido a nuestra lengua por le propio profesor de filosofía y del derecho Armando Cerelo. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2013, Pág. 15- LX. La cita en página XVII. Se trata de un volumen en el que se recogen todos los artículos firmados por Chatubreán, Director editorial de dicho periódico, con las recomendaciones y recordatorios que este pensador sugiere al partido realista, en orden a la adopción de una monarquía constitucional que supiera respetar

simultáneamente los logros de la Revolución y el patrimonio contitucional francés que según su criterio encarnaban los borbones y la religión católica.

CEVALLOS, Pedro, *Exposición de los hechos y maquinaciones que han preparado la usurpación de la Corona de España, y los medios que el Emperador de los franceses ha puesto en obra para realizarla*. Imprenta Real, Madrid, 1080.

CHACÓN RODRIGUEZ, David, “La participación de los diputados venezolanos en las Cortes de Cádiz”, *Gades*, (Cádiz), 20 (1992).

CHARTIER, R., *Le origini culturali della Rivoluzione francese, traduzione italiana del original en francés (1990)*, editada por Gius. Laterza & Figli, Roma-Bari, 1991.

CHAUNU, Pierre: *Preface* a la monografía de la profesora Simone Goyard-Fabre, *La philosophie des lumieres en France*, Librairie C.Klincksicot, París, 1972.

CHÁVARRI SIDERA, P. (1988): *Las elecciones de diputados a las Cortes Generales y Extraordinarias (1810-1813)*, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.

CHÁVARRI SIDERA, Pilar: *Las elecciones de diputados a las Cortes Generales y Extraordinarias (1810-1813)* (presentación de Andrés de Blas Guerrero), Madrid, 1988.

CHECA GODOY, Antonio: *La prensa española durante la guerra de la Independencia*, Cádiz, 2009.

CHRISTIANSEN, C.: *Los orígenes del poder militar en España*, Madrid, 1974.

CHUST, M. (1999): *La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz*, Valencia: Fundación Instituto Historia Social. -(ed.)

- (2000): *Revoluciones y revolucionarios en el mundo hispano*, Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.

- (2004): “Rey, Soberanía y Nación: las Cortes doceañistas hispanas, 1810-1914”, en Chust; Frasquet (eds.)

- (2004), pp. 51-75. -(coord.) (2006): *Doceañistas, constituciones e independencias. La Constitución de 1812 y América*, Madrid: Fundación Mapfre.

CHUST CALERO, Manuel: *La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz*, Valencia, 1990.

- “La cuestión americana. Del reformismo ilustrado al liberalismo doceañista” en *Encuentro de la Ilustración al Romanticismo. Carlos III: dos siglos después*, t. II, Cádiz, 1993.

CHUST, M.; FRASQUET, I. (eds.) *La trascendencia del liberalismo doceañista en España y en América*, Valencia: Generalitat Valenciana, 2004.

CHUST, M.; SERRANO, J. A. (eds.) *Debates sobre las independencias iberoamericanas*, Madrid: Iberoamericana, 2007.

CLAVERO, B. “Amos y sirvientes: ¿primer modelo constitucional?”, *Anuario de Historia del Derecho Español*, t. 66, 1986, pp. 995-1016.

- *Evolución histórica del Constitucionalismo español*, Madrid, 1984.

- “Cara oculta de la Constitución: sexo y trabajo”, *Revista de las Cortes Generales*, n.º 10, pp. 11-25. (1989): *Manual de historia constitucional de España*, Madrid: Alianza Editorial, 1987.

- *Manual de historia constitucional de Española*, Madrid: Alianza Editorial, 1989.

- “Hemisferios de ciudadanía. Constitución española en la América indígena”, en Álvarez Junco; Moreno Luzón (eds.) (2006), pp. 101-142.

- “Cádiz en España: siglo constitucional, balance historiográfico, saldo ciudadano”, en Garriga; Lorente, 2007.

CLAUDE, Morange: *Sur la révolution de 1808-1814. Pour une vision dynamique et didactique du processus*, en el volumen *Actores de la guerra de Independencia*, volumen coordinado por Emilio La Parra López, *Dossier des Mélanges de la Casa de Velázquez*, Madrid, número 38,1, 2008, págs. 155-172.

CLAVERO, B.; PORTILLO, J. M.; LORENTE, M. *Pueblos, Nación, Constitución (en torno a 1812)*, Vitoria: Ilusager-Fundación para la Libertad, 2004.

CLÉMENT, Jean Pierre, *Las lecturas de Jovellanos (Ensayo de reconstrucción de su biblioteca)*, 1980.

COCHIN Agustin, *L'esprit du Jacobinisme*. Plon, París, 1929.

COFRE SIRVENT, José: *Codificación de las normas aprobadas por las Cortes (1810-1837)*, Alicante, 1991.

COLOMER VIADEL, A. *El sistema político de la Constitución española de 1837*, Madrid: Publicaciones del Congreso de los Diputados, 1989.

Constitución de Cádiz, Barcelona: Tipografía Católica.

COMELLAS, Jose Luis: *El Trienio Constitucional. Estudio General de Navarra*, Madrid, 1963.

- *La teoría del régimen Liberal español*, Madrid, 1962.

- *Los primeros pronunciamientos en España*, Madrid, 1958.

- “Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812”, *Revista de estudios Políticos* (Madrid), 126 (nov-dic, 1962).

COMENGE, Rafael: *Antología de las Cortes de Cádiz*, Madrid, 1919.

- *conmemoración de las Cortes de Cádiz. Comentado por un patriota*, Madrid, 1913.

CONARD, P., *La Constitution de Bayonne*.

CONSTANT, Benjamin, *De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos*, 1819.

COPLESTON, Frederick: *A history of Philosophy*, Image Books, New York 1985. Vol. 6º.

CORDERO TORRES, J. M.: *El Consejo de estado. Su trayectoria y perspectiva en España*, Madrid, 1944.

CORDOBA-BELLO, Eleazar: “La formación de la Conciencia nacional americana”, *Anuario de Estudios Americanos* (Sevilla), 24 (1967).

CORONA, C.E. (1962). “La doctrina del poder absoluto en España en la crisis del XVIII al XIX”. *Cuadernos de la Cátedra Feijo*,

CORONAS, Carlos: *Las ideas en el reinado de Carlos IV*, Madrid, 1954.

CORONA GONZALEZ, J. R.: *El diputado Agustín de Argüelles. Vida parlamentaria*. Ribadesella, 1994.

COTTIER, G.M.M. (1969). *Horizons de l'athéisme*. París.

COZAR PALMA, Álvaro y MUÑOZ SEMPERE, Daniel: “Utopía y fanatismo en la reacción a las Cortes de 1812: Jose Marchena y el Padre Alvarado”, en Cinta Canterla (coord.): *La cara oculta de la razón: locura, ciencia y utopía*, Cádiz, 2001.

CROCE, Benedetto: *Teoria e storia della storiografia*, publicada en italiano en el año 1917.

CRUZ SÁNCHEZ, Pedro: *Pasión y Objeto político, una teoría de la pasividad*, colección serie general universitaria, ediciones Bellaterra Barcelona 2013.

CRUZ VILLALÓN, Pedro: *Rasgos básicos del Derecho Constitucional de los estados en perspectiva comparada*, en el volumen de los profesores Armin von Bogdandy, Pedro Cruz Villalón y Peter M. Huber, *El derecho constitucional en el espacio jurídico europeo*, Colección *Ius publicum europaeum*, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

CUENCA TORIBIO, José Manuel: *D. Pedro Inguanzo y Rivero (1764-1836). Último prelado del antiguo Régimen*, Navarra, 1965.

- "El catolicismo liberal español. Las razones de una ausencia", *Archivo Hispalense* (Sevilla), 1972.

- *La Guerra de la Independencia (1808-1814)*, Madrid, 2006.

DANVILA Y COLLADO, Manuela: *El poder civil en España*, t. IV, Madrid, 1886.

D'ALAMBERT, Jean: *Discurso preliminar de la Enciclopedia*, (1751), traducción castellana de A. Rodríguez Huesca, editorial Aguilar, Madrid 1965.

DEFORNEAUX, M. (1959). *Pablo Olavide ou l'afrancesado*. París. (1963). *L'Inquisition Espagnole et les livres français au XVIII*. París, 1963.

DE GOICOECHEA ZABALA, Francisco Javier López. La glosa castellana al de Regimine principum (1280) de Egidio Romano: La reducción aristotélica. *Saberes: Revista de estudios jurídicos, económicos y sociales*, 2003, no 1, p. 207-14.

DE QUEVEDO, Francisco. *Política de Dios y gobierno de Cristo nuestro señor*. I. Suria, 1702.

DE LOLME, Jean Louis. *The constitution of England, or, An account of the English government: in which it is compared both with the republican form of government and the other monarchies in Europe*. HG Bohn, 1853.

DE MORA Joaquín (Traductor), *Consejos que dirige a las Cortes y al pueblo español*, Bentham, Jeremy (1748-1832), Madrid, 1820

DELGADO, Sabino (ed.): *Guerra de la Independencia. Proclama, bandos y combatientes*, Madrid, 1979.

DESPLAND, M. (1995). "L'expérience religieuse au XIXe siècle. II. La vie représentée de deux types de modernité". *LTP*, 50.

DEROZIER, Albert: *Quintana y el nacimiento del liberalismo en España*, Madrid, 1978.

- "Les étapes de la vie officielle de Manuel Josef Quintana." en *Bulletin Hispanique* 66 (1964).

- "Manuel Josef Quintana et la naissance du libéralisme en Espagne" en *Anales littéraires de l'Université de Besançon*.

DÍAZ BARRADO, Mario Pedro: "Permanencias y transformaciones ideológicas en el tránsito del Antiguo al Nuevo Régimen", en *Antiguo al Nuevo Régimen, III: Política y Cultura*, Madrid, 1995.

- *Diccionario bibliográfico de la guerra de la Independencia, 1808-1814. Referencias y notas comentadas de obras impresas, documentos y manuscritos de autores nacionales y extranjeros, que tratan de asuntos militares, históricos,*

políticos, religiosos, económicos, etc. *Relacionados con dicha Guerra y su época*, Madrid, I: 1994; II: 1948; III: 1952.

DÍEZ DE SOLLANO, J.Mª (1860). *Memorias de la Nacional y Pontificia Universidad de México*. México

DÍEZ DEL CORRAL, L. (1945): *El liberalismo Doctrinario*, Madrid: Instituto de Estudios Políticos.

- "Introducción al doctrinarismo (I)", *Revista de Estudios Políticos (Madrid)*, 15 (1944).

- *Diputados americanos doceañistas, Velada organizada por la Real Academia Hispanoamericana*. Cádiz, 1910.

DÍAZ PLAJA, Fernando, *El abate Marchena. Su vida, su tiempo y su obra*, León, 1986.

(DE) DIOS, Salustiano, "El legado castellano en las Cortes de Cádiz" en *Cortes y Constitución de Cádiz 200 años*. Vol. 1.

DIZ LOIS, María Cristina (ed.): *El Manifiesto de 1814*, Pamplona, 1967.

- *Actas de la comisión de Constitución (1811-1813)*, Madrid, 1976.

DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: *Sociedad y Estado en el siglo XVIII*, Barcelona, 1976

- *La burguesía mercantil gaditana (1650-1868)*, Cádiz, 1976.

- *Carlos III y la España de la Ilustración*, Alianza, Madrid, 1989.

DU DÉZERT, D. *Le Conseil de Castille en 1808, Extrait de la Revue Hispanique*. París, 1907.

DUFOUR, G. *Sermones revolucionarios del Trienio Liberal (1820-1823)*. Alicante, 1991.

DURÁN LÓPEZ, Fernándo, *Memorial del Cádiz de las Cortes*, Cádiz, 1996.

DURAN LÓPEZ, Fernando y CARO CANCELA, Diego: (editores), *Experiencia y memoria de la revolución española (1808-1814)*, Universidad de Cádiz, Cádiz, 2011; Antoni Moliner Prada, *La Catalunya resistent a la dominació francesa, 1808-1812*, Edicions 62, Barcelona, 1989; Id, *Catalunya contra Napoleó. La guerra del Francés, 1808-1814*, Pagès Editors, Lleida, 2007; Id, (editor), *La guerra de la Independencia en España*, Ed Nabla, Barcelona, 2007 .

DWORKIN, G: *The thory and practice of autonomy* Cambrige Universtiy Press (Cambrige U.K). 1988; C.McCrudden, *Human dignity and judicial interpretation of human right* , en l E.J.I número 19, 2008, Vol. 4º. Pag. 675-674; Ph. Jerrar *L'Esprit des Droits. La philosophie de Loins de Lomms*. Publication des facultes universitaires de Saint Louis, Bursseles, 2007; J. Fierenes, *La dignité Humaine comme concept juridique*, en "Journal des Tribunaurs" 2002.

DZELZAINS, M: (editor), *John Milton: Political Writings*. Cambridge, 1991, pág. 1-48; M. Y. Hughes (editor), *Milton complete prose works*, volumen 3º, 1648-1649, New Haven (Conn).

EHRARD, Jean, "La signification politique des *Lettres persanes*", *Archives des Lettres Modernes*, 116, 1970.

ELIAS, N. *La civiltà delle buone maniere. Il proceso dicivilizzazione*. I. Bolonia, 1969.

ELORZA, A. "Cristianismo ilustrado y reforma política en fray Miguel de Santander", 1967.

- *La ideología liberal en la Ilustración española*, Madrid: Tecnos, 1970.

ELORZA, A.; FERNÁNDEZ de la CIGOÑA, F. J. (1996): *El liberalismo y la Iglesia española. Historia de una persecución*, Vol. II, *Las Cortes de Cádiz*, Madrid: Fundación Francisco Elías de Tejada y Erasimo Percopo.

ENCISO RECIO, Luis Miguel: “Actividades de los franceses en Cádiz (1789-1790)”, *Hispania* (Madrid), t. XIX, 79 (1959).

- “Prensa e ideología, historia de España”, XXIX, II, Madrid, 1985.

ESCUADERO, J.A. *La abolición de la Inquisición española*. Madrid, 1991.

- “Martínez Marina y la Teoría de las Cortes” en *Teoría de las Cortes. Estudio introductorio*. Junta General del Principado de Asturias, 2002.

- *Cortes y Constitución de Cádiz. 200 años*. Tomos I y II. Espasa, Madrid, 2011.

FABRO, C., *Voz, Sentido clásico y moderno de inmanencia*, en Gran Enciclopedia Rialp, Editorial Rialp, Madrid, volumen XII, 1911.

FERNÁNDEZ ALMAGRO, Manuel: *La emancipación de América y su reflejo en la conciencia española*, Madrid, 1944.

- *Orígenes del Régimen Constitucional en España*, Madrid, 1976.

FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: “Las Cortes del siglo XIX y la práctica electora”, *Revista de Estudios Políticos* (Madrid), 5 (1943).

- “De las Cortes y la Constitución de 1812”, *Revista de Estudios Políticos* (Madrid), 126 (1962)

FERRANDO BADIZ, Juan: “La Constitución española de 1812 y el Congreso de Verona”, *Gades* (Cádiz). 16 (1987).

FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, Francisco José: *El liberalismo y la Iglesia española. Historia de una persecución, II: Las Cortes de Cádiz*, Madrid, 1996.

FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Angel y TORRERO MUÑOZ. *Apuntes biográficos*, Madrid, 1864.

FERNÁNDEZ DE CASTRO, Ignacio. De las Cortes de Cádiz al Plan de Desarrollo (1808-1966). *Ensayo de interpretación política de la España contemporánea*. París, 1968.

FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, Arturo: *Leyes electorales españolas de diputados a Cortes en el siglo XIX. Estudio histórico y jurídico-político*, Madrid, 1992.

FERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio, “La cuestión de la soberanía nacional” en *Cuadernos de Historia Contemporánea*. Vol. 24 (2002).

FERNÁNDEZ-GALIANO, Antonio y (de) CASTRO CID, Benito, *Lecciones de Teoría del Derecho y Derecho Natural*. Universitas, Madrid, 1999.

FERNÁNDEZ LARGO, P. Jacinto: *Introducción al estudio del Filósofo Rancio*, Madrid, 1959.

FERNÁNDEZ MARTÍN, M., *Derecho parlamentario de España en el siglo XIX*. II Tomos, Madrid, 1985.

FERNÁNDEZ SARASOLA, I. “La Constitución española de 1812 y su proyección europea e iberoamericana”, *Fundamentos. Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional*, 2, *Modelos Constitucionales en la Historia Comparada*, 2000.

- *Poder y libertad: los orígenes de la responsabilidad del ejecutivo en España (1808-1823)*, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001.

- *La Constitución de Cádiz. Imagen, contenido y proyección internacional*. Centro de Estudios Políticos e Institucionales. Madrid, 2011.

- *Memoria en defensa de la Junta Central*.

- *Estado, Constitución y formas de gobierno en Jovellanos*.

- *Proyectos constitucionales en España, 1786-1824*, Madrid, 2004.

FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J. “Du mépris à la louange. Image, présence et mise en valeur du Siècle des lumières dans l’Espagne contemporaine“, in Ricuperati, Giuseppe (éd.): *Historiographie et usages des Lumières*, Berlin: Berlin Verlag, 2002.

- “El momento de la nación. *Monarquía, Estado y nación* en el lenguaje político del tránsito entre los siglos XVIII y XIX”, en Morales Moya, A. (coord.): *1802. España entre dos siglos. Monarquía, Estado, Nación*, Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2003.

- “Cádiz y el primer liberalismo español. Sinopsis historiográfica y reflexiones sobre el bicentenario”, en Álvarez Junco; Moreno Luzón (eds.), 2006.

- “El imperio de la opinión pública según Álvaro Flórez Estada” en VARELA SUANZES-CARPEGENA, Joaquín, *Álvaro Flórez Estada (1766-1853)*, Oviedo, 2004.

FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J.; CHASSIN, J. (dir.) (2004): *L’Avènement de l’opinion publique: Europe et Amérique XVIII-XIX siècles*, Paris: Harmattan.

FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J.; FUENTES, J. F. (dirs.) (2002): *Diccionario político y social del siglo XIX español*, Madrid: Alianza.

- (2004): (eds.) “Historia de los conceptos”, dossier de la revista *Ayer*. nº. 53,

FERNÁNDEZ SEGADO, F. (1986): *Las Constituciones históricas españolas (un análisis histórico-jurídico)*, 4ª. edición revisada, ampliada y corregida, Madrid: Civitas.

- (1981): *Las constituciones históricas españolas*, 2ª ed., Madrid.

- “La libertad de imprenta en el período inmediato anterior a su legalización por las Cortes de Cádiz (1808-1810)”, *Pensamiento constitucional* nº 17, 2012.

FERNÁNDEZ SUÁREZ, Álvaro: *La difícil incorporación a la Modernidad*, epígrafe 6 del capítulo VI (*Los orígenes del pesimismo español, del volumen del pensamiento español*, colección Espejo de España, Editorial Planeta, Barcelona, 1983, págs. 143-156, la cita en página 150.

FERNÁNDEZ VARELA, M., *Oración eucarística*. Madrid, 1814

FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier: *Guerra de palabras. Lengua y política en la revolución de España*, en el volumen colectivo ya citado, que dirigieran Pedro Rújula y Jordi Canal, *Guerra de ideas. Política y cultura en la España de la guerra de independencia*, págs. 237-280, la cita en página 240; Roger Chartier, *Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII. Los orígenes culturales de la revolución francesa*, traducción al castellano, Ed. Gedisa, Barcelona, 1995.

FERRER BENIMELI, José Antonio. América y las Cortes de Cádiz, América y la masonería. Cuadernos hispanoamericanos, 1988, no 460, p. 7-34.

- “Las Cortes de Cádiz, América y la Masonería”, *Cuadernos Hispano-americanos* (Madrid), 460 (octubre, 1988).

FIESTAS LOZA, A. (1985): “(Bibliografía) Clavero, Bartolomé: *Evolución histórica del constitucionalismo español* (Ed. Tecnos, S. A., Madrid, 1984)”, *Anuario de Historia del Derecho Español*, t. 55.

FIORAVANTI, M: *Constitución de la antigüedad a nuestros días*. Traducción castellana editorial Trotta. Madrid 2001; A. de Muralt *La estructura de la filosofía política moderna*, Traducción castellana, Editorial Ismo. Madrid 2002.

FLAQUER MONTEGUI, Rafael: “El Ejecutivo en la revolución liberal”, en ARTOLA, Miguel (ed.): *Las Cortes de Cádiz*, Madrid, 2003.

- “El Voto de Santiago”, en *Antiguo Régimen y Liberalismo, III: Política y Cultura*, Madrid, 1995.

FLORES Y CAAMAÑO, Alfredo: *Don José Mejía Lequerica en las Cortes de Cádiz de 1810 a 1813*, Barcelona, s.a.

FLORES JARAMILLO, Renán: “El más ilustre americano de las Cortes de Cádiz”, *Cádiz e Iberoamérica* (Cádiz), 3 (1985).

FONTANA, J. (1971): *La quiebra de la monarquía absoluta, 1814-1820*, Barcelona: Ariel

- (1979): *La crisis del Antiguo régimen, 1808-1833*, Barcelona: Crítica.

- El Partido Popular y la Constitución de Cádiz”, *El País*, 15-II-2006.

FONTANA, Joseph: *Hacienda y Estado*, Madrid, 1973.

- *La crisis del Antiguo Régimen (1808-1833)*, Madrid, 1979.

- *La quiebra de la Monarquía Absoluta (-1814-1820)*, Barcelona, 1971.

- y GARRABOU, Ramón: *Guerra y Hacienda. La Hacienda del gobierno central en los años de la guerra de la Independencia (1808-1814)*, Alicante, 1986.

FORTEZA, Guillermo, *Juicio crítico de las obras de D. Antonio Capmany*, Barcelona 1857.

FRAGA IRIBARNE, Manuel; DE SAAVEDRA FAJARDO, Don Diego. La diplomacia de su época. *Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores*, 1955.

FRADERA, JOSEP M. (1999): *Gobernar colonias*, Barcelona: Península.

FRASQUET, I. y CHUST, M., *La trascendencia del liberalismo doceañista en España y América*. Biblioteca Valenciana, 2004.

FUENTE, Vicente de la: *Historia de las sociedades secretas antiguas y modernas en España, especialmente de la Francmasonería*, t. I, Madrid, 1879.

FUENTES, Juan Francisco, *Si no hubiera esclavos habría tiranos*. Ediciones El Museo Universal, Madrid, 1988.

(de la) FUENTE MONGE, Gregorio y ALVAREZ JUNCO, José, *El nacimiento del periodismo político. La libertad de imprenta en las Cortes de Cádiz (1810-1814)*, Cádiz, 2009.

FÜSSMANN, Klaus: Theo Grütter y Jörn Rusen(n.1938)(editores), *Historische Faszination Geschichtskultur heute*, Böhlau, Keuler-Weimar-Wenen, 1994; Jörn Rusen, *Geschichte im Kulturprozess Böhlau*, Köln, 2002.¹ A.D. Lindsay, *El estado democrático moderno*, versión española de Vicente Herrero de la edición original en inglés (1943), Sección de Obras de ciencia Política, Fondo de Cultura Económica, México, 1945.

GALÁN Y GUTIÉRREZ, Eustaquio, *Ius naturae: lecciones de cátedra*.

GALLARDO, B.J. *Diccionario crítico-burlesco*. Madrid, 1820.

GAOS, José: *Confesiones profesionales* (invierno de 1953), Capítulo de Id, *Confesiones profesionales. Aforística*, Prólogo de José Luís Abellán, Asociación

Cultural literaria, colección *Trea Letras*, ediciones Trea, Gijón (Asturias), 2004, pág.43; Id, *Dos exclusivas del hombre: la mano y el tiempo*, Universidad de Nuevo León (Estado de Nuevo León, Monterrey), México, 1945; Id, *De la filosofía* (curso de 1960), Fondo de Cultura Económica, México, 1962.

GARCÍA CÁRCEL, R. *Orígenes de la Inquisición española. El tribunal de Valencia (1478-1530)*. Barcelona, 1976.

GARCÍA FERNÁNDEZ, E. “El liberalismo, las mujeres y la Guerra de la Independencia”, *Spagna contemporanea*, anno XVI, n. 31, 2007.

GARCÍA FERÁNANDEZ, Javier: *El origen del municipio constitucional*, Madrid, 1983.

GARCÍA GALLO, A. “Aspectos jurídicos en la Guerra de la Independencia”. *Estudios de la Guerra de la Independencia*, II. Zaragoza. Manuscripts 17, 1999 Beatriz Cárceles de Gea, 1965.

- “El derecho Indiano y la Independencia de América”, *Revista de Estudios Políticos* (Madrid), 60 (1951).

GARCÍA GODOY, M. T. (1998): *Las Cortes de Cádiz y América. El primer vocabulario liberal español y mejicano (1810-1814)*, Sevilla: Diputación de Sevilla.

- *El léxico del primer constitucionalismo español y mejicano (1810-1815)*, Granada: Universidad de Granada, 1999.

GARCÍA GUTIÉRREZ, Agustín: *Cádiz en la guerra de la Independencia (1812-1825 agosto-1912). Primer Centenario del levantamiento del sitio*, Cádiz, 1912.

GARCÍA LAGUARDIA, Jorge Mario: *Centroamérica en las Cortes de Cádiz*, 3ª ed., Méjico, 1994.

GARCÍA LEÓN, José María: “La Masonería y los orígenes del liberalismo gaditano” en *II Jornadas de Historia de Cádiz*, Cádiz, 1984.

- *La Masonería gaditana, desde sus orígenes hasta 1833*, Cádiz, 1993.

- *Cádiz en el Trienio Liberal 1820-1823*, Cádiz, 1999.

- “La abolición del Voto de Santiago en las Cortes de Cádiz”, *Revista de Estudios Regionales* (Málaga), 64 (2002).

- *En torno a las Cortes de Cádiz, (Anécdotas, curiosidades, hechos y gentes de aquella Magna Asamblea)*, Quorum editores, Cádiz, 2007.

- *Las Cortes en la isla de León*, Cádiz, 2009.

- *El testamento de José Mejía Lequerica*, Cádiz, 2010. Obra no publicada.

- *Los diputados doceañistas*. Volumen II. Cádiz, 2012.

GARCÍA MONERRIS, Carmen: *El debate preconstitucional: Historia y política en el primer liberalismo español (Algunas consideraciones)*, en el volumen colectivo editado por Emilio La Parra López (n.1949) y Germán Ramírez Aledon (n.1949), Biblioteca Valenciana, Valencia, 2003, págs. 39-67; Javier Fernandez Sebastián, *La Aurora de la libertad. Los primeros liberalismos en el mundo Iberoamericano*, Ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2012.

GARCÍA MUÑOZ, M. “La documentación electoral y el fichero histórico de diputados”, *Revista General de Información y Documentación*, n.º 1, 2002.

GARCÍA NORRO, Juan José: *Cuando la naturaleza se vuelve historia, el lobo se convierte en relato*, en el volumen colectivo editado por Juan Arana, *Falsos saberes. La suplantación del conocimiento en la cultura contemporánea*,

Colección Fronteras, Editorial Biblioteca Nueva, Grupo Editorial siglo veintiuno, Madrid, 2013.

GARCÍA PÉREZ, J.: *Diego Muñoz Torrero. Ilustración, Religiosidad y Liberalismo*. Mérida, 1989.

GARCÍA PÉREZ, María Sandra, “Imprenta y censura en España desde el reinado de los Reyes Católicos a las Cortes de Cádiz: un acercamiento a la legislación”. *Boletín de la ANABAD*, Tomo 48, nº 2, 1998.

GARCÍA RODRIGO, F.J. *Historia verdadera de la Inquisición*. 3 vol. Madrid, 1877.

GARCÍA VENERO, Maximiano: *Historia del Parlamentarismo español (1810-1833)*, Madrid, 1946.

GARDINER, S. R: *The constitutional documents of the Puritan Revolution, 1625-1680*. Oxford, 3ª edición 1906.

GARNICA ANTONIO, Silva y RICO LINAGE, Raquel, *Obras completas de José Blanco White y periódicos políticos*. Vol. I. Almed, Granada, 2005.

GARRIGA, C.; LORENTE, M. (2007): *Cádiz, 1812. La Constitución jurisdiccional*, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

GARÓFENO SÁNCHEZ, Rafael y PÁRAMO ARGÜELLES, Juan R.: *La Constitución gaditana de 1812*, Cádiz, 1983.

GAUTIER Y ARRIAZA, E.: *Cortes Generales y Extraordinarias. Notas y sucesos dignos de memoria*, Cádiz, 1986.

GAY, Peter, *The Enlightenment: an Interpretation. The Science of Freedom*. Norton, Nueva York, 1977.

GEORGE COLLINGWOOD, Robin: *The Idea of history* (obra de edición póstuma, The Clarendon Press, Oxford, 1946, traducida a nuestra lengua por Edmundo o’gorman y Jorge Hernández Campos, Fondo de Cultura Económica, México, tercera reimpresión de la primera edición, 1972); Id, *Essays in the philosophy of history*(obra editada póstumamente, en 1966 por W.Tebbins, traducción al castellano, ensayos sobre filosofía de la historia, 1970.

GIANNINI, G. “Il rapporto tra moderno e antico”, *Modernità. Storia e valore di un’idea*. Morcelliana, 1982.

GIBSON, R. “Théologie et société en France au XIXe siècle”. *Histoire et théologie*. París: J.D. Durand, 1994.

GIL NOVALES, Alberto: *Del Antiguo Régimen al Nuevo Régimen en España*, Caracas, 1986.

- *Las Sociedades Patrióticas*, t. II, Madrid, 1975.

- *Isidoro de Antillón. Las Pequeñas Atlántidas*, Barcelona, 1959.

GODECHOT, J., *Los orígenes de la revolución francesa, la toma de la bastilla (14 de julio de 1789)*, traducción al castellano a cargo de María L. y Rosa L. Fliu, del original en francés *La prise de la Bastille*, 14 juillet 1789, editions Gallimard, París, 1966, colección *Historia, ciencia, sociedad*, Ediciones Península-editions 62, Barcelona, 1974.

GOETZ, Valter: *La estructura espiritual de la época*. Tomo VIII “Historia Universal” Obra colectiva dirigida por este Catedrático de la Universidad de Lipigas con el título “Liberalismo y Nacionalismo” (1848-1890), y codirigida con Alfred Stern Friederich Luckwaldt y Herkenr Heinrich, traducción castellana de Javier María Morente, Editorial Espasa-Alpe. Madrid 1978. Pag. 1-10. Cita en pag 10.

GOETZ, Walter: *Las bases espirituales de la época*, en el volumen, *La revolución francesa, Napoleón y la Restauración (1789-1848)*, de Alfred Stern, Franzschnabel, Oskar Walzel, Heinrich Herkner y Friedrich Lukwaldt, versión española de Manuel García Morente, Tomo VII, de la *Historia universal* dirigida por Walter Goetz, Espasa Calpe, Madrid, 1975, págs. XV-XXIII.

GÓMEZ IMAZ, Manuel: *Los periódicos durante la guerra de la Independencia española*, Madrid, 1910.

GÓMEZ MIGUEL, Raúl. *Política. El poder de las palabras, las ideas y el ingenio*. México: Trillas, 2008.

GÓMEZ SÁNCHEZ, Yolanda, “Las Cortes de Cádiz y los derechos humanos” en ESCUDERO, José Antonio, *Cortes y Constitución de Cádiz. 200 años*. Tomo II. Espasa, Madrid, 2011.

GÓMEZ VILLAFRANCA, Román: *Extremadura en la guerra de la Independencia Española. Memoria histórica y colección diplomática*, Badajoz, 1908.

- *Los diputados extremeños en las Cortes de Cádiz*, Badajoz, 1912.

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, E., Algunos textos de Erasmo sobre la Familia Real Española. *Cuenta y razón*, nº 145, 2007.

GONZÁLEZ GARCÍA, I. “Las Cortes de Cádiz y el problema judío”, *El Olivo*, XIII, núms. 29-30, 1989.

GONZÁLEZ PALENCIA, A., *El sevillano Don Juan Curiel, Juez de Imprentas*, Sevilla, 1945.

GONZÁLEZ TROYANA, Alberto: “Avales para una lectura plural: Memoria, historia y ficción del Cádiz de las Cortes”, *Gades* (Cádiz), 16 (1987).

GORCE, P. de la. *Histoire religieuse de la Révolution Française*. París, 1909.

GONZÁLEZ VICEN, Felipe Eduardo: *La filosofía del derecho como concepto histórico*, en el *Libro-homenaje al profesor doctor don Felipe Eduardo González Vicen*, con motivo de su Jubilación como Catedrático de filosofía del derecho de la Universidad de la Laguna, publicado bajo el título general de *Estudios sobre filosofía del derecho*, Facultad de Derecho, Universidad de la Laguna, 1979, págs. 2007-258. El texto recoge en su literalidad el artículo de González Vicen publicado con igual título en el *Anuario de Filosofía del derecho* (Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Madrid), volumen 14, 1969. La cita en págs. 209-211 de los ya citados estudios de filosofía del derecho.

GOYARD-FABRE, Simone: *Introduction. L'esprit d'un temps*, pág.10-37 del volumen citado de la profesora de Caen, *La philosophie des lumieres en France, la cita en página 20*.

GUAL, P. *Equilibrio entre las dos potestades...* Barcelona, 1852.

GUARDIA, Carmen de la: “La revolución americana y el primer parlamentarismo español”, *Revista de Estudios Políticos* (Madrid), 93 (1996).

GUERRA, F. X.: *Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas*, Madrid: Mapfre, 1992.

Guía política de las Españas para el año 1813, Cádiz: Imprenta Nacional, 1812.

- (1995): *Las revoluciones hispánicas: Independencias americanas y liberalismo español*, Madrid: Editorial Complutense.

- (1999): “El soberano y su reino. Reflexiones sobre la génesis del ciudadano en América Latina”, en Sabato (coord.).

- HABERMAS, J. (1997). *Il discorso filosofico della modernità*. Roma.
- HALICZER St. (1984). “La Inquisición como mito y como historia: su abolición y el desarrollo de la ideología política española”. *Inquisición española y mentalidad inquisitorial*. Barcelona.
- HASSLER, G. (1991). “Lumières et idéologie: continuité ou rupture”.
- HENAO, Manuel: *Los Borbones ante la Revolución*, 2 vols., Madrid, 1869.
- HERNÁNDEZ MONTALBÁN, Francisco: *La abolición de los señoríos en España (1811-1837)*, Valencia, 1999.
- ÑURRITIGUI, J. M.; PORTILLO, J. M. (eds.) (1998): *Constitución en España: orígenes y destinos*, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- HAZARD, Paul, *El pensamiento europeo en el siglo XVIII*. Alianza, 1991.
- HERR, Richard: *España y la revolución del siglo XVIII*, Madrid, 1979,
- HERRERA GONZÁLEZ, Julio: *Serviles. Los grupos reaccionarios de las Cortes de Cádiz*, Cádiz, 2007.
- HERRERO, Javier: *Los orígenes del pensamiento reaccionario español*, Madrid, 1988.
- HOBBS, Thomas. *Leviatán: o la materia, forma y poder de una república, eclesiástica y civil*. Fondo de cultura económica, 1940.
- Tratado sobre el ciudadano (De Cive). Buenos Aires, 2002.
- HIGONNET, Patrice: *Estados Unidos de América*, en el volumen colectivo editado por Vincenzo Ferrone y Daniel Roche, *Diccionario histórico de la Ilustración*, versión española de José Luís Gil Arístu del original en lengua italiana publicado por el sello editorial Gius, Laterza & Figli de Roma-Bari 1997, Alianza Editorial, Madrid, 1998.
- HUME, David: *And Enquiry concerning the principles of moral* Clarendon Press Oxford, 1945, 1948; Jeremy Benzhán. A Fragment of govern Blasick Blackell Oxford 1998. C.I Sec 1.
- HUYSEN, Andreas: *After the Great Division Modernis, Mass Culture, Postmodernis*, Indiana University Press, Bloomington-Indianapolis (Indiana), 1986.
- IGLESIAS, Carmen, MOYA, Carlos y RODRÍGUEZ ZÚÑIGA, Luis, *Homenaje a José Antonio Maravall*, Centro de Investigaciones Sociológicas y otras instituciones, Madrid, 1985.
- ITURMENDI MORALES, José, “¿Hacia un nuevo Derecho Internacional?”, *Anuario de Derechos humanos*, nº 2, 2001.
- PATTARO, Enrico, *Filosofía del Derecho: Derecho y ciencia jurídica*. Reus, Madrid, 1980.
- JAN DER HERTEN, B. (1994). “La Révolution Française Prélude à la fin des temps”. *RHE*, 89.
- INNERARITY GRAU, Daniel: *Un mundo de todos y de nadie*, Editorial Paidós, Barcelona, 2013.
- JANKÉLEVITCH, S. (1977). *Révolution et tradition*. París, 1947.
- JARDÍ, Enric: *Els catalans de les Corts de Cadis*, Barcelona, 1963.
- JIMÉNEZ MONTESERÍN, Miguel: “La abolición del Tribunal 1808-1814”, en PÉREZ

JOURNEAU, B.. “Église et censure en Espagne au milieu du XIXe siècle”. *Mélanges de la Casa de Velázquez*, 24. T. XXIV, 1988.

JURETSCHKE, H., *Los afrancesados en la Guerra de la Independencia*. Madrid, 1962.

KELLNER, Deouglas: *Jean Baudrillard*, Stanford University Press, Stanford (California), 1980.

KERN, F. *Humana Civilitas: Staat, Kirche und Kultur*. Leipzig, 1913.

KING, J. F. “The Colored Castes and American Representation in the Cortes of Cadiz”, *The Hispanic American Historical Review*, Vol. 33, No. 1. 1953

KURTH, G.J.F. *Los orígenes de la civilización moderna*. Valencia, 1903.

JEFFERSON, Thomas, *Los escritos de Thomas Jefferson*. Washington D. D: The Thomas Jefferson Memorial Association, 1904.

JOVER, José María: *Política, diplomacia y humanismo popular. Estudios sobre la vida española en el siglo XIX*, Madrid, 1976.

- *La guerra de la Independencia española en el marco de las guerras de Liberación (1808-1814)*, Zaragoza, 1958.

JUÁREZ NIETO, Carlos, *El proceso político de la Independencia en Valladolid de Michoacán 1808-1821*, Michoacán, 2008.

JURETSCHKE, V. Hans: *Los afrancesados en la guerra de la independencia*, Madrid, 1962.

- *España ante Francia* (pról.. de Antoni Tovar), Madrid, 1940.

LABROUTSSE, Elisabet: *Bayle*, Oxford University Press, Oxford 1983.

LA PARRA LÓPEZ, E. *El primer liberalismo y la iglesia*, Alicante: Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, 1985.

- “El mito del Rey deseado” en DEMANGE CH., GÉAL, P., HOCQUELLET, R., MIGHONEAU, S., y SALGUES, M., *Mitos y memorias de la Guerra de la Independencia en España (1808-1908)*. Collectio de la Casa de Velázquez, Vol. 99, Madrid, 2007.

LABRA, R. M. de: *América y la Constitución española de 1812: las Cortes de Cádiz de 1810-1813*, Madrid: Tipografía “Sindicato de Publicidad” (edición facsímil, Pamplona: Analecta), 1914.

- *La Constitución de Cádiz de 1812*, Madrid, 1907.

- *Los presidentes americanos en las Cortes de Cádiz*, Madrid, 1914.

LAFUENTE, M. (1855). *La cuestión religiosa...* Madrid.

- (1863) *Historia General de España*, t. XXIV y XXV, Madrid, 1863.

LA PARRA LÓPEZ, Emilio. *La libertad de prensa en las Cortes de Cádiz*. Nau Libres, 1984.

- *El primer liberalismo y la Iglesia*, Alicante, 1985.

- “La Central y la formación de nuevo ejército: La Junta Militar (1808-1809)”, en *Antiguo Régimen y liberalismo, III: Política y Cultura*, Madrid, 1995.

LA PARRA LÓPEZ, Emilio: (n.1949), *Manuel Godoy: la aventura del poder*, Tusquets Ed, Barcelona, 2002; Id, *La alianza de Godoy con los Revolucionarios, España y Francia a finales del siglo XVIII*, Colección Monografías, Consejo superior de investigaciones científicas, Madrid, 1992; Emilio la Parra y M.A. Jiménez (coordinadores), *Manuel Godoy y la Ilustración*, Jornadas de estudio, Cáceres, 2001.

LARSON, Edward J., WINSHIP, Michael P., *The Constitutional Convention: A Narrative History from the Notes of James Madison*. New York: The Modern Library, 2005.

LASARTE, Javier. *Las Cortes de Cádiz: soberanía, separación de poderes, hacienda: 1810-1811*. Marcial Pons Ediciones de Historia, 2009.

LATOURETTE, K.S. (1947). *A History of the expansion of Christianity*. IV. *The great century a.d. 1800 a.d. 1914. Europe and the United States of America*. Londres.

LEDESMA, Manuel Pérez. Las Cortes de Cádiz y la sociedad española. *Ayer*, 1991, no 1, p. 167-206.

LEAFAR, M. L.: *El Panteón doceañista de Cádiz. Un libro, un monumento*, Madrid, 1914.

LLORENTE, J.A. (1981). *Historia crítica de la Inquisición en España*. Madrid.

LOCKE, John. Dos ensayos sobre el gobierno civil; ed. *Esp Madrid*, Aguilar, 1969,

- *Ensayo Carta sobre la tolerancia*. Alianza Editorial, 1999.

- *The Second Treatise of government*.

LÓPEZ ÁLVAREZ, Pablo: (n.1968), voz *Hegel, Georg Wilhelm Friedrich*, en la obra colectiva dirigida por el profesor Jacobo Muñoz Veiga, *Diccionario Espasa de Filosofía*, editorial Espasa-Calpe, Madrid, 2003.

LÓPEZ AYDILLO, Eugenio: *El obispo de Orense en la Regencia del año 1810. (Planteamiento de los problemas fundamentales de la vida constitucional en España)*, Madrid, 1918.

LÓPEZ FERNÁNDEZ, Enrique: *Las Juntas del Principado durante la guerra de la Independencia en Asturias*, Oviedo, 1999.

LÓPEZ FERNÁNDEZ, José, “La nación: entre identidad política y la voluntad política” en *Anales de Derecho. Universidad de Murcia*. Número 17, 1999.

LÓPEZ TABAR, Juan: *Los famosos traidores. Los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833)*, Madrid, 2001.

LÓPEZ, Pablo: Prólogo a la edición en nuestra lengua del original en inglés de Samuel Gregg, *On ordered Liberty*, traducido al castellano por María de los Ángeles Barrios, *La libertad en la encrucijada, el derecho moral de las sociedades libres*, editado por Ciudadela libros, Madrid, 2007, pág. 11-16, la cita en página 13. El texto de la monografía del Director de investigaciones del Aston Institute formula una original idea de libertad y de sociedad libre comprometida con las exigencias de la razón práctica; entendiéndolo por tal, de conformidad con John Finnis y la nueva escuela de derecho natural –*Natural Law and Right*, the Clarendon Press. Oxford 1980, pág. 12-. La razón práctica no consiste en lo que es efectivo funcional o útil, sino en aquello que nos conduce a pensar qué debemos hacer en general cuando decidimos y actuamos.

LORENTE SARIÑENA, M. “El juramento constitucional”, *Anuario de Historia del Derecho Español*, t. 65, 1995.

- “El abandono de los presidios menores (s. XVIII-XIX)”, *Initium: Revista catalana d’història del dret*, n.º 1, 1996.

- *Las infracciones a la constitución de 1812*, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1988.

- “De monarquía a nación: La imagen de América y la cuestión de la ciudadanía hispana”, en González Vales, Luis E. (coord.): *Actas y estudios*, Vol. 2. 2003.
- “La Nación y las Españas”: ¿Cabe hablar de un constitucionalismo hispánico?”, en Aguiar (ed.), 2004.
- “Ámbitos constitucionales e historiografía de la Constitución: la nación doceañista”, en Álvarez Junco; Moreno Luzón (eds.), 2006.
- PORTILLO VALDÉS, J. M. CLAVERO, B. *Pueblos, Nación, Constitución (en torno a 1812)*, Vitoria: Ilusager-Fundación para la Libertad, 2004.
- LOVETT, Gabriel H.: *La guerra de la Independencia y el nacimiento de la España Contemporánea*, 2 vols., Barcelona, 1975.
- LOY, J.R. “Los ilustrados franceses y su idea de la Inquisición”, 1984.
- MÁIZ, Ramón, *Nación y revolución: la teoría política de Emmanuel Siyès*. Tecnos, Madrid, 2007.
- Escritos y discursos de la Revolución. Centro de Estudios Constitucionales, 1990.
- MALDONADO GAGO, Juan: *voz: Revoluciones liberales y nacionalismo* en el volumen colectivo dirigido por el Catedrático de Ciencia Política de la UNED, Andrés de Blas Guerrero *Enciclopedia del Nacionalismo*, Editorial Tecnos, Madrid 1997.
- MARCUELLO BENEDICTO, Juan Ignacio: “Las Cortes Generales y Extraordinarias: organización y poderes para un gobierno de Asamblea”, en ARTOLA GALLEGU, Miguel (ed): *Las Cortes de Cádiz*, Madrid, 2003.
- “División de poderes y proceso legislativo en el sistema constitucional de 1812”, *Revista de Estudios Políticos* (Madrid), 93 (1996).
- “El rey y la potestad legislativa en el sistema político de 1812: su problemática definición constitucional”, en *Antiguo Régimen liberalismo, III: Política y Cultura*, Madrid, 1995.
- y PÉREZ LEDESMA, Manuel: “Parlamento y Poder Ejecutivo en la España Contemporánea (1810-1936)”, *Revista de Estudios Políticos* (Madrid), 93 (1996).
- MARIANO Y PESET, José Luis, *La universidad española (siglos XVIII y XIX). Despotismo ilustrado y Revolución Liberal*, Taurus, Madrid, 1974.
- MARINA, F. M. (1813). *Teoría de las Cortes o grandes Juntas Nacionales de los Reinos de León y Castilla, monumentos de su Constitución política y de la soberanía del Pueblo: con algunas observaciones sobre la Ley Fundamental de la Monarquía Española sancionada por las Cortes Generales y extraordinarias, y promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812* (Vol. 2). Imprenta de D. Fermín Villalpando.
- MARCO, José María (coord.): *Genealogía del liberalismo español, 1759-1931*, Madrid, 1998.
- MÁRQUEZ CRUZ, Guillermo Manuel. El sistema político local en España: de las Cortes de Cádiz a la Restauración (1810-1923). En *Actas do Congreso Internacional Poder Local, elites e cambio social na Galicia non urbana (1874-1936)*, Santiago de Compostela, 14-15 xuño 1996. Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 1997. p. 29-140.
- MARQUES MERCHÁN, Juan: *Don Bartolomé José Gallardo. Noticia de su vida y escritos*, Madrid, 1921.

- MARTÍ GILABERT, F.. *La abolición de la Inquisición en España*. Pamplona, 1975.
- *Iglesia y Estado en el reinado de Fernando VII*, Pamplona, 1994.
- MARTÍNEZ ALTAMIRA, María Magdalena, *Apuntes sobre la abolición de la esclavitud en España*. Universidad de Alicante.
- MARTÍNEZ CACHERO, Luis Alfonso: *Álvaro Flórez Estrada (Su vida, su obra política y sus ideas económicas)*, Oviedo, 1961.
- MARTÍNEZ MARINA, F., *Discurso sobre el origen de la monarquía y sobre la naturaleza del gobierno español*, CEC, Madrid, 1988.
- MARTÍNEZ MARTÍN, J. A. (ed.) (2003): *Orígenes culturales de la sociedad liberal (España siglo XIX)*, Madrid: Biblioteca Nueva.
- MARTÍNEZ PÉREZ, F. (1999): *Entre confianza y responsabilidad. La justicia del primer constitucionalismo español (1810-1823)*, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- MARTÍNEZ QUINTEIRO, Ester: *Los grupos liberales antes de la Cortes de Cádiz*, Madrid, 1977.
- MARTÍNEZ RIAZA, Ascensión: “La proyección del liberalismo gaditano en la América española, nexos y conexiones”, *Cádiz e Iberoamérica* (Cádiz), 3 (1985).
- MARTÍNEZ SOSPEDRA, Manuel: *La Constitución de 1812 y el primer liberalismo español*, Valencia, 1978.
- MARTÍNEZ TORRÓN, Diego: *La Constitución de 1812 y el espíritu de la España Liberal (con textos desconocidos)*, Sevilla, 1995.
- *Manuel José Quintana y el espíritu de la España liberal*, Sevilla, 1995.
- MARTÍNEZ DE VELASCO, A.: *La formación de la Junta Central*, Pamplona, 1972.
- MARAVALL, José Antonio: “El pensamiento político en España a comienzos del siglo XIX. Martínez Marina”, *Revista de Estudios Políticos* (Madrid), 81 (1955).
- “Las tendencias de reforma política en el siglo XVIII” en *Revista de Occidente*, t. XVIII, 1967.
 - “Cabarrús y las ideas de reforma política y social en el siglo XVIII” en *Revista de Occidente*, t. XXIII, nº 69, 1968.
- MARX, Karl y ENGELS, Friedrich: *Revolución en España*, 3ª. Ed., Barcelona, 1970,
- MATILLA TASCÓN, Antonio: *La ayuda económica inglesa en la guerra de la Independencia*. *Revista de Archivos, Museos y Bibliotecas*, t. XVIII, Madrid, 1960.
- MATUCCI, M. *Gli ideologues e la rivoluzione*. Pisa.
- MEINECKE, Friedrich (1862-1954), “*La idea de razón de Estado en la Edad Moderna*”, traducción al castellano a cargo del profesor Felipe Eduardo González Vicen, del original en lengua alemana *Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte*, R.Oldenbourg Berlag -München- Berlín, 1924, (hay edición en Id, *Werke*, volumen I con introducción de W.Hofer et Alii, R.Oldenbourg Verlag, München, 1957; tercera edición, 1963; cuarta 1976; con *Estudio Preliminar* de Luís Díez del Corral, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1944, la cita en pág. 330 (hay tercera edición en Centro de Estudios políticos y constitucionales, Madrid, 1999).

MENDLE, M; *Henry Parker and the English Civil War: The Political thought of the Public's Privado*, Cambridge, 1962; J.L. Malcolm (editor), *The Struggle for Sovereignty: Seventeenth Century English Political Tracts*, Indianápolis 2 volúmenes.

MELCHOR DE JOVELLANOS, Gaspar, *Memoria en defensa de la Junta Central*. Edición y notas de FERNÁNDEZ SARASOLA, Ignacio.

- "Cartas a lord Holland sobre la forma de reunión de las Cortes de Cádiz", Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes <http://www.cervantesvirtual.com/>

MENCHEN BARRIOS, María: "La política exterior española en la época de Fernando VII (1808-1833)" en BAUTISTA VILAR, Juan (ed.): *Las relaciones internacionales en la España Contemporánea*, Murcia, 1984.

MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, *Historia de los heterodoxos españoles*.

MENNAIS, L'Abbé Fr. de la (1820). *De la indiferencia en materia de religión*. Cádiz.

MENOZZI, D. (1977). *Cristianesimo e rivoluzione francese*. Brescia.

MERCADER RIBA, Juan: *José Bonaparte, rey de España (1808-1813). Estructura del Estado Español Bonapartista*, Madrid, 1983.

MESTRE, A., "Informe de Mayans sobre, el Auto de Censura de Libros, establecido por Juan Curiel en 1752" en *Homenaje al Dr. D. Juan Reglá Campistol*, vol. II, 1975.

MILLÁN CHIVITE, José Luis: "Los diputados hispanoamericanos en las Cortes Constituyentes de la Isla de León y Cádiz (1808-1812)", *Cádiz e Iberoamérica* (Cádiz), 4 (1986).

- "Representación andaluza y pensamiento político en las Cortes de la Isla de León y Cádiz (1810-1813)", *Gades* (Cádiz), 16 (1987).

MILLARES TORRES, Agustín: *Biografías de canarios célebres*, 1984.

MÍNGUEZ, V.; CHUST, M. (eds.) (2004): *El Imperio sublevado. Monarquía y Naciones en España e Hispanoamérica*, Madrid: CSIC.

MIRAVENT y SOLER, J. (1847). *Símbolo de la fe...* Cádiz.

MOHNHAUPT, H. (1995). "I diritti di privilegio e i diritti di libertà nella Germania del XVIII e XIX". *Saperi della borghesia e storia dei concetti fra Otto e Novecento*. Bolonia.

MOLINARI, Ramón Darío: "Ramón Power, un puertorriqueño en las Cortes de Cádiz", *Cádiz e Iberoamérica* (Cádiz), 3 (1985).

MOLITOR, Erich y SCHLOSSER, Hans: *Perfiles de la nueva historia del Derecho privado*, traducción a nuestra lengua a cargo de Ángel Martínez Sarrión, del original en lengua alemana, *Grundzüge der Neueren Privatgeschichte. Ein Studienbuch*, (C.F. Müller Juristischer Verlag, Karlsruhe, enero de 1975), Bosch. Casa Editorial, Barcelona, 1980, pág. 73 (*La legislación de la Revolución (Droit intermédiaire)*).

MONTESQUIEU, Charles, *Del espíritu de las leyes*. Tecnos, Madrid, 1995.

MORANGE C., *Una conspiración fallida y una Constitución non-nata (1819)*, Madrid, CEP y C, 2006.

MORALES MOYA, A. "La Historiografía sobre el Dos de Mayo", en Enciso Recio, Luis Miguel (ed.): *Actas del Congreso Internacional El Dos de Mayo y sus Precedentes*, Madrid: Capital Europea de la Cultura, 1992.

MORALES MUÑOZ, M.: *Los catecismos en la España del siglo XIX*, Málaga, 1990.

MORALES PADRÓN, Francisco: “Primer intento de independencia puertorriqueño”, *Revista de Indias* (Madrid), 87-88 (1958).

MORÁN ORTI, M. (1994): *Revolución y reforma religiosa en las Cortes de Cádiz*, Madrid: ACTAS.

- *Poder y Gobierno en las Cortes de Cádiz (1810-1813)*, Pamplona, 1986.

MORCILLO, Sebastián Fox. *De Regni, Regisque Institutione*. Spelmannus

MORENO ALONSO, Manuel: *La Forja del liberalismo en España. Los amigos políticos de lord Holland (1734-1840)*, Madrid, 19973

- *La generación española de 1808*, Madrid, 1989.

- *Memorias inéditas de un ministro ilustrado*, Sevilla, 1989.

- “La política americana de las Cortes de Cádiz”, *Cuadernos Hispanoamericanos* (Madrid), 460 (octubre, 1988).

- “Lord Holland y los orígenes del liberalismo español”, *Revista de Estudios Políticos* (Madrid), 36 (1983).

- “Principios políticos y razones personales para la reforma del Estado de España (1805-1840) (De la correspondencia inédita de M. J. Quintana con Lord Holland) en *Revista de Estudios Políticos (Nueva Época)* Núm. 70 Octubre-Diciembre 1990.

MORENO LUZÓN, J. “Memoria de la nación liberal: el primer centenario de las Cortes de Cádiz”, *Ayer*, n.º 52, 2003.

MORENO PASTOR, Luis: *Los orígenes del Tribunal Supremo (1808-1838)*, Madrid, 1989.

MORENO, Daniel A. *Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812*. Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Humanidades, 1964.

MORNET, Daniel, *El pensamiento francés en el siglo XVIII: el trasfondo intelectual de la Revolución francesa*, Alianza, Madrid, 1988.

- *Les origines intellectuelles de la Revolution Francais*, Armand Colin, París, 1993, obra reeditada en 1957; Leo Brunschvieg, *Le progrès de la conscience dans la philosophie occidentale*, Presses Universitaires de France, 1953, pág. 248; R.Pomeea, *L'Europe des lumieres, cosmopolitisme et unité europeenne au XVIII siecle*, Stick, París, 1966.

MORO MORGADO, Julio: “Don José Mejía Lequerica en las Cortes de Cádiz de 1810 a 1813”, *Revista de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias y Artes de Cádiz*, 16 (1914).

MORODO, Raúl, “Reformismos y regeneracionismo: el contexto ideológico y político de la Constitución de Bayona” en *Revista de Estudios Políticos*. Nº 83, 1994-

- y DÍAZ, Elías: “Tendencias y grupos políticos en las Cortes de Cádiz en las 1820”, *Cuadernos Hispanoamericanos* (Madrid), 201 (1966).

MOYA Carlos, RODRÍGUEZ ZÚÑIGA, Luis e IGLESIAS, Carmen, *Homenaje a José Antonio Maravall*, Centro de Investigaciones Sociológicas y otras instituciones, Madrid, 1985.

MOYA Y JIMÉNEZ, Francisco J. de: *Los doceañistas canarios (Apuntes histórico-biográficos)*, 1912.

- y REY JOLY, Celestino: *El Ejército y la Marina en las Cortes de Cádiz*, Cádiz, 1912.

MUÑÓN DE BUSTILLO ROMERO, Carmen, *Bayona en Andalucía: el Estado bonapartista en la Prefectura de Xerez*, CEC. Madrid, 1991.

MUÑOZ DE ARRACÓ, José Manuel y PÉREZ-PRENDES, “Martínez Marina y Blanco-White sobre las Cortes de Castilla” en *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense*, 73.

MUÑOZ PÉREZ, José: “Los catecismos políticos: de la Ilustración al primer liberalismo español (1808.-1822)”, *Gades* (Cádiz), 16 (1987).

NAEF, Werner: *La idea del Estado en la Edad Moderna*, versión del alemán a nuestra lengua a cargo de Felipe Eduardo González Wicén del original en lengua alemana *Staat und Staatsgedanke*, Colección “La obra del espíritu”, ediciones Nueva Época, Madrid, 1947.

NAEF, Werner: *La estructura histórica del Estado Moderno*, Capítulo I, Id, *La idea del Estado en la Edad Moderna*, obra citada, edición citada, traducción citada, págs. 17-21.

NARANJO, Plutarco: “Un revolucionario quiteño en las Cortes de Cádiz”, *Cádiz e Iberoamérica* (Cádiz), 2 (1912).

NAVARRO LATORRE, Juan: *El café de Apolo*, Cádiz, 1974.

NEGRO, Dalmacio, *El liberalismo en España*, Madrid, 1984.

NEGRO PAVÓN, Dalmació: *Gobierno y Estado*. Colección Prudencia Iuris. Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y sociales Madrid-Barcelona. 2002. Pág. 20.

NÚÑEZ RIVERO, C.; MARTÍNEZ SEGARRA, R. M. (2002): *Historia constitucional de España*, Madrid: Universitas.

OGOREK: *Warum noch Rechtgeschichte*, en el volumen colectivo editado por el profesor Simon con el título *Rechtswissenschaft in der Bonner republic*.

ORENSE, J.M. (1863). *Treinta años de gobierno representativo en España*. Madrid.

ORLANDO PATTERSON, Horace: (n.1946), *La libertad. La libertad en la construcción de la cultura occidental*, traducción castellana de Oscar Luís Molina del original en inglés, *Freedom. Freedom in the Making of Western Culture*, (Basic Books, New York, 1991), Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, diciembre de 1993

OROZCO ACUAVIVA, Antonio: “Los hispanoamericanos en el Centenario de las Cortes de 1812”, *Gades* (Cádiz), 16 (1987).

ORTIZ DE ORTUÑO, José María: *Álava durante la invasión napoleónica. Reversión fiscal y desamortización*, Álava, 1983.

ORTUÑO MARTÍNEZ, Manuel: “Hispanoamericanos en Londres a comienzos del siglo XIX”, *Espacio, Tiempo y Forma* (Madrid), serie V, 12 (1999).

OWEN ALDRIDGE, A., *Tom Paine's American Ideology*. 1984.

PABÓN Y SUÁREZ DE URBINA, Jesús: *Días de ayer. Historias e historiadores contemporáneos*, Editorial Alpha, Barcelona, 1963;

PALACIO ATARD, Vicente: *La España del siglo XIX (1808-1898)*, Madrid, 1978.

- *Los españoles de la Ilustración*, Madrid, 1964.

PALLARÉS MORENO, José, *León de Arroyal o la aventura intelectual de un ilustrado*. Universidad de Granada, Granada, 1993.

PANGLE, Thomas, *Montesquieu's Philosophy of Liberalism*. Chicago, 1989.

PAOLINI, G. "Inquisizione e confessori nel Seicento in Friuli: analisi di un rapporto". *L'Inquisizione romana in Italia nell'età Moderna. Archivi, problemi di metodo e nuove ricerche*. Roma, 1991.

PARRILLA ORTÍZ, P., *La esclavitud en Cádiz durante el siglo XVIII*, Cádiz, 2001.

PASCUAL MARTÍNEZ, P. *La unión con España. Exigencia de los diputados americanos en las Cortes de Cádiz*, Madrid: Comunidad de Madrid, 2001.

PASTOR DÍAZ, Nicomedes y CÁRDENAS Francisco de: *Galería de españoles célebres contemporáneos*, t. I, Madrid, 1841.

PAZ Y MELIA, A.: *Catálogo abreviado de Papeles de la Inquisición*, Madrid, 1914.

PAZ, Octavio: (1919-1998), *Olimpiada y Tlateloco*, capítulo I de "Posdata", Siglo XXI editores, México, decimosegunda edición, 1979, págs. 19-42, la cita en página 21.

PAZ, Octavio: *Olimpiada y Tlateloco*, ob. cit. pág. 25.; J.Arana, *La larga marcha hacia la libertad. La evolución ideológica de Octavio Paz*, en *Isegoria*, número 22, 2000, págs. 83-102; Pere Gimferer (Editor) *Octavio Paz*, Editorial Taurus, Madrid, 1982; J.González, *El cuerpo y la letra. La cronología poética de Octavio Paz*, fondo de cultura económica, Madrid, 1990; A. Roggiano(Editor) *Octavio Paz*, Editorial Fundamentos, Madrid, 1979.

PAZ, Octavio: Capítulo 1, *Olimpiada y Tlateloco*, págs. 19-42, la cita en págs. 25-26 dentro del volumen citado "Posdata", en la edición citada.

PEIRÓ MARTÍN, Ignacio, *Días de ayer de la historiografía española. La Guerra de la Independencia y la conversión liberal de los historiadores en el franquismo*, en el volumen colectivo editado por Pedro Rújula (n.1965) y Jordi Canal (n.1964), *Guerra de ideas. Política y Cultura en la Guerra de Independencia*, volumen coeditado por la institución Fernando el Católico y Marcial Pons, ediciones de historia, Zaragoza-Madrid, 2012, págs. 445-479, la cita en pág. 446.

PELIKAN, J. (1989). *The Christian Tradition. A history of the development of doctrine. Cristian Doctrine and modern culture (since 1700)*. Chicago.

PEMÁN, José María. *El divino impaciente: seguido de Cuando las cortes de Cadiz*. Escelicer, 1969.

PEÑA DÍAZ, Manuel, *José Isidoro Morales y la libertad de imprenta. Imprenta y libertad en tiempos revueltos (1808-1810)*

- "Andalucía en guerra 1810-1814" en LÓPEZ ARANDIA, María Amparo, DELGADO BARRADO, Miguel, 2010.

PEÑALVER SIMO, Patricio: *Modernidad tradicional en el pensamiento de Jovellanos*, Sevilla, 1983.

PÉREZ GUTIÉRREZ, Francisco: *Renán en España. Religión, ética y política*, Colección Perfiles, Editorial Taurus, Altea-Taurus-Alfaguara, Madrid, 1998.

PÉREZ LEDESMA Manuel (coordinador): *Las cortes de Cádiz y la sociedad española*, en *Ayer*, núm. 1, 1991, págs. 167-206; Id, *De súbditos a ciudadanos: una historia de la ciudadanía en España*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007; Miguel Artola y Manuel Pérez Ledesma, *Contemporánea: la historia desde 1776*, Alianza Editorial, Madrid, 2005.

PÉREZ PRENDES J. M., *Introducción a la teoría de las Cortes*, de Martínez Marina, Madrid, Editora Nacional, 1979.

PEÑAS BERNARDO DE QUIRÓS, J. Carlos: “El pensamiento reaccionario en las Cortes de Cádiz”, en *Antiguo Régimen y liberalismo III: Política y Cultura*, Madrid, 1995.

PEREIRA, Juan Carlos: *Introducción al estudio de la política exterior de España, siglos XIX y XX*, Madrid, 1983.

PÉREZ, Dionisio: *Las Cortes de Cádiz. Ensayo de bibliografía gaditana*, Madrid, 1904.

PÉREZ GALDÓS, Benito: *Episodios Nacionales: Cádiz*, t. I, Madrid, 1976.

PÉREZ, R. D. García. *Antes leyes que reyes: cultura jurídica y constitución política en la edad moderna, Navarra, 1512-1808*. Giuffrè Editore, 2008.

PÉREZ GARZÓN, J. S. (1979): “La revolución burguesa en España: los inicios de un debate científico, 1966-1979”, en Tuñón de Lara, Manuel (ed.): *Historiografía española contemporánea*, Madrid: Siglo XXI.

PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio. *Las Cortes de Cádiz: El nacimiento de una nación liberal (1808-1814)*. Síntesis, 2007.

PÉREZ GUIHOU, Dardo: *La opinión pública española y las Cortes de Cádiz frente a la emancipación hispanoamericana: 1808-1814*, Buenos Aires, 1981.

PÉREZ LEDESMA, M. (1991): “Las Cortes de Cádiz y la sociedad española”, *Ayer*, n.º 1.

PÉREZ-PRENDES, J.M. (1994). “El procedimiento inquisitorial”. *Inquisición y conversos*. Madrid.

- MUÑOZ DE ARRACÓ, José Manuel, “Martínez Marina y Blaco White sobre las Cortes de Castilla” en *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense*, 73.

PÉREZ SERRANO, Julio: “Problemas, fuentes y algunos resultados del análisis de la población gaditana durante la guerra de la Independencia”, *Gadiz (Cádiz)* 16 (1987).

PERFECTO GARCÍA, Miguel y GARCÍA MARTÍN, Javier: “Los diputados salmantinos en las Cortes de Cádiz”, en DONEZAR, Javier y PÉREZ LEDESMA, Manuel (eds.): *Antiguo Régimen y Liberalismo, II: Economía y Sociedad*, Madrid, 1995.

PEROGORDO y RODRÍGUEZ, G. (1868). *La Iglesia y el Estado en sus relaciones mutuas en España*. Madrid.

PEYREFITTE, Roger, *Voltaire, sa jeunesse et son temps*, Albin Michel, 1985.

PICARDO Y GÓMEZ, Álvaro: *Cádiz en el comercio de Indias*, Cádiz, 1951.

PINO ABAD, Miguel, “El Consejo de regencia y su papel en la convocatoria de las Cortes de Cádiz” en *Cortes y Constitución de Cádiz*. Tomo I.

PHILIPPE LUIS, Jean *Cuestiones sobre el origen de la modernidad política en España*, en *Revista de Historia Jerónimo Zurita* (Zaragoza), número 84, 2009, págs. 247-278; Id, (coordinador), *La guerre d'indépendance espagnole et le libéralisme au XIXe siècle*, collection de la casa de Velázquez (Madrid), núm. 118-2010.

PIERRE AYMES, Jean: *La guerra de la independencia (1808-1814): calas y enseñanzas*, Madrid, 2009; *La guerra de España contra la revolución francesa (1793-1795)*, Instituto de Cultura Juan Gil Albert, Alicante, 1991, en particular págs. 373 y siguientes; Ronald Fraser (1930-2012), *La maldita guerra de España: historia social de la guerra de la independencia*, Ed. Crítica, Barcelona, 2006.

- PLA, Carlos, “La génesis del liberalismo español” en MARCO, José María, *Genealogía del liberalismo español (1759-1931)*, Madrid, 1998.
- POBLADURA, Melchor: “Semblanza del cardenal Pedro de Inguanzo, arzobispo de Toledo, escrita por J. Fernández Cortina”, *Hispania Sacra*, 1952.
- POMEAU, René, *La Religión de Voltaire*. Collin, París, 1956 (2ª ed. 1969)
- *Politique de Voltaire*. Collin, París, 1963 (3ª ed. 1994)
 - *Voltaire en son temps*. Voltaire Foundation, Oxford, 1988.
- PORTILLO VALDÉS, J. M. *La Nazione cattolica. Cadice 1812: una costituzione per la Spagna*, Roma: Piero Lacaita Editore, 1998.
- *Revolución de Nación. Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812*, Madrid: Boletín Oficial del Estado, 2000.
 - “Los límites del pensamiento político liberal. Álvaro Flórez de Estrada y América”, *Historia Constitucional*, n.º 5 (<http://hc.rediris.es/05/Numero05.html>), 2004.
 - “La Constitución Universal”, en Álvarez Junco; Moreno Luzón (eds.), *Crisis atlántica. Autonomía e independencia en la crisis de la monarquía hispánica*, Madrid: Marcial Pons Historia, 2006.
 - CLAVERO, B.; LORENTE, M. *Pueblos, Nación, Constitución (en torno a 1812)*, Vitoria: Ilusager-Fundación para la Libertad, 2004.
- POSAC MON, Carlos: “La guerra de la Independencia a través de las páginas del periódico Gibraltar Chronicle, (1808-1814)”, *Almoraima* (Algeciras), 17 (abril, 1997).
- POSADA A., *Estudio preliminar a la obra de Francisco Martínez Marina: Principios Naturales de la Moral, de la Política y de la Legislación*, Madrid, 1933.
- PROSPERI, A. “Per la storia dell’Inquisizione romana”. L’Inquisizione romana in *Italia nell’età Moderna. Archivi, problemi di metodo e nuove ricerche*. Roma.— (1994) “L’inquisitore come confessore”. *Disciplina dell’anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*. Bologna, 1991.
- PROUST, Jacques, *Diderot et l’Encyclopedie*, Albin Michel, 1995.
- PUELLES BENÍTEZ, Manuel: *Educación e ideología de la España Contemporánea, 1767-1975*, Barcelona, 1980.
- PUIG BLANCH, A. *La Inquisición sin máscara*. Madrid, 1988.
- PUJUL, Carlos, *Voltaire*. Ediciones Palabra, Madrid, 1999.
- QUADRADO, José María: *Personajes célebres del siglo XIX, t. I y II*, Madrid, 1944.
- QUEIPO DE LLANO, José María, *Historia del levantamiento. Guerra y Revolución de España*. BAE. Tomo LXIV, Madrid, 1953.
- QUINTANA, Manuel José: *Memoria del Cádiz de las Cortes* (ed. De Fernando Durán López), Cádiz, 1996.
- QUINTERO ATAURI, Manuel: *El sitio de Cádiz por las tropas de Napoleón en 1812*, Cádiz, 1912.
- QUINTERO, M., *Los grupos liberales antes de las Cortes de Cádiz*. Narcea, 1977.
- RAMOS, Demetrio: “América en las Cortes de Cádiz, como recurso y esperanza”, *Gades* (Cádiz), 16 (1987).

- “Las Cortes de Cádiz y América”, *Revista de Estudios Políticos* (Madrid), 162 (1962).
- “El peruano Morales Duárez, ejemplo de la complejidad americana de tradición y reforma de las Cortes de Cádiz”, *Revista de Estudios Políticos* (Madrid), 146 (1952).
- RAMOS ARGÜELLES, Antonio: *Agustín de Argüelles, Padre del Constitucionalismo español*, Madrid, 1990.
- RAMOS SANTANA, A. (ed.) (2004): *La ilusión constitucional: pueblo, patria, nación*, Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.
- RAHOLA Y TREMOLS, Federico: *Los diputados por Cataluña en las Cortes de Cádiz*, Barcelona, 1912.
- RASSEN, M. (1982). “Riflessioni sul disciplinamento sociale nella prima Età moderna con esempi della storia stadistica”. *Annali dell’Istituto Storico Italo-Germanico in Trento*. VIII.
- RASTROLLO ROJAS, José Manuel: *Los gaditanos en la política española del siglo XIX (1810-1874). Cádiz y las revoluciones liberales. El predominio gaditano en la política española*, Cádiz, 2007.
- RAVINA MARTÍN, Manuel: *Las Cortes de Cádiz y el Protocolo Notarial*, Cádiz, 1984.
- “El testamento y codicilio de Antonio Capmany”, *Gades* (Cádiz), 16 (1987),
- RAWLS, John: *A theory of justice* Harvard University Press, Cambridge (Mass-London) 1971; Introduction Générale al Volumen colectivo que bajo el título Libeaux e communitariens. Preeses Universitaires de France. París, 1997
- REVUELTA, M.. *Política religiosa de los liberales en el siglo XIX*. Madrid, 1973.
- RETORTILLO, Martin y BAQUER, Lorenzo, “Los derechos humanos en la Constitución de Cádiz” en ESCUDERO, José Antonio, *Cortes y Constitución de Cádiz. 200 años*. Tomo II, Espasa, Madrid, 2011.
- RHENAN SEGURA, Jorge, “Las sociedades de pensamiento y la Revolución Francesa. Contribución al estudio de las ideas filosóficas entre 1750-1800” en *Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica*, XXVII (66), 457-464, 1989.
- RICO LINAGE, Raquel y GARNICA ANTONIO, Silva, *Obras completas de José Blanco White y periódicos políticos*. Vol. I. Almed, Granada, 2005.
- RICO Y AMAT, Juan: *El libro de los diputados y senadores. Juicios críticos de los oradores y senadores más notables*, t. I, Madrid, 1862.
- *Historia política y parlamentaria de España*, t. I, Madrid, 1860.
- RIEU-MILLÁN, M. L. *Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz (igualdad o independencia)*, Madrid: CSIC, 1990.
- RIKLIN, Alois, “Montesquieus freiheitliche Staatsmodell” en *Politische Vierteljahresschrift* 30 (1989).
- RINCÓN JIMÉNEZ, Jesús: “Muñoz Torrero y su posición política”, *Revista del Centro de Estudios Extremeños* (Badajoz), 3 (1929).
- RITTER, Joachim: (1903-1974), *Hegel et la Révolution Française*, suivi de *Personne et propriété selon Hegel*, traduction française Beauchesne, París, 1970, pág. 19, del original en lengua alemana, *Hegel und die Französische Revolution*, en el volumen colectivo editado por Ulrich Herrman y Jürgen Oelkers, con el título *Franzö Sische Revolution und pädegoik der Moderne*, Weinheim/Basel, Beltz,

1989, págs. 347-359; Vid, al respecto Friedrich Heer, *Europa, madre de revoluciones*, Tomo I, Capítulo 3: *La sociedad alemana en la época de la Revolución francesa I* (págs. 85-248, en especial páginas 226-248), traducción del original en alemán, *Europa, mutter der Revolutionen*, Kohlhammer, Verlag, Stuttgart, 1964, a cargo de Manuel Troyano de los Ríos, Alianza Editorial, Madrid, 1980.

RIVERA GARCÍA, Antonio, “El concepto de libertad en la época de las Cortes de Cádiz” en CHUST, M. y FRASQUET, I., *La trascendencia del liberalismo doceañista en España y América*. Biblioteca Valenciana, 2004.

ROA DÁVILA, J., *De regnorum iustitia*. CSIC, Madrid.

ROBESPIERRE, Maximilien, *Oeuvres Complètes*. París, 1950.

- *Textes choisis*. Tome Troisième (1793-1794). París, 1974.

ROCA ROCA, Eduardo: “América en el ordenamiento jurídico de las Cortes de Cádiz” en *IV Congreso de las Academias Andalusas*, Sevilla, 1986.

RODRÍGUEZ, Carlos M.: *Frailes y revolución liberal*, Toledo, 1996.

RODRÍGUEZ ARANDA, Luis: “El racionalismo en el pensamiento político español”, *Revista de Estudios Políticos* (Madrid), 119 (1961).

RODRÍGUEZ J. E. (1996): *La independencia de la América española*, México: Fondo de Cultura Económica (versión inglesa: *The Independence of Spanish America*, Cambridge: Cambridge University Press, 1998).

RODRÍGUEZ O, Jaime E.: *La independencia de la América española*, Méjico, edic. 1996.

RODRÍGUEZ, Mario: *El experimento de Cádiz en Centroamérica (1808-1826)*, Méjico, 1984.

RODRÍGUEZ MARTÍN, M.: *La Marina en la guerra de la Independencia*, San Fernando 1899.

RODRÍGUEZ MOÑINO, A.: *Bartolomé José Gallardo. Estudio bibliográfico*, Madrid, 1995.

ROLDÁN VERDEJO, R. “Un obedézcase pero no se cumpla tardío: La Laguna 1836”. *Instituto de Estudios Canarios. 50 aniversario (1932-1982)*. Tenerife, 1982.

RODRÍGUEZ ZÚÑIGA, Luis, IGLESIAS, Carmen, MOYA y Carlos, *Homenaje a José Antonio Maravall*, Centro de Investigaciones Sociológicas y otras instituciones, Madrid, 1985.

ROGER, Juan: *Esquema del pensamiento francés en la posguerra*, Departamento internacional de culturas modernas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1950, capítulo I, “los valores rectores del pensamiento francés, págs. 9-53, la cita en págs. 10-13, *La ideología de la revolución de 1789*; Tourneaux, *Les sources bibliographiques d’histoire de la révolution française*, París, 1938.

ROMERO Y RIZO, José María: *Muñoz Torrero. Apuntes histórico-biográfico*. Cádiz, 1911.

ROMEU DE ARMAS, A., *Historia de la censura literaria gubernativa en España*, Madrid, 1940.

ROSAVALLON, Pierre: *L’Histoire du mot démocratie à époque moderne*, en el volumen colectivo *d’histoire ancienne en le neuf*. Hautes études, seuil-gallimard. París, mayo de 1993.

ROTH, C. *La Inquisición española*. Barcelona, 1989.

ROUSSEAU J. J. "Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres" Segunda Parte. Madrid, 1923.

RUIZ CORTES, Francisco y SÁNCHEZ COBROS, Francisco: *Diccionario biográfico de personajes históricos del siglo XIX español*, Madrid, 1998.

RUIZ JIMÉNEZ, M. (2002): "Elecciones de Diputados por Madrid a las Cortes de Cádiz (1): Cortes Generales y Extraordinarias (1810-1813)", *Revista de las Cortes Generales*, n.º 57.

- (2003): "Los salones de Cortes en 1810 y 1814", *Cuadernos de Ilustración y Romanticismo*, n.º 11.

RULE, W.H. (1868). *History of the Inquisition, in every country where its tribunals have been established, from the twelfth century to the present time*. Londres.

RUMEU DE ARMAS, Antonio: *El testamento político del conde de Floridablanca*, Madrid, 1962.

SABATO, H. (coord.) (1999): *Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina*, México: Fondo de Cultura Económica.

S.B.M.: *El Centenario de las Cortes de Cádiz. Las fiestas de las lápidas conmemorativas y decorativas de San Felipe Neri*, Madrid, 1912.

SALAVART, Vicente: *La biblia del Congreso de los Diputados: Notas para su historia 1811-1936*, Madrid, 1983.

SALGADO PEÑAHERRERA, Germánico: "El perfil humano del ecuatoriano Jose Mejia Lequerica", *Cádiz e Iberoamerica* (Cádiz), 3 (1985)

SALILLAS, Rafael. *En las cortes de Cádiz: revelaciones acerca del estado político y social*. 2002.

SAN BARTOLOMÉ, Fr. José de (1814). *El duelo de la Inquisición*. Madrid.

SAN JOSÉ, Diego: *Martirologio fernandino*, Madrid, 1931

SÁNCHEZ AGESTA, Luis. *Historia del constitucionalismo español*, Madrid (3.a edición revisada, Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1974).

- *El pensamiento político del despotismo ilustrado*, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1953.

SÁNCHEZ AGESTA, Luís (1914-1997): *Sentido sociológico y político del siglo XIX*, en *Revista de Estudios Políticos* (Instituto de Estudios Políticos, Madrid), número 75, mayo-junio 1954, págs. 23-43; Id, *Entorno al concepto de España*, colección *O crece o muere*, volumen 5, Ed. Ateneo, Madrid, 1952, Id, *Historia del constitucionalismo español 1808-1936*, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1955; Vicente Cacho Viu (1929-1997), *Los supuestos del contemporaneísmo en la historiografía de postguerra*, en *Cuadernos de historia contemporánea*, número 9, 1958; voz, Sánchez Agesta, Luís, en *Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos (1840-19980)*, Editorial Akal, Madrid, 2002.

SANCHEZ AGUILAR, Federico: *La España desgajada (1810-1898)*, Madrid, 1999.

SÁNCHEZ-BLANCO PARODY, Francisco, *Europa y el pensamiento español del siglo XVIII*. Alianza Universidad, 1991.

SANCHEZ DE AREVALO, R., Vergel de los príncipes. *Prosistas castellanos del siglo XV*, 1900, vol. 1.

SANCHEZ HITTA, Beatriz: "Cartillas políticas y catecismos constitucionales en el Cádiz de las Cortes: un género viejo para la creación de una nueva sociedad", *Revista de Literatura*, vol. 65, 130 (2003b).

- *Los periódicos de Cádiz de la guerra de la Independencia (1808-1814)*. Catálogo comentado, Cádiz, 2008.

SANCHEZ MANTERO, Rafael: *Liberales en el exilio (La emigración política a Francia en la crisis del Antiguo Régimen)*, Madrid, 1975.

SANZ CID, C.: *La Constitución de Bayona*, Madrid, 1922.

SANVENERIO, J.A. de (1766). *Discursos históricos...* Madrid.

SARRAILH, J.: *La España Ilustrada en la segunda mitad del siglo XVIII*, Madrid, 1957.

SAUGNIEUX, J. *Un prélat éclairé: Don Antonio Tavira y Almazán; contribution à l'Étude du jansénisme espagnol*. Tolosa, 1970.

SCHIERA, P. "Disciplina, Stato Moderno, disciplinamento: considerazioni a cavallo fra sociologia del potere e la storia costituzionale". *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*. Bolonia, 1994.

SCHMITT, C. "Legalità e legittimità". *Le categorie del "politico"*. Bolonia, 1972.

SCHWEDT, H.H. "Das römische Urteil über Georg Hermes (1775-1831). Ein Beitrag zur Geschichte der Inquisition im 19. Jahrhundert". *Römische Quartalschrift, Supplementheft*. Roma, 1980.

SCHIEDER, Th.: "*Geschichte als Wissenschaft*", Oldenbourg Verlag, München, 1988, págs. 205-219, Erich Rothacker, *Die vergleichende Methode in der Geisteswissenschaften*, en *Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft*", núm. 60, 1957.

SEGURA, María Del Mar VERDEJO (Traductor), JOHN STUART MILL *Del gobierno representativo..* Presentación de Dalmacio Negro. Madrid, Tecnos, 1985.

SEVILLA MERINO, J. *Las ideas internacionales en las Cortes de Cádiz*, Valencia: Cátedra Fadrique Furio Ceriol, 1977.

SIERRA, M.; ZURITA, R.; PEÑA, M. A. (eds.) *La representación política en la España liberal*, dossier de la revista *Ayer*, n.º 61, pp. 11-211. 2006.

SIEYÈS, Emmanuel Joseph, *¿Qué es el Tercer Estado?*, Madrid, 1973.

- "Discurso y moción del 15 de junio de 1789" en *Escritos y Discursos de la Revolución*. Ramón Maíz, CEE, Madrid, 1991.

- *Escritos y Discursos de la Revolución*. Ramón Maíz, CEE, Madrid, 1991.

SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis, *Sobre el origen de las declaraciones de derechos humanos*.

SOLANA, Marcial, *Los grandes escolásticos españoles del siglo XVI: sus doctrinas filosóficas y su significación en la historia de la filosofía*. Imprenta de la Viuda e Hijos de Jaime Ratés, Madrid, 1928.

SOLÍS, Ramón. *El Cádiz de las Cortes*. Plaza & Janés, 1978.

- (19) Las sociedades secretas y las Cortes de Cádiz. *Revista de estudios políticos*, 1957, no 93, p. 111-127.

SOLÉ TURA, J.; AJA, E. *Constituciones y períodos constituyentes en España*, 1977.

SOMOZA, Julio, *Cartas de Jovellanos y Lord Vasall Holland sobre la Guerra de la Independencia (1808-1811)*, Imprenta de los Hijos de Gómez Fuentenebro, Madrid, 1911.

SPINOZA, Baruch. *Tratado de la reforma del entendimiento. Principios de filosofía de Descartes. Pensamientos metafísicos*. Alianza Editorial, 2006.

STAHL, F.J: *17 Parlamentarische Reden und vorträge*, Hergn.V.Hertz, Berlín, 1862

STERN, Klaus: *Género y evolución del constitucionalismo americano y europeo. Algunos contrastes sobre aspectos fundamentales*, texto de la conferencia que fuera pronunciada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sudáfrica, en el ámbito del instituto de Derecho Comparado y Extranjero el 26 de febrero de 1985, publicada inicialmente en inglés en la revista *The comparison and International Law. Journal of Southern Africa*, julio de 1985, pág. 185 y siguientes; el artículo fue traducido a nuestra lengua por el profesor de Derecho constitucional de la Universidad de las Islas Baleares Alberto Oehling de los Reyes en el volumen antológico de textos del propio K.Stern *Jurisdicción constitucional y legalidad*, traducido al castellano y precedido de un *Estudio Preliminar* por el citado doctor Oehling, editorial Dykinson, Madrid, pág. 137-155, la cita en página 137.

STERN, Klaus: *Génesis y evolución del constitucionalismo...* artículo citado Locke..

STRAUSS, Leo. *La Filosofía Política de Hobbes: su fundamento y su génesis*. 2006.

SUÁREZ CORTINA, M. (ed.) (2003): *Las máscaras de la libertad. El liberalismo español, 1808-1950*, Madrid: Marcial Pons Historia.

SUÁREZ, F., *Las Cortes de Cádiz*. Ediciones Rialp., 2002

- *Actas de la Comisión de Constitución (1811-1813)*, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1976.

SUAREZ, Federico: “La formación de la doctrina política del carlismo”, *Revista de Estudios Políticos* (Madrid), 126 (1962).

- “Sobre las raíces de las reformas”

- *Informes oficiales sobre Cortes*. EUNSA, Pamplona, vol. I (1967), vol. II (1968) y vol. III (1974).

SUÁREZ BILBAO, Fernando, “Las Cortes de Cádiz y la Iglesia” en ESCUDERO, José Antonio, *Cortes y Constitución de Cádiz. 200 años*. Tomo II. Espasa, Madrid, 2011.

SUÁREZ VERDEGUER, F. (1950): *La crisis política del Antiguo Régimen en España (1800-1840)*, Madrid: Rialp.

- (1967-74): *Cortes de Cádiz. Informes oficiales sobre Cortes*, 3 vols., Pamplona: Eunsas.

- (1976): *Actas de la Comisión de Constitución (1811-1813)*, Madrid: Instituto de Estudios Políticos.

- (1982): *El proceso de convocatoria a Cortes (1808-1810)*, Pamplona: Eunsas.

- (1982a): *Las Cortes de Cádiz*, Madrid: Rialp.

TATEISHI, H. (1993): “El Robespierre Español y las Cortes de Cádiz: una revisión del liberalismo en España”, *Trienio. Revista de Historia* (Madrid), n.º 21.

- (1995): “Una reflexión sobre el Dos de Mayo: La *Relación* de Rafael Pérez”, *Mediterranean World* (by the Mediterranean Studies Group, Hitotsubashi University), XIV.
- (2001): “El obelisco del Dos de Mayo y la conciencia nacional: Alcance y límite de la Revolución Liberal en España”, en Gil Novales, Alberto (coord.): *La revolución liberal*, Madrid: Ediciones del Orto.
- “Memoria pública y fiesta nacional”, en Armangué i Herreo, Joan (ed.): *Oralità e memoria. Identità e immaginario collettivo nel Mediterraneo occidentale*, Cagliari: Arxiu de Tradicions, 2005.
- TEDESCHI, J. *The prosecution of heresy: collected studies on the Inquisition in Early Modern Italy*. Binghamton, 1991.
- TERRÓN, Eloy: *Sociedades e ideología en los orígenes de las España Contemporánea*, Barcelona, 1969.
- TIERNO GALVÁN, Enrique: *Actas de las Cortes de Cádiz (Antología)*, Madrid, 1964, 2 vols.
- Introducción a la Antología de escritores políticos del Siglo de Oro, ed. P. de Vega. 1966.
- TOCQUEVILLE (de) Alexis, *La democracia en América*. Aguilar, Madrid, 1990.
- *El Antiguo Régimen y la Revolución II*.
- *Memoire sur le paperisme I. Oeuvres Completes*, T. XVI, París, Gallimard, 1991.
- *Estado social y político de Francia antes y después de 1789*.
- *Democracia I*.
- TOMÁS Y VALIENTE, F. *Manual de Historia del Derecho español*, Madrid: Tecnos, 1979.
- (1989): *Códigos y Constituciones (1808-1978)*, Madrid: Alianza.
- “Génesis de la constitución de 1812. I. De muchas leyes fundamentales a una sola constitución”, *Anuario de Historia del Derecho Español*, t. 65, 1995.
- TOMÁS y VALIENTE, F. “El arzobispo de Santiago y las Cortes de 1810”. En *Francisco Tomás y Valiente. Obras completas. III*. Madrid, 1997.
- (de) TORRES FLORES, J., *Disertación sobre la libertad natural del hombre*. Universidad de León, 1995.
- TOPOLSKI, Jerzy: *Metodología de la historia*, traducción al castellano a cargo de María Luisa Rodríguez Tapia del original en polaco *Metodologia Historii (panstwone Wydeawnictwo Neaukowe, Warscawa, 1963)* ediciones Cátedra, Madrid, 1982, pág. 101)
- TOPOLSKI, Jerzy: *La filosofía antipositivista de la historia*, epígrafe 3º del Capítulo VII –*Reflexión estructural*– págs. 109-120, la cita en página 112 del volumen de Id, *Metodología de la historia*, obra citada, edición citada, traducción castellana citada.
- TORREJÓN CHAVEZ, Juan: *Las Cortes Generales y Extraordinarias de la Isla de León*, San Fernando, 1999.
- “El sitio francés de la isla de León (1810-1812)”, *Revista General de Marina*, núm. Extraordinario (agosto-septiembre, 2008).
- TORRES LIARTE, Concepción. *Los diputados aragoneses en las Cortes de Cádiz (1808-1814)*. 1987.
- TRANIELLO, F. (1993). *Religione e politica nell'Ottocento europeo*. Roma.

TRAVIESO, Carlota Fernández. La Erudición de Francisco de Monzón en Libro Segundo del Espejo del Perfecto Príncipe Cristiano. *Bulletin of Hispanic Studies*, vol. 87, no 7, 2010.

TOUCHARD. J., *Historia de las Ideas Políticas* (6ª ed.) Tecnos, 2006.

TRUMAN, R. W. FELIPE DE LA TORRE AND HIS INSTITUCIÓN DE UN REY CHRISTIANO (ANTWERP, 1556) THE PROTESTANT CONNEXIONS OF A SPANISH ROYAL CHAPLAIN. *Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance*, vol. 46, no 1, 1984.

URÍA RÍU, Juan, *Asturias en la segunda mitad del siglo XVIII y rasgos biográficos de D. Álvaro Flórez Estrada*, Oviedo, 1948.

UGRINSKY, A: (editor), *Lessing and the Enlightenment*, London, 1986.

VACANDARD, E. (1907). *L'Inquisition. Etude historique et critique sur le pouvoir coercitif de l'Église*. París.

VALLE IBERLUCEA, Enrique: *Los diputados de Buenos Aires en las Cortes Generales de Cádiz y el nuevo sistema de gobierno económico de América*, Buenos Aires, 1912.

VALLS, Josep Francesc: *Prensa y burguesía en el siglo XIX español*, Barcelona, 1988.

VARELA BRAVO, Eduardo: "Blanco White, la tolerancia y las Cortes de Cádiz", *Cuadernos Hispanoamericanos* (Madrid), 460 (1988).

VARELA SUANZES-CARPEGNA, Joaquín. *La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz)*, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1983.

- "Rey, Corona y Monarquía en los orígenes del constitucionalismo español: 1808-1814", *Revista de Estudios Políticos*, n.º 55, 1987.

- *El debate sobre el sistema británico de gobierno en España durante el primer tercio del siglo XIX*, en Poder, Economía y clientelismo, coordinado por Javier Alvarado, Marcial Pons. Madrid, 1997.

- "Reflexiones sobre un bicentenario (1812-2012)", en Álvarez Junco; Moreno Luzón (eds.), 2006.

- *Política y Constitución en España (1808-1978)*, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007.

- "Un precursor de la monarquía parlamentaria: Blanco-White y "El Español" (1810-1814)" en *Revista de Estudios Políticos (Nueva época)*. Número 793 Enero-marzo 1993.

- "Los modemos constitucionales y las Cortes de Cádiz" en *Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Anuario de Derecho Parlamentario*, nº 26, 2012.

- "La trayectoria del conde de Toreno: del liberalismo revolucionario al liberalismo conservador" en *Historia Constitucional*, nº. 5, 2004.

- "Las Cortes de Cádiz: representación nacional y centralismo" en *Las Cortes de Castilla y León. 1188-1988*, Valladolid, 1990.

- *El conde de Toreno: biografía de un liberal (1786-1843)*, Marcial Pons, 2005.

- *Álvaro Flórez Estrada (1766-1853)*, Oviedo, 2004.

VÁRNAGY, Tomás. El pensamiento político de John Locke y el surgimiento del liberalismo. Atilio Borón (compilador), *La filosofía política moderna de Hobbes a Marx*, Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 2000.

VEGA, Pedro, SECONDAT MONTESQUIEU, Charles-Louis, BLÁZQUEZ, Mercedes, *Del espíritu de las leyes*. Sarpe, Madrid, 1984.

- SCHMITT, Carl, y SÁNCHEZ SARTO, Manuel, *La defensa de la constitución: estudio acerca de las diversas especies y posibilidades de salvaguardia de la Constitución*.

- ESPERABÉ, Jesús, *Artículos políticos: en torno a nuestras instituciones*. Sedmay, Madrid, 1976.

VERGARA, Gabriel María: *Los diputados eclesiásticos en las Cortes de Cádiz*, Madrid, 1912.

VÉLEZ, R. de (1825). *Apología del Altar y del Trono*. Madrid.

VICUÑA MACKENNA, Benjamín: *La revolución de la Independencia de Perú (1809-1819)*, Lima, 1924.

VILA SELMA, J. *Ideario de M. J. Quintana*, Madrid, 1961.

VILAR, Pierre: *Cataluña en la Edad Moderna*, 3 vols., Barcelona, 1987-1988.

VILCHES, Jorge: *Liberales de 1808*, Madrid, 2008.

VILLACORTA, F.I. (1824). *Máximas del gobierno monárquico. Obra dedicada al rey nuestro señor*. Madrid.

VILLAMIL, Joaquín y ESCANDELL BONET, Bartolomé (dirs.): *Historia de la Inquisición*, t. I, Madrid, 1980.

VIÑAS-MEI, Carmelo, *Nuevos datos para la Historia de los afrancesados*.

VITORIA, Francisco de, *De potestate civili*.

WELZEL, Hans: (1904-1977), *Introducción a la Filosofía del derecho. Derecho natural y Justicia material*, traducción al castellano a cargo de quien fuera catedrático de la Universidad de la Laguna Felipe Eduardo González Vicen del original en alemán *Naturrecht und materiale Gerechtigkeit* (primera edición 1951), cuarta edición, Vandenhoeck und Ruprecht, Gottingen, 1962, Biblioteca jurídica Aguilar, Aguilar S.A de Ediciones, Madrid, 1957, se cita por la tercer tercera reimpresión de 1979.

WILLKE, Helmut: *Diriger la société par le droit?*, artículo publicado en el volumen monográfico *Le système juridique* de los *Archives de Philosophie du droit* (Editions Sirey, París) correspondiente al año 1986.

WILHELM FRIEDRICH HEGEL, Georg: *Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte (1822-1823)*, edición a cargo de K.H. Ilting, Meiner Verlag, Hamburg, 1996.

ZORAIDA VÁZQUEZ, J. (coord.) *El nacimiento de las naciones iberoamericanas*, Madrid: Fundación Mapfre Tavera, 2004.